

TERCER INFORME ANUAL

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

20 15



Defensoría
del Público



Defensoría
del Público



Defensor

Defensoría del Público de Servicios

LA DEFENSORÍA EN NÚMEROS

2.709

DENUNCIAS, CONSULTAS Y RECLAMOS
45% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

24.315

PERSONAS CAPACITADAS

90

CARTAS DE INTENCIÓN Y COMPROMISO CON
DISTINTOS ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2.438

HORAS DE CAPACITACIÓN

24

BECAS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

9.816

PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO
POR LA INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES EN LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES



Defensoría del Público

Centros de Comunicación Audiovisual

14

PROVINCIAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO ZOOM A LOS DERECHOS

+600

ESPECTADORES EN CICLOS DE CINE Y TEATRO

4

AUDIENCIAS PÚBLICAS

114

PROYECTOS RECIBIDOS EN EL CONCURSO ZOOM A LOS DERECHOS

+11.000

VISITANTES PARA LA DEFENSORÍA EN MOVIMIENTO

494

ORADORES EN AUDIENCIAS PÚBLICAS

20

GANADORES DEL CONCURSO ZOOM A LOS DERECHOS

5.500

EJEMPLARES ENTREGADOS DE LA LSCA


850


ASISTENTES A AUDIENCIAS PÚBLICAS





DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

 0800.999.3333

 Alsina 1470, CABA

 www.defensadelpublico.gob.ar

 contacto@defensadelpublico.gob.ar

 [defensoriadelpublico](https://www.facebook.com/defensoriadelpublico)

 [@defdelpublico](https://twitter.com/defdelpublico)

DEFENSORA DEL PÚBLICO

Lic. Cynthia Ottaviano

COORDINADOR GENERAL Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
José Ferrero

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
Gerardo Halpern

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y ASUNTOS JURÍDICOS
María José Gueembe

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN
Ernesto Lamas

DIRECCIÓN DE RELACIONES CON LAS AUDIENCIAS
Paula Gueler

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Celeste Conde

DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
Cecilia Bermudez

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN
Fernando Pittaro y Diego Sagardía

Tercer informe de gestión, año 2015, de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Primera edición. Realización editorial: Eudeba, Buenos Aires, 2016.
376 páginas, 22 x 31 cm.

Diseño y diagramación:
Triba Diseño / Jorge Mac Lennan / www.triba.com.ar

TERCER INFORME ANUAL

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

2015



CONTENIDO/

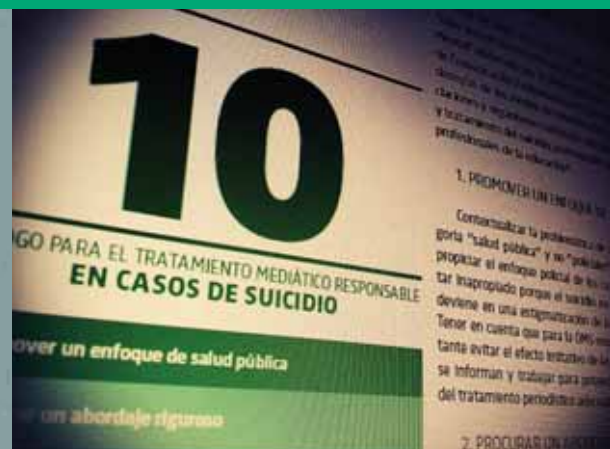
		SECCIÓN INICIAL
	002 . 003	LA DEFENSORÍA EN NÚMEROS
	008 . 012	PRÓLOGO: UN TRABAJO CLARO, CON ALIANZAS ESTABLES Y CONVICCIONES IRREVERSIBLES
	014 . 022	CONSOLIDACIÓN DE LA DEFENSORÍA
	024 . 036	RECLAMOS, DENUNCIAS Y CONSULTAS
	038 . 039	ESTADÍSTICAS / COMPARATIVAS
		LÍNEAS DE ACCIÓN
	042 . 059	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHO
	060 . 066	EL RECLAMO DE LAS AUDIENCIAS
	068 . 078	AUDIENCIAS PÚBLICAS
	080 . 091	PUEBLOS ORIGINARIOS
	092 . 108	GÉNEROS Y DIVERSIDADES
	110 . 115	MONITOREOS
	116 . 124	ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	126 . 129	AMICI CURIAE: LA COMUNICACIÓN NO ES UN DELITO
	130 . 135	REGULARIZACIÓN DEL ESPECTRO
	136 . 139	GRILLA DE PROGRAMACIÓN
	140 . 142	PEDIDO DE REUNIÓN CON CARÁCTER DE URGENCIA A LA CIDH
	144 . 147	LA DEFENSORÍA EN MOVIMIENTO
	148 . 153	DIFUSIÓN DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN
	154 . 168	LA DEFENSORÍA EN EL MUNDO
	170 . 175	GUÍAS PARA EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO RESPONSABLE

176 . 177	PROMOCIÓN CULTURAL DE LA DEFENSORÍA
178 . 180	CAPACITACIONES INTERNAS
182 . 186	CONVENIOS
188 . 199	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



ANEXO I

202 . 204	DECÁLOGO PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE CASOS DE SUICIDIO
204 . 206	RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
207 . 208	RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA AL ABORDAR CASOS DE EXTRAVÍO Y ABANDONO DEL DOMICILIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
208 . 209	RECOMENDACIONES PARA COBERTURAS ELECTORALES RESPETUOSAS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
209 . 210	RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
210 . 212	TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPETUOSO Y RESPONSABLE DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES



ANEXO II

216 . 231	AMICUS ANTENA NEGRA
232 . 295	GUÍA PARA EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO RESPONSABLE DE NOTICIAS POLICIALES
296 . 320	GUÍA PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
322 . 353	MONITOREOS II: ¿QUÉ ES NOTICIA EN LOS NOTICIEROS?



ANEXO III

356 . 356	DECLARACIÓN DE TERRITORIO EN MOVIMIENTO. VOCES MÚLTIPLES
357 . 358	CARTA ABIERTA POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA
358 . 360	CARTA AL GOBIERNO NACIONAL
361 . 369	CARTA A LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIDH



5 COSAS QUE NO ESTÁN
EN LA TELE Y EN LA RADIO
Y QUE DEBERÍAN ESTAR

Defensoría
del Público

INCLUSIÓN A LOS NIÑOS
OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS
HISTORIAS DE VIDAS DE LOS POBRES
MAS PROGRAMAS PARA CHICOS
PROGRAMAS PARA TODAS LAS EDADES



UN TRABAJO CLARO, CON ALIANZAS ESTABLES Y CONVICCIONES IRREVERSIBLES

Con ladrillos de coraje y convicción democrática, hace tres años empezamos a construir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, “la Defe”. Se trata de una obra de cuatro etapas específicas: la Fundación (2013), la Institucionalización (2014), la Cooperación e Intercambio nacional e internacional (2015) y la Consolidación (2016). Un año dedicado a cada período, con un equipo de trabajo sólido que no se detuvo ante imprevistos ni adversidades.

Una misión basada en el valor pedagógico y dialógico de políticas públicas federales, desplegadas en todos los ámbitos de la vida educativa, social, cultural y política; para “sacudir”, interpelar a las audiencias, desde la perspectiva de Guillermo Orozco, con una gestión de territorio y no de escritorio; mientras busca promover la creación de nuevas narrativas y retóricas de las audiencias, incentivándolas a que creen sus propios imaginarios sociales, como señala Omar Rincón.

Los resultados fueron muy concretos: en 2015 volvieron a crecer la cantidad de reclamos, denuncias y consultas: en 2013 se recibieron 1.787 presentaciones temáticas; en 2014, éstas se incrementaron a 2.416 y en 2015, a un total de 3.124. Es decir, la Defensoría ha registrado un crecimiento del 75% de presentaciones en apenas tres años. Es así que por tercer año consecutivo conocimos un nuevo piso, pero aún no sabemos cuál será el techo de la participación de la nueva ciudadanía comunicacional de la Argentina.

La declaración de 2015 como “Año de Inclusión de niñas, niños y adolescentes a los medios de comunicación” nos permitió llegar con “La Defensoría va a la Escuela” a 2.246 nuevos chicas y chicos, que se sumaron a los 1.645 de los dos años anteriores; con “La Defensoría va al barrio” trabajamos en 13 provincias impulsando una mirada crítica de los servi-



LIC. CYNTHIA OTTAVIANO
*Defensora del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual*

A handwritten signature in purple ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'C.O.' followed by a flourish.

UNA MISIÓN BASADA EN EL VALOR PEDAGÓGICO Y DIALÓGICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERALES

cios de comunicación audiovisual, pero también la posibilidad de producir videos que reflejaran el barrio en el que viven. Las capacitaciones destinadas a docentes de todo el país se llevaron adelante en coordinación con sindicatos del sector, institutos de formación, el Ministerio de Educación de la Nación y ministerios provinciales. Así, 2.165 docentes a través de seminarios, cursos virtuales y jornadas de formación abordaron los derechos comunicacionales de niñas, niños y adolescentes y propuestas pedagógicas para desarrollar en el aula. También, un total de 1.059 estudiantes y profesionales de la comunicación reflexionaron, a través de diferentes modalidades de capacitación, acerca de una práctica periodística respetuosa de la niñez y la adolescencia.

Estas tareas continuarán adelante en 2016, declarado "Año de lucha contra las discriminaciones y las violencias en la radio y la televisión", que incluirá el desarrollo de un boletín informativo hecho por chicos y chicas de todo el país y puesto al aire a través de cientos de radios; el desarrollo de una revista virtual; la multiplicación de los compromisos de cumplimiento del Apto para todo Público; el incremento de capacitaciones en interpretación de Lengua de Señas Argentina; la ampliación de becas de estudio en posgrados de la Universidad Pública, talleres y sitios virtuales sobre comunicación y género; comunicación y niñez; la difusión de los derechos a través de la Defensoría móvil que permite a todas las personas, en igualdad de condiciones, hacer radio y televisión, presentar reclamos y acceder a material específico sobre el diálogo y la construcción del derecho humano a la comunicación y los demás derechos humanos, así como múltiples líneas de acción con otros organismos del Estado Nacional, provincial y municipal.

SEGUIREMOS ADELANTE CON LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS EN TODO EL PAÍS PARA QUE OYENTES Y TELEVIDENTES SE EXPRESEN CON ABSOLUTA LIBERTAD COMO EN LAS 17 REALIZADAS DESDE LA FUNDACIÓN DE LA DEFENSORÍA, EN LAS QUE PARTICIPARON 4.270 PERSONAS Y 1.697 FUERON ORADORES Y ORADORAS, NO SÓLO PARA DEJAR DICHSOS SUS RECLAMOS Y DENUNCIAS, SINO PARA HACER PROPUESTAS CONCRETAS Y PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DEFENSORÍA.

El año que pasó, además, la Defensoría hizo una primera investigación sobre las miradas de quienes participaron en las Audiencias Públicas acerca de lo que escuchan y ven en la radio y la televisión. Sobre un total de 393 encuestas realizadas se destacan algunos datos que vale la pena compartir:

- 1/ Entre las 320 personas que respondieron a la pregunta de si les molesta el tratamiento en la radio y en la televisión de temas referidos a los/as niños, niñas y adolescentes (NNyA), con opción a respuestas múltiples, el 81,6% dijo tener alguna incomodidad. El 48% consideró que había “discriminación y estigmatización” sobre NNyA; el 41% que se los criminaliza, mientras que el 26% reclamó por la carencia de perspectivas diversas acerca de la niñez y la adolescencia.
- 2/ Sobre la tematización de “Géneros y diversidad sexual”, el 82,4% respondió tener alguna incomodidad con las formas de su abordaje mediático. Aquí, sobre 312 personas que respondieron, el 53% consideró que había “discriminación y estigmatización”; el 32% que había una “sexualización” inapropiada; el 30% que había “lenguaje grosero”; y el 25% reclamaba contra la “carencia de diferentes perspectivas” sobre la temática.
- 3/ En relación con la mediatización de los “policiales”, sobre un total de 279 respuestas, el 78,5% dijo tener incomodidades con su forma de tratamiento en la radio y en la televisión. Las causas más mencionadas fueron, en el 36% de los casos, el “exceso de violencia”; el 33% declaró una marcada criminalización en los abordajes; el 21% que notaba “discriminación y estigmatización” sobre determinadas personas o grupos sociales y el 19% una carencia de rigurosidad en las coberturas.

Cuando se preguntó “sobre qué temas quisieras tener más información?”, un 68% dijo que quisiera tener más información sobre “Educación y ciencia”; un 67% sobre Derechos humanos; un 61% sobre “niñez y adolescencia”; mientras que el 56% dijo que querría obtener más información sobre “Géneros y diversidad sexual”; el 55% sobre “Mi ciudad / localidad” y el 53% sobre “Salud, salud mental y discapacidad”.

El contraste de esos datos con la agenda informativa de los noticieros de la televisión abierta de Buenos Aires es evidente. El monitoreo realizado por la Dirección de Investigación, Análisis y Monitoreo advierte que estos temas no suelen ser relevantes para la elaboración de los noticieros ni sus agendas: sobre una base de 14.375 noticias analizadas durante seis semanas de 2015, el tópico “educación, ciencia y tecnología” no alcanzó al 1%; “derechos humanos” apenas

PARA LA DEFENSORÍA, 2015 PUEDE VALORARSE COMO UN AÑO DE CRECIMIENTO Y DE FORTALECIMIENTO EN LA COOPERACIÓN E INTERCAMBIO INTERNACIONAL

llegó a 0,4%; “niñez y adolescencia” al 0,5%; “géneros y diversidad sexual” al 1%; “urbanismo y servicios públicos” al 1,2% y “salud y discapacidad”, al 1,1%. La marginalidad de cada uno de los tópicos que se señalaron en las encuestas y su contraste con aquello que se les propone a las audiencias es flagrante.

Así como se registra un marcado divorcio entre las necesidades de las audiencias y las de quienes producen los noticieros, no es menos cierto que podemos notar un impacto positivo en la tarea de concientización realizada por la Defensoría respecto del alto nivel de criminalización de la niñez y la adolescencia y la policialización de los géneros que transmiten las pantallas a diario: en 2015, en comparación con 2014, se redujo la proporción de noticias que cruzan los tópicos de “NNyA” con “Policiales e ‘inseguridad’” en una misma cobertura noticiosa: del 65% que se detectó en el monitoreo de 2014, se pasó a un 56% en 2015. Es decir, si en 2014 dos de cada tres noticias que hablaban de niñez y adolescencia estaban inscriptas en el campo policial, en 2015 dicho vínculo bajó a una cada dos. Si bien sigue siendo un índice de criminalización elevado, su disminución puede ser un avance en una mirada que empieza a recuperar otras perspectivas acerca de la juventud y la adolescencia.

En lo que refiere a “géneros”, si en 2014 el 74% de las noticias que tematizaron “Géneros” tuvieron referencia a una matriz, causalidad o contexto policial o de “inseguridad”, en 2015 el cruce “Géneros” con “Policiales e ‘inseguridad’” disminuyó al 63,9%. Y en este caso en particular se sumaron noticias sobre “Géneros y protestas de la sociedad civil”, así como de “Géneros y Política”, dos cruces que prácticamente no se habían registrado en los dos años anteriores. Esto implica una visibilización de la cuestión de “Géneros” que empieza a salir del campo meramente policial para convertirse, también, en un terreno de derechos y de expresiones sociales públicas.

Por ello, y porque creemos que la tarea de la Defensoría ha servido para colaborar en estos pequeños y sensibles cambios, el próximo año se presenta como una oportunidad para intensificar las políticas que lograron impactar en el campo del audiovisual y diseñar otras nuevas que nos permitan construir de manera colectiva una radio, y sobre todo, una televisión respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de los pueblos originarios y campesinos, de quienes integran el colectivo LGTTBIQ, de quienes migran, de quienes profesan diversas religiones, de las personas con discapacidad, en definitiva de la sociedad en general, en su diversidad, en su pluralidad y, fundamentalmente, en su vida en democracia.

A las guías de tratamiento responsable de noticias sobre niñez y adolescencia, salud mental y, desastres y catástrofes, en 2015 sumamos la "Guía para el tratamiento mediático responsable de la Violencia Institucional" y la "Guía para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales". En 2016 concretaremos aquéllas que refieren a abordajes respetuosos y responsables respecto de las violencias contra las mujeres, así como sobre las identidades de género y orientación sexual.

Una vez más, es importante destacar la tarea intensa, dinámica, alejada de la búsqueda de sanciones y punitivos de la Defensoría, que ha sido reconocida en el Informe Anual 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al considerar que "ejemplos de recursos administrativos no punitivos implementados por organismos de vigilancia pueden encontrarse en las recientes medidas adoptadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina con miras a promover el derecho a la igualdad y no discriminación en la programación de los servicios audiovisuales".

Se trata de un reconocimiento propicio en tiempos turbulentos. Para la Defensoría, 2015 puede valorarse como un año de crecimiento y de fortalecimiento en la cooperación e intercambio internacional ya que organizamos el Segundo Congreso Latinoamericano de Defensoría de las Audiencias, con la participación de 20 defensoras y defensores de 10 países. Fuimos elegidos como sede para el Congreso 2016 de la *Organization of News Ombudsmen* (ONO), de manera que, por primera vez, entre el 18 y 20 de abril de 2016 vinieron a la Argentina quienes están al frente de Defensorías y Ouvidurías de los cinco continentes: fueron 43 referentes de 22 países.

Pero 2015 no culminó con estos grandes e importantes acontecimientos como balance definitivo. De hecho, terminó con un duro revés para el derecho humano a la comunicación.

Días después de asumir la presidencia, Mauricio Macri dictó dos decretos de necesidad y urgencia y un decreto que desarticuló la institucionalidad participativa y federal creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; derogaron los artículos que impedían la comunicación concentrada; eliminaron los controles del Estado en la propiedad horizontal y vertical de los licenciarios, flexibilizaron la compraventa de licencias, permitieron la cesión de explotación a terceros y quitaron el servicio del cable del alcance de esa ley, habilitando la existencia de posiciones más concentradas de las actuales y desregulando las grillas de programación.

Las recientes vulneraciones del derecho humano a la comunicación y el incumplimiento de los estándares y lineamientos del sistema interamericano de Derechos Humanos en el que se inscribe la Argentina, nos pone a las puertas de 2016 no sólo ante el desafío de consolidar la tarea llevada adelante por la Defensoría, reconocida por las audiencias, la sociedad civil argentina, la academia y las defensorías y organismos internacionales, sino también ante el duro reto de defender y fortalecer los derechos de las audiencias desde un paradigma comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos y no la de su pretendida mercantilización, la del paradigma que propugna a la comunicación audiovisual como un mero negocio.

Asumimos ese desafío ante el complejo presente histórico, en nombre de las luchas populares que reclaman desde el pasado y continúan en el presente, para las generaciones futuras que requieren de una democracia más madura y profundamente respetuosa de todos los derechos humanos, incluido el derecho humano a la comunicación, constitutivo y esencial de las democracias.

Este libro, que en 376 páginas resume la tarea realizada por la Defensoría con un diseño claro, alianzas estables y certezas irreversibles durante 12 meses pretende ser balance, pero también inspiración para quienes todos los días se levantan con la convicción de que una comunicación más plural, diversa, igualitaria en su acceso, alfabetizadora y universal es posible. Una vez más, muchas gracias a todas las obreras y obreros de esta construcción que se supo colectiva desde sus inicios y que requiere de esa labor tenaz y constante para perdurar.

“ARGENTINA DEJA
LA PUERTA ABIERTA
PARA QUE EL RESTO DE LOS
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
TOMEN EL MISMO CAMINO”.

REGINA LIMA

DEFENSORA DE LA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO, BRASIL.



A desk organizer containing various office supplies, including pens, pencils, and a small figurine. The organizer is black and has several compartments.

A desk area with a white mug, a large white thermal water bottle, and a black coffee cup. The items are arranged on the desk surface.

A desk area with a keyboard, a mouse, and several sheets of paper. The items are arranged on the desk surface.



CONSOLIDACIÓN DE LA DEFENSORÍA

La Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de los oyentes y televidentes sean respetados. Desde su fundación, el 14 de noviembre de 2012, alentó la participación y el debate permanente y llevó adelante una tarea pedagógica fundamental en la formación crítica de las audiencias, en la difusión del derecho a la comunicación, en cómo ejercerlo y reclamar cuando es vulnerado. En este tercer año se propuso consolidar lo logrado y, sobre todo, trazar nuevas líneas de acción para seguir facilitando las herramientas que permitan a toda la ciudadanía conocer y ejercer sus derechos comunicacionales de manera integral.

La Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, por lo que desarrolló una extraordinaria capacidad de diálogo y de creación de espacios de resolución extrajudicial del conflicto, con verdadera repercusión positiva en el marco de sus atribuciones. Específicamente, el artículo 19 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que la Defensoría del Público debe:

- a) Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios regulados por la presente teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial. No obstará a su legitimación judicial la existencia o no de causa individual, siendo su legitimación tanto subjetiva como objetiva y por los derechos de incidencia colectiva previstos expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que hacen al desarrollo del Estado democrático y social de derecho y a la forma republicana de gobierno;
- b) Llevar un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentados por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto;
- c) Convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudios e investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación;
- d) Realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias presentados e informar a las autoridades competentes, a los interesados, a la prensa y al público en general sobre sus resultados y publicar sus resultados;
- e) Presentar ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual un informe anual de sus actuaciones;
- f) Convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión y participar en aquellas previstas por la presente o convocadas por las autoridades en la materia;
- g) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su competencia o cuestionar judicialmente la legalidad o razonabilidad de las existentes o que se dicten en el futuro, sin plazo de caducidad, dejando a salvo el respeto a la autoridad de cosa juzgada judicial;
- h) Formular recomendaciones públicas a las autoridades con competencia en materia de radiodifusión las cuales serán de tratamiento obligatorio;

- i) Representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su conjunto, en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitar la anulación de actos generales o particulares, la emisión, modificación o sustitución de actos, y otras peticiones cautelares o de fondo necesarias para el mejor desempeño de su función.

Desde el 14 de noviembre de 2012, día en que la Lic. Cynthia Ottaviano fue designada como primera Defensora del Público del país, por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina y con más de 800 adhesiones, esta Defensoría vertebró su tarea en torno del nuevo paradigma de la comunicación, en la perspectiva de los derechos humanos, comprendiendo que la comunicación no es un mero negocio, sino un servicio de interés público; que la información no es una mercancía, sino un derecho, y que las personas ya no son objetos, ni sujetos pasivos, sino plenos sujetos de derecho, dado que el derecho a la comunicación es un derecho humano inalienable, de dos dimensiones, una individual y otra colectiva, por la que se puede dar y recibir información, ideas y opiniones, así como buscarlas y difundirlas.

Esta Defensoría fue creada como puente, enlace y vínculo entre los diferentes actores estatales (gobiernos, administraciones, legislaturas), la sociedad civil (ONGS, sindicatos, partidos políticos, casas de estudios) y los distintos actores de la comunicación (licenciatarios y comunicadores), alejada de paradigmas punitivistas y penalizadores.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Para que la Defensoría del Público pueda cumplir con las funciones que le fueron asignadas mediante la Ley N° 26.522, luego de realizar una profunda investigación sobre la conformación y el trabajo de todas las defensorías de las audiencias en los diferentes países del mundo y los organismos de derechos humanos de la Argentina y considerando criterios de racionalidad y eficiencia para llevar adelante los objetivos planteados se aprobó mediante las resoluciones N° 3/12, 4/12, 73/13 y 79/13 la Estructura Organizativa de Primer Nivel y de Segundo Nivel Operativo, con siete direcciones específicas: Dirección de Relaciones con las Audiencias, a cargo de Paula Gueler, Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, a cargo de María José Guembe, Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Dr. Gerardo Halpern, Dirección de Capacitación y Promoción, Ernesto Lamas, Dirección de Administración, Lic. Celeste Conde, Dirección Legal y

Técnica, Cecilia Bermúdez, y Dirección de Comunicación Institucional, a cargo del Lic. José Ferrero.

DIRECCIÓN DE RELACIONES CON LAS AUDIENCIAS

Objetivos, misiones y funciones:

- Desarrollar y coordinar canales de acceso a la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL sencillos y ágiles para la realización de las denuncias, consultas y/o solicitudes de información por parte de la ciudadanía, otorgándole un tratamiento adecuado que permita su entera satisfacción.
- Recibir y canalizar, a través de los distintos modos (personalizado, telefónico, vía correo, e-mail o web), las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio, la televisión y demás Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Llevar un registro actualizado de las consultas, reclamos y denuncias presentados por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto.
- Realizar el seguimiento de las consultas, reclamos y denuncias que se presenten.
- Asesorar al público en general proporcionando las respuestas pertinentes desde una perspectiva integral del derecho humano a la comunicación y los derechos de las audiencias.
- Acercar la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL al conjunto de la ciudadanía construyendo una gestión de proximidad.
- Analizar y confeccionar estadísticas de los distintos tipos de consultas, denuncias y reclamos recibidos por la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, a los efectos de adoptar las medidas tendientes a solucionar la problemática que se plantee.
- Otorgar los informes que se soliciten sobre los registros de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Implementar mecanismos de abordaje territorial que acerquen la audiencia a la DEFENSORÍA a efectos de promover la participación del público a través de oficinas móviles, stands en la vía pública, etc.
- Coordinar y asistir en el funcionamiento de las sedes descentralizadas de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, velando por el cumplimiento de las políticas de la misma.



» El equipo de la Dirección de Relaciones con las Audiencias recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio, la televisión y demás servicios de comunicación audiovisual.

- Planificar el desarrollo territorial de las sedes descentralizadas de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y ASUNTOS JURÍDICOS

Objetivos, misiones y funciones:

- Asistir en la definición de los cursos de acción a seguir frente a las consultas, denuncias y/o reclamos.
- Coordinar el proceso de investigación en las actuaciones iniciadas de oficio por la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL o por reclamos y/o denuncias del público en general.
- Coordinar con la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo la gestión de investigación en las actuaciones mencionadas.
- Proveer a una solución alternativa de conflictos durante el procedimiento y coordinar dicha instancia.
- Ejercer la representación judicial o administrativa del/a Defensor/a del Público en aquellos casos en los que sea parte o en los que intervenga como tercera interesada, coordinando y supervisando dichas actuaciones.
- Asistir y coordinar la estrategia jurídica llevada a cabo en las mismas.
- Entender en el análisis legal y asesoramiento jurídico mediante dictámenes especializados referentes a los derechos humanos y las políticas públicas atinentes a la ley y a la competencia de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Proponer modificaciones y/o revisión de normas legales y reglamentarias y de toda otra política pública relacionada con las materias objeto de actuación de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Contribuir con la Dirección de Capacitación y Promoción en la elaboración de contenidos de formación en derechos y sobre el contenido de la ley.
- Coordinar con la Dirección de Relaciones con las Audiencias la gestión de los puntos de contacto en las relaciones con el público.

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO

Objetivos, misiones y funciones:

- Diseñar, planificar e implementar estrategias de investigación y análisis sobre la comunicación audiovisual.
- Producir informes de investigación referidos a la política local de defensa de derechos contenidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Ejercer un seguimiento y análisis de las emisiones de radio y televisión que pudieran incluir cualquier tipo y/o forma de discriminación y/o violación de los derechos humanos contenidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Analizar los mensajes y representaciones transmitidos por los medios audiovisuales que pudieran afectar la sensibilidad de algún grupo o sector social.
- Producir estudios sobre formas de discriminación basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes y/o sobre violencia simbólica en los medios de comunicación; ausencias socio-comunicacionales en el sistema de medios; publicidad de tabacos y alcoholismo; entre otras problemáticas de los medios de comunicación audiovisual.
- Elaborar estudios y recopilar información sobre las experiencias audiovisuales contemporáneas para proponer líneas de acción que promuevan y profundicen la concreción de los objetivos establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Coordinar, fomentar y difundir la publicación del material de investigación sobre los servicios de comunicación audiovisual.
- Participar del diseño de métodos orientados a facilitar y modernizar el uso y producción de información en el ámbito de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Diseñar métodos idóneos para relevar información específica sobre las audiencias de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Evaluar y realizar informes sobre los datos producidos o recopilados por la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Asistir en la evaluación de resultados de la implementación de políticas de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Promover la realización de convenios con organismos dedicados a la investigación científica, a fin de desarrollar trabajos conjuntos que profundicen saberes y conocimientos en el ámbito de los derechos de las audiencias de Servicios de Comunicación Audiovisual.



El equipo de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo analiza los mensajes y representaciones transmitidos por los medios audiovisuales que pudieran afectar la sensibilidad de algún grupo o sector social.

- Intervenir en la articulación con instituciones públicas del orden nacional y provincial, organizaciones de la sociedad civil, universidades y referentes académicos especializados en la investigación de la temática, manteniendo espacios y actividades de intercambio y discusión.
- Representar a la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL en foros, conferencias, congresos y exposiciones en general, vinculadas con el uso y producción de información en los aspectos de su incumbencia.
- Instrumentar y presentar el informe anual pormenorizado de gestión de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO ante la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Organizar y promover concursos, premios y encuentros con el objeto de fomentar el derecho humano a la comunicación y los derechos de las audiencias.
- Implementar planes de capacitación que propendan a fortalecer y fomentar la diversidad, la universalidad de los Servicios de Comunicación Audiovisual, la participación, la libertad de expresión, el derecho a la información, el federalismo, la inclusión social, equidad de género y otros y el fortalecimiento del sector audiovisual.
- Fomentar la formación profesional de personal especializado que se desempeñe en los Servicios de Comunicación Audiovisuales, y para el público en general interesado en la temática.
- Impulsar la inclusión en los planes de estudios y el diseño curricular de la educación primaria y secundaria básicas, terciarias y universitarias, del derecho humano a la comunicación y los derechos de las audiencias.
- Convocar a las empresas privadas, organizaciones públicas o privadas, partidos políticos, sindicatos, centros de estudios e investigación, organizaciones de la sociedad civil en general, u otras entidades de bien público en general para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación.
- Convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a fin de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión y participar en aquellas previstas por la Ley o convocadas por las autoridades en la materia.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN

Objetivos, misiones y funciones:

- Diseñar, planificar y programar planes de capacitación y formación de las audiencias destinados al público en general de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluidas las/os niñas/os, adolescentes, así como docentes, trabajadoras/es, titulares, licenciarios, autoridades del sector en la promoción de los derechos y valores comprendidos en la Ley Nº 26.522, con el fin de divulgar y fomentar los principios y derechos de la comunicación democrática y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en todos los ciudadanos.



El equipo de la Dirección de Capacitación y Promoción diseña e implementa acciones que contribuyen a difundir el derecho humano a la comunicación.



» El equipo de la Dirección de Administración planifica, dirige, controla y registra la administración financiera y los recursos económicos.

- Implementar líneas de acción destinadas a fortalecer el desarrollo sustentable del sector de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el conocimiento ciudadano acerca del derecho humano a la comunicación general y a los derechos que le asisten a partir de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 y sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación.
- Promover acuerdos, convenios y el otorgamiento de becas con instituciones educativas del país tendientes a la capacitación sobre contenidos audiovisuales y a la promoción del derecho humano a la comunicación.
- Administrar la biblioteca de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Objetivos, misiones y funciones:

- Planificar, dirigir, controlar y registrar la administración financiera y de los recursos económicos.
- Coordinar, controlar y supervisar el proceso de formulación y ejecución de la gestión presupuestaria y financiera del Organismo asegurando el cumplimiento de las Leyes N° 24.156, 11.672, sus modificatorias y complementarias y toda aquella norma que las sustituya.
- Intervenir en la administración, registro y control de los pagos del Organismo y los fondos recaudados.
- Intervenir y controlar la administración de los bienes patrimoniales y no patrimoniales del Organismo.
- Planificar, intervenir y coordinar la política de administración, capacitación y desarrollo de los recursos humanos del Organismo.
- Entender en la relación con las entidades sindicales.
- Intervenir en la gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios y en los procedimientos aplicables a los mismos de acuerdo a la normativa vigente.
- Coordinar y supervisar el mantenimiento edilicio y los servicios auxiliares para el correcto funcionamiento del Organismo.
- Entender en el diseño, proceso, mantenimiento y prestación de los servicios informáticos y de telecomunicaciones, asegurando su correcta utilización y el acceso de personal autorizado.
- Supervisar y coordinar las tareas de los Departamentos a su cargo.

DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA

Objetivos, misiones y funciones:

- Se encarga de la revisión formal y legal de toda documentación que se eleve a consideración de la Defensora del Público. Entre ellas, notas, proyectos de Resoluciones, convenios, contratos, interviniendo en su redacción, análisis y evaluación de la misma y coordinando el apoyo técnico de las áreas competentes.
- Emite dictámenes jurídicos previos al dictado de los actos administrativos de la Defensoría del Público, efectuando de esta manera el control de legalidad de los mismos. Asimismo se encarga de asistir en el ordenamiento administrativo y normativo del Organismo y de asesorar a la Defensoría en las materias legales requeridas.
- Interviene en la tramitación de los sumarios administrativos a efectos de deslindar responsabilidades administrativas disciplinarias-patrimoniales del personal de la Defensoría del Público y a determinar el presunto perjuicio fiscal que se pudiera ocasionar.
- Procede al registro, protocolización y publicación de Resoluciones, Convenios y Contratos emanados de la Defensoría del Público. Para ello se le asigna a cada acto administrativo fecha y número correlativo. Estos datos son registrados en forma manual en el libro correspondiente y cargados asimismo en una planilla de base de datos, conteniendo el número de expediente o actuación, número de acto administrativo y una breve referencia del tema.
- Recibe y custodia las copias de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios obligados en los términos de la Ley N° 26.857 y sus correspondientes Anexos reservados, efectúa las intimaciones que correspondan así como toda otra función impuesta por la normativa vigente relativa a la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales por los funcionarios obligados.



» El equipo de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos provee una solución alternativa a los conflictos surgidos de los reclamos de las audiencias.

EN ESTE TERCER AÑO SE PROPUSO CONSOLIDAR LO LOGRADO Y, SOBRE TODO, TRAZAR NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA SEGUIR FACILITANDO LAS HERRAMIENTAS QUE PERMITAN A TODA LA CIUDADANÍA CONOCER Y EJERCER SUS DERECHOS COMUNICACIONALES DE MANERA INTEGRAL



» El equipo de la Dirección de Comunicación Institucional desarrolla la información interna y externa de la Defensoría.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos, misiones y funciones:

- Difundir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sus principios y los derechos del público a través de programas y medios de comunicación propios o de terceros, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la publicidad oficial.
- Garantizar mediante el establecimiento de canales, estrategias y contenidos comunicacionales todas las informaciones que hagan a un cumplimiento efectivo e integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en general y a la función específica de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Coordinar todas las acciones de comunicación externa de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Desarrollar proyectos y acciones de comunicación institucional que permitan dar a conocer las actividades e iniciativas de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y de su titular.
- Difundir las políticas, acciones, objetivos, proyectos y actividades de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Proveer información vinculada a la cobertura que los medios de comunicación realizan sobre el funcionamiento, las acciones y las características de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Coordinar la producción de contenidos audiovisuales, comunicados, fotografías y material gráfico y digital para difundir las actividades, iniciativas, opiniones y acciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL en los medios de comunicación.
- Desarrollar y plasmar la identidad visual de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL en todos los materiales gráficos y digitales sean de elaboración propia o por terceros.
- Realizar el diseño y la producción gráfica y digital de publicaciones y documentos.
- Establecer y actualizar el sitio web oficial y los canales digitales para la realización de trámites, el acceso a la información y la transparencia de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
- Coordinar la relación de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL con los medios de comunicación gráficos y audiovisuales de la REPÚBLICA ARGENTINA y el exterior.

“CELEBRAMOS EL TRABAJO REALIZADO PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. VALORAMOS PROFUNDAMENTE LA DESIGNACIÓN DE 2015 COMO EL AÑO POR LA INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES”.

FLORENCE BAUER

REPRESENTANTE EN ARGENTINA DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF).

Consultas, Pedidos y Reclamos

Datos Personales

Apellido *	<input type="text" value="Rostiguz"/>
Nombre/s *	<input type="text" value="Ma"/>
DNI *	<input type="text" value=""/>
Fecha de Nac. *	Die: <input type="text" value="2"/> Mes: <input type="text" value="2"/> Año: <input type="text" value="2"/>
Dirección Calle *	<input type="text" value=""/>
Dirección Número *	<input type="text" value=""/>
Dirección Depto.	<input type="text" value=""/>
Dirección Cód. Postal *	<input type="text" value=""/>
Localidad *	<input type="text" value=""/>
Provincia *	<input type="text" value="- Seleccionar -"/>
Teléfono *	<input type="text" value=""/>
Teléfono Celular	<input type="text" value=""/>
E-mail *	<input type="text" value=""/>
¿Acepto el e-mail como comunicación?	<input type="text" value="- Seleccionar -"/>



RECLAMOS, DENUNCIAS Y CONSULTAS

La Defensoría, en 2015, recibió 2709 presentaciones que consultaron, reclamaron o denunciaron en base a 3.124 cuestiones temáticas.

Tal como ha realizado desde sus inicios, este organismo considera que la relevancia de dichos reclamos radica en el objeto de referencia, por lo que se tomará como base informativa esta última cifra, que es la que posibilita registrar las cantidades de cuestiones que las audiencias han planteado al organismo. Si bien el primer número da cuenta de las presentaciones efectuadas, el segundo permite reconocer los casos que reclaman más de una cuestión en una misma presentación -lo cual explica la razón de que se trate de un número mayor-. Por ende, esos casos, que formalmente constituyen una sola presentación, aluden a más de una cuestión en sus manifestaciones ante este organismo. Así, la Defensoría consigna ambos numerales de modo de poder realizar mejores y más complejos diagnósticos acerca de qué dicen las audiencias respecto de sus derechos comunicacionales, al menos ante este organismo.

Se establecieron tres campos de análisis que permiten desglosar esas 3.124 alusiones de modo de hacer inteligibles los derechos e intereses que han expresado las audiencias de la radio y la televisión a lo largo de 2015. A su vez, este documento permite su comparación con los informes anuales ya expuestos ante la Comisión Bicameral así como lo publicado en los Anuarios de 2013 y 2014.

Luego de tres años de trabajo se llevó a cabo un ajuste metodológico y categorial respecto de las formas clasificatorias y el ordenamiento de los subcampos que integran cada universo, de modo de poder ofrecer una información más precisa y detallada que lo que ha venido informando desde

el inicio de su gestión. Esta mejora en la carga y nomenclatura de la información posibilita abordajes informativos, lo cual contribuye a una mayor precisión en la clasificación y en la caracterización tanto de las audiencias como del perfil que asume el proceso de ciudadanía comunicacional en Argentina, tal como lo puede analizar un organismo que recibe las consultas y demandas de las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.

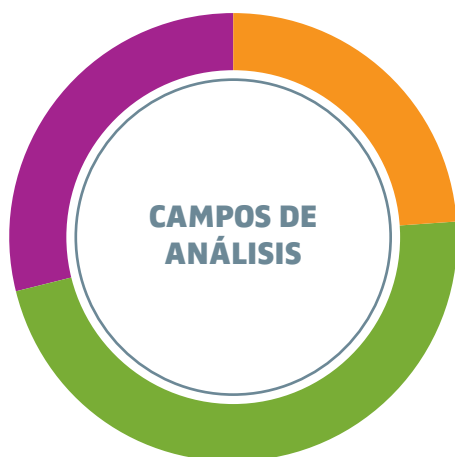
Por otro lado, estas mejoras posibilitan abordar cuestiones específicas de los reclamos que hasta este informe no se podían desprender de los balances analíticos presentados. La mayor distinción de tipologías de reclamos no altera los totales sino que permite detallar a qué se hace referencia cuando se trabaja sobre determinados conjuntos de problemáticas o sobre determinada nomenclatura categorial. Dado que todo sistema clasificatorio supone integraciones y exclusiones, el desafío es dar una mayor precisión a cada categoría y universo para evitar sobredimensionamientos o sub-representaciones de aquello que manifiestan las audiencias.

**EN 2015, SE RECIBIERON
2709 PRESENTACIONES QUE
CONSULTARON, RECLAMARON
O DENUNCIARON EN BASE A
3.124 CUESTIONES TEMÁTICAS**

CAMPOS DE ANÁLISIS

3

- 1 | ACCESO
- 2 | PARTICIPACIÓN
- 3 | REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS



	PORCENTAJE	PRESENTACIONES
ACCESO	22,9 %	717
PARTICIPACIÓN	43,5 %	1.413
REPR. MEDIÁTICAS	27,4 %	857



Luego de tres años de trabajo se llevó a cabo un ajuste metodológico y categorial respecto de las formas clasificatorias y el ordenamiento de los subcampos que integran cada universo.

A modo de introducción, y como forma de dar claridad a los datos que siguen, se sintetiza la información que será detallada a continuación:

- 1/ Presentaciones totales 2015: 2.709
- 2/ Presentaciones según temática cuestionada 2015: 3.124 casos (100%)
- 3/ Presentaciones vinculadas al "Acceso a los SCA tal como establece la normativa": 717 casos (22,9%)
- 4/ Presentaciones vinculadas a la "Participación": 1.413 casos (45,3%)
- 5/ Presentaciones vinculadas a las "Representaciones mediáticas": 857 casos (27,4%)

Es importante advertir que, como parte de este documento, se propone un análisis breve acerca de las "Presentaciones vinculadas a cuestiones sobre las cuales la Defensoría del Público carece de competencias": 137 casos (4,4%), dado que, si bien se trata de casos que no aluden a tareas que estén dentro de la órbita de acción de esta Defensoría, sí poseen algunos elementos informativos que pueden resultar relevantes. Por ello, además de consignarse como forma de comprender la equivalencia entre 3.124 casos y el 100% de los mismos, se trata de un campo en el que se consignan reclamos que muchas veces aluden, de manera indirecta, a cuestiones que atienden a los medios de comunicación audiovisuales. Reclamos en relación con Internet, páginas Web, redes sociales, entre otras cuestiones, aparecen de manera frecuente en reclamos que posibilitan identificar miradas, cuestionamientos, reflexiones por parte de sus usuarios que pueden resultar significativos para la elaboración de futuras políticas públicas en materia comunicacional en Argentina.

1) ACCESO

El primero de los universos –hasta 2014, clasificado por esta Defensoría como "Piso de Ciudadanía"–, refiere a lo que comúnmente –y específicamente en el campo de la comunicación– se denomina "ACCESO" (en 2015, 716 casos, es decir, el 22,9% del total recibido por la Defensoría durante este año) y que ha sido uno de los pilares sobre los cuales se estructuró el campo de las políticas nacionales en comunicación y que da cuenta de diferentes formas en que la población establece algún vínculo con los medios audiovisuales en condiciones de igualdad y en el reconocimiento de su derecho a acceder a diferentes canales y señales y, consecuentemente, a representaciones mediáticas plurales.

Si bien se trató del universo más reclamado en los años anteriores, no ha sido así en 2015. La resolución de gran parte de los reclamos motivados por la no inclusión de determinadas señales a la grilla de la televisión paga y que las Resoluciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) habían establecido, marcaron una merma significativa de ese tipo de presentaciones. De ser el universo más reclamado, ha pasado a ser el tercero de los tres que se analizan en este informe.

En este universo se sintetizan, por ende, reclamos específicos de acceso que responden a intereses de la sociedad respecto de diversas propuestas, las cuales no sólo son formas de reclamar una determinada posesión o capacidad de posesión, sino también la posibilidad de ampliar la gama de representaciones que desde dicho acceso se pueden reconocer. Es decir, se trata, por ejemplo, de reclamos o consultas no sólo respecto de la posibilidad de usufructuar canales o señales destinados a niñas, niños y adolescentes, sino también de la inclusión –dentro de la oferta- de determinadas señales destinadas específicamente a ellos. Entonces, los reclamos que aluden a la niñez y la adolescencia, también evidencian un reclamo respecto de la posibilidad de elegir entre diferentes propuestas de niñeces y adolescencias llevadas a cabo por los SCA.

Si se comparte el ejemplo hipotético –y real- expuesto, se podrá comprender que este universo abarca, también, los reclamos que implican el acceso a diferentes temáticas que la normativa explícita en su articulado (sea en lo que hace a la tipología o proveniencia de materiales audiovisuales como a los tiempos destinados a programación, música local, producciones propias, entre otras).

En el universo de “Acceso” correspondiente al período 1ero de enero de 2015 - 31 de diciembre de 2015 (717 casos) se consignan, entonces, los reclamos por el cumplimiento de lo que la Autoridad de Aplicación (AFSCA) fijó en relación con el ordenamiento de la grilla en general (12 casos: 1,5% del universo). A su vez, se integran los reclamos respecto del acceso a la TDA/TDT, sea tanto por acceso (17 casos: 2,4% del universo) como por interferencias o problemas de sintonía de la TDA (16 casos: 2,2% del universo) y, finalmente, por el cumplimiento de lo pautado en relación con la grilla en la TDA (9 casos: 1,2% del universo).

Es decir, en síntesis la Defensoría registra un total de 53 reclamos que refieren explícitamente a la relación “acceso” y “grilla en general”. En términos porcentuales, un total del 7,4% de los reclamos consignados dentro del campo “Acceso”.

Además, como parte del universo de “Acceso” se toman los reclamos por interferencias en relación con las radios (70 casos: 9,8% del universo) y la televisión (48 casos: 6,7% del



Los diferentes reclamos divididos en temáticas.

universo) en general. Junto con ellas, se especifica un conjunto de reclamos particulares por imposibilidad, dificultad de acceso o interferencias en el acceso a la TV Pública (23 casos: 3,2%) y a Radio Nacional (19 casos: 2,6% del universo).

A su vez, se incluyen los reclamos por el acceso a licencias (30 casos: 4,2% del universo), el acceso a recursos de sostenibilidad (15 casos: 2,1% del universo) y el acceso al denominado "abono social" (1 caso: 0,1% del universo).

Dentro del universo de "Acceso" también se expresan los reclamos por el incumplimiento del artículo 66 de la LSCA. Se trata de reclamos que refieren específicamente al ejercicio del derecho al acceso a las comunicaciones audiovisuales en condiciones de igualdad para las personas que tienen disminuida su capacidad auditiva, y que reclaman que las señales y canales incluyan la lengua de señas en sus emisiones (130 casos: 18,1% del universo).

En lo que hace a "tipología de materiales" reclamados en términos de "Acceso", es decir, la relación entre "Propuestas audiovisuales" (propuestas, entendidas aquí de manera genérica) y "acceso", el universo se vuelve más detallado y específico. Allí aparecen:

1/ Los reclamos que atienden a canales y señales obligatorias con participación del Estado (37 casos: 5,2% del universo).

Estos reclamos se pueden subdividir entre las "presentaciones generales" (12 casos, es decir, el 1,7% del universo "acceso") y las que especifican a qué señal particular hacen referencia:

- 1.1. Paka Paka: 7 casos, 1% del universo
- 1.2. INCAA TV: 6 casos, 0,8 % del universo
- 1.3. Telesur: 8 casos, 1,1 % del universo
- 1.4. Encuentro: 4 casos, 0,5% del universo.

Dos datos resultan relevantes de este último conjunto de señales:

- a) A diferencia de los informes anteriores, y como parte del ordenamiento más o menos general de la grilla que se explicó al inicio de este informe, no se detectan casos que aglutinen porcentajes que marquen alguna tendencia particular que merezca alguna atención específica (como sí ocurrió en años anteriores, por ejemplo, respecto de la señal Telesur cuando había sido levantada por una empresa cableoperadora).
- b) El segundo dato, tal como se adelantó, y quizás el más significativo de esta parte del informe, es que en 2015 se redujo marcadamente la concentración de reclamos en torno al acceso a señales.

2/ Los reclamos que atienden a canales y señales obligatorias sin participación del Estado (157 casos, es decir, el 21,9% del universo "acceso"):

- 2.1. CN23: 12 casos, 1,7% del universo
- 2.2. 360: 8 casos, 1,1% del universo
- 2.3. C5N: 9 casos, 1,2% del universo
- 2.4. QM: 1 caso, 0,1 % del universo
- 2.5. Argentinísima: 1 caso, 0,1% del universo
- 2.6. TN: 0 caso
- 2.7. Rusia TV: 4 casos, 0,5% del universo.
- 2.8. Otros canales y señales obligatorias no estatales: 122 casos, 17% del universo.

El dato más relevante de los consignados en este grupo radica en la fuerte proporción que ocupa el numeral 2.8. Si nos adentramos en este universo de reclamos sobre señales obligatorias sin participación del Estado, se destaca que –al menos en esos términos- se registra una constante presentación de reclamos respecto del Canal 9 de Salta: hay una elevada proporción de reclamos respecto de su inclusión en la grilla por parte de las audiencias hacia los cableoperadores de la provincia de Salta.

3/ Los reclamos que atienden a Canales locales y señales de producción propios (10 casos, es decir, el 1,4% del universo)

4/ Los requerimientos que refieren a canales y señales que no son obligatorias según la normativa vigente pero que, de todos modos, forman parte de los reclamos de las audiencias (22 casos, es decir, el 3,1% del universo de "acceso"), y "otros" reclamos que aluden a diferentes problemas de Acceso no especificados en esta clasificación (1 caso, es decir, el 0,1% del universo).

Se consideran también reclamos vinculados a lo establecido en el Artículo 77 de la LSCA bajo la nomenclatura de "contenidos informativos de interés relevante" (5 casos, es decir, 0,7% de los reclamos). Este conjunto da cuenta de una demanda –sobre todo desde el denominado "interior" del país- de materiales que suelen ingresar a la TV de aire porteña y que, debido a que esta es inaccesible de manera gratuita en buena parte del país, queda reducida al sector social capaz de y dispuesto a abonar por el acceso a materiales que deberían estar disponibles de manera gratuita, precisamente, debido a su carácter de "interés relevante".

Una mención aparte merecen los reclamos que las audiencias plantearon respecto de programación a la que pretenden acceder más allá de que no sea considerada por la normativa ni por la regulación como "de interés relevante". Se trata de programas o eventos que las audiencias reclaman

ante esta Defensoría como parte de su necesidad de acceso a la información o el entretenimiento y que posibilita advertir un conjunto de inquietudes que la Defensoría pone a debate en sus diferentes encuentros con cada uno de los servicios de comunicación audiovisual. Se trata de 5 casos (0,7% del universo), cifra que, dada su similitud con la anterior (y por el acumulado histórico ya expuesto en los anteriores informes realizados por esta Defensoría), resulta significativa, pues posibilita reconocer una amplitud sumamente enriquecedora acerca de qué diferentes programaciones se demandan desde muy distintos lugares del país.

En materia de "Acceso" y de cumplimiento de lo que establece la normativa, la Defensoría ha recibido durante 2015 18 reclamos (2,5% del universo) que aluden específicamente al acceso, uso y necesidad de la Cadena Nacional. Gran parte de ellos reclaman por interrupciones o el no acatamiento de emisoras de radio y televisión de lo dispuesto por el Artículo 75 de la Ley 26.522. Dentro de este conjunto de reclamos, hay casos que manifiestan la necesidad de se realicen más emisiones en Cadena Nacional, dado que entienden que de ese modo se puede acceder a información de políticas públicas que, de otra manera, suelen quedar invisibilizadas en los servicios de comunicación audiovisual.

En un marco bastante similar, las audiencias reclaman por el cumplimiento de los horarios pautados para las programaciones. Si bien se trata de 7 reclamos (1%), no deja de ser un punto sobre el cual aun existen demandas que deben ser atendidas por los SCA, pero que, a su vez, posibilitan ver cómo se ha producido una mejor respuesta por parte de las audiencias ante el cumplimiento de los SCA de lo establecido por la normativa. Si bien no se poseen datos anteriores a esta cuestión, es notable que, ante el cumplimiento de los horarios por parte de los proveedores, las audiencias no han manifestado mayores reclamos que mostraran su anterior legítima molestia. En similar sentido, la Defensoría ha recibido 3 reclamos (0,4% del universo) por la modificación de los horarios de programas que fueron cambiados por parte de los proveedores de SCA.

A su vez, se ha recibido 1 reclamo (0,1% del universo) relacionado con la emisión de cine nacional, 16 (es decir, el 2,2% del universo) respecto de la producción nacional y/o local, 3 (0,4% del universo) respecto de la producción propia, 3 reclamos (0,4% del universo) por la ausencia de material educativo y cultural, 3 casos (0,4% del universo) por el presunto incumplimiento referido a la emisión de música nacional en radios y 4 presentaciones (0,5% del universo) por ausencia o incumplimiento de emisión de programación destinada a niñas, niños y adolescentes.

LA RESOLUCIÓN DE GRAN PARTE DE LOS RECLAMOS MOTIVADOS POR LA NO INCLUSIÓN DE DETERMINADAS SEÑALES A LA GRILLA DE LA TELEVISIÓN PAGA Y QUE LAS RESOLUCIONES DEL AFSCA HABÍAN ESTABLECIDO,

MARCARON UNA MERMA SIGNIFICATIVA DE ESE TIPO DE PRESENTACIONES

EL 74,9% DE LAS PROPUESTAS PARTICIPATIVAS QUE HA RECIBIDO LA DEFENSORÍA TRATAN SOBRE LA DEFENSA DE LA LEY 26.522

En el marco del reclamo por el acceso a servicios de comunicación audiovisual, la Defensoría ha recibido un conjunto de reclamos relacionados específicamente con conflictos laborales y/o profesionales que afectan tanto la emisión como la recepción de programaciones respecto de las cuales las audiencias expresan su particular interés (20 casos, es decir, el 2,8% del universo).

En lo que atañe al acceso, las formas de acceso y el cumplimiento del artículo 81 de la LSCA referido a pautas publicitarias, esta Defensoría ha recibido 12 reclamos, es decir, el 1,7% del universo. Éstos aluden al tiempo de duración, a la modificación del volumen entre programación y publicidad (6 casos, es decir, el 0,8% del universo) o, incluso, a la existencia de publicidades encubiertas (6 casos, es decir, el 0,8% del universo).

2) PARTICIPACIÓN

En relación con la "Participación", desde el inicio de sus actividades esta Defensoría fue convocada por las audiencias de diferentes formas. De hecho, este universo, en el cual, en 2015 se consignan 1.413 casos (45,3% del total), es inferior al número real de instancias en las cuales se ha puesto en relación el vínculo "Defensoría – Participación", entre otras cuestiones porque la libertad de asistencia a los eventos que realiza, así como la cantidad de inscripciones que se llevan a cabo, por ejemplo, en las "Audiencias Públicas" no se ingresan necesariamente al sistema Web de la Defensoría.

Así, desde 2014 la Defensoría se encuentra procesando, de manera simultánea, la participación que se requiere por Web así como las que se hacen a través de la Dirección de Capacitación de este organismo.

Sin embargo, dado que este informe consigna exclusivamente aquello que ingresa a la Defensoría a través de lo registrado por su Dirección de Relaciones con las Audiencias durante 2015, la sub-representación del universo "Participación" no es impedimento para identificar los principales criterios que las audiencias ponen en juego cuando requieren de espacios participativos en relación con los servicios de comunicación, la Defensoría del Público y la difusión de materiales.

Esta cuantificación, posibilita también la caracterización de las inquietudes que plantean las audiencias, de lo que se desprende que:

La Defensoría ha sido convocada por las audiencias como actor representante ante el poder judicial en 87 oportunidades es decir, en el 6,1% de este universo. Un dato crucial de este informe se desprende de las presentaciones realizadas

por las audiencias tras el anuncio de la sanción del Decreto 236/2015, el cual ha sido considerado por el público como una forma de impedir la aplicación normal de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dichas presentaciones -ocurridas durante los días posteriores al anuncio- constituyen un dato relevante puesto que se trata de decenas de reclamos ante la Defensoría que, a la vez que reclaman contra el aludido Decreto, exigen de la Defensoría que la misma arbitre los mecanismos necesarios para evitar la intervención de la Autoridad de Aplicación (AFSCA).

La Defensoría, además, ha sido requerida para entrevistas y promoción de las actuaciones y actividades de la Defensoría en 36 casos, es decir, en el 2,5% del universo.

Ha recibido, formalmente, 230 pedidos de capacitación a lo largo del país. Es decir, el 16,3% del universo "Participación".

Se han recibido pedidos de materiales propios en 126 casos, es decir, en un 9% de los casos que integran este universo.

Además, el organismo ha recibido, vía Web, 615 pedidos de inscripción para la participación e intervención en las "Audiencias Públicas": un 43,5% de los casos referidos en este universo.

Además, ha recibido 5 consultas específicas sobre conceptos, precisiones o criterios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, un 0,3% del universo.

En 40 ocasiones la Defensoría fue interpelada para elevar reclamos o pedidos ante la Autoridad de Aplicación (AFSCA): 2,8% del universo.

También se consignan 80 pedidos de inscripción a cursos promovidos por la Defensoría, cifra inferior a la cantidad real de participantes, debido a que parte de esas solicitudes fueron procesadas por las contrapartes de la Defensoría (UBA, PUCARA, ente otras): 5,6% del universo.

A su vez, se han recibido 2 inscripciones a concursos de la Defensoría (dato que no integra inscripciones realizadas a fines de 2014 y cuyos programas o aplicaciones se iniciaron en 2015, como son los casos de las investigaciones auspiciadas y co-financiadas entre la Defensoría del Público y el CONICET, "Programa de Investigación Orientada, PIO 2015, o los concursos promovidos por la Dirección de Capacitación como el "Zoom a los derechos"): 0,1% del universo.

En 64 casos la Defensoría fue invitada a disertar en eventos específicos atinentes a actores del campo de la comunicación: 4,5% del universo "Participación".

En 12 oportunidades se recibieron pedidos de acceso a la información pública, vinculada ésta a materiales analizados por la Defensoría: 0,8% del universo.

Este año 2015 contó con la innovación estadística de la inclusión desglosada de variables de análisis que dan cuenta, por



Las audiencias pueden presentar sus reclamos en la sede de la Defensoría, en Alsina 1470 (CABA).

ejemplo, de “agradecimientos a las intervenciones de la Defensoría”, centralmente a su equipo de Capacitación así como a la trayectoria de tres años de trabajo representando los intereses y derechos de las audiencias, número sub-representado debido a que este tipo de presentaciones no eran consignadas con especificidad: 85 casos, es decir, el 6% del universo.

Finalmente, la Defensoría ha recibido 6 pedidos administrativos laborales –más allá de las consignadas a través de su bolsa de trabajo- de personas que han enviado sus CVs o han manifestado su interés de sumarse a la Defensoría como parte del proyecto del organismo: 0,4% del universo.

Como se desprende de los datos expuestos, la exigencia para que la Defensoría asuma la protección y defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la participación en las audiencias públicas, la difusión de materiales y la solicitud de capacitaciones –fundamentalmente en materia radiofónica- concentran gran parte de los pedidos de participación que plantean las audiencias a la Defensoría. Estas cuatro cuestiones concentran 1059 casos, es decir, el 74,9% de las propuestas participativas que ha recibido la Defensoría a través de su Web. En los cuatro casos, se trata de la defensa de la Ley 26.522 así como de la promoción y difusión de formas de debate, modos de realización y de actualización en materia de comunicación mediática. Sea para la producción, para el conocimiento en materia de derechos a la comunicación y de la normativa vigente o a través de la puesta en discusión del campo mediático realmente existente según el público, estos mecanismos de participación han sido marcadamente reconocidos por las audiencias en sus presentaciones ante la Defensoría. El desglose que sigue refiere, particularmente a esos requerimientos de las audiencias que reclaman ante la Defensoría del Público por lo que entienden ha sido la vulneración de algún derecho atinente a las representaciones mediáticas que se expresan en los textos audiovisuales.

Finalmente, como parte de la participación de las audiencias, se registran 25 casos (1,8% del universo) que aluden a otros tipos de pedidos -asesoramientos, consultas específicas, entre otras- que no se encuentran clasificados con nomenclaturas particulares en el listado expuesto.

3) REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS

En los anteriores informes correspondientes a 2013 y 2014, el universo en el que esta Defensoría informaba los casos de presentaciones, consultas y reclamos atinentes a textos audiovisuales fue identificado como “pisos de igualdad”.

Si bien el supuesto de dicha nomenclatura permanece inalterado, a partir de 2015 hemos preferido –de modo de hacer un texto más inteligible que los anteriores- reponer los conceptos que dieron origen a la presente clasificación, por lo que hablamos de “Representaciones mediáticas” para dar cuenta de todas las presentaciones recibidas por esta Defensoría en las que las audiencias hacen alusión a algún texto audiovisual expuesto en los servicios de comunicación audiovisual, sea en términos generales como en términos específicos.

Así, lo que refiere a las consultas, reclamos y denuncias vinculadas con representaciones que las audiencias han considerado lesivas en relación con algún derecho o que podían incurrir en la vulneración de sus derechos como público o audiencia, o la presunta vulneración de derechos de terceros a través del discurso mediático se integran en el universo de “Representaciones mediáticas”.

En este universo, entonces, se integran todas las piezas mediáticas reclamadas por su inconveniencia según diferentes motivos. Este universo, en 2015 asciende a un total de 983 casos en lo que abarca desde el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. Se trata, del 31,5% del total de las consultas, reclamos y denuncias consignadas por esta Defensoría.

A fines de su claridad expositiva, al igual que en los anteriores campos, este universo ha sido dividido en sub-campos que posibilitan reponer el eje representacional problematizado por las audiencias en relación con los medios audiovisuales, lo que brinda una mayor claridad acerca de qué es lo que las audiencias dicen sobre los medios audiovisuales y sus representaciones:

- a) Reclamos relacionados con el incumplimiento de lo que la normativa establece como Apto para Todo Público (100 casos, es decir, el 10,2% del universo “Representaciones mediáticas”).

Este sub-campo, relacionado con los reclamos que plantean las audiencias por el presunto incumplimiento en materia de exposición de textos audiovisuales que incumplirían lo establecido por el artículo 68 de la LSCA se puede subdividir, a su vez, en cuatro ejes específicos:

- a.1) Incumplimiento de ATP por sexualización inapropiada: 44 casos, 44% de los casos “ATP”.
- a.2) Incumplimiento de ATP por violencia inapropiada: 27 casos, 27% de los casos “ATP”.
- a.3) Incumplimiento de ATP por representación de alcohol, drogas y tabaco inapropiada: 5 casos, 5% de los casos “ATP”.
- a.4) Incumplimiento de ATP por lenguaje inapropiado: 24 casos, 24% de los casos “ATP”.



Las audiencias también pueden presentar sus reclamos ingresando a la web del organismo.

b) En segundo lugar, se integran las presentaciones recibidas por esta Defensoría que refieren a discursos que las audiencias consideran “Discriminatorios, ofensivos o lesivos” contra diferentes grupos o identidades sociales. Ellas abarcan un total de 420 casos, es decir, el 42,7% del universo “Representaciones mediáticas”.

Dentro de este sub-campo se han realizado mayores precisiones que las expuestas en informes anteriores, lo que habilita lecturas más rigurosas acerca de los colectivos que, según las presentaciones de las audiencias, quedan expuestos a construcciones estigmatizantes y/o discriminatorias.

b.1) Presentaciones que resultan lesivas respecto de “mujeres”: 206 casos, es decir, el 49% de las presentaciones consideradas por las audiencias como discriminatorias.

De estas 206 presentaciones relacionadas con la representación que deviene negativizante de las mujeres, esta Defensoría ha establecido una división según tres criterios que las audiencias destacan como ejes de la vulneración en cuestión:

b.1.1) Discursos que incurren en violencia contra las mujeres: 108 casos, es decir, el 52,4% del eje de las representaciones consideradas como lesivas hacia las mujeres.

b.1.2) Discursos que incurren en la sexualización y/o cosificación de las mujeres: 67 casos, es decir, el 32,5% del eje de las representaciones consideradas como lesivas hacia las mujeres.

b.1.3) Discursos que incurren en la estigmatización de las mujeres: 31 casos, es decir, 15% del eje de las representaciones consideradas como lesivas hacia las mujeres.

b.2) La Defensoría ha recibido 5 presentaciones que reclaman contra representaciones negativas o negativizantes sobre pueblos originarios. Se trata del 1,2% del sub-universo referido a discursos que las audiencias consideran como “Discriminatorios, ofensivos o lesivos”.

b.3) Reclamos relacionados con representaciones negativas o negativizantes sobre migrantes: 6 casos, es decir, 1,4% del sub-universo.

b.4) Reclamos relacionados con representaciones negativas o negativizantes sobre identidades de géneros (sin considerar aquí lo expuesto en “Mujeres”, cuyo desglose se desprende de la gran cantidad que concentran los reclamos atinentes a “Mujeres”): 78 casos, es decir, el 18,6% del sub-universo.



» Otra de las vías de contacto es a través del 0800.999.3333

- b.5) Reclamos que aluden a representaciones negativizantes o que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes: 23 casos, es decir, el 5,5% del sub-universo.
- b.6) Reclamos relacionados con representaciones negativas o negativizantes sobre clases sociales: 9 casos, es decir, el 2,1% del sub-universo.
- b.7) Reclamos relacionados con representaciones negativas o negativizantes sobre distintos colectivos étnicos y religiosos: 21 casos, es decir, el 5% del sub-universo.
- b.8) Reclamos relacionados con representaciones negativas o negativizantes sobre otros colectivos como "los argentinos", "profesionales", entre otros: 27 casos, es decir, el 6,4% del sub-universo.
- b.9) Reclamos relacionados con representaciones negativas o negativizantes sobre usuarios de los servicios de salud mental o a personas con padecimientos mentales o la invocación de la salud mental como forma de descalificación de terceros: 14 casos, es decir, el 3,3% del sub-universo.
- b.10) Reclamos relacionados con representaciones negativas o negativizantes sobre cuestiones o personas víctimas de algún padecimiento relacionado con la salud (que no alude al ya considerado "salud mental"): 26 casos, es decir, el 6,2% del sub-universo.
- b.11) Reclamos relacionados con la estigmatización de las personas adultas mayores: 5 casos, el 1,2% del sub-universo.

Si bien en los informes de 2012, 2013 y 2014 este sub-campo integraba otras temáticas, ("lenguaje inapropiado fuera del ATP" y "maltrato relacionado con animales y el ambiente"), la Defensoría resolvió en 2015 desplazar estas dos cuestiones al sub-universo "Discursos que vulneran derechos de terceros", que también integra el campo de "Representaciones mediáticas". Estos "Discursos que vulneran derechos de terceros" alcanzan a 240 casos, es decir, al 24,4% de las presentaciones realizadas por las audiencias y que esta Defensoría analiza dentro del universo de las "Representaciones mediáticas" objetadas.

En detalle, este sub-universo, está integrado por:

- c.1) Violación de la privacidad y el derecho a la imagen: 69 casos, es decir, el 28,7% del sub-universo.
- c.2) Imprecisión en la información y uso de formas imprecisas del lenguaje, datos, referencias, entre otras: 51 casos, es decir, el 21,2% del sub-universo.
- c.3) Discursos que vulneran derechos de terceros o que representan violencia indebida, más allá del ho-

rario no restringido: 52 casos, es decir, 21,7% del sub-universo.

- c.4) Discursos reclamados por sexualización indebida sin hacer alusión al horario de emisión (ATP): 3 casos, es decir, 1,2% del sub-universo.
- c.5) Discursos imprecisos en materia de salud: 8 casos, es decir, el 3,3% del sub-universo.
- c.6) Discursos que desatienden la preservación del ambiente o que maltratan animales: 3 casos, es decir, el 1,2% del sub-universo.
- c.7) Lenguaje considerado como inapropiado o representaciones violentas más allá de que sean proferidos o expuestas fuera del horario Apto para Todo Público: 51 casos, es decir, el 21,2% del sub-universo.
- c.8) Reclamos contra la participación de niñas, niños y adolescentes en televisión por fuera del horario ATP: 3 casos, es decir, el 1,2% del sub-universo.
- c.9) No se registró en todo 2015 ningún reclamo referido a publicidades no tradicionales (PNT), como sí se había producido en años anteriores.

Dentro del universo de “Representaciones mediáticas” la Defensoría consigna, además, aquellas denuncias, reclamos y consultas referidas a “Mensajes distorsionados, cortados o silenciados” en los servicios de comunicación audiovisual. Allí, en 2015 se registraron 26 presentaciones, es decir el 2,6% del universo.

Finalmente, los reclamos, denuncias y consultas atinentes al “Derecho a réplica y demanda por visibilización y espacios en los servicios de comunicación audiovisual” abarca a un conjunto de 71 casos, es decir, al 7,2% del universo de “Representaciones mediáticas”.

Este sub-universo, a su vez, se puede desglosar del siguiente modo:

- e.1) Reclamos por derecho a réplica y rectificación: 6 casos, es decir, el 8,4% del sub-universo.
- e.2) Reclamos por levantamiento de programas o de emisoras: 32 casos, es decir, el 45% del sub-universo.
- e.3) Reclamos por la invisibilización de temáticas o reclamos colectivos: 26 casos, es decir, el 36,6% del sub-universo
- e.4) Solicitud de espacios en los servicios de comunicación audiovisual por temas o colectivos: 7 casos, es decir, el 9,8% del sub-universo.

Más allá de la estadística especificada para todo el universo de “Representaciones mediáticas” (983 casos), esta Dirección informa que dentro de lo indicado más arriba, además de los programas radiales y televisivos, piezas específi-

cas en momentos particulares, y reclamos sobre formas de visibilización e invisibilización, se integran los textos publicitarios reclamados por las audiencias.

Sobre estos casos de piezas publicitarias se pueden hacer algunas especificaciones relevantes: en 2015 éstas alcanzan a los 95 casos, es decir, al 9,7% del universo “Representaciones mediáticas”. Además, 15 casos aluden específicamente a “adelantos de programación” cuestionadas por las audiencias: el 1,5% de las presentaciones que conforman el universo de “Representaciones mediáticas”.

Como cierre se introducirá un último punto de análisis respecto de las representaciones mediáticas que posibilitan brindar algunos elementos relevantes sobre las audiencias y el campo publicitario.

PUBLICIDADES

En lo que hace al campo de las “Publicidades”, también es posible informar que la Defensoría, durante 2015, ha recibido 95 presentaciones referidas a 101 cuestiones temáticas cuestionadas.

El detalle de esos cuestionamientos se desglosan del siguiente modo:

- 1/ Reclamos relacionados con pautas publicitarias que, según las audiencias, incumplen lo que la normativa establece como “Apto para Todo Público” (9 casos, es decir, el 8,9% del universo de las publicidades). Esta referencia al ATP, al igual que se expuso más arriba, puede descomprimirse en cuatro ejes:
 - 1.1) Publicidades que fueron reclamadas por presunto incumplimiento del ATP por sexualización inapropiada: 5 casos, 55,5% de los casos “Publicidades inapropiadas para el ATP”.
 - 1.2) Publicidades que fueron reclamadas por presunto incumplimiento del ATP por promoción indebida de bebidas alcohólicas, drogas y tabaco en ATP: 2 casos, es decir, el 22,2% de las “Publicidades inapropiadas para el ATP”.
 - 1.3) Publicidades que fueron reclamadas por presunto incumplimiento del ATP por lenguaje inapropiado por el horario de su exhibición: 2 casos, es decir, el 22,2% de las “Publicidades inapropiadas para el ATP”.
- 2/ La Defensoría ha recibido 81 presentaciones que aludieron a diferentes publicidades que fueron consideradas por las audiencias como “discriminatorias, ofensivas o lesivas” respecto de colectivos sociales invocados en di-

chas pautas publicitarias. Se trata del 80,2% del universo de publicidades cuestionadas.

En detalle, 40 casos, es decir, el 49,4% de este sub-universo de 81 presentaciones, aluden al colectivo de "Mujeres" como sujeto discriminado, estigmatizado o vulnerado en su representación mediática publicitaria.

Más detallado aún:

- 2.1.1) 4 casos refieren a violencia contra las mujeres en textos publicitarios, es decir, el 10% de las referencias cuestionadas por la construcción de las "mujeres" en este campo.
- 2.1.2) 19 casos aluden a formas inapropiadas de sexualización y/o cosificación de las mujeres en los textos publicitarios. Es decir, el 47,5% de las referencias publicitarias cuestionadas por su construcción de las "mujeres" en este campo.
- 2.1.3) 17 casos aluden a la estigmatización publicitaria de las mujeres. Es decir, el 42,5% de las publicidades cuestionadas por la forma de referir a las mujeres en este campo.
- 2.2) 4 presentaciones reclamaron por la construcción publicitaria estigmatizante de las diversas identidades de género (sin considerar en este universo a "mujeres"): es decir, el 4,9% de las presentaciones que reclaman contra la discriminación a través de la publicidad.
- 2.3) 1 presentación reclamó contra la construcción estigmatizante de la niñez y la adolescencia en textos publicitarios: es decir, el 1,2% de las presentaciones que reclaman contra la discriminación a través de la publicidad.
- 2.4) 16 presentaciones reclamaron por la construcción publicitaria estigmatizante de colectivos sociales como pueden ser las identidades nacionales, grupos profesionales, entre otros. Es decir, el 19,7% de las presentaciones que reclaman contra la discriminación a través de la publicidad.
- 2.5) 17 presentaciones reclamaron por la construcción publicitaria estigmatizante de personas con alguna afectación vinculada a la salud: es decir, el 21% de las presentaciones que reclaman contra la discriminación a través de la publicidad.
- 2.6) 2 presentaciones reclamaron contra publicidades que connotaban una forma ofensiva respecto de los adultos mayores. Es decir, el 2,5% de las presentaciones que reclaman contra la discriminación a través de la publicidad.

2.7) 1 presentación reclamó por la construcción estigmatizante de personas usuarias de los servicios de salud mental. Es decir, el 1,2% de las presentaciones que reclaman contra la discriminación a través de la publicidad.

3/ Finalmente, se consignan 11 casos, es decir el 10,9% de las publicidades cuestionadas, que aluden a "Discursos que vulneran derechos de terceros". En detalle:

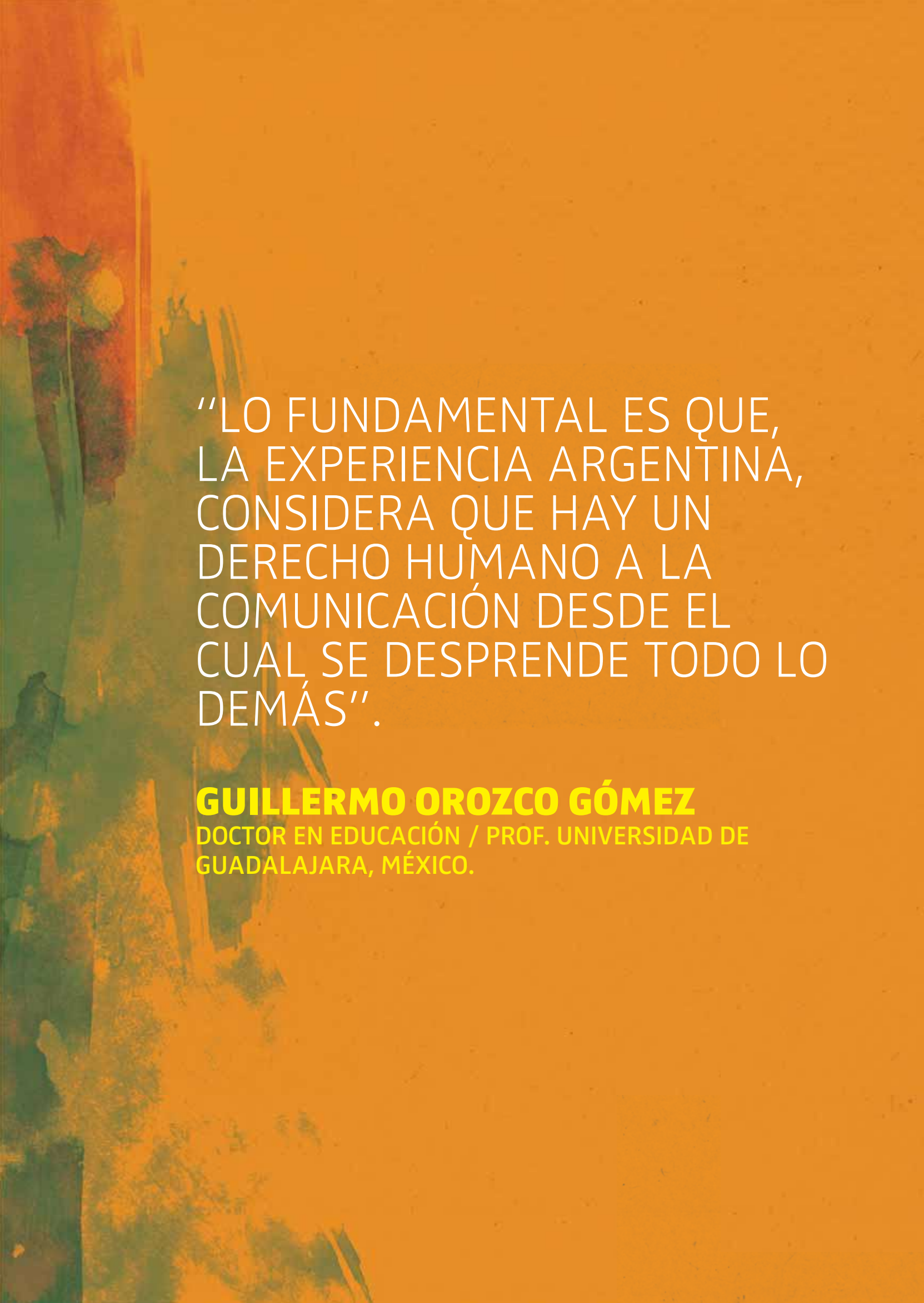
- 3.1) Publicidades cuestionadas por imprecisión en la información brindada: 2 casos, es decir, el 18,2% del sub-universo.
- 3.2) Publicidades cuestionadas por imprecisiones en materia de salud: 2 casos, es decir, el 18,2% del sub-universo.
- 3.3) Publicidades cuestionadas por representaciones consideradas inapropiadamente violentas, más allá de su horario de emisión: 6 casos, es decir, el 54,5% del sub-universo.
- 3.4) Un reclamo sobre la presencia de niñas, niños y adolescentes en publicidades emitidas fuera del ATP, es decir, el 9,1% del sub-universo.

Como cierre del presente informe, y fuera de los tres universos ya expuestos y de las consideraciones analíticas sobre el campo publicitario, la Defensoría registró, durante 2015, 137 presentaciones, es decir, un 4,4% del total que son "Consultas y reclamos mediáticos y extra-mediáticos cuyas referencias no alcanzan a las competencias del organismo".

Sin embargo, más allá de ello, en 24 casos, es decir en el 17,5% de las oportunidades, la Defensoría realizó la derivación correspondiente, de modo de que esas presentaciones pudieran seguir su curso necesario.

En 93 oportunidades, es decir, en el 67,9% de los casos, los reclamos estuvieron relacionados con otros medios de comunicación o con cuestiones relacionadas con medios no comprendidos por la Ley 26.522: medios gráficos, redes sociales digitales, tarifas de proveedores de Internet o de TV por cable, entre otros.

De estos en 93 casos, el 19,3%, es decir en 18 ocasiones, los reclamos tuvieron que ver con las tarifas de las empresas que proveen servicios vinculados a las tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Mientras que en 75 oportunidades, es decir, en el 80,6% de los casos de presentaciones relacionadas con medios de comunicación no alcanzados por las competencias de las DPSCA, se trató de reclamos por textos mediáticos fuera de los SCA abarcados por esta Defensoría.



“LO FUNDAMENTAL ES QUE,
LA EXPERIENCIA ARGENTINA,
CONSIDERA QUE HAY UN
DERECHO HUMANO A LA
COMUNICACIÓN DESDE EL
CUAL SE DESPRENDE TODO LO
DEMÁS”.

GUILLERMO OROZCO GÓMEZ

DOCTOR EN EDUCACIÓN / PROF. UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, MÉXICO.

ESTADÍSTICAS

DESDE EL 1/1/2015 HASTA EL 31/12/2015



46,5 %	1259	Bs As + CABA
16,6 %	448	Centro
14,9 %	403	NOA
8,9 %	240	Patagonia
7,4 %	201	NEA
5,7 %	155	Cuyo



27,1 %	692	31 - 40
24,8 %	633	19 - 30
19,0 %	486	41 - 50
18,1 %	462	51 - 65
6,1 %	156	Más de 65
4,2 %	108	13 - 18
0,7 %	18	6 - 12



60,3 %	1563	Mujer
39,7 %	1028	Varón



49,8 %	1348	Otras solicitudes
34,6 %	938	Consultas
14,6 %	396	Actuaciones
1 %	27	Derivaciones

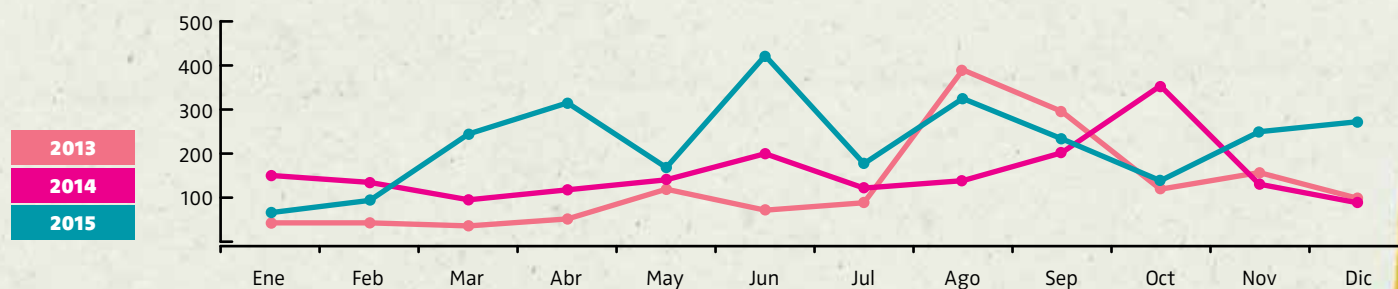
COMPARATIVAS

DESDE DICIEMBRE DE 2012 HASTA DICIEMBRE DE 2015

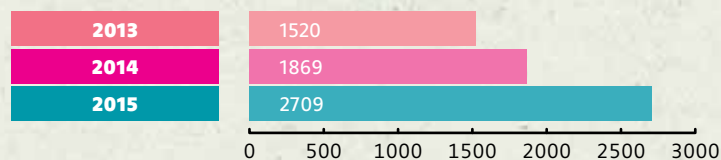
PRESENTACIONES RECIBIDAS EN LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Incremento año anterior
2013	42	42	35	51	119	71	88	392	297	119	157	98	1520	
2014	150	134	94	117	140	200	121	138	202	356	130	87	1869	+ 22,96 %
2015	65	93	245	316	168	424	177	326	234	138	250	273	2709	+ 44,94 %

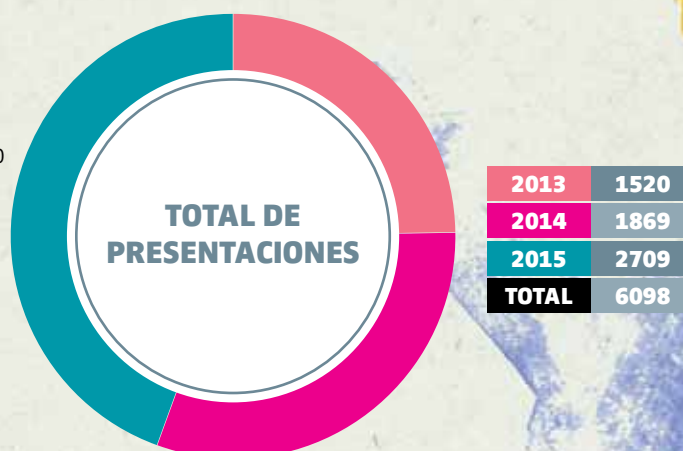
GRÁFICA COMPARATIVA DE PRESENTACIONES MENSUALES

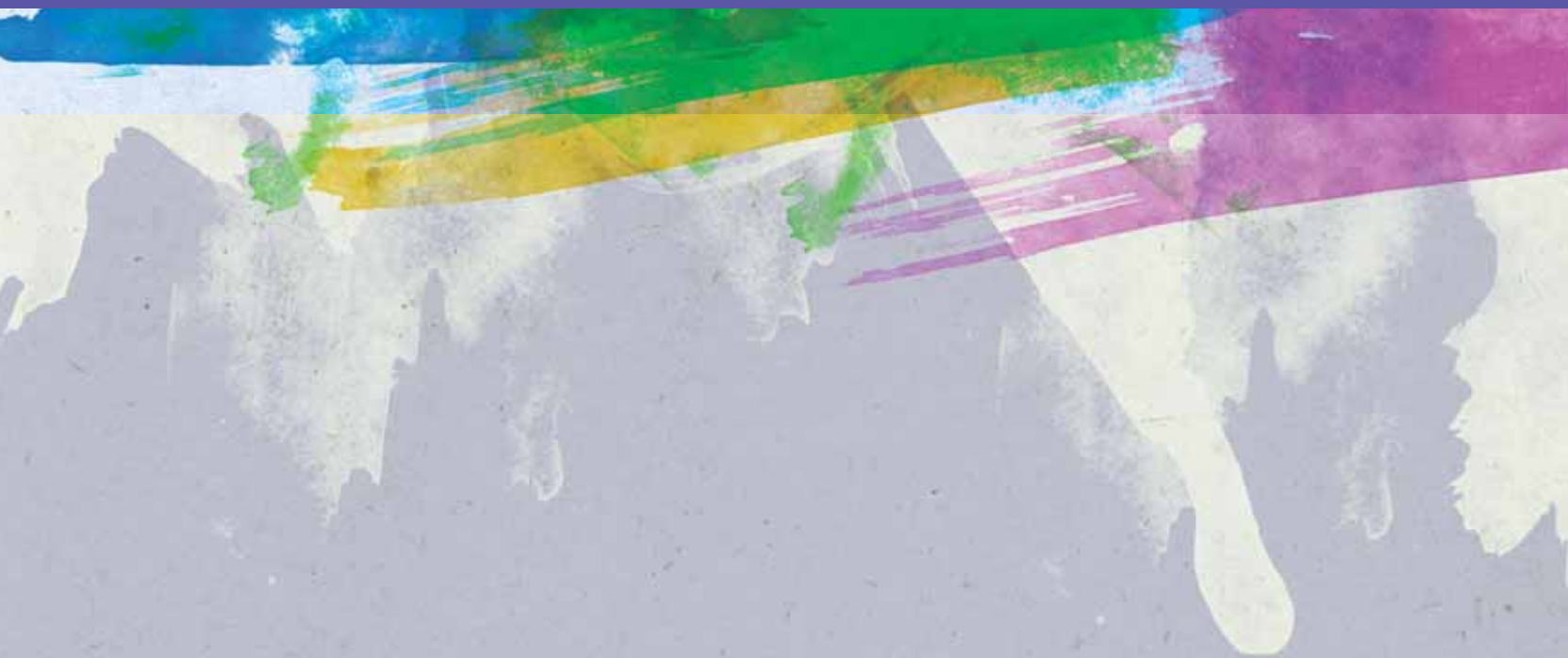


PROGRESIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL



INCIDENCIA SOBRE EL TOTAL POR AÑO





LÍNEAS DE ACCIÓN



Miri

Agustin

CONGRESITO
CLOC - 1
2015
PS/BS/ARGENTINA

CLOC
2015
PS/BS/ARGENTINA

CONGRESITO
CLOC - 1
2015
PS/BS/ARGENTINA

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHO

La Defensoría del Público declaró a 2015 “Año por la inclusión de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales”. En este marco, con el apoyo de UNICEF logró que la Televisión Pública, Endemol, El Oso Producciones, Discovery Latin America, Radio del Plata y 360 TV firmaran un compromiso para garantizar el papel positivo y constructivo de los jóvenes en la sociedad, dando cuenta de sus intereses específicos y de sus múltiples espacios de participación para promover una comunicación audiovisual igualitaria.

Esta iniciativa, a la que se fueron sumando otros actores de la comunicación audiovisual, tuvo su origen en 2014 cuando la Defensoría del Público realizó siete Audiencias Públicas en las que participaron 1.750 jóvenes, quienes compartieron sus opiniones, experiencias y propuestas en relación a la radio y la televisión. Representaron a las distintas provincias de todo el país, chicos y chicas de 220 escuelas, centros de estudiantes, medios comunitarios, organizaciones sociales y políticas, entre otros espacios de pertenencia.

Además, más de 4.000 chicos y chicas participaron de actividades de capacitación en las que compartieron saberes y reflexiones sobre sus derechos y sobre los medios audiovisuales.

Los temas que plantearon fueron sistematizados en la Declaración sobre la juventud y los medios audiovisuales, que se presentó a fin de año en el Congreso de la Nación durante el “Encuentro nacional: conclusiones de las Audiencias Públicas 2014” del que participaron 60 chicos y chicas de las 24 provincias.

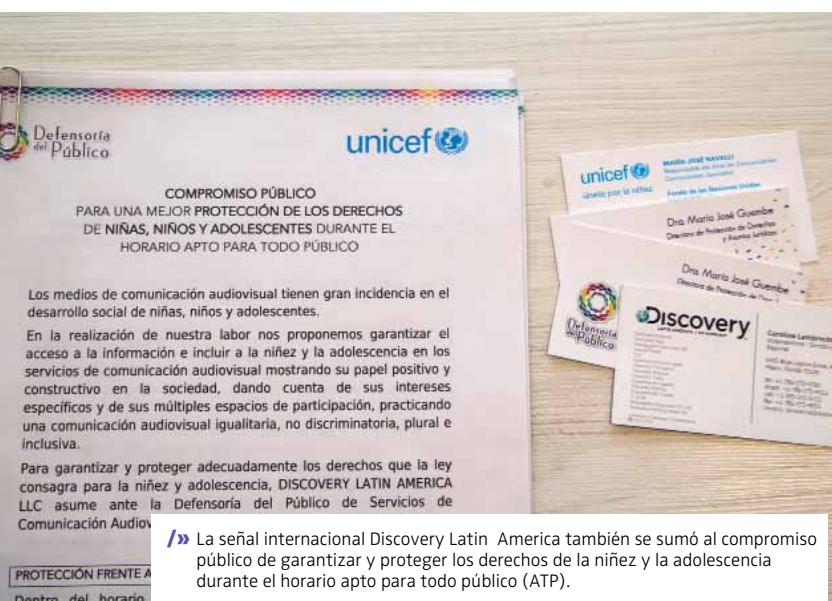
De esta manera, la Defensoría del Público asumió la Declaración como una plataforma de trabajo y declaró a 2015 “Año por la inclusión de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales”.

En ese contexto, el 11 de marzo, en la sede del organismo, se convocó a otras dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones educativas a sumarse a esta declaración y trabajar juntos para promover y profundizar el ejercicio de los derechos comunicacionales de las chicas y los chicos.

En el marco del nuevo paradigma comunicacional, donde los derechos del público y especialmente de las niñas, niños y adolescentes tienen un lugar fundamental, el propósito central de esta línea de trabajo fue dar a conocer tanto a chicos y chicas como a docentes, trabajadores/as del ámbito de la comunicación, estudiantes, trabajadores/as de organismos públicos, integrantes de organizaciones sociales y a la ciudadanía en general, los derechos comunicacionales que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) garantiza para la niñez y adolescencia. De este modo, se promovieron acciones para estimular la formación de los chicos y chicas como audiencias críticas y como productores/as de mensajes y se propiciaron instancias de capacitación para fomentar prácticas comunicacionales respetuosas de los derechos mencionados.

En este sentido, la Defensoría del Público realizó charlas, produjo materiales y puso en marcha talleres y procesos de capacitación en diversos espacios: escuelas, organizaciones sociales, radios y televisoras sin fines de lucro, públicas y comerciales, espacios sindicales, ámbitos académicos, etc.

Al respecto, en una carta dirigida a la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, y firmada por la representante en Argentina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Florence Bauer, el organismo internacional aseguró: “Celebramos el trabajo realizado para promover los



derechos de la niñez y la adolescencia. Valoramos profundamente la designación de 2015 como el “año por la inclusión de las niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales”, así como la promoción del “compromiso para garantizar la protección en el horario apto para todo público” en canales de televisión abierta y por cable, radios y productoras audiovisuales”. La carta continuó de esta manera: “Consideramos de suma importancia mantener el funcionamiento de la Red de Comunicación Democrática por la Niñez ‘Enredados’ que busca promover la reflexión conjunta entre los y las profesionales de la comunicación para alcanzar estrategias y compromisos efectivos que logren mejorar las coberturas sobre niñez y juventud y que promuevan la participación” describe Bauer en su escrito y agrega: “Estas iniciativas reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, como ciudadanos, y ofrecen canales de cumplimiento efectivo para muchos de los mandatos de la Convención que afectan a los medios de comunicación”.

**DE LAS ACTIVIDADES PARTICIPARON
9816 PERSONAS Y SU TRABAJO IMPLICÓ
2438 HORAS.**

A COMUNICADORES/AS

Desde la perspectiva pedagógica que guía el accionar de la Defensoría del Público, se llevaron adelante en todo el país diversas instancias de formación destinadas a periodistas y a profesionales de la comunicación de distintas áreas. Se promueven espacios de intercambio para difundir el conocimiento de los derechos comunicacionales de las audiencias de la radio y la televisión, especialmente de niños, niñas y adolescentes, y para impulsar abordajes respetuosos.

- En Olavarría, con la oficina Olavarría de la delegación AFSCA Saladillo.
- En San Miguel de Tucumán, con la Asociación de Prensa de Tucumán.
- En Aguilares, Tucumán, con la Asociación de Prensa de Tucumán.
- En Ciudad de Buenos Aires, junto con UNICEF y AFSCA, en Enredados, red de periodistas para promover los derechos comunicacionales de la niñez y la adolescencia.
- En Viedma, Río Negro, con la delegación AFSCA Río Negro y la Sede Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue.

- En Trenque Lauquen, Buenos Aires, con el Espacio Catalejo.
- En Ciudad de Buenos Aires, con Barricada TV.
- En Oberá, Misiones, con el Laboratorio Guayrá en el marco del Festival Oberá en Cortos.
- En San Marcos Sierras, Córdoba, con Radio Garabato.
- En Comodoro Rivadavia, con el Sindicato de Prensa local.
- En Esperanza, Santa Fe, con la Asociación de Prensa de Santa Fe y la Comisión Interinstitucional.
- En Santa Fe, con la Asociación de Prensa de Santa Fe.
- En General Rodríguez, Buenos Aires, con el Espacio Niñez y Territorio, integrado por las organizaciones sociales Ruca Hueney, Chicos del Sur, El Dari, El Transformador, Cable a Tierra y Los Hijos del Campo.
- En Resistencia, Chaco, con periodistas, trabajadores/as de áreas de niñez y adolescencia de la provincia de Chaco, y organizaciones sociales vinculadas con niñez y adolescencia.
- En General Alvear, Mendoza, en articulación con la Asesoría de Derechos Humanos del municipio local.
- En San Fernando del Valle de Catamarca, con la Red Enredados.

A DOCENTES

Las capacitaciones dirigidas a docentes de diversas modalidades y niveles se realizaron en articulación con otros organismos y organizaciones. En el marco del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela” del Ministerio de Educación de la Nación, la Defensoría del Público desarrolló el curso virtual “Derecho a la comunicación para chicos y chicas – Su abordaje en la escuela” destinado a docentes de nivel primario y secundario. El objetivo es promover la reflexión y brindar herramientas pedagógicas para trabajar en la escuela con los medios de comunicación audiovisual desde una perspectiva de derechos.

El objetivo del curso fue compartir con los y las docentes una perspectiva para impulsar desde la escuela la formación de niñas, niños y adolescentes que conozcan y ejerzan sus derechos comunicacionales. Para eso, se propuso reflexionar sobre los modos de representación de la niñez y la adolescencia en la radio y la televisión, brindó herramientas para la formación de chicos y chicas como audiencias críticas y realizadores de sus propias producciones audiovisuales.



» En Oberá, Misiones, con el Laboratorio Guayrá en el marco del Festival Oberá en Cortos.



» Actividad junto a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina (CLOC-VC).



» Con Roberto Baradel, en el VI Encuentro Provincial de Comunicación de SUTEBA.

Más de 500 docentes de nivel inicial, primario, secundario y superior fueron parte de las once aulas a cargo de un equipo de tutores y tutoras propuestos por la Defensoría y el Ministerio. El 30 de septiembre comenzó el recorrido que tuvo una duración de dos meses distribuidos en cuatro clases virtuales de frecuencia quincenal. Incluyó la lectura de los módulos y la bibliografía sugerida, la visualización de materiales audiovisuales y el intercambio en foros a partir de propuestas específicas y como espacios de consulta.

Además, el Ministerio de Educación, convocó a la Defensoría del Público a brindar capacitaciones sobre los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes en el marco de la presentación de la "Guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar".

También se desarrollaron procesos de formación docente con sindicatos vinculados a la educación. Con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el curso de formación presencial "Los medios en el aula desde una perspectiva de derechos" destinado a docentes de todas las modalidades y niveles. Por otro lado, la Defensoría brindó instancias de capacitación en el marco de los seminarios "Desafíos de la comunicación" y "Enseñar con la radio escolar comunitaria", organizados por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA).

Por otra parte, la Defensoría fue invitada a brindar diversas instancias de capacitación en el marco de los institutos de formación docente de todo el país:

- El 13 y 14 de marzo, en Rawson, Chubut, con los Ministerios de Educación nacional y provincial.
- El 13 de marzo, en Rosario, Santa Fe, con la Red de Carreras de Comunicación (RedCom).
- El 20 de marzo, en Comodoro Rivadavia, Chubut, con los Ministerios de Educación nacional y provincial.
- El 8 de abril comenzó en la Escuela N° 16 del Distrito Escolar 17 de la Ciudad de Buenos Aires el curso "Los medios en el aula desde una perspectiva de derechos" con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Los sucesivos encuentros tuvieron lugar el 22 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de junio; 1 de julio y 5 de agosto.
- El 16 y 17 de abril, en San Salvador de Jujuy, con el Ministerio de Educación.
- El 17 de abril se firmó un Convenio Marco con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
- El 27 de abril, en Olavarría, Buenos Aires, con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA).



La Defensoría del Público articuló tareas junto a representantes de SUTEBA.

- El 29 de abril se firmó un Convenio Marco de Cooperación para la realización conjunta de actividades de capacitación y promoción con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) en el marco del VI Encuentro Provincial de Comunicación de SUTEBA.
- El 7 de mayo, en Córdoba, con el Equipo Técnico Jurisdiccional del Centro de Actividades Juveniles (CAJ).
- El 7 y 8 de mayo, en San Fernando del Valle de Catamarca, con el Ministerio de Educación.
- El 1 de junio, en Tres Arroyos, Buenos Aires, con el Instituto Superior de Formación Docente N° 167.
- El 17 de junio, en La Plata, Buenos Aires, con SUTEBA.
- El 16 y 17 de junio, en Neuquén, con el Ministerio de Educación.
- El 7 de julio, en Chascomús, Buenos Aires, con SUTEBA.
- El 16 de julio, en Balcarce, Buenos Aires, con SUTEBA.
- El 18 de julio, en Oberá, Misiones, con la Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones (RERECOM).
- El 6 de agosto, en Rauch, Buenos Aires, con SUTEBA.
- El 11 de agosto, en Necochea, Buenos Aires, con SUTEBA.
- El 12 y 13 de agosto, en Río Gallegos, Santa Cruz, con el Ministerio de Educación.
- El 19 de agosto, en Berazategui, Buenos Aires, con Colectivo de a pie.
- El 24 y 25 de agosto, en Caleta Olivia, Santa Cruz, con el Ministerio de Educación.
- El 9 y 23 de septiembre, en Ciudad de Buenos Aires, con docentes primarios y secundarios nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
- El 3 de septiembre, en Córdoba, con docentes secundarios en articulación con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba.
- El 7 y 9 de septiembre, en Ciudad de Buenos Aires, con el Programa REC (Radio – Escuela – Educación).
- El 7 y 21 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con docentes primarios y secundarios nucleados a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
- El 1 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con docentes en articulación con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
- El 2 de octubre, en Zapala, Neuquén, con el Instituto de Formación Docente N° 13.



» Gabriel Lerner, ex titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (SENAF) expresó su apoyo a la declaración de 2015 “Año por la inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes en los Medios Audiovisuales”.



» El libro La comunicación no es cuento es un material elaborado por la Defensoría del Público destinado a los niños y niñas de todo el país.



» La Defensoría del Público declaró a 2015 “Año por la inclusión de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales”.

A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Desde la creación del organismo, pero especialmente a partir de la declaración de 2015 como “Año por la inclusión de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales”, la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público participó de encuentros convocados por organizaciones, organismos y sindicatos que reúnen a niñas, niños y adolescentes de distintos puntos del país. Son instancias donde la concepción de los derechos comunicacionales de niñas, niños y adolescentes dialogan con otros ejes temáticos propuestos por las instituciones convocantes:

- El 24 de febrero, en la Defensoría, con chicos y chicas de la EES N° 6 de Carlos Lemé, Escuela Rumania de Ciudad de Buenos Aires, Centro Manuel Belgrano de Régimen Cerrado y Escuela Creciendo Juntos de Moreno, Buenos Aires.
- El 25 de febrero, en Capilla del Monte, Córdoba, con la Cooperativa Viarava.
- El 26 de febrero, en Córdoba, con jóvenes del Espacio para la Memoria La Perla.
- El 27 de marzo, en Salta, con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA) y con jóvenes, docentes, organizaciones sociales y organismos públicos.
- El 15 de abril, con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina (CLOC – VC).
- El 5 y 6 de mayo, en Salta, con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia provincial y con la representación local del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI).
- El 10 de mayo, en Villa María, Córdoba, con la Red Mundial Juvenil y Vínculos en Red.
- El 15 de mayo, en Perico, Jujuy, con el Programa Nacional de Consejos Deliberantes Estudiantiles.
- El 20 de mayo, en San Juan, con la Agrupación La Juana.
- El 20 de mayo, con concejales y presidentes de Honorables Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires, en articulación con la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete de Ministros.
- El 29 de mayo, en Almirante Brown, Buenos Aires, con la Dirección de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires y SUTEBA Seccional Almirante Brown.
- El 2 y 3 de junio, en San Pedro, Buenos Aires, con la Dirección de Promoción de Derechos de la Provincia de Buenos Aires.
- El 8 de junio, en Pilar, Buenos Aires, con el Programa de Promoción de Derechos de niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires.

- El 15 de julio, en Exaltación de la Cruz, con ESS N° 6, la Subsecretaría de Juventud de la Nación y la Casa del Joven de Exaltación de la Cruz.
- El 17 de julio, en Oberá, Misiones, con el Laboratorio Guayrá en el marco del Festival Oberá en Cortos.
- El 19 de agosto, en Rosario, Santa Fe, con la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
- El 2 de septiembre, en San José, Entre Ríos, con estudiantes secundarios.
- El 4 de septiembre, en Las Higueras, Córdoba, con el Centro de Actividades Juveniles (CAJ) del IPEAYT Capitán Castagnari.
- El 5 de septiembre, con organizaciones campesinas indígenas que participan de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF).
- Del 23 al 25 de septiembre, en Chapadmalal, Buenos Aires con jóvenes que participaron de la Semana por los Derechos de la Juventud organizada por la Fundación SES.
- El 25 de septiembre, en Wilde, Buenos Aires, con la Escuela Media N° 2.
- El 29 de septiembre, en Río Ceballos, Córdoba, con estudiantes secundarios en articulación con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Cooperativa de Obras y Servicios local.
- El 30 de septiembre, en Zapala, Neuquén, con Namún Tú.
- El 7, 14 y 21 de octubre, en Zapala, Neuquén, con Namún Tú.
- El 6 de octubre, en Campana, Buenos Aires, con la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2.
- El 7 de octubre, en Bragado, Buenos Aires, con estudiantes secundarios en articulación con el programa Concejos Deliberantes Estudiantiles dependiente de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación.
- El 14 de octubre, en Resistencia, Chaco, con la Escuela Especial N° 11 Alberto Elazar.
- El 14 de octubre, en Córdoba, con el Colegio Adolfo Bioy Casares.
- El 15 de octubre, en Rosario, Santa Fe, con estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.
- El 16 de octubre, en Berazategui, Buenos Aires, con la Escuela de Educación Secundaria N° 28.
- El 20 de octubre, en Zapala, Neuquén, con el CPEM N° 36.
- El 31 de octubre, en Luyaba, Córdoba, con los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) de las escuelas IPEM 137 La Paz; IPEM 137 Luyaba; Escuela Normal de Villa Dolores; IPEM 368 Conlara; e IPEM Cura Brochero.



El 24 de marzo en la Plaza de Mayo los chicos pidieron por una televisión que reivindique la memoria, la verdad y la justicia.



Jornadas de comunicación democrática de niñez y adolescencia.



2015 fue el Año por la inclusión de las niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales. Así, la Defensoría del Público profundiza su trabajo por los derechos comunicacionales de chicas y chicos en todo el país.

FORMACIÓN ACADÉMICA EN COMUNICACIÓN

La Defensoría promueve la formación y el debate permanente sobre el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual y propicia la inclusión del derecho humano a la comunicación y los derechos de las audiencias en los planes de estudio y en el diseño curricular de institutos terciarios, universitarios y profesorado en comunicación.

En este sentido, el organismo participó de charlas, clases, seminarios y cursos de formación en el ámbito académico para abordar los derechos comunicacionales de niñas, niños y adolescentes y generar instancias de reflexión:

- El 30 de abril, en el Diploma en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
- El 7 de mayo, en la cátedra universitaria "Herramientas comunicacionales para la enseñanza" del Profesorado Universitario en Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
- El 12 de mayo, en el Centro de Estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
- El 18 de mayo, en el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata.
- El 21 de mayo, en la Cátedra Didáctica Especial y Residencia en Comunicación del Profesorado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
- El 13 de agosto, en la Pro Secretaría de Extensión de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la cátedra "Sistema Educativo: problemas y desafíos" del Profesorado Universitario en Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de la Información.
- El 15, 22 y 29 de agosto y 5 de septiembre, en Bernal, Buenos Aires, con la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
- El 11 de septiembre, con la Universidad Nacional de Tucumán.
- El 11 de septiembre, con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue.
- El 30 de septiembre, en Morón, Buenos Aires, con la Universidad de Morón.
- El 30 de septiembre, en Merlo, Buenos Aires, con el Instituto Superior de Formación Docente N° 29.



» Con Julián Axat y Analía Eliades en el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP.

JORNADA DE COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En articulación con UNICEF y AFSCA se desarrollan desde 2013 una serie de capacitaciones en distintos puntos del país dirigidas a periodistas y comunicadores/as. En estas jornadas se compartieron los criterios expresados en la guía “Por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia”, realizada durante el primer año de gestión, con el objetivo de brindar herramientas para llevar adelante la práctica periodística respetando los derechos de chicos y chicas.

Profundizando esa política pública, durante 2015 se conformó “Enredados- Red por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia”, un espacio de intercambio y colaboración para periodistas, comunicadores/as y trabajadores/as de medios de comunicación motivados para impulsar una cultura comunicacional que priorice a la niñez y la adolescencia desde una perspectiva de derechos.

Reunidos en Buenos Aires el 24 de junio, los participantes dieron a conocer una declaración de principios y pusieron en marcha el portal www.enredados.org.ar, con el apoyo de UNICEF Argentina, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Defensoría del Público.

El portal reúne estudios, manuales, leyes vigentes, orientaciones e investigaciones con el propósito de que sirvan como insumo para las coberturas de niñez y adolescencia y, en su construcción progresiva, agregará sugerencias y ejemplos de coberturas, guía de fuentes especializadas e iniciativas vinculadas con la temática.

Los participantes -que sesionaron en la Casa de la Patria Grande Néstor Kirchner- debatieron sobre los desafíos que afrontan en el tratamiento de los temas que involucran a niñas, niños y adolescentes, se informaron sobre las leyes vigentes e intercambiaron sobre numerosos aspectos, tales como el derecho a preservar la identidad e intimidad de chicas y chicos en situaciones conflictivas.

Al final de la sesión fue aprobada la siguiente declaración:

- *Periodistas, comunicadoras y comunicadores coinciden en adherir y proponer la inclusión creciente de la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación, para dar a conocer sus informaciones y opiniones, en los temas que les conciernen y según sus experiencias y nivel de desarrollo.*
- *Chicas y chicos conforman un tercio de nuestra población, pero vemos con preocupación que esa presencia no tiene reflejo suficiente en la comunicación a través de los*

medios. Tomamos nota de estudios e investigaciones, de orígenes diversos, según los cuales la niñez y la juventud están prácticamente invisibilizadas en las agendas noticiosas.

- *También que la mayoría abrumadora de las apariciones se vincula con hechos negativos, con lo extraño o con lo peligroso, lo que contribuye a que se forme un imaginario social de rechazo en especial hacia adolescentes y jóvenes, y a que las imágenes y relatos que se refieren a ellos no reflejen la diversidad y complejidad del conjunto.*
- *Asumimos que debemos incorporar y ampliar prácticas para respetar la intimidad de chicas y chicos y proteger su identidad cuando su conocimiento público puede causarles gran perjuicio.*

De esta manera, se concretaron diversos encuentros en diferentes lugares del país, como el 29 de abril, en Villa María, Córdoba, en articulación con el Municipio local; y el 28 de mayo, en Resistencia, Chaco, en el marco del Lanzamiento del Consejo Comunicacional de Niños, niñas y adolescentes de la Provincia del Chaco organizado por la Subsecretaría de Niñez de la provincia.



La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano junto a Eduardo Rinesi (ex Rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Florence Bauer (UNICEF) en la presentación de “Enredados - Red por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia”.

JÓVENES ORGANIZÁNDOSE

Se trató de un proceso de formación dirigido a jóvenes que se desarrolló en la provincia de Córdoba en articulación con el Espacio por la Memoria - Ex Centro Clandestino de Detención La Perla. Convocó a jóvenes de distintos puntos de la provincia participantes de centros de estudiantes, organizaciones sociales y políticas, radios escolares y comunitarias, entre otros, en un proceso de formación política que pone el rol de los medios y los derechos comunicacionales en el centro de la escena.

Esta convocatoria se sumó a las diversas instancias de diálogo que el Espacio para la Memoria La Perla sostiene con los participantes y diversas organizaciones juveniles y políticas; al extenso proceso de consulta que la Defensoría del Público lleva adelante desde su creación y, especialmente, a las siete Audiencias Públicas realizadas durante 2014. A través de este recorrido, se recibió también la demanda de mayores instancias de encuentro, formación y debate destinadas a jóvenes y referidas a los derechos a la comunicación, la participación social y la organización.

POR PRIMERA VEZ,
UN GRUPO DE ADOLESCENTES
QUE PARTICIPÓ DE LAS
EDICIONES ANTERIORES

FUERON LOS
COORDINADORES Y
COORDINADORAS
DE TALLERES

El proceso de Jóvenes Organizándose 2015 pretendió aportar nuevas miradas a las reflexiones acerca de los diversos modos de ejercicio de la ciudadanía y de participación juvenil y sobre las interpelaciones y representaciones que se construyen cotidianamente. El eje central de debate fueron los proyectos políticos juveniles y para eso fue necesario intercambiar sobre el rol social de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos y del Estado como partícipes centrales de esas discusiones.

Este año el encuentro estuvo compuesto de tres jornadas en el Ex Centro Clandestino de Detención y Espacio para la Memoria La Perla, en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba. Por primera vez, un grupo de adolescentes que participó de las ediciones anteriores fueron los coordinadores y co ordinadoras de talleres. Allí se reflexionó sobre las demandas y propuestas de las organizaciones y los procesos de institucionalización de esas demandas, sobre el vínculo entre las luchas sociales y el Estado, las experiencias acumuladas y los desafíos por venir, el lugar de la palabra pública y los medios de comunicación, entre otras.

LA COMUNICACIÓN DESDE ADENTRO

Esta línea de acción se propuso acompañar y fomentar experiencias comunicacionales que se desarrollan en contextos de encierro, promover el ejercicio del derecho humano a la comunicación en esos espacios y dar a conocer los derechos comunicacionales que garantiza la LSCA.

En ese sentido, trabajó con jóvenes en conflicto con la ley penal que se encuentran detenidos en centros de régimen cerrado y comunidades socio-educativas, con adultos en la misma situación y también en la formación de docentes, talleristas y operadores que acompañan los proyectos mencionados.

Se realizaron encuentros el 19 y 26 de junio; 3, 10 y 17 de julio, en la Ciudad de Buenos Aires, con el Centro de Régimen Cerrado Rocca; y el 20 de agosto, en Córdoba, con la Revista Tumbando Rejas y el Centro Educativo Complejo Esperanza.

LA DEFENSORÍA VA AL BARRIO

Esta línea de acción se propuso que grupos de niñas, niños y adolescentes que viven en distintos barrios de la Argentina participaran de un espacio de análisis y producción sobre los medios audiovisuales, que conocieran sus derechos comunicacionales y el rol de la Defensoría del Público.

El recorrido implicó detenerse en el modo en que los medios presentan las problemáticas, situaciones, personas y lu-

gares que forman parte de los barrios, y analizar las repercusiones que esas maneras de mostrar pueden tener en la vida cotidiana de los y las jóvenes. La propuesta apunta a trabajar en la formación de audiencias críticas y a que estos grupos produzcan un material audiovisual en y sobre sus barrios.

En el cierre del ciclo, en la sede del organismo, se recibió a chicas y chicos de trece provincias del país en el encuentro “La Defensoría va al barrio: miradas jóvenes en primera persona”, con el objetivo de compartir las reflexiones de los talleres en los que participaron y mostrar las producciones audiovisuales realizadas en ese marco. “La Defensoría va al barrio y va a todos lados: va a la escuela, a los sindicatos, va a las redacciones periodísticas, estamos en todos lados y éste es un valor muy alto porque en estos tres años cada vez nos invitan más”, dijo la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, en la apertura del encuentro. estuvieron presentes jóvenes y referentes del barrio Coronel Arias, de la localidad de Palpalá, Jujuy; del barrio San Ramón, ciudad de San José, Entre Ríos; del barrio Doctor Montaña, ubicado en la ciudad de Corrientes; del barrio La Antena, Zapala, Neuquén; del Barrio 2 de Abril de la ciudad de Salta; del barrio Don Alberto, de Resistencia, Chaco; del barrio Guadalupe, de la capital formoseña; del barrio ATE, de la ciudad de Tucumán; del barrio Aeroferro, situado en la capital de San Luis; del barrio La Feria, de Dean Funes, Córdoba; de los barrios Malvinas y Nahuel Hue, de Bariloche, Río Negro; de los barrios Los Jazmines y El Bloque, de Maipú, Mendoza. Del proceso participaron también chicos y chicas del Barrio Comercio, ubicado en Puerto Madryn, Chubut.

El encuentro tuvo dos instancias: un taller de presentación de las organizaciones sociales y comunitarias y de intercambio de esta experiencia de participación, y una presentación pública de las producciones. En ambos momentos, los jóvenes que participaron de los talleres y los referentes que coordinaron los procesos dieron cuenta de las consecuencias que padecen en la vida cotidiana por el modo discriminatorio y estigmatizante en que muchas veces los medios audiovisuales representan a sus barrios y a los chicos y chicas que viven en ellos. “No le crean a la radio y a la tele cuando quieren horadar nuestra autoestima”, dijo la Defensora del Público al escuchar los testimonios de los chicos y las chicas, y reafirmó el compromiso del organismo para amplificar sus demandas y sus propuestas y llevarlas ante los medios de comunicación audiovisual.

“La Defensoría va a al barrio” fue una de las líneas de trabajo destinada a la niñez y la juventud y que se enmarcó en el Año por la inclusión de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales. Durante 2015, jóvenes de trece ba-



» En el cierre de la línea de acción “La Defensoría va al barrio”, con adolescentes de trece organizaciones de distintas provincias del país.



» Capacitación en la localidad de Ezeiza junto a niños, niñas y adolescentes.

rrios de nuestro país conocieron sus derechos comunicacionales, analizaron el modo en que los medios los y las muestran y produjeron sus propias representaciones audiovisuales. El resultado de este trabajo fueron trece producciones que dieron cuenta de otros modos de contar los barrios y la vida de las y los jóvenes en ellos, diferentes a los que construyen usualmente la radio y la televisión masivas.

Los referentes locales de cada espacio, con el acompañamiento constante del equipo de Capacitación de la Defensoría, realizaron los encuentros en todo el país, con el siguiente cronograma:

- El 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de junio, en San Salvador de Jujuy, con el Centro Vecinal Coronel Arias.
- El 3, 10, 17, 21, 24 y 31 de julio, en Corrientes, con la Asociación Civil Espacio Social.
- El 10, 11, 13, 16, 17 y 22 de julio; y 15 de agosto, en Salta, con el Comedor Comunitario Niño Jesús de Praga.
- El 10, 17, 24 y 27 de julio; y 3 y 14 agosto, en San José, Entre Ríos, con la Asociación Civil Impulsar – Barrio San Ramón.
- El 13 de julio, 2 y 9 de agosto, en San Luis, con La Casita Cultural.
- El 16 de julio, en Ciudad de Buenos Aires, con la Escuela N° 8.
- El 7, 12, 19 y 26 de agosto; 2 y 9 de septiembre, en Zapala, Neuquén, con la Asociación Civil Namun Tu.
- El 7, 8, 14, 15 y 21 de agosto y 4 de septiembre, en San Miguel de Tucumán, con Mate Cocido.
- El 13, 21 y 27 de agosto y 3 de septiembre, en Resistencia, Chaco, con la Fundación Gastón.
- El 2, 16, 25 y 30 de septiembre y 7 de octubre, en San Luis con La Casita Cultural.
- El 2 y 9 de septiembre, en Zapala, Neuquén, con la Asociación Civil Namun Tu.
- El 4 de septiembre, en San Miguel de Tucumán, con Mate Cocido.
- El 3, 15 y 24 de septiembre, en Resistencia, Chaco, con la Fundación Gastón.
- El 4, 11, 18, 25 de septiembre, en Formosa, con la Fundación Abriendo Zurcos y Ciprocom.
- El 30 de septiembre, en San Carlos de Bariloche, Río Negro, con Grupo Encuentro.
- El 7 de octubre, en San Luis, con La Casita Cultural.
- El 2 y 9 de octubre, en Formosa, con la Fundación Abriendo Zurcos y Ciprocom.
- El 7, 14, 21, de octubre, en San Carlos de Bariloche, Río Negro, con Grupo Encuentro.
- El 22, 26, 29 de octubre, en Maipú, Mendoza, con Kairós.
- El 24 de octubre, en Deán Funes, Córdoba, con Radio Pueblo FM 103.3.



La Defensoría va a la escuela: Parlamento juvenil del Mercosur en Adrogué.

LA DEFENSORÍA VA A LA ESCUELA

En esta línea de trabajo se promovió que grupos de niñas, niños y adolescentes que asisten a distintas instituciones primarias y secundarias de la Argentina participen de un espacio de análisis sobre su relación con los medios audiovisuales, sobre sus derechos comunicacionales y que conozcan el rol de la Defensoría del Público.

Se propuso, además, incentivar la mirada crítica y promover la formación ciudadana de los chicos y las chicas, trabajando sobre sus derechos comunicacionales, a través de la realización de un taller a cargo de integrantes del equipo de Capacitación de la Defensoría del Público.

Con el objetivo de que esta actividad no fuera un hecho aislado y pudiera redundar en aprendizajes significativos acerca de los derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes, la Defensoría invitó a las y los docentes a compartir algunas propuestas pedagógicas previamente con sus estudiantes.

Así se concretaron los siguientes encuentros:

- El 11 de mayo, en Olivos, Buenos Aires, con el Colegio Learning Proyecto Integral.
- El 11 de mayo, en Oberá, Misiones, con docentes que participan del proyecto Cine Jóven, Oberá en cortos.
- El 12, 20 y 29 de mayo; 5 y 8 de junio, en Oberá, Misiones, en articulación con Cine Ojo, Oberá en cortos.
- El 20 de mayo, en San Juan, con Agrupación La Juana.
- El 22 de mayo, en Munro, Buenos Aires, con el Colegio San Antonio.
- El 4 de junio, en Avellaneda, Buenos Aires, con el Instituto Padre Berisso.
- El 12 de junio, en Olavarría, Buenos Aires, con las Escuelas Primarias N° 57 y N° 6 y el Centro Educativo Complementario 801.
- El 22 de junio, en Ciudad de Buenos Aires, con la Escuela de Educación Secundaria N° 28 – Berazategui.
- El 22 de junio, en Trenque Lauquen, Buenos Aires, con la Escuela Secundaria N° 8 y el Espacio Catalejo.
- El 26 de junio, en Moreno, Buenos Aires, con la Escuela Creciendo Juntos.
- El 29 de junio, en San Fernando del Valle de Catamarca con la Escuela Clara J. Armstrong y el Colegio Pío Dido-ménico.
- El 30 de junio, en Salta con la Escuela N° 4032 Leopoldo Lugones.
- El 10 de julio, en Palpalá, Jujuy, con la Escuela Secundaria N° 53.
- El 16 de julio, en Oberá, Misiones, con el Laboratorio Guayrá en el marco del Festival Oberá en Cortos.
- El 17 de julio, en San Fernando, Buenos Aires, con la Escuela N° 32.
- El 6 de agosto, en Mar del Plata, Buenos Aires, con la Escuela Básica N° 45.
- El 7 de agosto, en Mar del Plata, Buenos Aires, con la Escuela Municipal N° 206.
- El 1 de septiembre, en Santa Rosa, La Pampa, con docentes primarios y secundarios en articulación con el Ministerio de Educación provincial.
- El 4 de septiembre, en Zapala, Neuquén, con la Escuela Primaria N° 3.
- El 16 de septiembre, en Resistencia, Chaco, con la Escuela Primaria 108 “Manuela García de Marqués” y con la Escuela Secundaria “Cacica Dominga”.
- El 28 de septiembre, en Santa Rosa, La Pampa, con la Escuela Hogar, la Escuela Juana Paula Manso y la Escuela Zona Norte.
- El 29 de septiembre, en General Pico, La Pampa, con la Escuela Primaria N° 233, la Escuela Juana Azurduy y la Escuela Silvia Machicote.
- El 6 y 7 de octubre, en 25 de mayo, San Juan, con la Escuela Secundaria Segundino Navarro.
- El 6 de octubre, en San Juan, con la Escuela Primaria 9 de julio.
- El 7 de octubre, en Moreno, Buenos Aires, con la Escuela Secundaria N° 36 Barrio Bongiovani.
- El 7 de octubre, en Salta, con docentes de nivel primario en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta.
- El 8 de octubre, en Río Gallegos, Santa Cruz, con el Colegio Provincial de Educación Secundario N° 19.
- El 9 de octubre, en Puerto Santa Cruz, Santa Cruz, con el Colegio Secundario Provincial N° 8 “Naciones Unidas”.
- El 14 de octubre, en Bowen, Mendoza, con la Escuela Secundaria José Hernández N° 4099.
- El 14 de octubre, en General Alvear, Mendoza, con la Escuela Primaria N° 1-537 Juan XXIII, el Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos 3-068 Paraje La Marzolina y el Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos 3-018 José Ingenieros.
- El 15 de octubre, en General Alvear, Mendoza, con la Escuela de Comercio N° 4-144 12 de agosto y la Escuela Primaria N° 1-319 Alas Argentinas.
- El 15 de octubre, en Zapala, Neuquén, con el CPEM N° 61.
- El 28 de octubre, en Rauch, Buenos Aires, con el Centro Educativo Complementario N° 801.

RADIOS ESCOLARES

A la luz del nuevo paradigma comunicacional garantizado por la LSCA, en donde las radios escolares y la voz de los más jóvenes tuvieron un lugar fundamental, la Defensoría del Público trabaja para potenciar el surgimiento y el fortalecimiento de espacios radiofónicos escolares.

En este sentido realizó capacitaciones destinadas a radios escolares, entre las que estuvieron las emisoras de los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), como así también instancias de formación destinadas a otras propuestas que utilizan la radio como herramienta pedagógica e instancia de ejercicio del derecho a la comunicación de chicos y chicas.

Los contenidos de las capacitaciones fueron: los elementos del lenguaje radiofónico, géneros y formatos, edición, operación, así como también los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes garantizados por la LSCA.

Estas fueron algunas de las actividades realizadas:

- El 1 y 2 de junio, en Tres Arroyos, Buenos Aires, con la Escuela Primaria 7.
- El 18 de junio y 6 de julio, en Monte Grande, Buenos Aires, con la Escuela Media 7.
- El 24 y 25 de junio, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el Colegio Justo José de Urquiza.
- El 7 de julio, en Canning, Buenos Aires, con la Escuela Media 25.
- El 4 de agosto, en Santa Fe, con la Escuela 8.
- El 3 y 4 de septiembre, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el Colegio Justo José de Urquiza.
- El 9 de octubre, en Puerto Santa Cruz, Santa Cruz, con la Radio del CABI del Colegio Secundario Provincial 8.



La Defensoría en la inauguración de una radio escolar en la localidad de Moreno.

UNA TARDE CUALQUIERA

Desde el año 2014 la Defensoría del Público realiza una columna periodística en el programa Una Tarde Cualquiera, emitido de lunes a viernes por la Televisión Pública. El objetivo es dar a conocer las tareas realizadas por el organismo, especialmente, aquellas que tienen como principales protagonistas y destinatarios a los y las jóvenes.

Los días y temas de las columnas fueron los siguientes:

- 18 de marzo: actividades realizadas en el marco del “Año por la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales”.
- 25 de marzo: actividad de promoción en Plaza de Mayo en el marco del 24 de marzo – Día Nacional de la Memoria.
- 1 de abril: participación del organismo en la línea de fortalecimiento y capacitación “Radios comunitarias Rurales. Comunicarnos fortalece”.
- 8 de abril: concurso de video minuto “Zoom a los derechos”.
- 15 de abril: recomendaciones para respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes en coberturas periodísticas.
- 22 de abril: convenio firmado por el organismo con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y sus implicancias.
- 6 de mayo: recomendaciones que se deben tener en cuenta al abordar casos de extravío y abandono del domicilio de niñas, niños y adolescentes en los servicios de comunicación audiovisual.
- 13 de mayo: Guía para el tratamiento responsable en la radio y la televisión de los hechos de violencia institucional.
- 20 de mayo: solicitada “Por una televisión sin minuto a minuto” a cargo de trabajadores de distintos medios audiovisuales.
- 4 de junio: participación del organismo en la marcha “Ni una menos”, la violencia mediática y los monitoreos desarrollados por la Defensoría.
- 10 de junio: creación del Consejo de Derechos Comunicacionales de Niñez y Adolescencia en Chaco.
- 18 de junio: creación de Enredados. Red por la Comunicación Democrática de niñez y adolescencia.
- 1 de julio: primera Audiencia Pública realizada en Paraná, Entre Ríos.
- 8 de julio: la experiencia comunicacional del Centro de Régimen Cerrado Tumbando Rejas de Córdoba.
- 22 de julio: cuidado y atención que deben tener los medios audiovisuales en el tratamiento de noticias relacionadas al suicidio.



En el programa Una tarde cualquiera de la TV Pública, la Defensoría tuvo su lugar.



El 4 de junio trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Público participaron de la marcha “Ni una menos”.



En el marco del Día Nacional de la Memoria, los jóvenes se acercaron a la Defensoría Móvil a expresarse.

CARTAS DE INTENCIÓN / ADHESIÓN

En el marco del “Año por la inclusión de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales” se firmaron Cartas de Intención y Adhesión con diversos organismos, instituciones, municipios, gobernaciones y áreas especializadas en niñez y adolescencia de diversos espacios del país que se sumaron a la propuesta de la Defensoría:

- Ministerio de Educación de la Nación.
- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Ministerio de Desarrollo Social.
- Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación.
- Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI).
- Ministerio de Educación de Salta.
- Secretaría de Niñez, Familia y discapacidad de Entre Ríos.
- Consejo Municipal de Niñez y Juventud de Río Cuarto, Córdoba.
- Foro de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF).
- Programa REC Red Escuela Comunicación dependiente de la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
- Canal 12 TV Pública Trenque Lauquen, Buenos Aires.
- Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
- Asociación Mundial de Radio Comunitarias (AMARC) – Argentina.
- Red Colmena; Escuela Popular de Medios Comunitarios, Ciudad de Buenos Aires.
- FM Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires.
- Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA).
- Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
- Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MoCaSE-VC).
- Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA).
- Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), provincia de Buenos Aires.
- Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS).
- Espacio para la Memoria y la promoción de Derechos Humanos La Perla, Córdoba.
- Las otras voces.
- Fundación Abrojos, Tucumán.
- Fundación Wayruro Comunicación Popular, Jujuy.
- Fundación SES – Sustentabilidad, Educación, Solidaridad
- Red argentina por los niños y niñas (Redonda).
- Fundación Uniendo Caminos, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
- Comunidad Educativa Creciendo Juntos, Moreno, Buenos Aires.
- Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (REDCOM).
- Universidad Nacional de Lanús.
- Programa Universitario de Comunicación Audiovisual de la República Argentina (PUCARÁ).
- Trama Audiovisual.
- Latinlab.
- Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- Defensoría del Pueblo, Bariloche, Río Negro.
- Municipalidad de Río Gallegos, Santa Cruz.
- Defensoría de niñas, niños y adolescentes, Defensoría del Pueblo, Santa Fe.
- Consejo escolar de Salto, Buenos Aires.
- Área de niñez, adolescencia y fortalecimiento familiar, Departamento de Promoción Humana y Social, Colonia Caroya, Córdoba.
- Unidad de Coordinación de Programas, Dirección General de Cultura y Educación, Buenos Aires.
- Municipalidad de Esperanza, Santa Fe.
- Subsecretaría de niñez, adolescencia y familia, Ministerio de Desarrollo Social, Chaco.
- Municipalidad de Puerto Eva Perón, Chaco.
- Programa Educación y Memoria, Ministerio de Educación, Ciudad de Buenos Aires.
- Coordinadora de Organizaciones de Trabajadores Rurales de Misiones (COTRUM).
- Laboratorio Guayrá, Misiones.
- Noticiero comunitario “Estamos todos bien” - articulación entre Taller de Comunicación popular “Espacio catalejo” y Escuela secundaria N°8 Trenque Lauquen, Buenos Aires.
- Murga del Monte, Misiones.
- Ludoteca Ya-Ma-Hé, Garuhapé, Misiones.
- Asociación Civil Juan XXIII, Corrientes.
- Asociación Civil Crecer Juntos, Tucumán.
- Centro de promoción Comunitaria “Pascual Luzzi”, Boulogne, Buenos Aires.
- Federación de entidades no gubernamentales de niñez y adolescencia, Mendoza.
- Fundación Gastón (Víctimas de la violencia), Resistencia, Chaco.
- Asociación Amanecer Grupo Casa Taller, Ciudad de Buenos Aires.

- Asociación Civil Conexión Bariloche, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
- Wall Kintun TV, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
- Comunidad Mapuche Newen Taiñ Mapu - FM Eco, Allen, Río Negro.
- Escuela Secundaria de Formación Agraria (ESFA), Viedma, Río Negro.
- Escuela de Educación Especial N°11 "Profesor Alberto Elazar", Resistencia, Chaco.
- Radio Escolar Comunitaria "El Refugio", Viedma, Río Negro.
- FM Universo 94.3, Corrientes.
- Radio Revés, Escuela de Ciencias de la Información – Universidad Nacional de Córdoba.
- Radio Universidad FM 90.1 – Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría de la Universidad Nacional del Centro.
- Gremio de docentes e investigadores universitarios de Córdoba (ADIUC).
- Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Córdoba.
- Asociación de Educadores Provinciales, Jujuy.

Entre otros, asumieron los siguientes compromisos:

- *Establecer, de acuerdo a las pertinencias temáticas, las características y posibilidades, líneas de trabajo conjuntas para profundizar el análisis, el intercambio, la formación y la generación de propuestas en torno a los temas señalados en la "Declaración sobre la juventud y los medios audiovisuales".*
- *Participar activamente en las líneas de trabajo vinculadas a la capacitación, la investigación y la promoción de derechos que se desarrollarán en las distintas provincias del país convocando a diversos actores y sectores sociales (niños, niñas y adolescentes; docentes y referentes adultos/as; comunicadores/as, periodistas y estudiantes).*
- *Contribuir a la difusión y promoción de los fundamentos y de las propuestas que se enmarcan en las acciones del "Año por la inclusión de niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales".*



En la sede de la Defensoría se presentó la agenda de trabajo para 2015 sobre los derechos comunicacionales de niñas, niños y adolescentes.

Defensoría del Público



EL RECLAMO DE LAS AUDIENCIAS

APTO PARA TODO PÚBLICO

Durante 2015 la Defensoría del Público recibió nuevos reclamos sobre el cumplimiento del horario apto para todo público (ATP) en la emisión de programación y avances en diversas señales de televisión.

En esta línea, se recibieron dos reclamos vinculados a la programación de la señal "Investigation Discovery". En el análisis de los planteos pudo identificarse que algunas propuestas de la señal resultaban inconvenientes en el horario emitido debido a la exposición de imágenes y relatos de extrema violencia sobre homicidios verídicos de personas o situaciones de violencias contra las mujeres.

Ante la diversidad de temáticas objetadas en los reclamos, que además se vieron reflejadas en toda la programación de la señal, se mantuvieron varios encuentros con las abogadas representantes de Discovery Latin America LLC y se transmitió la preocupación de las audiencias en relación al cumplimiento de las pautas de protección de niñas, niños y adolescentes durante el apto para todo público.

Además, se concretó una reunión de trabajo con los equipos que desarrollan su actividad en la Argentina en la realización de la señal "Investigation Discovery" y otras señales pertenecientes a Discovery Latin America LLC.

Allí se focalizó en los derechos de las audiencias, en particular de niños, niñas y adolescentes, en consonancia con la LSCA. En el marco de ese diálogo se abordaron los lineamientos que la normativa prevé en la materia y las pautas sobre tratamiento igualitario y no estereotipado ni discriminatorio.

Por otra parte, la Defensoría continuó recibiendo presentaciones vinculadas a la programación y avances de programación que emiten diversas señales durante el horario apto

LA DEFENSORÍA CONTINUÓ RECIBIENDO PRESENTACIONES VINCULADAS A LA PROGRAMACIÓN Y AVANCES DE PROGRAMACIÓN QUE EMITEN DIVERSAS SEÑALES DURANTE EL HORARIO APTO PARA TODO PÚBLICO

para todo público (por ejemplo, se tramitan planteos sobre señales representadas por Fox, como Cinecanal y Fox 1, y también sobre los programas de formato *reality* emitidos por MTV). Ello ratifica la importancia de fortalecer el diálogo con los equipos de trabajo de las diferentes señales encargados de la realización de las producciones audiovisuales en Argentina y/o de su comercialización, para que den cumplimiento a las disposiciones en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes, que les alcanzan tanto como a los licenciarios de televisión.

Así se concretaron en MTV y Fox, donde se abordó la trascendencia de cumplir con el articulado de la LSCA, la generación de nuevas formas de producción que contemplen el nuevo paradigma y las inquietudes y reclamos de las audiencias, comprendidas como sujetos de derecho.

Al mismo tiempo, la Defensoría recibió una serie de reclamos vinculados a dos emisiones de C5N en las que se transmitieron las imágenes tomadas por cámaras de seguridad de un homicidio y el posterior suicidio del autor del hecho ocurrido en la provincia de Corrientes. El análisis realizado por el organismo en virtud de los reclamos del público identificó graves afectaciones a los derechos de las audiencias, y en particular de niñas, niños y adolescentes en relación con el horario de emisión del programa. En este sentido, determinó que las imágenes fueron reproducidas 46 veces entre las dos emisiones objetadas desvirtuando así la utilización de recursos de advertencia, los que no fueron concebidos para amparar exhibiciones morbosas.

El material exhibido, además, no resultó blureado ni alterado para moderar la violencia que las imágenes representaron, y por el contrario, se potenció el efecto trágico del hecho.

Del mismo modo, el homicidio de una periodista y un camarógrafo en el Estado de Virginia en los Estados Unidos, y la reproducción de dos videos que registraban los hechos en las señales A24 y en Noticiero Trece de Canal 13, fue analizado por la Defensoría en función de la preocupación que manifestó el público. Nuevamente en al abordaje de estos hechos se verificó el despliegue de una espectacularización hiperrealista de la muerte, sostenida en la sobreexposición y

en la narración pormenorizada del acto de violencia que generó el desenlace fatal.

Además de canalizar estos reclamos, durante las jornadas en que se pusieron al aire estos registros, la Defensoría difundió recomendaciones específicas sobre las pautas de protección de niños, niñas y adolescentes que deben cumplirse, también, en las emisiones de noticias. En tal sentido se alertó que la exhibición de secuencias reales de violencia explícita durante el horario apto para todo público, propone un sentido espectacularizante de la noticia y repone la violencia que representa. Así, hace caso omiso a la obligación de los servicios de comunicación audiovisual de respetar a niños, niñas y adolescentes, audiencias potenciales de noticieros y señales de noticias.

En estos casos los reclamos se han canalizado notificando tanto a las señales y canales aludidos en las presentaciones, y generando espacios de capacitación, reflexión y concientización de la legislación vigente y la comunicación comprendida como derecho humano.

Por otra parte se convocó a mesas de debate sobre las coberturas responsables de hechos policiales, de las que participaron periodistas de distintos servicios de comunicación audiovisual. Luego de sistematizar los aportes realizados, se realizó una *Guía para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales*.



Luciano Debanne, miembro del equipo de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, en una actividad con niñas, niños y adolescentes.

DERECHO A LA INTIMIDAD, A LA IMAGEN Y A LA VIDA PRIVADA

Ante las denuncias y reclamos recibidos debido a las coberturas mediáticas vinculadas a la filiación e identidad de un niño de dos años de edad en el marco de la separación conyugal de dos personas del espectáculo, la Defensoría propició diversas acciones para concientizar a comunicadores y comunicadoras respecto de los derechos a la dignidad, intimidad e imagen del niño.

Las audiencias objetaron los programas “El diario de Mariana” y “Este es el Show”, emitidos por Canal 13, e “Intrusos”, de América TV. En las emisiones analizadas se constataron vulneraciones al derecho a la intimidad y privacidad del niño, como también afectaciones a los derechos de las audiencias en relación al uso de violencia verbal y expresiones insultantes incompatibles con el horario de emisión de los programas. A raíz de ello, se concretaron diversos encuentros con las personas responsables de la producción de los programas objetados, y fruto del diálogo se desprendieron una serie de acciones tendientes a reparar los derechos vulnerados.

“El diario de Mariana” llevó adelante una reparación a través de un abordaje de la temática “Los derechos del niño y su trato en los medios”. Durante el programa se analizaron diferentes pautas en relación al rol que deberían adoptar los/as comunicadoras/es al tratar temas vinculados a la niñez y adolescencia, para preservar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, contó con especialistas en la materia, quienes profundizaron los diversos modos de protección en los medios audiovisuales.

Por otro lado, a modo de reflexión, desde “Este es el Show” se realizó un intercambio entre los/as panelistas del programa en relación a la importancia de respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales. Además, se hizo referencia al material “Por una Comunicación Democrática de la Niñez y la Adolescencia”, elaborado por la Defensoría del Público, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y UNICEF.

Por último, en relación a “Intrusos”, la Defensoría mantuvo una reunión con la abogada representante de América TV y el tema se abordó extensamente en un encuentro con distintos productores ejecutivos y productores y productoras del canal que se realizó, tal como estaba previsto, al día siguiente de que estos hechos se dieron a conocer.

Además, cuando se recibieron los reclamos de las audiencias y se analizaron las coberturas que se estaban realizando, el 8 de abril de 2015 la Defensoría alertó en un comunicado sobre el *avasallamiento de los derechos de la niñez* formu-

lando recomendaciones a los medios audiovisuales para que no se vulneraran los derechos del niño en la cobertura de la información que su padre había decidido difundir:

“Ante las denuncias y reclamos recibidos durante las últimas veinticuatro horas y debido a la significativa amplificación de coberturas mediáticas que aluden a la filiación e identidad de un niño de dos años de edad en el marco de la separación conyugal de dos personas del espectáculo, la Defensoría del Público recuerda a quienes trabajan en los medios de comunicación audiovisual la importancia de ser respetuosos de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este respeto incluye la preservación de su identidad así como la necesidad de evitar cualquier tipo de alusión que pueda resultar lesiva de su intimidad e integridad.

Es importante reconocer que en la cobertura de hechos que involucran a niñas y niños, debe primar siempre el respeto por su “interés superior”, lo que implica privilegiarlo para que sus derechos no se vean vulnerados y puedan ser realmente ejercidos. El hecho de que dos personas decidan divulgar su vida privada no habilita el desconocimiento de ese interés superior. Los derechos de niñas, niños y adolescentes no pueden ni deben ser avasallados en nombre de una primicia, de un escándalo o de la búsqueda del rating.



» La Defensoría propició diversas acciones para concientizar a comunicadores y comunicadoras respecto de los derechos a la dignidad, intimidad e imagen del niño.

A LA HORA DE ENTREVISTAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SE DEBE RESPETAR SU DERECHO A SER OÍDO Y A QUE SU OPINIÓN SEA TENIDA EN CUENTA

Por todo ello, esta Defensoría, como parte del diálogo que cotidianamente establece con quienes trabajan en la comunicación audiovisual, recomienda cesar la vulneración de derechos y la necesaria y urgente reflexión crítica para realizar un trabajo responsable que evite producir daños irreparables.

El avasallamiento de los derechos de la niñez y la adolescencia es, además de contrario a la Convención Internacional de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional, lesivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061)".

El organismo recibió también reclamos por el abordaje de un caso que involucraba tanto el derecho a la intimidad de una niña víctima de abuso sexual como la pautas de protección de niñas, niños y adolescentes en relación al horario de emisión de los programas objetados.

Los reclamos cuestionaron "Argentina Despierta" y "26 Directo", ambos de Canal 26, por la reproducción de una pieza audiovisual en la que una niña relata situaciones de violencia sexual que habría sufrido. El material abunda en deta-

lles truculentos y escabrosos sobre una situación de abuso, sumamente inapropiados para ser visualizados por niñas y niños, quienes constituyen potencial audiencia en el horario en que estos programas salen al aire.

Además, la emisión de la pieza audiovisual y los abordajes brindados al caso vulneraron la intimidad y vida privada de la niña involucrada en tanto se brindaron datos que permitían identificarla indirectamente, en contraposición a la normativa vigente en materia de protección de la niñez (Ley 26.522, Ley 26.061 y Convención sobre los Derechos del Niño). La Defensoría se reunió con un representante de la señal y con el productor ejecutivo de "Argentina Despierta" a raíz de estas denuncias.

Por otra parte, se recibieron reclamos por la cobertura de situaciones de casos de extravío o abandono de domicilio por parte de niños, niñas u adolescentes. En esas oportunidades se difundieron una serie de recomendaciones para fortalecer el servicio social que los medios audiovisuales pueden cumplir en estos casos y al mismo tiempo recordar las obligaciones de respeto y protección del principio de interés superior del niño/as en todas las coberturas durante la búsqueda y una vez hallado el niño/a.

El caso de una niña que fue buscada durante varias horas y luego hallada muerta tras haberse suicidado, generó preocupación en las audiencias que así lo hicieron saber al organismo. Por ello la Defensoría elaboró recomendaciones específicas articulando los derechos de la niñez y la adolescencia con las pautas para una cobertura responsable de los suicidios, que evitara una mediatización sensacionalista y espectacularizante de lo que había sucedido y respetara los derechos de la víctima y su entorno.



A continuación se transcribe el documento que fue elaborado a raíz de un reclamo recibido y motivó una serie de reuniones con el Registro Nacional de Menores Extraviados, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

1/ Previo a la difusión de imágenes o datos sobre niñas, niños o adolescentes, además de las familias o interesados, es recomendable recurrir a las instituciones públicas competentes en la materia, para corroborar si se está investigando el caso y cuál es el contexto en el que se produjo el extravío y/o abandono del domicilio, debido a que estas problemáticas suelen darse en contextos de violencia familiar.

El Registro Nacional de Información de personas menores extraviadas, los organismos zonales dependientes de los municipios, el juzgado interviniente y/o el Asesor de Menores pueden brindar esa información.

2/ El desconocimiento del conflicto familiar subyacente en el tratamiento informativo o la cobertura mediática puede revictimizar al niño, niña o adolescente, afectando su derecho a la reserva y al respeto de su intimidad. E incluso, puede redundar en la reproducción de las condiciones que generaron el abandono del domicilio y/o el extravío del niño, niña o adolescente.

3/ Tener presente que el niño, niña o adolescente, desde el momento que abandona su domicilio o se encuentra extraviado ya es víctima. Por eso se recomienda no tender a invertir esta situación, victimizando a la familia y/o condenando a niñas, niños y adolescentes, simplificando un fenómeno complejo que obedece a múltiples causales o reduciendo el origen del problema a una supuesta "rebeldía", por ejemplo.

4/ La única fuente no debe ser la familiar o el denunciante, debido a que en muchos casos los buscadores pueden ser los mismos victimarios y/o responsables de las condiciones que generaron el abandono del domicilio del niño, niña o adolescente.

5/ Previo a difundir imágenes o datos del niño, niña o adolescente, se recomienda consultar y pedir autorización a los organismos competentes intervinientes, ya que en algunos casos la difusión de imágenes puede generar más riesgos para las niñas y niños que los posibles resultados a obtener.

6/ A la hora de entrevistar a niñas, niños y adolescentes, se debe respetar su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, centrar el tratamiento en un abordaje que priorice la información de interés socialmente relevante y resulta recomendable difundir el 142 o el

0800 – 122 – 2424 del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.

7/ Tener en cuenta que el mayor porcentaje de personas extraviadas o que abandonan su domicilio son adolescentes, por lo cual se trata de un grupo especialmente vulnerable a esta problemática y, por lo tanto, los SCA deben extremar las medidas de precaución y cuidado al abordar estos casos.

8/ Es importante poder centrar la labor informativa en la prevención y el tratamiento respetuoso de este tipo de casos, sin exponer la intimidad de niñas, niños y adolescentes involucrados, ya que pueden subyacer incluso situaciones de abuso o violencia familiar, que más allá de su difusión en los medios de comunicación audiovisual, requieren un tratamiento adecuado por parte de profesionales especializados y las agencias públicas competentes en la materia.

9/ De manera particular, una vez hallado el niño, niña o adolescente, es decir, una vez que ha finalizado la búsqueda, debe primar el estricto respeto del interés superior que exige la protección de su derecho a la imagen, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar, en tanto el servicio social brindado por los medios audiovisuales al difundir su imagen durante la búsqueda, ha cumplido su objetivo central.

10/ En la cobertura de hechos que involucran a niñas, niños o adolescentes, debe primar siempre el respeto por su "interés superior", lo que implica privilegiarlo para que sus derechos no se vean vulnerados y puedan ser realmente ejercidos en cada una de las etapas de las coberturas periodísticas.

DERECHO A PARTICIPAR, A SER OÍDO Y A EXPRESAR SUS OPINIONES SOBRE TODOS LOS TEMAS

La Defensoría recibió una serie de denuncias y consultas del público a raíz del tratamiento que recibieron en el programa "Periodismo para Todos" de Canal 13 las opiniones políticas expresadas por un niño de 11 años.

En primer lugar, se convocó a organismos y entidades que trabajan en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para escuchar sus opiniones. Entre ellos participaron el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) y el Comi-

té Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN).

Los hechos denunciados tuvieron profundas consecuencias en la vida cotidiana del niño y en los ámbitos donde desarrolla su vida social, entre ellos, la escuela. Allí se generaron situaciones difíciles de abordar para el equipo docente y directivo. Por ello, la Dirección de la escuela convocó a la Defensoría y a la SENAF a un diálogo con madres, padres, autoridades y alumnos/as. En dicha oportunidad la Defensoría brindó herramientas para abordar la situación desde una perspectiva de los derechos de la niñez, entre ellos el derecho a la comunicación.

Si bien la Defensoría procuró mantener con ARTEAR S.A., titular de Canal 13, un diálogo en el marco del cual identificar caminos de reparación de los derechos afectados, la licenciataria no concurrió a las convocatorias propuestas aunque remitió consideraciones por escrito sobre los planteos notificados.

Allí, ARTEAR dejó sentado que al conductor “no sólo le llamó la atención el discurso, fue una crítica que conceptualmente estuvo dirigida a que un ‘chico’ de 11 años es preferible que desarrolle las actividades propias de los menores de esa edad y que no se inmiscuya en temas de mayores, temas a los cuales, según él, el menor fue inducido por los mayores, en el caso sus padres”.

Además, resaltaron que el conductor “hizo toda una referencia elíptica a los casos ocurridos en más de un país, en los que a los menores, para decir claramente y no andar con vueltas ‘se les lavaba la cabeza’. Esto es, se les inculcaba ideas políticas (y de discriminación y guerra) que los menores adoptaban y pasaban a constituir grupos armados preparados para combatir. Reiteramos, la referencia era a ‘menores’. Y esto es lo que ‘critica’ el Señor Lanata, no lo que diga, sino que un menor hable, y lo que es peor inducido por mayores”.

Y concluyen, afirmando que “no discriminó. Sugirió al menor y, en particular a los padres del menor, que a los 11 años desarrolle la vida propia de su edad y no inmiscuirse en temas, como es público y notorio y no hace falta ser erudito, son propios de mayores, aceptándose dentro de éstos a los adolescentes”

La Defensoría adoptó la Resolución N° 29/2015, en la que analizó la situación planteada y ahondó en el derecho de los niños y niñas a participar, a ser oídos/as y a expresarse libremente sobre todos los temas, bajo el paradigma del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho vigente en nuestro país.

La Resolución formuló una serie de recomendaciones dirigidas a ARTEAR S.A entre las que se destacan el desarrollo de conocimientos prácticos con relación a la protección integral de la niñez y la elaboración de un código de ética o manual de estilo periodístico que permita un adecuado tratamiento de los temas vinculados con niños y niñas.

ESTIGMATIZACIÓN DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL

El tratamiento irrespetuoso de la identidad de género y orientación sexual de los jóvenes también ha sido advertido por las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.

En este marco, se recibieron diversas denuncias por parte de personas individuales y organizaciones de defensa de los derechos de la diversidad, en relación con los comentarios realizados en un programa radial por el conductor y director de la emisora AM Las Cuarenta de San Juan:

“Los mariquitas corren como mujercitas -aseguró. Yo les estoy contando lo que está pasando hoy en las escuelas públicas, y me imagino que en las privadas también. Corren así, con las manitos respingadas, con la muñeca quebrada y corren como mujercitas y los otros vagos se les cagan de risa. Son mariquitas [...] Ya de adolescentes, amanerados, mariquitas que seguramente van a ser de adultos homosexuales militantes. Entonces, esto ha llegado al Ministerio de Educación y, ¿qué es lo que están estudiando? Darles una enseñanza diferencial, hay que darles una enseñanza diferencial, hay que darles enseñanza diferencial [risa]. Hay que crear un nuevo espacio para los mariquitas y en el futuro habrá que crear nuevas escuelas para los mariquitas, para los amanerados [...] Ya son pichones de homosexuales, son pichoncitos, ya están aprendiendo cómo es esto de practicar y ser toda la vida la homosexualidad masculina. Entonces, van a crear un nuevo espacio [...] Bueno, ¿y qué bosta les irán a hacer hacer a los putines estos? Yo no sé lo que les van a hacer... No sé, qué se yo, ejercicios de cola, eh, corte y confección, no, no sé...”

La Defensoría realizó un informe interdisciplinario en el que señaló las vulneraciones de los derechos de los/as niños/as y adolescentes, ya que las expresiones hacían hincapié en la orientación sexual de los jóvenes que asisten a la escuela secundaria.

Teniendo en cuenta la gravedad de estas expresiones, la Defensoría convocó al conductor a reparar los derechos vulnerados. En este marco, luego de diversas conversaciones telefónicas, se realizó una reunión con el conductor en la provincia de San Juan y se acordó que se emitieran en la programación de AM Las Cuarenta diversos audios radiales de promoción de la igualdad y la no discriminación de los niños/as y adolescentes en los servicios de comunicación audiovisual, grabados por jóvenes de la provincia, que se pudo cumplir.

“LO QUE MÁS RESCATO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORÍA ES QUE SE HAYA CONVERTIDO EN UN GARANTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ES BUENO TENER A QUIÉN RECURRIR CUANDO SE AVASALLAN ESAS LIBERTADES, Y ES BUENO SABER QUE ALGUIEN, DESDE EL ESTADO, NACIÓ PARA CONTENER Y DAR RESPUESTA A ESOS PEDIDOS”.

TATY ALMEIDA

**MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA,
ARGENTINA**



Audiencias
Públicas 2015



AUDIENCIAS PÚBLICAS

La Defensoría del Público se convirtió en el primer organismo público del mundo que convoca sistemáticamente a audiencias públicas para evaluar el funcionamiento de la radio y la televisión a lo largo y ancho de la Argentina. En 2015 se realizaron en Paraná, Santiago del Estero, Trelew y Mar del Plata que convocaron a 245 grupos, 494 oradores y 850 asistentes.

Desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual convoca a la ciudadanía a Audiencias Públicas en todo el país. Son espacios de participación donde todas las personas, grupos, organizaciones e instituciones pueden aportar su mirada, su experiencia y sus propuestas sobre los medios audiovisuales de su región. Después, los temas planteados se convierten en líneas de trabajo para el organismo.

Una de las particularidades distintivas es su carácter inclusivo y accesible: tienen en consideración la accesibilidad edilicia y comunicacional para las personas con discapacidad. Desde lo comunicacional, se cuenta con interpretación de Lengua de Señas Argentina realizada por profesionales del organismo y de la región para garantizar la pluralidad y el federalismo.

En 2015 las audiencias hicieron foco en las representaciones mediáticas, es decir, fueron convocadas bajo la pregunta: ¿cómo nos ven en la radio y la televisión?

Lejos quedó la concepción de que los medios son “ventanas al mundo”. Los medios de comunicación construyen representaciones, funcionan como filtros que seleccionan determinados aspectos del mundo para volverlos imagen, palabra, sonido, desde un punto de vista determinado.

¿Cuándo y cómo es noticia la juventud? ¿Cómo son las publicidades dirigidas a mujeres? ¿Qué es una persona exitosa según los medios? ¿Qué lugar tienen los adultos mayores

en las ficciones? ¿En qué espacios mediáticos hablan las comunidades campesinas y los pueblos indígenas? Las representaciones que los medios construyen pueden reforzar o cuestionar el sentido común instalado en la sociedad. Y pueden contribuir a transformarlo.

La LSCA establece que las audiencias tienen derecho a que en los medios no haya discriminación y a acceder a representaciones variadas para formar su propio punto de vista.

Por eso la LSCA promueve que en todo el país haya medios gestionados por organizaciones sociales, pueblos originarios y comunidades campesinas, chicos, chicas, docentes y toda la comunidad educativa, el Estado y las Universidades.

LA LSCA ESTABLECE QUE LAS AUDIENCIAS TIENEN DERECHO

A QUE EN
LOS MEDIOS
NO HAYA
DISCRIMINACIÓN

AÑO 2015

4

AUDIENCIAS PÚBLICAS

850 PARTICIPANTES

494 ORADORES

PARANÁ (Región Centro)

SANTIAGO DEL ESTERO (Región Norte)

TRELEW (Región Sur)

MAR DEL PLATA (Región provincia y ciudad de Buenos Aires)



En 2015 las audiencias hicieron foco en las representaciones mediáticas, es decir, fueron convocadas bajo la pregunta: ¿Cómo nos ven en la radio y la televisión?

Este año se realizaron cuatro audiencias (Región Centro en Entre Ríos, Región Norte en Santiago del Estero, Región Sur en Chubut, y región provincia y ciudad de Buenos Aires en Mar del Plata). Para aportar herramientas para el análisis crítico de medios, la Defensoría del Público puso a disposición materiales pedagógicos y la coordinación de instancias de formación y de intercambio con los grupos que así lo requirieron.

También se propuso organizar, con los grupos interesados, instancias presenciales de formación y de intercambio para conocer el paradigma de derechos que sostiene la LSCA y, específicamente, los derechos de las audiencias de la radio y la televisión. Al mismo tiempo el objetivo fue compartir y poner en práctica herramientas de análisis crítico de las representaciones mediáticas y avanzar en la definición de temas y posicionamientos que las personas y grupos participantes planteen ante el organismo en las Audiencias Públicas.

AUDIENCIA PÚBLICA CENTRO

El primer encuentro tuvo lugar el 26 de junio en La Vieja Usina de Paraná, Entre Ríos, y reunió a personas y organizaciones de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Misiones y La Pampa.

Para su realización se articuló con la delegación AFSCA de Entre Ríos, el INADI, el Consejo de Políticas Comunicacionales de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UA- DER), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Municipalidad de Paraná, la Asociación Civil Barriletes y la Organización de la Sociedad Civil Aquelarde Diversidad de Paraná, la Escuela Primaria N°38 de Santa Fe, y la Secretaría de Niñez, Familia y Discapacidad de Entre Ríos. Ante 300 participantes, expusieron 186 personas divididos en 80 grupos.

“Está llena la Vieja Usina, esto merece un enorme reconocimiento a la ciudad de Paraná y a la provincia de Entre Ríos”, reconoció la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano. Y agregó: “Todo el equipo de la Defensoría del Público siente esta profunda alegría de ver que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está viva y se vivencia a cada minuto. Aquí en Paraná, pero en realidad en toda la Argentina”.

La intendenta de Paraná, Blanca Osuna, expresó: “Da muchísima alegría que se haga este hábito concreto en el que la Defensoría del Público, respaldada por una ley que es producto del trabajo de los argentinos y de las organizaciones que los han representado, pueda dar este contexto en este lugar. Y que empiece a fluir la experiencia, la demanda y que trascienda el lugar donde estamos”. En la misma línea, la senadora Nacional por Entre Ríos, Sigrid Kunath, puntualizó:



Los jóvenes tuvieron voz y dieron su punto de vista sobre cómo ven a los medios de comunicación.



La Defensoría del Público se convirtió en el primer organismo público del mundo que convoca sistemáticamente a audiencias públicas.



Los chicos de todo el país contaron cómo se ven representados en la radio y la televisión.



En la Audiencia Pública de la Región Centro, con la senadora nacional Sigríd Kunath y la intendenta de la ciudad de Paraná, Blanca Osuna.

“Las más de 90 organizaciones que están aquí nos llenan de alegría, nos movilizan, nos entusiasman, son los verdaderos protagonistas de la jornada en este enriquecedor intercambio. Nosotros estamos verdaderamente orgullosos de lo que pasa con la participación de todas estas organizaciones”.

Sindicatos, medios comunitarios y gestionados por pueblos originarios, asociaciones de sordos y de intérpretes de lengua de señas, organizaciones sociales, comunidades campesinas, organismos públicos, universidades, escuelas, espacios para la memoria, productores y productoras audiovisuales, adultos mayores, grupos de investigación, entre otros espacios, plantearon distintas temáticas como género y diversidad sexual, discapacidad, vejez, juventud y niñez, el mundo del trabajo, violencia institucional, entre otras contaron cuales son las representaciones que los medios de comunicación audiovisual construyen.

“Celebro que tengamos estas puertas abiertas, esto es fantástico y hay que darle mucho valor, porque yo creo que es una siembra y toda siembra da sus frutos”, dijo un representante del Movimiento Campesino de Córdoba, ante el aplauso de todo el auditorio. Desde la misma provincia, una integrante de una fundación propuso: “Deberíamos reclamar por un contenido no sexista y que lo que empiece a vender sea la igualdad de género para intentar desnaturalizar y deconstruir algo cultural que tenemos muy arraigado, que son los estereotipos de representaciones sexistas que avalamos como audiencias”.

Desde Santa Fe se hicieron presentes niños y niñas de una escuela, que enfatizaron: “Las situaciones en las que somos nombrados generalmente es en sucesos periodísticos policiales, asistencialistas o sensacionalistas. No aparecen los niños y niñas reales como nosotros, no nos sentimos identificados e identificadas”.

En tanto representantes de la radio FM Aim Mokoilek de Colonia Dolores, de la misma provincia, aseguraron: “Nuestra radio va a cumplir un año, está organizando la programación, molesta al sector privado, molesta porque hace reclamos, es la voz del pueblo mocoví, con esa punta de lanza llegamos a más personas y hoy estamos trabajando en esto. Los chicos van a tener un programa, noticias regionales, eso es una manera de aportar hacia niños y jóvenes”. Y agradecieron al organismo: “Gracias a la Defensoría del Público nosotros no tuvimos que recurrir a ningún técnico, a ningún capacitador. La Defensoría nos proporcionó la capacitación. A nosotros, a los indios. Y lo hacemos desde nuestro lugar”.

De la Televisión Comunitaria Giramundos de Mendoza contaron: “Agradecemos estas instancias de diálogo para poder acercar los reclamos que la comunidad hace, para saber de qué forma podemos mejorar la televisión”.

Tumbando Rejas es el nombre de un grupo de alumnos del centro educativo Complejo Esperanza. Son jóvenes que se encuentran privados de la libertad en Córdoba e hicieron llegar una carta que decía: “Los medios nos discriminan por nuestras formas de ser, de vestir, no nos conocen, dicen que resistimos a la autoridad, dan a conocer nuestros delitos, nunca hablan de las causas que nos llevan a eso, no nos conocen ni les interesa conocernos. La mayoría de los medios de comunicación nos muestran así. Ya estamos marcados, vende más la noticia mala y nosotros siempre somos la mala noticia”.

El grupo de intérpretes de lengua de señas de Santa Fe Miradas expuso: “Necesitamos difundir cuáles son las necesidades de las personas sordas, necesitamos capacitarnos, formarnos y colaborar con la función social que es este servicio, que se pueda complementar con el servicio de comunicación, con el derecho a la comunicación, que lo tenemos todos los seres humanos y agradecemos a la Defensoría del Público que empezó a abrir caminos para que podamos ser más visibles. Es un servicio para las personas sordas. Por ende, las personas sordas también tienen que estar trabajando en los medios de comunicación”.

AUDIENCIA PÚBLICA NORTE

La segunda instancia se desarrolló el 28 de agosto en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y reunió a personas y organizaciones de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, y San Juan. Para su realización se trabajó en conjunto con la delegación AFSCA Santiago del Estero, el Programa Educativo para Adultos Mayores (PEAM) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y la Dirección de Adultos Mayores de Jujuy. Ante 250 participantes, expusieron 156 personas divididos en 85 grupos.

Personas adultas mayores, integrantes de medios audiovisuales, institutos educativos, representantes de instituciones gubernamentales y sociales, jóvenes en situación de encierro, cooperativas y personas sordas fueron algunas de las más de cien representaciones que tuvieron su espacio en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero para detallar su relación con los medios audiovisuales.



» En la Audiencia Pública de Santiago del Estero participaron 250 personas y expusieron 156 divididas en 85 grupos.



» Con Néstor Avalle (Director de AFSCA) y Pablo Gogna (AFSCA Santiago del Estero).



» En 2015 la Defensoría del Público llevó a cabo cuatro audiencias en las que participaron 830 personas.

Al final del día se produjo la firma de la carta de intención entre el organismo y los referentes presentes de los pueblos originarios y el movimiento campesino para continuar con los trabajos en conjunto.

Las ponencias de personas de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, y San Juan se transmitieron en vivo a través de la web del organismo para que las audiencias siguieran durante más de ocho horas las instancias de la jornada que contó con 85 grupos de expositores.

El comienzo estuvo marcado por las palabras de la Defensora, la Lic. Cynthia Ottaviano, que reflexionó sobre el encuentro: "Las Audiencias Públicas son una gran oportunidad para conocer realidades, culturas, tradiciones". Y agregó: "Será una celebración del Noroeste argentino y sepan que lo que aquí se dice no sólo lo estoy escuchando como Defensora. Todo el equipo de la Defensoría está aquí para prestar muchísima atención a todo lo que ustedes digan. Además, vamos a sistematizar lo que será dicho y lo vamos a poner en diálogo con las otras audiencias públicas". Luego explicó: "¿Para qué lo hacemos? Para establecer políticas públicas, porque lo que aquí se diga puede ser que sea un reclamo o una denuncia. Pero también puede ser que nos permitan, con esta construcción de saber colectiva, qué estamos haciendo en la Argentina. Establecer políticas públicas, consolidar la democracia".

Por su parte, el miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Nestor Avalle, aseguró: "La Defensoría es un organismo que hace un trabajo increíble, llevando la voz de los muchos que no tienen voz". Y detalló: "Les aseguro que tienen una Defensoría absolutamente profesional, absolutamente humana. Como autoridad de AFSCA es un orgullo apuntalar lo que ustedes trabajan todos los días", finalizó. A su turno, el delegado de AFSCA de Santiago del Estero, Pablo Gogna, comentó: "Es un momento único hasta hoy, no debiera ser único hacia adelante. Es una posibilidad de abrir espacios, de habilitar voces, para escuchar sus reclamos, sus demandas, sus críticas, sus deseos, sus sueños".

"Entendemos a la educación como un bien público y a la comunicación como un derecho humano" contó ante el público expectante una representante de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina agregaron: "Necesitamos como sociedad una comunicación democratizada y democratizante, para ir construyendo una nueva civilización". Una expositora del Instituto de Género de la Universidad Nacional de Formosa, dijo: "Junto a la Defensoría del Público

LAS PONENCIAS DE PERSONAS DE SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, FORMOSA, JUJUY, SALTA, TUCUMÁN, CATAMARCA, LA RIOJA, Y SAN JUAN SE TRANSMITIERON EN VIVO A TRAVÉS DE LA WEB DEL ORGANISMO PARA QUE LAS AUDIENCIAS SIGUIERAN DURANTE MÁS DE OCHO HORAS LAS INSTANCIAS DE LA JORNADA QUE CONTÓ CON 85 GRUPOS DE EXPOSITORES

hicimos un espacio inclusivo de reflexión, de debate, de sensibilización en muchos medios de comunicación".

Por su parte, una integrante de la asociación de derechos de adultos mayores de Chaco, relató: "Hay palabras mal utilizadas en los medios audiovisuales, que anulan una etapa de la vida, como viejo, como si fuéramos un objeto en desuso". Jóvenes integrantes de una cooperativa de Jujuy se sumaron a la Audiencia y pidieron: "Los medios de comunicación tienen que darnos una oportunidad para que tengamos mejor calidad de vida para todos".

"Todos tenemos muy buenas intenciones para modificar los medios de comunicación, pero tenemos que tratar de construir medios que reflejen el territorio, de innovación o de resistencia, para el cambio, porque la lucha es conservadurismo o cambio y tenemos que trabajar para el desarrollo", enumeró un joven de una asociación civil de Catamarca.

La Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO) anticipó que su disertación sería "sobre la representación que los medios concentrados hicieron del campo mediante el eslogan que todos hemos conocido como 'El Campo'". Una expositora de ese espacio reflexionó ante un auditorio atento: "Han apelado a la tradición del pueblo argentino porque tenemos raíces en el campo. En ese eslogan quisieron instalar como causa nacional lo que es el interés de una minoría, pero excluyendo al 75 % de productores del país".

Un niño de una radio de Salta pidió: “Desde la radio FM 98.9, en donde los niños cuentan sus historias, decimos no al bullying en las escuela, que los niños cumplan sus sueños”. “Queremos agradecer a la Defensoría del Público por permitirnos esta oportunidad de expresarnos. Ojalá que esta sociedad pueda cambiar, que vea que somos seres humanos, que queremos trabajar. Nuestro objetivo es hacer valer nuestros derechos y tener un trabajo digno”, dijo emocionada al público una joven trans de Formosa.

AUDIENCIA PÚBLICA SUR

Fue el 25 de septiembre, en el Teatro Verdi de Trelew, y allí se expresaron las audiencias de Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. En esa jornada expusieron 45 grupos de personas, con 78 oradores en total. Para su realización se trabajó en conjunto con FM 102.1 La Trinchera de Ushuaia y con la Fundación Namuncurá de Puerto Madryn.

“Estas audiencias públicas son para que profundicemos la democracia escuchando cuáles son sus puntos de vista sobre la radio y la televisión. ¿Cómo nos ven los servicios de comu-

nicación audiovisual? ¿Nos representan? ¿Hay lugar para los adultos mayores? ¿Las juventudes están expresadas o siempre se las asocia a las drogas y a la vagancia? ¿Cómo es la imagen de la mujer que se construye todos los días en la radio y en la televisión? ¿Nuestros pueblos originarios están representados? ¿Pueden decirse a sí mismos en esos espacios? Son todas la preguntas que hoy trajimos hasta aquí, hasta Trelew, para que ustedes nos respondan”, interrogó la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, en la apertura de la Audiencia Pública de la región Sur, en la que expusieron 45 grupos, con 78 oradores. En lo que va del año, 210 grupos y 420 personas tuvieron la posibilidad de expresarse en estas Audiencias.

Organizaciones sociales, sindicales, medios comunitarios y gestionados por pueblos originarios, asociaciones de personas sordas y de intérpretes de lengua de señas, comunidades campesinas, organismos públicos, universidades, escuelas, espacios para la memoria, integrantes de medios audiovisuales y especialistas, adultos mayores y grupos de investigación, entre otros espacios, expusieron sus ideas y opiniones para aportar a la construcción que lleva adelante la Defensoría del Público para empoderar a las audiencias en el derecho humano a la comunicación.



» La Audiencia Pública de la Región Sur fue el 25 de septiembre en Trelew. Estuvieron representadas las provincias de Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

Jóvenes de una escuela de Puerto Madryn contaron ante el atento público del teatro Verdi de Trelew: “Las representaciones de nuestros pibes y pibas que aparecen en los medios audiovisuales son negativas y estigmatizantes, de forma directa o indirecta. El mensaje es de naturalización si es dirigido a los sectores más vulnerables”. Desde Bariloche, un grupo de personas que trabaja en medios audiovisuales, se refirió “a los casos de Antena Negra y la clausura del garage de C5N” y pidió: “Que un municipio no tenga la potestad de cerrar un medio, confiscar equipos, o clausurar parte de la instalación de un canal o una radio o bloquearla económicamente a través de una multa de más de 200 mil pesos”.

“Los bolivianos que vivimos acá sufrimos discriminación y nos gustaría que nos acompañen. Por eso estamos presentes para aprender y escuchar a todos ustedes. Estoy muy contento de participar en un evento tan importante”, dijo un representante del Centro de Residentes Bolivianos Wiñay. Integrantes de la Comisión contra la impunidad y por la Justicia de Chubut, expresaron: “Hacemos un llamamiento a los periodistas y medios de la región a prestar más atención a los casos de violencia institucional y ayudar en su difusión. Llamamos a los medios de comunicación a seguir construyendo imágenes más cercanas a una realidad que es multifocal y por lo general distante de las versiones oficiales”.

La Comunidad Mapuche Newen Taiñ Mapu de Neuquén también se hizo presente y expresó en la Audiencia: “Creemos que los medios deberían ser un móvil de reproducción de nuestra cultura, de respeto de visualización y comprensión de las cosmovisiones que habitan en el territorio, en contraposición a la cultura globalizada que lejos de incluir a todos, excluye”. La agrupación de jóvenes “La 40” detalló: “Los jóvenes que son noticia en todo el país lo son sólo por los casos de violencia, violaciones, o la famosa marcha ‘Ni una menos’. Queremos destacar que lo que nosotros necesitamos es tener una radio en la escuela y así lograr que más jóvenes quieran y puedan participar de los medios de comunicación”.

Representantes de la Comisión Universitaria Sobre Accesibilidad al Medio Físico y Social, pidieron: “Queremos que los medios vean a la discapacidad desde un sentido común. No investigan, se nota que no investigan. Empezamos a realizar formación, una crítica a la universidad, no abordan el tema en las carreras. No me refiero sólo a las carreras de comunicación social, yo soy trabajadora social y en mis años como estudiante no recibí herramientas con respecto a la discapacidad”.

“Me gustaría que nosotros, los de la tercera edad, tengamos la posibilidad de participar de los medios”, dijo un adulto mayor que participó de la Audiencia.

Entre aplausos, emocionada y con lágrimas, Verónica, que recibió una mención especial por un documental sobre el Cacique Inacayal, dijo: “Tengo 18 años y si recién estamos comenzando así es porque tenemos mucho por mostrar de nuestra cultura que siempre fue contada por otra gente que nada tiene que ver con los pueblos originarios. No estamos capacitados, pero tenemos muchas ganas de capacitarnos”.

El Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia (SIPREN-CR) también expuso: “Desde los medios, los niños, niñas y adolescentes son invisibilizados en los contenidos. Se debe promover la capacitación en comunicación en las escuelas, para que produzcan sus contenidos, así como también el empoderamiento de los jóvenes y sus derechos en relación a los medios de comunicación audiovisual”.

“En las campañas electorales no hay subtítulos, es importante que eso también esté en lengua de señas, también los trámites que tengan que ver con viviendas, un trámite de registro, información sobre vacunas”, pidió un integrante de la Asociación de Sordos de Río Negro.



» En el Encuentro Nacional, Cynthia Ottaviano rindió cuentas junto con los directores Celeste Conde, Ernesto Lamas, José Ferrero y Paula Gueler.

AUDIENCIA PÚBLICA BUENOS AIRES

La última actividad de año se llevó a cabo el 6 de noviembre. Desde distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegaron a Mar del Plata representantes de sindicatos, escuelas, medios comunitarios y alternativos, organizaciones de personas con discapacidad, grupos de mujeres y personas trans, radios comunitarias, adultos mayores, organismos de derechos humanos, migrantes y Universidades, entre otros, a participar de la última Audiencia Pública del año organizada por la Defensoría del Público para expresar cuáles son sus propuestas e inquietudes en relación con la radio y la televisión. Ante 150 participantes, expusieron en el Teatro Diagonal 74 personas organizadas en 35 grupos. Para su realización se articuló con la delegación AFSCA General Pueyrredón.

“Hay personas preocupadas por cambiar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde la Defensoría del Público les decimos que el problema no es la Ley, el problema son los que no la quieren cumplir. Para que todos y todas tengamos los mismos derechos hay que seguir profundizando la democracia a través del derecho humano a la comunicación y

no retroceder ni un centímetro”, expresó la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, en el comienzo de la Audiencia, que contó como en las versiones anteriores con transmisión en vivo a través de la web del organismo.

Luego de la Audiencia, también en el Teatro Diagonal, tuvo lugar el Encuentro Nacional de Audiencias Públicas 2015, en donde representantes de todas las provincias se fusionaron luego de la convocatoria de la Defensoría para resumir el trabajo de las cuatro jornadas que se llevaron a cabo durante el año y que reunieron a un total de 245 grupos, 494 oradores y 850 asistentes. “A diez años del histórico no al ALCA, exigimos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no sea modificada, si no que se impulsen nuevas leyes que la profundicen y erradiquen los monopolios y oligopolios en la comunicación que tanto daño le causaron a las democracias de Argentina y Latinoamérica como un único camino posible a la soberanía comunicacional”, expresó, de manera unánime, el documento elaborado por todas las personas presentes y leído por la Defensora del Público.

En total, participaron de las cuatro audiencias públicas y del Encuentro Nacional 850 personas y expusieron 521 durante un total de 32 horas.



» La Defensora del Público junto a representantes de todas las provincias.

“UNA INSTITUCIÓN COMO ESTA ES UN BALUARTE PARA EL FUTURO DEL PUEBLO ARGENTINO. ES UNO DE LOS GRANDES PASOS QUE SE HA DADO EN AMÉRICA LATINA EN MATERIA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS COMUNICACIONALES Y DE EXPRESIÓN”.

FRANK LA RUE

EX RELATOR ESPECIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN



PUEBLOS ORIGINARIOS

Los días 1, 2 y 3 de diciembre se llevó a cabo el “Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino Indígena: Territorio en movimiento. Voces múltiples”, que comenzó en la Defensoría del Público y continuó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Reunió a más de 50 proyectos de comunicación audiovisual de 16 provincias y a 18 pueblos originarios de Argentina, junto a referentes de Chile, Honduras, México, Paraguay y Perú. La jornada arrancó en la puerta del organismo, en donde se llevó a cabo una rogativa a la madre tierra “para dejar las mejores intenciones y los mejores pensamientos para este encuentro pidiéndole al padre sol y a la madre tierra que nos acompañen en estos días”.

“Bienvenidos a la casa de los oprimidos comunicacionales, acá defendemos los derechos de las audiencias porque la comunicación no es un privilegio sino que es un derecho humano de todos y de todas”, expresó la Defensora, la Lic. Cynthia Ottaviano. Y añadió que el organismo trabaja para “revertir algo del daño inmenso que provocó el genocidio por parte del Estado del siglo pasado, que los expulsó del territorio pero también de la cultura. Quiero pedir perdón por tanto silencio, tanto dolor e invisibilización, que lo único que trae es odio y violencias, y eso es lo que tenemos que cambiar. Hace un año me pidieron que la Defensoría sea enlace y puente para poder lograr este Encuentro, y hoy cumplimos. Y venimos a decir que nosotros sabemos comunicar, nosotros sabemos decir, nosotros sabemos hacer, y ahora nos tienen que escuchar, ahora nos tienen que ver. Y por eso les propongo sumar a tierra, techo y trabajo una ‘T’ más: textos. Textos para decir, para transformar, para crear y descolonizarnos. Esa es nuestra lucha en este siglo XXI.

El Encuentro, organizado por la Defensoría del Público, contó con el apoyo del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Fundación Friedrich Ebert. En líneas generales, se reflexionó sobre el estado de situación y desafíos de los proyectos comunicacionales. Además, se debatió acerca de la participación de las audiencias, la importancia de la agenda propia, la interculturalidad y la descolonización cultural y mediática, las fortalezas, debilidades, logros y desafíos, las estrategias y necesidades de la capacitación de los proyectos de comunicación audiovisual campesino indígena. El objetivo del Encuentro fue, sin dudas, contribuir a la visibilización de estas experiencias de comunicación y relevar, evaluar y planificar conjuntamente con cada una de ellas sus necesidades y estrategias de capacitación. El último día estuvo dedicado al intercambio entre los proyectos comunicacionales y distintos organismos estatales que trabajan la cuestión campesino indígena. Participaron de ella el Área de Asuntos Campesinos dependiente de la Dirección Nacional de Articulación Institucional y la Dirección de Bosques, ambas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina; la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Área de Pueblos Originarios de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Además, integrantes de la Defensoría atendieron a los grupos campesinos e indígenas en diferentes aulas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,

LA COMUNICACIÓN NO ES UN PRIVILEGIO SINO QUE ES UN DERECHO HUMANO DE TODOS Y DE TODAS

se dispusieron diferentes sectores para recibir consultas y asesoramiento técnico para equipar y/o acondicionar emisoras, por ejemplo. O información acerca de autorizaciones, licencias y fondos de fomento concursable. En síntesis, fue un espacio de denuncias y consultas sobre sus derechos comunicacionales destinado a las emisoras campesino indígenas. En lo estrictamente legal, el principal requerimiento fue solicitar que la Defensoría acompañara gestiones administrativas, teniendo en cuenta las dificultades que tienen algunas comunidades para controlar de cerca cómo evolucionan en dependencias del Estado las solicitudes para la instalación de emisoras.

Ottaviano, en el cierre del Encuentro, expresó: "Hemos hablado de unión, de inteligencia, de sabiduría, de solidaridad, se dijo que el egoísmo no sirve, hablamos de dificultades, de temores, pero también de desafíos y de horizontes. Nos dijimos que era importante reconocernos en los territorios, pero también en las palabras, traspasando justamente los tiempos y traspasando esos espacios. Muchas gracias, sigamos caminando juntos. Tienen mi compromiso como Defensora de que nos vamos a ver en los territorios, es probable. Pero además nos vamos a volver a ver en el Segundo Encuentro Latinoamericano Campesino Indígena". Y puntualizó: "Quedó claro que tenemos que fortalecer las redes, defender nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, considerarla como base para profundizar la democracia también, sacando finalmente la palabra de esa garra de los opresores, donde todavía sigue estando. Me quiero quedar con esta idea: aprendí, hasta en el último minuto se puede aprender, que para arraigarse también hacen falta las tormentas, las tempestades. Vendrán tempestades, entonces los invito y las invito a que enfrentemos estas tempestades, sabiendo que lo que está pasando es que nos hacen muchísimo más fuertes".

La propuesta del Encuentro surgió a partir del trabajo que el organismo realizó en los territorios con los colectivos de comunicación de los pueblos originarios Chorote, Comechingón Sanavirón, Diaguita, Diaguita Calchaquí, Guaraní, Kolla, Mapuche, Mocoví, Lule Vilela, Qom, Sanavirón, Toba, Tupí Guaraní, Vilela y Wichi, y diversas comunidades campesinas de Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan.

En junio de 2014, la titular del organismo, Lic. Cynthia Ottaviano, recibió la propuesta de parte de referentes del sector para generar un espacio de intercambio entre los distintos proyectos comunicacionales campesinos e indígenas del país, lo que derivó en la realización del Encuentro.

En línea con el objetivo de acompañar, visibilizar y reivindicar la comunicación desde las comunidades de pueblos originarios y campesinos, la Defensoría puso en marcha, con apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la

traducción de una selección de artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los idiomas de cinco pueblos indígenas de nuestro país: Ava Guaraní, Quechua, Mapuche, Qom y Wichi. El Encuentro fue también la oportunidad para la presentación de "La comunicación en lenguas originarias. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522".

POR OTRO LADO, LAS DISTINTAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN SE CENTRARON EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA IMPORTANCIA DE LAS AUDIENCIAS.

Para ello, los distintos talleres propusieron trabajar temas como el diseño integral del proyecto político comunicacional del medio; el lenguaje radiofónico y sus géneros y formatos; la operación y mantenimiento técnico; la producción radial y periodística en general; la construcción de agendas públicas (nacional, regional y local), corresponsalías populares y coberturas especiales; la creatividad radiofónica y realización artística; la edición digital y producción de piezas radiofónicas.

En torno a lo audiovisual, los talleres recorrieron el lenguaje audiovisual; sus géneros y formatos; la iluminación y sonido; el manejo y operación de equipos; la edición digital para TV; la producción televisiva; el tratamiento de la información y las noticias para TV: su estructura, redacción y presentación; y las nuevas narrativas en la televisión, entre otros temas.

Cada uno de estos procesos y espacios de formación se originaron en las demandas y necesidades propias de cada proyecto comunicacional. Así, convertida en un espacio dialógico de construcción de sentidos, cada capacitación persigue favorecer la diversidad y el pluralismo, principios consagrados por la LSCA. De esta manera, la capacitación se nutre no solo de los problemas y carencias, sino también de los intereses y conflictos del entorno de cada proyecto, que son puestas en juego para pensarlos y transformarlos.

Estos diversos espacios de formación, de participación, de intercambio y de debate son parte de la tarea asumida por la Defensoría del Público, en el marco de sus competencias establecidas en la LSCA; para promover la comunicación como herramienta de transformación de la realidad de cada comunidad y territorio, para fortalecer la cultura e identidad de cada grupo social frente a los grandes medios masivos de comunicación que tienden a invisibilizar y estigmatizar a distintos grupos y colectivos de la sociedad.



» En la inauguración del "Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino indígena: Territorio en movimiento. Voces múltiples", en la sede del organismo.



» El Encuentro reunió a más de 50 proyectos de comunicación audiovisual de 16 provincias y a 18 pueblos originarios de Argentina, junto a referentes de Chile, Honduras, México, Paraguay y Perú.



» El cierre del Encuentro tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

EN TORNO A LO AUDIOVISUAL, LOS TALLERES RECORRIERON EL LENGUAJE AUDIOVISUAL; SUS GÉNEROS Y FORMATOS; LA ILUMINACIÓN Y SONIDO; EL MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS; LA EDICIÓN DIGITAL PARA TV; LA PRODUCCIÓN TELEVISIVA; EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LAS NOTICIAS PARA TV: SU ESTRUCTURA, REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN; Y LAS NUEVAS NARRATIVAS EN LA TELEVISIÓN

Tras acompañar el nacimiento en 2013 de Radio Origen FM 90.1 -primera emisora de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán (UPNDT)- y de FM 88.3 Sacha Okup -sexta emisora del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MoCaSE – VC)-, y en 2014 de FM 88.3 Aim Mokoilek -del pueblo mocoví de Colonia Dolores, Santa Fe-, a principios de 2015 la Defensoría del Público acompañó la creación FM 88.9 - Radio El Zorzal, la radio socio-educativa neuquina dependiente del ISFD N° 13 República de Nicaragua de Zapala y que contaba con acompañamiento del organismo desde 2014.

La Defensoría suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para acompañar, asesorar y promover los proyectos comunicacionales campesino e indígenas y de la agricultura familiar, y asumir su capacitación en gestión integral. De esta manera, el organismo se incorpora a línea de fortalecimiento y capacitación "Radios comunitarias Rurales. Comunicar nos fortalece", a cargo de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio e integrada por otros organismos públicos como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).



» En la sede del organismo, con representantes de pueblos originarios, en la presentación de la traducción de la LSCA a cinco idiomas originarios.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA COMUNICACIÓN EN LENGUAS ORIGINARIAS”

El 18 de noviembre, luego de tres intensos años de trabajo, se logró plasmar en más de 230 páginas algunos de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho, reconociendo su identidad, su historia y su cosmovisión.

En dicha ocasión, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Otaviano, abrió la jornada y aseguró: “En la Argentina, con eufemismos, se oprimió a nuestros pueblos originarios diciendo que había una campaña al desierto, cuando allí estaban nuestros pueblos, y a ellos se los persiguió, se los torturó y se los mató”. Y agregó que “a la opresión de los cuerpos le siguió la opresión de la palabra, y a la expulsión de los territorios le siguió la expulsión de lo que se llamó la civilización. Es decir, que aquí se han aplastado cuerpos e identidades. Hoy no estamos presentando un trabajo ni una línea de acción, hoy cuando levantamos “La comunicación en lenguas originarias” lo que estamos haciendo es presentar un proceso, un intercambio, una posibilidad de dar un grito sagrado de inter-

culturalidad y de independencia, de esa independencia que significa dejar de ser dicho por otros y empezar a decirnos a nosotros mismos en función de nuestros propios intereses”.

Y continuó: “Lo que estamos haciendo es trabajar por desalambrar esos territorios, por desalambrar las aulas y las palabras, que fueron aplastadas y que pretendieron ser desaparecidas, pero que hoy vemos que le hemos ganado a esa historia perversa”.

Más allá de los primeros apartados de la LSCA, que describen Disposiciones Generales, algunos de los artículos traducidos son los vinculados a las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); los referidos al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y al Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia; y el 19, que crea la Defensoría del Público.

En la segunda parte del libro, el trabajo muestra un compendio de Leyes de Derecho Indígena, resoluciones y decretos relacionados a las comunidades, que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos, crean el Registro Nacional de Comunidades indígenas (ReNaCI), establecen la elaboración de censos, instauran la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), y organizan la propiedad comunitaria.



» La Defensoría tradujo una selección de artículos de la LSCA en los idiomas de cinco pueblos indígenas: Ava Guaraní, Quechua, Mapuche, Qom y Wichi.



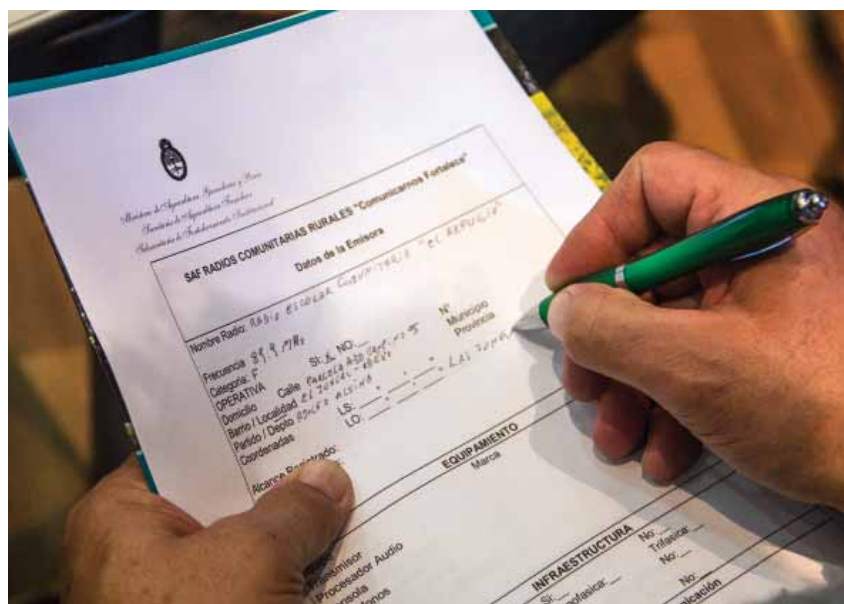
MEDIOS CAMPESINOS E INDÍGENAS

- El 21 de enero se hizo la visita de diagnóstico y presentación con la FM 89.9 de la comunidad tupí guaraní Hipólito Yumbya de Glew, Buenos Aires.
- El 22 y 23 de enero, con la FM 88.8 Aim Mokoilek del pueblo Mocoví de Colonia Dolores, Santa Fe.
- El 7, 14 y 21 de febrero se comenzó el acompañamiento a la FM 89.9 de la comunidad tupí guaraní Hipólito Yumbya de Glew, Buenos Aires.
- El 10 de febrero, en Ojo de Agua, Santiago del Estero, con las y los comunicadores del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
- El 19, 20 y 21 de febrero, con el canal mapuche Wall Kintun de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
- El 12, 13 y 14 de marzo, en Jocolí, Mendoza, con FM 89.1 Radio Tierra Campesina -integrante de la Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra (UST)- y emisoras del Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
- El 10, 14 y 15 de abril, en el VI Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – La Vía Campesina (CLOC -LVC) realizado en Ezeiza, Buenos Aires.
- El 24 y 25 de abril, en la IX Feria Campesina y III Encuentro de Comunicación en los Territorios organizada por las Comunidades Unidas de Molinos (CUM), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Valles de Altura (REDVA) en el Valle de Luracatao, Salta.
- Del 21 al 24 de mayo, en Allen, Río Negro, con la FM 99.3 Radio Eco Taiñ Mapu del pueblo Mapuche.
- El 27 y 28 de mayo, en Santiago de Chile, con comunicadores y comunicadoras mapuches en una actividad organizada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Chile.
- Del 6 al 10 de julio, en Laguna Blanca, Formosa, con la Radio Potae Napocna Navogoh del pueblo Qom.
- Del 21 al 23 de septiembre, en Bartolomé de las Casas, Formosa, con FM 103.1 Radio Qom.
- Del 2 al 4 de octubre, en Colonia Dolores, Santa Fe, con FM 88.5 Aim Mokoilek del pueblo Mocoví de Colonia Dolores, Santa Fe.

» En 2015 se continuó y profundizó el acompañamiento a proyectos comunicacionales del sector comunitario y campesino indígena.

RADIOS COMUNITARIAS RURALES. COMUNICARNOS FORTALECE

- El 27 de marzo, la Defensora del Público participó de la presentación de la línea de acompañamiento y capacitación "Radios comunitarias Rurales. Comunicarnos fortalece", a cargo de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se articuló con los proyectos radiofónicos presentes el estado de situación y necesidades de capacitación. También, con proyectos radiofónicos beneficiados por la línea de fortalecimiento y capacitación a cargo de la Subsecretaría.
- El 24 y 25 de abril, en Tintina, Santiago del Estero, con FM 89.3 Sacha Huayra (Viento del Monte) del pueblo Vilela y FM 88.3 Sacha Okup (Monte Adentro) del pueblo Lule Vilela e integrantes del MoCaSE – Vía Campesina.
- El 27 de abril, en Amaicha, Tucumán, con la Comunidad Indígena Los Amaichas del pueblo Diaguita e integrantes de la Unión de los Pueblos de la Unión Diaguita de Tucumán (UPNDT).
- El 29 de abril, en San Pedro de Colalao, Tucumán, con la Comunidad Indio Colalao del pueblo Diaguita.
- El 30 de abril, con la Asociación de Pequeños Productores Minifundistas de Tucumán de la localidad tucumana de Alto Verde.
- Del 8 al 10 de mayo, con FM 88.9 Paj Sachama del pueblo Lule Vilela e integrantes del MoCaSE – Vía Campesina.
- El 6 de junio, en la localidad cordobesa de Deán Funes, con tres organizaciones integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) que proyectan sus radios: la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC) de Serrezuela, la Unión Campesina de Traslasierra (UCA-TRAS) de Pocho Chancani y la Organización de Campesinos Unidos del Norte Cordobés (OCUNC) de Deán Funes.
- Del 8 al 10 de junio, con la FM 95.5 Radio Comunitaria La Voz Indígena de Tartagal, Salta.
- El 9 de junio, con la organización originaria Lakha Honat -integrada por los pueblos wichi, qom, chorote, tapiete y churubi- de Santa Victoria Este, Salta.
- El 10 de junio, con las comunidades indígenas de Iguopeigen-da, Dragones, Hipólito Yrigoyen y Carboncito en Orán, Salta.
- El 11 de junio, con la FM 90.7 FM Yokalla del Consejo Kolla Finca Santiago integrante de la Kollamarka en Isla de Cañas, Salta.
- El 17 de junio, con la Asociación Tierra Fértil de Palma Sola, Jujuy.



La Defensoría del Público brinda apoyo técnico y capacitación radiofónica y audiovisual para la instalación de las nuevas emisoras.



» El Congreso de la CLOC-VC se realizó del 10 al 17 de abril en la localidad de Ezeiza, Buenos Aires.

- El 19 de junio, en Humahuaca, Jujuy, con la FM La voz del pueblo Omaguaca de la Unión de Pequeños Productores Aborígenes de Jujuy y Salta (UPPAJS).
- El 20 de junio, en Payogasta, Salta, con las Cooperativas salteñas de Cachi, San José y Payogasta.
- Del 15 al 18 de julio y el 27 y 28 de agosto se trabajó en Punta del Agua, Mendoza, con FM El Nevado -integrante de la Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra (UST).
- Del 12 al 14 de agosto, en Pueblo Viejo, Salta, con FM 89.9 Runasimi del pueblo Kolla.
- El 11 y 12 de septiembre, en Villa Ocampo, Santa Fe, con Obreros del Surco - Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA).
- El 9 y 10 de octubre, en General San Martín, Chaco, con la Escuela de Formación Agraria Fortaleza (EFA) - Fortaleza Campesina.
- El 10 de octubre, en Trelew, Chubut, con la Cooperativa El Patagón.
- El 29, 30 y 31 de octubre, en Quilimí, Santiago del Estero, con las seis emisoras del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MoCaSE-VC): FM Del Monte de Quimilí, FM Sacha Huayra de Tintina, FM Pajsachama del paraje Las Lomitas, FM Inti Manta de Pinto, FM Suri Manta de Ojo de Agua y FM Monte Adentro de Monte Quemado.
- El 30 y 31 de octubre, en Chepes, La Rioja, con las emisoras riojanas FM 96. 5 La Tusca de Chepes, Radio Voces – FM 87.7 de La Rioja y FM La Cueva de Los Palacios.
- El 30 y 31 de octubre, en Valcheta, Río Negro, con FM Balchita.

COORDINADORA LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO – VÍA CAMPESINA (CLOC – VC)

Durante el congreso, que se realizó del 10 al 17 de abril en Buenos Aires, se desarrollaron distintas mesas de trabajo donde los campesinos y campesinas participantes del encuentro debatieron y consensuaron las principales líneas de acción que las organizaciones que integran la red regional llevarán adelante los próximos años. El evento también incluyó la realización de la V Asamblea de las Mujeres del Campo, la IV Asamblea de la Juventud Rural y el “Congresito”, donde participaron niños y niñas campesino-indígenas.

La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, participó de la ceremonia de apertura en el Centro de Exposiciones Néstor Carlos Kirchner del Centro Recreativo Nacional (CeReNa),

en Ezeiza y contó con la asistencia de más de mil representantes de movimientos campesinos de Latinoamérica, África, Asia y Europa.

El equipo de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, representado por Sebastián Janeiro y Claudio Vivori, expuso sobre las estrategias de comunicación campesino-indígena en la región y el contexto argentino. Los puntos vertebrales de la LSCA, la misión de la Defensoría del Público, los derechos de las audiencias y la reserva de 33% del espectro para los medios sin fines de lucro fueron los protagonistas de la charla.

Los y las participantes del taller resaltaron el cambio paradigmático que contiene la LSCA y la importancia de concebir a la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía. Mencionaron, además, la criminalización de las luchas campesinas que realizan los medios de comunicación, las amenazas a las que se enfrentan por difundir determinadas noticias, las dificultades para alcanzar a públicos masivos, la necesidad de contar con comunicadores populares en diferentes espacios y la falta de recursos materiales.

A lo largo del encuentro, las exposiciones giraron en torno a la importancia de acceder a formación específica en materia de comunicación, la exigencia de crear redes que articulen el trabajo de los diferentes medios comunitarios y la falta de canales de televisión gestionados por organizaciones campesinas e indígenas.

Los participantes escucharon las palabras de Juan Burba, integrante de la Asociación Mundial de las Radios Comunitarias (AMARC) y de Osvaldo León, representante de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).

El equipo de la Defensoría también estuvo presente en un stand desde donde compartió materiales y conversó con las y los participantes del Congreso y coordinó un taller para que niños, niñas y jóvenes compartan diferentes experiencias en relación al funcionamiento de los medios audiovisuales en sus localidades, el lugar que se le otorga a sus problemáticas y el modo en que son representados las y los campesinos en los medios masivos.

ASESORAMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS

Los días 3 y 4 de noviembre, integrantes de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público, junto con una representante de Barricada TV y especialista en televisión comunitaria, viajaron a Río Negro con el objetivo de brindar asesoramiento jurídico y comuni-



» La Defensora junto a Deolinda Carrizo, en el VI Congreso Intercontinental de la Coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo - Vía Campesina (CLOC-VC).



» Se brindó asesoramiento jurídico y comunicacional a organizaciones sin fines de lucro que desarrollan proyectos comunicacionales con inserción comunitaria y social.

SE EXIGE CREAR REDES QUE ARTICULEN EL TRABAJO DE LOS DIFERENTES MEDIOS COMUNITARIOS PARA REVERTIR LA FALTA DE CANALES DE TELEVISIÓN GESTIONADOS POR ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS

cacional para la presentación al concurso de televisión digital, que realizó AFSCA en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

En el encuentro participaron la Asociación Civil Conexión Bariloche y la Asociación Mutual de Empleados de Comercio de Bariloche, ambas organizaciones sin fines de lucro que desarrollan proyectos comunicacionales con inserción comunitaria y social en la localidad donde se llevará a cabo el concurso de televisión digital.

El primer día se abordó el encuadre legal del concurso y la experiencia práctica de su tramitación, a través de las dudas y las inquietudes particulares que presentaron las asociaciones sin fines de lucro. En el segundo se resolvieron los problemas concretos que encontraron los participantes del taller al comenzar a elaborar la carpeta del concurso.

En el marco del trabajo de acompañamiento y asesoramiento dirigido a Wall Kintun TV que sigue la Defensoría, hubo un encuentro con los trabajadores y las trabajadoras del canal. Los abogados de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos se interiorizaron sobre el estado actual de la señal y brindaron asesoramiento sobre estrategias para impulsar la sostenibilidad económica y profundizar la inserción social del proyecto comunicacional.

Particularmente, se le informó sobre la adjudicación que realizó el AFSCA de un Canal Digital a la Comunidad Mapuche Buenuleo como licenciataria en la frecuencia 27.2, categoría C, en la Ciudad de San Carlos de Bariloche para poner en conocimiento del canal cuáles son los pasos para avanzar en su tramitación y puesta en funcionamiento. En este sentido, no hubo notificación formal por parte de AFSCA de esta adjudicación, de acuerdo a lo expresado por los integrantes del Canal Wall Kintun TV.

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

En 2015 se continuó y profundizó el acompañamiento de los proyectos comunicacionales en funcionamiento o en proceso de instalación del sector comunitario, campesino indígena, universitario, sindical, educativo y público estatal, entre otros. Se brindó asesoramiento y apoyo técnico y capacitación radiofónica y/o audiovisual para la instalación de las nuevas emisoras y el fortalecimiento de las ya existentes.

MEDIOS COMUNITARIOS

- El 19, 20 y 21, con el proyecto radiofónico Conexión Bariloche de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
- El 7 y 9 de abril, con Radio Ahijuna FM 94.7 de Bernal, Buenos Aires. Se volvió a la emisora el 18 y 25 de abril y el 9 y 16 de mayo.
- Del 26 al 28 de mayo, con FM 102.1 La Trinchera de Ushuaia, Tierra del Fuego.
- El 30 de mayo y el 6 de junio, con Radio Sur FM 88.3 de Parque Patricios, Ciudad de Buenos Aires.
- El 2, 3 y 4 de junio, con FM 104.9 Las Chacras de Traslasierra, Córdoba, y con Radio El Grito de Los Hornillos, un grupo perteneciente al Instituto Provincial de Enseñanza Media IPEM N° 137 donde funciona una Radio CAJ y representantes de la Unión Campesina de Traslasierra (UCATRAS).
- El 23 de junio y el 20 y 21 de agosto, con la Fundación María de los Ángeles de San Miguel de Tucumán.
- El 25 y 26 de julio, en Ciudad de Buenos Aires, con distintas emisoras integrantes de AMARC – Argentina: FM La Tribu, FM De la Azotea, Radio Sur, Radio El Grito, Radio Presente, FM Fribuay, FM En Transito, FM Inti Manta, FM Huayra Quimbal, FM Del Monte, FM Monte Adentro, FM Las Chacras, FM Tierra Campesina, Radio Revés y FM Alas.
- El 4, 5 y 6 de agosto, en Santa Rosa, La Pampa, con FM 95.1 La Tosca.
- El 8 y 9 de agosto y 5 y 6 de septiembre, en José L. Suárez, Buenos Aires, con Asociación Civil La Colmena.
- El 14 y 15 de agosto, en Córdoba, con Radio La Ranchada FM 103.7.
- El 29 de agosto, en Villa Allende, Córdoba, con las emisoras Nativa de Unquillo, La Ronda de Colonia Caroya, Tortuga de Alta Gracia, Inédita de Cosquín y Nexo de Villa Allende, quienes conforman la Red de Radios de Sierras Chicas.
- Del 29 de septiembre al 1 de octubre, con las emisoras cordobesas FM 104.9 Las Chacras de Traslasierra, FM Las

Sierras, FM Las Sierras, Radio CAJ Luyaba, se trabajó acerca del proyecto radiofónico Radio Pandora. Participó la Unión Campesina de Traslasierra (Ucatras).

- El 1, 2 y 10 de octubre, con la Fundación María de los Ángeles de San Miguel de Tucumán, Tucumán.
- El 3 y 4 de noviembre, en Santa Rosa, La Pampa, con el Canal CPE TV de la Cooperativa Popular de Electricidad.
- El 17 de octubre, en Córdoba, con Radio Revés.

MEDIOS EDUCATIVOS

- El 5 y 6 de marzo, con la FM 88.9 - Radio El Zorzal -dependiente del ISFD N° 13 República de Nicaragua- de Zapala, Neuquén. Del 18 al 20 de mayo se regresó para continuar el acompañamiento a la emisora neuquina socio-educativa dependiente del ISFD N° 13 República de Nicaragua.
- El 30 de mayo, 6, 13 y 20 de junio, y 4 de julio, con FM Huayra Quimbal del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 454 de Castelar, Buenos Aires.
- El 12 y 19 de septiembre, con FM Huayra Quimbal del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 454 de Castelar, Buenos Aires.

MEDIOS PÚBLICOS ESTATALES

- El 28 de febrero y el 7, 14 y 21 de marzo, con la FM 91.1 – Radio A de Avellaneda, Buenos Aires.
- El 1 y 2 de julio, en San Carlos de Bariloche, Río Negro, con Radio Nacional Bariloche.
- El 18 y 25 de julio, en Avellaneda, Buenos Aires, con la emisora municipal FM 91.1 – Radio A.
- El 11 y 12 de septiembre, con Alejandro Roca, Córdoba, con la Radio Municipal local.

MEDIOS SINDICALES

- Del 4 al 7 de mayo, con el Canal 34 del Sindicato de Comercio de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
- El 22 y 29 de agosto y 5 y 12 de septiembre, en Ciudad de Buenos Aires, con Subteradio – FM 101.7, emisora de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro – AGTSyP.

MEDIOS UNIVERSITARIOS

- El 18 de abril, 9 de mayo y 20 de junio, con la FM 91.7 – Radio Uni de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

LA COMUNICACIÓN DESDE ADENTRO

- El 8, 15 y 22 de abril, y 6 y 13 de mayo, con la Asociación Civil Yo no fui de Ciudad de Buenos Aires.
- El 16, 22 y 30 de abril, y 6 y 20 de mayo, con la Escuela Secundaria de la Unidad Penitenciaria 40 de Lomas de Zamora.

OTROS ACTORES

- Del 1 al 3 de julio, en San Carlos de Bariloche, Río Negro, con el Nodo Audiovisual Andino.
- El 16 de octubre, en Paraná, Entre Ríos, con usuarios/as y coordinadores de Casas de medio camino.

EN 2015 SE CONTINUÓ Y PROFUNDIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS COMUNICACIONALES EN FUNCIONAMIENTO O EN PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SECTOR COMUNITARIO, CAMPESINO INDÍGENA, UNIVERSITARIO, SINDICAL, EDUCATIVO Y PÚBLICO ESTATAL



Seminario Latinoamericano de comunicación y género

EL TEMATE REGIONAL EN EL CONTEXTO DE BERLÍN • 2018

Logo of the seminar featuring two overlapping speech bubbles, one pink and one light blue.

Logos of sponsors: **FEDERACION EBERT STIFTUNG** and **Cooperación Pública**.

Panel of speakers seated at a table on stage, with a rainbow flag and other flags visible in the background.

A large audience of people seated in rows, viewed from behind, attending the seminar. Some individuals are taking notes on papers.

GÉNEROS Y DIVERSIDADES

El 14 de agosto, a 20 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, hito histórico que ubicó la discusión sobre la relación entre los medios de comunicación y el género en la agenda pública internacional, la Defensoría del Público, en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, representada por Sandra Chaer, realizó el “Seminario Latinoamericano de Comunicación y Género. El debate regional en el contexto de Beijing + 20”, espacio multiactoral del que participaron experiencias de Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina.

Durante el seminario encabezado por la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, expusieron Víctor Abramovich (ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA -CIDH), Guilherme Canela de UNESCO Cono Sur, Alejandra Davidziuk de la Asociación Mundial para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Claudia Florentín Mayer de la Asociación para las Comunicaciones Cristianas (WACC), María Julia Rodríguez de Cancillería Argentina, Lilián Celiberti de Cotidiano Mujer (Uruguay), Lina Cuellar de Sentido (Colombia), Luisa Kislinger de la Universidad Central de Venezuela, Gabriela Barcaglioni de Red Par (Periodistas por una comunicación no sexista) y Marisa Sanematsu del Instituto Patricia Galvao (Brasil).

En este marco, la Defensoría convocó a realizadores y realizadoras audiovisuales de toda la Argentina a participar del Concurso de Videominuto “Zoom a los Derechos”, que premió producciones audiovisuales ciudadanas que promuevan la equidad de género en los medios.

La iniciativa tuvo como eje central la promoción de la equidad de géneros como derecho de las audiencias de la radio y la televisión, de acuerdo a los principios establecidos

LA DEFENSORÍA CONVOCÓ A PARTICIPAR DEL CONCURSO DE VIDEOMINUTO “ZOOM A LOS DERECHOS”

en la LSCA, y se premiaron 20 proyectos que contribuyeron a profundizar la reflexión sobre la comunicación como derecho humano desde un enfoque de géneros y sexualidades. Cada propuesta ganadora recibió \$ 20.000 para la realización del videominuto.

Finalmente, La Defensoría del Público presentó los 20 trabajos seleccionados del concurso “Zoom a los Derechos” y anunció la transmisión por la TV Pública. Las producciones audiovisuales reconocidas asumieron el desafío de representar en 60 segundos la promoción de la equidad de género como derecho de las audiencias de la radio y la televisión. La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, resaltó la calidad de los trabajos y cómo interpelan a las audiencias al punto tal de emocionarlas. “El gran trabajo que tenemos es reconocer cómo se van atravesando las sociedades por las violencias que construyen los hechos discriminatorias, que en definitiva quieren cegar la mirada y la realidad a una vida que es mucho más inclusiva que la que está en los servicios de comunicación audiovisual. O por lo menos que la que está en la televisión comercial. Nuestra vida es mucho más inclusiva”.

PROYECTOS RECIBIDOS

114



el 27 de abril se inició el proceso de preselección de los 40 proyectos, los cuales fueron anunciados el 7 de julio.

UN JURADO DE 7 INTEGRANTES

ELIGIÓ 40 PRESELECCIONADOS

EL 21 DE AGOSTO

20 PROYECTOS GANADORES

“TRABAJAR DESDE LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN ES ALGO QUE VENIMOS BREGANDO DESDE HACE MUCHO TIEMPO. CELEBRO QUE LA DEFENSORÍA HAYA HECHO ESTO”.

NÉSTOR GRANDA
JURADO

El gerente Artístico de la TV Pública, Oscar Gómez Alé, que también fue jurado del concurso, anunció que los trabajos se emitirán en la señal televisiva en distintas instancias de la programación, en las pautas publicitarias y como contenido específico de los programas. Y expresó: “Cuando me llegaron los guiones de los trabajos me pareció que lo más difícil era imaginarse cómo en un minuto se podía contar una historia que a la vez fuera interesante, nos represente y con poco presupuesto. Debo decir que lo lograron y la realidad es que lo hicieron mucho mejor de lo que me había imaginado”.

El director del Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y Género de Argentina LIBERCINE, y jurado, Néstor Granda, afirmó: “Trabajar desde la inclusión y la no discriminación es algo que venimos bregando desde hace mucho tiempo. Celebro que la Defensoría haya hecho esto. Creo que la mejor forma de resumirlo es decir que esto no fue magia”.

Tras recibirse 114 proyectos, el 27 de abril se inició el proceso de preselección de los 40 proyectos, los cuales fueron anunciados el 7 de julio.

El jurado compuesto por siete especialistas en género y audiovisual de reconocida trayectoria y una representante de las audiencias seleccionó el 21 de agosto los 20 proyectos ganadores de los 40 preseleccionados.

Y el 4 de septiembre se anunciaron las 20 producciones ganadoras, quienes tienen el desafío de realizar las producciones para comunicar desde un enfoque de derechos.

El jurado estuvo integrado por Dora Barrancos (Especialista en Género y Directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET- en representación de las Ciencias Sociales y Humanas), Mauro Cabral (Activista trans e intersex y co director de la organización internacional Global Action for Trans* Equality -GATE-), Carmen Guarini (Directora y productora audiovisual), Guillermo Elordi (Guionista de cine, coordinador del Cine Club del Centro Cultural “La Mandinga” de Formosa, actor y director de teatro), Néstor Granda (Director del Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y Género de Argentina, LIBERCINE), Horacio Arreceygor (Secretario General del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos -SATSAID- y de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina -COSITMECOS-), Oscar Gómez Alé (Gerente artístico de la TV Pública) y Lucía Larrañaga (en representación de las audiencias).

Además, se continuó apostando a la formación intensiva mediante el lanzamiento de la segunda cohorte del Programa de Actualización en Comunicación, Género y Sexualidades (PACGES) en articulación con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el apoyo para cursar el Diploma superior de Co-

municación y Género que dicta bajo la modalidad virtual la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.

Se trata de una política pública que implementa una especialización gratuita destinada a estudiantes y graduadas/os universitarios, periodistas y profesionales de medios de comunicación, docentes de todos los niveles, activistas, integrantes de organismos públicos e instituciones de la sociedad civil.

El PACGES cuenta con una carga horaria de 128 hs. y se cursa de abril a diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

La propuesta curricular está constituida por ocho materias: Teorías de géneros y sexualidades; Historia de las luchas de género y diversidad sexual en Argentina; Leyes y políticas públicas en torno a comunicación, géneros y sexualidades; Comunicación, educación y configuraciones sexogenéricas; Abordajes culturales y comunicacionales en torno a géneros y sexualidades; Ciudadanía sexual y de género: experiencias y prácticas de la cultura contemporánea; Taller de Producción I y Taller de Producción II. Comunicar géneros y sexualidades. Este recorrido académico se propone que las y los estudiantes aborden la articulación de comunicación, géneros y sexuali-

dades desde una perspectiva integral de derechos y ciudadanía y puedan apropiarse de las habilidades necesarias para la producción de sus propios lenguajes y materiales, con vistas a una intervención comunicacional y cultural en estos ámbitos.

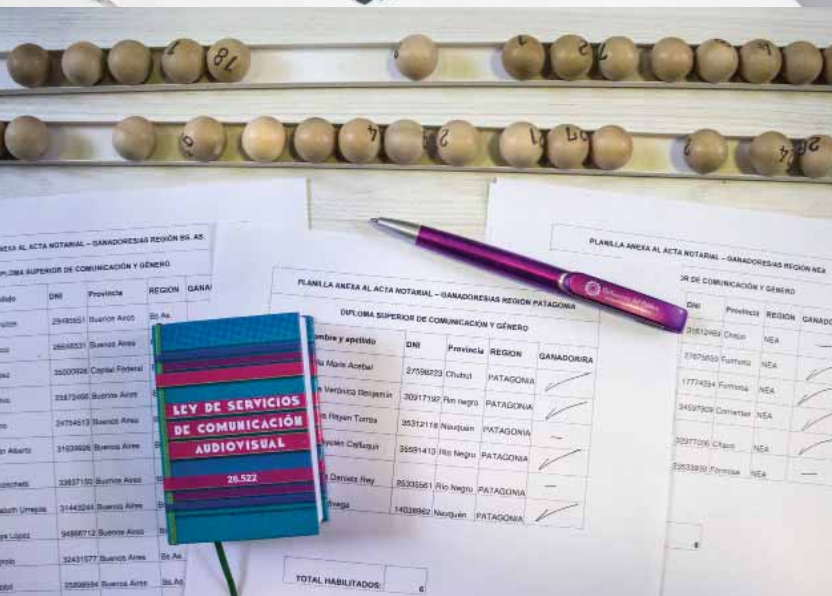
El PACGES cuenta con el asesoramiento de una comisión integrada por Dora Barrancos (CONICET/IIEGE), Claudia Laudano (UNLP), Sandra Valdetaro (UNR), Mario Pechen (CONICET/IIGG-GES), Gustavo Blázquez (CONICET/UNC), July Chaneton (UBA/IIEGE) y la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano.

El 11 de marzo tuvo lugar la apertura del período de postulaciones. Luego, se llevaron a cabo junto con la Facultad de Ciencias Sociales diversas entrevistas a las y los postulantes preseleccionados.

También se sostuvo una participación activa en el “Espacio de Articulación de los organismos del Estado nacional por la igualdad de género”, red que nuclea a organismos de los tres poderes del estado que diseñan políticas públicas vinculadas a la equidad de género. El aporte de la Defensoría del Público se basa en el diseño e implementación por segundo año consecutivo del Ciclo de capacitaciones “Políticas Públicas para erradicar la violencia contra las mujeres”.



» Zoom a los Derechos. Presentación de los 20 trabajos seleccionados. La Defensora junto a los ganadores, Oscar Gómez Alé, gerente artístico de la TV Pública, Néstor Granda, director del Festival Internacional de Cine sobre diversidad sexual y género de Argentina (LIBERCINE), la representante de las audiencias, Lucía Larrañaga, y la integrante de DOC Buenos Aires, Carmen Guarini.



» En 2015 se otorgaron 24 becas parciales para cursar la Diplomatura Superior de Comunicación y Género que dicta la Asociación Civil Comunicación para la igualdad.

DIPLOMA SUPERIOR DE COMUNICACIÓN Y GÉNERO

Con el objetivo de fomentar la capacitación especializada sobre los principios y derechos vinculados a la promoción de la equidad de género en la radio y la televisión, la Defensoría del Público convocó a concurso para otorgar 24 becas parciales para cursar la Diplomatura Superior de Comunicación y Género que dicta la Asociación Civil Comunicación para la igualdad.

Entre el 3 y 14 de agosto tuvo lugar el período de postulaciones. Así se recibieron 90 inscripciones de docentes que dictan materias vinculadas a medios, periodistas, comunicadores y comunicadoras de radio o televisión, de productoras audiovisuales y agencias de publicidad.

El 19 de agosto se realizó el sorteo de las 24 personas de las diferentes regiones del país que accederán a la beca parcial. El sistema de distribución federal permitió otorgar las medias becas a profesionales de Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Las becas parciales tienen la intención de contribuir a la formación especializada para promover en los medios la igualdad entre varones y mujeres, evitando tratos discriminatorios por género u orientación sexual, de acuerdo a lo establecido en la LSCA.

Quienes obtienen el apoyo de la Defensoría del Público, se comprometen a presentar informes que den cuenta de los aprendizajes y, al finalizar la Diplomatura, realizar una pieza audiovisual sobre un tema a elección con perspectiva de género vinculado a los derechos de las audiencias de la radio y la televisión.

La cursada se divide en dos tramos: de agosto a noviembre de 2015 y de marzo a junio de 2016. Se cursa de manera virtual e implica una carga horaria semanal de nueve horas. El programa comprende cuatro materias teóricas, dos seminarios y tres talleres: Desigualdad de género y medios de comunicación; Prácticas comunicacionales y género; Los feminismos en América y Europa; Derechos humanos, género y derecho a la comunicación; Masculinidades, derechos humanos y ciclos vitales; Geografías de las disidencias sexuales; Redacción y producción -comunicación en soporte gráfico y digital; Redacción y producción audiovisual; y Realización publicitaria con inclusión. La cursada se inició el 24 de agosto.

El 10 de septiembre tuvo lugar la primera tutoría de avance de la cursada a cargo de la Defensoría del Público. La segunda fue el 23 de septiembre.

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES

La Defensoría del Público otorgó 6 becas parciales (50%) para cursar la segunda cohorte de la Especialización en Gestión y Producción de Medios Audiovisuales, ciclo 2015-2016, que dicta el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba.

El objetivo es el desarrollo de conocimientos y herramientas técnicas para la planificación, producción, gestión y realización de prácticas comunicativas con perspectiva ciudadana. La carrera tiene una duración de 2 años (18 meses de cursada y 6 meses para el desarrollo de Prácticas Profesionales Supervisadas y la realización del Trabajo Final) y una carga horaria de 370 horas académicas obligatorias.

EL PLAN DE TRABAJO

La reflexión en clave de género y sexualidades sobre el rol de los medios como mediadores de la experiencia social y constructores de subjetividad se realiza en articulación con organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos de comunicación, medios de los tres sectores y organismos públicos. La Defensoría contribuye en la formación de trabajadores y trabajadoras de los medios como así también de estudiantes de distintas disciplinas del campo de la comunicación y el periodismo.

El plan de trabajo, impulsado desde 2014 en el marco del "Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios", fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 15 de diciembre de 2015 y busca



» Acto de cierre en la sede del organismo del "Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios".



» Segundo Encuentro Nacional de Familias LGBT con hijas e hijos.

implementar estrategias de transformación en las representaciones y en el tratamiento mediático de las desigualdades de género como un paso necesario para la desarticulación de diferencias socioculturales más profundas.

En 2015 se lanzó el campus virtual de la Defensoría del Público para promover la capacitación gratuita de comunicadores/as y docentes en comunicación de todo el país. El curso “Introducción a la perspectiva de género en los medios audiovisuales” se propone conocer el marco legal argentino en materia de comunicación y géneros; brindar herramientas para el análisis de producciones radiales y televisivas desde una perspectiva de géneros y sexualidades; promover coberturas periodísticas con enfoque de derechos humanos y reflexionar sobre el rol de comunicadores y comunicadoras en la producción de información socialmente relevante. Tiene una duración de siete semanas con una dedicación horaria total de 35 hs y se compone de cinco ejes temáticos sobre comunicación y género: el Derecho a la comunicación desde la perspectiva de las audiencias, derechos humanos de las mujeres, la construcción de las masculinidades, el modelo heteronormativo en crisis e identidad de género, un cambio cultural. En la convocatoria se inscribieron más de 400 personas de 23 provincias.

Esta línea de trabajo se propone incentivar la equidad de género en la radio y la televisión. Los caminos utilizados para cumplir con este objetivo son múltiples: charlas y talleres de sensibilización, cursos introductorios, programas de formación intensivos, edición y distribución de materiales de consulta, promoción de buenas prácticas y mesas de debate multiactorales.

EN TOTAL, DE LAS ACTIVIDADES PARTICIPARON 1619 PERSONAS Y SU TRABAJO IMPLICÓ 1032 HORAS.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

- El 12 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires, con el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAD) en el marco del Día de la Mujer.
- El 13 de abril, en San Miguel de Tucumán, con la Fundación María de los Ángeles.
- El 21 de abril, en Catriel, Río Negro, con el CEM 21, con medios de prensa local y con instituciones integrantes

- del Protocolo de Asistencia en Situaciones de Violencia de Género de Catriel.
- El 22 de abril, en Catriel, Río Negro, con el CEM 78 y con el CEM 21.
- El 23 de abril, en Catriel, Río Negro, con el Consejo Consultivo Consejo Local de la Mujer
- y con la ciudadanía y con el CEM 78.
- El 23 de abril, en Salta, con el Canal 9 y el Canal 11 en el marco de actuaciones.
- El 24 de abril, en Salta, con el canal 4, el canal 2 y la FM Aires.
- El 12 de mayo, en Córdoba, con el Centro de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba.
- El 14 de mayo, en San Juan, con el Grupo La Juana, la Escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento y el Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan.
- El 15 de mayo, en Posadas, Misiones, con estudiantes universitarios.
- El 19 de mayo, en Ciudad de Buenos Aires, con el programa AM, producido por ENDEMOL.
- El 22 de mayo, en Mar del Plata, Buenos Aires, con el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).
- El 29 de mayo, en Formosa, con el Círculo Profesional de Comunicadores Sociales.
- El 29 y 30 de mayo, en Mar del Plata, Buenos Aires, con el Seminario Permanente de DD.HH. De la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de esa ciudad.
- El 30 de mayo, en Formosa, con la ciudadanía y el Instituto de Género de la Universidad Nacional de esa localidad.
- El 3 de junio, en la marcha "Ni una menos" realizada en la Plaza de los Dos Congresos de la Ciudad de Buenos Aires.
- El 4 de junio, en Rosario, Santa Fe, con la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario.
- El 5 de junio, en Corrientes, con comunicadores y comunicadoras locales.
- El 8 y 22 de junio y 6 de julio, en Morón, con el Consejo Municipal de Mujeres.
- El 12 de junio, en El Dorado, Misiones, con la Biblioteca popular Ernesto Guevara, periodistas y ciudadanía.
- El 13 de junio, en Pozo Azul, Misiones, con la Red de Radios Escolares de Misiones y con docentes y estudiantes de escuelas primarias y terciarias.
- El 25 de junio, en Paraná, Entre Ríos, con las organizaciones Conders y Red Alerta y con el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPYC).
- El 6 de julio, en Mar del Plata, Buenos Aires, con el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM).
- El 15 de julio, en Ciudad de Buenos Aires, con la Federación Argentina de LGTB y con 100% Diversidad y derechos, en el marco de los cinco años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario.
- El 29 de julio, en La Plata, Buenos Aires, con Radio Estación Sur.
- El 31 de julio, en Corrientes, con el Movimiento ConGenero y la ciudadanía.
- El 7 de agosto, en San Miguel de Tucumán, con la Asociación de Prensa de Tucumán y la ciudadanía.
- El 8 de agosto, en Concepción, Tucumán, con la Asociación de Prensa de Tucumán y la ciudadanía.
- El 15 de agosto, en el Segundo Encuentro Nacional de Familias LGBT organizado por 100% Diversidad y derechos.
- El 25 y 26 de agosto, en Rafaela, Santa Fe, en articulación con Revista Mural.
- El 26 de agosto se trabajó en Berazategui, Buenos Aires, con el Colectivo De a pie.
- El 27 de agosto, en Ciudad de Buenos Aires, con el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).
- El 28 de agosto, en Villa María, Córdoba, en articulación con el PUCARA (Programa Universitario de Comunicación Audiovisual de la República Argentina) de la Universidad Nacional de Villa María. Y continuaron las clases el 5 y 19 de septiembre.
- El 4 de agosto, en Mar del Plata, Buenos Aires, con el Instituto de Formación Docente N°19.
- El 11 de septiembre, en General Roca, Río Negro, con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue.
- El 22 de septiembre, en San Pedro, Buenos Aires, con organizaciones sociales y comunicadores/as locales.
- El 30 de septiembre, en Morón, Buenos Aires, con el Frente de Mujeres Nuevo Encuentro y con la Tecnicatura de Comunicación Popular de la Universidad Nacional de la Plata. La Defensora del Público estuvo junto a la senadora provincial Mónica Macha, Alicia Ramos (AFSCA) y Ayelén Sidún (Universidad Nacional de La Plata).
- El 30 de septiembre, en Villa Dolores, Córdoba, con la Fundación Jakaira Traslasierra.
- El 3 de octubre, en San Salvador de Jujuy, con periodistas, estudiantes y ciudadanía organizado por la Asociación Civil "Mujeres en acción".
- El 5 de octubre, en Orán, Salta, con estudiantes, periodistas, integrantes de Fuerzas de Seguridad y ciudadanía organizado por el Ministerio de Justicia de Salta y el Representante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) por Salta.

- El 5 de octubre, en Avellaneda, Buenos Aires con comunicadores/as y estudiantes de comunicación.
- El 6 de octubre, en Salta, con abogados/as y estudiantes de abogacía y con periodistas, organizado por el Ministerio de Justicia de Salta y el Representante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) por Salta.
- El 7 de octubre, en Salta, con periodistas, estudiantes y ciudadanía organizado por el Ministerio de Justicia de Salta y el Representante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) por Salta.
- Del 10 al 12 de octubre, en el 30° Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata, Buenos Aires.
- El 22 de octubre, en Merlo, San Luis, con jóvenes de 4to, 5to y 6to año, y con el Colectivo de Mujeres organizadas contra la violencia.
- El 26 de octubre, en Córdoba, con estudiantes de Comunicación, Psicología y Trabajo social de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
- El 16 de marzo, con el Espacio de Articulación de los organismos del Estado nacional por la igualdad de género.
- El 10 de junio, con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- El 17 de julio, en Ciudad de Buenos Aires, con el Equipo de orientación y articulación comunitaria en problemáticas de riesgo del área programática del Hospital de Agudos José María Penna.
- El 23 de julio, en Ciudad de Buenos Aires, en el panel "Clases, ciudad y género" organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación.
- El 15 de septiembre se acordó con el Gobierno de Salta la articulación de talleres sobre Comunicación y Género.
- El 24 de septiembre, la Defensora del Público inauguró el ciclo de talleres sobre "tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación" junto a Sigrid Kunath (Senadora Nacional), Blanca Osuna (Intendente de Paraná), Gabriela Bergomás (Decana Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Nacional de Entre Ríos) y Fernando Miguez (Periodista). Luego, el mismo 24 se desarrollaron actividades en Paraná y Victoria, Entre Ríos. El 28 de septiembre se trabajó en Concordia. Y el 30 de septiembre, en Concepción del Uruguay.
- El 22 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Programa de Género y Justicia del Centro de Información Judicial (CIJ).

ARTICULACIÓN ESTATAL

- El 11 y 12 de marzo se realizó una capacitación interna en la sede del organismo con el Observatorio de Género y Justicia de Ciudad de Buenos Aires.
- El 12 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Cierre del Encuentro "Construyendo instituciones sensibles



» La Defensoría participó del lanzamiento de la II cohorte del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades (PACGES), una iniciativa en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

- El 17 de abril la Defensora del Público participó de la Apertura de la II Cohorte del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades (PACGES).
- El 28 de agosto tuvo lugar la primera clase a cargo de la Defensoría del Público.
- El 4 de septiembre tuvo lugar la segunda clase en la II Cohorte del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades (PACGES), a cargo de la Defensoría. La tercera fue el 25 de septiembre.

FORMACIÓN VIRTUAL

- El 13 de abril se realizó la convocatoria a 370 personas al curso de Introducción a la perspectiva de género en los medios audiovisuales, a cargo del organismo.
- El 15 de junio se llevó a cabo la inscripción. Se recibió la postulación de 35 comunicadores y comunicadoras.
- El 6 de julio tuvo lugar la primera clase. El 13 de julio, la segunda. El 20 de julio, la tercera. El 27 de julio, la cuarta. El 3 de agosto, la quinta. El 10 de agosto, la sexta. El 18 de agosto, la séptima y última clase.
- El 24 de agosto tuvo lugar la primera clase de la segunda edición del curso.
- El 1 de septiembre se llevó a cabo la segunda clase de la segunda edición del curso. El 7 de septiembre, la tercera. El 14 de septiembre, la cuarta. El 21 de septiembre, la quinta. El 28 de septiembre, la sexta.

ABORDAJES DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Como correlato de la movilización social contra los femicidios y la violencia de género que se expresó durante 2015 en todo el país, la Defensoría continuó recibiendo reclamos sobre la cobertura que algunos programas han realizado de distintas formas de violencia hacia las mujeres. En las situaciones analizadas predominan abordajes que tienden a culpabilizar a las víctimas y responsabilizarlas por las violencias padecidas.

Estas observaciones tuvieron como consecuencia la decisión de la Defensora del Público de continuar profundizando, a través de encuentros, capacitaciones y herramientas

específicas, en las pautas que surgen de las leyes 26.522 y 26.485 para realizar coberturas periodísticas responsables y respetuosas de las audiencias y de las personas involucradas en los casos que se tratan.

Entre el 24 y el 30 de septiembre se llevó adelante en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos el ciclo de talleres para dialogar y reflexionar sobre el “Tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación”, dirigido a trabajadores y trabajadoras de la comunicación, profesionales de distintos ámbitos, estudiantes y organizaciones sociales. La iniciativa fue organizada por la Defensoría del Público, la Senadora Nacional por Entre Ríos Sigrid Kunath y el Consejo provincial de Prevención de la Violencia (Coprev).

Durante los talleres se compartió la tarea institucional de la Defensoría del Público, las normas vigentes para el abordaje de las violencias contra las mujeres en los medios y materiales audiovisuales para el diálogo y la reflexión. De las actividades, que se realizaron en las ciudades de Paraná, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay, participaron más de 500 personas de diferentes profesiones vinculadas a la comunicación, la salud y la educación, además de estudiantes, referentes de organizaciones e integrantes de fuerzas de seguridad y de organismos públicos. Luego de las capacitaciones se compartieron guías de tratamiento periodístico con perspectiva de derechos, materiales de difusión y ejemplares de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El lanzamiento de las capacitaciones se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Paraná, ante más de 200 participantes, con la presencia de la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano; la senadora nacional por Entre Ríos, Sigrid Kunath; la intendenta de Paraná, Blanca Osuna y la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de UNER, Gabriela Bergomás. En la ocasión, Ottaviano remarcó que “no hay que vivir la comunicación con ajenidad, hay que participar”. Y, a su turno, la senadora Kunath recordó que “con la Defensora del Público trabajamos en el proyecto para instituir el 11 de marzo como Día Nacional de Lucha Contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, que ahora es Ley”.

RECOMENDACIONES LUEGO DEL RECLAMO DE LAS AUDIENCIAS

En virtud de la trascendencia de esta problemática en nuestra sociedad y considerando las herramientas y acciones que los/as comunicadores/as pueden desarrollar para contribuir a erradicar las formas de violencias contra las mujeres, se realizó de manera colectiva una serie de recomendaciones

PREDOMINAN ABORDAJES QUE TIENDEN A CULPABILIZAR A LAS VÍCTIMAS Y RESPONSABILIZARLAS POR LAS VIOLENCIAS PADECIDAS

para los tratamientos responsables de las violencias contra las mujeres y la discriminación por géneros que fueron difundidas en todo el país.

En concreto, el 14 de octubre de 2015, a raíz de los reclamos recibidos que expresaban preocupación por la forma en que se estaba realizando la cobertura periodística de la muerte de Diana Sacayán, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual reiteró la necesidad de llevar adelante una cobertura respetuosa de los derechos que evite una mediatización sensacionalista, espectacularizante y estigmatizante de lo ocurrido.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Identidad de Género, de plena vigencia en la Argentina, protegen los derechos a la dignidad, a la imagen, a la vida privada y a la intimidad personal, familiar y de sus allegados. Por eso resulta fundamental que la cobertura del caso se base en la responsabilidad social que atañe a los medios audiovisuales de modo, incluso, de no afectar el curso de la investigación.

La Defensoría recomienda que quienes trabajan en los medios audiovisuales:

- Consulten y recurran a la mayor pluralidad de fuentes posibles, evitando que la información se base, por ende, en una fuente única.
- En caso de que la información que se produzca en las próximas horas refiera a una situación de violencia por motivos de género, resulta fundamental consultar a funcionarios/as públicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de diversidad sexual y de identidades de géneros para analizar la situación en su complejidad y brindar información socialmente relevante acerca de una problemática que afecta a todo el país.
- Evitar la estigmatización de la víctima, en particular en razón de su identidad de género y, consecuentemente, evitar el trato discriminatorio hacia ella y/o su entorno.
- Respetar el vallado dispuesto en las inmediaciones del domicilio de Sacayán de modo de no vulnerar la intimidad de quienes están viviendo una situación dolorosa y de quienes se encuentran trabajando para esclarecer lo ocurrido.

Desde el Consejo Nacional de las Mujeres adhirieron y aconsejaron seguir las “Recomendaciones para una cobertura periodística respetuosa, no estigmatizante ni espectacularizante de la muerte de Diana Sacayán” publicadas por la Defensoría del Público, y agregaron que “de la misma manera hacemos extensiva la recomendación hacia los medios gráficos y digitales, además de los televisivos y radiales. Destacamos la importancia de comunicar de manera de que no vulnere derechos. Junto a esto, hacemos expresa la necesidad de que esta práctica se sostenga para todo el colectivo de personas trans y de mujeres”.

En relación con los femicidios, la Defensoría recibió cuestionamientos por el modo de abordaje, en particular en relación con el tratamiento de las víctimas.

En el programa “26 Directo” de Canal 26 fue objetada la cobertura de un femicidio en la provincia de Corrientes, por la revictimización de la adolescente víctima a quien la cobertura terminaba responsabilizando por su propio desenlace.

Las acciones instrumentadas constan de la realización de un informe interdisciplinario, la invitación a dialogar en procura de reflexionar y ser conscientes de la legislación vigente y la vulneración de derechos que se pueden ocasionar, así como la realización de capacitaciones y la distribución de material pedagógico.

En Crónica TV se cuestionó la utilización del concepto “crimen pasional” para referir a un femicidio cometido en plena vía pública por un hombre contra su ex pareja. Tal como fue planteado en el diálogo con la representante de la señal, se recomienda evitar la utilización de conceptos como “crimen pasional” o “drama pasional” ya que la asociación del amor o la pasión con el hecho de violencia banalizan la problemática, a la vez que culpabilizan a la víctima y respaldan la acción violenta de los agresores al justificarla en estas emociones. Al contrario, la utilización de femicidio o feminicidio da cuenta de que el hecho ha sido un homicidio por razones de género y que no se trata de un hecho policial, sino social, histórico y cultural.

En el mismo sentido, la Defensoría recibió diversos reclamos que cuestionaron los programas “Bien de Verano” y “Este es el Show”. Específicamente se objetó la presentación de una anécdota vinculada a Gerardo Sofovich que refiere a un supuesto plan del empresario para matar a su ex esposa y luego suicidarse, ello en tanto es relatado por los/as panelistas como un gesto de amor, expresión de la “pasión” y la “locura que le despertada esa mujer”.

A raíz de ello, la Defensoría realizó encuentros con los productores de ambos programas, durante los que puntualizó que el problema radica en los abordajes que no lograron

dimensionar la “anécdota” relatada referida a la intencionalidad no concretada de cometer un femicidio. Por el contrario, las intervenciones de los/as panelistas proponían romantizar el supuesto plan de Sofovich y adjudicar a la intención criminal un velo amoroso que lo disculparía.

La Defensoría recibió además un cuestionamiento sobre el abordaje brindado a un caso de femicidio y el tratamiento que se otorgó a una persona amiga de la víctima, supuesta responsable del hecho, en el programa “Nosotros al medio día”. Se adoptó una postura criminalizante sobre la joven y su entorno debido a sus padecimientos mentales.

La Defensoría transmitió tanto a la licenciataria como a la productora audiovisual del ciclo, Endemol Shine Argentina, la necesidad de realizar tratamientos responsables y respetuosos de los derechos de todas las personas, en las coberturas de problemáticas complejas como la violencia contra las mujeres.

También se hizo hincapié en los derechos de las personas con padecimientos mentales. Si bien la Defensoría había mantenido en 2014 un encuentro con el equipo del programa en el marco de otra actuación, el nuevo reclamo ratificó

la necesidad de volver a profundizar estas temáticas con el equipo realizador del ciclo.

La Defensoría recibió un reclamo vinculado al abordaje que se brindó, en un programa de la señal América 24, a una denuncia sobre abuso sexual contra una mujer. Como en los casos de femicidio antes reseñados, el tratamiento se basó en una mirada culpabilizante sobre la presunta víctima de violencia sexual. En el diálogo que se desarrolló durante el programa, se impuso sobre la joven la sospecha —señalando supuestos descuidos, equivocaciones y falta de precaución— generando una fuerte revictimización. Estos abordajes tienden a reforzar un imaginario social y cultural que ubica en las mujeres la responsabilidad por la violencia padecida.

En función de este y otros reclamos referidos a coberturas de América TV y A24, la Defensoría realizó una reunión de intercambio y capacitación con los equipos periodísticos, oportunidad en que todos los temas fueron materia de reflexión en diálogo con las normas que protegen a las mujeres contra la violencia y con la responsabilidad social que los medios audiovisuales tienen al momento de cubrir estos temas.



» En el “Seminario Latinoamericano de Comunicación y Género”, junto a María Rigat (Fundación Friedrich Ebert) y Sandra Chaher (Comunicar Igualdad).

**ES FUNDAMENTAL
LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS COMO
LA DIGNIDAD Y
LA REPUTACIÓN,
Y EL RESPETO
AL PRINCIPIO
DE INOCENCIA
MIENTRAS NO
HAYA SENTENCIA
FIRME**

Luego de doce reuniones convocadas por la Defensoría del Público y realizadas en todas las regiones de Argentina denominadas "Buenas prácticas: Equidad de género en la radio y la televisión", entre julio y octubre de 2014, se elaboraron una serie de recomendaciones que fueron sistematizadas en diez puntos:

- 1/ Tener presente que existen distintos tipos de violencia contra las mujeres: física, psicológica, sexual, económica y simbólica; y modalidades: doméstica, institucional, laboral, mediática, obstétrica y contra la libertad reproductiva. (Ley 26.485)
- 2/ Focalizar la cobertura en la prevención y la sensibilización social sobre la problemática. Se recomienda no espectacularizar o frivolar la noticia, ni confundir interés social con morbo.
- 3/ Dar a conocer los datos de la víctima sólo si se cuenta con su autorización. Es fundamental preservar su integridad, dignidad e imagen. En caso de femicidios se desaconseja la exposición reiterada de imágenes de la víctima.
- 4/ Incluir en la cobertura información socialmente relevante: números de asistencia (en todo el país: Línea 144 – atención, contención e información), formas de hacer la denuncia, derechos de las personas y obligaciones del Estado, etc.
- 5/ Preguntarse si todos los elementos utilizados en la noticia (la música, el videograph, las imágenes, el lenguaje, los efectos, los testimonios, etc.) contribuyen a una cobertura responsable y respetuosa o dramatizan la información.
- 6/ Promover la multiplicidad de fuentes. Se desalienta el uso exclusivo de fuentes secundarias o privadas (vecinos/as, familiares, amistades, etc.) Procurar que los testimonios y el tratamiento periodístico en general, no produzcan el efecto de desacreditar a la víctima.
- 7/ Para evitar el posible "efecto imitación", especialistas consultados por la Defensoría desaconsejan difundir detalles precisos y reiterados sobre el modo en que se ejerció la violencia.
- 8/ Cuando se trata del asesinato de una mujer por razones de género se sugiere hablar de femicidio. Evitar el uso del concepto "crimen pasional" porque se culpabiliza a la víctima y se respalda la acción violenta del agresor.
- 9/ Intentar que la información no se base únicamente en fuentes de las fuerzas de seguridad. Consultar a funcionarios/as públicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la temática para analizar la problemática en su complejidad.

10/ Procurar que el discurso en su totalidad sea conjetural y no afirmativo, ya que la difusión del caso tendrá impacto a largo plazo en la vida de las personas implicadas. Es fundamental la protección de derechos como la dignidad y la reputación, y el respeto al principio de inocencia mientras no haya sentencia firme.

Al mismo tiempo, la Defensoría recibió una serie de presentaciones que cuestionaron el abordaje de la temática de la trata de personas en el programa “Zapping” emitido por América TV y producido por Eyeworks 4K.

En la reunión con representantes del canal, la productora y un productor del ciclo se dialogó sobre la importancia de realizar abordajes respetuosos cuando se tratan temas complejos y de gravedad social como es la trata de personas y otras formas de violencias hacia las mujeres.

El productor se comprometió a realizar una reflexión al aire respecto al abordaje que se brindó a la problemática, lo cual se concretó unos días después. El canal informó al respecto: “habiendo considerado las sugerencias de la Defensoría en la enriquecedora reunión llevada a cabo el pasado 10 de marzo, el panel del programa Zapping realizó una reflexión al respecto de la temática en cuestión”. La aclaración incluyó el siguiente pasaje: “...somos muy conscientes de la problemática nacional e internacional de la trata de personas y la explotación sexual y como comunicadores sociales, por supuesto, estamos comprometidos con difundir la lucha contra la trata de personas”.

Otro reclamo hizo hincapié en el programa “Duro de Dumar” que emitió un informe sobre el acoso callejero a partir del testimonio de una víctima de esta situación, que se difundió en redes sociales. Las denuncias cuestionaron el abordaje, principalmente por considerar que existía una confusión entre el halago (piropo) y el acoso callejero, que no contemplaba al acoso callejero como una forma de violencia contra las mujeres y producía un efecto banalizador de los hechos.

La Defensoría se reunió con el productor de “Duro de Dumar”, quien se comprometió a realizar una aclaración al aire respecto al tratamiento que se brindó a la problemática en la emisión objetada.

En función de este compromiso, en un programa posterior se trató nuevamente la temática de la violencia contra las mujeres, se brindó información socialmente relevante y se hizo referencia a la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Además, los/as panelistas informaron sobre la marcha que fue conocida como “Ni una Menos” que se realizó el 03 de junio en todo el país en repudio de las violencias contra las mujeres.

La Defensoría recibió una serie de reclamos que cuestionaron la publicidad “Mujeriegas” de Alto Palermo Shopping emitida en ocasión del Día de la Mujer. La publicidad objetada igualaba a las mujeres en torno a una serie de gestos que representan la envidia, la falta de sinceridad y compañerismo, que eran atribuidos a los vínculos entre ellas y propuestos como expresión de una conducta propiamente femenina. La publicidad celebraba aquellas características negativizantes que fueron atribuidas sin distinción a todas las mujeres.

Los reclamos del público y el análisis de la Defensoría fueron transmitidos a las personas responsables de la realización de las publicidades de Alto Palermo Shopping, quienes manifestaron que tendrían en cuenta estas observaciones para enriquecer la producción de futuras piezas publicitarias.

Otros reclamos planteados por el público sobre esta temática, se refieren a la publicidad “Aproveching” de la marca John Foos. Esta publicidad tuvo un enfoque que dio lugar a la legitimación y reproducción de estereotipos suponiendo una representación reduccionista, objetivadora y sexualizante de las mujeres, y por ello la Defensoría mantuvo un encuentro con una representante de la marca y con el responsable Rasti Films, la agencia productora de la publicidad.

En virtud de este diálogo, la marca decidió efectuar una versión reducida de la publicidad “Aproveching” que se adaptara a las pautas que la LSCA establece sobre trato igualitario y no estereotipado de hombres y mujeres en los medios audiovisuales.

Sin perjuicio de ello, la Defensoría continuó recibiendo presentaciones por la emisión, en señales de televisión, de una versión que conservaba pasajes de la original. Por este motivo transmitió estos nuevos reclamos y en respuesta John Foos informó la decisión de dar de baja la pieza publicitaria objetada.

En relación con las programaciones, la Defensoría recibió reclamos por el trato a una bailarina por el actor y político Miguel del Sel en su carácter de invitado al programa “Folclorismo” de Canal 26.

“Así la enfocamos a la negra”, sostuvo al tomar de la cintura a la bailarina y ubicarla a su lado. “Casi te toco la colita” dijo luego entre risas para agregar mirando a la bailarina retirarse del estudio, “qué lindo que baila! Y también con ese tacho si no baila bien hermano!”.

La Defensoría transmitió a la producción del ciclo y a Canal 26 que en la emisión objetada se produce un efecto cosificador de la mujer y remarcó que pese a que los comentarios cuestionados corresponden a un invitado al programa, resulta fundamental generar herramientas que permitan evitar la naturalización de prácticas cosificadoras en los medios au-

diovisuales, teniendo en cuenta la responsabilidad social de quienes realizan televisión y radio. La LSCA prevé, además de esta responsabilidad, que la obligación de trato igualitario, no discriminatorio ni sexista.

La conquista de derechos generada en el plano normativo, ha generado dificultades en su abordaje por parte de los servicios de comunicación audiovisual. Así, diversos reclamos de las audiencias han permitido identificar burlas, ridiculizaciones y sornas agraviantes sobre identidades de género u orientaciones sexuales en el marco de las programaciones.

Un reclamo recibido por este organismo tuvo lugar a raíz del segmento "La Hora Gay" del programa radial Bien Levantado, emitido por Radio FM Pop 101.5.

En este marco se recibió una presentación que señaló que en dicho segmento del programa se proponía a los oyentes que "acusen de gay" a las personas. Luego de analizar la pieza, la Defensoría identificó que el mencionado fragmento resultaba discriminatorio, lesivo y estigmatizante para los varones homosexuales y las personas trans ya que el conductor proponía a los oyentes "denunciar" a través de sus llamados ("denunciar", "delatar", "mandar en cana") a personas gays que conocieran. Ello traía como resultado que los oyentes desplegaran una significación despectiva del "ser gay"

que además de que este segmento se emitía en el horario apto para todo público.

La Defensoría convocó en diversas oportunidades al licenciario para conversar y reflexionar sobre el reclamo, el análisis interdisciplinario realizado, y los derechos del público en el marco jurídico vigente. Ante la falta de respuesta, se transmitieron estas cuestiones al AFSCA, a los fines de que dicha autoridad tome las medidas correspondientes.

Otros reclamos fueron por una emisión del programa radial "De caño vale doble" emitido por Radio Belgrano y tiempo después por Radio 10. En el programa se realizaba un cuestionario denominado "cuestionario Dalla Libera" donde se realizaba una pregunta al entrevistado: "Para una noche de pasión, ¿con una travesti o con un señor? [...] Sí o sí tenés que escoger, [...] te ponen una pistola en la cabeza, eh".

Si bien los reclamos cuestionaban la respuesta del entrevistado, la Defensoría identificó que la pregunta realizada por los conductores se anclaba en un paradigma heterossexual prejuicioso según el cual cualquier otra opción por fuera del encuentro sexual entre varones y mujeres resulta una alternativa improbable, pasible de burla estigmatizante.

A ello se debe sumar el silencio de los conductores a la hora de recibir la respuesta, que conllevaba a un desconoci-



» En las charlas se reitera la necesidad de llevar adelante una cobertura periodística respetuosa que evite una mediatización sensacionalista y estigmatizante de lo ocurrido.

miento público de los avances, reconocimientos y reivindicaciones que el colectivo conformado por las personas LGTBIQ han logrado en los últimos años y que ha cristalizado en las normativas vigentes en materia de igualdad de identidades de género.

En este marco, se mantuvo una reunión con el conductor del programa, quien propuso reformular la pregunta, de modo que no resulte lesiva para las audiencias. En dicho encuentro se brindaron además materiales elaborados por este organismo con la finalidad de aportar herramientas sobre tratamiento plural, igualitario y no discriminatorio.

En tanto, un reclamo tuvo lugar en el marco de un informe del programa Bendita TV que se emite por Canal 9. El reclamo identificó ridiculizaciones y estigmatizaciones hacia las personas trans. Se realizaban alusiones despectivas y, por momentos, irrespetuosas de la identidad de género de la joven protagonista. Si bien el informe reponía, en su desarrollo, material de archivo que correspondía, incluso, a un período previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género, tanto la introducción propuesta por el conductor como la selección, edición y el montaje construidos por el programa, proponían un sentido estigmatizante de las representaciones del colectivo trans, desconociendo conquistas en materia de derechos y diversidad sexual.

A raíz del planteo recibido y el análisis realizado, la Defensoría se reunió con integrantes de la productora del programa y el gerente de programación de Canal 9. En el marco de diálogo propiciado en la reunión, el productor ejecutivo del programa propuso realizar un nuevo informe en el marco del programa, que contemple un abordaje de la identidad de género con criterios inclusivos y respetuosos de la normativa vigente, dentro de los matices humorísticos que caracteriza al programa.

La Defensoría ha recibido diversas presentaciones que ponen de manifiesto el desconocimiento existente en el marco de las emisiones de los servicios de comunicación audiovisual del derecho de todas las personas a que se respete tanto su identidad de género como su orientación sexual.

Una persona se dirigió a la Defensoría manifestando que en el programa radial "Otro hermoso día en útero" emitido por Radio Estación Sur de La Plata FM 91.7, el conductor se refirió despectivamente a su orientación sexual.

El análisis interdisciplinario realizado por la Defensoría identificó que en la conversación mantenida entre el conductor y quien realizó la presentación, expresiones tales como: "¿En serio sos un hombre? ¿Te gustan las chicas?"; "¿Por qué sos tan femenino en el tono de la voz?", las cuales evidenciaban una mirada irrespetuosa de la orientación sexual del participante y fuertemente heteronormativa.

LA DEFENSORÍA HA RECIBIDO DIVERSAS PRESENTACIONES QUE PONEN DE MANIFIESTO EL DESCONOCIMIENTO EXISTENTE EN EL MARCO DE LAS EMISIONES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DEL DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS A QUE SE RESPETE TANTO SU IDENTIDAD DE GÉNERO COMO SU ORIENTACIÓN SEXUAL

No obstante, cabe señalar que luego de que la Defensoría transmitiera el reclamo, tanto la organización a la que pertenece la emisora como el conductor del programa, reflexionan sobre los hechos y pidieron disculpas por lo sucedido. Asimismo, en una emisión posterior, el conductor ofreció disculpas a las audiencias de la radio.

Por último, cabe agregar que la Defensoría realizó además una actividad de capacitación junto al conductor del programa, integrantes de los equipos de realización de la Radio y otros comunicadores de distintos programas de la emisora, donde se profundizó sobre el derecho a la igualdad y no discriminación y se abordaron los derechos del público contemplados en el marco jurídico vigente, incluyendo el derecho a la comunicación y los objetivos establecidos por la LSCA.

Por último, cabe mencionar un reciente reclamo recibido por este organismo en relación a los comentarios vertidos en el programa radial "Lanata sin filtro" emitido por Radio Mitre AM 790. La denuncia cuestionaba los dichos proferidos por el conductor en relación a una persona trans, la "conductora y actriz Florencia Trinidad o Florencia de la V".

Tras realizar la escucha del fragmento cuestionado, la Defensoría identificó que los dichos objetados formaron parte de los comentarios planteados, a modo de balance, sobre la entrega de los premios Martín Fierro de 2015.



» La Defensoría se reunió con representantes de organizaciones afrodescendientes.

En este marco, el conductor refirió a una fotografía de Florencia Trinidad, publicada en varios medios gráficos y de Internet, en la que la conductora y actriz se encontraba posando durante su participación en la ceremonia de entrega de los mencionados premios y planteó: “Che, me mandan una foto preocupante”, tras lo cual, ante la insistencia enfática de sus compañeros de programa, aclaró: “Nadie habla de la foto de Flor de la V que se le notaba el micrófono” aludiendo al órgano sexual, es decir, al sexo biológico de la actriz, con el propósito de desconocer su identidad de género autopercebida en tanto mujer.

Los comentarios vertidos por los compañeros del programa del conductor, quienes le indican “Te van a multar”, “Atención INADI”, evidencian –y confirmaban- la intencionalidad lesiva de las palabras emitidas al aire. Así, la fotografía en cuestión fue utilizada para ratificar lo que el conductor ya ha dicho acerca de Florencia Trinidad. Y, en este caso, no se trataba únicamente de negar su identidad de género, sino de ofrecer ante la audiencia las pruebas que así lo demuestran. En este sentido, las palabras del conductor resultaron sumamente ofensivas y discriminatorias, pues negaron el derecho a su identidad a quien resulta objeto de su referencia.

MESA SOBRE REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS DE AFRODESCENDIENTES

El 2 de octubre se realizó la mesa-debate “¿Qué decimos cuando decimos ‘negro’ en los servicios de comunicación audiovisual?”, en función de un conjunto de denuncias recibidas por esta Defensoría sobre representaciones mediáticas de afrodescendientes y atento a un reclamo de la Agrupación Xangó. Además de ésta, participaron de la actividad otras organizaciones de afrodescendientes, religiosas, migrantes, territoriales, como así también académicos/as y trabajadores/as de la comunicación y la cultura vinculados a la temática. Durante el debate, en base a las distintas experiencias, se propusieron distintos ejes para la elaboración de un documento con recomendaciones para los/as trabajadores/as de la comunicación en relación al tratamiento de la información sobre afros.

Finalmente, y en el marco del “Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la Cultura Afro”, celebrado el 8 de noviembre, se presentó un decálogo para contribuir al tratamiento mediático respetuoso y responsable de la diversidad étnico-cultural en los medios audiovisuales

“ES IMPRESIONANTE LA CAPACIDAD QUE HAN TENIDO DE GESTIONAR QUEJAS O RECLAMOS DE LA CIUDADANÍA Y LLEVARLAS A UNA RESOLUCIÓN CONSENSUADA CON LOS PRODUCTORES DE MEDIOS Y CON LOS CIUDADANOS”.

OMAR RINCÓN

PROFESOR ASOCIADO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DE COLOMBIA Y DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN PERIODISMO (CEPER)



MONITOREOS

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El 20 de mayo, en la sede del organismo, por segundo año consecutivo, la Defensoría presentó el Informe Anual de los Monitoreos de Programas Noticiosos de Canales de Aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “¿Qué es noticia en los noticieros?”.

Esta vez se dio a conocer el informe anual de monitoreos de noticieros de canales de aire 2014, con la exposición de los principales datos cuantitativos y cualitativos. La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano; el director de Análisis, Investigación y Monitoreo, Gerardo Halpern, y Lucía Ariza y Luciano Beccaría, integrantes de la misma dirección, presentaron el trabajo que luego fue analizado por el editor responsable de *Telefé Noticias*, Mariano Besada; el gerente de noticias de Canal 9, Marcelo Antín; el subgerente de noticias de la TV Pública, Víctor Taricco; y la productora ejecutiva de *América Noticias*, María Ripa Alsina, junto a la Defensora.

El documento analizó 14.528 noticias de los cinco canales de la Ciudad de Buenos Aires: Canal 9, Canal 13, TV Pública, *Telefé* y *América*. Abarcó un tiempo total de 554 horas, 21 minutos y 41 segundos con un promedio de duración por noticia de 2 minutos y 17 segundos. Las temáticas más frecuentes fueron “Polciales e Inseguridad” con un (22,8%); Información General (16,5%); Política (15,8%); Deportes (13,4%) y Espectáculos (10,9%).

“A esta altura de las democracias necesitamos profundamente una televisión y una radio que sean inclusivas, que nos representen y ponerlas al servicio de nuestras palabras, de nuestras identidades y también de nuestras necesidades”, expresó Ottaviano. Y agregó: “Ahora es tiempo de cambiar

esos criterios periodísticos mercantilistas, clasistas, porque producen vulneraciones de derechos y también discriminan”.

Mariano Besada, de *Telefé*, calificó el debate como “una instancia súper interesante” y aseguró: “Venimos demostrando que hay una intención de corregir las cosas que evidentemente vemos que hacemos mal, y muchas las hemos corregido”.

Por su parte, María Ripa Alsina, de *América TV*, brindó su perspectiva respecto al informe presentado: “Yo no sé si la gente se informa a través de los noticieros. Creo que la gente mira informada a los noticieros y los noticieros les dan una opinión de aquellas cosas de las cuales ya está enterada. Nosotros estamos haciendo programas en lugar de noticieros. Me pareció interesante este informe porque habla de un montón de elementos que te llevan a que a vos te cuenten una pequeña película que es una nota, una película que alguien la relata de determinada manera”.

Víctor Taricco, de la TV Pública, destacó: “Toda esta serie de planteos que son correctos desde la perspectiva de los derechos de las audiencias también tienen que entrar en diálogo con esas dinámicas y esas prácticas productivas”.

Por otra parte, Marcelo Antín, de Canal 9, también hizo sus observaciones del monitoreo y vislumbró que la realidad televisiva se puede cambiar siempre que haya una variación en las conductas. “Creo que se pueden modificar los tratamientos, tiene que ver con nuestras cabezas. Los noticieros no son programas sacados de la nada, somos representativos de nosotros”.

Los representantes de los canales se comprometieron a intentar modificar las lógicas de producción, apoyaron la declaración por parte de la Defensoría del “Año por la inclusión

de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales” y a promover noticias que tengan a jóvenes como protagonistas de noticias, que reflejen su participación en la sociedad.

También se llevaron a cabo actividades que apuntan a consolidar la continuidad del trabajo a través de la sistematización de los criterios de análisis, la formalización de estándares para su replicación en otras áreas geográficas, la producción de materiales de capacitación sobre el diseño metodológico y la redacción de informes con recortes temáticos específicos para la difusión de sus resultados.

Entre los ajustes metodológicos realizados se destaca la inclusión de cuatro nuevos tópicos: “Prácticas religiosas”, “Catástrofes”, “Adultos mayores” y “Turismo”. Asimismo, se renombraron dos tópicos ya existentes a fin de especificar la clasificación de algunas noticias: “Tránsito y accidentes viales” y “Ambiente y fenómenos meteorológicos”.

Durante el primer trimestre de 2015 se elaboraron informes específicos correspondientes al Monitoreo 2014 sobre los siguientes tópicos: “Niñez y adolescencia”, “Derechos Humanos”, “Policiales e ‘inseguridad’”, “Géneros” y “Ambiente”. En dichos documentos se detalló la relevancia de cada uno de esos tópicos en los noticieros monitoreados en función de las variables de análisis.

El 18 de junio se presentó el monitoreo en el ámbito del Programa de Actualización de la Maestría en Servicios de Co-

municación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En la misma línea, el 23 de septiembre, la Defensoría volvió a presentar el segundo Informe Anual de los Monitoreos de Programas Noticiosos de Canales de Aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “¿Qué es noticia en los noticieros?”.

Esta vez fue en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En esa oportunidad, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, profundizó sobre los resultados de los monitoreos junto al equipo de Análisis, Investigación y Monitoreo del organismo, al director de ese área, Gerardo Halpern y a los integrantes de esa dirección Lucía Ariza y Luciano Beccaría.

“Hay un divorcio entre las necesidades que se plantean las audiencias y lo que en nombre de esas audiencias se construye como necesidad informativa todos los días y eso es lo que estamos poniendo en tensión con estos monitoreos”, aseguró Ottaviano.

La directora del Instituto Gino Germani, Carolina Mero, valoró la tarea del organismo en la elaboración de los monitoreos como herramientas de análisis. “La experiencia de la Defensoría del Público tiene el doble desafío que representa crear una institución y además llevar adelante las tareas y los objetivos que esa institución se propone. Eso es muy importante sobre todo en esta área. Sabemos las rispideces y contratiempos que presenta cotidianamente”, dijo.



► Presentación del segundo monitoreo de canales de aire de la CABA. Ottaviano, junto a Marcelo Antín (Canal 9), Víctor Taricco (TV Pública), Mariano Besada (Telefé) y María Ripa Alsina (América TV).

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

El 8 de mayo se realizó una reunión de intercambio en la ciudad de Córdoba con integrantes del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para relevar el “Primer Monitoreo de Programas Noticiosos de Canales de Aire” de esa ciudad.

El primer Monitoreo recogió información cuantitativa y cualitativa sobre una muestra de programas noticiosos emitidos por los canales de aire de gestión pública y privada de esa ciudad. El trabajo se llevó a cabo de forma bimensual en los meses pares. Comenzó en junio y continuó en agosto, octubre y diciembre de 2014. Se relevaron los cinco primeros días hábiles continuos (incluyendo, si hubiera, los feriados de lunes a viernes) de la primera semana completa del mes.

El relevamiento se realizó de manera exhaustiva e incluyó todos los programas noticiosos emitidos en las cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche) por los tres canales de aire de gestión pública y privada que operan en la Ciudad de Córdoba (Canal 12, Teleocho y Canal 10) durante esa semana.

La presentación del trabajo se realizó el 6 de agosto y contó con la presencia de la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano, quien además disertó en la apertura de la Especialización en Gestión y Producción de Medios Audiovisuales y participó de la firma de un nuevo convenio entre el organismo y el CEA, junto a Marita Mata, directora de la Especialización en Gestión y Producción de Medios Audiovisuales.

Ante periodistas, especialistas en la investigación e integrantes académicos, Ottaviano afirmó: “Con los monitoreos de los canales de noticias de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una radiografía de 2013 y 2014, a la que se suma la ciudad de Córdoba. Definitivamente es hora de tensionar aquellas verdades que parecían reveladas en los noticieros. Sólo esta distancia nos permite, entonces, empezar a tener nuevas lógicas y jerarquizaciones que nos acerquen más a contribuir al fortalecimiento democrático”.

Por su parte, Mata agregó: “Quiero agradecer enfáticamente lo que significa para nosotros como CEA y como Universidad pública que trabaja en comunicación, el aporte de la Defensoría en esta y en tantas otras instancias de trabajo conjunto”.

**“ES HORA DE
TENSIONAR
AQUELLAS
VERDADES
QUE PARECÍAN
REVELADAS
EN LOS
NOTICIEROS”**

CYNTHIA OTTAVIANO

NOTICIAS POLICIALES EN SEÑALES DE CABLE

Luego de una primera instancia piloto durante 2014, se sistematizó el Monitoreo de noticias policiales en señales de cable. Se selecciona un día intermedio de los meses impares y se visiona la totalidad de la programación de seis señales de noticias (A24, C5N, Canal 26, CN23, Crónica TV y TN).

Con la metodología diseñada para el Monitoreo de Noticieros de Canales de Aire, este estudio puso el foco en las noticias consignadas con tópico "Policiales e 'inseguridad'" con el objeto de medir su gravitación, tanto en cantidad como en tiempo de duración.

Hasta el momento se elaboraron los informes cuantitativos y cualitativos correspondientes al 13 de enero, el 16 de marzo, el 14 de mayo y el 15 de julio, y se encuentra en proceso de elaboración el monitoreo del 16 de septiembre y de visionado del 12 de noviembre. En los mencionados documentos confeccionados se confirma la hipótesis acerca de que la información policial es ampliamente mayoritaria respecto de los demás tópicos en la programación de las señales de noticias de cable. Y en aquellos casos en los que pre-

domina otro tópico su ingreso a la agenda mediática se da a través de un acontecimiento que conlleva algún grado de violencia y cuya construcción tiene una matriz policial (como sucedió con *Deportes* en mayo, debido a los incidentes ocurridos durante el partido de fútbol entre Boca y River).

PUBLICIDADES

En el marco del Año por la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes en los Medios Audiovisuales declarado por la Defensoría del Público, se planificó para 2015 la realización de una serie de Monitoreos de publicidades infantiles en señales infantiles y durante la programación destinada a niñas, niños y adolescentes en los canales de aire, a modo de continuación del producido en 2014.

En el primero de ellos se tomó como muestra el conjunto de publicidades emitidas durante la programación infantil de canales de aire y de una franja horaria de las señales infantiles de cable, en la semana previa al inicio de clases (febrero-marzo), cuyo informe se encuentra en su etapa final de elaboración.



» En el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se presentó el "Primer Monitoreo de Programas Noticiosos de Canales de Aire" de esa ciudad, junto a Marita Matta.

El mismo tuvo como eje el análisis de las publicidades de alimentos, en relación al creciente índice de obesidad infantil en nuestro país y en el mundo; y a los productos que refirieron de modo directo o indirecto al inicio del ciclo lectivo 2015.

El abordaje de las estrategias enunciativas que delinear las empresas anunciantes y las agencias publicitarias permite establecer un diagnóstico sobre el tipo de niño/a y adolescente consumidor/a que se construye desde esas piezas comerciales y su creciente inclusión en el mercado publicitario.

Por su parte, se encuentra en proceso de elaboración el segundo informe en base al análisis de publicidades emitidas durante una semana de agosto, en medio del receso escolar de las vacaciones de invierno y previa al "Día del Niño". El eje volvió a ser el de las publicidades de alimentos, con el fin de acrecentar los insumos de cara a una investigación más amplia sobre Publicidades, infancia y hábitos alimentarios, a realizarse en 2016.

MESA DE TRABAJO SOBRE HISTORIA Y PUBLICIDAD

En respuesta a una serie de denuncias y consultas recibidas por la Defensoría, se organizó una mesa con historiadores para discutir acerca de la reposición y representación del discurso historiográfico en la arena mediática.

La actividad, moderada por la Defensora del Público, la Lic. Cynthia Ottaviano, tuvo lugar el 19 de junio con la participación de especialistas en historia y en la figura de José de San Martín en particular: Martín Kohan, Prof. de Literatura; Alejandro Cattaruzza, historiador; Eduardo Zimmermann, historiador; Diego Mendiburu del Instituto Nacional Sanmartiniano; Sergio Wischñevsky, historiador y Alberto Lettieri, historiador. También participaron las personas denunciantes ante esta Defensoría.

El objetivo del encuentro fue ampliar la reflexión en torno al uso paródico de la figura de San Martín en una pieza comercial televisiva del mercado de materiales Easy. Junto con la participación de representantes de la audiencia, que habían cuestionado la publicidad, el intercambio estuvo orientado a la puesta en común de algunos criterios y opiniones sobre el funcionamiento del registro paródico en el comercial.

Por su parte, el 20 y 21 de agosto, la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, a cargo del Dr. Gerardo Halpern participó en la Jornadas de investigación "Innovación, rupturas y transformaciones en la cultura humorística argentina", en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, en la ciudad de Córdoba, con la presentación de la ponencia "El padre de la patria, el humor y el discurso publicitario", sobre el caso citado de la publicidad de *Easy*.



» La Defensoría organizó una mesa con historiadores para discutir acerca de la representación del discurso historiográfico en la arena mediática. Participaron Martín Kohan, profesor de Literatura; Alejandro Cattaruzza, historiador; Eduardo Zimmermann, historiador; Diego Mendiburu del Instituto Nacional Sanmartiniano; Sergio Wischñevsky, historiador y Alberto Lettieri, historiador.

TV Pública
VIVO HD



TRATAMIENTO INADECUADO DE LA DISCAPACIDAD

LA ESTIGMATIZACIÓN EN EL DISCURSO
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION



POLICIALES, LECIÓ DE UN TIRO EN EL INTENTO DE A 09:44 ST20º9

SAMSUNG

ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La Defensoría del Público presentó una selección de quince artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual traducidos a Lengua de Señas Argentina. El objetivo fue facilitar a las personas sordas usuarias de lengua de señas el conocimiento de los principales aspectos de la Ley 26.522 para que el derecho a la comunicación sea ejercido plenamente.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en lengua de señas se sumó al audiolibro y a la versión en braille editada en 2014 junto a la Biblioteca de Ciegos del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Además, con el propósito de que los videos sean a la vez accesibles a la población en general y para que las personas sordas referencien el artículo textual de la Ley, se proporcionó el texto de cada artículo en el subtítulo.

De esta manera, la Defensoría dio un paso fundamental en la inclusión, en este caso, de las personas sordas. Esta acción se complementó con la presencia de intérpretes de lengua de señas en las principales actividades y actos públicos que se vienen llevando a cabo desde el organismo, incluyendo las Audiencias Públicas en todo el país. Además, las personas sordas acompañaron a los equipos de interpretación en su labor y formaron parte de los procesos de capacitación e instancias de consulta convocados por el organismo sobre lengua de señas en medios de comunicación audiovisual.

Con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se estableció la incorporación de lengua de señas, subtítulo oculto, audiodescripción y español simple para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los medios audiovisuales, tal como está estipulado en el artículo 66.

CON LA SANCIÓN DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SE ESTABLECIÓ LA INCORPORACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS, SUBTITULADO OCULTO, AUDIODESCRIPCIÓN Y ESPAÑOL SIMPLE

A partir de ello, y de un diagnóstico que se realizó en 2013 en diálogo con Asociaciones de Sordos e intérpretes de todo el país en donde se evidenció que uno de los principales inconvenientes para la incorporación de lengua de señas en medios es la ausencia de materiales técnicos y espacios de formación, la Defensora del Público, Lic. Ottaviano determinó la puesta en marcha diversas instancias de intercambio, capacitación y producción dirigidas a cada sector involucrado.

En 2014 se organizaron seis talleres regionales donde participaron 80 personas sordas y oyentes. Otras 200 personas fueron parte de actividades y charlas sobre accesibilidad convocadas por la Defensoría. Además, comenzó a conformarse un equipo de referentes que permite fortalecer y federalizar la propuesta de formación desde sus territorios.

En 2015 se amplió la propuesta: los talleres se desarrollaron en siete regiones con intérpretes y personas sordas de todas las provincias y el equipo de referentes cuenta con 22 integrantes que participaron de 3 de capacitaciones específicas y acompañaron los talleres en sus regiones. A través de estas instancias, este año fueron parte de las capacitaciones de la Defensoría del Público para la incorporación de lengua de señas en televisión 250 personas sordas y oyentes.

Además, se hicieron consultorías en cinco canales: Chaco TV, Canal 8 de San Juan, 13 Max de Corrientes, Cablehogar de la ciudad de Rosario y Canal 10 – Televisión Rionegrina, Carolina Cable Color y Canal 13 de la provincia de San Luis. Estas instancias continúan conforme se incrementa el cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se profundiza el compromiso y el trabajo conjunto de los medios audiovisuales, los equipos de interpretación y la Defensoría del Público.

También se realizan talleres, reuniones y charlas sobre accesibilidad con universidades, organismos públicos, asociaciones de sordos y escuelas en distintas provincias.

En las distintas líneas de trabajo en relación a accesibilidad, se articuló con 29 asociaciones y agrupaciones de personas sordas de 22 provincias del país. También con asociaciones de intérpretes en tanto profesionales e investigadores de su propio hacer: AMILSA de Mendoza, ACDILSA de Chaco, MIRADAS de Santa Fe, la Tecnicatura en Interpretación en Lengua de Señas Argentina de la Universidad Nacional de Cuyo, el Área de Inclusión de la Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión de Accesibilidad de la Universidad Nacional del Comahue.

Se desarrollaron procesos de formación presenciales y a distancia, de larga y de corta duración, abiertos a la comunidad y dirigidos a grupos específicos para compartir una mirada general sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el trabajo de la Defensoría del Público. Y, específicamente, para compartir las previsiones para que todas las personas puedan acceder a los medios audiovisuales.

El Observatorio de Accesibilidad a los Servicios de Comunicación Audiovisual, propuesto por la Coalición por una Comunicación Democrática y creado por la Defensoría, es también un espacio de articulación que busca elaborar un mapa



» En 2014 se organizaron seis talleres regionales donde participaron 80 personas sordas y oyentes.

de la situación de los medios audiovisuales en relación a la accesibilidad.

De esta forma, el organismo contribuye a la formación de intérpretes de Lengua de Señas Argentina-Español para su desempeño en medios audiovisuales, a la elaboración de materiales accesibles sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los derechos de las audiencias, con consultorías en medios audiovisuales brindando herramientas tanto a los equipos de interpretación como a los y las trabajadores/as de los canales y señales que incorporan el servicio de traducción, generando espacios de intercambio y de participación para personas sordas y oyentes en condiciones de igualdad, con la conformación del Observatorio de accesibilidad a los servicios de comunicación audiovisual.

Por otra parte, La Defensoría participó del I Congreso Internacional de Traducción Audiovisual, organizado por la Universidad César Vallejo en Lima, Perú, para contribuir a la formación de estudiantes, docentes y profesionales vinculados a la temática.

El Congreso contó con la participación de estudiantes, profesionales y docentes de traducción, comunicación audiovisual, periodismo y dirección de cine de universidades e institutos de Inglaterra, España, Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos, Francia y Argentina. El objetivo del encuentro fue compartir normas y estrategias de traducción, socializar fraseología, conceptos, metodologías, tecnología y herramientas adecuadas para la traducción audiovisual.

En el encuentro, además de exponer la tarea desarrollada por la Defensoría del Público, Yanina Boria y Luciano Deluca brindaron aportes teóricos y técnicos a los traductores y traductoras presentes e invitaron a ampliar la temática de la accesibilidad en medios de comunicación, tema todavía ausente en la mayoría de los congresos de la especialidad.

En síntesis, las acciones se organizaron desde la Dirección de Capacitación y Promoción en cuatro líneas de trabajo.

EN LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES PARTICIPARON 1819 PERSONAS EN UN TOTAL DE 382 HORAS DE TALLERES.

CAPACITACIÓN PARA INTÉRPRETES DE LSA

- El 3 de febrero, en San Juan, con intérpretes y canales de televisión para la implementación de la traducción en Lengua de Señas.



El organismo contribuye a la formación de intérpretes de Lengua de Señas Argentina-Español para su desempeño en medios audiovisuales.

SE DESARROLLARON PROCESOS DE FORMACIÓN PARA QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN ACCEDER A LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

- El 12 y 13 de febrero, en Resistencia, Chaco, con Asociación Chaqueña de Docentes e Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (ACDILSA).
- El 27 y 28 de febrero y el 27 y 28 de marzo, en Ciudad de Buenos Aires, con referentes de la comunidad sorda e intérpretes de LSA de todas las regiones del país.
- El 9 de abril, en Mendoza, con la Tecnicatura en interpretación en LSCA de la Universidad Nacional de Cuyo.
- El 10 y 11 de abril, en Mendoza, con personas sordas e intérpretes de LSA.
- El 29 y 30 de mayo, en Rosario, con ASAM Rosario.
- El 17 y 18 de junio, en San Miguel de Tucumán, con la Asociación de Sordos del Sur, la Asociación de Sordos local y con la Legislatura del lugar.
- Los días 2 y 3 de Julio, en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires. la Defensoría participó de la Clase Magistral de Audiodescripción brindada por la Lic. Pilar Orero, Profesora de Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona.
- El 8 de julio, en San Salvador de Jujuy, con intérpretes de LSA y personas sordas.
- El 17 y 18 de julio, en La Plata, Buenos Aires, con la Asociación de Sordos de La Plata.
- El 7 y 8 de agosto, en Mendoza, con la Asociación Mendoquina de Intérpretes de LSA (AMILSA).
- El 17 y 18 de septiembre, en Posadas, Misiones, con intérpretes locales.
- El 8 y 9 de octubre, en Neuquén, con personas sordas e intérpretes de LSA en articulación con la Comisión de Accesibilidad de la Universidad Nacional del Comahue.
- El 21 y 22 de octubre, en Ushuaia, Tierra del Fuego, con personas sordas e intérpretes de LSA.

CONSULTORÍAS: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Del 4 al 6 de febrero, en San Juan, con el Centro de Recursos Especializados en Sordera, Ceguera y Otras Múltiples Discapacidades en América del Sur (CRESCOMAS) y Canal 8.
- Del 11 al 13 de febrero, en Resistencia, Chaco, con la Asociación Chaqueña de Docentes e Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (ACDILSA) y Chaco TV.
- Del 11 al 13 de febrero, en Corrientes, con la ciudadanía y el canal local 13 Max.
- El 20 de mayo, en Corrientes, con el equipo de intérpretes del canal 13 Max.

- El 22 y 23 de junio, en General Roca, Río Negro, con la Televisión Ríonegrina, con la Comisión de Accesibilidad de la Universidad Nacional del Comahue y con el Grupo Inca.
- El 24 de junio, en Neuquén, con el programa “La cara son ustedes”.
- El 8 de julio, en San Salvador de Jujuy, con canales y señales jujeñas.
- El 14 de agosto, en San Juan, con el Canal 8 local.
- El 17 de agosto, en San Luis, con el Canal 13 local.
- El 18 de agosto, en San Luis, con Carolina Cable Color.

ACCESIBILIDAD Y ARTÍCULO 66 CON ASOCIACIONES DE SORDOS

- El 14 de febrero, en Resistencia, Chaco, con la Asociación Chaqueña de Docentes e Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (ACDILSA) y la Asociación Chaqueña de Sordos (ACS).
- El 22 de mayo, en Paraná, Entre Ríos, con la Asociación de Sordos de Paraná.
- El 27 de agosto, en Santiago del Estero, con Asociación Civil de Ayuda a la Persona Sorda de Santiago del Estero (ACAPSSE).

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOS Y CHARLAS

- El 3 y 17 de marzo, con integrantes de la Defensoría del Público, en la sede del organismo.
- El 22 de abril, en Neuquén, con personas con discapacidad, trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue.
- El 4 de junio, en Lima, Perú, con la Asociación La Calandria.
- El 6 y 7 de junio se disertó en el Congreso Internacional de Traducción Audiovisual en la Universidad César Vallejo de Lima, Perú.
- El 8 de junio, en Lima, Perú, con Intérpretes de Lenguas de Señas Peruana de la Televisión de las Cámaras de Diputados y Senadores de Perú.
- El 4 de septiembre, en Lanús, Buenos Aires, en el Segundo Encuentro del Programa Formarnos en Discapacidad, Derechos y Políticas Públicas realizado en la Universidad Nacional de Lanús.



» Durante 2015, 140 personas de todo el país participaron del ciclo de capacitación introductorio para intérpretes organizado por la Defensoría.



» En el mes de mayo se difundieron las actividades de la Defensoría y del Observatorio de Accesibilidad en la provincia de San Juan.



» El taller apuntó a profundizar la formación profesional para acompañar su incorporación en medios audiovisuales.

OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD

A partir de una propuesta de la Coalición por una Comunicación Democrática, la Defensora del Público decidió la creación del Observatorio Social de Accesibilidad a los Servicios de Comunicación Audiovisual, con la Resolución N° 33/2014.

Con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, con una mirada estrictamente técnica sobre los desafíos que la cuestión suscita, se puso en funcionamiento esta herramienta adecuada para establecer un cuadro de situación a partir de la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, para a partir de aquél, elaborar un plan de acción para la efectiva implementación de las herramientas de accesibilidad que establece el art. 66 de la LSCA.

En 2015 se priorizó la puesta en funcionamiento del Comité Técnico y la federalización del Observatorio, cuyos objetivos anuales son: conformar una perspectiva actualizada de materiales accesibles; elaborar un mapa actualizado de situación; elaborar protocolos o manuales de buenas prácticas en materia de accesibilidad para su distribución en todo el país a canales (públicos y privados, provinciales, etc.), productores, universidades Nacionales.

Del Comité participaron APANOVI – Asociación Pro Ayuda a No Videntes; ARSAT – Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.; CEMASH – Centro Metropolitano Argentino de Sordos e Hipoacúsicos; CIN – Consejo Interuniversitario Nacional; Consejo Asesor del SATD-T – Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre; FAA - Fundación Argentina de Afasia; FACTTIC – Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento; Proyecto Imaginate; Educ.ar S.E.; y el ISER – Instituto Superior de Estudios Radiofónicos.

En el mes de mayo se difundieron las actividades de la Defensoría y del Observatorio de Accesibilidad en la provincia de San Juan. Allí, El Observatorio tuvo su primera presentación fuera de la Ciudad de Buenos Aires, como inicio del proceso de articulación federal, a través del que busca tomar contacto directo con organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática de la discapacidad en cada región del país, para conocer las distintas realidades de cada lugar en lo que hace a la accesibilidad a la televisión para personas con discapacidad auditiva, visual e intelectual.

Actualmente el Comité Técnico está trabajando en la recopilación de antecedentes y normas sobre subtítulo oculto, audiodescripciones y Lengua de Señas con el objetivo de presentar resultados de este trabajo a fines de este año 2015.



» La Defensoría es 100% accesible: Cynthia Ottaviano junto al Director ejecutivo de ALPI, Jorge Giana, el artista visual Nelson Florida, y los integrantes de la Defensoría del Público Matías Iovanne, Paula Castello, Luciano De Luca, Lucio Decotto y María José Guembe.

EL RECLAMO DE LAS AUDIENCIAS

La cantidad de presentaciones por temas relacionados con accesibilidad se incrementó en 2015 dado que, por un lado, las personas conocen más sus derechos y a la Defensoría como el lugar donde pueden canalizar sus reclamos. Por otro lado, ya se reconoce el trabajo hecho por la Defensoría desde su creación para difundir esos derechos y, sobre todo, respecto de la necesidad de hacer accesible la televisión entre las personas con discapacidad.

La visibilización del recuadro en donde se traduce el discurso oral a Lengua de Señas, a través de su implementación progresiva sobre todo en los canales del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires que tienen alcance nacional, ha incrementado el pedido de esa herramienta en los canales y señales del resto del país. Estos reclamos fueron recibidos por los medios usuales que tiene la Defensoría, y también en las audiencias públicas.

A partir de estas presentaciones se ha ido consultando a distintos canales y señales de todo el país, con el objetivo de conocer el estado de situación respecto de las herramientas de accesibilidad y facilitar -con los medios con los que cuenta la Defensoría- los procesos de incorporación de esos instrumentos. En algunos casos las actuaciones derivaron -por ejemplo- en pedidos de capacitación en traducción de Lengua de Señas en televisión, que fueron derivados a la Dirección de Capacitación de la Defensoría.

En el marco de una actuación generada por una derivación del Defensor del Pueblo de Jujuy, en el mes de Julio la Defensoría llevó adelante un encuentro en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, organizado por la Delegación de la AFSCA, al cual asistieron representantes de canales y señales públicas, privadas y comunitarias de las localidades de San Salvador, San Pedro, Perico, Abra Pampa y Maimará.

Allí, se trataron cuestiones específicas acerca de la traducción simultánea en lengua de señas en medios de comunicación audiovisual: temas de índole técnico, de edición y sobre el rol de los y las intérpretes. Con la representación de casi todos los canales y señales de Jujuy, en la jornada se destacó la relevancia de estos espacios de información y reflexión compartida, y se generaron ideas y propuestas para comenzar -con las limitaciones presupuestarias y técnicas existentes en la región- a implementar las herramientas de accesibilidad.

También, en el marco de una actuación abierta a partir de numerosas presentaciones efectuadas por personas sordas e hipoacúsicas, que reclamaron porque hace ya unos meses que reciben las señales internacionales -en los paquetes

básicos de los cableoperadores-, dobladas al castellano y sin subtítulos. Esto implica que lisa y llanamente no puedan acceder a ellas.

También se recibieron presentaciones de oyentes que reclaman porque quieren seguir viendo las series y películas en su idioma original, pero en ese caso podrían encontrarse en juego cuestiones de derecho del consumidor y no derechos comunicacionales.

En el marco de las presentaciones mencionadas en primer lugar, la Defensoría generó un espacio de diálogo con las empresas de televisión por suscripción (Cablevisión, Telecentro y DirecTV) para encontrar una solución, de la que participaron diversos integrantes del Observatorio y denunciantes, con el apoyo técnico de ingenieros de ARSAT.

Otra novedad de este año fue la recepción de presentaciones en las que personas sordas e hipoacúsicas reclaman por la mala calidad del servicio de subtítulo oculto (closed caption) en los canales de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO ES 100% ACCESIBLE

La Defensoría del Público se convirtió en el primer organismo público en recibir el reconocimiento a la accesibilidad por parte de la organización civil ALPI. Se trata de la certificación del edificio como espacio de interés 100% accesible frente a la discapacidad motriz.

Esta distinción es parte del programa "Más inclusión, menos barreras", llevado adelante por ALPI con el objetivo de fomentar la integración de personas con discapacidad. En ese marco, la accesibilidad de los espacios de la Defensoría del Público fue evaluada de forma positiva demostrando su compromiso con la calidad de vida y la inserción social de toda la ciudadanía.

La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, recibió en la sede del organismo al director ejecutivo de ALPI, Dr. Jorge Giana, quien fue el encargado de otorgar el certificado de accesibilidad. "Desde el comienzo, la palabra accesibilidad para nosotros tuvo y vale múltiples significados, entre ellos la accesibilidad física, la necesidad de que todas las personas en igualdad de condiciones pueda ingresar al espacio, disfrutarlo y vivenciarlo", aseguró Ottaviano.

Por su parte, Gianna destacó la tarea del organismo. "Todo lo que se pueda hacer para mejorar la accesibilidad para las personas con trastornos motores o sensitivos es muy loable, así que nuestro certificado de accesibilidad es un

incentivo para que con esfuerzo como el que veo acá, en la Defensoría del Público, se busque la inclusión”, dijo.

Con este reconocimiento, la Defensoría del Público da un nuevo paso en su tarea de garantizar la inclusión de personas con discapacidad. El organismo cuenta, además, con el Sistema de Amplificación de Aro Magnético instalado en su auditorio y con intérpretes en lengua de señas que están presentes en todas las actividades que se llevan a cabo. También llevó adelante la edición de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en braille y en audio libro.

MESA SOBRE VEJEZ Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

El día 12 de junio se realizó la mesa sobre “Vejez y Medios de Comunicación Audiovisuales”, con el fin de reflexionar sobre las representaciones de las vejeces en el campo mediático audiovisual y los modos en que se convoca la temática en la agenda noticiosa. En función de las propuestas, se trazó el objetivo de elaborar en el mediano plazo una serie de sugerencias que potencien la cobertura de la temática.

Participaron referentes de otros organismos públicos, tales como la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; el Área de Protección de los derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; miembros del ámbito académico y de medios de comunicación.

Por otra parte, el 15 de junio esta Dirección participó con una disertación en la Jornada “Un derecho conocido es un derecho defendido” en la Ciudad de Rawson, Provincia de Chubut. La misma estuvo organizada por la Dirección Provincial de Políticas de Adultos Mayores de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia dependiente del Ministerio de Familia y Promoción Social de la Provincia de Chubut, en el marco del “Día mundial de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez”.

Como parte de otra invitación, el 16 de septiembre esta Dirección asistió al encuentro “La Vejez en los Medios de Comunicación”, en la ciudad de Santiago del Estero. La actividad fue organizada por la Oficina de Promoción y Protección de Derechos de Adultos Mayores, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santiago del Estero.



» Mesa de trabajo sobre representación mediática de la vejez junto a organizaciones de la sociedad civil y representantes de la Defensoría.

“EN ARGENTINA YA ESTÁN VISITANDO PUEBLOS, VISITANDO COMUNIDADES Y ESCUELAS. SE ESTÁN ACERCANDO A LAS COMUNIDADES PARA EXPLICARLES LOS DERECHOS QUE TIENEN COMO TELEVIDENTES, COMO AUDIENCIAS: EL MARAVILLOSO DERECHO QUE NO CONOCEMOS, QUE ES EL DE LA COMUNICACIÓN”.

CONSUELO CEPEDA
DEFENSORA DEL TELEVIDENTE
DEL CANAL RCN, COLOMBIA



AMICI CURIAE: LA COMUNICACIÓN NO ES UN DELITO

El viernes 4 de septiembre a las 12.11 hs ingresó a la Defensoría del Público la denuncia por parte de un integrante del canal comunitario Antena Negra TV, señalando que “un operativo de más de 40 efectivos de la Policía Federal entró junto con la AFTIC en el canal comunitario Antena Negra TV, integrante de la Red nacional de Medios Alternativos (Ángel Gallardo 752- CABA) para cumplir la orden de secuestro de equipos emanada del Poder Judicial de la Nación...”

Una hora más tarde, a las 13.13, el director de Capacitación y Promoción de la Defensoría, Ernesto Lamas, se dirigió a la sede del canal. Pocas horas más tarde, representantes del canal comunitario ampliaron la denuncia en la sede de la Defensoría.

Ante la gravedad de los hechos, la Defensora Cynthia Ottaviano decidió presentarse como Amici Curiae ante el Juzgado Correccional nº5, a cargo del juez Federal Martínez de Giorgi, con la representación letrada de la Dra. María José Guembe y el Dr. Esteban Lopardo, de la Dirección de Protección de Derechos de la Defensoría.

La presentación se fundamentó en la no criminalización de la comunicación que se propició desde la Defensoría y la creación de espacios de diálogo que favorezcan la solución de los conflictos, en el ejercicio del derecho a la comunicación, a través de mecanismos legales.

La Defensora recomendó la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA, “ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”, a la vez que solicitó “la inmediata descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar de-

LA PRESENTACIÓN SE FUNDAMENTÓ EN LA NO CRIMINALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN QUE SE PROPICIÓ DESDE LA DEFENSORÍA Y LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGO QUE FAVOREZCAN LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

lictivo (...) La comunicación comunitaria es la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación”.

En el mismo sentido, bregó para que se evitara “toda medida persecutoria de aquello que debe promover y proteger para mejorar la vida en democracia” y se procediera a la devolución de los equipos.

En la resolución de aceptación del juez destacó que “habida cuenta que conforme al nuevo paradigma incorporado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nº 26.522, resulta un aporte valioso para este tribunal la participación en el presente proceso de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual –creada por el artículo 19 de la citada Ley-, considerando que dicho organismo posee competencia específica sobre la materia regulada en la



norma, y que reúne los requisitos contemplados en el Reglamento sobre Intervención de Amigos del Tribunal”.

Unos días después, al dictaminar en la Causa, el Fiscal Federico Delgado, a cargo de la Fiscalía Federal N°6, afirmó que “La propia presentación de la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual revela con nitidez la ausencia de un comportamiento humano específico contrastable con el Código Penal”. En el mismo sentido, bregó para que se evitara “toda medida persecutoria de aquello que debe promover y proteger para mejorar la vida en democracia”.

Los diputados nacionales Mario Oporto, Osvaldo Elorriaga, Eduardo Seminara y Herman Avoscan transmitieron su satisfacción por la presentación de la Defensoría del Público. En una carta dirigida a la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, los legisladores compartieron “la necesidad de discriminalizar la comunicación comunitaria, entendiendo a la misma en su carácter democrático, plural y popular”.

Al mismo tiempo, saludaron la gestión del organismo, ya que “iniciativas como éstas que ayudan a corregir los errores cometidos, solidifican lo construido y marcan el camino a seguir en materia de Comunicación Audiovisual”.

Finalmente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los responsables legales de la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda dado que el hecho investigado “no encuadra en una figura penal” y dejó sin aplicación toda medida tomada hasta el momento.

De este modo, el magistrado hizo lugar a la presentación de la Defensora al determinar que: “La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual concluyó que en el caso concreto de Antena Negra TV desalienta el uso de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.

MEDIDAS DE GOBIERNOS LOCALES QUE AFECTAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación recibió diversos reclamos sobre la utilización de mecanismos municipales o locales administrativos para clausurar medios audiovisuales, atentando contra el derecho humano a la comunicación y en abierta violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esos reclamos dieron lugar a distintas acciones para garantizar los derechos.

► El juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a la presentación de la Defensora y sobreseyó a los responsables legales de la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda.

En el mes de junio la Defensoría recibió denuncias del público por la clausura dispuesta por la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la AM 740 Radio Rebelde. La intervención de la Defensoría tendió a determinar las competencias a nivel administrativo y el conflicto quedó resuelto a través del dictado de una medida cautelar a favor de la emisora (Expediente DP C.625/2015).

En el mes de julio el Municipio de Pilar, Provincia de Córdoba, dispuso la clausura de las radios locales FM TOP 100.9 y T-GUA ROCK 88.5. La Defensoría del Público recibió denuncias de las audiencias afectadas y actuó inmediatamente para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. A través de una presentación ante la justicia federal de Villa María resaltó la competencia federal en materia de radiodifusión expresamente establecida en la LSCA y solicitó la salvaguarda del derecho de las audiencias. También se instó al Municipio de Pilar para que se abstenga de invadir competencias federales y vulnerar derechos constitucionales. El 7 de agosto la justicia dictó una medida cautelar a favor de la radio afectada (Expediente DP A230/2015).

Por otra parte, en el mes de septiembre, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso, a través de un trámite local administrativo, la clausura de una parte del edificio donde funciona la señal de noticias C5N de la CABA. La medida dispuesta afectó indirectamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información del público audiovisual.

La Defensoría se presentó ante el Jefe de Gobierno porteño y el Director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) advirtiendo sobre la vulneración de derechos y requiriendo explicaciones sobre los motivos y fundamentos de las medidas tomadas respecto de la señal C5N. No obstante, el mismo día de los hechos el Gobierno porteño asumió el error cometido al disponer la clausura y dispuso su levantamiento.

En un breve comunicado sostuvieron que la decisión “se adoptó al tomar conocimiento por las manifestaciones públicas de los periodistas de C5N que las instalaciones son consideradas imprescindibles para el ejercicio de la actividad de prensa, en cumplimiento del artículo 24 de la ley 4565 de defensa de la libertad de expresión”.

Las acciones de la Defensoría del Público frente a estos hechos que afectan la libertad de expresión y avasallan competencias del Estado Federal fueron puestas en conocimiento del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual para que interviniera en el marco de sus competencias. Y, ante la reiteración de estos mecanismos, recomendó a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno cumplimiento de la LSCA en especial atención al artículo 163 que dispone que “las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades no podrán imponer condiciones de funcionamiento y gravámenes especiales que dificulten la prestación de los servicios reglados por la presente ley, sin perjuicio de sus propias competencias”.



» La Defensoría recibió reclamos sobre la utilización de mecanismos municipales o locales administrativos para clausurar medios audiovisuales. Un claro atentado contra el derecho humano a la comunicación.



REGULARIZACIÓN DEL ESPECTRO

En 2013, en las primeras Audiencias Públicas regionales realizadas por la recién creada Defensoría para evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión, se recibieron inquietudes, consultas y reclamos de las Audiencias y de diversos servicios de comunicación social respecto de la regularización del espectro (Artículo 19, incs. a, c, d y f de la LSCA).

Su contenido se sintetizó en las comunicaciones de traslado de la temática a la autoridad federal de aplicación bajo el título Regularización del espectro: “una gran mayoría de expositores reclamó el ordenamiento de las frecuencias radiales, el otorgamiento de licencias para ocupar el 33% que estipula la ley para los medios sin fines de lucro y la resolución de interferencias en las zonas de conflicto”.

En las Audiencias Públicas también se resaltó la necesidad de prestar especial atención en el ordenamiento de las zonas de fronteras, y la situación particular de las micro y macro empresas de arraigo local como así también a las cooperativas.

En particular, desde las emisoras radiales se expresó la voluntad de estar dentro de la ley, operar con licencias autorizadas y ser reconocidos por el Estado como sujetos de derechos. También se enfatizó desde el sector comunitario “la necesidad de apoyo estatal a la sostenibilidad económica”, mientras que las audiencias opinaron que la saturación del espectro generaba una competencia desleal que atenta contra el libre ejercicio del derecho a la comunicación.

Estos reclamos fueron puestos en conocimiento de la AFSCA, mediante diversas notas. El 22 de diciembre de 2014 dictó la resolución 1542/2014 y aprobó un proyecto de “Apoyo para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión y control de espectro radioeléctrico” con

financiamiento internacional del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), que contempla cinco (5) productos: Base de Datos de AFSCA de estaciones existentes y nuevos emisores encontrados vía barrido espectral actualizada; sistema web para divulgación de las estaciones licenciadas y monitoreo RNI diseñado e implementado; sondas fijas para monitoreo del espectro y medición del campo radioeléctrico (RNI) adquiridas y en operación; sistema centralizado para control de las sondas fijas instalado y sonda móvil para monitoreo del espectro radioeléctrico adquirida.

En la resolución se destacó la necesidad de “contar con herramientas que permitan conocer el estado de utilización del espectro radioeléctrico para procurar una eficiente administración; una planificación estratégica y un ordenamiento que se mantenga en el tiempo” y “generar capacidad institucional de gestión y control del espectro con el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral (hardware y software) de control y monitoreo”.

Entre los beneficiarios que postula el proyecto se menciona -además de los titulares de licencias y autorizaciones- a los titulares de servicios precarios y provisorios -PPP- como derivación del ordenamiento del espectro radioeléctrico, a los titulares de servicios operativos carentes de autorización legal para emitir, como producto de las regularización de sus respectivos servicios y a los interesados en prestar servicios de comunicación audiovisual, como resultado del acceso a nuevas licencias o autorizaciones.

En función de todos esos antecedentes, durante 2015 la Defensoría profundizó el trabajo conjunto con la autoridad de aplicación, promoviendo diversas reuniones con el AFSCA para interiorizarse de las acciones que ha emprendido res-

pecto a la regularización del espectro que plantean y explorar posibles mecanismos de solución definitiva.

La Defensoría enfatizó en esas reuniones que, en las denominadas “zonas de conflicto”, es necesario que la regularización del espectro contemple las necesidades específicas de las emisoras comunitarias en consonancia con el reconocimiento que les formula la LSCA como un sector específico dentro de las organizaciones sin fines de lucro que contribuye claramente a la democratización de la comunicación.

El criterio se encuentra expresamente previsto en los consensos internacionales consagrados en las declaraciones conjuntas de los relatores especiales de libertad de expresión. Estas figuran entre los diez desafíos claves para la libertad de expresión en la próxima década el apoyo a emisoras públicas y comunitarias (2010), en tanto garantía de efectiva promoción de la diversidad y universalidad.

En especial, la Defensoría también ha recordado que la declaración conjunta de 2014, sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión, vuelve a recomendar a los Estados: “crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos”.

Luego la autoridad de aplicación convocó a Licitación pública internacional N° 1/2015, cuyo acto de apertura de ofertas se realizó el 14 de julio de 2015 e informó el cronograma

de planificación de 12 meses computables a partir de la adjudicación de la licitación, para llegar a la solución definitiva.

En ese contexto se recibieron presentaciones formuladas tanto por oyentes como por trabajadores de la radio comunitaria La Ranchada -FM 103.9- de la ciudad de Córdoba y avaladas al día de hoy por 37 firmas.

Allí expresan su preocupación por “la falta de seguridad en la continuidad de la radio, dado que la misma hace más de 25 años no ha podido acceder a una licencia en esta ciudad, tal como así lo marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Transmiten también que “no solo es una radio sino una herramienta de nuestra vida cotidiana para dar a conocer nuestras problemáticas sociales” y que “es un instrumento de comunicación e información de villas miserias, personas privadas de la libertad, ancianos, por medio de corresponsales barriales que llegan a lugares más olvidados”.

Concretamente, solicitan que la Defensoría “interceda ante el AFSCA para que a la mayor brevedad posible se le dé autorización definitiva en el marco de la nueva ley”, que “cuente de una vez por todas con la licencia que garantice la continuidad”.

El reclamo obedece a que gran parte de las emisoras sin fines de lucro no han podido acceder a participar en los concursos para obtener una licencia en los términos del artículo 32 de la LSCA: se trata de aquellas localizadas en las llamadas zonas de conflicto y sus áreas de influencia.



Los oyentes de FM La Boca 90.1 denunciaron que sufren interferencias en las transmisiones de dicha señal provenientes de otra emisora.

La mutual Carlos Mugica creó en el año 1989 la Radio Comunitaria La Ranchada como un hecho cultural inédito, ya que fue la primera vez que una emisora de frecuencia modulada difundió la música popular de Córdoba (Cuarteto), que es precisamente aquella que representaba e identificaba a los sectores de villas y barrios carenciados de Córdoba. Dicha identificación con el medio y la masiva apropiación que se produjo sirvieron para que estos mismos sectores utilizaran de manera casi espontánea la radio para hacer escuchar su voz, hasta ese momento totalmente ausente del discurso de los medios masivos de comunicación.

Entre las acciones impulsadas en forma efectiva por la Radio se destaca el hecho de que promovió una presentación judicial en contra de la ley de la dictadura militar 22.285 que prohibía que las cooperativas y mutuales sean propietarias de la titularidad de emisoras de FM. En septiembre de 2003 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el artículo 45 de dicha Ley de Radiodifusión era inconstitucional, con lo cual a partir de esta causa se sentó un importante precedente de impacto nacional e internacional para la normalización de numerosas Radios de la toda el país.

En el marco de estas actuaciones la Defensoría realizó una investigación jurídica y comunicacional. Con la colaboración de AFSCA se ha compilado información sobre las medidas adoptadas por dicha autoridad en la materia. Así se ha tomado conocimiento de la realización de la licitación pública internacional ya referida, proyecto de Apoyo para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión y control del espectro radioeléctrico.

Así, la Defensora del Público decidió adoptar la Resolución 123 con el objetivo de permitir aplicar criterios de buena administración del recurso escaso que representa el espectro radioeléctrico ya que, de acuerdo a distintos relevamientos de emisoras, el porcentaje de emisoras sin fines de lucro existente sería sensiblemente inferior al 33% de reserva de espectro que dispone el artículo 89 inc. f de la LSCA del total de emisoras existentes.

En la mencionada resolución, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, en relación con la emisora que transmite en el 103.9 del dial de Córdoba, señaló: "Sería conveniente instrumentar una herramienta legal y administrativa que les permita hacer efectiva la garantía de reserva de espectro al sector sin fines de lucro, específicamente al sector comunitario".

La resolución fue bien recibida por la emisora y referentes de la comunicación comunitaria, como el director de Radio La Ranchada, Marco Galán, quien expresó: "este hecho es importante y significativo para todas las radios comunitarias, sobre todo para que tengamos el reconocimiento legal y se avance en la obtención de las licencias".

EL PORCENTAJE DE EMISORAS SIN FINES DE LUCRO EXISTENTE SERÍA SENSIBILMENTE INFERIOR AL 33% DE RESERVA DE ESPECTRO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 89 INC. F DE LA LSCA

Por su parte, el abogado especializado en comunicación Miguel Rodríguez Villafañe, destacó como uno de los puntos importantes de esta resolución, "que hasta que se llame a concurso para regularización de licencias radiales, La Ranchada sea reconocida y así se garantice su continuidad".

Villafañe también remarcó como otro de los puntos fuertes de esta resolución tomada por Ottaviano: "el reconocimiento de la difusión de acciones de los sectores populares, que acompañó el fortalecimiento de los procesos organizativos de las villas y los barrios de Córdoba" y resaltó la importancia de este hecho para otras radios comunitarias, "a quienes también beneficiaría como precedente".

Luego de expresar su preocupación por "la falta de seguridad en la continuidad de la radio, dado que no ha podido acceder a una licencia en 25 años", la Defensora recomendó al Afsca "que hasta tanto no se concrete la correspondiente planificación y sustanciación de los postergados llamados a concursos para las emisoras comunitarias en las denominadas "zonas de conflicto" y se finalice el proceso de desconcentración de los mercados monopólicos u oligopólicos, sería conveniente instrumentar una herramienta legal y administrativa que les permita hacer efectiva la garantía de reserva de espectro al sector sin fines de lucro que prevé la Ley 26.522".

Por otro lado, los oyentes de FM La Boca 90.1 han denunciado que sufren interferencias en las transmisiones de dicha señal provenientes de la Radio Con Vos 89.9.

La siguiente transcripción de uno de los reclamos sintetiza las más de dieciocho denuncias presentadas: "hace tres semanas que no puedo escuchar la emisora FM La Boca que transmite en 90.1 desde hace más de 25 años, cuando a las radios alternativas les decían "truchas" y las perseguían, la 90.1 se las rebuscó para seguir transmitiendo siendo una de las primeras [...] la interferencia en la señal se produce en varios barrios de la CABA por una emisora que tendría que emitir su señal en la frecuencia 89.9 Mhz pero no cumple con la ley y abarca su frecuencia y la de 90.1 Mhz impidiendo a

UNA GRAN MAYORÍA DE EXPOSITORES RECLAMÓ EL ORDENAMIENTO DE LAS FRECUENCIAS RADIALES, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LOS MEDIOS SIN FINES DE LUCRO Y LA RESOLUCIÓN DE LAS INTERFERENCIAS

muchos oyentes entre los que me incluyo de poder escuchar FM La Boca como hace muchos años lo hago. Espero que este reclamo haga cumplir con la ley a la emisora 89.9 y los oyentes de FM La Boca 90.1 Mhz podamos seguir disfrutando de nuestra radio. Creo que es una buena posibilidad de cumplir con la nueva ley de servicios audiovisuales que garantiza la pluralidad de voces”.

Entre las numerosas presentaciones recibidas por esta Defensoría a partir del 28 de julio del corriente, también son indicativas las de otros oyentes de la emisora comunitaria que señalan: “desde hace unas semanas la emisora 89.9 de FM está interfiriendo la emisión de FM La Boca ubicada en el 90.1 del dial, esto nunca había ocurrido y FM La Boca se escuchaba perfectamente, si es posible darle una solución porque están coartando mi libertad de escuchar lo que yo quiera”, “en el barrio de Lanús no puedo sintonizar en el dial 90.1 FM La Boca que es la radio que escucho todos los días, hace ya varios días que no la puedo escuchar. En la zona de C.A.B.A., más precisamente en el micro-centro es imposible sintonizar ya que otra radio interfiere en el mismo dial”, “FM la boca es la radio que elijo oír y me es imposible por la potencia de esta otra radio”.

En síntesis las audiencias de servicios de comunicación audiovisual solicitan: “exijo poder escuchar en la 90.1 a FM La Boca que [es] a quien corresponde esa frecuencia”, “tengan la amabilidad de proceder a pedir a esta emisora que baje su potencia así estamos todos contentos”, “espero que las autoridades no permitan que la radio que yo escucho sea interferida”.

En primer lugar, la Defensora puso en conocimiento de la autoridad de aplicación las denuncias, solicitándole “adopte las medidas correspondientes en la esfera de su competencia a efectos de resguardar el derecho a la comunicación democrática y plural de las audiencias”, a la vez que solicitó informes sobre la situación de ambas radios.

Simultáneamente decidió abrir un canal de diálogo, convocando a ambas emisoras con el fin de abordar el tema que es motivo de los reclamos y analizar propuestas de solución en el marco de la ley 26.522 y los estándares de derecho internacional aplicables.

Con la mediación de la Defensora, primero se escuchó los argumentos de cada una de las partes, luego se recibió el aporte de documentación, argumentos e informes técnicos a la luz de la preocupación con que la Defensoría ha escuchado no sólo a las audiencias, sino también los resultados de un estudio realizado recientemente, desde la Universidad de Avellaneda precisamente en la zona afectada por estas interferencias: “Los consumos medios en los territorios, las audiencias de las radios populares y comunitarias. Un relevamiento desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires”.

Allí se señala que “El hecho de que no se avance en la legalización de los servicios de comunicación radiofónicos en las grandes ciudades –también conocidas como zonas de conflicto por la multiplicación de antenas y la saturación del espacio radioeléctrico- tiene consecuencias en las posibilidades de escucha de las radios comunitarias, populares y alternativas. Durante el relevamiento identificamos a las personas que alguna vez habían escuchado Radio Gráfica o FM Riachuelo, pero que ya no lo hacían. A estos encuestados preguntamos los motivos por los cuales ya no escuchaban esas radios. Entre las diversas respuestas, muchas refirieron a las dificultades técnicas o interferencias para sintonizar las emisoras. El 9,45% de los encuestados que alguna vez escucharon FM Riachuelo ya no lo hace por problemas para sintonizar la emisora. Análogamente, el 7,14% de los encuestados que alguna vez escucharon Radio Gráfica ya no lo hace por dificultades técnicas. Dicho en otros términos, quienes ya no escuchan algunas de estas dos radios por problemas de sintonización representan el 3,53% de los oyentes que escucharon radio en la última semana”.

En el marco del espacio de diálogo abierto para abordar los reclamos y analizar propuestas de solución, se llegó a una serie de compromisos.

La empresa operadora de “Radio con vos” se comprometió a “que los solicitantes no vean desmejorada la calidad de recepción de los servicios de su interés, en tanto los mismos puedan encontrarse afectados como consecuencia de las emisiones de la estación de Afakot”.

AFAKOT S.A. acompañó un informe técnico, suscrito por un profesional matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (CO-PIPEC) quien “aconseja medidas para no generar interferencias significativas y perjudiciales” en el área de prestación, entre ellas una reorientación del sistema irradiante y la inclusión en el sistema de transmisión de un limitador o compresor de audio que evite la sobremodulación del transmisor” y formula una serie de consideraciones específicas y técnicas sobre las emisiones.

La Defensoría del Público, con la participación de los propios reclamantes monitoreando las transmisiones desde su domicilio, se encuentra actualmente efectuando el seguimiento de la implementación efectiva de las recomendaciones que el informe técnico formula.



Los reclamos obedecen a que gran parte de las emisoras sin fines de lucro no pudieron acceder a participar en los concursos para obtener una licencia.



GRILLA DE PROGRAMACIÓN

Las denuncias del público referidas a falta de inclusión de señales obligatorias, a emisiones parciales de las mismas o interferencias por emisoras radiales, continuaron llegando de manera permanente, reflejo de la necesidad de las audiencias de disponer de las emisiones de dichas señales en su grilla de programación.

En el marco del artículo 19 de la LSCA, que establece la canalización de los reclamos, su seguimiento y posterior informe de la prosecución a los interesados, mantuvieron constantes comunicaciones –telefónicas o por correo electrónico- con el público denunciante, en cuya oportunidad, manifestaron el interés que despierta la inclusión de dichas señales se debe a la calidad educativa, a la omisión de publicidad, a la necesidad de fortalecer una idiosincrasia cultural mediante la emisión de largometrajes nacionales o latinoamericanos, y sobre todo, a la importancia de contar con distintas señales que reflejen una pluralidad de ideas o voces, lo que ayuda a fortalecer y operativizar el derecho humano a la comunicación.

Sobre las señales obligatorias no incluidas, es importante destacar que dichas omisiones son producidas tanto por los prestadores de servicios de televisión por suscripción fija como de servicios satelitales. En el mes de julio se firmaron una serie de convenios en los que Cablevisión asumió el compromiso de instalar un decodificador sin costo alguno para acceder a la emisión íntegra de las señales obligatorias en los domicilios de los denunciantes.

CANALES LOCALES

Tanto la LSCA como las resoluciones del AFSCA reconocen y autorizan la inclusión de determinados canales locales

en las grillas de programación local. En ese sentido, durante este primer semestre del 2015, ingresaron y tramitaron los siguientes reclamos:

Cable Express (Decoteve S.A.): este cableoperador que brinda un servicio en la ciudad de Salta, no incorporó en su grilla de programación al Canal 9 de Salta. Como consecuencia la recepción de una importante cantidad de denuncias del público local, se notificó al AFSCA y al referido cableoperador.

De la presentación del descargo de este último, surgió la existencia de una medida cautelar que exige a la AFSCA se abstenga de obligar a la empresa a incorporar dicha señal, mientras no sea resuelto la causa judicial principal.

La empresa considera que la señal local no cuenta con una autorización formal, en los términos exigidos por la LSCA, lo que no determinaría la obligatoriedad de inclusión en las grillas de programación en los términos del artículo 65 de la LSCA, sino que tales autorizaciones precarias y transitorias reguladas meramente por la resolución 03-AFSCA/2009, determinan que el cableoperador considere que no existe obligación de incorporar el canal local a la grilla de programación.

En este punto, habiendo constatado el vencimiento del plazo de vigencia de la medida cautelar- el cual es de tres meses desde su dictado- se procedió a informar al AFSA dichas novedades, solicitando informe qué medidas administrativas o judiciales tomó en consecuencia de dicho vencimiento.

Cablevisión Salta: coincidiendo en los términos de los reclamos que preceden, el público de la ciudad de Salta denunció a Cablevisión por no incluir el Canal 9 de Salta en su grilla local de programación. A consecuencia del arribo de dichos reclamos, se procedió a notificar al cableoperador como al AFSCA la situación, que podría configurar incumplimientos

del artículo 65 de la LSCA como de la resolución N° 1273/AFSCA/2013 -que autoriza al canal a funcionar y explotar un servicio de televisión abierta de baja potencia.

FÚTBOL PARA TODOS

En el mes de junio se recibió un reclamo desde la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, que cristaliza una preocupación constante del público de distintas ciudades del país sobre la transmisión de partidos de fútbol por medio del programa Fútbol para todos sólo cumplimentaba su objetivo de gratuidad en las emisiones y de distribución de la transmisión de los eventos deportivos –en caso de superposición- a través de los canales abiertos de la CABA y del GBA, los cuales no suelen integrar las grillas de programación provinciales de la TDA.

Esa circunstancia reflejó una discriminación indirecta entre el público de CABA y GBA, que disfrutaban plenamente de la programación del plan, y el público del resto de las provincias.

En ese sentido, se puso en conocimiento a la Jefatura de Gabinete de dichos reclamos, solicitando que en el resto de las provincias se distribuya la televisación del torneo de primera división del fútbol argentino entre las señales de la grilla de programación de la TDA: TV Pública, DEPORTV, 360TV y CN23, de manera que cada señal transmita un partido diferente y no por medio de los canales abiertos de la CABA y el GBA.

Así fue recomendado por la Defensora del Público en la audiencia pública organizada por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCa), que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner para la elaboración del Listado Anual de Eventos de Interés Relevante para la retransmisión o emisión televisiva para 2016.

La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, acompañó al presidente del COFECA, Pedro Báez, en la apertura de la audiencia. “Hay quienes pretenden todavía perpetuar el modelo mercantilista de la comunicación, pero tenemos que recordar que ya no hay dueños de la comunicación. Y, que en todo caso, los dueños somos todos porque toda comunicación es pública”, afirmó.

Báez, que agradeció el acompañamiento y el apoyo de la Defensoría, expresó: “En la Argentina, en estos años, lo que ha transcurrido en el proceso político, económico social y en el plano de la comunicación, tiene un anclaje real”.

Ottaviano pidió que se tomara como piso el listado 2015 y se incorpore para 2016 los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde participen deportistas argentinos, los Juegos Paraolímpicos en cuanto participe la delegación de nuestro

país y las etapas finales de los Juegos Nacionales Evita 2016.

Entre los expositores, Esteban Falcón, del Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, solicitó que “cada vez que emitimos un evento bajo esta normativa tengamos una placa que mencione que está siendo transmitido gracias al artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para que la gente tenga conciencia de que se trata del ejercicio pleno de un derecho que está previsto en la ley”.

Por su parte, Pablo Cabello, de DeporTV, destacó la gratuidad de la señal que representa. Y aseguró: “Los eventos que transmite DeporTV están a disposición de cualquier cableoperador o canal del interior del país que lo solicite”. En la misma línea, Gabriel Valentini, de la TV Pública, se refirió al compromiso de ese canal en la transmisión de eventos relevantes para todo el país: “La intención del canal es continuar y, si se agranda la lista de eventos, mucho mejor”.

El vicepresidente del Consejo, Osvaldo Francés, remarcó la importancia de federalizar el acceso a la transmisión de eventos de interés: “Es fundamental que quede plasmada la necesidad de que los canales de baja potencia existentes y por existir tengan el derecho para la transmisión de los eventos locales y regionales en forma libre y gratuita”.

Todos los años, el COFECA convoca a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales a participar de una Audiencia Pública para elaborar el listado de eventos relevantes para retransmisión o emisión televisiva, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para garantizar el derecho al acceso universal a los contenidos de interés general.

TODO NOTICIAS

Un reclamo de las audiencias tuvo lugar a raíz de una cobertura periodística de un hecho que tuvo como centro la situación de una persona con padecimiento mental, realizada por la señal Todo Noticias.

En este sentido, luego de analizar la pieza, la Defensoría identificó una cobertura estigmatizante, violenta y discriminatoria, contraria a los estándares previstos por la normativa vigente en materia de salud mental.

En este marco se realizó la reunión con una representante de Todo Noticias, para transmitir el análisis y el reclamo recibido. En el encuentro se entregó la “Guía para el tratamiento mediático responsable de la Salud Mental” que reúne los aportes de especialistas y organizaciones dedicadas a la temática para que pueda ser remitida a las autoridades de la señal. Asimismo, se puso a disposición de la representante de

ARTEAR la posibilidad de realizar encuentros de capacitación sobre el tema.

Por último se acordó con la señal realizar una acción de reparación con la finalidad de brindar un tratamiento respetuoso sobre los derechos de las personas con padecimientos mentales, aportando información socialmente relevante y adecuada a los estándares de la normativa vigente.

La medida reparatoria se realizó el pasado 1 de septiembre en el noticiero de "TN al mediodía". En dicha emisión tuvo lugar un informe sobre el funcionamiento de los talleres y servicios de salud mental en el Hospital Pirovano. Sumado a ello, se realizó una entrevista a un profesional, quien señaló la importancia de abordar las problemáticas de salud mental en comunidad y la construcción de lazos sociales.

La Defensoría analizó la emisión de "TN al Mediodía" y consideró que, tanto el informe como la entrevista, tuvieron un enfoque riguroso, respetuoso y responsable de las problemáticas de salud mental. En este sentido, las distintas cuestiones planteadas en el informe reconocen el cambio de paradigma en la concepción y atención de las problemáticas de salud mental que propone la nueva ley nacional de salud mental.

TELEVISIÓN RIONEGRINA

Otro reclamo se recibió ante la noticia de la aparición de una persona ahorcada en un cartel publicitario en la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, en la que se emitieron imágenes en primer plano del cuerpo mientras la policía realizaba pericias.

Al estudiar el material recibido de la emisora, la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo verificó que en el marco de la cobertura analizada no se habían respetado los estándares previstos por la normativa vigente en materia de Salud Mental.

Se constató que una persona entrevistada hacía alusión a supuestos padecimientos mentales de la persona fallecida sin sustento en una fuente debidamente acreditada. Las asociaciones irreflexivas de hechos violentos (como en este caso, la muerte por ahorcamiento) con personas con padecimientos mentales resultan nocivos para dicho grupo social y sus familiares.

Se determinó además, que la inconveniencia de las imágenes transmitidas por el noticiero se agrava si se tiene en cuenta que remiten a un presunto suicidio, ya que además de afectar la mencionada privacidad del entorno familiar involucrado, puede generar efectos no deseados y perjudiciales para la salud de potenciales audiencias sensibilizadas con el tema.

LOS DUEÑOS SOMOS TODOS PORQUE TODA COMUNICACIÓN ES PÚBLICA

La Defensoría se puso en contacto con los responsables del canal, mantuvo una reunión en la sede en la Ciudad de General Roca, y luego se llevó a cabo una actividad de capacitación con los equipos periodísticos y de producción del noticiero.

A partir de lo conversado y como fruto de las reflexiones generadas al interior de la emisora, ésta incluyó en el programa "Somos la tarde" un bloque en el que a partir de la entrevista a un psicólogo se abordó responsablemente la problemática psico-social que suponen las depresiones severas.

La Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo estudió el nuevo material, y sostuvo que se trataba de "un enfoque riguroso, respetuoso y responsable de las problemáticas de salud mental [...] En su conjunto, la serie de aspectos desarrollados contribuyen a la difusión de información socialmente relevante a la población y a la representación respetuosa de las personas que transitan este tipo de estados de salud".

LOS PADECIMIENTOS MENTALES NO SON DELITO

El Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (Nº 26.657) rechazó todo tratamiento mediático que vulnere los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, tal como ocurrió el pasado 4 de junio con el suceso mediático conocido como "El loco de Mataderos".

El tratamiento estigmatizante de las personas con padecimientos mentales, así como su criminalización, atenta contra el "pleno goce de los derechos humanos" de estas personas tal como lo expresa el artículo 1º de la Ley Nacional de Salud Mental.

En una gacetilla pública, el Órgano de Revisión sugiere la utilización de la "Guía para el tratamiento mediático responsable de la Salud Mental" elaborada por la Defensoría del Público, la cual afirma en el primer punto de su decálogo: "los padecimientos mentales no son delito".

Así, entre todos, -señala el comunicado- podremos garantizar los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y generar formas de abordaje de estas problemáticas y desde una perspectiva de derechos.

LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

26.522
Y DECRETO
REGLAMENTARIO
N° 1225/10

Edución 2014

PEDIDO DE REUNIÓN CON CARÁCTER DE URGENCIA A LA CIDH

En un escrito recibido por el Gobierno Nacional, la Defensoría del Público le solicitó al presidente Mauricio Macri dejar sin efecto las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 y en el Decreto 236/2015, este último que declaró la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. El organismo le solicitó al Presidente de la Nación que se dejen sin efecto las medidas adoptadas y ajustara los actos de gobierno a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales a ella incorporados, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la nota dirigida al Presidente se informaron las numerosas presentaciones individuales y colectivas recibidas por el organismo, preocupadas por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el respeto de la institucionalidad plural por ella creada.

“Ambas medidas son contrarias a la Ley 26.522 y vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales y de transparencia en la gestión de gobierno”, señala la nota. Y amplía: “Ninguna de las normas y estándares internacionales se respetan en los Decretos cuestionados, que además incumplen la normativa local vigente. El resultado es una grave afectación de los derechos de quienes habitan la República Argentina, que en la Ley 26.522 son reconocidos y reconocidas como sujetos de derecho. Y es a esas audiencias a quienes la Defensoría del Público representa y quienes han solicitado que intervenga para resguardar sus derechos”.

Por otra parte, la Defensoría presentó diferentes escritos ante quienes integran el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual (COFECA) y la Comisión Bicameral de Promoción

**NINGUNA DE LAS
NORMAS Y ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SE
RESPETAN EN LOS DECRETOS
CUESTIONADOS, QUE ADEMÁS
INCUMPLEN LA NORMATIVA
LOCAL VIGENTE**

y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. En esas notas, se transmitió el rechazo de las audiencias frente al avasallamiento de la Ley 26.522, la Constitución Nacional y los tratados internacionales a través de decisiones que vulneran los procedimientos dispuestos por esa norma en materia de designación y remoción de los miembros del directorio.

PEDIDO DE REUNIÓN CON CARÁCTER URGENTE A LA CIDH

En este contexto, la Defensoría envió un escrito dirigido al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organiza-

ción de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, para solicitarle una reunión en carácter urgente. También le solicitó su pronta intervención “en el marco de sus facultades” y sus competencias debido a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que disponen la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio.

La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la CIDH “en el marco de sus facultades” ante la sanción de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional que afectan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a su organismo de aplicación. En la nota, señala que se trata de “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.

Leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”, señala la misiva.

La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”. Por otra parte, pide al Relator que “arbitre los medios necesarios para convocar a una audiencia con carácter urgente con el objeto de analizar la situación aquí planteada”.

La presentación ante Lanza se fundamenta en los reclamos que han presentado ante la Defensoría del Público las audiencias de la radio y la televisión, representantes de Universidades, medios de comunicación y organizaciones campesinas y de pueblos originarios, redes de comunicación comunitaria, sindicatos, entre otros actores y sectores sociales.

Una de las presentaciones ante el organismo fue realizada “en representación de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), integrada por 25 universidades de todo el país, para denunciar la vulneración de nuestros derechos implicada en el decreto 236/2015 que interviene la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC)”.

También expresaron su preocupación desde la “Unión de Trabajador@s Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI)” que consideró la intervención de la AFSCA “un claro ataque a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), por parte del nuevo gobierno nacional en la figura del Ministro Oscar Aguad. Con un desproporcionado despliegue policial y con un DNU que incurre en la ilegalidad, al no respetar la LSCA vigente, se interviene la AFSCA y la AFTIC, en un hecho de gravedad institucional sin precedentes”.

“Ante la anunciada intervención del AFSCA por parte del ministro Aguad, solicito la intervención de la Defensoría del Público, en defensa de la Ley No. 26522 y su espíritu de libertad de expresión”.

La intervención de la Defensoría del Público fue demandada también desde la “Comunidad Educativa Creciendo Juntos DIPREGEP 7848 en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela”. Señalaron que “Para estudiantes, familias y docentes la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días”.

“Solicito la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, por consiguiente la continuidad del AFSCA y AFSTIC. Es una ley democrática y sancionada por el Congreso, que garantiza la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad de voces. No puede ser vulnerada por un decreto. La vulneración de la ley constituye un atentado a los derechos de todas y todos los ciudadanos argentinas/os”.

Previamente, la Defensoría del Público envió un escrito donde solicita al presidente Mauricio Macri dejar sin efecto las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 y en el Decreto 236/2015. Este último declaró la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. En la nota, la Defensoría solicita al Presidente de la Nación que se dejen sin efecto las medidas adoptadas y ajuste los actos de gobierno a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales a ella incorporados, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El escrito fue recibido por el Gobierno Nacional y hasta el momento no obtuvo respuesta. Por el contrario, fue publicado en el Boletín Oficial un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el 267/2015 que modifica aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO ES UN ORGANISMO QUE EN LA ARGENTINA, DESDE SU CREACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE MEDIOS, VIENE TEJIENDO UNA LABOR IMPORTANTÍSIMA EN MATERIA DE LA DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A LA COMUNICACIÓN”.

EDISON LANZA

RELATOR PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA



Defensoría
del Público



LA DEFENSORÍA EN MOVIMIENTO

La Defensoría del Público tiene como uno de sus ejes centrales empoderar a la ciudadanía comunicacional en el conocimiento de sus derechos y las formas de reclamo ante su incumplimiento, de allí que resulta fundamental difundir el derecho a la comunicación en cada rincón del país, tanto como la posibilidad de brindar las herramientas técnicas y pedagógicas necesarias para que las audiencias puedan ejercer el derecho humano a la comunicación produciendo sentido, produciendo y haciendo radio y televisión.

Por ese motivo, en el marco del sexto aniversario de la sanción y la promulgación de la LSCA, el 9 de octubre, en la Plaza del Congreso, y ante la expectativa de las audiencias que se hicieron presentes, se inauguró la "Defensoría Móvil", un espacio de 75 metros cuadrados que recorrerá todo el país con un estudio de radio, otro de televisión, biblioteca y espacio de toma de reclamos, consultas y denuncias.

"Este es un paso más en el compromiso que asumimos con este equipo hace casi tres años cuando dijimos que no íbamos a hacer una gestión de escritorio si no que íbamos a hacer una gestión de territorio, porque tenemos un mandato popular que dice que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es profundamente federal y para beneficio de las audiencias, no importa dónde vivan en nuestro gran país", afirmó la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano.

"Estamos federalizando aún más la tarea de la Defensoría –agregó la Defensora– y generando universalidad en el acceso al derecho humano a la comunicación y lo hacemos desde acá, inaugurándolo en esta plaza simbólica y emblemática de la Ley, que sabemos que es irreversible, y que debe ser considerada sólo como piso y no como techo".

En la misma línea, el 24 de marzo la Defensoría del Público fue parte del acto que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo por

el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia" a 39 años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 junto a organismos de derechos humanos y distintas organizaciones.

Durante siete horas, miles de personas recibieron información, leyes y folletería sobre el organismo y conocieron sus derechos comunicacionales bajo la perspectiva de los derechos humanos, como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

"Para poder implantar la matriz económica liberal de la dictadura genocida, fue necesario implantar una matriz simbólica. Y esa matriz simbólica fue construida por un puñado de poderosos, desde sus medios de comunicación. Los mismos que hoy nos quieren dar cátedra de libertad de expresión. Los mismos que hoy impiden la plena aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los mismos que hoy invisibilizan esta Plaza", expresó, en la radio abierta, Cynthia Ottaviano.

El 1 y 2 de octubre, el estudio móvil de la Defensoría también estuvo en la Expo Carreras y la Feria del Libro de la Universidad Nacional de Lanús; y desde el 14 de octubre hasta el 29 de noviembre en Tecnópolis.

Luego, se trasladó al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA). Al 31 de diciembre de 2015, se entregaron más de 30.000 folletos institucionales, 5.500 ejemplares de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y más de 11.000 personas se acercaron para conocer el trabajo que realiza el organismo en su tarea de promoción del derecho humano a la comunicación.

ACCIONES DE VERANO

La Defensoría del Público se presentó en el marco de las distintas actividades de promoción que lleva adelante durante el verano para dar a conocer a las audiencias sus derechos, las funciones del organismo, las formas de contacto y el trabajo que viene realizando desde su creación.

A las presentaciones de este organismo en las ciudades de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires; Carlos Paz, en Córdoba y Gualaguaychú en Entre Ríos; se sumaron más tarde las experiencias con las audiencias de radio y televisión en la ciudad de Bariloche, y los fines de semana de febrero Ezeiza, en el Centro Recreativo Nacional (CeReNa), y en el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe).

El jueves 12 de febrero, el organismo dictó un taller para 250 jóvenes en el CeNaDe, un espacio abierto ubicado en la bajada del puente el Trébol del acceso Jorge Newbery de la Autopista Ricchieri, que recibió a más de 1500 jóvenes en las colonias de verano que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación.

El sábado 14, el domingo 15 de febrero y el sábado 28 de febrero se llevaron a cabo actividades de promoción en el CeReNa, espacio donde se desarrolla el ciclo "Verano de emociones" con recitales y distintas actividades para jóvenes.

También durante los jueves de febrero la Defensoría continuó con la programación del ciclo de cine debate "Co-

municación y cine" en el cual se proyectan en la sede de la Defensoría del Público, películas de ficción y documentales de producción nacional que reflejan la problemática comunicacional, el papel de los medios de comunicación audiovisuales y la responsabilidad de diferentes sectores de la comunicación. Luego de las proyecciones se realizó una charla debate con quienes participaron en la realización de las piezas.

Por último, el jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de febrero la Defensoría del Público estuvo presente en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche para profundizar su compromiso con las audiencias y promover el derecho a la comunicación continuando el trabajo que llevó a cabo durante todo 2014. También se dictaron talleres en radios comunitarias de la zona.

POR UNA TELEVISIÓN SIN "MINUTO A MINUTO"

Más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de distintos medios audiovisuales (productores, editores, conductores, realizadores, directores, actores, camarógrafos, iluminadores, musicalizadores, investigadores, docentes, sindicalistas, personalidades de la cultura) se sumaron a la iniciativa de la Defensoría del Público para poner en crisis la práctica del minuto a minuto.



» En el marco del sexto aniversario de la sanción y la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se inauguró la "Defensoría Móvil" frente al Congreso Nacional.

La inclusión de esta modalidad en la medición del rating durante la realización de los programas televisivos se convirtió en un mecanismo de presión laboral e intelectual que atenta contra la producción de información socialmente relevante y de representaciones mediáticas responsables.

La propuesta se basa en que el vértigo en la toma de decisiones que impone el “minuto a minuto” en la dinámica cotidiana de la televisión daña el trabajo de la comunidad audiovisual. Exige la prolongación de notas sin mayor información, descarta otras de interés público, prioriza la espectacularización por sobre la información y puede derivar en vulneraciones de derechos de las personas involucradas y de las audiencias.

Y en reiteradas ocasiones, los actores de la comunicación se ven obligados a producir discursos que pueden afectar el conocimiento de la realidad que se pretende abordar, vulnerando así derechos consagrados en diferentes leyes y en la Constitución Nacional.

Además, los firmantes consideran que el uso del “minuto a minuto” en tiempo real impone una lógica mercantil que “degrada nuestra tarea y resulta lesivo para los derechos de las audiencias, en especial de la niñez, reclamamos que deje de utilizarse como herramienta para la toma de decisiones y valoración sobre las producciones audiovisuales. Para construir una televisión en la perspectiva de los derechos humanos, más inclusiva, plural, diversa y profundamente democrática”.

Entre las organizaciones sociales y sindicatos que adhieren se encuentran la Asociación Argentina de Actores Asociación Migré, el Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAD), el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), la Asociación Argentina de Trabajadores de las comunicaciones (AATRAC), la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y Radio Tierra Campesina, FM 89.1, la radio de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI).

Además, se recibieron más de mil adhesiones de personalidades del ámbito cultural entre las que se destacan la de la Ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, la de los periodistas Víctor Hugo Morales, Roberto Caballero, Carlos Barragán, Facundo Pastor, Miriam Lewin, Mona Moncalvillo, Horacio Cecchi, Claudio Villarruel, Bernarda Llorente, Alejandro Apo y Felipe Pigna, el músico Víctor Heredia, los actores Cristina Banegas, Alejandra Darín, Arturo Bonín y José María Muscari, y los representantes de la productora Endemol Martín Bezruk, Pablo Procopio y Gastón Olivera.



» La “Defensoría Móvil” es un espacio de 75 metros cuadrados que recorre todo el país con un estudio de radio, otro de televisión, biblioteca y espacio de toma de reclamos, consultas y denuncias.



2º CONGRESO DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO

CONVITO
A RECORRER
LA PLAZA
MAYO

CONVITO
A RECORRER
LA PLAZA
MAYO

CONVITO
A RECORRER
LA PLAZA
MAYO

DIFUSIÓN DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

Bajo la premisa “Nadie reclama un derecho que no conoce”, la Defensoría del Público continuó con la tarea realizada en 2013 y 2014 en materia de capacitación y siguió promoviendo su rol pedagógico esencial para fortalecer a la ciudadanía a partir de la formación, el debate, la participación y la generación de propuestas que se traduzcan en políticas públicas concretas antes las diferentes necesidades y vulneraciones reclamadas.

EN 2015, DE LAS ACTIVIDADES PARTICIPARON 5813 PERSONAS Y SU TRABAJO IMPLICÓ 183 HORAS.

- El 25 de febrero, en Capilla del Monte, Córdoba, con la Cooperativa Viarava.
- El 6 de marzo, con la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba.
- El 7 de marzo, en el marco del Día de la Mujer en el Centro de Exposiciones Roberto de Vicenzo de Berazategui, Buenos Aires.
- El 26 de marzo, con FM La Ranchada de Córdoba.
- El 30 de marzo, la Defensora del Público disertó en el Plenario del Consejo Federal de Adultos Mayores desarrollado en Ciudad de Buenos Aires.
- El 26 y 27 de mayo, con Radio Nacional Salta.
- El 27 de mayo, la Defensora del Público disertó en el Consejo Deliberante de Las Flores, Buenos Aires, que declaró su visita de “interés legislativo”.
- El 1 de junio, la Defensora participó en la Universidad Nacional de La Matanza de la conferencia “La comunicación como derecho, el Estado como garante”, organizada por la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines (UCAYA).
- El 2 de junio, la Defensora participó en la Ciudad de Buenos Aires de la charla “Semana del Periodista. Un encuentro con la profesión”, organizada por la Universidad Abierta Interamericana.
- El 11 de junio se trabajó en Villa Giardino, Córdoba, con Radio La Minga.
- El 15 de junio, la Defensora del Público visitó Radio Sur FM 88.3 de Ciudad de Buenos Aires y conversó con la audiencia de la emisora.
- El 16 de junio la Defensora del Público participó en la Universidad Nacional de General Sarmiento de la charla “Las audiencias como sujetos de derecho: viejas disputas y nuevos paradigmas”.
- El 22 de junio la Defensora del Público formó parte de la presentación en la sede del organismo de “Los consumos de medios en los territorios, las audiencias de las radios populares y comunitarias. Un relevamiento desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires”, estudio de audiencias de las emisoras populares FM Riachuelo y Radio Gráfica y de los consumos de medios en el sur de la Ciudad realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
- El 12 de junio, en Capilla del Monte, Córdoba, con la Cooperativa Viarava.
- Del 18 al 20 de junio, en Resistencia, Chaco, con la Coalición por una Comunicación Democrática de Chaco.
- El 3 de julio, en San Carlos de Bariloche, Río Negro, con Radio Nacional Bariloche.



» La Defensora disertó en la Universidad Nacional de Avellaneda con estudiantes de la carrera de Comunicación.

- El 1 de julio, la Defensora disertó en la Universidad Nacional de Avellaneda con estudiantes de la carrera de Comunicación.
- El 7 de julio se trabajó en la Ciudad de Buenos Aires con el Curso de Formación de Promotores para la Comunicación Popular del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).
- El 16 de julio la Defensora del Público integró, en la Ciudad de Buenos Aires, el panel "Régimen jurídico de la actividad periodística", organizado por la Maestría en Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
- El 17 y 18 de julio, en el Festival Oberá en cortos.
- El 18 de julio se trabajó en Avellaneda, Buenos Aires, en el Foro Universidad y Comunicación Popular organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda.
- El 21 de julio, la Defensora disertó en la Mesa para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2025 del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
- El 23 y 24 de julio, en el espacio Interministerial montado en la Plaza Trujuy de San Miguel, Buenos Aires.
- El 25 y 26 de julio, en el Centro Cultural Municipal Leonardo Favio de Lanús, Buenos Aires.
- El 1 de agosto, en Plaza Cumelén de Castelar, Buenos Aires.
- El 2 de agosto, en Plaza San Martín de Morón, Buenos Aires.
- El 8 de agosto se trabajó en Río Ceballos, Córdoba, con las instituciones cordobesas Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos, Radio Nativa de Unquillo, Nexo de Villa Allende, La Ronda de Colonia Caroya, Inédita de Cosquín y VillaNos de Carlos Paz.
- El 11 de agosto, en la inauguración de la emisora FM Ecos de mi Pueblo, El Fuerte, Jujuy.
- El 16 de agosto, la Defensora participó del II Encuentro Nacional de Familias LGBT organizado por 100% Diversidad y Derechos.
- El 19 de agosto, la Defensora del Público participó en la Ciudad de Buenos Aires del panel "30 años de itinerarios intelectuales. Preguntas, abordajes y desafíos del campo comunicacional" en el marco del Congreso Latinoamericano de Comunicación "30 años de itinerarios intelectuales. Preguntas, abordajes y desafíos del campo comunicacional", llevado adelante por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Luego, el 21 de agosto se organizó una charla destinada a recorrer experiencias de comunicación campesino indígena que acompaña la Defensoría.

- El 21 de agosto, en el Polideportivo Municipal Gorki Grana de Morón, Buenos Aires, en el marco de Mueve Morón organizado por el municipio local.
- El 21 de agosto, en Bahía Blanca, Buenos Aires, con comunicadores/as y estudiantes de periodismo y comunicación.
- El 1 de septiembre, la Defensora del Público disertó en la conferencia “Ciencias Sociales y comunicación popular en tiempos de transformación”, desarrollada en el II Congreso de Ciencias Sociales y I Congreso de Comunicación Popular. Participó junto a Francisco Sierra Caballero (Integrante del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL), Amparo Cadavid (Universidad UNMINUTO), Alcira Argumedo (Socióloga), Patricia Fasano (Integrante de la Universidad de Entre Ríos) y Claudia Villamayor (Docente de la Universidad Nacional de La Plata).
- El 1 de septiembre, en Esquel, Chubut y en El Bolsón, Río Negro.
- El 4 de septiembre, en Rocha, Uruguay, con el XIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación y con el V Encuentro Latinoamericano de Comunicación.
- El 10 de septiembre, la Defensora del Público participó en el II Encuentro de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe RRULAC. Disertó en la clase magistral “El derecho humano a la comunicación, el derecho de las audiencias”, junto a Aldo Rotman (Presidente de ARUNA).
- El mismo día también formó parte en la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Ciudad de Buenos Aires de la conferencia “Qué implica el derecho a la comunicación garantizado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, junto a Dante Palma (Profesor de Filosofía) y Romina Calderaro (Periodista).
- El 11 de septiembre, en General Roca, Río Negro, con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue.
- El 13 de septiembre, en Carlos Paz, Córdoba, con Locutores por su Identidad.
- El 21 de septiembre, la Defensora del Público estuvo en la Universidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires, en la conferencia “Democracia del lenguaje, democracia entre los géneros”, junto a Alejandro Córdoba (Director periodístico de DiarioConurbano.com), Estela Díaz (Secretaria de Género de la Central de Trabajadores Argentinos CTA), Ivanna Rezano (Docente adjunta del Seminario de Equidad de Género y Construcción Ciudadana) y Laura Berardo (Docente titular del seminario y referente de Mujeres del Sur en Proyecto Nacional).

LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO CONTINUÓ CON LA TAREA REALIZADA EN 2013 Y 2014 EN MATERIA DE CAPACITACIÓN

- El 25 de septiembre, en el Encuentro de Organizaciones “Los barrios en la Facultad” realizado en Ciudad de Buenos Aires.
- El 26 de septiembre, en el marco de la inauguración FM 104.7 La Arriera gestionada por la Mesa Campesina del Norte Neuquino (MCNN) – MNCI de Chos Malal, Neuquén.
- El 28 de agosto, en Punta del Agua, Mendoza, con la Escuela Florentino Ameghino.
- El 28 de agosto, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Mesa “La información en los medios públicos. Los modos de producción de la noticia”, en el I Coloquio Nacional sobre Ciudadanía y Medios públicos.
- El 29 de septiembre, en el VI Coloquio Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos, organizado por la Universidad Nacional de Lanús y por la Universidad Nacional de Quilmes.
- El 30 de septiembre, en Expo Carreras y la Feria del Libro de la Universidad Nacional de Lanús.
- El 30 de septiembre, en el Mes de la Juventud de Avellaneda.
- El 5 de octubre, en el Centro de Formación Pichincha del Sindicato de Prensa de Rosario, Santa Fe, en la charla “Los derechos de las audiencias y la responsabilidad social del periodismo. Desafíos del paradigma comunicacional del siglo XXI”.
- El 8 de octubre, formó parte de la charla “Más voces para una mejor educación”, junto a Verónica Piovani (Directora del Instituto Nacional de Formación Docente) y Daniel Calabrese (Coordinador nacional del proyecto de radios IES).
- El 8 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con integrantes de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA) en el marco de los festejos por el “Día de la mujer indígena”.
- El 8 de octubre, en Córdoba, con la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).



» Bajo la premisa “Nadie reclama un derecho que no conoce”, la Defensoría del público amplió la difusión del derecho humano a la comunicación.

- El 15 de octubre de 2015, la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, participó, a través de una videoconferencia del encuentro internacional titulado “Concentración de Medios de Comunicación en Colombia”, actividad organizada por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y la seccional alemana de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). La Lic. Ottaviano expuso en el panel dedicado a la “Concentración de medios y la competencia al consumo crítico”, cuyo objetivo fue “analizar las implicaciones de la concentración de la propiedad de los medios en el ejercicio efectivo del derecho a la información y el papel de las audiencias en la generación de contenidos”. En ese contexto, Adriana Hurtado, presidenta de Fecolper y Nina Ludewig de RSF agradecieron a la Lic. Ottaviano sus “valiosos aportes para el análisis y su disposición para debatir”.
- El 21 de octubre, la Defensora fue invitada como experta al Seminario “Las corporaciones mediáticas y su incidencia en los procesos democráticos Sur-Sur”, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que preside Baltasar Garzón bajo el auspicio de la UNESCO y el Instituto Lula, junto a Emmanuel Mayah (Periodista de investigación de Nigeria, director de Reporters 360, embajador de la Agencia Nacional de Nigeria Antitráfico de Personas NAPTIP), Pedro Brieger (Periodista y director del portal de noticias latinoamericano NODAL), Alejandro Linares (Responsable de la Agencia de Noticias de Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC) y Pablo Llonto (Periodista y abogado).
- El 22 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Taller Cuatrimestral de Comunicación Comunitaria - Cátedra Cardoso de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias.
- El 2 de noviembre, en Alta Gracia, Córdoba, con el Centro de Jubilados 19 de mayo.
- El 9 de noviembre, en Lomas de Zamora, Buenos Aires, con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- El 29 de noviembre, en los Premios Mario Bonino 2015 organizado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).
- El 15 de diciembre, en Mendoza, con Raíces Ancestrales, Productora Indígena de Contenidos Audiovisuales.



En 2015 de las actividades de difusión del derecho a la comunicación participaron 5813 personas y su trabajo implicó 183 horas.



Defensoría del Público



LA DEFENSORÍA EN EL MUNDO

“La Defensoría en Argentina cumple un rol fundamental de educación ética y ciudadana, que promueve la equidad y la igualdad y ello hace parte, no sólo de las buenas prácticas que debemos dar a conocer, sino de las obligaciones que el Estado Argentino está cumpliendo en esta materia”, elogiaron en la OEA.

EXPOSICIÓN EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES, REUNIONES CON REPRESENTANTES DE OTROS PAÍSES O ENTREVISTAS OTORGADAS A MEDIOS EXTRANJEROS

URUGUAY

El 15 de mayo de 2015, la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, fue la expositora principal en dos encuentros que se desarrollaron en la ciudad de Montevideo (Uruguay).

El primero de estos “conversatorios” fue organizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), organismo que según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de ese país (N° 19.307) tendrá a su cargo la función de defensa de los derechos de las audiencias de la radio y la televisión.

Ariela Peralta, miembro del consejo directivo de la INDDHH, hizo una evaluación del aporte realizado por la Defensoría del Público de Argentina: “La Defensora Ottaviano ilustró detalladamente cuáles fueron las interrogantes planteadas en su equipo de trabajo, cuáles eran y son los desafíos a en-

frentar y qué estrategias ha priorizado la Defensoría para dar respuesta eficaz a las actuaciones planteadas. Entender quiénes son los actores en juego, qué rol debe jugar la Defensoría, así como los desafíos sorteados utilizando el diálogo y la capacitación como forma de lograr soluciones reparadoras, constituyeron un aporte enormemente significativo para ayudar a reflexionar también críticamente sobre nuestro trabajo actual y los retos a enfrentar. El diálogo fue fluido y así quedó planteado, como una comunicación abierta, constante y productiva desde ya y hacia el futuro. La experiencia compartida desde la Defensoría del Público de Argentina, tanto en la manera de interpretar el mandato, como en pensar cuál es la función institucional a cumplir y desde qué perspectiva comenzar a crear una institucionalidad creíble y transparente, fue un insumo vital para la coyuntura que atraviesa la INDDHH”.

El segundo de los encuentros tuvo lugar en la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y estuvo coordinado por la Coalición por una Comunicación Democrática.

Según explicó Lilian Celiberti integrante de la Coalición, el propósito de esta convocatoria fue “conocer la experiencia de la Defensoría en Argentina y recabar insumos que puedan ser importantes desde la mirada de la sociedad civil, para que esta nueva experiencia en Uruguay se vea enriquecida”.

Al término de la jornada, la Licenciada Ottaviano señaló: “Es un honor acompañar este proceso de la segunda Defensoría del mundo de alcance nacional, como la que se acaba de crear en Uruguay con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

CIDH

El 19 de marzo de 2015 la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, junto a la Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, María José Guembe, expuso en la reunión de trabajo titulada “Derechos de la niñez y medios de comunicación en las Américas”.

El encuentro fue convocado por las Relatorías para la Libertad de Expresión y sobre Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

De esta jornada, que se dio en el marco del 154 Período de sesiones de la CIDH y que se realizó en la ciudad de Washington (Estados Unidos), participaron representantes, tanto de los Estados como de organizaciones de la sociedad civil, de Argentina, Brasil, México y Uruguay.

El objetivo de la Comisión fue conocer los “desafíos que se enfrentan en la región para la efectiva vigencia del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la libertad de expresión y al acceso a la información”.

Durante la reunión, la Defensora expuso cuáles son las acciones que el organismo a su cargo desarrolla para la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales y puso a consideración de los Relatores de la CIDH una serie de sugerencias, entre las que se encuentran:

- La creación de organismos de protección de los derechos de las personas –y en especial de la niñez y adolescencia– en su relación con los medios de comunicación audiovisual, públicos y privados con y sin fines de lucro, tales como la Defensoría del Público.

- La protección de los derechos personalísimos de los niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales.
- El derecho a no ser discriminados/as, estigmatizados/as ni criminalizados/as, en la programación de la radio y la televisión.
- El derecho a expresar sus ideas y opiniones en un marco de respeto y a que sus intereses sean representados en la programación radial y televisiva.
- El derecho a acceder a la información de acuerdo a su etapa de desarrollo y a programaciones dedicadas a la niñez y adolescencia que respete su identidad, cultura e idioma, contribuyendo a eliminar desigualdades y asimetrías sociales.
- El derecho de los niños y niñas con discapacidad a acceder a todo tipo de informaciones y programaciones.
- El derecho de niños y niñas a participar a través de la producción de sentidos en los medios audiovisuales.
- El desarrollo de un trabajo sistemático coordinado con la Relatoría de los Derechos de la Niñez para fortalecer los derechos en todos los ámbitos que inciden en el desarrollo y socialización de los niños, niñas y adolescentes.
- Definir políticas transformadoras que permitan superar patrones estructurales que han dado lugar a la vulneración de los derechos comunicacionales de la niñez y la adolescencia.

Al concluir esta instancia de diálogo entre el organismo internacional y las representaciones de los distintos países, Ottaviano resumió los puntos en común que tuvieron las exposiciones: “Una vez más quedó en evidencia que en Latinoamérica tenemos una agenda comunicacional en común. La niñez y adolescencia son criminalizadas por los medios



» En Chile, disertando en el Observatorio de Medios FUCATEL.

masivos. Son ignorados como fuente de opinión y son blanco de estigmatizaciones y discriminaciones. También es notoria la falta de programación nacional específica para chicas y chicos". Ante este panorama, indicó que "es fundamental la participación de los Estados y resultaría trascendente la contribución activa de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

En tanto, ambas Relatorías de la CIDH, representadas por sus titulares Edison Lanza y Rosa María Ortiz, emitieron un comunicado en el cual destacan "el alto interés y el compromiso mostrado tanto por los Estados que participaron en la reunión de trabajo como por las organizaciones de la sociedad civil". Se anunció además que "como resultado práctico la CIDH decidió iniciar un proceso de consultas para la elaboración, en el año 2016, de un informe temático" sobre los derechos de la niñez y los medios de comunicación.

El mismo 19 de marzo de 2015, la Defensora del Público Cynthia Ottaviano y la Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, María José Guembe mantuvieron una reunión en la ciudad de Washington con Luz Patricia Mejía Guerrero, Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), el cual tiene como función la evaluación de la implementación efectiva de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994). Tal Convención estableció por primera vez

el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado.

Mejía Guerrero destacó "la importancia de las prácticas que se han ido desarrollando a la luz de la legislación argentina en esta materia y el trabajo de la Defensoría del Público en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Dicha labor se hace fundamental en las transformaciones de las prácticas culturales que son la raíz de la violencia contra las mujeres y las niñas y son promovidas, en muchos casos, por los medios de comunicación. Éstos juegan un papel fundamental para promover los cambios de percepciones y conductas sociales que contribuyan al libre ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas. La Declaración sobre Femicidio del MESECVI recomienda a los medios de comunicación adoptar códigos de ética para el tratamiento de estos casos, promoviendo respeto a la integridad de las víctimas y evitando estereotipos sexistas o descalificadores. En este sentido, la labor realizada por la Defensoría en Argentina, cumple un rol fundamental de educación ética y ciudadana, que promueve la equidad y la igualdad y ello hace parte, no sólo de las buenas prácticas que debemos dar a conocer, sino de las obligaciones que el Estado Argentino está cumpliendo en esta materia".



» Con Edison Lanza, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

BRASIL

El 27 de marzo de 2015 la Defensora del Público expuso en el “Tercer Seminario Iberoamericano de Defensorías/Ombudsman en Medios de Comunicación”, actividad que formó parte de la propuesta pedagógica ofrecida a estudiantes de Maestrías y Doctorados que cursaban la Escuela de Verano en la Universidad de Brasilia.

En tal Seminario, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAI), se analizaron las experiencias de Defensorías de las Audiencias de Portugal, Brasil y Argentina a través del relato de quienes ejercen tales cargos o de investigadores que se han especializado en estas temáticas. Por ejemplo, el caso brasileño fue explicado por Joseti Marques y Fernando Oliveira Paulino, Ouidora y ex Ouidor adjunto, respectivamente, de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC) y la situación de Portugal por la profesora de la Universidad de Minho, Madalena Oliveira.

Desde Buenos Aires y a través de una videoconferencia, la Defensora Ottaviano instó a los más de ochenta académicos presentes a “impulsar investigaciones sobre derechos de las audiencias” porque, consideró, “en América Latina tenemos una agenda común de problemáticas vinculadas a la concentración de la comunicación, la criminalización de la niñez y la adolescencia, la estigmatización e invisibilización de los pueblos originarios y la violencia mediática por razones de género u orientación sexual”.

CHILE

El 16 de abril de 2015 la Defensora del Público fue oradora en la “Primera Jornada sobre Pluralismo y Televisión”, seminario que tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Chile y fue organizado por el Observatorio de Medios Fucatel y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de ese país.

La licenciada Ottaviano fue la única invitada extranjera que expuso ante un auditorio integrado por especialistas de la academia, la industria, los gremios, la sociedad civil y el gobierno de Chile. Allí explicó mediante ejemplos concretos y casos resueltos, cómo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina en general y la Defensoría del Público en particular promueve la diversidad en el acceso a la gestión, a las señales y a la programación.

“Los pluralismos son claves para la profundización de las democracias. Pero debemos decir que no es muy aconsejable reducir o solo interpretar al pluralismo como lo político partidario. El pluralismo debe ser entendido también desde otras dimensiones, como la social, étnica, religiosa, cultural y lingüística”, dijo Ottaviano.

La Ministra de Cultura de Chile, Claudia Barattini Contreiras, evaluó la trascendencia de un organismo como el argentino: “La Defensoría del Público es una experiencia extraordinaria que demuestra cómo se puede efectivamente ejercer, desde la ciudadanía, un derecho a la comunicación que se haga cargo del pluralismo y la diversidad cultural. Esa es la



» Omar Rincón, comunicador colombiano y su par de Uruguay, Gabriel Kaplún, visitaron junto al realizador audiovisual ecuatoriano Mauricio Estrella la Defensoría del Público y elogiaron el trabajo que lleva a cabo el organismo.

tarea que tenemos en Chile”. En tanto que la directora del Observatorio de Medios Fucatel, Manuela Gumucio, hizo similar consideración: “En general los medios entienden al pluralismo solo en su dimensión política, como la cantidad de grupos representados, pero hay una parte fundamental del pluralismo que es la diversidad y es claro para todos que la televisión es bastante deficiente en ese aspecto. La experiencia de la Defensoría del Público de Argentina es única, nueva y nos interesa mucho conocerla, porque desde hace más de dos años han estado llevando a cabo acciones frente a este tema”.

El 26 de mayo se trabajó con radios comunitarias chilenas en el marco del Seminario “Comunicación Comunitaria para el Nuevo Siglo” organizado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Chile.

El 13 de agosto, con la participación del Director de Capacitación, Ernesto Lamas, en Accra, Ghana, se difundió la actividad de la Defensoría, junto a expertos en legislación y representantes políticos de redes de radios comunitarias que participaron del XI Congreso de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

ECUADOR

El 10 y 11 de marzo de 2015 la Defensoría del Público, representada por la Mg. Flavia Pauwels del área de Relaciones Internacionales, participó como invitada en el Seminario “Defensores de audiencias y lectores. Autorregulación mediática y derechos ciudadanos”. La actividad fue organizada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación (CORDICOM) de Ecuador y se desarrolló en las ciudades de Quito y Guayaquil.

El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer el cambio de paradigma propuesto por la LSCA de Argentina y, en particular, cómo se ha llevado a la práctica los artículos 19 y 20 de dicha normativa en lo que respecta a la misión encomendada a la Defensoría del Público. Esta información resultó de importancia para Ecuador ya que según la Ley Orgánica de Comunicación de ese país, aprobada en junio de 2013, cada medio de comunicación de alcance nacional deberá contar con una defensoría de audiencia, la cual será elegida mediante concurso público.



» En Montevideo, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

EL PLURALISMO DEBE SER ENTENDIDO TAMBIÉN DESDE OTRAS DIMENSIONES,

COMO LA SOCIAL, ÉTNICA, RELIGIOSA, CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

Al término del seminario, el presidente del CORDICOM, Patricio Barriga, realizó el siguiente balance: “La participación argentina en estas conferencias ha sido una experiencia muy interesante y enriquecedora, sobre todo para la gente que en Ecuador está postulándose como defensor o defensora de las audiencias. También para los propios medios de comunicación, para despejar las dudas que se habían creado en torno a esta figura de las Defensorías que, siempre es incómoda dentro de las mesas editoriales pero que, sin embargo, tiene la potencialidad de crear una línea directa con las audiencias, con sus expectativas y reclamos. La Defensoría de Argentina muestra cómo hay mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y vemos cómo su intervención ha logrado mucho más de lo que uno podría esperar como ciudadano o ciudadana. Frente a un derecho vulnerado, frente a un contenido que podría ser lesivo, frente a una programación que en algún momento podría ser inapropiada, ha habido una respuesta positiva en esta mediación necesaria que hace la Defensoría, en la cual no solo hay reparación mediante un pedido de disculpas o una rectificación sino también promoción del derecho a la comunicación y la información”.

MÉXICO

El 2 de julio de 2015, la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, participó, a través de la emisión de un video con su exposición, del Foro “El derecho a la información y los derechos de las audiencias: posibilidad real o buenos deseos”, organizado por Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM), en la ciudad de México.

A partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en junio de 2013, y posteriormente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de agosto de 2014, México incorporó por primera vez en su historia, los derechos de las audiencias. Esto incluyó la obligatoriedad, para todos los licenciatarios de radio y televisión abierta, de contar con Defensorías de Audiencias. En ese marco, el testimonio de la Defensora Ottaviano formó parte de las exposiciones desarrolladas en el panel dedicado al “Contexto internacional de los derechos de las audiencias”.

El 25 de julio de 2015, la Defensora fue entrevistada a través de una videoconferencia por la Defensora del Televidente del canal Telecafé de Colombia, Ximena Murillo. Tal medio de comunicación, que es de gestión pública y de alcance regional, transmite desde las ciudades de Manizales, Armenia y Pereira.

La Defensora Murillo al presentar a la Lic. Ottaviano señaló la importancia de “analizar experiencias internacionales”

en la materia. El diálogo entre ambas giró en torno a los altos contenidos de violencia en los medios, los mecanismos para promover la participación de las audiencias, las acciones desarrolladas en ambos países en pos del acceso de las personas con discapacidad auditiva a la televisión, la necesaria interacción con otras organizaciones de la sociedad civil y la importancia de coordinar esfuerzos a nivel latinoamericano para visibilizar el trabajo que realizan las defensorías del público.

Por otra parte, el 7 de septiembre de 2015, la Defensora participó mediante la presentación de un escrito en la Consulta Pública a la que convocó el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT), organismo regulador de la comunicación audiovisual de ese país. Tal convocatoria estuvo dirigida a recibir aportes y sugerencias previas a la aprobación de los “Lineamientos Generales sobre los derechos de las audiencias”.

La participación de la Defensora se realizó por el pedido expreso de las Defensoras y Defensores de México, quienes conforman la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y quienes también integran el grupo de trabajo regional denominado Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID).

En el documento presentado ante las autoridades reguladoras mexicanas, Ottaviano señala, entre otras sugerencias, que:

“Resulta recomendable tener siempre presente que la figura del Defensor o la Defensora es de enlace y puente entre los concesionarios y las audiencias. Que su tarea es esencialmente pedagógica y reparadora, en la búsqueda constante de generar canales de diálogo, reflexión y concientización para que no se vulneren los derechos de las audiencias. Para llevar adelante la tarea pedagógica y generar un debate permanente, es muy recomendable garantizar en la normativa el presupuesto acorde a la tarea (...) Se recomienda de manera enfática la creación normativa de Defensorías donde los Defensores y Defensoras tengan competencia sobre la TV y/o Audio restringido, ya que las audiencias no pueden ser discriminadas de ejercer sus derechos comunicacionales como consecuencia del soporte en el que acceden al derecho humano a la comunicación (...) Resulta fundamental tener en cuenta la posibilidad de normar el llamado a Audiencias Públicas para que en igualdad de condiciones y acceso las audiencias puedan expresarse sobre el funcionamiento de la radio y la televisión, de manera de que sus perspectivas, ideas y opiniones sean tenidas en cuenta por las autoridades de aplicación, los Defensores y Defensoras y por todos los actores de la comunicación”.



» El 7 de septiembre de 2015, la Lic. Cynthia Ottaviano participó en la Consulta Pública a la que convocó el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT).

ORGANIZATION OF NEWS OMBUDSMEN (ONO)

Del 19 al 22 de abril de 2015, la Defensoría del Público representada por el Lic. Luciano Beccaria, de la Dirección de Análisis, Monitoreo e Investigación, participó en la Conferencia Anual de la Organization of News Ombudsmen (ONO) que tuvo lugar en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Los ejes de debates en la conferencia de Ciudad del Cabo fueron: la cobertura de procesos judiciales y temas policiales, estigmatización de grupos vulnerables por razones de género o raza, la información sobre el terrorismo y la influencia de las redes sociales, entre otros.

El 22 de julio de 2015 el Presidente de la Organization of News Ombudsmen (ONO), Tarmu Tammerk notificó a la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, que el comité directivo de tal organización internacional eligió a la Argentina como país sede de su próxima conferencia anual, la cual se desarrollará del 17 al 20 de abril de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ONO es una organización internacional sin fines de lucro que reúne a Defensores/as de las Audiencias de 22 países. Importantes medios de comunicación de gestión pública

y privada forman parte de la ONO a través de sus Defensores/as. Entre aquellos del sector audiovisual pueden mencionarse: CBC (Canadá), SBS (Australia), NPR y PBS (Estados Unidos), BBC (Gran Bretaña), Caracol y RCN (Colombia), DR y TV2 (Dinamarca), RTP (Portugal), VRT (Bélgica), ERR (Estonia), YLE (Finlandia) y la Segunda Autoridad de Radio y Televisión (Israel), entre otros. En cuanto a los medios gráficos, se destacan: Folha de San Pablo (Brasil), El País (España), The Guardian y The Observer (Gran Bretaña), Toronto Star y The Globe and Mail (Canadá), Politiken (Dinamarca), Hamburger Abendblatt (Alemania), The Hindu (India), entre otros.

La Defensoría es miembro regular de la ONO desde 2013 y su titular fue elegida como parte del consejo directivo en 2014. En aquella oportunidad el Presidente de la ONO y Ombudsman de la radio y televisión pública de Estonia, Tarmu Tammerk, señaló que la designación constituía un "reconocimiento al trabajo llevado a cabo en Argentina y que comparte tantos principios en común con la ONO. Con la asistencia de Ottaviano, la ONO construirá un fuerte lazo con América Latina para nuevos defensores. Juntos buscamos construir una sociedad sólida, con una libertad de expresión fortalecida, a través de la justa y precisa información para todos los ciudadanos".



» En Washington, con Luz Patricia Mejía, de la Secretaría Técnica del MESECVI/CIM, organismo especializado de la OEA para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES

El 14 de noviembre de 2015 en ocasión de celebrarse los tres primeros años de gestión de la Defensoría del Público se recibieron diversos saludos del ámbito internacional.

El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, envió sus "felicitaciones a todo el equipo". Lo mismo hizo el ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue, quien afirmó: "No sólo felicito la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y la creación de la Defensoría, sino también el excelente trabajo desarrollado por Cynthia Ottaviano, primera Defensora nombrada para este cargo que ha sabido interpretar a cabalidad lo importante y lo complejo de su mandato".

Por su parte, la Ouvidora General de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), Joseti Marques, destacó "los esfuerzos incansables de la Defensora Cynthia Ottaviano en la lucha por el derecho a la información y a la comunicación plural en su país y en los países hermanos de América Latina". Mientras que Claudia Nuñez Arango, coordinadora ejecutiva de la delegación brasileña de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), señaló que "la joven Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por ley en Argentina, es un ejemplo positivo de acción para la defensa y promoción de los derechos comunicacionales de las audiencias de radio y de televisión para todo el continente".

Desde Paraguay, Rubén Ayala, de la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos, hizo llegar sus saludos: "Nos congratulamos con ustedes por la gran labor que están haciendo en la formación y educación de las audiencias" para que conozcan y reclamen "acceder a informaciones y contenidos plurales y diversos, que no discriminen ni violenten los valores, la cultura y la dignidad de las personas".

Consuelo Cepeda, Defensora del Televidente del Canal RCN de Colombia, agregó que las Defensorías de las audiencias como la de Argentina "solidifican la democracia". En tanto que desde México, Beatriz Solís Leree, Defensora de la Audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano destacó: "El gran trabajo y excelente gestión que ha marcado pauta para toda la región". Lo mismo hizo Gabriel Sosa Plata, ex Ombudsman de Radio Noticias MVS de México, que envió su agradecimiento "por ser promotores de los derechos de las audiencias en Argentina y América Latina" y Adriana Solórzano Fuentes, Presidenta de la Asociación

LA OUVIDORA GENERAL DE LA EMPRESA BRASIL DE COMUNICACIÓN (EBC), JOSETI MARQUES, DESTACÓ: "LOS ESFUERZOS INCANSABLES DE LA DEFENSORA EN LA LUCHA POR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PLURAL"

“NO NACIMOS COMO AUDIENCIAS, NOS HEMOS HECHO, NOS HAN HECHO O NOS HAN IMPEDIDO SER DE OTRAS MANERAS. PERO PODEMOS SIEMPRE CAMBIAR”.

Mexicana de Defensores de las Audiencias (AMDA) quien expresó sus “felicidades por la gran labor realizada”.

Se sumaron también a los saludos: Lucio Segovia, Defensor de la Audiencia de Radio Comunidad de Venezuela, Víctor Zuluaga Salazar, Defensor de la Audiencia del diario El Colombiano de Medellín; Silvia Pérez Chavarria, Directora General de Análisis de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México, Patricio Gutiérrez del Alamo, Defensor de la Audiencia de Radio Televisión de Andalucía (RTVA); Ángel Nodal, Defensor del espectador, oyente y usuario de medios interactivos de Radio Televisión Española, (RTVE) y Madalena Oliveira, del Centro de Estudios en Comunicación y Sociedad de la Universidad de Minho, en Portugal.

LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO Y LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS

La Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una consulta pública sobre concentración de medios.

El objetivo fue conocer la situación regional en materia de las normas jurídicas y prácticas para enfrentar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Para ello, se invitó a Estados Nacionales, sociedad civil y académicos a responder el “Cuestionario de Consulta a los Estados y la sociedad civil para la elaboración de un informe sobre estándares de libertad de expresión, diversidad y pluralismo y concentración en los medios de comunicación”.

En ese marco, se le envió a la Defensoría del Público un cuestionario de 11 preguntas sobre la caracterización de la regulación de medios en cada país miembro y la implementación práctica de la normativa.

El 30 de septiembre de 2015, en la respuesta enviada al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, en 68 carillas, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, agregó que “para aportar precisión combinaremos las respuestas sobre legislación o normativa con las que refieren a jurisprudencia o decisiones administrativas sobre cada tema”, y destacó: “esperamos que estos aportes contribuyan a la labor de la Relatoría en pos de lograr una mayor pluralidad y diversidad en el ejercicio del derecho a la comunicación en la región”.

SE REALIZÓ EN COLOMBIA EL DEBATE LATINOAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS

Con el apoyo de la Defensoría del Público de Argentina se llevó a cabo, del 25 al 28 de noviembre de 2015 en la ciudad de Cartagena de Indias, el Segundo Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, el cual llevó como lema: “Logros y desafíos hacia una nueva ciudadanía comunicacional”.

El encuentro contó con la presencia de 20 Defensorías y más de 40 especialistas de 10 países, provenientes de universidades, observatorios de medios, organizaciones de la sociedad civil y organismos reguladores del sector audiovisual.

Los asistentes presenciaron las conferencias magistrales de Guillermo Orozco Gómez (México), doctor en educación con especialidad en investigación sobre audiencias; Juan Carlos Henao Pérez (Colombia), rector de la Universidad Externado y ex presidente de la Corte Constitucional de ese país y Germán Rey (Colombia), experto en comunicación, cultura y desarrollo. Además se desarrollaron seis paneles de debates en los cuales se analizaron casos de vulneración, reparación y buenas prácticas relativas a los derechos de las audiencias. Tales instancias de exposición e intercambio llevaron los siguientes títulos: “Derechos de las audiencias: de las leyes a las prácticas concretas”, “Hacia nuevas Defensorías: el desafío de la implementación, la permanencia y la incidencia”, “La sociedad civil en acción: iniciativas ciudadanas en pos de una democratización de la comunicación”, “Formar/se en derechos: propuestas pedagógicas en busca de profesionales comprometidos con las audiencias”, “Integrar miradas: la construcción colectiva de la comunicación” y “Hacia una ciudadanía comunicacional: claves para promover la participación, el pluralismo y la calidad en los medios”.

La Defensora Ottaviano formó parte de la mesa inaugural del Congreso junto a la Presidenta de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de Colombia, Angela María Mora Soto; la Presidenta de la Plataforma de Reguladores del

Audiovisual Iberoamericano (PRAI), Beatriz Quiñones y las Defensoras de los Televidentes de los canales Caracol y RCN, Amparo Pérez y Consuelo Cepeda, respectivamente. Luego, fue la encargada de presentar al primer conferencista magistral, Guillermo Orozco Gómez, quien entre otros conceptos expresó: “Este Congreso marca una trayectoria a futuro, como señaló Cynthia y es muy importante esta unión. No nacimos como audiencias, nos hemos hecho, nos han hecho o nos han impedido ser de otras maneras. Pero podemos siempre cambiar”.

El viernes 27 de noviembre de 2015, en la segunda jornada del Congreso, la Defensora Ottaviano volvió a exponer, esta vez en el marco del panel titulado “Hacia una ciudadanía comunicacional: claves para promover la participación, el pluralismo y la calidad en los medios”. Fue acompañada en esa ocasión por el Director de Estándares y Prácticas de la BBC (Gran Bretaña), David Jordan; la Ouvidora del Ministerio de Cultura (Brasil), Regina Lima; la abogada del Observatorio de Medios Fucatel (Chile), Lorena Donoso y la integrante del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia (Colombia), Olga Restrepo Yepes.

También durante esa jornada la Defensoría del Público de Argentina presentó los resultados de una encuesta realizada a nivel latinoamericano entre Defensoras y Defensores de las Audiencias. Los resultados de este trabajo, titulado “Perfil pro-

fesional, obstáculos y desafíos de las Defensorías de las Audiencias en 2015”, fueron expuestos por la Mg. Flavia Pauwels, del área de Relaciones Internacionales del organismo.

A nivel de los acuerdos regionales, el Congreso de Cartagena de Indias concluyó con la firma de una Declaración conjunta en la que se señaló:

“Los firmantes, Defensoras y Defensores de las Audiencias, representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos públicos y autoridades de regulación del sector audiovisual de América Latina, presentes en el Segundo Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias declaramos:

Que el respeto de los derechos de las audiencias contribuye a una verdadera democratización de la comunicación.

Que la comunicación es una construcción colectiva, y por ello resulta fundamental estimular el compromiso y la participación activa de las audiencias, el diálogo y el trabajo conjunto con los concesionarios de los medios de comunicación, sus trabajadores y demás sectores del ámbito institucional, educativo y social de cada país.

Que nos comprometemos a promover, en nuestras respectivas áreas de actuación, iniciativas pedagógicas cuyo propósito sea el conocimiento, el ejercicio y el respeto de los derechos de las audiencias, buscando así contribuir a la profundización democrática de la región”.



» En Cartagena, en el Segundo Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, junto a Guillermo Orozco Gómez.

Asimismo, también se firmó otro acuerdo que busca seguir avanzando en el “fortalecimiento de los lazos de cooperación entre las Defensorías de las Audiencias de América Latina y otras instituciones comprometidas con el desarrollo de la comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos”. En ese texto se señala:

“Los representantes de las Defensorías de las Audiencias de América Latina y de las organizaciones que defienden una comunicación democrática en esta región, ratifican y/o manifiestan su intención de integrar la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID), en su etapa preparatoria y con continuidad en la presidencia de la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, Cynthia Ottaviano y en el comité directivo por la Defensora de las Audiencias Beatriz Solís Leree (México), el Defensor del Televidente Gustavo Castro Caycedo (Colombia) y la Ouvidora General Joseti Marques (Brasil), hasta el 16 de septiembre de 2016”.

La OID es un espacio de debate a nivel regional que surgió el 16 de septiembre de 2014 impulsada por la Defensoría del Público de Argentina. En tal oportunidad, representantes de Brasil, Canadá, Colombia, Chile, México, Perú y Argentina firmaron una carta de intención en la que se comprometieron a “promover la creación del rol de Defensor/a, Ouvidor/a o Mediador/a en los diferentes medios de comunicación como un ejercicio de compromiso y transparencia con las audiencias”.

Esta ratificación de la Lic. Ottaviano al frente de OID, marca un reconocimiento internacional al trabajo del organismo argentino, tal como lo expresan los siguientes testimonios:

Ariela Peralta Distéfano (Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Uruguay): “Estoy gratamente asombrada del trabajo de la Defensoría de Argentina. En tres años, me impresiona cómo se han acercado a las personas, a la juventud, la pluralidad que tienen, cómo abarcan la diversidad étnica de la Argentina. Eso me parece impresionante en una construcción institucional tan joven y creo que es sustantivo el diálogo que permite construir con todos los actores”.

Guillermo Orozco Gómez (Universidad de Guadalajara, México): “La diferencia fundamental de la experiencia argentina con sus pares de Latinoamérica es que hay un derecho humano a la comunicación desde donde se desprende todo lo demás y en otros países esta filosofía del derecho a la comunicación no está presente. Esto, que en Argentina está muy claro, no está tan claro en el resto de América Latina”.

Regina Lima (Ouvidora del Ministerio de Cultura, Brasil): “Veo extremadamente positiva la creación por Ley de la Defensoría de la Argentina y creo que es un caso inédito y atípico frente a la realidad de otros países, especialmente de América Latina. Yo creo que la creación de la Defensoría viene en un momento oportuno de gran discusión y que hasta hoy en Brasil citamos como un caso de avance en el área de la comunicación. Me parece importantísimo destacar que podría



» La OID es un espacio de debate a nivel regional que surgió el 16 de septiembre de 2014 impulsada por la Defensoría del Público de Argentina.

ser tranquilamente una defensoría pasiva, que se quede dentro de las oficinas esperando que las audiencias se manifiesten pero, muy por el contrario, lo que hace la Defensoría es ir a buscar a las audiencias, a la ciudadanía y eso creo que es el camino de las defensorías y también es el camino correcto para América Latina.

Olga Restrepo Yepes (Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, Colombia): “No solamente es importante en la Argentina, sino también es un buen ejemplo para Latinoamérica, porque no hay una institución como se ha planteado en la Argentina, lo cual quiere decir que es un referente para nosotros en la medida en que podemos pensar en la probabilidad de tener una institución así. Me impresionó de una forma increíble lo que están haciendo con las personas que están en condición de discapacidad o los pueblos originarios porque es una entidad que se acerca y va a la comunidad, pregunta que es lo que quieren, es un verdadero puente y esto hace que nuestro papel como defensores de audiencias en Latinoamérica tenga que ser replanteado porque es realmente exitoso lo que se está haciendo en Argentina. Fue una sorpresa encontrarme con una institución tan importante, porque no había visto este manejo de protección de los derechos de las audiencias y una verdadera efectividad de los derechos de la comunicación. Es inevitable no sentir un fresco en el alma cuando se ve lo que se hace por los derechos de las personas que están siendo invisibilizadas y que ahora son protegidas

por una organización como la Defensoría del Público de Argentina. Es un parámetro a seguir en la región”.

Consuelo Cepeda (Defensora del Televidente del Canal RCN, Colombia): “La experiencia Argentina es ejemplarizante para América Latina. Estamos sorprendidos por lo mucho que han avanzado en tan poco tiempo y la visibilización que han logrado. Ya son muy reconocidos y respetados en la región por parte de todas las personas que trabajamos en la defensa de las audiencias porque han logrado muchísimo. Es un modelo que deberíamos copiar en otros países. Sería muy interesante que el ejemplo de la Defensoría sea tomado como muestra, que la defensa del derecho a la comunicación sea tenida en cuenta, avalada y subsidiada, como lo es en Argentina. Es emocionante ver lo que hacen porque muestra que sí es posible lograr el derecho a la comunicación como es debido”.

Felipe López Veneroni (Defensor de la Audiencia del Canal Once, México): “Es una propuesta muy inteligente y necesaria porque mantiene autonomía del Poder Ejecutivo y trabaja con el Congreso, lo cual le da mucha legitimidad. El enfoque social y el carácter nacional que tiene la Defensoría del Público le da una autoridad ética y normativa que es muy rescatable y que debería ser ejemplo para el resto del continente”.

Manuela Gumucio (Observatorio de Medios Fucatel, Chile): “La existencia de una Defensoría con la potencia que le asignó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, con esa capacidad, con esa definición de auto-



» Con el apoyo de la Defensoría del Público de Argentina se llevó a cabo, del 25 al 28 de noviembre de 2015 en la ciudad de Cartagena de Indias, el Segundo Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias.

mía, el concepto que tiene, le da una legitimidad enorme a la concepción de la comunicación como un derecho humano. Es fundamental y es un gran ejemplo para toda la región”.

En tanto, el 23 de noviembre de 2015 el Director de Radio Educación de México, Mtro. Antonio Tenorio Muñoz Costa, envió una carta a la Defensora del Público de Argentina, en su carácter de Presidenta de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID). En la misma, manifiesta la “formal postulación” de su medio de comunicación para organizar el Tercer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias en la Ciudad de México.

En la nota, Muñoz Costa manifiesta la importancia de “avanzar en la democratización de la comunicación en la región” y en el “respeto y promoción de los derechos de las audiencias desde una perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos”. Es por ello que considera relevante apoyar “procesos de construcción de ciudadanía a través de audiencias críticas”.

El 8 de diciembre de 2015, la Defensora del Público, fue una de las dos invitadas internacionales convocadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México para formar parte de los discursos inaugurales del “Foro sobre derechos de las audiencias”, el cual se desarrolló en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, ubicado en la ciudad capital de ese país.

En la carta de invitación dirigida a la Defensora, el Presidente del IFT, Gabriel Contreras Saldivar, señala que la intervención de la Defensora del Público de Argentina en tal Foro “contribuirá a fortalecer la capacidad de las audiencias mexicanas en el marco de mejores prácticas de alfabetización mediática”.

Además de participar de la inauguración, la Lic. Ottaviano expuso en el primer panel dedicado precisamente a la “Importancia de la alfabetización mediática para el ejercicio de los derechos de las audiencias”. Durante tal intervención señaló: “La diversidad y la pluralidad, la interculturalidad, la educación, las distintas identidades, la alfabetización, son las verdaderas riquezas que tienen las democracias. No dejemos que las discriminaciones, el egoísmo comunicacional o el corporativismo mediático, ganen la batalla, porque en este siglo XXI estamos llamados a profundizar las democracias, con memoria, en la búsqueda de la verdad, para tener finalmente justicia social y sobre todo, soberanía comunicacional”.

El 9 de diciembre de 2015, la Defensora del Público Cynthia Ottaviano fue entrevistada por Lenin Martell Gámez para el programa “La Defensoría de la Audiencia” que se emite semanalmente en Radio Educación de México.

Gámez, es coordinador del Centro de Cultura Digital de la Universidad Autónoma de México y se desempeña también como uno de los cuatro Defensores de la Audiencia que posee Radio Educación, medio de comunicación de gestión pública.

Al presentar a la Defensora, Gámez señaló: “Argentina tiene una ley y eso los ayudó a consolidar la Defensoría del Público. Cynthia Ottaviano, que es la Defensora del Público, ha hecho un gran trabajo con un equipo espectacular. Visité en septiembre pasado esta Defensoría, estuve trabajando con ellos para obtener ideas, sobre todo, acerca de la alfabetización mediática. Argentina ha sido un ejemplo para el resto de América Latina y para el mundo en el tema de la capacitación de audiencias críticas”.

“LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DEBE SER UN MODELO A IMITAR EN EL RESTO DE LOS PAÍSES”.

BALTASAR GARZÓN

PRESIDENTE DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH) CON EL AUSPICIO DE LA UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA)

**Guía para
el tratamiento
mediático
responsable
de la Violencia
Institucional**

**Guía para
el tratamiento
mediático
responsable
de la Salud
Mental**

**Guía para
el tratamiento
periodístico
responsable
de noticias
policiales**

**Guía
para la
cobertura
periodística
responsable
de desastres
catástrofes**



0800-999-3333

www.defensadelpublico.gob.ar

GUÍAS PARA EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO RESPONSABLE

Desde su creación, la Defensoría del Público se propuso, a partir de los reclamos y denuncias de las audiencias, la realización de una serie de mesas de debate permanente en todo el país, que luego de la distribución de una relatoría sobre los encuentros y la incorporación de nuevos aportes, concluye en la realización colectiva de “guías” para difundir herramientas de tratamiento responsable de diversas temáticas, que procuran evitar la vulneración de derechos del público de la radio y la TV.

Durante 2015 se presentaron tres guías y se continúa trabajando en la confección y revisión de otras tres. En el anexo de este informe de gestión se puede acceder a la versión completa de cada una de ellas.

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

El 8 de mayo de 2014, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, y en el marco del III Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular celebrado en el Congreso de la Nación, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, presentó la Guía para el tratamiento mediático responsable de la Violencia Institucional.

El documento fue elaborado por la Defensoría del Público en conjunto con el Programa Memoria en Movimiento, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y la Campaña Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional luego de numerosas mesas de trabajo a lo largo de 2014 en las ciudades de Mendoza, Córdoba, Avellaneda y Ciudad de Buenos Aires.

DURANTE 2015 SE PRESENTARON TRES GUÍAS Y SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA CONFECCIÓN Y REVISIÓN DE OTRAS TRES

La guía incluye una lista de recursos que sirven como herramienta de acceso a diversas fuentes de información con el objetivo de aportar algunos elementos centrales desde un paradigma comunicacional con perspectiva de derechos humanos para el ejercicio responsable de una tarea clave para toda la sociedad.

Este material de trabajo aborda, entre otras cuestiones, las dificultades a la hora de denunciar, investigar y sancionar hechos de violencia institucional a lo que se suma la alta vulnerabilidad de las personas afectadas y la invisibilidad de este tipo de prácticas frente a las audiencias de los medios de comunicación.

Como reconoce la LSCA, los servicios de comunicación audiovisual cumplen un papel fundamental para que la sociedad ejerza su derecho a la comunicación. En este caso, el

acceso a la información puede prevenir la violación de derechos fundamentales por parte de las instituciones estatales y reducirla a su mínima expresión.

El 4 de junio la Guía fue presentada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco del lanzamiento del Observatorio de Violencia Institucional, a cargo de la dirección de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

En tanto, el 21 de agosto, en el acto por la conmemoración de un nuevo aniversario de la "Masacre de Trelew", se presentó en Chubut, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Organizado por la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut, el encuentro contó con la participación de periodistas, estudiantes, jueces, fiscales, familiares de víctimas de violencia institucional y organismos de derechos humanos.

El 11 de septiembre, la Guía fue presentada en la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Gral. Roca, Provincia de Río Negro. Al día siguiente, fue el turno del Sindicato de Periodistas Gráficos de la Ciudad de Neuquén.

Finalmente, el 9 de octubre se realizó una exposición de la Guía en el marco de un conjunto de proyectos de capacitación profesional dictados en el Instituto Superior de Educación Técnica N° 18 "20 de Junio" de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE LA SALUD MENTAL

El 28 de mayo, en la Defensoría del Público se presentó la Guía para el tratamiento mediático responsable de la Salud Mental, elaborada en base a una propuesta de la Coalición por una Comunicación Democrática y de los reclamos, consultas y denuncias presentados por el público de radio y televisión ante el organismo sobre la vulneración de derechos en las coberturas periodísticas de temas vinculados con la salud mental.

Con el fin de avanzar en la implementación de la nueva Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 en el ámbito de la comunicación, la Guía es el resultado de un proceso de reflexiones y acciones colectivas. En primer término, de los diagnósticos comunicacionales desplegados a partir de las denuncias del público, junto con los Monitoreos de Noticieros de la Televisión Abierta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizados por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría que permitieron corroborar y ampliar las tendencias explicitadas por las audiencias.

En segundo lugar, producto del desarrollo de mesas de trabajo con quienes trabajan en los medios de comunicación de todo el país y en el campo de la salud mental para reflexionar y debatir sobre el tratamiento mediático de estos temas.



De este modo, el documento se propone conjugar el derecho a la libertad de expresión con la responsabilidad social de quienes ejercen el periodismo, el derecho de las audiencias a recibir información relevante y el derecho de las personas afectadas a recibir un tratamiento mediático respetuoso y no discriminatorio.

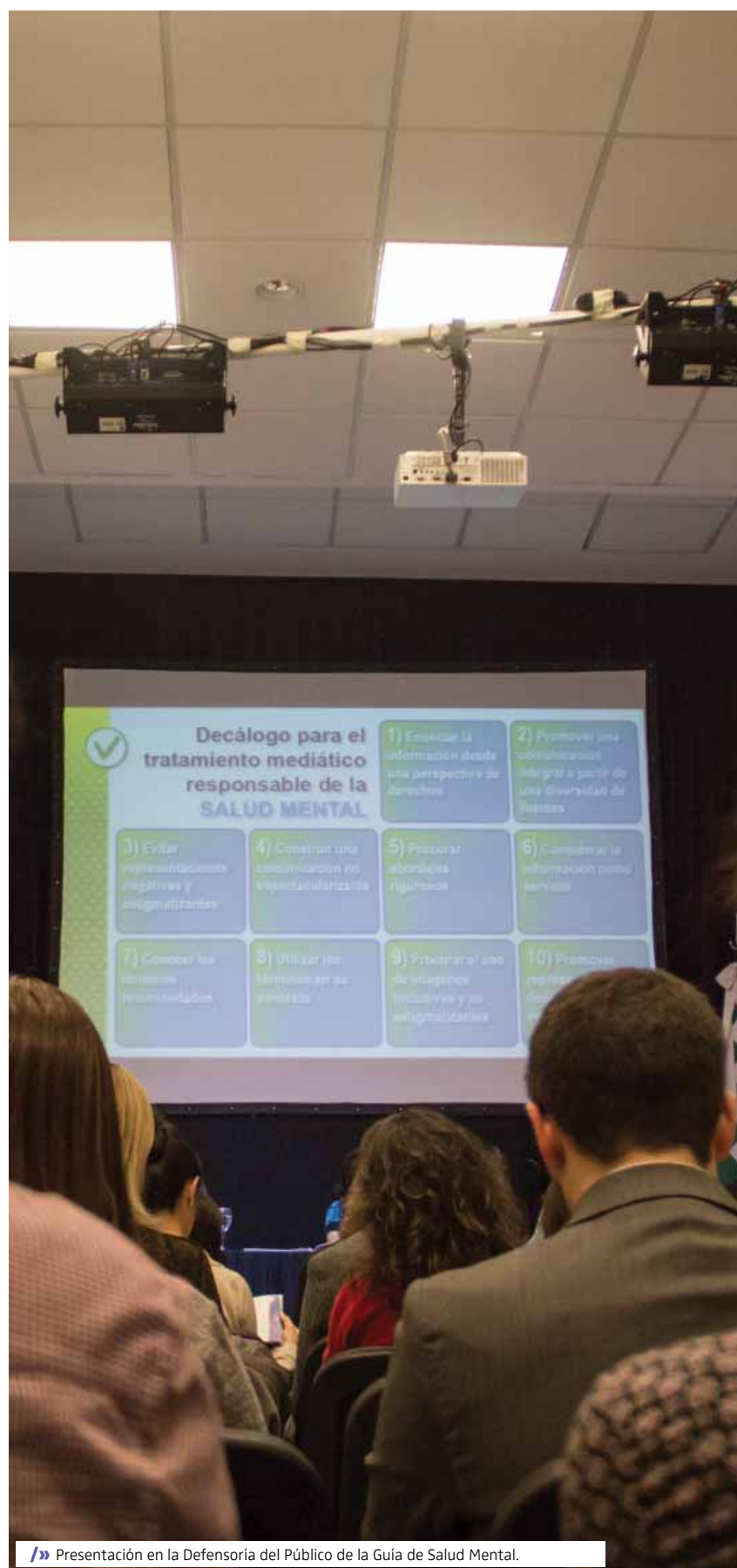
El 20 de julio, en la ciudad de Bahía Blanca, la Lic. Cynthia Ottaviano, participó de la “Mesa de Abordaje de la Problemática del Suicidio” en el Honorable Concejo Deliberante de esa localidad, y destacó que “un suicidio no es un hecho delictivo. Hay una tendencia peligrosa a policializar la información”.

“Muchas veces, a la hora de dar la noticia de un suicidio, se observan simplificaciones y subjetividades desde los medios que pretenden minimizar la complejidad de la cuestión. Se recurre a fuentes endebles y ocasionales y a todo tipo de conjeturas, sin medir consecuencias. Este cóctel, invariablemente, conduce al morbo”, expresó Ottaviano.

En ese marco, Ottaviano también brindó detalles sobre la tarea que viene realizando el organismo en esta materia: “En base a un trabajo multidisciplinario, las conclusiones y todo el material fruto del trabajo están disponibles en el sitio del organismo. Se elaboró un decálogo con premisas para tener en cuenta a la hora de informar sobre un suicidio. La idea es que pueda estar tanto en redacciones como en institutos de periodismo para que se pueda ir formando un criterio sobre el respeto a la confidencialidad y a la no invasión a la privacidad de las personas”.

En tanto, el legislador provincial Marcelo Feliú agradeció la visita de la titular de la Defensoría y concluyó: “Cuando me plantearon la posibilidad de tocar un tema tan sensible como el suicidio me pareció una excelente idea invitar a Cynthia Ottaviano, que viene llevando una tarea excelente junto a su equipo de trabajo del organismo”.

El 5 de octubre la Guía fue presentada en la Universidad Nacional de Córdoba. El encuentro contó con la participación de trabajadoras/es de la comunicación, profesionales y organizaciones vinculadas a la salud mental, integrantes del Centro de Estudios Avanzados de la UNC y estudiantes de periodismo. Durante el intercambio, se precisó la importancia de reflexionar sobre las modalidades que asumen las prácticas y procurar que la mediatización de los casos comunique representaciones no estigmatizantes y que no asocien linealmente el padecimiento con las conductas violentas, que utilice un lenguaje respetuoso que enfatice el carácter transitorio de la problemática, y que evite la espectacularización de los hechos y la prejuiciosa elaboración de diagnósticos mediáticos que se traducen en la difusión de información sesgada y confusa.



» Presentación en la Defensoría del Público de la Guía de Salud Mental.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL PLURAL, DEMOCRÁTICA Y RESPETUOSA DE LA DIVERSIDAD SOCIAL REQUIERE DE LA PRODUCCIÓN DE RECURSOS COMUNICACIONALES ACORDES CON ESA CONCEPCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA SOCIEDAD Y LA COMUNICACIÓN

Por último, el 2 de diciembre la Guía fue presentada en la Universidad Nacional de Entre Ríos. El encuentro contó con la participación del Vicedecano y el Secretario de Extensión de esa casa de estudios, el Director del Hospital Escuela de Salud Mental, la Directora Provincial de Salud Mental y Adicciones de Entre Ríos, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, comunicadores y comunicadoras sociales, residentes, y estudiantes y graduados en comunicación social. Allí, se subrayó la importancia de que quienes comunican temas de salud mental reflexionen sobre la importancia de ejercer su rol social e informativo de un modo responsable y respetuoso de los derechos y disposiciones que establecen la Ley Nacional de Salud Mental y la LSCA.

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO RESPONSABLE DE NOTICIAS POLICIALES

En octubre de 2015, y luego de un extenso trabajo colectivo, se publicó la *Guía para el tratamiento responsable de noticias policiales*. Esta iniciativa surgió como propuesta y aporte a un conjunto de necesidades vinculadas a las coberturas informativas en materia de "policiales" que, desde diferentes espacios sociales, han atravesado los tres años de existencia de la Defensoría. De hecho, además de la elaboración de los informes específicos motivados por denuncias vinculadas a las formas de cobertura de "casos policiales" por parte de los servicios de comunicación audiovisual y de los casos tomados de los Monitoreos de noticieros de TV abier-

ta y de noticias policiales en señales de cable, el documento se nutrió de numerosas mesas de trabajo realizadas desde 2013 con trabajadores/as de la comunicación, abogados/as, académicos/as, organismos públicos, de derechos humanos y de la sociedad civil en general.

El 12 de junio se convocó a una mesa de trabajo con periodistas especializados en la cobertura de casos policiales, a quienes se les había brindado previamente el borrador de trabajo. Allí compartieron opiniones que luego fueron tenidas en cuenta en el documento final, que incluye aquellos elementos y necesidades que interpelan a los profesionales de los medios audiovisuales a asumir una concepción de la información y la comunicación en tanto derecho humano. Es decir, la construcción social plural, democrática y respetuosa de la diversidad social requiere de la producción de recursos comunicacionales acordes con esa concepción democrática de la sociedad y la comunicación.

Por ello, esta Guía, realizada a través del diálogo con quienes trabajan en los medios, con quienes presentan sus reclamos y consultas en la Defensoría del Público y con quienes se dedican a analizar la comunicación masiva contemporánea para pensarla, repensarla y debatirla, pretende ser un instrumento útil para que el campo periodístico pueda ejercer y desarrollar sus prácticas desde la certeza de contar con herramientas necesarias para dicha tarea que contribuyan a promover una comunicación periodística distinta a la que imponen las determinaciones "empresariales" y sus técnicas e instrumentos de medición y presión laboral.

La organización de los contenidos de la guía recorta, con fines analíticos, diez nudos críticos de la tarea periodística en materia de cobertura de casos policiales. Para su exposición se han tomado materiales que fueron objeto de reclamos ante esta Defensoría o que fueron seleccionados de los monitoreos de noticieros que se realizan periódicamente, así como de fragmentos de las reuniones realizadas con trabajadores de la comunicación durante estos tres años. La totalidad de los casos que se mencionan -una selección pequeña del universo de reclamos recibidos por el organismo- fueron debatidos con los trabajadores de los medios de comunicación -desde los periodistas hasta las productoras-, de modo de reflexionar de manera conjunta acerca de lo que las audiencias habían reclamado y la perspectiva que esta Defensoría tiene sobre cada uno de ellos. En casi todos los casos, dichos debates concluyeron en actividades de capacitación, lectura de materiales específicos y debates sobre legalidades, legítimidades y potenciales abordajes alternativos. Abordajes que posibilitaran realizar la actividad profesional en materia policial sin que ésta vulnerara derechos.

GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SU VÍNCULO CON LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La guía surge de un trabajo colectivo que integra tanto instancias de reflexión y debate (mesas de trabajo, recopilación de material bibliográfico sobre la temática y sistematización de las experiencias internacionales en materia de televisión e infancia), como de participación y ejercicio de la ciudadanía comunicacional (consultas e inquietudes de las audiencias recibidas por la Defensoría, preocupaciones expresadas a través de las Audiencias Públicas por niños y niñas).

El documento sintetiza algunas recomendaciones que reconocen que la televisión integra la vida cotidiana de los/as chicos/as desde muy temprana edad y sus potenciales virtudes y/o inconveniencias dependerán del tipo de vínculo que niños y niñas entablen con dicho medio. En este marco, la guía propone constituirse en un instrumento destinado a promover y fortalecer la función mediadora de los/as adultos/as para que niñas y niños puedan reflexionar, elegir, tomar decisiones acerca de lo que la televisión les ofrece.

La elaboración de este tipo de material pretende ser un instrumento reflexivo sobre el uso de la televisión, que ofrezca sugerencias a las/os adultos/as y/o responsables para acompañar el proceso de aprehensión y elaboración de la oferta televisiva que es puesta a consideración de la audiencia infantil. La propuesta se enmarca en la necesidad de desarrollar instancias de formación crítica de audiencias, pensadas en función del nuevo paradigma de la comunicación como derecho humano que la LSCA promueve y garantiza.

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO RESPONSABLE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Ante la cantidad de reclamos recibidos y las similitudes detectadas, la Defensoría realizó múltiples capacitaciones para quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual de todo el país en las que se evidenciaron los desconocimientos en materia de legislación vigente y derechos del colectivo LGTTBIQ. Por eso se convocó a diez encuentros en todo el país (Resistencia, Córdoba, Bariloche, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires), con periodistas, activistas, organismos de la sociedad civil y la ciudadanía en general que se concretaron en 2014 y fueron la base de la Guía para el Tratamiento

Responsable de noticias referidas a la Identidad Sexual, que se encuentra en proceso de elaboración.

El objetivo es brindar herramientas a la hora de tratar temáticas o construir representaciones de personas LGTTBIQ, las cuales fueron históricamente invisibilizadas o criminalizadas y que, tras la nueva legislación inclusiva y el nuevo paradigma de la comunicación, se constituyeron en sujetos de derecho. Asimismo, este material se elabora como respuesta a una serie de denuncias realizadas ante la Defensoría del Público por parte de las audiencias de radio y televisión.

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE CASOS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Al cierre de este informe, la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo se encuentra elaborando una Guía que se plantea como un instrumento de referencia en la temática de la violencia hacia las mujeres, con el fin de que sea de acceso ágil y sencillo para quienes en su desempeño profesional cotidiano deben producir información relativa a las cuestiones aquí abordadas. El borrador del documento enumera ejemplos de prácticas periodísticas tanto respetuosas como inconvenientes (denunciadas ante esta Defensoría), así como también ofrece pautas de abordaje sostenidas en el uso de terminología adecuada.

GUÍA PARA LA COBERTURA PERIODÍSTICA RESPONSABLE DE DESASTRES Y CATÁSTROFES

El 6 de abril en las ciudades de El Bolsón, Provincia de Río Negro, y Lago Puelo, Provincia de Chubut, se presentó la Guía para la cobertura periodística responsable de Desastres y Catástrofes y se desarrollaron debates y proyecciones para la adaptación del material a las problemáticas geográficas específicas, como lo son los incendios forestales. En dichos encuentros participaron comunicadores, profesionales encargados de la gestión de desastres y estudiantes de periodismo, comunicación y geografía.

El 8 de agosto, en la ciudad de Río Ceballos, Córdoba, se dictó un taller con el mismo objetivo. Allí también se presentó la guía elaborada por la Defensoría del público en 2014 y se desarrolló un debate sobre la situación local en el que se proyectaron posibles adaptaciones del material a las problemáticas geográficas específicas: inundaciones, sequías, incendios.



PROMOCIÓN CULTURAL DE LA DEFENSORÍA

Para debatir temáticas y representaciones que se instalan y se reproducen en los medios de comunicación audiovisual y profundizar el debate sobre el rol que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de noticias, la Defensoría organizó un ciclo de cine y otro de teatro para promover el derecho a la comunicación y el empoderamiento ciudadano.

La Defensoría del Público, junto a INCAA TV y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), llevó adelante el ciclo "Comunicación y cine" que se desarrolló todos los jueves de febrero en el auditorio del organismo.

Luego de las cuatro proyecciones en las que participaron alrededor de 200 personas se llevaron a cabo debates con quienes crearon las piezas. Así, el 5 de ese mes fue el turno de "La cocina. En el medio hay una ley"; con el posterior debate junto a su director, David Blaustein. El 12, "Tinta Roja", dirigido por Carmen Guarini, quien conversó con las audiencias en la Defensoría sobre el trabajo en una redacción periodística. "Orquesta roja" se presentó el 19 y, su director, Nicolás Herzog, charló con quienes estuvieron presentes sobre cómo los medios audiovisuales pueden construir una noticia. Por último, el 26 se proyectó la ficción "Betibú".

El ciclo tuvo como objetivo profundizar el debate sobre el papel que juegan los medios de comunicación en el tratamiento de distintos tipos de noticias y se enmarcó dentro de las acciones que la Defensoría lleva a cabo para promover el derecho a la comunicación y el empoderamiento ciudadano.

Además, la Defensoría del Público, con el apoyo de Pro-teatro, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la organización 100% Diversidad y Derechos, desarrolló el ciclo "Comunicación y Teatro", que consistió en una selección de obras

para debatir temáticas y representaciones que se instalan y se reproducen en los medios de comunicación audiovisual.

Más de 400 personas participaron de las funciones de "Acto escolar", "Reparto a domicilio", "La casa de Bernarda Alba", "Simón" y "Cuarteto", que fueron los miércoles 12, 19 y 26 de agosto y 2 y 9 de septiembre en el Espacio Cultural Carlos Gardel, de la Ciudad de Buenos Aires.

LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO,
JUNTO A INCAA TV Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES
(INCAA), LLEVÓ ADELANTE EL
CICLO "COMUNICACIÓN Y CINE"
QUE SE DESARROLLÓ TODOS
LOS JUEVES DE FEBRERO EN EL
AUDITORIO DEL ORGANISMO



CAPACITACIONES INTERNAS

El 31 de agosto visitó la sede de la Defensoría del Público el profesor asociado en la Universidad de los Andes de Colombia y Director del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER), Omar Rincón, quien brindó una clase magistral a los trabajadores y trabajadoras del organismo sobre distintos aspectos de la comunicación en América Latina.

Acompañado por la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, y por el director de Capacitación y Promoción de la Defensoría, Ernesto Lamas, el periodista y ensayista colombiano destacó que Argentina “es el país donde más libertad de expresión hay ya que es donde mayor diversidad pública de puntos de vista hay en este momento en América Latina”.

Al mismo tiempo, ponderó positivamente la capacidad creativa de los realizadores argentinos al considerar que “han sido los más creativos de América Latina en cuanto a formatos” aunque remarcó como materia pendiente que el gusto popular llegue a la televisión. En este sentido, agregó que “ustedes son los que están en mejores condiciones de discutir en serio porque aquí lo popular se ha discutido en serio y no como arriba que es una cuestión de formato y de estética. Aquí se ha vuelto político, activista y el desafío es que lo popular, que está tan presente en el lenguaje político y cultural, llegue a la televisión”.

En cuanto al rol de la Defensoría del Público, Rincón señaló que “está buenísimo que fomenten audiencias activas, porque normalmente alguien hace un reclamo y el organismo la gestiona y ya está”. En este sentido, hizo hincapié en que “hoy formar públicos no es educarlos para ver, para que desentrañen la ideología, sino que es habilitarlos como sujetos expresivos para gestionar sus derechos”, porque, concluyó “uno aprende realmente a ser crítico cuando uno hace”.

FORMAR PÚBLICOS NO ES EDUCARLOS PARA VER, PARA QUE DESENTRAÑEN LA IDEOLOGÍA, SINO QUE ES HABILITARLOS COMO SUJETOS EXPRESIVOS PARA GESTIONAR SUS DERECHOS



» Integrantes de la Defensoría junto a Frank La Rue y Omar Rincón.

Luego, el 10 de septiembre, el presidente del Instituto Centroamericano para la Democracia Social (DEMOS) de Guatemala y ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue, visitó la Defensoría del Público.

Junto a la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, La Rue brindó una charla sobre libertad de expresión y derecho a la información para integrantes de las direcciones del organismo. “Democratizar los medios, luchar contra los monopolios ya no solo es en defensa del principio de libertad de expresión, de diversidad y pluralismo para las personas sino en defensa de la democracia”, aseguró La Rue.

Ottaviano celebró la nueva visita del abogado especialista en derechos humanos y libertad de expresión y dijo que “ha sido un gran acompañante que nos ha enriquecido con sus perspectivas y recomendaciones en estos espacios de intercambio que siempre son muy interesantes y derivan en acciones”.

La Rue se refirió a la incidencia de los medios audiovisuales de comunicación en la vida política de los países de Latinoamérica. “Cuando hablamos de concentración de medios siempre decimos que es una violación al principio de diversidad y pluralismo de posiciones que tiene toda persona y la sociedad colectivamente, pero además hoy hay que plantearla como una violación al derecho de participación ciudadana y al modelo democrático porque en el fondo crean escenarios confusos o desinformación a la ciudadanía limitando su participación”, explicó.

Al mismo tiempo, destacó el rol pedagógico de la Defensoría del Público en la promoción de los derechos comunicacionales de oyentes y televidentes de Argentina. “Hoy más que nunca el tema de la democratización de medios es el más importante y por encima de todo, está el fortalecimiento de las audiencias”, dijo y, en ese sentido, agregó: “Siempre es un placer y un privilegio estar acá en esta Defensoría que es un caso único para el continente y como modelo”.

“ARGENTINA HA
LIDERADO ESTE GRUPO
PARA CONFORMAR
UNA ORGANIZACIÓN DE
DEFENSORES DE AMÉRICA
LATINA QUE PARECÍA ALGO
IMPOSIBLE”.

AMPARO PÉREZ

DEFENSORA DEL TELEVIDENTE DEL CANAL CARACOL,
COLOMBIA



República
ública

**COMPROMISO PÚBLICO
UNA MEJOR PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DURANTE EL
HORARIO APTO PARA TODO PÚBLICO**



...ación audiovisual tienen gran incidencia en el
... niños y adolescentes.
... labor nos proponemos garantizar el
... a la niñez y la adolescencia en los
... audiovisual mostrando su papel positivo y
... dando cuenta de sus intereses
... de participación, practicando
... no discriminatoria, plural y

... los derechos
... TV

CONVENIOS

Se suscribieron un total de dieciocho acuerdos de colaboración, siendo que trece de ellos fueron suscriptos con Organismos del Estado Nacional, Organizaciones Sindicales y otras Organizaciones y los cinco restantes con Universidades Nacionales con los objetivos de generar acciones conjuntas de complementación recíproca en la promoción y defensa de los derechos humanos con el fin de ampliar los derechos de las audiencias.

- C. N° 14/15 – Marco de Cooperación Institucional con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
- C. N° 19/15 - Específico CONICET
- C. N° 20/15 – Marco de Cooperación Institucional con la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros
- C. N° 22/15 – Marco de Cooperación Institucional con la Unión de Trabajadores de la Educación
- C. N° 23/15 – Marco de Cooperación Institucional con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
- C. N° 28/15 – Marco de Cooperación Institucional con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)
- C. N° 36/15 – Marco de Cooperación Institucional con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
- C. N° 38/15 - Marco de Cooperación Institucional con la Universidad Nacional de Quilmes
- C. N° 43/15 – Cooperación Específica con Universidad Nacional de Córdoba
- C. N° 46/15 – Cooperación Específica con Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentina
- C. N° 48/15 – Marco de Cooperación Institucional con Universidad Autónoma de Entre Ríos
- C. N° 49/15 – Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación con UNICEF y AFSCA
- C. N° 50/15 – Cesión gratuita de uso temporal del Espacio Cultural Carlos Gardel con la Dirección General de Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- C. N° 51/15 – Marco de Cooperación Institucional con la Confederación de Trabajadores de la Educación (CETERA)
- C. N° 52/15 – Marco de Cooperación Institucional con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- C. N° 55/15 – Addenda al Convenio Marco de Cooperación Institucional con Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
- C. N° 56/15 – Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación Institucional con Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado
- C. N° 58/15 – Convenio Marco de Cooperación Institucional con la Universidad Nacional de San Luis

CONVENIO PIO-CONICET

La Defensoría del Público y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) presentaron, el 8 de octubre, los proyectos de investigaciones en comunicación audiovisual que son financiados en forma conjunta por ambos organismos.



↳ Junto a Emilio Pérsico, ex Secretario de Agricultura Familiar.



↳ Junto a Baltasar Garzón (CIPDH).



↳ Junto a Roberto Salvarezza (CONICET).

Integrantes de los siete equipos de investigación que iniciaron sus proyectos en el marco del Convenio CONICET-Defensoría del Público dieron a conocer los contenidos y objetivos de sus trabajos. Se trata de quienes accedieron al financiamiento correspondiente a la primera convocatoria a Proyectos de Investigación Orientados (PIO) en comunicación, derecho a la información y construcción de ciudadanía comunicacional, lanzada a fines de 2014.

Cada uno de los proyectos será financiado durante dos años con montos que llegan hasta los 562.000 pesos, los cuales estarán destinados a la producción y desarrollo del conocimiento en materia comunicacional, tanto en la instancia de producción mediática como en la de circulación y producción de sentidos por parte de las audiencias.

En el acto de presentación, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, felicitó a quienes estaban en el lugar y dijo: "Es un honor haber impulsado con este equipo de trabajo investigaciones a largo plazo en el campo de las ciencias sociales, sobre todo de la comunicación y más específicamente, de la radio y la televisión. Pondremos la investigación científica en primer plano para conocer más sobre los nuevos medios, el vínculo con las audiencias, las construcciones de alteridades y las rutinizaciones de la producción comunicacional en todo el país, a seis años de la sanción y promulgación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Será la primera vez en la historia, pero como responsable de esta Defensoría les garantizo que no será la última".

El director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría, Gerardo Halpern, analizó: "Estamos tratando de construir sentido ahí donde como organismo tenemos que ir descubriendo y fundando sentido". Por su parte, la directora de Convenios y Proyectos del CONICET, Patricia Maccagno, aseguró: "Que mejor que desearle a todos los equipos, mucho éxito en esta investigación que están por comenzar".

Luego, integrantes de los siete equipos describieron sus trabajos. "El género policial en el marco de las transformaciones del escenario audiovisual argentino. Rutinas productivas, representaciones mediáticas y recepción de la información sobre inseguridad en CABA y Córdoba", es el nombre de la investigación del equipo de Mercedes Calzado. Sus integrantes afirmaron: "Se trata de una gran alegría estar aquí presentes. En primer lugar porque vamos a formar parte de una línea de trabajo que implica articular una política científica con una política pública como la que lleva adelante la Defensoría y en ese sentido es un orgullo para nosotros haber podido ingresar a esta línea de trabajo".

El equipo de Pablo Alabarces, con el trabajo "La politización del espectáculo: producción, textos y recepción de los pro-

gramas de espectáculos televisivos”, aseguró: “No han habido investigaciones sistemáticas sostenidas en el tiempo a mediano y largo plazo de audiencias en la Argentina y este equipo da la bienvenida a que eso exista en función de que podemos comenzar a dar respuestas más complejas sobre el vínculo entre los medios de comunicación y quienes lo consumen”.

Miembros del equipo de María Soledad Segura investigan sobre “Las radios y televisoras comunitarias desde la Ley 26522: condiciones, estrategias y desafíos” y describieron: “La iniciativa ha sido recibida con mucha alegría en el campo de la comunicación, aún entre quienes no se han presentado. Ha sido una iniciativa muy celebrada, muy comentada y recibida con alegría”. “De la invisibilidad al estigma. Identidades y representaciones de la diferencia socio-cultural en telediaris de aire del NOA y NEA”, es el campo que analizarán quienes trabajan con Alejandra Lia Julia Cebrelli, quienes contaron: “Queremos agradecer a la Defensoría la posibilidad de poder trabajar y construir un equipo interuniversitario que atraviesa dos áreas de relativa vacancia, que son el NOA y el NEA y que además pretende mirarse y tratar de construir un aparato crítico que sea capaz de dar cuenta de la diferencia sociocultural”.

El equipo de Gabriel Kessler, que tituló su investigación: “De la propiedad a la recepción. Estudio integral del circuito productivo de las noticias sobre delito e inseguridad en los noticieros televisivos de mayor audiencia de la Argentina”. Explicaron: “Esta oportunidad nos va a permitir hacer visibles alguna serie de mecanismos y de prácticas que tienen los medios de comunicación de las cuales tienen consecuencias complejas sobre la sociedad y hasta ahora los medios no son conscientes de lo que transmiten”.

Quienes investigan junto a Pablo Federico Semán, nombraron su trabajo: “Hipervisibilización de la pobreza: la construcción mediática de una alteridad ominosa”, describieron: “Esta iniciativa es un espaldarazo simbólico y además ver en el auditorio a mucha gente del ambiente académico y científico la verdad que es emocionante”. El equipo que dirige Florencia Saintout nombró su trabajo “Agendas del deterioro y sistema de miedos. Configuraciones mediáticas en torno a la ‘inseguridad’ en informativos audiovisuales nacionales y su recepción e impacto en la vida cotidiana de las audiencias”. Resaltaron “la jerarquía de los equipos” y aseguraron: “Es alucinante formar parte de esa lista porque todos conocemos la solides y la trayectoria de los equipos que han ganado esta convocatoria y esas producciones creo que van a marcar una época de investigadores en torno a la comunicación”.



» Junto a Alberto Sileoni, ex Ministro de Educación de la Nación.



» Junto a Glenn Postolski (Decano Facultad Sociales UBA).



» Junto a Eduardo López y Mariano De Negris (UTE).

“ES UN HONOR HABER IMPULSADO CON ESTE EQUIPO DE TRABAJO INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES, SOBRE TODO DE LA COMUNICACIÓN Y MÁS ESPECÍFICAMENTE, DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN”.

CYNTHIA OTTAVIANO

CONVENIO CON EL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH)

El 1 de junio, la Defensoría del Público firmó un convenio con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) con el auspicio de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Su titular, Baltasar Garzón, recaló que “la Defensoría del Público debe ser un modelo a imitar en el resto de los países porque la ley de medios de Argentina creo que incide de una forma fundamental en la distribución de esa información y en el acceso a la misma, al conocimiento y a la defensa de los derechos tanto de los propios medios como de los ciudadanos”.

El acuerdo firmado en la sede de la Defensoría, por Garzón, Ottaviano y la directora de la CIPDH, Adriana Arce; propone generar acciones conjuntas de complementación recíproca en la promoción y defensa de los derechos humanos con el fin de ampliar los derechos de las audiencias. “Garzón es un emblema de los derechos humanos a nivel internacional y este acuerdo potenciará la actividad que la Defensoría viene realizando en el mundo, en la promoción del derecho humano a la comunicación, en el acompañamiento de la creación de nuevas defensorías en Latinoamérica y permitirá mayores intercambios con otros estados, para profundizar las democracias”, concluyó Ottaviano.

Para finalizar, Garzón reflexionó sobre la importancia de la Defensoría: “Si un organismo como este asume ese rol y además expande y difunde cuáles son esos derechos, creo que se consolida democráticamente ese derecho y la formación de ciudadanos y ciudadanas es mucho más completa”.

El convenio tiene por finalidad la ejecución de acciones de cooperación entre la Defensoría y el CIPDH para el desarrollo conjunto de actividades destinadas a la protección y difusión en materia de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos. Por otra parte, se busca potenciar un mayor reconocimiento y acceso de los ciudadanos a los derechos humanos que le son inherentes en igualdad de trato y condiciones. Se establecerán también emprendimientos y programas de investigación, desarrollo, formación, capacitación y servicios.

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN

La Defensoría del Público y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación suscribieron un convenio de cooperación para trabajar en conjunto y contribuir a una mayor promoción de la agricultura familiar y al efectivo ejercicio del derecho humano de la comunicación. La Defensora Cynthia Ottaviano y el secretario de Agricultura Familiar Emilio Pérsico, firmaron el compromiso entre las dos instituciones.

“Tenemos la obligación de reivindicar históricamente a nuestros pueblos originarios y campesinos. Sus voces han sido silenciadas porque perjudicaban la necesidad de concentración comunicacional y de la tierra que tenían las élites dominantes del país”, expresó Ottaviano. “Hoy el Estado les abre las puertas. Le estamos devolviendo un poco de lo que les han robado”, continuó Pérsico.

Entre las principales funciones se destacan las de coordinar y articular tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el derecho a la información, a la comunicación y los valores de la libertad de expresión, así como la implementación de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la Agricultura Familiar y sus organizaciones.

Además, monitorear y articular las actividades necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el derecho a la tierra de las organizaciones campesinas e indígenas que la Defensoría viene acompañando en la capacitación y fortalecimiento de sus proyectos comunicacionales. En la misma línea, asesorar y promover a los proyectos comunicacionales sin fines de lucro de las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, como asimismo los proyectos comunicacionales de pueblos originarios.

Por último, propiciar la capacitación en gestión integral para los procesos radiofónicos campesinos, indígenas y de la agricultura familiar.

“EL HECHO DE QUE LA DEFENSORÍA ARGENTINA FUERA INSTITUIDA POR UNA LEY, TENGA UN PRESUPUESTO, Y SU DEFENSORA TENGA UNA NOMINACIÓN LE DA UNA ENORME AUTONOMÍA, SON ELEMENTOS FABULOSOS, QUE NO EXISTEN IGUAL EN TODOS LOS PAÍSES”.

MANUELA GUMUCIO

DIRECTORA GENERAL DEL OBSERVATORIO DE MEDIOS
FUCATEL, CHILE

Público

ción Audiovisual

Acceso a la Información Pública



ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Defensoría del Público, mediante el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, aprobó la Resolución N° 1/12, donde dispuso que se garantiza el derecho al acceso a la información pública, ya que la Argentina carece de una Ley Nacional al respecto. Teniendo en cuenta que tampoco existe en el ámbito del Poder Legislativo una normativa específica sobre la temática, a partir de su reforma en 1994 la Constitución ha receptado – a través del art. 75, inciso 22- el derecho al acceso a la información pública, por lo cual la Defensoría adoptó una política de promoción propia.

Se trata de un derecho ligado a la libertad de expresión garantizado asimismo por el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se encuentra implícito en el art. 1° de nuestra Constitución Nacional, que establece un gobierno republicano y que también se encuentra garantizado entre otros por el art. 75 inc. 22 que incorpora rango constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, el cual sostiene en su art. 13 “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por una ley para el caso que exista un peligro real que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

Siguiendo estos principios, mediante el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de esta Defensoría del Público, aprobado por Resolución N° 1/12, se dispuso que se garantizará el derecho al acceso a la información pública

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN PODER DEL ESTADO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS INDIVIDUOS. LOS ESTADOS ESTÁN OBLIGADOS A GARANTIZAR EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO

(conf. Art. 102). En consecuencia, corresponde brindar acceso a cualquier particular que lo solicite.

En virtud de ello y aplicando analógicamente el Decreto N° 1759/72, cualquier persona que acredite un interés legítimo podrá tomar vista de los expedientes, salvo aquellos que fueran declarados reservados.

Por otra parte, es necesario explicar que la participación ciudadana, en su faz normativa, tiene tres dimensiones: el acceso a la información, la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia.

El derecho de acceso a la información pública es una herramienta facilitadora: su objetivo es que las personas puedan intervenir en los procesos de tomas de decisiones con los datos correspondientes, con los datos de juicio que le permitan una intervención efectiva y eficiente.

En un principio las regulaciones- consagraciones de este derecho (esto es, las previsiones legales que establecen el papel del Estado en el proceso) tendieron a la protección de la llamada faz pasiva: estableciendo procedimientos para los casos en que el Estado espera “pasivamente” la petición del ciudadano, su solicitud de información.

En la actualidad, se tiende a regular también el desarrollo de la faz “activa” del derecho: se establece para el Estado la obligación de difundir y/o publicar en forma activa la información de la que se dispone. La Defensoría del Público ha adoptado este último criterio como guía en su relación con la comunidad en general y con las audiencias en particular. Por ello, está impulsando diversos mecanismos de comunicación y difusión –tales como guías, protocolos, etc.- a fin de que actúen como instrumentos activos de facilitación del acceso a la información pública sobre procedimientos aplicables y mecanismos de intervención y/o solución existentes.

Por otro lado, dado que el acceso a la información pública implica fundamentalmente una conducta activa por parte de los organismos estatales, ha adoptado prácticas de comunicación continua no solo de las medidas generales adoptadas por la Defensoría, sino también de contacto frecuente con los consultantes y denunciantes sobre los avances de las gestiones a partir de las inquietudes que nos plantean.

A esos fines la Defensoría utiliza intensamente los soportes tecnológicos, en especial el sistema de correo electrónico y el 0-800. En sus canales de atención telefónica a los consultantes, el organismo facilita incluso información y contacto con otros organismos en los casos en que la Defensoría no sea competente.

Se destaca que se han recibido solicitudes de información de acceso a la información, a las cuales se les dio curso.

EXPEDIENTES CON PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE 29/2015:

Con fecha 02 de marzo de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones desarrolladas por esta Defensoría del Público en relación a denuncias recibidas con la temática violencia de género y/o mediática, así como también casos de discriminación basados en sexo u orientación sexual.

Efectuada la opinión legal correspondiente y el informe del área técnica pertinente, con fecha 10 de abril, se procedió a remitir la información requerida.

Se han respetado los datos personales así como los datos sensibles de las/os denunciantes y de los niños, niñas y adolescentes, incapaces, asuntos de familia en los términos de las leyes 25.326 y 26.061.

EXPEDIENTE 42/15:

Con fecha 01 de abril de 2015 se recibió pedido de información del Consejo Provincial de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo de Social de la Provincia de Neuquén sobre distintas acciones desarrolladas por esta Defensoría del Público respecto de la posible vulneración de los derechos a la comunicación de los adultos mayores.

Efectuada la opinión legal correspondiente y el informe del área técnica pertinente, con fecha 01 de febrero de 2016, se procedió a remitir la información requerida.

EXPEDIENTE 62/15:

Con fecha 29 de abril de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones desarrolladas por esta Defensoría del Público sobre los derechos a la comunicación de pueblos indígenas y las distintas representaciones en los medios sobre pueblos originarios en Argentina.

Efectuada la opinión legal correspondiente y el informe del área técnica pertinente, con fecha 10 de abril, se procedió a remitir la información requerida.

Se han respetado los datos personales así como los datos sensibles de las/os denunciantes y de los niños, niñas y adolescentes, incapaces, asuntos de familia en los términos de las leyes 25.326 y 26.061.

EXPEDIENTE 111/15:

Con fecha 29 de junio de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones desarrolladas por esta Defensoría del Público referidas al posible abuso en la utilización de la cadena nacional y qué argumentaciones se esgrimieron al respecto.

Efectuada la opinión legal correspondiente, con fecha 08 de julio del corriente, se procedió a ofrecer al solicitante la posibilidad de tomar vista de la información requerida, la cual se llevo a cabo el pasado 15 de julio.

EXPEDIENTE 118/15:

Con fecha 03 de julio de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones

desarrolladas por esta Defensoría del Público respecto de la publicidad de un hipermercado que evoca las batallas de la independencia argentina.

Efectuada la opinión legal correspondiente, con fecha 08 de julio, se procedió a ofrecer al solicitante la posibilidad de tomar vista de la información requerida.

EXPEDIENTE 123/15:

Con fecha 14 de julio de 2015 se recibió pedido de información de los padrones del personal de la Defensoría del Público para llevar a cabo las elecciones de delegados de personal de la UPCN.

Con fecha 14 de julio, se procedió a responder la solicitud.

EXPEDIENTE 129/15:

Con fecha 24 de julio de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones desarrolladas por esta Defensoría del Público vinculadas a la realización de monitoreos sobre la presencia en medios radiales y televisivos del tópico de ciencia y tecnología.

Efectuada la opinión legal correspondiente, con fecha 27 de julio, se procedió a responder la solicitud requerida.

Se han respetado los datos personales así como los datos sensibles de las/os denunciantes y de los niños, niñas y adolescentes, incapaces, asuntos de familia en los términos de las leyes 25.326 y 26.061.

EXPEDIENTE 151/15:

Con fecha 31 de agosto de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones desarrolladas por esta Defensoría del Público respecto de reclamos recibidos sobre la televisión argentina en referencia a los derechos humanos y la aplicación de la ley 26.522.

Efectuada la opinión legal correspondiente, con fecha 09 de octubre del corriente, se procedió a ofrecer al solicitante la posibilidad de tomar vista de la información requerida, la cual fue efectivizada el pasado 26 de octubre.

EXPEDIENTE 158/15:

Con fecha 8 de septiembre de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones desarrolladas por esta Defensoría del Público respecto de reclamos recibidos sobre los medios de comunicación rosarinos, la participación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la estructura orgánica de la DPSCA.

Efectuada la opinión legal correspondiente, con fecha 30 de septiembre del corriente, se procedió a enviar a la solicitante la información requerida.

EXPEDIENTE 174/15:

Con fecha 22 de septiembre de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones desarrolladas por esta Defensoría del Público relacionadas con denuncias sobre la TV Pública y la proporción que representa respecto del total de reclamos recibidos. Asimismo solicita información sobre si existe intercambio en la elaboración de materiales y trabajo conjunto con la DPSCA.

Efectuada la opinión legal correspondiente, con fecha 10 de noviembre del corriente, se procedió a ofrecer al solicitante la posibilidad de tomar vista de la información requerida.

EXPEDIENTE 203/15:

Con fecha 27 de octubre de 2015 se recibió pedido de información de distintas acciones desarrolladas sobre la transmisión de cadena nacional por esta Defensoría del Público y las oportunas respuestas brindadas.

Efectuada la opinión legal correspondiente, con fecha 17 de noviembre, se procedió a responder la solicitud requerida.

Se han respetado los datos personales así como los datos sensibles de las/os denunciantes y de los niños, niñas y adolescentes, incapaces, asuntos de familia en los términos de las leyes 25.326 y 26.061.

RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO 2015

Se dictaron 160 resoluciones al 31 de diciembre de 2015, conforme surge del siguiente detalle.

- Resolución N° 1/2015 - 13 de enero de 2015 - Objeto: Deja sin efecto contratación directa por urgencia. Expediente N° 364/14.
- Resolución N° 2/2015 - 13 de enero de 2015 - Objeto: Designación personal de Gabinete. Expediente N° 381/14.
- Resolución N° 3/2015 - 14 de enero de 2015 - Objeto: Legítimo Abono. Expediente N° 11/14.
- Resolución N° 4/2015 - 16 de enero de 2015 - Objeto: Atención de firma y despacho Dirección de Relaciones con las Audiencias. Expediente N° 65/13.

- Resolución N° 5/2015 - 21 de enero de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 384/14.
- Resolución N° 6/2015 - 21 de enero de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 101/14. Expediente N° 267/14.
- Resolución N° 7/2015 - 21 de enero de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 97/14. Expediente N° 266/14
- Resolución N° 8/2015 - 26 de enero de 2015 - Objeto: Modificación presupuestaria. Expediente N° 06/15.
- Resolución N° 9/2015 - 26 de enero de 2015 - Objeto: Declaración de Interés. Expediente N° 90/14.
- Resolución N° 10/2015 - 26 de enero de 2015 - Objeto: Ampliación orden de compra N° 4/14. Expediente N° 212/13.
- Resolución N° 11/2015 - 03 de febrero de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a licitación privada. Expediente N° 03/15.
- Resolución N° 12/2015 - 06 de febrero de 2015 - Objeto: Legítimo abono. Expediente N° 11/14.
- Resolución N° 13/2015 - 09 de febrero de 2015 - Objeto: Acepta renuncia de personal Expediente N° 01/15.
- Resolución N° 14/2015 - 11 de febrero de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a licitación pública. Expediente N° 12/15.
- Resolución N° 15/2015 - 13 de febrero de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 08/15.
- Resolución N° 16/2015 - 18 de febrero de 2015 - Objeto: Recategorización de personal. Expediente N° 10/15.
- Resolución N° 17/2015 - 20 de febrero de 2015 - Objeto: Licencia cargo de mayor jerarquía de personal. Expediente N° 07/15.
- Resolución N° 18/2015 - 20 de febrero de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a licitación pública. Expediente N° 14/15.
- Resolución N° 19/2015 - 20 de febrero de 2015 - Objeto: Concluye actuaciones. Actuación N° 365/14.
- Resolución N° 20/2015 - 23 de febrero de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 122/14. Expediente N° 181/14.
- Resolución N° 21/2015 - 23 de febrero de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a licitación privada. Expediente N° 13/15.
- Resolución N° 22/2015 - 25 de febrero de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 127/14. Expediente N° 313/14.
- Resolución N° 23/2015 - 26 de febrero de 2015 - Objeto: Declaración de Interés. Expediente N° 23/15.
- Resolución N° 24/2015 - 26 de febrero de 2015 - Objeto: Convocatoria a Concurso Audiovisual. Expediente N° 18/15.
- Resolución N° 25/2015 - 02 de marzo de 2015 - Objeto: Designa nueva Directora Legal y Técnica. Expediente N° 17/15.
- Resolución N° 26/2015 - 02 de marzo de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 16/15.
- Resolución N° 27/2015 - 02 de marzo de 2015 - Objeto: Atención de firma y despacho de la Dirección Legal y Técnica. Expediente N° 26/15.
- Resolución N° 28/2015 - 02 de marzo de 2015 - Objeto: Autoriza llamado licitación pública. Expediente N° 19/15.

- Resolución N° 29/2015 - 02 de marzo de 2015 - Objeto: Concluye actuación N° 364/14 y acc. Recomendaciones. Actuación N° 364/14 y acumuladas.
- Resolución N° 30/2015 - 03 de marzo de 2015 - Objeto: Declaración para Año 2015 por "Año por la Inclusión de Niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación audiovisual. Expediente N° 99/14.
- Resolución N° 31/2015 - 05 de marzo de 2015 - Objeto: Designa nueva instructora sumarial. Expediente N° 263/14.
- Resolución N° 32/2015 - 11 de marzo de 2015 - Objeto: Declaración de interés. Expediente N° 31/15.
- Resolución N° 33/2015 - 16 de marzo de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a concurso Público. Expediente N° 34/15.
- Resolución N° 34/2015 - 16 de marzo de 2015 - Objeto: Acepta renuncia de personal. Expediente N° 36/15.
- Resolución N° 35/2015 - 16 de marzo de 2015 - Objeto: Adjudicación licitación privada N° 1/15. Expediente N° 03/15.
- Resolución N° 36/2015 - 31 de marzo de 2015 - Objeto: Procedimiento excepcional de difusión de compras y contrataciones. Expediente N° 39/15.
- Resolución N° 37/2015 - 07 de abril de 2015 - Objeto: Legítimo abono. Expediente N° 11/14.
- Resolución N° 38/2015 - 09 de abril de 2015 - Objeto: Licitación pública. Expediente N° 19/15.
- Resolución N° 39/2015 - 13 de abril de 2015 - Objeto: Declaración de interés. Expediente N° 45/15.
- Resolución N° 40/2015 - 13 de abril de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 37/15.
- Resolución N° 41/2015 - 13 de abril de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 05/15. Expediente N° 384/14.
- Resolución N° 42/2015 - 14 de abril de 2015 - Objeto: Licitación pública. Expediente N° 40/15.
- Resolución N° 43/2015 - 14 de abril de 2015 - Objeto: Autoriza pago anticipo de viáticos. Expediente N° 90/14.
- Resolución N° 44/2015 - 17 de abril de 2015 - Objeto: Autoriza prórroga adscripción de personal. Expediente N° 182/14.
- Resolución N° 45/2015 - 20 de abril de 2015 - Objeto: Designaciones concurso cerrado de personal. Expediente N° 276/14.
- Resolución N° 46/2015 - 21 de abril de 2015 - Objeto: Modificación de estructura de la Dirección de Capacitación y Promoción. Expediente N° 21/15.
- Resolución N° 47/2015 - 23 de abril de 2015 - Objeto: Aprueba y adjudica licitación privada N° 2/15. Expediente N° 13/15.
- Resolución N° 48/2015 - 04 de mayo de 2015 - Objeto: Aprueba concurso abierto de personal. Expediente N° 276/14.
- Resolución N° 49/2015 - 04 de mayo de 2015 - Objeto: Aprueba licitación pública N° 2/15. Expediente N° 14/15.
- Resolución N° 50/2015 - 04 de mayo de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 50/15.
- Resolución N° 51/2015 - 04 de mayo de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 48/15.

- Resolución N° 52/2015 - 06 de mayo de 2015 - Objeto: Acepta renuncia de personal
Expediente N° 57/15.
- Resolución N° 53/2015 - 11 de mayo de 2015 - Objeto: Declaración de interés.
Expediente N° 69/15.
- Resolución N° 54/2015 - 12 de mayo de 2015 - Objeto: Modificación presupuestaria N° 2 año 2015.
Expediente N° 73/15.
- Resolución N° 55/2015 - 20 de mayo de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal.
Expediente N° 67/15.
- Resolución N° 56/2015 - 20 de mayo de 2015 - Objeto: Designación Jefa de Departamento de Dictámenes y Asesoramiento y licencia extraordinaria por cargo de mayor jerarquía
Expediente N° 66/15.
- Resolución N° 57/2015 - 20 de mayo de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a licitación pública.
Expediente N° 56/15.
- Resolución N° 58/2015 - 20 de mayo de 2015 - Objeto: Legítimo abono.
Expediente N° 11/14.
- Resolución N° 59/2015 - 20 de mayo de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 20/15.
Expediente N° 181/14.
- Resolución N° 60/2015 - 20 de mayo de 2015 - Objeto: Delega firma despacho de Legal y Técnica.
Expediente N° 78/15.
- Resolución N° 61/2015 - 22 de mayo de 2015 - Objeto: Concurso Audiovisual 2015 – Designa Jurado.
Expediente N° 18/15.
- Resolución N° 62/2015 - 29 de mayo de 2015 - Objeto: Declaración de interés.
Expediente N° 82/15.
- Resolución N° 63/2015 - 01 de junio de 2015 - Objeto: Contratación directa.
Expediente N° 19/15.
- Resolución N° 64/2015 - 02 de junio de 2015 - Objeto: Convocatoria Audiencia Pública Región Centro 2015.
Expediente N° 85/15.
- Resolución N° 65/2015 - 04 de junio de 2015 - Objeto: Aprueba lo actuado Licitación Pública N° 1/15.
Expediente N° 12/15.
- Resolución N° 66/2015 - 09 de junio de 2015 - Objeto: Reconoce cese Legítimo Abono.
Expediente N° 53/15.
- Resolución N° 67/2015 - 09 de junio de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal.
Expediente N° 89/15.
- Resolución N° 68/2015 - 15 de junio de 2015 - Objeto: Atención de firma y despacho en la Dirección de Capacitación y Promoción ante ausencia del titular.
Expediente N° 87/15.
- Resolución N° 69/2015 - 15 de junio de 2015 - Objeto: Designación Jefa del Departamento de Participación y Capacitación de la Dirección de Capacitación y Promoción.
Expediente N° 83/15.
- Resolución N° 70/2015 - 15 de junio de 2015 - Objeto: Autoriza llamado Licitación Privada.
Expediente N° 63/15.
- Resolución N° 71/2015 - 16 de junio de 2015 - Objeto: Valor de Módulo de remuneraciones.
Expediente N° 26/14.
- Resolución N° 72/2015 - 18 de junio de 2015 - Objeto: Modifica Art. 2° de la Resolución DPSCA N° 51/2013. Designa miembros suplentes de la comisión de preadjudicaciones de la DPSCA.
Expediente N° 92/13.
- Resolución N° 73/2015 - 18 de junio de 2015 - Objeto: Establece aumento del valor hora/ semanal de cada función. Modifica Resolución N° 35/14.
Expediente N° 75/13.

- Resolución N° 74/2015 - 19 de junio de 2015 - Objeto: Autoriza gasto para solventar capacitación. Expediente N° 75/15.
- Resolución N° 75/2015 - 24 de junio de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 109/14. Expediente N° 139/14.
- Resolución N° 76/2015 - 01 de julio de 2015 - Objeto: Cierre de Audiencias Públicas 2014. Regiones Buenos Aires, Centro, Noroeste, Noreste, Patagonia y Cuyo. Expedientes N° 46/14, 94/14, 198/14, 228/14, 284/14, 293/14 y 306/14.
- Resolución N° 77/2015 - 03 de julio de 2015 - Objeto: Rescinde parcialmente Orden de Compra N° 39/14 y aplica multas. Expediente N° 130/14.
- Resolución N° 78/2015 - 07 de julio de 2015 - Objeto: Aprueba lista de producciones preseleccionadas del concurso de producción audiovisual. Expediente N° 18/15.
- Resolución N° 79/2015 - 13 de julio de 2015 - Objeto: Designación como personal de gabinete dentro de Planta Transitoria. Expediente N° 112/15.
- Resolución N° 80/2015 - 16 de julio de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 15/15. Expediente N° 8/15.
- Resolución N° 81/2015 - 16 de julio de 2015 - Objeto: Legítimo Abono. Expediente N° 53/15.
- Resolución N° 82/2015 - 16 de julio de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 108/15.
- Resolución N° 83/2015 - 20 de julio de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 06/15. Expediente N° 267/14.
- Resolución N° 84/2015 - 20 de julio de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 40/15. Expediente N° 37/15.
- Resolución N° 85/2015 - 22 de julio de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 116/15.
- Resolución N° 86/2015 - 23 de julio de 2015 - Objeto: Concurso "Diploma Superior de Comunicación y Género". Expediente N° 126/15.
- Resolución N° 87/2015 - 24 de julio de 2015 - Objeto: Concurso Público N° 1/15. Expediente N° 34/15.
- Resolución N° 88/2015 - 24 de julio de 2015 - Objeto: Legítimo Abono. Expediente N° 11/14.
- Resolución N° 89/2015 - 04 de agosto de 2015 - Objeto: Declaración de Interés. Expediente N° 127/15.
- Resolución N° 90/2015 - 11 de agosto de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 51/15. Expediente N° 48/15.
- Resolución N° 91/2015 - 11 de agosto de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 50/15. Expediente N° 50/15.
- Resolución N° 92/2015 - 11 de agosto de 2015 - Objeto: Convocatoria Audiencia Pública Región Norte (Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Formosa y Chaco). Expediente N° 136/15.
- Resolución N° 93/2015 - 18 de agosto de 2015 - Objeto: Declaración de Interés. Expediente N° 145/15.
- Resolución N° 94/2015 - 21 de agosto de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a Licitación Privada. Expediente N° 137/15.
- Resolución N° 95/2015 - 21 de agosto de 2015 - Objeto: Concurso otorga becas. Expediente N° 126/15.

- Resolución N° 96/2015 - 31 de agosto de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 55/15. Expediente N° 67/15.
- Resolución N° 97/2015 - 31 de agosto de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal. Expediente N° 132/15.
- Resolución N° 98/2015 - 31 de agosto de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 22/15. Expediente N° 313/14.
- Resolución N° 99/2015 - 31 de agosto de 2015 - Objeto: Autoriza reducción de jornada laboral de personal. Expediente N° 139/14.
- Resolución N° 100/2015 - 31 de agosto de 2015 - Objeto: Extiende designación de Resolución N° 67/15. Expediente N° 89/15.
- Resolución N° 101/2015 - 02 de septiembre de 2015 - Objeto: Declaración de Interés. Expediente N° 153/15.
- Resolución N° 102/2015 - 03 de septiembre de 2015 - Objeto: Declara Ganadores del Concurso "Zoom a los Derechos". Expediente N° 18/15.
- Resolución N° 103/2015 - 07 de septiembre de 2015 - Objeto: Convocatoria Audiencia Pública Región Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) Expediente N° 154/15.
- Resolución N° 104/2015 - 09 de septiembre de 2015 - Objeto: Rectificatoria Resolución DPSCA N° 102/15. Expediente N° 18/15.
- Resolución N° 105/2015 - 09 de septiembre de 2015 - Objeto: Rectificatoria Resolución DPSCA N° 102/15. Expediente N° 18/15.
- Resolución N° 106/2015 - 10 de septiembre de 2015 - Objeto: Aprueba lo actuado Licitación Pública N° 4/14. Expediente N° 230/14.
- Resolución N° 107/2015 - 14 de septiembre de 2015 - Objeto: Autoriza Llamado Licitación Privada. Expediente N° 155/14.
- Resolución N° 108/2015 - 18 de septiembre de 2015 - Objeto: Aprueba lo actuado Licitación Pública N° 5/15. Expediente N° 56/15.
- Resolución N° 109/2015 - 21 de septiembre de 2015 - Objeto: Declaración de Interés. Expediente N° 164/15.
- Resolución N° 110/2015 - 21 de septiembre de 2015 - Objeto: Modificación Anexos I y II Resolución DPSCA N° 31/13 Régimen de Cajas Chicas. Expediente N° 124/15.
- Resolución N° 111/2015 - 21 de septiembre de 2015 - Objeto: Acepta renuncia de personal. Expediente N° 139/14.
- Resolución N° 112/2015 - 21 de septiembre de 2015 - Objeto: Declara fracasada Contratación Directa N° 6. Expediente N° 19/15.
- Resolución N° 113/2015 - 23 de septiembre de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a Licitación Privada. Expediente N° 169/15.
- Resolución N° 114/2015 - 23 de septiembre de 2015 - Objeto: Aprueba lo actuado en Licitación Pública N° 4/15. Expediente N° 40/15.
- Resolución N° 115/2015 - 23 de septiembre de 2015 - Objeto: Legítimo Abono. Expediente N° 11/14.
- Resolución N° 116/2015 - 02 de octubre de 2015 - Objeto: Legítimo Abono. Expediente N° 160/15.
- Resolución N° 117/2015 - 05 de octubre de 2015 - Objeto: Aprueba lista de Proyectos de Investigación orientados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET-Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual correspondiente al Concurso 2015-2016 Expediente N° 135/13.

- Resolución N° 118/2015 - 07 de octubre de 2015 - Objeto: Modifica Presupuesto General de Administración Nacional para el Ejercicio 2015.
Expediente N° 185/15.
- Resolución N° 119/2015 - 13 de octubre de 2015 - Objeto: Convocatoria Audiencia Pública Región Buenos Aires (Buenos Aires, C.A.B.A.).
Expediente N° 189/15.
- Resolución N° 120/2015 - 15 de octubre de 2015 - Objeto: Designación Transitoria de personal.
Expediente N° 181/15.
- Resolución N° 121/2015 - 15 de octubre de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a Licitación Pública.
Expediente N° 188/15.
- Resolución N° 122/2015 - 19 de octubre de 2015 - Objeto: Legítimo Abono.
Expediente N° 53/15.
- Resolución N° 123/2015 - 19 de octubre de 2015 - Objeto: Recomendación a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual acerca del reconocimiento a las radios comunitarias.
Expediente N° 59/15.
- Resolución N° 124/2015 - 28 de octubre de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a Licitación Pública.
Expediente N° 192/15.
- Resolución N° 125/2015 - 28 de octubre de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a Licitación Pública.
Expediente N° 202/15.
- Resolución N° 126/2015 - 29 de octubre de 2015 - Objeto: Aprueba lo actuado y desestima ofertas en Licitación Privada N° 4/15.
Expediente N° 137/15.
- Resolución N° 127/2015 - 2 de noviembre de 2015 - Objeto: Renuncia de personal.
Expediente N° 201/15.
- Resolución N° 128/2015 - 2 de noviembre de 2015 - Objeto: Sustituye Anexo I y II de la Resolución DPSCA 4/13.
Expediente N° 105/15.
- Resolución N° 129/2015 - 5 de noviembre de 2015 - Objeto: Aprueba Licitación Privada 5/2015.
Expediente N° 155/2015.
- Resolución N° 130/2015 - 12 de noviembre de 2015 - Objeto: Autoriza llamado a licitación pública.
Expediente N° 204/15.
- Resolución N° 131/2015 - 16 de noviembre de 2015 - Objeto: Legítimo Abono.
Expediente N° 160/15.
- Resolución N° 132/2015 - 16 de noviembre de 2015 - Objeto: Autoriza pago de viáticos a personal de la DPSCA.
Expediente N° 164/15.
- Resolución N° 133/2015 - 18 de noviembre de 2015 - Objeto: Aprueba lo actuado en licitación privada N° 6/15.
Expediente N° 169/15.
- Resolución N° 134/2015 - 20 de noviembre de 2015 - Objeto: Recomendaciones a los servicios de comunicación audiovisual para el estricto respecto de la obligación de trato igualitario y trato digno de todas las personas, sin distinción alguna por motivos de su identidad de género u orientación sexual.
Actuaciones N° 61/13, 62/13, 674/13, 28/14, 223/14, 240/14, 276/14, y acumuladas, 294/14, 29/15, 30/15, 68/15, 72/15, 121/15, 187/15, 205/15, 248/15, 291/15 y consulta N° 150/15
- Resolución N° 135/2015 - 30 de noviembre de 2015 - Objeto: Autoriza a personal a participar de taller.
Expediente N° 231/15.
- Resolución N° 136/2015 - 30 de noviembre de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal
Expediente N° 217/15.
- Resolución N° 137/2015 - 30 de noviembre de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal
Expediente N° 216/15.
- Resolución N° 138/2015 - 30 de noviembre de 2015 - Objeto: Designación transitoria de personal
Expediente N° 222/15.

- Resolución N° 139/2015 – 30 de noviembre de 2015 – Objeto: Designación transitoria de personal Expediente N° 215/15.
- Resolución N° 140/2015 – 30 de noviembre de 2015 – Objeto: Designación transitoria de personal Expediente N° 213/15.
- Resolución N° 141/2015 – 30 de noviembre de 2015 – Objeto: Designación transitoria de personal Expediente N° 224/15.
- Resolución N° 142/2015 – 03 de diciembre de 2015 – Objeto: Declara desierta Licitación Pública N° 7/15 Expediente N° 202/15.
- Resolución N° 143/2015 – 14 de diciembre de 2015 – Objeto: Designación transitoria de personal Expediente N° 220/15.
- Resolución N° 144/2015 – 14 de diciembre de 2015 – Objeto: Renuncia de personal Expediente N° 234/15.
- Resolución N° 145/2015 – 14 de diciembre de 2015 – Objeto: Otorga licencia a personal Expediente N° 225/15.
- Resolución N° 146/2015 – 18 de diciembre de 2015 – Objeto: Aprueba licitación privada N° 3/15 Expediente N° 63/15.
- Resolución N° 147/2015 – 18 de diciembre de 2015 – Objeto: Ampliación orden de compra N° 21/15 Expediente N° 34/15.
- Resolución N° 148/2015 – 21 de diciembre de 2015 – Objeto: Designación transitoria personal Expediente N° 214/15.
- Resolución N° 149/2015 – 21 de diciembre de 2015 – Objeto: Atención de firma y despacho del Departamento de Presupuesto y del Departamento de Tesorería Expediente N° 240/15.
- Resolución N° 150/2015 – 22 de diciembre de 2015 – Objeto: Declara asueto administrativo 24 y 31 de diciembre de 2015. Expediente N° 245/15.
- Resolución N° 151/2015 – 22 de diciembre de 2015 – Objeto: Aprueba legítimo abono Expediente N° 160/15.
- Resolución N° 152/2015 – 22 de diciembre de 2015 – Objeto: Designación transitoria personal Expediente N° 226/15.
- Resolución N° 153/2015 – 23 de diciembre de 2015 – Objeto: Extiende designación de Resolución N° 25/15. Expediente N° 17/15.
- Resolución N° 154/2015 – 23 de diciembre de 2015 – Objeto: Modifica Anexo I, asignación de caja chica de la Resolución DPSCA N° 31/2013 Expediente N° 142/15.
- Resolución N° 155/2015 – 23 de diciembre de 2015 – Objeto: Designación transitoria personal Expediente N° 223/15.
- Resolución N° 156/2015 – 28 de diciembre de 2015 – Objeto: Extiende designación de Resolución N° 56/15. Expediente N° 66/15.
- Resolución N° 157/2015 – 28 de diciembre de 2015 – Objeto: Declara 2016 “Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual” Expediente N° 246/15.
- Resolución N° 158/2015 – 29 de diciembre de 2015 – Objeto: Recomendaciones a los servicios de comunicación audiovisual para un abordaje respetuoso de la salud mental y de las personas que atraviesan estos padecimientos Actuaciones N° 14/15, N° 174/15, N° 325/15, N° 333/15 y N° 376/15.
- Resolución N° 159/2015 – 30 de diciembre de 2015 – Objeto: Recomendaciones para el abordaje periodístico de procesos de búsqueda de niñas, niños y adolescentes Actuaciones N° 237/14 y 297/14.

- Resolución N° 160/2015 – 30 de diciembre de 2015 – Objeto: Designación nuevo Director de Comunicación Institucional.
Expediente N° 237/15

“ELEVA”, UN SISTEMA ACCESIBLE Y TRANSPARENTE

El inciso b) del artículo 19 de la LSCA establece que la Defensoría del Público tendrá entre sus misiones y funciones “llevar un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentados por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”.

Por tal motivo se puso en marcha “Eleva”, un sistema informático que sistematiza el proceso administrativo de las presentaciones realizadas por las audiencias y refleja todo el camino recorrido por un reclamo desde que éste ingresa a la Defensoría del Público.

Para poder concretarlo se realizó un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes, quien instrumentará el relevamiento y desarrollo del sistema que posee, entre otras, las siguientes características:

- Permite el trabajo en paralelo de diferentes usuarios agregando información relacionado con una presentación.
- Permite la colaboración entre áreas que interactúan sobre una presentación.
- Cuenta con alertas y notificaciones que permitirán a usuarios y administradores adelantarse a hechos clave, como vencimiento de plazos, cantidades de denuncias similares, etc.
- Funciona como plataforma inicial para gestión de flujos de trabajo dentro de la Defensoría, siendo la denuncia la primera instancia de trámite que se gestionaría.

En agosto de 2015 comenzó la primera etapa que supone la implementación una aplicación web con las siguientes funcionalidades:

- 1/ Recepción de denuncias por medio de la página web e ingreso de denuncias escritas.
- 2/ Clasificación de presentaciones según los criterios establecidos por la Defensoría del Público.
- 3/ Categorización de presentaciones como consultas, y administración de las respuestas.
- 4/ Categorización de presentaciones como actuaciones, y gestión de las mismas hasta su cierre.

- 5/ Categorización de presentaciones como derivaciones, y gestión de las mismas hasta su cierre.
- 6/ Agregado de resultados de investigación sobre las actuaciones.
- 7/ Provisión de datos para estadísticas sobre las denuncias.
- 8/ Registro de auditoría de las acciones realizadas sobre las denuncias.
- 9/ Visualización pública de determinada información relacionada con una denuncia.

Actualmente, se está desarrollando la segunda etapa que consiste en agregar al sistema ya en marcha la funcionalidad para registrar los movimientos de la documentación interna.



ANEXO I

DECÁLOGO PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE CASOS DE SUICIDIO

10

DECÁLOGO PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE EN CASOS DE SUICIDIO

- 1 Promover un enfoque de salud pública
- 2 Procurar un abordaje riguroso
- 3 Consultar a fuentes especializadas y brindar información relevante
- 4 Respetar la notificación no mediática y la privacidad del dolor
- 5 Construir enfoques no espectacularizantes
- 6 Evitar las referencias que justifiquen el acto
- 7 Garantizar la confidencialidad
- 8 Incorporar el tema en la agenda informativa
- 9 Elegir formas lingüísticas recomendadas
- 10 Promover coberturas respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes

Este Decálogo es la síntesis del segundo apartado de la “Guía para el tratamiento mediático responsable de la Salud Mental” elaborada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual con la participación de trabajadores/as de los medios de comunicación, profesionales, asociaciones y organismos nacionales vinculados a la prevención y tratamiento del suicidio, profesionales de la comunicación y profesionales de la educación*.

1. PROMOVER UN ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA

Contextualizar la problemática de suicidios bajo la categoría “salud pública” y no “policiales”. Tener presente que propiciar el enfoque policial de los casos, además de resultar inapropiado porque el suicidio no es un hecho delictivo, deviene en una estigmatización de la víctima y su entorno. Tener en cuenta que para la OMS resulta sumamente importante evitar el efecto imitativo de las conductas nocivas que se informan y trabajar para potenciar el efecto preventivo del tratamiento periodístico adecuado de los suicidios.

2. PROCURAR UN ABORDAJE RIGUROSO

Evitar el desarrollo y la difusión de análisis sobre los casos de suicidio que estén sustentados en conjeturas personales y en la lectura forzada de hechos y/o elementos que rodean a las/os protagonistas. Esta perspectiva sólo contribuye a simplificar la complejidad del hecho y sus causas que nunca son fácilmente identificables ni unidimensionales.

3. CONSULTAR A FUENTES ESPECIALIZADAS Y BRINDAR INFORMACIÓN RELEVANTE

Privilegiar la presentación de fuentes especializadas en la temática de suicidios. Esto permitirá desarticular la repetición de mitos y explicaciones simplistas y profundizar la comprensión del problema en la audiencia. De ahí que resulta sumamente conveniente aprovechar la presencia de estas

voces para contextualizar el caso particular en el universo de la problemática de suicidios y brindar información orientadora y preventiva a la población. Complementar las coberturas de los casos específicos con la difusión y visualización en pantalla de direcciones y teléfonos de instituciones y profesionales vinculados a la asistencia y tratamiento de la temática de suicidios; grupos de riesgo y señales de advertencia de conducta suicida; orientaciones para quienes se encuentran ante personas en situación de riesgo.

4. RESPETAR LA NOTIFICACIÓN NO MEDIÁTICA Y LA PRIVACIDAD DEL DOLOR

Respetar la notificación del hecho a la familia de la víctima por parte de profesionales antes que privilegiar la difusión de la primicia mediática. Respetar la vida privada del fallecido/a y el duelo de la gente que compone su entorno. Considerar el impacto psicológico que puede causar en familiares y allegados del suicida enterarse del hecho a través de los medios de comunicación. La cobertura informativa del caso no debe infligir más sufrimiento a las personas afectadas.

5. CONSTRUIR ENFOQUES NO ESPECTACULARIZANTES

Evitar los enfoques espectacularizantes. Es conveniente prescindir de la presentación de descripciones del método utilizado, sobre todo en términos de su mayor efectividad, menor agonía y/o sufrimiento, rapidez, concreción, etc, por los mecanismos de imitación e identificación que pueden activarse en los grupos vulnerables. Asimismo, es preciso evitar las representaciones detalladas de la secuencia de los hechos realizados por la víctima, la emisión permanente de fotografías y videos de su vida, el uso de recursos sonoros y la musicalización para aumentar el dramatismo que ya de por sí comporta el caso a comunicar. Es importante tener presente que estos enfoques suponen un doble impacto: un efecto negativo sobre las personas allegadas a la víctima y sobre la potencial audiencia en situación de crisis.

6. EVITAR LAS REFERENCIAS QUE JUSTIFIQUEN EL ACTO

Procurar no abordar el suicidio como una solución o salida a problemas personales. Es conveniente representar al suicida destacando sus características positivas, de modo de evitar la difusión de indirectas justificaciones del acto y la estigmatización de la víctima.

7. GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD

Ante la cobertura mediática de intentos de suicidio, guardar confidencialidad sobre la identidad e información personal de los protagonistas, ya que a la crisis que atraviesa la persona se le suma la estigmatización por haber intentado quitarse la vida. Es importante comunicar los impactos negativos que tal intento desencadenó en la salud, de modo de disuadir los posibles actos imitativos de la audiencia.

8. INCORPORAR EL TEMA EN LA AGENDA INFORMATIVA

Aprovechar las fechas nacionales e internacionales para incluir en las agendas periodísticas información relevante, preventiva y reflexiva sobre el suicidio, por ejemplo, el 10 de septiembre, Día Nacional y Mundial para la prevención del suicidio.

9. ELEGIR FORMAS LINGÜÍSTICAS RECOMENDADAS

Es importante:

- a) Procurar no caracterizar el hecho en términos de éxito o fracaso ("el suicidio ha sido exitoso", "la tentativa de suicidio ha fallado"). La obtención de la muerte no es algo pensable en términos de triunfo.
- b) Evitar utilizar generalizaciones, como "pandemia de suicidios", "epidemia de suicidios", cuando en verdad se refiere a casos que abarcan una fracción de la población.
- c) Es conveniente no emplear expresiones elogiosas ni peyorativas, como "el suicidio es un acto heroico", "el suicidio es una solución cobarde", ya que ambas abonan el refuerzo de clichés y estigmatizaciones.
- d) Evitar decir que la persona "ha cometido un suicidio", debido a que la asociación de sentido con la frase "ha cometido un delito" le imprime al acto un sentido de criminalidad.

10. PROMOVER COBERTURAS RESPETUOSAS DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Es importante recordar que las coberturas en materia de suicidios deben ser respetuosas de los derechos de niñas, niños y adolescentes que establece la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente:

- a) El derecho al interés superior.
- b) El derecho a la dignidad y a la integridad personal.
- c) El derecho a la vida privada e intimidad familiar.
- d) El derecho a la dignidad.
- e) El derecho a opinar y ser oído.

Esta recomendación alude a niñas, niños y adolescentes en tanto protagonistas de casos de suicidio, como así también en calidad de audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

INFORMACIÓN SOBRE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR, LOS JUICIOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y SU JUZGAMIENTO

Difundir el proceso de verdad, justicia y memoria que se lleva adelante en todo el país por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, es un modo de fortalecer el Estado de Derecho. Por su trascendencia, nacional e internacional, es un derecho de toda la sociedad acceder a una información actualizada y precisa sobre su desarrollo.

Se recomienda:

Utilizar un lenguaje adecuado, preciso y respetuoso de los derechos humanos:

- 1/ Incorporar la expresión “dictadura cívico-militar” para referir a esta etapa de nuestra historia reciente porque ya no es posible desconocer la participación que tuvieron los sectores económicos, empresariales, burocráticos, mediáticos, judiciales, eclesiásticos, tal como confirman las investigaciones y decisiones judiciales de los últimos años.
- 2/ Referir como “presidentes de facto” a quienes no fueron elegidos democráticamente es otra forma de contribuir al fortalecimiento de la democracia.
- 3/ Explicar adecuadamente la naturaleza criminal de los delitos de lesa humanidad, en particular, de la desaparición de personas y de la apropiación de niños y niñas y la sustitución de identidad. Son de lesa humanidad aquellos delitos que la comunidad internacional reconoce como de mayor gravedad y que tienen consecuencias legales como la imprescriptibilidad de la acción penal.
- 4/ Visibilizar y reconocer a las personas que estuvieron detenidas por razones políticas, que fueron más de diez mil, incluso antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La detención por razones políticas implicó la

tortura de detenidos/das y tuvo consecuencias que aún perduran en nuestra sociedad.

En casos de robos de niñas o niños:

- 5/ Es incorrecto utilizar el término “adopción” cuando no existió ese trámite legal, ni la expresión “padres del corazón” para referir a personas que, en realidad, mantuvieron oculta y cambiaron la identidad de un niño o niña durante décadas.
- 6/ Contextualizar y situar los hechos en la historia para que la sociedad y las personas afectadas puedan comprender la dimensión del despliegue del terrorismo de Estado y sus secuelas en el presente, tanto en el plano individual como en el colectivo.
- 7/ Brindar una explicación adecuada del delito de apropiación de personas para generar conciencia y, por ende, contribuir a que se pueda obtener colaboración para encontrar a los nietos y nietas a quienes sus familias aún buscan.
- 8/ Designar a las personas víctimas de apropiación que fueron restituidas con el nombre y apellido biológico, para resguardar su intimidad y evitar que se las exponga públicamente hasta que lo deseen. Esto también contribuye a preservar las investigaciones judiciales ya que evita que se difunda información sobre las personas que habrían participado en su apropiación. La difusión de estos datos, y de otros que permitan identificar a posibles responsables penales, son acciones que entorpecen las investigaciones. De la misma manera, entorpece los procesos de restitución publicar el nombre de quienes se acercan a la CONADI, de quienes concurren a realizarse un examen de ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos, dar a conocer los viajes que realiza la CONADI en el marco de sus investigaciones, o los allanamientos que realiza la justicia para obtener ADN de un posible hijo o hija de personas desaparecidas.
- 9/ Evitar el sensacionalismo en las coberturas y la revictimización respetando siempre a las víctimas de todas las violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En el caso de las personas que buscan su identidad, respetar en particular ese proceso, que es estrictamente privado e íntimo, para no entorpecerlo.

COBERTURA DE OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Se recomienda:

- 1/ Brindar mayor cobertura a los diversos temas de derechos humanos actuales, que suelen tener un tratamiento esporádico y parcial, en particular en los servicios de comunicación audiovisual con fines de lucro, y priorizar las violaciones a los derechos humanos en la agenda pública.
- 2/ Dar lugar a las voces de las víctimas y a sus problemáticas. Las víctimas y las comunidades afectadas pocas veces tienen espacio para difundir sus casos. En general, los medios suelen prestarles atención cuando las situaciones son irreversibles o cuando recurren a métodos de protesta que esos mismos medios suelen criticar. Existe una gran diferencia de tiempo y recursos destinados a difundir los casos de violencia institucional o las situaciones que atraviesan las personas privadas de libertad, que en general tienen pocos recursos económicos, en comparación con la amplia y reiterativa difusión que se da a los delitos contra la propiedad.
- 3/ Evitar la amplificación y reproducción de estereotipos y prejuicios sobre grupos que por su pertenencia étnica o social, identidad, características físicas, edad, pertenencia a un credo, situaciones de vida o enfermedades, se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ocasiones, los medios de comunicación audiovisual estigmatizan en lugar de celebrar la diversidad de nuestra sociedad democrática y plural. Adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, poblaciones LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, entre otros, son algunos de los grupos afectados por este abordaje discriminatorio.
- 4/ Visibilizar a todos los grupos sociales. Muchos de los que integran nuestra sociedad no son representados ni aludidos por los medios audiovisuales o se los referencia sólo en un marco discriminatorio, por ello es necesario incluirlos en la agenda, visibilizando y contextualizando sus demandas, reconociendo su aporte a la sociedad diversa y valorizándolos como tales. Los pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, quienes sufren padecimientos mentales, entre otros, son ejemplos en este sentido.
- 5/ Brindar un trato igualitario, respetuoso, responsable y no discriminatorio en temáticas referidas a las mujeres, en particular en el abordaje de las distintas formas de violencia que las afectan. La utilización de un lenguaje sexista y la cosificación que con frecuencia realizan los medios sobre las mujeres revelan una actitud de desva-

lorización y un trato desigual, propios de una sociedad patriarcal, que es necesario transformar. Para garantizar una mirada inclusiva, es necesario abordar la perspectiva de género en la construcción mediática de la realidad. Es imprescindible la utilización de un lenguaje que apele a la construcción de una cultura en la que las mujeres no sean objetos de consumo, sino que sean reconocidas y valorizadas en sus derechos de acuerdo con una sociedad justa e igualitaria.

- 6/ Respetar el derecho a la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes. Ellos y ellas tienen plenos derechos y pueden hablar y opinar sobre cualquier tema que les interese, sin ningún tipo de restricción ni discriminación. Es recomendable que los medios de comunicación audiovisual incluyan sus voces, sus miradas y perspectivas para enriquecer las formas de ver la vida y el mundo que están llamados a difundir por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Al incluir las opiniones de los niños, niñas y adolescentes hacerlo con responsabilidad y respeto, informándoles sobre qué se les consulta y en qué condiciones se emitirá la entrevista, respetando esas condiciones al momento de publicar su opinión, así como su decisión en caso de que no deseen responder.

- 7/ Respetar el derecho a la privacidad de niños, niñas y adolescentes. La normativa vigente obliga a respetar la dignidad humana y los derechos personalísimos de los niños, niñas y adolescentes. Sus imágenes deben ser utilizadas con responsabilidad evitando la reproducción y difusión de aquellas que menoscaben su dignidad y su integridad. Tanto los datos personales como otros que permitan su identificación deben ser tratados de modo que se respete la privacidad y siempre en función de salvaguardar el interés superior del niño, niña o adolescente cuando participe en los hechos sobre los cuales se informa.
- 8/ Abordar los hechos de «inseguridad» evitando la construcción de la imagen de un «otro» peligroso, amenazante y deshumanizado. Esta imagen suele responder al estereotipo de joven, varón, pobre y proveniente de zonas marginadas en las noticias que se refieren a “hechos de inseguridad” (que suelen asociarse a determinado tipo de delito urbano contra la vida y la propiedad privada). No criminalizar a los jóvenes varones pobres, los cuales son expuestos día a día con una mirada prejuiciosa.

LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO AGRADECE Y RECONOCE A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS QUE REALIZARON APORTES PARA ESTE DOCUMENTO:

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS

www.apdh-argentina.org.ar/institucional
Callao 569, 1er piso (fondo), CABA, (CP 1022)
(011) 4814 3714

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS

www.desaparecidos.org/familiares
Riobamba 34, CABA, (CP 1025)
(011) 4953 5646

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS)

www.cels.org.ar
Piedras 547, CABA, (CP 1070)
(011) 4334 4200

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

www.abuelas.org.ar
Virrey Ceballos 592 PB 1, CABA, (CP 1077)
(011) 4384-0983

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA AL ABORDAR CASOS DE EXTRAVÍO Y ABANDONO DEL DOMICILIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Este documento fue elaborado a raíz de un reclamo recibido y motivó una serie de reuniones con el Registro Nacional de Menores Extraviados, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

PUNTO 1

Previo a la difusión de imágenes o datos sobre niñas, niños o adolescentes, además de las familias o interesados, es recomendable recurrir a las instituciones públicas competentes en la materia, para corroborar si se está investigando el caso y cuál es el contexto en el que se produjo el extravío y/o abandono del domicilio, debido a que estas problemáticas suelen darse en contextos de violencia familiar.

El Registro Nacional de Información de personas menores extraviadas¹ los organismos zonales dependientes de los municipios, el juzgado interviniente y/o el Asesor de Menores pueden brindar esa información.

PUNTO 2

El desconocimiento del conflicto familiar subyacente en el tratamiento informativo o la cobertura mediática puede revictimizar al niño, niña o adolescente, afectando su derecho a la reserva y al respeto de su intimidad. E incluso, puede redundar en la reproducción de las condiciones que generaron el abandono del domicilio y/o el extravío del niño, niña o adolescente.

PUNTO 3

Tener presente que el niño, niña o adolescente, desde el momento que abandona su domicilio o se encuentra extraviado ya es víctima. Por eso se recomienda no tender a inver-

tir esta situación, victimizando a la familia y/o condenando a niñas, niños y adolescentes, simplificando un fenómeno complejo que obedece a múltiples causales o reduciendo el origen del problema a una supuesta "rebeldía", por ejemplo.²

PUNTO 4

La única fuente no debe ser la familiar o el denunciante, debido a que en muchos casos los buscadores pueden ser los mismos victimarios y/o responsables de las condiciones que generaron el abandono del domicilio del niño, niña o adolescente.

PUNTO 5

Previo a difundir imágenes o datos del niño, niña o adolescente, se recomienda consultar y pedir autorización a los organismos competentes intervinientes, ya que en algunos casos la difusión de imágenes puede generar más riesgos para las niñas y niños que los posibles resultados a obtener.

PUNTO 6

A la hora de entrevistar a niñas, niños y adolescentes, se debe respetar su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, centrar el tratamiento en un abordaje que priorice la información de interés socialmente relevante y resulta recomendable difundir el 142 o el 0800 – 122 – 2424 del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.⁶

PUNTO 7

Tener en cuenta que el mayor porcentaje de personas extraviadas o que abandonan su domicilio son adolescentes, por lo cual se trata de un grupo especialmente vulnerable a esta problemática y, por lo tanto, los SCA deben extremar las medidas de precaución y cuidado al abordar estos casos.⁷

PUNTO 8

Es importante poder centrar la labor informativa en la prevención y el tratamiento respetuoso de este tipo de casos, sin exponer la intimidad de niñas, niños y adolescentes involucrados, ya que pueden subyacer incluso situaciones de abuso o violencia familiar, que más allá de su difusión en los medios de comunicación audiovisual, requieren un tratamiento adecuado por parte de profesionales especializados y las agencias públicas competentes en la materia.

PUNTO 9

De manera particular, una vez hallado el niño, niña o adolescente, es decir, una vez que ha finalizado la búsqueda, debe primar el estricto respeto del interés superior que exige la protección de su derecho a la imagen, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar, en tanto el servicio social brindado por los medios audiovisuales al difundir su imagen durante la búsqueda, ha cumplido su objetivo central.

PUNTO 10

En la cobertura de hechos que involucran a niñas, niños o adolescentes, debe primar siempre el respeto por su "interés superior", lo que implica privilegiarlo para que sus derechos no se vean vulnerados y puedan ser realmente ejercidos en cada una de las etapas de las coberturas periodísticas.

1. El Registro tiene competencia sobre "aquellos niños, niñas o adolescentes de quienes se desconoce su lugar de ubicación, o aquéllos localizados, de quienes se desconocieren sus datos filiatorios". Su accionar consiste fundamentalmente en la búsqueda y el hallazgo en casos de abandono voluntario o extraviados de los niños, niñas y adolescentes involucrados, según el Informe de gestión del Registro de Información de Personas Menores Extraviadas 2013.
2. Así, entre las causas para que el niño, niña o adolescente se vaya a vivir a la calle se encuentran el maltrato físico en el 29,2% de los casos, el abuso emocional, en el 30,6% de los casos y el abuso sexual en el 12,5% de los casos, según el Informe de Gestión del Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas 2013.
3. El Registro cuenta con la línea 142, gratuita desde cualquier compañía telefónica, y también el 0800 – 122 – 2424 que funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, para informar acerca de la desaparición de un niño o para proveer los datos que faciliten su búsqueda.
4. Según el Informe de Gestión 2013 del Registro Nacional de Información de personas MENORES EXTRAVIADOS del "entrecruzamiento de las distribuciones sexo y edad de niños, niñas y adolescentes extraviados ingresados al Registro durante 2013, refleja que el mayor porcentaje en ambos sexos se concentra en la franja etaria de 12 a 17 años (79%, 4.402 casos). La cantidad de mujeres (3.021), que representa el 69% de esta franja etaria, supera a la de varones (1.381, el 31%), porcentajes que se mantienen bastante estables respecto de la gestión 2012".

RECOMENDACIONES PARA COBERTURAS ELECTORALES RESPETUOSAS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

En vistas del proceso electoral nacional y en la búsqueda del respeto e inclusión de niñas, niños y adolescentes en el debate en los servicios de comunicación audiovisual, la Defensoría del Público, UNICEF, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), elaboraron un documento con una serie de "Recomendaciones para coberturas electorales respetuosas de los derechos de niñas, niños y adolescentes".

Las campañas electorales nacionales y locales representan una oportunidad para instalar en la agenda pública la situación de la niñez y la adolescencia, no sólo desde las propuestas de políticas públicas, sino también generando los espacios para la participación y difusión de la voz de la juventud.

Gran parte de la comunicación periodística habitual reproduce y refleja la discriminación que padecen niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad. Este segmento de la población, no es tomado como un actor social en paridad con los demás, con su capacidad de hacer aportes e involucrarse, opinar y decidir sobre los asuntos que le conciernen, sin restricciones en razón de la temática, incluyendo aquellas relacionadas con sus ideas políticas.

Los puntos a tener en cuenta son:

- Contribuir a realizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a que su opinión sea tenida en cuenta.
- Promover la inclusión de los derechos y las problemáticas particulares de niños, niñas y adolescentes en la agenda pública.
- Explorar los ámbitos de participación juvenil.
- Incorporar un enfoque federal.
- Abordar los temas y definir su agenda con un enfoque respetuoso de la diversidad.

- Obtener el permiso del chico o chica y sus familiares de realizar cualquier entrevista, filmación o fotografía.
- Cuidar las imágenes de niños, niñas y adolescentes que muestra.
- Evitar la difusión de imágenes o informaciones si estas afectan el interés superior de la niña o el niño.
- Cotejar la información, particularmente aquella que puede reforzar estereotipos, con estadísticas rigurosas y fuentes especializadas.

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

- 1/ Tener presente que existen distintos tipos de violencia contra las mujeres: física, psicológica, sexual, económica y simbólica; y modalidades: doméstica, institucional, laboral, mediática, obstétrica y contra la libertad reproductiva. (Ley 26.485)
- 2/ Focalizar la cobertura en la prevención y la sensibilización social sobre la problemática. Se recomienda no espectacularizar o frivolar la noticia, ni confundir interés social con morbo.
- 3/ Dar a conocer los datos de la víctima sólo si se cuenta con su autorización. Es fundamental preservar su integridad, dignidad e imagen. En caso de femicidios se desaconseja la exposición reiterada de imágenes de la víctima.
- 4/ Incluir en la cobertura información socialmente relevante: números de asistencia (en todo el país: Línea 144 – atención, contención e información), formas de hacer la denuncia, derechos de las personas y obligaciones del Estado, etc.
- 5/ Preguntarse si todos los elementos utilizados en la noticia (la música, el videograph, las imágenes, el lenguaje, los efectos, los testimonios, etc.) contribuyen a una cobertura responsable y respetuosa o dramatizan la información.
- 6/ Promover la multiplicidad de fuentes. Se desalienta el uso exclusivo de fuentes secundarias o privadas (vecinos/as, familiares, amistades, etc.) Procurar que los testimonios y el tratamiento periodístico en general, no produzcan el efecto de desacreditar a la víctima.
- 7/ Para evitar el posible “efecto imitación”, especialistas consultados por la Defensoría desaconsejan difundir detalles precisos y reiterados sobre el modo en que se ejerció la violencia.

- 8/ Cuando se trata del asesinato de una mujer por razones de género se sugiere hablar de femicidio. Evitar el uso del concepto "crimen pasional" porque se culpabiliza a la víctima y se respalda la acción violenta del agresor.
- 9/ Intentar que la información no se base únicamente en fuentes de las fuerzas de seguridad. Consultar a funcionarios/as públicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la temática para analizar la problemática en su complejidad.
- 10/ Procurar que el discurso en su totalidad sea conjetural y no afirmativo, ya que la difusión del caso tendrá impacto a largo plazo en la vida de las personas implicadas. Es fundamental la protección de derechos como la dignidad y la reputación, y el respeto al principio de inocencia mientras no haya sentencia firme.

FUENTES

- Aportes de las organizaciones de la sociedad civil en las mesas de trabajo "Buenas prácticas: Equidad de género en la radio y la televisión". Doce reuniones convocadas por la Defensoría del Público y realizadas en todas las regiones de Argentina. (Julio-octubre, 2014).
- 10 preguntas sobre el Tratamiento de la violencia de género en la radio y la televisión - Defensoría del Público (2013). Disponible en <http://www.defensadelpublico.gov.ar/es/tratamiento-violencia-genero-radio-y-television>

TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPETUOSO Y RESPONSABLE DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

El día 8 de noviembre se celebra el *Día Nacional de las/los afroargentinas/os y de la cultura afro*. En este marco, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, junto con organizaciones vinculadas a la representación y defensa de los derechos de las comunidades afro en Argentina, elaboró el siguiente decálogo para contribuir al tratamiento mediático respetuoso y responsable de la diversidad étnico-cultural en los medios audiovisuales. La Defensoría tiene la convicción de que una comunicación plural y respetuosa de los derechos humanos contribuye a formar una sociedad más igualitaria y democrática. Por ello, recomienda:

1. DIFUNDIR LOS ASPECTOS POSITIVOS RELACIONADOS A LAS "COMUNIDADES AFRO".

Se sugiere promover un enfoque "intercultural" sobre la nación argentina. Una perspectiva democrática y horizontal de los diversos grupos que conforman el país contribuye a una mayor y mejor integración, libre de discriminaciones. Esta perspectiva es fundamental para la construcción de una sociedad plural e igualitaria. Por eso, resulta necesario promover una visibilización mediática que resalte los aspectos positivos y productivos de las "comunidades afro" y que considere sus especificidades y características propias.

2. DIFUNDIR LOS SIGNIFICADOS E IMPLICANCIAS DE LA DENOMINACIÓN "AFRO-DESCENDIENTE" DE MODO QUE PUEDA SER UTILIZADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA ADECUADA COMO REFERENCIA A ESTE COLECTIVO.

Se aconseja a quienes trabajan en los medios audiovisuales tener en consideración que la identidad "afro" forma

parte del presente, del pasado y del futuro de la nación argentina. Advertir este punto es crucial para evitar la mirada que distancia geográfica e históricamente a lo “afro” de la conformación del país. En contraposición, se sugiere la reposición del importante rol histórico de estas comunidades en la configuración política de Latinoamérica y de Argentina como Estado-nación independiente.

3. VISIBILIZAR LAS DISTINTAS REALIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE LAS PERSONAS AUTO-PERCIBIDAS COMO AFRODESCENDIENTES QUE VIVEN EN LA ARGENTINA.

Se aconseja que, al referir a las comunidades de afro-descendientes, se dé cuenta de su diversidad y heterogeneidad, con la posibilidad de dar voz y visibilidad a cada uno de los colectivos que integran esos grupos. Las diversidades al interior del colectivo “afro” forman parte de la riqueza y la diversidad que recorre la Argentina. Comprender dicha diversidad es aprender a mirar con respeto y reconocimiento.

4. EVITAR LA VINCULACIÓN DE LA PALABRA “NEGRO” CON PRÁCTICAS ILEGALES Y CLANDESTINAS O CON IDEAS Y DESCRIPCIONES CONSIDERADAS COMO SOCIALMENTE NEGATIVAS.

Los medios de comunicación audiovisuales pueden contribuir al respeto de las categorías de identificación de las comunidades “afro” y preservar así la identidad cultural auto-percibida de las mismas. En este sentido, se recomienda eludir la utilización del término “negro” para referir a los miembros de las comunidades “afro”, dado que su uso suele ser invocado de manera discriminatoria, peyorativa, poco precisa e irrespetuosa de las personas y de la diversidad cultural de sus identidades.

5. EVITAR LA ASOCIACIÓN DE PRÁCTICAS RELIGIOSAS DE MATRIZ AFRO CON ASPECTOS NEGATIVOS O PRÁCTICAS DELICTIVAS.

Se aconseja que, al informar sobre prácticas religiosas de matriz afro, las coberturas periodísticas sean respetuosas de la Ley Nacional de Cultos y, en tal sentido, recurran a referentes religiosos de las comunidades “afro” en tanto fuentes legítimas para la producción de información. Se recomienda así evitar que el trabajo periodístico se sustente en meros prejuicios o trascendidos acerca de las distintas

10

DECÁLOGO PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL

- 1 Difundir los aspectos positivos relacionados a las “comunidades afro”
- 2 Difundir los significados e implicancias de la denominación “afro-descendiente” de modo que pueda ser utilizada en los medios de comunicación de manera adecuada como referencia a este colectivo
- 3 Visibilizar las distintas realidades culturales y sociales de las personas auto-percibidas como afrodescendientes que viven en la Argentina
- 4 Evitar la vinculación de la palabra “negro” con prácticas ilegales y clandestinas o con ideas y descripciones consideradas como socialmente negativas
- 5 Evitar la asociación de prácticas religiosas de matriz afro con aspectos negativos o prácticas delictivas
- 6 Considerar la legitimidad como fuente de información, consulta y opinión a las distintas organizaciones afros en los temas en los que puedan brindar información socialmente relevante
- 7 Alentar el acceso de personas “afro” y “afrodescendientes” a roles de conducción y producción en los servicios de comunicación audiovisual
- 8 Promover la inclusión de la diversidad étnico-cultural en el campo publicitario y ficcional
- 9 Visibilizar el 8 de noviembre como “Día Nacional de las/os Afroargentinas/os y de la Cultura afro” para que se sume a la agenda periodística
- 10 Promover los espacios de debate público y mediático para que la diversidad social pueda expresarse y que las personas afro y afrodescendientes difundan sus realidades

religiones, creencias o cultos de origen "afro", dado que esos imaginarios suelen dar lugar a representaciones simplistas, espectacularizantes y criminalizantes de sus fieles.

6. CONSIDERAR LA LEGITIMIDAD COMO FUENTE DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y OPINIÓN A LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES AFROS EN LOS TEMAS EN LOS QUE PUEDAN BRINDAR INFORMACIÓN SOCIALMENTE RELEVANTE.

Ante la cobertura informativa de acontecimientos que involucraran a miembros de las comunidades "afro" y/o "afro-descendientes" -sea en territorio nacional como fuera del país-, es recomendable recurrir, en tanto fuentes de información, consulta y opinión, a las diferentes organizaciones y asociaciones afro y afro-descendientes en Argentina, de modo que éstas puedan reponer su visión respecto de los hechos relatados. La visibilización de las experiencias propias que suelen quedar olvidadas en los análisis mediáticos locales tiende al silenciamiento de una parte significativa de la población. La participación mediática de las comunidades "afro" puede contribuir a legitimar su identidad como parte de la pluralidad social de la que forman parte.

7. ALENTAR EL ACCESO DE PERSONAS "AFRO" Y "AFRODESCENDIENTES" A ROLES DE CONDUCCIÓN Y PRODUCCIÓN EN LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

La Defensoría invita a los medios de comunicación audiovisuales de gestión pública y privada a promover el acceso laboral a personas afro y/o afro-descendientes a sus espacios de trabajo. Ello posibilitará desarticular la desinformación e invisibilización mediática que existe respecto de la comunidad afro en general.

8. PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL EN EL CAMPO PUBLICITARIO Y FICCIONAL.

Se alienta la inclusión de las comunidades afro y afrodescendientes en las propuestas publicitarias y ficcionales audiovisuales, dado que ello implicaría, además de su reconocimiento igualitario, un marcado respaldo a la construcción de discursos inclusivos y democráticos de la composición social del país. A su vez, podrá contribuir a desarmar los racismos que persisten en parte de la sociedad y ante los cuales la mejor respuesta es la participación integral de la pluralidad que forma parte del espacio social total.

9. VISIBILIZAR EL 8 DE NOVIEMBRE COMO "DÍA NACIONAL DE LAS/OS AFROARGENTINAS/OS Y DE LA CULTURA AFRO" PARA QUE SE SUME A LA AGENDA PERIODÍSTICA.

Se sugiere destacar la importancia del 8 de noviembre, "Día Nacional de las/os Afroargentinas/os y de la Cultura afro" en Argentina, de modo de difundir la "cultura afro" en el país y para visibilizar su relevancia en la construcción histórica de la cultura y la identidad nacional contemporánea. Se recuerda que, tal como afirma la Ley 26.852 de 2013, el 8 de noviembre se recuerda el aniversario del fallecimiento de María Remedios del Valle, "afroargentina llamada por las huestes como 'Madre de la Patria' a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla". En su reconocimiento no sólo se reivindica la membrecía afro en la cultura nacional, sino también su importancia contemporánea.

10. PROMOVER LOS ESPACIOS DE DEBATE PÚBLICO Y MEDIÁTICO PARA QUE LA DIVERSIDAD SOCIAL PUEDA EXPRESARSE Y QUE LAS PERSONAS AFRO Y AFRODESCENDIENTES DIFUNDAN SUS REALIDADES.

Ante el fenómeno constante de "extranjerización" y subalternización de "lo negro" y "lo afro", y ante el escaso reconocimiento de la identidad "afro-argentina" en nuestro país, resulta clave que los servicios de comunicación audiovisual generen espacios para el debate y permitan poner en cuestión las diferentes formas de discriminación que atraviesa aún la sociedad argentina. En la amplitud de esos espacios, la responsabilidad social de los medios podrá contribuir a la promoción de miradas más amplias, integradoras y, finalmente, posibilitará que se expresen allí voces acalladas que reclaman el ejercicio de su propio derecho a la comunicación.

“LA ARGENTINA ESTÁ
HACIENDO UN PAPEL
IMPORTANTE EN
LATINOAMÉRICA QUE NOS
ESTÁ ABRIENDO LA PUERTA
Y NOS ESTÁ AYUDANDO
A FORTALECER NUESTRA
FUNCIÓN COMO DEFENSORES”.

OLGA RESTREPO REYES

COMITÉ DEFENSOR DEL TELEVIDENTE DEL CANAL
TELEANTIOQUIA , COLOMBIA



ANEXO II



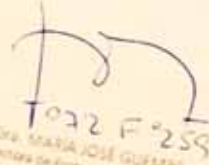
Defensoría del Público



comunitaria es la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de la comunicación. Derecho humano que debe ser salvaguardado en condiciones de universalidad y acceso a ese derecho, con reglas que eviten toda medida persecutoria de aquello que debe promover y proteger en una democracia.

En defensa de la comunicación como derecho humano y en defensa de la democracia a través de la exteriorización de ese derecho a través de la comunicación audiovisual, y de la construcción de una nueva ciudad diversa e inclusiva, solicitamos se desestime la denuncia penal y se proteja a los equipos afectados.

Sin más, saluda a Usted muy atentamente.


1032 F 258
Dra. MARÍA JOSÉ GUEMES
Defensora de Protección de Derechos
y Asuntos Jurídicos
Defensoría del Público de Servicio
de Comunicación Audiovisual


ESTEBAN P. LOPARDO
ABOGADO
1032 F 258


Lic. Cynthia
Defensora
de Servicio de Comunicación



AMICUS ANTENA NEGRA

SE PRESENTA COMO AMICI CURIAE

Sr. Juez:

Cynthia Ottaviano, en mi carácter de Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el patrocinio letrado de la Dra. María José Guembe, T°72 F°259 CPACF (cuit 27-21797909-4), y el Dr. Esteban Lopardo, T°67 F°30 CPACF (cuit 20-24485590-4), constituyendo domicilio legal en la calle Alsina 1470 de esta Ciudad, en la causa N° **3.169/2015, "N.N. S/ Interrupción de las comunicaciones"**, a V.S. me presento y digo:

1. PERSONERÍA

Que acredito personería como Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual adjuntando copia autenticada de la Resolución dictada conjuntamente por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación el día 14 de noviembre del año 2012, la cual se encuentra en plena vigencia.

2. OBJETO

El objeto de esta presentación consiste en acercar a V.S. para su consideración, argumentos legales de relevancia en torno a la cuestión que se dirime en autos. A tal efecto solicito que acepte a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en carácter de Amici Curiae, se incorpore el presente memorial en estos autos y se lo tenga en consideración al momento de resolver.

3. LA INSTITUCIÓN DEL AMICUS CURIAE

La institución del Amicus Curiae ha sido tempranamente reconocida en el derecho internacional y en el derecho nacional comparado. En Argentina, su recepción fue en primer momento jurisprudencial pero hace más de diez años fue expresamente reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Acordada CSJN N°28/2004 reglamentó la intervención en carácter de Amigos del Tribunal de las personas físicas y jurídicas que no sean parte en un pleito en el que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general, como es el acceso al derecho a la libertad de expresión garantizado por los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522, en adelante LSCA).

Este procedimiento alcanza al Estado Nacional, a los estados provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, como así también a las agencias de cada una de las mencionadas organizaciones estadales, conforme lo dispone el artículo 3° del reglamento sobre intervención de Amigos del Tribunal dispuesto por la Acordada N° 7/13 de la C.S.J.N.

El superior tribunal al diseñar el mecanismo del Amicus Curiae lo previó para aquellas controversias cuya resolución "genere un interés que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático". En tal sentido la Corte estableció que en esos casos "debe imperar un principio hermenéutico amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, respondan al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el

EL SUPERIOR TRIBUNAL AL DISEÑAR EL MECANISMO DEL AMICUS CURIAE LO PREVIÓ PARA AQUELLAS CONTROVERSIAS CUYA RESOLUCIÓN "GENERE UN INTERÉS QUE TRASCIENDA AL DE LAS PARTES Y SE PROYECTE SOBRE LA COMUNIDAD O CIERTOS SECTORES O GRUPOS DE ELLA, A FIN DE RESGUARDAR EL MÁS AMPLIO DEBATE COMO GARANTÍA ESENCIAL DEL SISTEMA REPUBLICANO DEMOCRÁTICO"

Preámbulo de la Constitución Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo" (Considerando 2º Acordada 28/2004).

La Corte definió al Amicus como "un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia" (CSJN, Acordada 28/04). En razón de ello, el tribunal consideró apropiado que "en las causas en trámite ante sus estrados y en las que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se autorice a tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión del asunto" (CSJN, Acordada 28/04, considerando 1).

La presente causa se enmarca en las características antes descriptas, puesto que se encuentran en juego normas constitucionales de alcance colectivo tales como el derecho a informar y el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva.

La Defensoría del Público ha actuado en calidad de Amicus Curiae en causas referidas al alcance de estos mismos derechos. Ejemplo de ello es la participación -por invitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- en la Audiencia Pública de Amicus Curiae realizada en los autos "Grupo Clarín S.A. y otros C/ Poder Ejecutivo Nacional y otros/ Acción meramente Declarativa- G 439. XLIX", el 28 de agosto de 2014.

En esa ocasión la acercamos a la Corte Suprema la perspectiva del público en cuanto a la necesidad de regulación estatal de la comunicación audiovisual para garantizar un derecho a la comunicación democrática, diversa y plural en nuestro país.

La Acordada de la Corte Suprema que institucionalizó la participación de amigos del tribunal, recoge una importante construcción jurisprudencial de los tribunales argentinos, especialmente los federales. Los tribunales argentinos han demostrado una apertura a la participación democrática a través el reconocimiento de esta institución en procesos de distinto tipo cuyo interés, tal como lo ha establecido la Corte, trascendía el interés de las partes y se proyectaba a la comunidad o grupos de ella.

Los primeros antecedentes jurisprudenciales del Amicus Curiae se dieron en el marco de causas penales que tramitaban en instancias distintas de la Corte Suprema. En la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en el marco de la causa Nº 761, "Hechos Ocurridos en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada", el 18 de mayo de 1995, se habilitó la presenta-

ción en carácter de Amicus Curiae de varias organizaciones internacionales de derechos humanos y expertos reconocidos que aportaron argumentos del derecho internacional respecto de la obligación que recaía sobre el Estado argentino de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Este Amicus contribuyó a la elaboración jurisprudencial del derecho a la verdad, en el que los tribunales argentinos fueron pioneros, y que hoy es reconocido a nivel mundial.

Otro antecedente de participación en causas penales a través de Amicus Curiae proviene de la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, al aceptar la admisibilidad del Amicus Curiae presentado en la causa "Balverdi, Juan Antonio y otros s/ infracción a la Ley 23.737". En esa oportunidad la Cámara afirmó: "creo necesario efectuar aquí una serie de precisiones con relación a la trascendencia de la intervención de personas ajenas a determinado proceso penal... a los efectos de aportar información que por su particular importancia en materia de derechos humanos, interesan a la comunidad en general".

Consideramos que la resolución del presente caso, en tanto versa sobre aspectos de la libertad de expresión y el derecho a la información en sede penal es una cuestión "de trascendencia colectiva o interés general" que excede el interés de las partes en conflicto. Por este motivo acercamos argumentos jurídicos sobre aspectos del pleito, basados en la legislación nacional, la Constitución Nacional, los Tratados internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

4. LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y SU CAPACIDAD DE PARA ACTUAR ANTE EL PODER JUDICIAL

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, en su artículo 19 creó la Defensoría del Público y estableció entre sus misiones y funciones la de "recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios regulados por la presente teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial. No obstará a su legitimación judicial la existencia o no de causa individual, siendo su legitimación tanto subjetiva como colectiva y por los derechos de incidencia colectiva previstos expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que hacen al desarrollo del Estado

democrático y social de derecho y a la forma republicana de gobierno" (art.19, inc. a).

Esa amplia legitimación para actuar se complementa con lo establecido en el inc. i) que dispone que la Defensoría del Público tiene capacidad para "representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su conjunto, en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitar la anulación de actos generales o particulares, la emisión, modificación o sustitución de actos y otras peticiones cautelares de fondo necesarias para el mejor desempeño de su función."

Ello hace que la Defensoría del Público se encuentre activamente legitimada para actuar en cualquier proceso cuyo objeto se relacione con la protección de los derechos comprendidos en la Ley 26.522 y sus leyes relacionadas.

La creación de la Defensoría en la LSCA se relaciona con el reconocimiento de un nuevo sujeto colectivo de derechos, el público de los servicios de comunicación audiovisual. La Defensoría representa y defiende al público e interviene para lograr un efectivo cumplimiento de los objetivos de la ley.

Para conocer los intereses del público, la Defensoría no sólo recibe sus presentaciones, sino que realiza audiencias públicas en las diferentes regiones del país (conf. art. 19 inc. f), en las que personas adultas, adolescentes y niños y niñas están invitadas a exponer su opinión sobre el funcionamiento de la radio y la televisión. Por otra parte, la Defensoría convoca a las organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios e investigación y otros interesados, creando "un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación" (art. 19 inc. c).

Los servicios de comunicación audiovisual cumplen una "actividad social de interés público" y, por tanto, el Estado – en este caso la Defensoría– "debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión". El objetivo central de los servicios de comunicación audiovisual es la "promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación", y la "satisfacción de las necesidades de información y comunicación social de las comunidades en que los medios estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o prestación" (art. 2, párr. 1, 2 y 3).

Especialmente la ley reconoce a todas las personas la legitimación para demandar el cumplimiento de estos objetivos y obligaciones (art. 2 párr. 4) y es en este aspecto que la facultad de actuación judicial de la Defensoría cobra particular relevancia.

5. LA PRESENTACIÓN DE ANTENA NEGRA TV ANTE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO EN EL MARCO DE LOS NUEVOS PARADIGMAS LEGALES

El 4 de septiembre de 2015 la Defensoría recibió una presentación del Canal de Televisión Comunitario denominado "Antena Negra TV" en la que manifiestan que: "Un operativo de más de 40 efectivos de la Policía Federal entró junto con la AFTIC en el canal comunitario Antena Negra TV, integrante de la Red nacional de Medios Alternativos (Ángel Gallardo 752- CABA) para cumplir la orden de secuestro de equipos emanada del Poder Judicial de la Nación..." (Actuación nº254/2015).

Previo ratificación de la mencionada presentación, invitados a realizar todas las precisiones y aclaraciones que estimen pertinentes para la mejor comprensión de su denuncia, manifestaron "que la cooperativa es una emisora comunitaria que emite desde 2008 en forma analógica en el canal 4 y desde el principio de este año comenzó pruebas de emisión en digital en el canal 20; que se han presentado ante AFSCA en los términos y derechos de la Ley 26.522 solicitando que se abra un concurso para que puedan acceder como medio comunitario a una licencia de alta potencia, como operadores; dicho requerimiento obedeció a que los concursos que se abrieron para emisoras sin fines de lucro no incluyeron licencias para alta potencia. Indican que ese pedido de apertura de concurso aún no ha sido resuelto, no han tenido novedades sobre él pese a que se encuentra cercano el vencimiento del plazo administrativo respectivo para resolver (...) Refieren que la denuncia que originó el secuestro de los equipos, ha sido realizada por una empresa que no cuenta con licencia al efecto, por lo que mal podría denunciar una interferencia. En ese sentido, abundan señalando que el Decreto 2456/2014 establece que el canal 20 en cuestión está afectado exclusivamente al servicio de televisión digital terrestre abierta desde su entrada en vigencia...".

La Cooperativa Antena Negra Tv Ltda. adjuntó ante esta Defensoría documentación sobre sus presentaciones ante el AFSCA (copia de la Actuación N° 007996/AFSCA/2010 en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 3-AFSCA/2009 y copia de la Actuación N° 0015338-AFSCA/15, mediante la cual solicita formalmente al AFSCA, en los términos del artículo 32 de la Ley 26.522, que se llame a concurso como licenciataria operador en los canales 16, 17 o 18 de televisión abierta digital para las categorías B, C, D, E y F, que según la Resolución N° 24 AFSCA/2015, se encuentran libres y sin uso por parte de ningún radiodifusor).

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vigente desde el año 2009, configuró un cambio paradigmático en el derecho a la comunicación audiovisual en nuestro país. Hasta el momento de su entrada en vigencia la comunicación era entendida como una mercancía y sólo las entidades con fines de lucro podían ser licenciatarias de radio o tv. A los actores sociales sin fines de lucro les estaba vedado participar en la comunicación, aunque algunos de ellos habían sido reconocidos en sus derechos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2003.

El reclamo se inscribe en un contexto histórico de reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental y de los servicios de comunicación social como actores socialmente responsables. La comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, la preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.

La LSCA reconoce tres tipos de prestadores que son los de gestión pública (estados en distintos niveles, universidades, pueblos originarios, iglesia católica); de gestión privada con fines comerciales; y de gestión privada sin fines de lucro. Para estos últimos, los prestadores sin fines de lucro, reserva expresamente el 33 % del espectro radioeléctrico. De este modo compensa una desigualdad histórica.

Para tutelar el derecho a la comunicación la ley crea organismos especiales: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de la aplicación e interpretación de la LSCA; la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de la Comunicación Audiovisual en el marco del Congreso de la Nación; y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual como el organismo específico de tutela de los derechos del público.

El nuevo paradigma de la comunicación audiovisual se establece en base a una participación social activa de diferentes sectores de la comunidad. La previsión de concursos públicos para el otorgamiento y renovación de licencias; la realización de audiencias públicas para escuchar a los actores concernidos y al público sobre distintos aspectos de la ley; la estipulación de procesos de elaboración participativa de normas para la reglamentación de ciertos derechos como el abono social, dan cuenta de la nueva lógica que impera en la ley 26.522. Este esquema se completa con la previsión de mecanismos específicos para la resolución de conflictos, algunos a cargo del AFSCA, otros a través de la intervención dialógica de la Defensoría del Público.

Este paradigma plasmado en la LSCA convive con el nuevo marco legal de las telecomunicaciones. La ley 27.078, sancionada en diciembre de 2014, regula las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el objeto principal de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Es facultad de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) el otorgamiento, en las condiciones que la ley establece, de las licencias para operar servicios de telecomunicaciones. Esta norma atañe a las comunicaciones que no están comprendidas en la LSCA.

Actualmente, nos encontramos entonces en una etapa de transición y consolidación de este nuevo marco legal determinado por las leyes 26.522 de servicios de comunicación audiovisual y la ley 27.078 de tecnologías de la información y las comunicaciones; cada una de las cuales cuenta con una Autoridad de Aplicación específica (AFSCA en el primer caso y AFTIC en el segundo). En este camino es preciso discernir con precisión los alcances de cada marco legal y las competencias de cada Autoridad de Aplicación.

6. DEL NEGOCIO AUDIOVISUAL AL NUEVO ESCENARIO PARTICIPATIVO Y DEMOCRÁTICO

Durante más de 30 años, aún en plena democracia, no existió la posibilidad de participar en un concurso público para resultar adjudicatario de una licencia de un canal de radio o televisión en nuestro país. Esta situación fue modificada por la LSCA, hace apenas seis años, al expresar en el artículo 7 que el espectro radioeléctrico es un bien público escaso, cuya administración resulta responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir el AFSCA. En este mismo orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “el derecho a la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas como medio de expresión o comunicación, debe ser ejercido conforme a las leyes que lo reglamentan y dentro de los límites que imponga la naturaleza reducida del medio utilizado, los derechos de terceros y el interés público” (Fallos, 322:2750). Aspectos como el espectro radioeléctrico, adjudicación de licencias, control de los servicios, régimen sancionatorio, cobro de retribuciones por el uso de licencias, han sido siempre cuestiones sujetas a la jurisdicción nacional, en el marco de la AFSCA.

Durante la dictadura cívico-militar el control y explotación de los canales de televisión lo ejercían las distintas Fuer-

12

PUNTOS EN LA PRESENTACIÓN COMO AMICUS CURIAE EN EL CASO DE ANTENA NEGRA

- 1 Personería
- 2 Objeto
- 3 La institución del Amicus Curiae
- 4 La Defensoría del Público y su capacidad de para actuar ante el Poder Judicial
- 5 La presentación de antena negra tv ante la Defensoría del Público en el marco de los nuevos paradigmas legales
- 6 Del negocio audiovisual al nuevo escenario participativo y democrático
- 7 Últimas medidas para ordenar el espectro radioeléctrico: más frecuencias para el público audiovisual
- 8 Los mecanismos administrativos de solución de conflictos previstos en la LSCA
- 9 Estándares internacionales
- 10 La necesaria legalización de las emisoras comunitarias
- 11 La afectación al nuevo paradigma comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos
- 12 Consideración final

LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN CUALQUIERA DE SUS SOPORTES RESULTA UNA ACTIVIDAD SOCIAL DE INTERÉS PÚBLICO

zas Armadas. Con el advenimiento de la democracia los canales de TV pasaron a formar parte del Estado Nacional. La excepción a esta regla fue el Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires, que fue devuelto a su titular privado.

Posteriormente, en el año 1989, se inició un proceso de privatización cuestionado y cuestionable de los canales de televisión abierta, que pasaron a manos privadas, condición en la que permanecen hasta la actualidad.

Las personas jurídicas sin fines de lucro estuvieron históricamente excluidas de la posibilidad de ejercer su derecho a la comunicación a través de la radio y la televisión. Porque en ese paradigma autoritario y mercantilista sólo se podía acceder si se tenían los recursos económicos exigidos.

Es decir que actores sociales como "Antena Negra TV" se encuentran recientemente reconocidos en el plano legislativo como potenciales licenciatarios de televisión. En el plano histórico social y cultura, el reconocimiento no fue exógeno, sino endógeno: la necesidad de ejercer el derecho humano a la comunicación, a que la titularidad de los servicios de comunicación no estuvieran en pocas manos, con reducidos intereses, sino en múltiples manos, plurales y diversas para profundizar la vida democrática, dio origen a ese tipo de comunicación: la comunicación comunitaria, alternativa y popular, con características identitarias propias que se desarrollan en el apartado 10.

Fue a partir de la LSCA, entonces, que se inició el proceso de ordenamiento de los servicios de televisión.¹ Desde hace apenas un año, en nuestro país, se están substanciando los primeros concursos para la adjudicación de frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta. En el marco del artículo 32° de la ley, la AFSCA llamó a concurso a 82 frecuencias de TDT, 22 de alta potencia y 60 de baja, con y sin fines de lucro, distribuidas en todo el territorio nacional.²

Estamos transitando el cambio de la televisión analógica abierta a la televisión digital abierta, denominada TDA, tanto por parte de servicios de comunicación audiovisual públicos, como de gestión privada con y sin fines de lucro, comprendiendo que el desarrollo de la televisión digital terrestre es una herramienta de inclusión social que posibilita un mayor ejercicio de los derechos humanos, en especial el de la comunicación.

La actual digitalización de los canales de televisión abierta es una oportunidad para garantizar la democratización de la comunicación, la libertad de expresión, el acceso universal a la información, por medio de la diversidad y el pluralismo de las nuevas voces, conforme lo establece la LSCA.

7. ÚLTIMAS MEDIDAS PARA ORDENAR EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO: MÁS FRECUENCIAS PARA EL PÚBLICO AUDIOVISUAL

El artículo 3 inciso l) establece entre los objetivos de la Ley 26.522 lograr **“la administración del espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”**.

Recordemos, tal como se mencionó, que el artículo 7 de la LSCA establece que: **“La administración del espectro radioeléctrico, atento su carácter de bien público se efectuará en las condiciones fijadas por la presente ley y las normas y recomendaciones internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos pertinentes. Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, la administración, asignación, control y cuanto concierna a la gestión de los segmentos del espectro radioeléctrico destinados al servicio de radiodifusión. Los servicios de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal”**.

Por su parte, el artículo 93 de la LSCA facultó al Poder Ejecutivo Nacional para aprobar el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales y fijar la fecha de finalización del proceso de transición tecnológica para cada servicio.

En función de lo antes expuesto, mediante la Resolución N° 1.047 de fecha 16 de septiembre de 2014, modificada por la Resolución N° 1.329 de fecha 19 de noviembre de 2014, ambas del AFSCA, se aprobó la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televisión Digital Terrestre Abierta que, como Anexo I, forma parte integrante de dicho acto resolutivo.

El Artículo 6° del Anexo de mención establece que **“Para el servicio de televisión digital terrestre abierta se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 MHz, esto es, entre los canales 14 y 36”** y que **“El segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 512 MHz, canales 14 al 20, se utilizará cuando el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina lo permita y se verifique compatibilidad electromagnética con los servicios fijo y móvil”**.

Asimismo el Artículo 5° del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, atribuye para la Región 2 (Américas) la banda de 470 a 512 MHz al servicio de Radiodifusión con categoría primaria y a los servicios Fijo y Móvil con categoría secundaria.

De hecho, el Decreto N° 2.456 de fecha 11 de noviembre de 2014 aprobó el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales y fijó las condiciones de transición a los servicios de televisión digital terrestre abierta a las que deberán ajustarse los prestadores en orden a alcanzar la aplicación definitiva de los patrones tecnológicos necesarios para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido.

En tal sentido, el decreto mencionado instruyó a la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a **“instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas entre 470-512 MHz (canales 14 al 20 de la banda de UHF) exclusivamente al Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta”**.

Específicamente, el artículo 2° del Decreto 2456/14 dispuso que las atribuciones mencionadas **debían efectuarse dentro de los siguientes plazos: 1) canal 20, al momento de entrar en vigencia el presente decreto; 2) los canales 18 y 19, dentro de los noventa (90) días; y 3) del 14 al 17 dentro de dos (2) años**.

En conclusión, en función de lo dispuesto por el mencionado artículo 2 del Decreto N° 2456/14, **específicamente el canal 20 de la banda UHF pasó a formar parte del espectro que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual, en consecuencia la normativa que se aplica es la Ley 26.522 y no la ley 27.078 denominada “Argentina Digital” que regula las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las telecomunicaciones**.

Específicamente el artículo 88 de la ley 26.522 dispone que corresponde a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, confeccionar y modificar, con la participación de la respectiva autoridad Técnica (hoy AFTIC), el Plan Técnico de Frecuencias y la Norma Nacional de Servicio.

Tal es así que el Organismo Competente en la materia (AFSCA), en función de lo dispuesto por el P.E.N. (Decreto N° 2456/14) por Resolución 24-AFSCA/2015, del 26 de febrero de 2015, aprobó el Plan de Frecuencia de Televisión Digital Terrestre Abierta para la zona del AMBA, el cual comprende, entre otros los canales de televisión digital 20.1 y 20.2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Corresponde destacar que de los propios considerandos de la Resolución N° 24-AFSCA/15 surge que la Comisión Nacional de Comunicaciones (hoy AFTIC), ha tomado la intervención que les corresponde.

En función de ello, por Resolución 37-AFSCA/2015, se asignó a la Universidad de Buenos Aires el canal 20 radioeléctrico, 20.2 digital HD de CABA y por Resolución 35/2015 se

asignó a LS TV Canal 9 el canal radioeléctrico 20, digital 20.1 Full HD en CABA.

Paralelamente, en relación con lo dispuesto por el Decreto N° 2456/14, por medio del artículo 1° de la Resolución N° 8/SC/15 se dejaron sin efecto las atribuciones a los Servicios Fijo y Móvil Terrestre comprendidos en la banda de frecuencias de 470 a 512 MHz (relacionados con los canales 14 al 20 de la banda UHF).

Asimismo por medio del artículo 4° de la mencionada resolución se procedió a derogar lo dispuesto sobre todo intervalo que corresponda a la banda de frecuencias de 470 a 512 MHz en la Resolución N° 501 de fecha 27 de junio de 1996 de la ex Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Por su parte, el artículo 7° dispuso: "Sustituyese la distribución de canales para el Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) en la banda de 470 a 512 MHz, que obra en el ANEXO VI de la Resolución N° 479 de fecha 17 de febrero de 1993 de la ex Comisión Nacional de Telecomunicaciones, organismo descentralizado de la ex Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones entonces dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, por la distribución que consta en el ANEXO I de la presente".

Consecuentemente, por el artículo 11 de la Resolución 8/SC/15 se atribuyó la banda de frecuencias de 470 a 512 MHz exclusivamente al Servicio de Radiodifusión con categoría primaria. **Se entiende, entonces, que la banda de frecuencias mencionadas como 470 a 512 MHz o canal 14 al 20, fue destinada a los servicios de comunicación audiovisual y específicamente en el canal 20, desde la entrada en vigencia del decreto 2456/14, es decir el 11 de diciembre pasado, ya no podía operar nadie que no fuera servicio de comunicación audiovisual, con la supervisión y control de cumplimiento de la legislación vigente por parte de la autoridad de aplicación creada por la LSCA, AFSCA. Ya no AFTIC, autoridad de aplicación de la ley 27.078, ya que dejaban de ser frecuencias para las telecomunicaciones, para ser recuperadas para acceso y disfrute de las audiencias televisivas en el marco de la radiodifusión.**

8. LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PREVISTOS EN LA LSCA

Tal como podrá evaluar V.S. evidentemente el presente caso no se trata de un hecho criminal, sino de un conflicto administrativo para el cual la ley 26.522 prevé mecanismos de solución específicos. Porque la comunicación no es un delito, sino un derecho humano.

Específicamente, el artículo 162 de la Ley 26.522 establece: "Hasta tanto finalicen los procedimientos de normalización de espectro, la autoridad de aplicación deberá, como previo a toda declaración de ilegalidad, requerir a la sumariada la totalidad de los trámites que hubieren iniciado requiriendo su legalización, y a la autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones los informes sobre si la emisora causa interferencias y si tiene factibilidad de previsión en el Plan Técnico la localización radioeléctrica en cuestión. En caso de encontrarse la emisora en condiciones de haber solicitado su legalización, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre ella como condición para el dictado del acto administrativo."

En tal sentido, la reglamentación del mencionado artículo dispuesta por el Decreto 1225/10 establece: "Si las emisoras a que refiere el artículo 162 de la Ley N°26.522 causaren interferencias, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA— podrá ordenar el cese de las transmisiones. Si se incumpliera la orden de cese de emisiones y hasta tanto se sustancie el trámite previsto en el citado artículo 162, la Autoridad de Aplicación dispondrá las medidas pertinentes para el cese de dichas emisiones."

Este artículo, a su vez debería interpretarse coordinado con lo dispuesto con los artículos 116 y 117 de la LSCA que disponen que llegado el caso de que la Autoridad deba declarar la ilegalidad, ésta **deberá hacerlo por acto administrativo expreso**, intimando previamente a la emisora. En caso de que la emisora no dé cumplimiento a la intimación será pasible de la incautación y el desmantelamiento de las instalaciones afectadas a la emisión, mediante la ejecución del correspondiente mandamiento librado por el juez competente, del ámbito de los tribunales contencioso administrativo.

En el presente caso, a diferencia de lo que disponía la vieja Ley 22.285 de la dictadura cívico-militar (artículo 28), que ordenaba igualmente la previa declaración de "clandestinidad de la emisora y su posterior decomiso de los equipos", la LSCA previó un mecanismo administrativo de normalización de los canales de televisión que no cuenten con la debida autorización para funcionar (art. 162). Ya no declarando la "clandestinidad", porque la comunicación audiovisual no es un accionar delictivo ni clandestino, sino en todo caso comprobando su "ilegalidad", agotando todas las vías dialógicas y administrativas de regularización.

Asimismo, y en el supuesto caso de no poder técnicamente regularizar la situación del canal, como se señaló, la autoridad de aplicación AFSCA posee facultades para ordenar el cese de las emisiones perjudiciales.

Sin perjuicio de si “Antena Negra TV” tenía autorización para funcionar como un canal de televisión, situación legal que debe ser evaluada por el AFSCA en el marco de sus competencias específicas y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 26.522, el incumplimiento del régimen audiovisual no habilita necesariamente la configuración de un tipo penal. En todo caso, correspondería iniciar un procedimiento administrativo de regularización de la situación de las emisoras, con todas las garantías constitucionales, y evitando incurrir en graves afectaciones a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información del público.

En este sentido, del análisis de los hechos denunciados ante la Defensoría del Público surge claramente que previo al inicio de la presente causa penal se debería haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 162 de la ley 26.522.³ Teniendo en cuenta, además, que el supuesto damnificado de las interferencias es una empresa privada de seguridad, que a la fecha de inicio de la presente causa penal ya no tenía derecho a operar en la frecuencia del canal 20 de televisión digital terrestre, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 2456/2014, reglamentario del artículo 93 de la ley 26.522, ni esa empresa ni ninguna otra.

Recordemos que el propio decreto establece temporalidades diferenciadas, comprendiendo la necesidad de migración de un tipo de uso de frecuencia a otro: de una empresa, al público, a las audiencias comprendidas como nuevos sujetos de derecho. Tal es así que para la frecuencia 20 ordenó que fuera desocupada a la **entrada en vigencia del decreto 2456/14**, para las frecuencias 18 y 19 estableció un plazo de 90 días y para el resto dos años.

9. ESTÁNDARES INTERNACIONALES. LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA COMO LA VÍA MÁS IDÓNEA, EL DEBIDO JUICIO DE RAZONABILIDAD ESTRICTO Y EL DERECHO PENAL COMO ÚLTIMA RATIO

La distribución desigual del acceso y la propiedad de los medios de comunicación audiovisual por parte de los distintos sectores y grupos sociales es una problemática de carácter estructural, que la LSCA pretende transformar a través de una serie de políticas de reconocimiento diferenciado y distribución material de los bienes indispensables para comunicarse.

Es el AFSCA justamente el organismo público encargado de implementar esas políticas, que tienen como elemento clave el reconocimiento de la situación legal de los medios comunitarios sin fines de lucro, que hasta la sanción de la LSCA se consideraban “ilegales” o bajo un régimen administrativo provisorio.

EL ARTÍCULO 93 DE LA LSCA FACULTÓ AL PODER EJECUTIVO NACIONAL PARA APROBAR EL PLAN NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

LA VÍA ADMINISTRATIVA DE NORMALIZACIÓN ANTE AFSCA RESULTA LA MÁS ADECUADA

YA QUE BRINDA
MAYORES
GARANTÍAS
PROCESALES
PARA EL
RESPECTO Y
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS
INVOLUCRADOS

Tal como se explicara en el punto anterior, la LSCA establece un mecanismo de normalización respetuoso de las garantías del debido proceso administrativo y tendiente a que accedan los medios sin fines de lucro a las licencias reservadas específicamente para este sector a través de concursos públicos.

Es en este contexto en el que se debe resolver el caso y teniendo en cuenta como guía insoslayable los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, entre los cuales se destaca como especialmente pertinentes frente a la afectación a la libertad de expresión: **a)** El juicio de razonabilidad calificado para tener por válida una restricción a derechos fundamentales y **b)** El juicio de ponderación estricto para habilitar, de modo excepcional, la aplicación de medidas penales.

En primer lugar, cuando se pretende restringir derechos humanos fundamentales como el derecho a la comunicación, se debe realizar un **juicio de razonabilidad agravado o un escrutinio constitucional estricto**, que indague con extrema rigurosidad la relación entre los medios y los fines buscados en el marco del proceso judicial. Esto es, se debe analizar en profundidad si los medios resultan proporcionales a los fines perseguidos y si existen otros menos lesivos que el derecho penal para lograr el mismo objetivo.

Por lo tanto, se debe analizar si la restricción al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información del público producidas en el marco de este proceso penal resultan estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a aquellas no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación. Al respecto la Corte IDH ha hecho suyo este método al señalar que: "...para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión"⁴.

En el caso que nos ocupa y sin perjuicio de la inexistencia del hecho criminal, desde la perspectiva de esta Defensoría, la restricción tendría que proteger el bien jurídico tutelado por el artículo 197 del Código Penal de la Nación en materia de interrupción o entorpecimiento de las comunicaciones, sin tornar ilusorio el respeto sustancial del derecho a la libertad de expresión del medio de comunicación audiovisual comunitario y de las audiencias en general. Para efectuar esta pon-

deración se debe analizar i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro⁵.

Asimismo, al considerar el grado de afectación de la libertad de expresión la Corte IDH considera “que las consecuencias del proceso penal en sí mismo, la imposición de la sanción, la inscripción en el registro de antecedentes penales, el riesgo latente de posible pérdida de la libertad personal y el efecto estigmatizador de la condena penal”⁶ ya permiten demostrar que las responsabilidades ulteriores son sumamente graves.

En este caso, la apertura del proceso penal, el secuestro de los equipos de emisión televisiva, el llamado a indagatoria de integrantes del servicios de comunicación audiovisual comunitario y el riesgo de la posible condena, resultan de por sí sanciones extremadamente gravosas frente a un posible incumplimiento a un deber administrativo de regularización legal. Por lo cual se podrían considerar medidas desproporcionadas en relación a la protección del bien jurídico establecido en el artículo 197 del Código Penal, sobre todo teniendo presente que existen medios alternativos menos gravosos y que tienden al mismo fin, aunque otorgando mayores garantías para el respeto de la libertad de expresión.

De acuerdo con lo expresado, la razonable conciliación de las exigencias de protección de los derechos involucrados requiere una solución que respete debidamente la libertad de expresión del medio de comunicación comunitario y el derecho colectivo al acceso a la información del público audiovisual de la señal Antena Negra TV, por un lado, así como la comunicación libre de interrupciones o entorpecimientos que protege el artículo 197 del Código Penal, por otro lado. Todo ello, en el marco del principio de mínima intervención penal característico de una sociedad democrática, se traduce en **la preferencia de la vía menos lesiva: esto es, el procedimiento administrativo de regularización ante el AFSCA**⁷.

Por otra parte, el escrutinio estricto que requiere el juicio constitucional de razonabilidad para justificar una restricción al ejercicio de la libertad de expresión, se refuerza en relación a la debida aplicación de los **principios de subsidiariedad y último ratio del derecho penal**, que tienden primordialmente a la posibilidad de que los conflictos tengan carriles de resolución socialmente más razonables –y también menos costosos– que la aplicación del sistema punitivo.

En este mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Kimel vs. Argentina* ha señalado que: “el Derecho Penal es el medio más restrictivo y

severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita”⁸. La tipificación amplia del artículo 197 del Código Penal de la Nación sobre interrupción o entorpecimiento de la comunicación puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal, ya que en los términos de la misma Corte IDH en “... una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro” y “[l]o contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado”⁹.

Si bien la Corte IDH no estima contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones, sí considera que se debe analizar con especial cautela, bajo un juicio de ponderación de la extrema gravedad de la conducta desplegada por el presunto responsable, las características del daño causado y otros que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales¹⁰.

No obstante la Corte IDH reconoce en la región los esfuerzos realizados por la jurisprudencia de los tribunales locales “encaminados a promover, con racionalidad y equilibrio, la protección que merecen los derechos en aparente pugna, sin mellar las garantías que requiere la libre expresión como baluarte del régimen democrático”¹¹.

En síntesis, la aplicación de estos principios implica que se debe recurrir a los medios más idóneos para resolver el conflicto y atender a la protección armoniosa de los bienes jurídicos en juego. En este sentido, **la vía administrativa de normalización ante el AFSCA resulta la más adecuada, ya que brinda mayores garantías procesales para el respeto y protección de los derechos fundamentales involucrados, ante un organismo público competente y especializado en materia de comunicación audiovisual.**

Dado que el conflicto planteado es el uso de una frecuencia de radiodifusión, con destino de emisión de televisión y no de telecomunicación.

10. LA NECESARIA LEGALIZACIÓN DE LAS EMISORAS COMUNITARIAS

Como se detalló, la LSCA contempla tres tipos de prestadores/operadores: de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro (artículo 21). En ese esquema, concibe a las emisoras comunitarias como un sector específico dentro de las organizaciones sin fines de lucro.

El artículo 4 de la Ley 26.522 define a las emisoras comunitarias como “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”.

La definición obedece a la necesidad de diferenciarlas de otros emprendimientos no comerciales como los que podrían tener iglesias, fundaciones privadas, sindicatos con lógicas de participación, gestión y programación distintas de las emisoras comunitarias. En efecto, los medios comunitarios desempeñan funciones que, por su especificidad, no pueden cumplir ni los medios comerciales ni los públicos.

En estas emisoras, ya sean de televisión o radios el proceso de formación comunicacional es participativo y representativo de la comunidad de la que forman parte, donde sus actores articulan distintas políticas sociales en beneficio de toda su comunidad, en la que se inscribe la audiencia haciendo efectiva la doble faz del derecho a la comunicación, individual y colectiva.

Las emisoras comunitarias se identifican con una serie de valores compartidos que pueden sintetizarse en que son de propiedad social, no tienen fines de lucro, cuentan con programaciones abiertas a la comunidad, garantizan la emisión de voces plurales, llevan adelante una gestión participativa y promueven la experimentación sonora y técnica.

Esta Defensoría entiende que en la concepción de la ley 26.522 las emisoras comunitarias son el sujeto primordial del nuevo capital social que se constituye como el aporte de la sociedad civil al nuevo paradigma de la comunicación.

Las emisoras comunitarias, partiendo de la legitimidad de sus prácticas, dieron una batalla histórica por la legalidad cuyo resultado final está “en construcción” desde la sanción de la ley 26.522.

Por su parte el artículo 89 enuncia las reservas en la administración del espectro y en su inciso f) establece que el treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, **en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro.**(entre las que se encuentra las televisoras comunitarias).

La antigua ley de radiodifusión -en su lógica de promoción de la mercancía y represión de la participación social- establecía, en su artículo 45, que sólo podían ser titulares de licencias

personas individuales o sociedades comerciales. Durante muchos años no se permitió que las organizaciones sin fines de lucro (comunitarias, religiosas, sindicales, culturales, cooperativas) pudieran ser titulares de radios o canales de televisión.

La inusual prolongación de la arbitraria prohibición del acceso a la prestación de servicios de radiodifusión, ya recuperada la democracia, llevó a diversas entidades afectadas a plantear sus reclamos en sede judicial, llegándose en algunos casos hasta la máxima instancia en el orden nacional. En esa acción de amparo, logró en septiembre de 2003 que **la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley de facto 22.285, en cuanto excluye a las personas jurídicas no comerciales del acceso a las licencias de radiodifusión.** La Corte sostuvo en su fallo que esa proscripción era arbitraria, al “excluir de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo razonable, a determinadas personas jurídicas de la posibilidad de acceder a una licencia de radiodifusión, por no haberse constituido en una sociedad comercial, pues ello importa en definitiva, una irrazonable limitación al derecho a expresarse libremente y de asociarse o no hacerlo”.

En especial, es de interés destacar que indicó la Corte Suprema que **“no sustenta tampoco tal distinción la circunstancia del carácter escaso de las frecuencias radioeléctricas, pues para compatibilizar esa situación con el derecho a la libre expresión y con la igualdad ante la ley, ésta ha establecido el sistema del concurso público, garantizado por un proceso igualitario para poder acceder a la titularidad de una licencia de radiodifusión, sin que sea necesario tener que excluir ab initio a determinadas personas jurídicas. Además, la finalidad de las sociedades mutuales es la del bien común y el de sus integrantes, por lo que la posibilidad de concursar para obtener la titularidad de una licencia constituye la mejor garantía del interés general”.**

Con esos fundamentos, el máximo tribunal entendió que la imposibilidad de participar en los concursos “resulta violatorio de los artículos 14, 16, 28 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En consecuencia, el Congreso Nacional aprobó en 2005 una modificación del artículo 45° de la ley¹², permitiendo que las licencias se adjudiquen a “personas jurídicas no comerciales o sin fines de lucro”.

A pesar de ello no se realizaron concursos para el sector comunitario durante su vigencia, por lo cual la legalización definitiva del sector comunitario registró muy pocos progresos.

En el ámbito internacional, el Informe Anual 2002, **Relatoría Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana**

de Derechos Humanos, en el capítulo IV, Título B, párrafo 39, sostiene respecto de las emisoras “llamadas comunitarias, educativas, participativas, rurales, insurgentes, interactivas, alternativas y ciudadanas son, en muchos casos, y cuando actúan en el marco de la legalidad, las que ocupan los espacios que dejan los medios masivos; **se erigen como medios que canalizan la expresión donde los integrantes del sector pobre suele tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener en los medios tradicionales**”.

Por otra parte, son de especial interés las recomendaciones y declaraciones conjuntas elaboradas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de opinión y de expresión, junto al Representante de la OSCE sobre Libertad de los medios de comunicación y los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).

En ese orden, la Declaración Conjunta sobre la Diversidad en la Radiodifusión del año 2007 indica que la “radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, **debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad**”.

Por su parte, la Declaración Conjunta del Décimo Aniversario: **Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década -2010**, en el punto 7 sobre “Apoyo a emisoras públicas y comunitarias”, sostiene que las emisoras comunitarias “pueden desempeñar un rol sumamente importante al ofrecer una programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales. De este modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la necesidad de información del público. Sin embargo, (...) enfrentan obstáculos. **Las cuestiones más preocupante son:** [para las emisoras comunitarias] c) La falta de reconocimiento legal específico para el sector de las emisoras comunitarias sobre la base de **criterios adecuados para dicho sector**; d) La decisión de **no reservar frecuencias suficientes** para las emisoras comunitarias ni crear mecanismos adecuados de financiamiento”.

Cabe destacar que los **Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente**, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, CIDH, 2010 contemplan que “la regulación sobre radiodifusión debería formar parte de una **política activa de inclusión social** que tienda a la reducción de las desigualdades existentes en la

**EN LA RACIONALIDAD
POLÍTICA Y JURÍDICA DE LA
LSCA LAS PERSONAS SON
PRODUCTORAS Y RECEPTORAS
DE IDEAS, INFORMACIONES Y
OPINIONES, NO DE MANERA
PASIVA, Y LA COMUNICACIÓN
ES COMPRENDIDA COMO
UN BIEN SOCIAL AL SER
PARTE FUNDAMENTAL DE SU
FORMACIÓN**

población respecto del acceso a los medios de comunicación. Esto exige que los Estados (...) tengan especialmente en consideración a grupos con dificultades para hacer efectivo dicho acceso. En tal sentido, la regulación debería tener como finalidad contribuir a que todos los sectores puedan competir en **igualdad de condiciones, garantizando para ello reglas especiales que permitan el acceso a grupos tradicionalmente marginados del proceso comunicativo**”.

También establecen los estándares que la finalidad de asegurar mayor pluralismo y diversidad en la radiodifusión, parte necesariamente de una política antidiscriminatoria, que implica que “los Estados deben adoptar **medidas positivas (legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza)** para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

En nuestro país, a partir de 2009, con el dictado de la ley 26.522, se ha ido avanzando progresivamente, por sectores y zonas, en la regularización del espectro contemplando al sector comunitario.

Pero, se sabe, los derechos no pueden ser meramente enunciativos, sino que deben vivenciarse en prácticas concretas. Sobre todo los derechos colectivos, como lo es el derecho humano a la comunicación.

11. LA AFECTACIÓN AL NUEVO PARADIGMA COMUNICACIONAL EN LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nos encontramos, como se mencionó, ante un nuevo paradigma de la comunicación audiovisual, en el que la información le pertenece al público. La información, primero, fue del Poder; luego, de la empresa informativa; más tarde, de los periodistas; y ahora, en el nuevo siglo XXI, del mismo público comprendido como sujeto universal.

En ese orden, queremos remitirnos a algunas consideraciones que entendemos plenamente aplicables al caso de autos y que formulamos en la presentación que esta Defensoría del Público efectuó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ser invitada como amiga del Tribunal a exponer en la Audiencia Pública de Amicus Curiae realizada en los autos: "Grupo Clarín S.A. y otros C/ Poder Ejecutivo Nacional y otros/ Acción meramente Declarativa- G 439. XLIX".

En la racionalidad política y jurídica de la LSCA las personas son productoras y receptoras de ideas, informaciones y opiniones, no de manera pasiva, y la comunicación es comprendida como un bien social al ser parte fundamental de su formación. Según ha explicado la jurisprudencia interamericana, la libertad de expresión es un derecho con dos dimensiones: una individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, que refiere al derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada¹³.

Hoy resulta impensable el ejercicio de buena parte de los derechos sin la mediación de los medios masivos de comunicación. Esto exige el reconocimiento de las necesidades informacionales y comunicacionales como derechos que dan sentido y concreción a la ciudadanía.

Las necesidades de saber, aprender, conocer, expresarse, escuchar, dar y recibir información, comunicarse, entre otras, conforman un conglomerado indivisible de condiciones que nos constituyen como seres humanos y hacen a nuestra vida misma. Los servicios de comunicación audiovisual son el vehículo por el que se concreta el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión conforme lo establece el art. 2 de la LSCA.

El derecho humano a la comunicación, que es la expres-

sión universalista de la libertad de expresión se encuentra consagrado en diversos tratados internacionales, destacándose el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Los servicios de comunicación audiovisual son parte integrante e inescindible del derecho humano a la comunicación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver en los autos "Grupo Clarín S.A y Otros C/ PEN y otro S Acción Meramente Declarativa- 29-10-2013", afirmó: "23) Que para lograr este objetivo resulta necesario garantizar el acceso igualitario de todos los grupos y personas a los medios masivos de comunicación o, más exactamente, como lo ha manifestado el tribunal interamericano en la ya citada OC 5/85, 'que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios', lo que exige 'ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad' (párrafo 34). En el mismo sentido, Carlos S. Nino ha expresado que para que los consensos surjan es necesario el debate de voces múltiples, que puedan expresarse e interactuar en situaciones igualitarias, con idéntica capacidad de introducir temas en la agenda (La constitución de la democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa, 1997). Es en este campo de la democracia que no pueden admitirse voces predominantes que oscurezcan el debate público. Vivimos en sociedades pluralistas, diversas, con multiplicidad de opiniones que deben encontrar el lugar mediático donde expresarse."

En síntesis: la concepción universalista del derecho a la comunicación es la luz que queremos aportar a V.S., como guía para alumbrar la resolución del caso de autos.

12. CONSIDERACIÓN FINAL

Esta Defensoría del Público propicia la no judicialización de la comunicación y, consecuentemente, la creación de espacios de diálogo que favorezcan la solución de los conflictos, en el ejercicio del derecho a la comunicación, a través de mecanismos legales.

En el caso concreto de Antena Negra TV, desalentamos el uso de la justicia penal y recomendamos la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA, ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones. Por ello, consideramos

indispensable que se promueva la resolución en el ámbito de la AFSCA, en los términos del artículo 162 de la LSCA.

Resulta necesaria la inmediata descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo. La comunicación comunitaria es la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación. Derecho humano que debe ser salvaguardado por el Estado, generando las condiciones de universalidad y acceso a ese derecho, con reglas claras e igualitarias. Evitando toda medida persecutoria de aquello que debe promover y proteger para mejorar la vida en democracia.

En defensa de la comunicación como derecho humano, de la profundización de la democracia a través de la exteriorización de ese derecho a través de los servicios de comunicación audiovisual, y de la construcción de una nueva ciudadanía comunicacional, plural, diversa e inclusiva, solicitamos se desestime la denuncia penal y se proceda a la devolución de los equipos afectados.

Sin más, saluda a Usted muy atentamente.

1. Por Resolución 3-AFSCA/2009, se inició el proceso de ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia, previo a la elaboración de la Norma Nacional de Servicio (156 de la LSCA) y de los Planes Técnico de Frecuencias y Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales. Se convocó a un relevamiento a las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o **sin fines de lucro** que se encontraban operando servicios de televisión abierta de baja potencia sin autorización. Posteriormente, la Resolución N° 686-AFSCA/11, modificada por la N° 812-AFSCA/11, convocó a concurso público a personas físicas o personas de existencia ideal con y sin fines de lucro, para prestar televisión abierta digital en la norma ISDB-T. Por Resoluciones 929/2012 y 930/2012, AFSCA dejó sin efecto el concurso público convocado para la adjudicación de licencias para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital. Esta decisión tuvo por objeto permitir e instrumentar el ingreso de nuevos prestadores al sistema, implementando un procedimiento de concurso público donde prime una visión federal inclusiva. Por otra parte, se derogó la Resolución N° 685-AFSCA/ 11, (su circular aclaratoria aprobada por Resolu-

ción N° 1636-AFSCA/11 y su rectificatoria aprobada por Resolución N° 1657-AFSCA/11), que aprobó los pliegos de los concursos públicos para la adjudicación de licencias. La mencionada Resolución N° 929-AFSCA/2012 destacó que era necesario escalar el ingreso de los nuevos prestadores, priorizando al sector sin fines de lucro, en tanto ha sido relegado normativamente con anterioridad a la sanción de las Leyes 26.053 y 26.522, por cuanto se encontraba vedado su ingreso como prestador del servicio de que se trata. Finalmente, la Resolución 929-AFSCA/2012 dispuso que el AFSCA elaboraría nuevos pliegos para la adjudicación de licencias a personas de existencia ideal sin fin de lucro, para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital.

2. Más información en: <http://afsca.gob.ar/concursos-tdta/>

3. El procedimiento establecido en el artículo 162 ha demostrado ser el adecuado para la resolución de conflictos como el de autos. A modo de ejemplo, corresponde citar un caso concreto de la Autoridad Federal de servicios de Comunicación Audiovisual donde por medio de la Resolución 1907-AFSCA/12, previo a la declaración de ilegalidad de una emisora, se constató el cumplimiento del procedimiento dispuesto en el artículo 162 de la ley 26.522, en cuanto a la presentación de trámites tendientes a obtener la regularización de la estación. Cumplido dicho paso se procedió, por vía administrativa, a intimar al cese inmediato y definitivo de las emisiones.

4. Cfr. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas*, supra nota 44, párr. 46; *Caso Herrera Ulloa*, supra nota 12, párrs. 121 y 123; *Caso Palamara Iribarne*, supra nota 12, párr. 85, y *Caso Claude Reyes y otros*, supra nota 44, párr. 91.

5. Conforme Caso Kimel vs. Argentina, sentencia del 2 de Mayo de 2008, considerando 84.

6. Ídem. Caso Kimel, considerando 85.

7. Ídem. Conforme Caso Kimel, considerando 77.

8. Ídem. Caso Kimel, considerando 76.

9. Ídem., Caso Kimel, considerando 75.

10. Ídem., Caso Kimel, considerando 78.

11. Ídem, Caso Kimel, considerando 78.

12. <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17694/texact.htm>

13. CortelDH, Casos Kimel Vs. Argentina, Claude Reyes y otros, López Álvarez Vs. Honduras. Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, IvcherBronstein Vs. Perú, La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile; Opinión Consultiva OC-5/85, entre otros.



**Guía para
el tratamiento
periodístico
responsable
de noticias
policiales**

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO RESPONSABLE DE NOTICIAS POLICIALES

INTRODUCCIÓN

La presente guía surge como propuesta y aporte a un conjunto de necesidades vinculadas a las coberturas informativas en materia de “policiales” que, desde diferentes espacios sociales, han atravesado los tres años de existencia de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

1/ Ese conjunto de necesidades se ha expresado de diferentes maneras. En primer lugar, la relevancia de las noticias “policiales” en los servicios de comunicación audiovisual en general, su peso específico en los noticieros de la televisión de aire y, finalmente, la desproporción de ese tipo de noticias en comparación con otras temáticas y problemáticas sociales en las señales de noticias de la TV de cable. De hecho, tal como mostraron los dos monitoreos anuales de noticieros de TV abierta en CABA realizados por esta Defensoría en 2013 y en 2014, prácticamente un tercio del tiempo informativo de TV de aire y un cuarto de las noticias presentadas tratan sobre hechos policiales o son presentadas, en una de sus dimensiones, como parte del campo delictual. Ejemplo de ello es que dos de cada tres noticias relacionadas con niñas, niños y adolescentes expuestas en esos noticieros están vinculadas a “lo policial”. De igual modo, entre las 12 y las 20 horas, es decir, en segmentos horarios comprendidos dentro de lo que la normativa define como “Apto para Todo Público”, la mayoría de las señales de noticias dedican más del 50% del tiempo a coberturas de casos policiales. Por momentos, la provisión de información ter-

mina siendo monotemática. Y el monotema es, casi por excelencia, referido a policiales.

2/ En segundo lugar, esas necesidades surgen de las presentaciones que las audiencias han hecho ante la Defensoría del Público. Es significativa la gran cantidad de denuncias, reclamos y consultas recibidas por este organismo que refieren específicamente a incomodidades de las audiencias ante las coberturas mediáticas de hechos policiales. Sea por el horario en el que son expuestas, por el morbo con que son presentadas, por la truculencia de los relatos e imágenes o por el carácter invasivo de muchas crónicas y representaciones que las acompañan, las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual han planteado, de manera reiterada, un legítimo rechazo ante esas características que parecieran atravesar hoy el formato audiovisual policial. De hecho, una buena parte de esos reclamos ha contado con el acuerdo analítico y jurídico de esta Defensoría, organismo que ha identificado en ellas -y en sus recurrencias- un conjunto de vulneraciones de derechos, tanto de los invocados en las coberturas como los de las propias audiencias de los medios. Pero, además, en casi todas las reuniones que esta Defensoría realizó con los actores del campo comunicacional como parte de las actuaciones motivadas por las denuncias ocurrió un hecho auspiciante: quienes habían producido las coberturas cuestionadas coincidían con el cuestionamiento. Es decir, también se mostraban incómodos ante las crónicas y las representaciones que ellos mismos habían elaborado. Y eso es auspiciante porque supone que quienes trabajan en los medios también empiezan a pensarse como audiencia de sus propias produc-

ciones. Lo cual significa que, progresivamente, emerge un criterio de responsabilidad que resulta alentador.

- 3/ Ahora bien, uno de los elementos más cuestionados por las audiencias y por los mismos trabajadores de los medios radica en la constante espectacularización de la información vinculada a los casos policiales. Dicha espectacularización, tendiente a una exposición cada vez más invasiva y, en algunos casos, sexualizante de sus protagonistas, devino en un tipo de mostración del policial que, antes que constituir un espacio de producción de información socialmente relevante, se ha convertido en un recurso que desatiende, voluntaria o involuntariamente, los derechos de las personas. La primacía de la forma o del estilo por encima de la relevancia o de la reflexión crítica ha desplazado la importancia social de la información de los hechos y de su comunicación a un segundo o tercer plano. La prevalencia de una estética y un tono particularmente impactante ha degradado la producción audiovisual del género policial. Ese tono, esa estética, anclada en la imagen y potenciada por el relato solamente sustentado en la ocurrencia o en la opinión del presentador, en detrimento de la necesaria provisión de información, se va devorando al género periodístico policial.
- 4/ Como derivación de ello, la selectividad temática acerca de qué ingresa y qué queda afuera del mundo del "policial" ha producido un recorte muy particular, que favorece la hipervisibilización de determinados tipos de delitos y la invisibilización de otros. La difusión reiterada, sobre todo de delitos contra la propiedad y contra el derecho a la vida y la integridad física, ha naturalizado un concepto que, de tan repetido se ha vuelto autosuficiente: "inseguridad". No obstante ello, el término, a pesar de su evidente limitación, se transformó en un frecuente recurso mediático que, lejos de colaborar con la producción rigurosa de información socialmente necesaria, se ha convertido en un aparente marco desde el cual se explica cada hecho violento de la totalidad social. Es decir, la simplificación mediática de las problemáticas, y su presunta síntesis explicativa bajo el término "inseguridad", no contribuye a la transformación de esas problemáticas, sino más bien, a un abordaje limitado y estereotipador. Y, en consecuencia, a una canalización de preconceitos sociales negativos, es decir, a una vehiculización de estigmatizaciones arraigadas en el imaginario colectivo.
- 5/ De hecho, determinada hipervisibilización de casos (probados o no) y la simplificación de las problemáticas reposan en -y, además, reproducen- un conjunto de prejuicios sociales que atraviesan la historia cultural del país:

la criminalización de la pobreza, la demonización de los jóvenes, la sobrerrepresentación de los delitos contra la propiedad y los homicidios, la mirada sospechosa sobre los sectores populares, los lugares donde habitan y sus condiciones de vida. La reiteración mediática del tipo de casos seleccionados, su descontextualización y, sobre todo, su rimbombante adjetivación han colaborado en la construcción social de la sospecha como forma de relación con el otro. Así, la producción discursiva de una cultura del miedo, de la amenaza, del temor al desconocido ha configurado una mirada sumamente sesgada acerca de la problemática de la "inseguridad". Por ejemplo, no resulta casual ni irrelevante que dos de cada tres noticias que los noticieros de la televisión exhiben en relación con niñas, niños y adolescentes estén vinculadas al campo policial. Es decir, más del 66% de las noticias que aluden a los jóvenes refieren a situaciones negativas para el espacio social. Y se trata de representaciones que, finalmente, construyen una idea de que la juventud es indeseable, negativa, peligrosa, victimizada. Ser joven pasa a ser un problema, tanto para los mismos jóvenes como para "la sociedad". Este tipo de vinculaciones negativizantes ocurre sobre diferentes grupos sociales, lo cual vuelve recurrente una perspectiva que los demoniza. Es decir, la sobre-repetición mediática de estas representaciones vaciadas de problematización deviene en la instalación social de nominaciones autosuficientes. Estos grupos son presentados desde una mirada que los cosifica, los silencia, los condena a la peligrosidad. De ese modo, emerge una trama simbólica del miedo y la sospecha, que empuja a esos sectores a una marginalidad cada vez más aceptada, es decir, socialmente incuestionada y, en este sentido, más discriminatoria y violenta.

- 6/ Esa cultura del miedo y la sospecha, y su vínculo con las formas históricas de discriminación en Argentina, han retroalimentado la mencionada demonización de ciertos grupos sociales, construidos como "grupos peligrosos". Y su peligrosidad ha radicado, centralmente, en un conjunto de prejuicios que se repiten de manera constante, desde una mirada clasista acerca de la realidad y la sociedad. Dicho clasismo ha apuntado -y apunta- permanentemente hacia los sectores jóvenes, y dentro de estos jóvenes, a los provenientes de los sectores populares. Así, un conjunto de temáticas relacionadas al campo policial suelen ser vinculadas a escenarios particulares, a geografías o mapas específicos, a grupos etarios señalados como responsables de los delitos y, por ende, como atemorizantes. De esta manera, la mirada dominante atraviesa la

construcción de la información policial, descuidando la necesidad de una lectura crítica acerca de las formas de exclusión y marginación social. Si, por un lado, se actualizan los prejuicios contra esos jóvenes, por el otro, y como consecuencia de ello, se refuerzan las tendencias hacia la marginalización –representada como irresoluble– de cierta población juvenil. La estigmatización produce marginalidad. Y la marginalidad refuerza la estigmatización. Por ende, la mirada mediática acusatoria, atravesada por esos prejuicios, deviene en un refuerzo cada vez más marcado de discriminación sobre los sectores sociales vulnerados. En definitiva, a la matriz histórica, material, cultural y económica de desigualdad y discriminación se le suma, sin más, la matriz mediática y simbólica de exclusión social.

7/ En ese marco, y como profundización de esa racionalidad de la desigualdad, cierto punitivismo demagógico y moralizante ha terminado por atravesar buena parte de las crónicas policiales. La sobreadjetivación periodística de la indignación del columnista y el reclamo por el incremento de penas del presunto especialista o la demanda del cronista por una baja en la edad de imputabilidad se han vuelto recursos que contribuyen más a la descontextualización de las problemáticas que visibilizan los casos policiales antes que al abordaje responsable de las mismas. Así se configura una retórica del miedo que tiende a una dramatización cada vez mayor de hechos, los cuales son espectacularizados y relatados en función de una amenaza de la que la audiencia es su potencial e inminente víctima. A diferencia del objetivo deseado de un periodismo comprometido con su propia realidad, la simplificación de muchos casos policiales mediatizados se convirtió en una característica discursiva que, en las crónicas, desatiende los criterios básicos de la producción periodística (chequeo y contraste de diversas fuentes, búsqueda de datos y testimonios relevantes, indagación sobre la causa judicial en cuestión, establecimiento de la sucesión y marco de los hechos, entre otros). Así, dentro del género policial, la prevalencia de la primicia como información de alto impacto devenida en mercancía muestra su enorme distancia respecto de los postulados de la normativa vigente, a la vez que opaca los esfuerzos e inquietudes de muchos periodistas que trabajan en los servicios de comunicación audiovisual procurando contemplar el paradigma de derechos humanos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece como marco.

8/ Allí se puede reconocer la tensión entre dos paradigmas comunicacionales que hoy atraviesan a los medios. Se-

gún se ha podido reconocer como corolario de las diferentes reuniones organizadas por esta Defensoría con trabajadores de la comunicación, cierta presión de mercado opera contra la necesidad social de coberturas responsables y contra la necesaria cautela reflexiva acerca de qué es lo que se le propone a la audiencia cuando se emite una noticia policial. Las condiciones del ejercicio del periodismo en el marco de la concepción empresarial de la información, expresada a través de diferentes mecanismos que organizan hoy las rutinas productivas de la industria cultural –como las que impone la medición del “minuto a minuto”–, se constituyen en la piedra angular de la degradación de la tarea periodística. Así, la imprecisión analítica de muchas coberturas, el uso inadecuado de categorías del campo judicial y del sistema penal, el desconocimiento de la presunción de inocencia y la displancia en lo que hace a las determinaciones que supone el Estado de Derecho y su reivindicación de los derechos humanos, conducen a afirmaciones sin sustento, acusaciones sin fundamentos y sentencias mediáticas, cuyo costo social, simbólico y cultural es inconmensurable. El campo periodístico, sus propios actores y las audiencias requieren de una reflexión crítica, constante y responsable de la relación entre hechos policiales, coberturas mediáticas y público. Y esto es tan cierto que esta Guía también nace de las reflexiones críticas que han planteado quienes trabajan en la comunicación en materia de cobertura de policiales y que llevaron a que se debatiera durante varias mesas de trabajo, jornadas, reuniones y encuentros realizados en la Defensoría del Público y en distintas redacciones periodísticas a lo largo del país acerca de las condiciones de producción de las noticias en general, y de las policiales en particular, y sobre las determinaciones que esas rutinas productivas parecieran imponer hoy sobre la tarea profesional periodística. Consecuentemente, esos mismos trabajadores formularon sus inquietudes para repensar su propia práctica, a la luz de la responsabilidad social de los medios y de un trabajo que les resulte más satisfactorio. Y son quienes trabajan en los medios quienes se han expresado en contra de la presión del “minuto a minuto”.

9/ En ese contexto, un elemento que fue resaltado por quienes trabajan en los medios –y que coincidió con los registros de esta Defensoría– fue la llamativa y alarmante pérdida del lugar y relevancia de las fuentes en las coberturas noticiosas de casos policiales. La creciente ausencia de explicitación de las mismas, de hecho, convocó a la reflexión de los trabajadores de la comunicación acerca

de qué perspectiva noticiosa se está proponiendo cotidianamente cuando se presentan cada vez más noticias policiales sin invocar fuentes, sin contrastar los datos oficiales, sin buscar otros testimonios y saberes más allá de la versión policial y/o de las conjeturas que los periodistas esbozan a partir de la misma. Cierta carácter monocromático -que es el producto de tomar una sola versión como la única posible, la única comunicable- ha permeado la forma actual de mediatizar los casos policiales. Este carácter monocromático le ha ido quitando espesor y rigor periodístico a uno de los géneros informativos más significativos de la relación histórica entre cultura popular y medios de comunicación. Esa pérdida -condición de producción de la ya mencionada espectacularización irreflexiva- ha autonomizado al género policial, eludiendo, en su mediatización, el marco social y cultural en el que se producen los casos. De hecho, esa pérdida de espesor tiende a ocultar o simplificar la problemática social de la violencia que evidencian los hechos policiales. El uso recurrente del término "inseguridad", y la lógica de "bandos" opuestos en la que se sustenta su abordaje mediático, ha desplazado y reemplazado al análisis crítico de esa violencia social. Y en dicho reemplazo, la que pierde es la sociedad, dado que se ve impedida de pensar sus propias limitaciones y problemáticas. Es por eso que las audiencias requieren, como parte de su construcción como audiencias ciudadanizadas, de una mirada reflexiva sobre el género policial en los medios audiovisuales.

- 10/ Finalmente, todos estos elementos y necesidades interpelan a los profesionales de los medios audiovisuales a asumir una concepción de la información y la comunicación en tanto derecho humano. Es decir, la construcción social plural, democrática y respetuosa de la diversidad social requiere de la producción de recursos comunicacionales acordes con esa concepción democrática de la sociedad y la comunicación. Y ello exige la elaboración de herramientas que favorezcan la posibilidad de que eso se concrete. Por ello, esta Guía, realizada a través del diálogo con quienes trabajan en los medios, con quienes presentan sus reclamos y consultas en la Defensoría del Público y con quienes se dedican a analizar la comunicación masiva contemporánea para pensarla, repensarla y debatirla, pretende ser un instrumento útil para que el campo periodístico pueda ejercer y desarrollar sus prácticas desde la certeza de contar con herramientas necesarias para dicha tarea. Herramientas que contribuyan a promover una comunicación periodística distinta a la que imponen las determinaciones "empresariales"

y sus técnicas e instrumentos de medición y presión laboral. Herramientas ancladas en el derecho humano a la comunicación.

La organización del texto que sigue recorta, con fines analíticos, diez nudos críticos de la tarea periodística en materia de cobertura de casos policiales. Para su exposición se han tomado materiales que fueron objeto de reclamos ante esta Defensoría o que fueron seleccionados de los monitoreos de noticieros que se realizan periódicamente, así como de fragmentos de las reuniones realizadas con trabajadores de la comunicación durante estos tres años. La totalidad de los casos que se mencionan -una selección pequeña del universo de reclamos recibidos por el organismo- fueron debatidos con los trabajadores de los medios de comunicación -desde los periodistas hasta las productoras-, de modo de reflexionar de manera conjunta acerca de lo que las audiencias habían reclamado y la perspectiva que esta Defensoría tiene sobre cada uno de ellos. En casi todos los casos, dichos debates concluyeron en actividades de capacitación, lectura de materiales específicos y debates sobre legalidades, legítimas y potenciales abordajes alternativos. Abordajes que posibilitaran realizar la actividad profesional en materia policial sin que ésta vulnerara derechos.

Dado que, entonces, esta Guía es, como el resto de las producciones hechas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, una propuesta dialogada, está abierta al debate, al disenso, a la crítica y a la superación. Es en la certeza de que es posible hacer un policial audiovisual informativo a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la presente Guía se pone a consideración de quienes trabajan en los medios y, por cierto, de las audiencias de esos mismos servicios de comunicación.

PRIMERA PARTE

10 RECOMENDACIONES PARA UN TRATAMIENTO PERIODÍSTICO RESPONSABLE DE LAS NOTICIAS POLICIALES

1. PRIVILEGIAR EL RESPETO DE LA PERSONA HUMANA Y DE SUS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

La práctica periodística supone el ejercicio del derecho a buscar, producir, difundir y recibir información que no lesione los derechos humanos vigentes en una sociedad democrática. Sin embargo, en las coberturas mediáticas de casos policiales, es posible identificar una serie de tendencias que ponen en riesgo el equilibrio entre la necesaria difusión de información y los derechos de las personas involucradas.

A) INCUMPLIMIENTOS EN EL RESPETO DE LA "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA".

Es frecuente que en el fragor de la producción de la noticia policial se recurra a modos de presentación o referencia a personas sospechadas o acusadas como si en realidad fueran culpables, lesionando el principio de presunción de inocencia. Esta situación sucede cuando discursivamente se da por probado un hecho que el Poder Judicial aún no ha constatado, produciendo un daño sumamente grave sobre quien resulta mediáticamente acusado. Por otro lado, es necesario distinguir entre la presunción de ocurrencia de un determinado hecho y sus responsabilidades, y la efectiva demostración de éstos. Es posible que se registren situaciones en las que se presupone la existencia de un caso policial que, a medida que se avanza en la investigación, no se demuestra ni comprueba de ninguna manera. Por ende, es importante evitar asignar culpabilidades o responsabilidades cuando aún no se ha probado que se trata de un caso que requiera ese tipo de elaboraciones. Ejemplo de este tipo de inconveniencias es el que ocurrió con el conocido "caso Pomar": hasta que se confirmó que la familia había muerto a causa de un accidente automovilístico, durante veinte días, gran parte de los medios enunciaron de manera incriminatoria que esa familia se había escapado del país, que huían por deudas contraídas, que se trataba de un drama intrafamiliar, que se trataba de un secuestro o de un asalto, entre otras afirmaciones. Esta forma de construcción mediática, además de policializar el hecho sin mayores elementos que así lo ameritaran, habilitó

un conjunto de afirmaciones acusatorias que, voluntaria o involuntariamente, incriminaba a personas en hechos que aún no estaban demostrados.

Dentro del universo de reclamos con los que esta Defensoría ha trabajado, y en relación específica con este punto, aquí se puede recordar, también, el modo en que, en las crónicas televisivas, se acusó a la pareja de la madre de Ángeles Rawson de haber asesinado a la joven. En las coberturas realizadas durante varios días, se plantearon irrespetuosas e irresponsables sospechas sobre este hombre, asociando especulativamente su profesión como instructor de pesca con el presunto dato morboso sobre que la joven habría sido maniatada con hilo tanza, e incluso se conjeturó un vínculo reñido entre este hombre y el padre biológico de la joven. Esta conjetura se potenció, además, resaltando la presunta calma de la madre de la joven, actitud que fue referida como parte del encubrimiento del crimen.

Esta construcción, y los relatos que le siguieron hasta que la causa judicial avanzó en otra dirección, dañaron la imagen y dignidad de esta persona. El hecho de que luego se descartara la presunta culpabilidad mediática de la pareja de la madre no resulta suficiente para dimensionar el daño provocado sobre quien resultó, durante varios días, señalado por los medios de comunicación como el culpable.

Las expresiones que suelen aparecer en las coberturas de este tipo, y que forman parte de varias Actuaciones realizadas por esta Defensoría, "Presunto violador" -7/1/2015-, Actuación N° 6/2015-, "Supuesto asesino" -10/10/2013-, "Presunto delincuente" -3/6/2013-, "Sería el asesino", evidencian que, muchas veces, la presunción mediática está aplicada a la culpabilidad y no a la inocencia como lo establece la ley. En todo caso, resulta pertinente referir a "principal acusado" o "imputado".

Cabe recordar que la presunción de inocencia está establecida por el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La presunción de inocencia puede verse lesionada también a través de la difusión de imágenes, videos, fotografías y demás datos identificatorios de la vida privada de las personas sospechadas, detenidas y/o imputadas. La excesiva difusión de la imagen de una persona sospechada la coloca en una situación de exposición social negativa al asociarla con un hecho delictivo, cuando su efectiva responsabilidad no fue aún demostrada jurídicamente. Asimismo, también es importante

10

DECÁLOGO PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE NOTICIAS POLICIALES

- 1 Privilegiar el respeto de la persona humana y de sus garantías constitucionales
- 2 Privilegiar un tratamiento contextualizado y respetuoso que evite la criminalización de niñas, niños y adolescentes
- 3 Privilegiar un tratamiento respetuoso, serio y contextualizado que evite sexualización o generización de las víctimas o victimarias/os
- 4 Privilegiar un tratamiento respetuoso de la identidad, la intimidad y la privacidad de las personas implicadas
- 5 Prescindir del uso y de la promoción de estereotipos y generalizaciones sobre los hechos, quienes estén implicados y sus allegados
- 6 Utilizar una perspectiva no inculpativa en la construcción de la crónica policial
- 7 Difundir la información constatada en fuentes fehacientes, en lugar de privilegiar la primicia como único criterio noticioso
- 8 Procurar que el relato audiovisual respete y no interfiera en la investigación policial-judicial en curso
- 9 Contextualizar los casos para no incurrir en la difusión de serializaciones forzadas y representaciones "fatalistas" y territoriales que propicien sentidos atemorizantes en las audiencias
- 10 Evitar la utilización de recursos y operaciones de edición de los materiales audiovisuales que tiendan a la espectacularización y ficcionalización de los casos y de las personas involucradas

que los relatos periodísticos sobre los avances de la investigación judicial del caso consideren el principio "in dubio pro imputado" (comúnmente llamado "beneficio de la duda"). Este principio, que deriva del de presunción de inocencia y que rige la construcción de la sentencia y la valoración de la prueba en general, sostiene que, en caso de duda, es decir, de no tener los elementos probatorios suficientes que demuestren la culpabilidad, el juez debe dictar sentencia absolutoria, predominando la inocencia de la persona. "En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado" (Artículo 11 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación). Por ende, resulta importante que quienes trabajan en los medios de comunicación eviten en su construcción discursiva "sentenciar" a una persona cuando aún no hay fallo judicial.

El desconocimiento mediático de la presunción de inocencia puede acarrear un daño de muy difícil reparación para quien se ha visto ilegítimamente involucrado en un hecho policial, ya que la estigmatización y la condena social que instalan este tipo de construcciones periodísticas quedan resonando en el imaginario social. El rótulo de culpable continúa operando sobre la percepción de la persona involucrada en el relato periodístico, incluso más allá de que la resolución judicial del caso lo descarte, dado que la sentencia absolutoria, en general, no es difundida o no se le concede la misma extensión mediática que a la formulación de la posible culpabilidad de la persona acusada.

Es importante que en los medios de comunicación se visibilice el funcionamiento de los procesos policiales y judiciales para contribuir, también, a comprender la relevancia social del principio de presunción de inocencia y su importancia como derecho que garantiza el desarrollo imparcial del proceso judicial y de las sanciones del Estado.

B) ABORDAJES POCO RESPETUOSOS, AVASALLANTES O CRIMINALIZANTES DE LAS PERSONAS IMPLICADAS Y/O ALLEGADAS. EL PERIODISTA NO ESTÁ PARA GENERAR PRUEBAS, NO PUEDE PEDIR DECLARACIÓN AL ACUSADO Y NO DEBE CONFUNDIR SU ROL EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, Y MUCHO MENOS SI ESTÁ HABLANDO CON UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

Muchas veces la producción de información implica la decisión de realizar entrevistas a las personas directamente afectadas o allegadas. Es importante advertir el riesgo de realizar preguntas que pueden tender a reforzar representaciones preconcebidas y prejuicios, en lugar de posibilitar la ampliación de información relevante, incluso a partir de los testimonios efectivamente obtenidos, como ocurrió en el siguiente ejemplo, en el que un comunicador entrevista a los

compañeros de colegio de una joven asesinada, sin esperar la respuesta de los adolescentes: “Ustedes recorren esa zona, que es una zona de cierto riesgo porque está como muy solitaria. Deben tener alguna prevención (...) ¿Ustedes reciben algún tipo de acoso de los trabajadores ahí de la CEAMSE? (...) ¿Salía con alguien en especial? ¿Era una chica de éxito (...) muy reclamada por los varones? (...) Ustedes todavía no se dieron cuenta de lo que está pasando: Ángeles está muerta (...) Digerir esto va a ser muy difícil” (sic). (11/6/2013, Actuación N°185/2013). En estas preguntas, se identifica la tendencia a fijar ante la audiencia la representación criminalizante de los trabajadores del CEAMSE, por un lado, y una averiguación sexualizante de la víctima.

En segundo lugar, el tipo de preguntas que realiza un periodista a un joven de 15 años que, presuntamente, se encuentra en conflicto con la ley: “A los 8 años vos sos muy chico para haber entrado por algún delito. Vos entraste a un reformatorio, ¿por qué? ¿Por abandono? ¿Por situación de calle? (...) si a los 8 años empezaste a robar y seguís robando... vos salías del instituto a robar (...) ¿Tenías un régimen abierto? (...) ¿Usaste el arma alguna vez, disparaste? (...) ¿Tenías entrenamiento para disparar? (...) No te pido que te auto-incrimines tampoco, pero, ¿alguna vez tiraste un tiro? (...) ¿Drogas? (...) Y la plata la obtenías, obviamente, del modo que Leo... [En referencia a otro entrevistado] obtenía la suya”. A esto el joven responde: “A veces no. A veces me la ganaba haciendo changas”. Y el conductor prosigue: “Haciendo changas, ¿vos tenés mamá y papá?”. El joven le responde: “Mi mamá está presa y papá está muerto”. El periodista continúa: “Tu mamá presa y tu papá también (...) ¿Mamá dónde está presa? (...) ¿y papá?”. El joven repite: “Papá está muerto” y el conductor reitera: “¿Papá?”, a lo que el adolescente vuelve a señalar: “Está muerto” y el periodista prosigue interrogando: “¿Muerto en un tiroteo? ¿En la cárcel? (...) ¿Y vos sos solo en el mundo? (...) ¿Y cuántos hermanos son ustedes? (...) cuatro, ¿y el único que agarró el mal camino fuiste vos? (...) ¿Qué función cumplían tu mamá y tu papá? ¿Era una familia desavenida, conflictiva? (...) ¿Se emborrachaban? ¿Te pegaban?” (sic). (9/9/2013 y 10/9/2013, Actuación N° 630/2013). Estas preguntas evidencian la consideración clasista, criminalizante y estigmatizante que pesa sobre los jóvenes de sectores populares. Además, dan cuenta de ciertos momentos o giros discursivos en que el periodista puede producir situaciones judicializables, como la autoincriminación.

Como se puede ver en los ejemplos transcritos, las modalidades confirmatorias de preconceptos no cuidan ni respetan la situación específica que atraviesan quienes son entrevistados. En este sentido, el tipo de abordaje al entorno de

la adolescente asesinada pareciera hacer énfasis en el impacto de la pérdida (“Ustedes todavía no se dieron cuenta de lo que está pasando: (...) está muerta (...) Digerir esto va a ser muy difícil”), en lugar de tomar los recaudos para acompañar y respetar el proceso que atraviesan los allegados a la víctima. Del mismo modo, el joven, presuntamente en conflicto con la ley, es increpado violentamente desde un activo prejuicio clasista que, además, desoye las respuestas de su entrevistado, quien repite tres veces que su padre está muerto. Esta modalidad de entrevista reproduce un sentido común condenatorio en el que la voz de los acusados entrevistados queda sujeta a lo inaudible.

En relación con esta modalidad de entrevistas en la instancia de cobertura de casos policiales, durante las Mesas de Trabajo desarrolladas en 2013 y 2014 por esta Defensoría, quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual reconocieron que este tipo de abordajes muchas veces resulta “violento” e incomoda el propio desarrollo profesional. En ese marco, se mencionaron, por ejemplo, las entrevistas que se realizan a personas en estado de shock. De hecho, una de las asistentes, familiar de una víctima de Cromañón, expresó su perspectiva en tanto persona entrevistada: “Cuando se vive una tragedia, uno no sabe dónde está parado y los periodistas deben tener esto presente” (sic). De ahí que se hizo un llamado a reflexionar sobre la prudencia a la hora de entrevistar a personas en estado de conmoción. Es importante tener presente que las entrevistas constituyen instancias muy relevantes en la asunción de la responsabilidad periodística y del profesionalismo de su ejercicio.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA PRIVILEGIAR EL RESPETO DE LA PERSONA HUMANA

y de sus garantías constitucionales como ciudadano/a, con especial atención a:

- Respetar el principio de presunción de inocencia al referirse a las personas implicadas inicialmente como sospechosas. Para ello es importante:
 - a) Evitar el uso de expresiones como: “Sería el asesino”, ya que suponen la culpabilidad y no la inocencia como lo establece la ley. Resulta más oportuno hablar de “persona imputada” o “persona investigada”. El desconocimiento mediático de la presunción de inocencia puede acarrear un daño sumamente grave para quien se ha visto ilegítimamente involucrado en un hecho policial, ya que la estigmatización y la sospecha queda resonando en el imaginario social.

- b) Prescindir de la formulación de valoraciones sobre los implicados que promuevan la “condena mediática” y favorezcan el efecto de una “condena social” (Ejemplo: “Esto es la cultura de la delincuencia. Donde está bien mostrarse con armas... El más canchero es el que tiene la mejor arma” (sic). Actuación N° 629/2013).
- Contribuir desde la tarea periodística al entendimiento social de que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que garantiza el desarrollo imparcial del proceso judicial y de las sanciones del Estado.
 - Considerar, en las referencias periodísticas sobre el avance de la investigación judicial, el principio derivado del principio de presunción de inocencia: “in dubio pro imputado” (“beneficio de la duda”), según el cual, en caso de no tener los elementos probatorios suficientes que demuestren la culpabilidad, el Poder Judicial debe dictar sentencia absolutoria, declarando la inocencia de la persona: “En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado” (Artículo 11 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación).
 - Realizar abordajes respetuosos de la situación que atraviesan víctimas, allegados y familiares. Para ello es conveniente:
 - a) No exponer a cámara o entrevistar a personas en estado de conmoción, shock, duelo o cualquier otro estado emocional derivado del hecho que motiva la noticia. La importancia de “tomar” testimonio, no implica la obligación de publicarlo. De hecho, es posible y deseable que también se puedan tomar testimonios con intención asistencial y humanitaria, como por ejemplo, para comunicar alguna necesidad de la familia. Es importante tener presente que los testimonios afectados por el dolor pueden redundar en comentarios con un alto grado de violencia que, en el ámbito televisivo, quedan legitimados por la sola condición de familiar de víctima de quien los profiere. A su vez, esto puede impactar de manera negativa en el funcionamiento imparcial del proceso judicial en curso y en la percepción social del mismo.
 - b) No entrevistar contra su voluntad a ninguna persona directamente implicada o allegada a los involucrados en el hecho.
 - Mantener una perspectiva ecuánime y plural sobre el caso y los involucrados. Para ello resulta importante entrevistar desde una actitud de escucha y no desde la búsqueda de una confirmación y refuerzo de preconceptos.

2. PRIVILEGIAR UN TRATAMIENTO CONTEXTUALIZADO Y RESPETUOSO QUE EVITE LA CRIMINALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

En muchas coberturas mediáticas de casos policiales que involucran a niñas, niños y adolescentes, es posible identificar una serie de tendencias que ponen en riesgo sus derechos y propenden a su criminalización. La reflexión crítica sobre estas situaciones puede contribuir a un tratamiento mediático respetuoso de los casos que refieren a la niñez y la adolescencia. Por ello, se presentan a continuación tres ejemplos de prácticas que pueden resultar lesivas de los derechos de niñas, niños y adolescentes ya que parten de consideraciones desactualizadas que desconocen a estos grupos etarios como sujetos de derechos. Esta Defensoría entiende que es necesario evitar su reproducción o repetición, de modo de propender a prácticas periodísticas atentas a los derechos específicos de niñas, niños y adolescentes, tal como establece la normativa vigente en el país:

En un programa periodístico transmitido en dos emisiones (9/9/2013 y 10/9/2013), se desarrolló un debate sobre el insistente vínculo mediático entre “adolescentes y criminalidad”, cuyo tratamiento fue denunciado ante la Defensoría (Actuación N° 630/2013). En dicho programa, y bajo la volanta y el titular: “Menores delincuentes”, “Polémica: ¿La calle o la cárcel?”, el conductor reunió en el estudio a un grupo de adolescentes, de entre 14 y 18 años, que, según se anunciaba, estaban o habían estado en conflicto con la ley, frente a otro grupo de adolescentes que no lo estaban ni lo habían estado. Al primer grupo se lo dispuso en butacas altas en un rincón oscuro del set televisivo y llevaban colgados sobre sus espaldas letreros con sus nombres de pila, junto con un recuadro digital que precisaba las edades y su permanencia en un “instituto de menores”. El segundo grupo fue ubicado en un sector luminoso del estudio sin portar letreros, sino graphs digitales que destacaban ante el público su condición de “estudiantes”. A su vez, el periodista presentó a este segundo grupo como la “tribuna que está oficiando como jurado”, como quienes “van a ser los que van a decidir si corresponde o no la imputabilidad a los 14”, luego de que se dedicara a indagar profusa y violentamente en los aspectos más sórdidos y dolorosos de las historias de vida del primer grupo. Cabe aclarar que, a lo largo del programa, estos jóvenes fueron excluidos de la posibilidad de dar a conocer su pensamiento sobre un tema que los afecta, ya que fueron ubicados en un lugar puramente testimonial, es decir, como objetos de un relato inducido por las preguntas del conduc-

tor que los estigmatiza y discrimina. El lugar de la palabra de este grupo se redujo a responder las preguntas acusatorias del periodista.

Dentro de esta modalidad de presunto debate televisivo es posible destacar algunas descripciones y valoraciones peyorativas que el periodista formuló sobre los jóvenes en conflicto con la ley: "Hay algo que tiene que ver con la portación de pinta, de cara. Hay algo que vende que ustedes son, digamos, pibes chorros. Además que tienen como una especie de pilcha, que vienen con la ropa deportiva. Los prefieren tener lejos que cerca", "a ver qué diferencia tiene la cara tuya", "tienen heridas de guerra", "me doy cuenta que son almas... que en cualquier momento están en la crónica roja para un lado o para el otro: o porque los matan o porque matan ustedes", "a veces el nacimiento te pone en un lugar en el que te tocó otra cosa. Yo no sé cómo hubiera sido Leo (...) si hubiera nacido en un hogar de clase media (...) la genética del delincuente no es tal (...) hay familias que tienen matriz de delincuente, pero hay familias en las que son todos macanudos y uno salió chorro" (sic).

El ejemplo recién referido da cuenta de la construcción mediática de representaciones que trazan un vínculo intrínseco entre los jóvenes de sectores populares y los hechos delictivos. Este sentido se condensa en la denominación que enmarca el lugar de estos jóvenes según la presentación que de ellos se hace: "menores delincuentes", una expresión que conjuga dos caracterizaciones fuertemente discriminatorias. Por un lado, la referencia a "menores", que remite a una consideración de las niñas, niños y adolescentes como "objetos" incompletos y pasibles de tutela; es decir, no como sujetos de derechos. Y, por el otro, su caracterización como "delincuentes", que sugiere a las prácticas delictivas como rasgo constitutivo de la esencia de los involucrados. Tal como analiza la investigadora Leonor Arfuch, "En lo que hace específicamente a la crónica policial donde están involucrados niños o jóvenes, parecería existir un plus de significación (...), donde más que las motivaciones sociales cuentan las características personales o familiares, una supuesta precocidad del mal, un cierto innatismo ligado a la condición de carencia y marginalidad" (1999: 12-13). Tales son los supuestos que guían los dichos arriba transcritos del conductor televisivo.

Lo expuesto hasta aquí, junto con los resultados obtenidos en los Monitoreos de Noticieros de 2013 y 2014 -que muestran un sobredimensionamiento de noticias en las que niñas/os y adolescentes se construyen como victimarios de distintos delitos-, ubica a los medios de comunicación como significativos productores y difusores de imaginarios criminalizantes de la población juvenil. De hecho, según el estudio

de la Defensoría sobre 555 horas de noticieros de televisión abierta durante seis semanas de 2014, dos de cada tres noticias que refieren a niñez y adolescencia se inscriben en el campo policial. Sin embargo, estas representaciones no necesariamente se condicen con los datos que arrojan las investigaciones institucionales en materia penal del país. Por referir un ejemplo, un reciente informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sostiene que de los homicidios dolosos cometidos en 2012 en CABA, el Conurbano y La Plata, sólo el 5,6% tuvo como victimarios a menores punibles (entre 16 y 18 años) y el 2,35% a menores no punibles (menores de 16 años). En este sentido, el documento señala que "los tres años de investigación demuestran claramente que la insistencia mediática en que la solución a la violencia homicida dependa de la punición de los menores de dieciséis años, resulta claramente desmentida". (Ver: www.infojusticias.gov.ar/nacionales/solo-dos-de-cada-diez-homicidios-son-por-robo-2299.html). Esta proporción es incluso menor si se considera el informe de 2013 de la CSJN correspondiente a homicidios dolosos cometidos en CABA: entre los victimarios, sólo el 2,23% fueron menores punibles y el 1,49% menores no punibles (Ver: <http://passthrough.fw-notify.net/download/765661/> - www.csjn.gov.ar/investigaciones/caba2013.pdf). La desestimación de las investigaciones realizadas en la materia opera como una forma mediática de producir y acrecentar un conjunto de prejuicios estigmatizantes sobre determinados jóvenes en nuestra sociedad.

Y si bien la problemática sobre delincuencia y criminalidad juvenil tiene un amplio debate en el ámbito de las instituciones públicas, el tratamiento que realizan los medios audiovisuales sobre estos temas requiere del privilegio de la rigurosidad por sobre la difusión de valoraciones y representaciones esencialistas y discriminatorias. Por eso, desde la Defensoría del Público resulta aconsejable el ejercicio de la mayor responsabilidad social de la práctica periodística, que en este caso supone comunicar a partir del reconocimiento y resguardo de la especificidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ello implica:

- a) Contextualizar los hechos delictivos que involucran a niñas, niños y adolescentes como parte de una problemática social más amplia. Se entiende por contextualizar, la reposición de información que inscriba el hecho dentro del marco histórico y social que atraviesa el caso noticioso. Este marco, además de referir al entorno inmediato al hecho (geografía, condiciones de vida, situación de clase), supone, entre otros posibles recursos o prácticas, la provisión de información de las estadísticas existentes, la

lectura de los análisis realizados y de las interpretaciones académicas que abordan fenómenos o sucesos similares. Además, como parte del ejercicio profesional periodístico responsable en favor de una contextualización de los hechos, resulta deseable recurrir a la lectura del código penal y de la jurisprudencia existente en la materia. Esas lecturas posibilitan identificar de manera más precisa la tipificación de un hecho, las perspectivas e implicaciones existentes sobre casos análogos, lo cual enriquece la cobertura y le brinda un alcance mayor que lo que permite el mero relato que sólo se detiene en la sucesión de eventos. Otra posible herramienta de contextualización es el repaso de estudios sociológicos en materia de delitos. Éstos permiten nutrir a la información de elementos y reflexiones que pueden resultar relevantes para una cobertura rigurosa, sobre todo para evitar la simplificación del caso. También es posible recurrir a la comparación con antecedentes nacionales o internacionales, dado que pueden brindar elementos de análisis para considerar normativas y acciones llevadas a cabo en otros ámbitos, en otros contextos, en otras situaciones. Cada una de estas herramientas de contextualización resultan útiles para la provisión de informaciones complementarias que, además de enmarcar los hechos, contribuyen a una mejor investigación periodística así como aportan a las audiencias elementos de interpretación de los casos, lo cual deriva en una mejor y mayor comprensión de los mismos.

- b) Considerar y respetar que las niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo, por lo que no pueden ser juzgados y sancionados igual que los adultos. Es importante recordar que el tratamiento legal es (y debe ser), en todos los casos, orientado a la reinserción social y no al castigo (CONCORTV, 2013).
- c) Responder a los principios básicos de la investigación periodística, favorecer los datos obtenidos de fuentes chequeables, plurales y diversas, entre ellas, las organizaciones sociales que trabajan en el territorio de sectores vulnerados.
- d) Poner en duda las narrativas que estigmatizan e insisten en el aumento del control y de penas para determinados sujetos sociales.
- e) Alentar al periodismo de investigación para que profundice en la importancia de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes estén en conflicto con la ley para su reinserción social.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA EXTREMAR RECAUDOS Y SER SIEMPRE RIGUROSOS ANTE LA COBERTURA DE CASOS QUE INVOLUCRAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Esto requiere:

- a) Evitar el uso de expresiones y denominaciones tales como “menores delincuentes” y “menores asesinos”, ya que plantean a la criminalidad como una característica intrínseca de los jóvenes involucrados y sin modificación temporal. Resulta conveniente referir a “adolescentes en conflicto con la ley” o “jóvenes en conflicto con la ley”.
- b) Contextualizar los hechos delictivos que involucran a niñas, niños y adolescentes como parte de una problemática social más amplia.
- c) Dar especial relevancia a que LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SON PERSONAS EN DESARROLLO, de ahí que NO pueden ser juzgados y sancionados igual que los adultos.
- d) Responder a la veracidad informativa de los datos que brindan las investigaciones, en lugar de favorecer narrativas de estigmatización que promueven la necesidad de control sobre este grupo etario.

3. PRIVILEGIAR UN TRATAMIENTO RESPETUOSO, SERIO Y CONTEXTUALIZADO QUE EVITE SEXUALIZACIÓN O GENERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS O VICTIMARIAS/OS.

El ejercicio del periodismo en el marco de una concepción de la información como un bien social requiere un abordaje integrador de los acontecimientos sociales que incluya tanto la perspectiva de derechos humanos como otras que aborden directa y respetuosamente las cuestiones de géneros, orientaciones e identidades sexuales.

En la medida en que el género es un eje estructurador de relaciones sociales, es necesario reconocer la gravedad específica que poseen los femicidios, tal como se ha empezado a hacer en los últimos años a partir de la demanda de diversas organizaciones sociales, de las audiencias de servicios de comunicación audiovisual y de la reflexión autocrítica de una parte importante del campo periodístico. Estos, además de referir a los casos de asesinatos de mujeres por el motivo de ser mujeres, deben contextualizarse como crímenes encuadrados en relaciones sociales que, lamentablemente, están marcadas por una evidente desigualdad de género. Es decir,

en sociedades como la nuestra, en las que aún queda mucho por avanzar para lograr una real y armónica equidad acerca de las diversas manifestaciones de género y de orientación sexual, resulta fundamental que el periodismo no pierda de vista la matriz de desigualdad que aún expresa su poder sobre las mujeres y, también, sobre el colectivo LGTTBI. De hecho, resulta relevante que los servicios de comunicación audiovisual provean de información acerca de la existencia de tratamientos para la recuperación de varones violentos o de la violencia machista.

En muchas de las coberturas mediáticas de casos policiales que involucran a mujeres, es posible identificar una serie de tendencias que ponen en riesgo un tratamiento responsable, respetuoso y contextualizador, dado que direccionan su mirada en las prácticas de las víctimas, lo cual redundará en una nueva victimización de quien ha sufrido la agresión o el asesinato. Por ello, esta Defensoría recomienda que, junto con una contextualización responsable, se brinden datos y estadísticas como parte fundamental de la información. Ello posibilita dimensionar la gravedad de estas formas específicas de violencia social en materia de géneros. A su vez, abordar la noticia desde la perspectiva aquí recomendada permite distanciarse de ciertas formas recurrentes que suelen referir a la violencia de géneros o a la violencia contra las mujeres desde una mirada sexualizada y sexualizante de sus protagonistas:

a) Se presentan informaciones que destacan consideraciones o figuraciones sexualizantes de las víctimas, las cuales además de resultar re-victimizadas, terminan justificando -directa o indirectamente-, las acciones de los victimarios/os.

Como ejemplo de este tipo de construcción es posible referir a dos coberturas televisivas denunciadas ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA). La primera es la nota titulada "El crimen de Lola. Van 15 detenciones y pocas certezas". Allí se exhibe un intercambio entre una periodista y un psiquiatra, en el marco del asesinato a una joven de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en una playa del balneario Barra de Valizas, Uruguay (4/1/2015, Actuación N°3/2015). El psiquiatra invitado al programa, y cuyos datos de matrícula no son visualizados ante el público, explica que una autopsia psicológica constituye un procedimiento que recaba información "sobre cómo era la niña, la jovencita". Agrega que se realiza a través del diálogo con familiares y amigos y con "toda persona que pueda colaborar con datos y características personales para obtener un perfil". Luego, continúa planteando una serie de preguntas que dicho perfil ayudaría a responder: "¿Era una

chica pasiva, una chica activa, una chica de carácter, una chica que asumía riesgos, una chica muy seductora? ¿Qué clase de personita era Lola? (...) Todo esto para decir: esta chica, ¿qué clase de mujercita era?" (sic). Avanzado el diálogo, el psiquiatra y la periodista realizan la siguiente serie de apreciaciones sobre la joven:

—Psiquiatra: Es una chica de características físicas, y eso también hay que decirlo (...).

—Periodista: Divina.

—Psiquiatra: Y que puede motivar el apetito de cualquier varón que anda dando vueltas por ahí.

—Periodista: Claro, hay que tener mucho cuidado con una chica de 15 años, adolescente, dejarla sola... (sic).

Estas apreciaciones que focalizan en las características físicas de la joven ("divina", "que puede motivar el apetito de cualquier varón") y en el tipo de interrogantes que permitiría responder la autopsia psicológica ("¿era muy seductora?", "¿qué clase de mujercita era?"), evidencian valoraciones sexualizantes que reproducen el imaginario social que tiende a culpabilizar o responsabilizar a las mujeres víctimas de violencia (por su conducta, su forma de ser, sus hábitos y/o su manera de vestir). En conjunto, estas opiniones incurren en una mirada moralizante sobre la vida de la joven, lo cual induce a su posible culpabilidad en el trágico desenlace.

De ahí que sería deseable que cuando un/a invitado/a a un determinado programa expresa este tipo de inconveniencias, los/as comunicadores/as las señalen como tales y, de esta forma, den cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en pos de relaciones genéricas igualitarias y de velar por el cumplimiento de la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, tal como lo establece el Artículo 71 de la Ley 26.522.

El segundo ejemplo consiste en un informe emitido en un programa periodístico de una señal de noticias de cable, en el marco del asesinato de una joven de 17 años (28/9/2014, Actuación N° 334/2014). El informe se titula "La noche de 'Las Melinas'. Ninguna le teme al alcohol y a la noche" y, en el desarrollo del mismo, se identifican los siguientes dichos del conductor:

"Éste es precisamente el tema que elegimos de la historia de Melina. Volvimos a donde están las otras Melinas, a ver qué efecto produjo una chica que estuvo desaparecida que, aparentemente, fue en una fiesta sexual, que hubo droga, que hubo alcohol y que, finalmente, cuando se resistió a uno de los accesos carnales, la mataron a golpes". "La muerte de Melina,

tras una noche que incluyó drogas y sexo a la salida de un boliche, plantea una problemática ineludible para los padres argentinos: ¿Qué sucede a la salida de los boliches? ¿Sabían los padres adónde van sus hijos? ¿Es normal que los adolescentes vuelvan a su casa a los dos días y sin avisar?" (sic).

El título del informe, "La noche de 'Las Melinas'. Ninguna le teme al alcohol y a la noche", promueve una re-victimización no sólo de la joven asesinada sino también de las adolescentes en general. Este tipo de titular propone una formulación lingüística dañosa, lesiva y perniciosa: se utiliza el nombre propio de la joven asesinada (Melina) como categoría aplicable a las mujeres adolescentes o jóvenes que salen de noche a bailar ("Las Melinas"), anteponiendo así una apreciación negativa que las sugiere como potenciales víctimas audaces. El título extiende una apreciación moralizante sobre la vida privada de la víctima y en esa consideración, en absoluto inocua, se la responsabiliza por el desenlace padecido. Además, se cosifica su nombre y su trágico final como figurilla aleccionadora para otras chicas "iguales a ella". De ahí que la cobertura propone caracterizar a las adolescentes que salen de noche como "Las Melinas" y, en consecuencia, como quienes en virtud de su audacia ("no le temen al alcohol y a la noche") pueden ser potencialmente "castigadas", es decir, asesinadas como le ocurrió a la joven. Así, se responsabiliza en este uso discursivo a quien fue en realidad la víctima y no a quien/es cometieron el homicidio.

b) Se promueve una mirada moralizante respecto del género femenino, lo que desplaza el eje de la información policial a un conjunto de mandatos que se imponen sobre las mujeres y su lugar social.

Es recurrente que, al brindar información sobre algún delito en el que la sospechosa o la victimaria es una mujer, se despliegan un conjunto de afirmaciones que, antes que proveer datos respecto del caso en cuestión o de su contextualización y motivaciones, anclan en la condición femenina de quien habría cometido el delito. En esos casos, junto con esa generización de la noticia, se plantean -de manera voluntaria o no- un conjunto de mandatos sociales que, además de anacrónicos, son formas de construcción y naturalización de las relaciones de desigualdad entre varones y mujeres. Así, por ejemplo, en los casos en los que se consignan peleas callejeras u otro tipo de situaciones de violencia entre mujeres, el eje que se propone suele referir a su condición sexogenérica para resaltar la presunta anomalía del comportamiento violento, no por la violencia sino por la condición femenina de sus protagonistas.

Estos desplazamientos en la tematización de la relevancia del caso y sus complejidades estructurales como proble-

mática social a una simplificación explicativa bajo la variable del género postulan -directa o indirectamente- una moral que se sustenta en una mirada patriarcal que designa un determinado "deber ser" de las mujeres en la sociedad. Junto con ello, los "celos", la "envidia", entre otras referencias estereotipadas para caracterizar formas de vinculación social como "propias" de las mujeres, refuerzan imaginarios negativos y discriminatorios.

Por ello, en los casos en que no haya elementos relevantes ni específicos acerca de la condición de género de sus implicados e implicadas (como sí se produce en un femicidio), resulta deseable evitar las operaciones de generización de los casos policiales o de sus protagonistas, de modo de evitar incurrir en postulaciones estereotipadoras, estigmatizantes y moralizantes como si existiera un único modo legítimo de "ser mujer".

Del mismo modo, es importante reflexionar acerca de la conveniencia o no de exhibir imágenes de las peleas callejeras entre mujeres registradas mediante diferentes modalidades (cámaras de seguridad, registros propios, telefonía celular, entre otras), dado que las mismas, muchas veces, sólo pueden contribuir a incrementar la violencia o a cierto exhibicionismo carente de relevancia social e informativa.

Un ejemplo representativo de lo dicho fue el tratamiento televisivo titulado "Pelea de chicas" (Actuación N° 354/2014) a propósito del caso de la muerte de una adolescente de 17 años, luego de una golpiza propinada por sus compañeras a la salida de la escuela. Para ilustrar la problemática, el programa recurrió, por un lado, a la difusión de videos caseros obtenidos de Internet que muestran chicas enfrentándose a golpes. Y, por otro lado, a través de la entrevista a una joven, también agredida, a quien el periodista conductor le hace diferentes preguntas.

Después de esa entrevista, el conductor conversa con un psicólogo, presuntamente especializado en adolescencia y familia (sin comunicar su número de matrícula). El profesional es consultado sobre las motivaciones que, en su opinión, tendría una adolescente para reaccionar violentamente ante lo que se plantea como un problema de "celos femeninos" por "la belleza" o la "condición social" de otra joven. "Alejandro, ¿cuántas veces escuchaste esto? Peleas entre mujeres por la cuestión de si es linda, es cheta... ¿qué hay detrás de esto?". "Un fenómeno social nuevo, que es la violencia entre mujeres" (sic). Como se puede ver, la cobertura desplaza al género femenino un conjunto de características, representadas a través de las violencias exhibidas. Éstas son rotuladas como "peleas de mujeres". Dichas peleas son explicadas como originadas en los celos ("una chica que está celosa") o

en un invocado incremento de la violencia entre las mujeres (“barrabrazización de las mujeres”). Estas formas de cobertura, antes que dar cuenta de la violencia social, postulan una presunta feminización de la problemática, ubicando el foco en la condición genérica.

Otro ejemplo notable es la comunicación mediática del homicidio de una joven de 18 años, aparentemente perpetrado por otra, de 16 años de edad (Consulta CC82/2015, Actuación N° 37/2015). La extensa cobertura sobre el hecho enfatiza dos cuestiones: por un lado, la edad de la sospechosa y, por otro lado, los presuntos rasgos de su personalidad. Así, los zócalos señalan: “Celos, obsesión, engaño y muerte. Pericias psiquiátricas a la imputada”, es decir, asignan una serie de aspectos sórdidos a la personalidad de la sospechosa y detenida. La nota termina estructurándose sobre la idea de los “celos” y sus posibles derivaciones en “obsesión” y, consecuentemente, en un desenlace evitable.

El hecho de que la violencia física entre mujeres resulte socialmente menos esperable que entre varones, o que los celos sean referidos para caracterizar a las “mujeres” termina proponiendo un abordaje generizador y espectacular de las noticias que implican a mujeres victimarias. De este modo, la violencia adquiere, a través de una operación de generización que hace foco en las “mujeres violentas”, un matiz distintivo que las vuelve noticiables. En los casos referidos, los periodistas se sirven de una serie de figuras estigmatizantes, negativas y patologizadoras que pretenden explicar la violencia entre mujeres a través de celos, envidia y obsesión. Es decir, promueven una interpretación sesgada, misógina y simplificadora de las múltiples complejidades

-sociales, económicas, culturales- que sería oportuno contemplar al momento de abordar y explicar la violencia social general, al margen de que sus perpetradoras sean mujeres. En los ejemplos referidos, entonces, predomina una mirada en la que emerge un sexismo interpretativo que se sustenta en un imaginario social instalado en torno a las mujeres. Estas operaciones discursivas olvidan inscribir al sujeto femenino (víctima/victimaria) en la red de circunstancias sociales y culturales conflictivas y contradictorias en las que los hechos, que las tienen como protagonistas, suceden. Por ello, es recomendable inscribir a los sujetos sociales en la trama colectiva, lo que significa evitar hurgar en sus vidas privadas y más bien analizar, interpretar y comprender sociológicamente las circunstancias y trayectorias que las ubican como víctimas o victimarias.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA PRESCINDIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE REPRESENTACIONES SEXUALIZANTES Y MORALIZANTES CUANDO LAS VÍCTIMAS O VICTIMARIAS SON MUJERES.

En los casos policiales que no poseen motivación ni explicación específica en la condición de género, privilegiar el tratamiento riguroso y contextualizado, evitando la reducción de los análisis a la variable exclusiva de género. Esto significa, además, que en los casos de femicidios, de violencia contra las mujeres o contra cualquier otra identidad sexogenérica que se encuentren motivados por cuestiones de género, se procure el análisis de la gravedad y la complejidad de la violencia social que atraviesa el espacio social y la desigualdad sexual y de identidades de géneros. Ello contribuirá a desnaturalizar las condiciones sociales y culturales que hacen posibles esos casos y redundará en un trabajo periodístico responsable que no reproduzca ni legitime la violencia de géneros, en general, ni la violencia contra las mujeres, en particular.

Para ello es necesario:

- a) Evitar la formulación de apreciaciones sexualizantes sobre víctimas mujeres y que sugieran su responsabilidad en los hechos de violencia padecidos. (Ejemplo: “Es una chica de características físicas... puede motivar el apetito de cualquier varón”). Estos discursos no sólo incurren en una re-victimización de la persona, sino que abonan la (re)producción de un imaginario que tiende a culpabilizar a las mujeres que son víctimas de violencia.
- b) Contextualizar los femicidios (asesinatos de mujeres por el motivo de ser mujeres) como crímenes encuadrados en relaciones sociales y marcados por la desigualdad de géneros. Precisamente, la importancia del reconocimiento del femicidio consiste en reconocer y evidenciar que fue la condición sexogenérica de la víctima el móvil para la perpetración del crimen.
- c) Prescindir de abordajes que anclen en la condición femenina de quien cometió el delito y en la difusión de valoraciones moralizantes que sólo contribuyen a la reproducción y naturalización de las relaciones de desigualdad entre géneros. Es imprescindible contemplar las múltiples complejidades sociales, económicas y culturales al momento de abordar y explicar la violencia social.

4. PRIVILEGIAR UN TRATAMIENTO RESPETUOSO DE LA IDENTIDAD, LA INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS IMPLICADAS.

El derecho a la información y la comunicación implica la libertad de expresión y difusión de informaciones y opiniones, así como el acceso a informaciones y opiniones socialmente relevantes por parte de las audiencias. Dicho ejercicio supone el respeto de los derechos personalísimos que refieren y protegen a las personas, su vida privada, su honor, su imagen, su intimidad y su identidad.

Sin embargo, en muchas coberturas de casos policiales es ostensible el avasallamiento de estos derechos de las personas, sobre todo en lo que hace al resguardo de la identidad e intimidad de los afectados.

La vulneración de estos derechos ha sido identificada en muchas coberturas mediáticas sobre casos policiales, entre los cuales, a modo de ejemplo, se exponen los siguientes casos:

a) No se toman los recaudos necesarios para preservar la identidad y la intimidad de las personas implicadas en los hechos policiales.

Este rasgo ha sido sugerido en el punto inicial, cuando se hizo referencia al principio de presunción de inocencia. El resguardo de la identidad, entre otras formas, implica la exhibición de un rostro mediante una operación de edición (blureo) que impida el reconocimiento directo o indirecto de las personas que han sido indicadas por la investigación como sospechosas. Muchas veces esta importante edición no es realizada, lo que se agrava aún más cuando los protagonistas son niñas, niños o adolescentes. Un ejemplo de este tipo de descuidos se ve en la presentación de la noticia "Brutal golpiza a un presunto violador" (7/1/2015, Actuación N° 7/2015), en la que se visualiza cómo un grupo de "vecinos" golpea con puños y patadas a un adolescente cuyo rostro no es blureado durante la emisión, permitiendo a la audiencia identificarlo. Lo mismo sucede con su vivienda, cuya fachada es mostrada, al igual que sus coordenadas geográficas comunicadas por el periodista. En esta forma de construcción de la noticia, se vulnera, específicamente, el derecho del adolescente a ser respetado por los medios de comunicación en su propia imagen y en la confidencialidad de sus datos, tal como establece la Ley de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 (Artículo 22) y que es incorporada a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su artículo 71. Asimismo, tal como se afirma en la guía "Por una Comunicación Democrática de la Niñez y la Adolescencia" (DPSCA; AFSCA y UNICEF, 2013), conviene tener presente la importancia de preservar el rostro y evitar

brindar datos identificatorios de niñas, niños y adolescentes acusados de realizar actos de maltrato físico o sexual, a fin de evitar el daño o las represalias que pudieran devenir de la cobertura periodística propuesta.

Como parte de esta tendencia invasiva y avasallante, esta Defensoría considera deseable la reflexión sobre la cada vez más recurrente intromisión y difusión de imágenes y datos personales que son extraídos, entre otros, de las cuentas personales de Facebook con perfil privado. En muchas ocasiones, esas intromisiones conducen a la vulneración de derechos, fundamentalmente en noticias policiales vinculadas a jóvenes. Por ejemplo, en la cobertura del caso de la desaparición de una niña de 12 años, una periodista refiere: "Esta nena de 12 años tenía un perfil abierto de Facebook. Nosotros ayer, los periodistas, la gente en general, algunos por curiosidad, nosotros porque es nuestro deber, digamos, de buscar información, entramos a la página de ella. Sí, es una nena de 12 años, no había nada extraño, más que ver fotos, pero yo no tenía por qué ver fotos ni saber nada de ella" (sic). (25/7/2014).

Conforme con esto, es importante subrayar que resulta imprescindible que, en la búsqueda de información, el periodismo sea respetuoso de la preservación de la identidad, intimidad e información de las niñas, niños y adolescentes involucrados en los casos policiales. Si bien este respeto abarca a la totalidad de las personas, se requiere de un celoso cuidado respecto de la niñez y la adolescencia, debido a que éstos constituyen un grupo social mucho más vulnerable que el resto, al menos para el ejercicio de su propia defensa.

b) No se respeta la privacidad del dolor de las víctimas, familiares y allegados.

La presencia de los medios ante situaciones delicadas o de alto dramatismo puede funcionar como un servicio para dar lugar a que los afectados expresen su opinión. Ahora bien, dicho servicio debe ser respetuoso del deseo y la voluntad de los involucrados a manifestarse ante los micrófonos. Desconocer esa voluntad puede llevar a una indeseada invasión de la privacidad, al avasallamiento del dolor de las personas, lo que produce un incremento del padecimiento que viven las mismas.

A continuación, se citan tres ejemplos de abordajes problemáticos por la ausencia de tal recaudo.

En primer lugar, el modo en que un grupo de periodistas accede a la madre de una joven asesinada en 2013. Tras salir de la morgue judicial y reconocer el cuerpo de su hija, y en este contexto de lógico dramatismo, las cámaras hacen planos de su rostro conmocionado y los periodistas le preguntan: "¿Cuál es la sensación después de lo que pasó?" (sic). (11/10/2013).

En segundo lugar, en el marco del asesinato de una adolescente, una rueda de periodistas entrevista a su abuela en estado de conmoción. Sin contemplar esa situación, las preguntas ahondaron en su opinión acerca de la presunción de inocencia del ex novio de la víctima. Conforme con esto, algunas de las intervenciones de los periodistas fueron: "No podemos decir quién fue el asesino. Pero si fuera [enuncian el nombre y apellido del ex novio de la víctima], ¿cuál sería su pedido a la Justicia?", "¿creés que (...) tuvo algo que ver?". A lo que la abuela responde: "No me importan los Derechos Humanos, yo lo agarraría y lo cortaría en pedazos" (sic). (Dato obtenido del Monitoreo de noticias policiales en señales de noticias por cable, 27/6/2014).

Como evidencia este caso, la exposición y toma de testimonios de personas que se encuentran en estado de conmoción, shock o presión traumática, además de resultar invasiva, puede favorecer la aparición de comentarios con altos grados de violencia y/o con reclamos, en general irreflexivos, vinculados a las leyes penales en el ámbito televisivo. Aun cuando estos puedan resultar comprensibles como expresión del dolor de quien los profiere, impactan en la sensibilidad de las audiencias y afectan la percepción social sobre el funcionamiento imparcial del proceso judicial, que establece las sentencias evaluando pruebas y responsabilidades según las leyes vigentes.

En tercer lugar, la emisión, en un magazine del mediodía, de un audio en el que un hombre (víctima de un robo en su vivienda) es asesinado mientras pide ayuda telefónica a la policía (9/9/2014, CC808/2014, Actuación N° 314/2014). El conductor presenta el material del siguiente modo: "Presten atención al audio porque es verdaderamente la desesperación de una familia al borde de la muerte, la desesperación de una familia en medio de una situación de pánico y de terror". A continuación, se transmite la conversación telefónica, en la que se escucha al operador del 911 que pregunta la dirección, una voz masculina que dice "Riobamba...", el operador pregunta la localidad, cuántas personas hay en la casa. La voz masculina responde "tres", y luego las preguntas del operador quedan resonando sin su respuesta. Sobre el sonido ambiente que registra el teléfono que queda descolgado, se escucha a alguien que pide: "¡Dame todo, todos los celulares!". Se distingue una voz masculina y voces femeninas que dicen: "¡No tenemos nada!". Las voces se van elevando hasta que se escucha un disparo y luego tres disparos más sobre los gritos desesperados femeninos y una voz masculina que grita: "¡Hija de puta!". Los disparos continúan, a la vez que los gritos son cada vez más fuertes y desesperados: "¡Llamá a la policía!", "¡hijo de puta!", "¡hijo de puta!", "¡auxilio!", "¡no, no, no!".

Finalmente, los periodistas cierran la presentación del caso con aclaraciones tendientes a subrayar el dramatismo del hecho: "Se escuchan claramente los tiros, yo escuché... llegué a escuchar... creo que son tres o cuatro", "es una situación desgarradora", "escucho el dolor de ella, el insulto de él, que entiendo que es la víctima que se está muriendo", "su familia que, además, tienen que ver cómo le están matando a su padre al lado de ella" (sic).

Los tres ejemplos arriba citados dan cuenta de una tendencia en la crónica policial que exhibe y pregunta en situaciones de alto dramatismo (específicamente notable en el primer ejemplo), cediendo a cierta lógica comercial de producción televisiva que hace del sufrimiento humano un uso equivalente al de una mercancía publicitaria (como se evidencia en los siguientes dos ejemplos). Este tipo de práctica periodística podría incurrir en una triple violencia:

- 1/ Violencia sobre las víctimas, en tanto este tipo de enfoque las somete a un proceso de re-victimización por efecto de su sobreexposición mediática mercantilista.
- 2/ Violencia sobre los familiares y allegados de las víctimas, ya que a través de la emisión repetitiva de las fotografías de las víctimas y de la reposición, por ejemplo del audio del asesinato, son obligadas a revivir el carácter traumático y doloroso de la situación.
- 3/ Violencia sobre la audiencia en general, que ni siquiera es advertida del tipo de material al que será expuesta. Y este hecho resulta aún más lesivo en el caso de emisiones que se producen en horario apto para todo público, ya que la audiencia está potencialmente integrada por niños, niñas y adolescentes que carecen de las competencias suficientes para interpretar este tipo de mensajes.

Ante esta tendencia en la producción noticiosa policial, es recomendable evaluar el posible impacto que puede causar el material audiovisual obtenido por la investigación periodística a las personas implicadas, a sus allegados y a la audiencia en general (especialmente, en horario ATP). En este sentido, es importante que quienes trabajan en los medios de comunicación reflexionen acerca de la conveniencia o no de emitir este tipo de materiales y si los mismos responden al criterio de "información socialmente relevante" o a "la medición del rating minuto a minuto" estimada por los anunciantes, los programas o los licenciatarios. Dicha reflexión podría contribuir al ejercicio de cautela antes de reponer acríticamente materiales que pueden resultar lesivos para terceros.

Es relevante recordar aquí que durante las Mesas de Reflexión y Debate se subrayó la necesidad de que las cobertu-

ras de los casos policiales respeten y defiendan la privacidad del dolor de las víctimas y familiares. En este sentido, resultó notable el relato de la experiencia del periodista y padre de una víctima fatal de una tragedia ferroviaria: "En 'cadena nacional', el país se enteró de la muerte de mi hijo antes que yo. La información fue difundida sin chequear con el juez interviniente (...) nuestra intimidad había sido violentada profundamente. Cámaras tratando de captar los rostros. Esa sensación de ser violado en el sentimiento no se pasa nunca (...) La tragedia no sólo es expuesta, sino reiterada por horas y horas a lo largo de los programas. Nos ponen a las víctimas en el rol de principales culpables (...) que se difunda por los medios la muerte de un familiar sin que uno sea notificado es violentar (...) El dolor es tratado como mercancía publicitaria (...) Los medios no tienen derecho a vulnerar la intimidad del dolor (...) la visión de esas imágenes revive el dolor padecido (...) Es necesario un protocolo que oriente el tratamiento de las víctimas y familiares, que la intimidad de la víctima esté por encima de cualquier otro interés" (sic).

Este relato -que sintetiza varios reclamos que se plantean actualmente acerca del rol de los medios de comunicación y su vínculo con los casos policiales- da cuenta de una problemática contemplada en gran parte de los códigos de ética periodística. A modo de ejemplo, se citan a continuación algunas de las recomendaciones planteadas por el prestigioso Consejo Audiovisual de Cataluña (2001) para comunicar tragedias personales:

- 1/ Respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, especialmente en casos o sucesos que generen situaciones de aflicción o dolor, evitando la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias.
- 2/ Evitar la utilización de primerísimos primeros planos y del zoom in para captar el sufrimiento de las personas afectadas, ya que esto puede vulnerar su privacidad.
- 3/ Respetar la notificación previa a los familiares de las víctimas por parte de los profesionales que están a cargo de la causa.
- 4/ Procurar no difundir imágenes de víctimas mortales, féretros o personas heridas.
- 5/ No presentar imágenes de funerales sin contar con el consentimiento explícito de los familiares. El hecho de que un acto de estas características se realice en un lugar público no exime de proteger la intimidad de las personas afectadas.

Finalmente, es deseable que la transmisión de imágenes, videos y/o audios sobre delitos sea repuesta en tanto constituya información socialmente relevante y no una mera exhibición motivada por el afán de la ilustración truculenta y reiterada de los hechos.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA PRIVILEGIAR UN TRATAMIENTO RESPETUOSO DE LA IDENTIDAD, LA INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS IMPLICADAS.

Al igual que se planteó en el punto vinculado a la presunción de inocencia, evitar la difusión reiterada y persistente de imágenes, videos, fotografías sin blurear que otorguen datos identificatorios de las personas inicialmente imputadas. Tener especial recaudo en evitar la intromisión y difusión de datos o imágenes publicados en las redes sociales sin autorización.

Respetar la privacidad del dolor de las víctimas, familiares y allegados.

- a) Evitar las indagaciones y especulaciones sobre el sufrimiento humano sin consentimiento de la persona.
- b) Respetar la notificación previa a los familiares de las víctimas por parte de los profesionales que están a cargo de la causa. Es necesario cuestionar el concepto que señala que la notificación es una primicia mediática.
- c) Evitar la utilización de primerísimos planos y del zoom in para captar el sufrimiento de las personas afectadas, ya que esto puede vulnerar su privacidad.
- d) Evaluar la pertinencia de difundir y reiterar imágenes de víctimas mortales, videos y/o audios de asesinatos, ya que esto no constituye necesariamente comunicar información, sino exhibir el dolor de manera truculenta.
- e) Consensuar con la familia y allegados la emisión de fotografías de las víctimas y demás implicados.
- f) Evitar la presentación de imágenes de funerales sin contar con el consentimiento explícito de los familiares.
- g) Determinar la difusión del material audiovisual a partir de la consideración de las posibles afectaciones que el mismo pueda suponer para las personas implicadas, allegadas y para la audiencia en general. En este sentido, es importante privilegiar el respeto de la persona y el resguardo de la identidad e intimidad.

5. PRESCINDIR DEL USO Y DE LA PROMOCIÓN DE ESTEREOTIPOS Y GENERALIZACIONES SOBRE LOS HECHOS, QUIENES ESTÉN IMPLICADOS Y SUS ALLEGADOS.

La rigurosidad y profesionalidad periodística son elementos centrales de las coberturas. Sin embargo, en ocasiones pueden verse opacadas por la exacerbación de rasgos atribuidos a los involucrados. En esos casos, suelen destacarse aspectos específicos o detalles de las personas implicadas que no contribuyen a la construcción de información socialmente relevante, sino que, por el contrario, tienden a la estereotipación y consecuente vulneración de los derechos de las personas aludidas, así como a una indebida y prejuiciosa generalización que deviene discriminatoria respecto del colectivo invocado bajo la mencionada caracterización de los implicados. Son múltiples los ejemplos en los que se incurre en este tipo de prácticas, las cuales, por más que estén naturalizadas en nuestra sociedad, deberían llamar a la reflexión de modo de evitar la elaboración de señalamientos que puedan resultar estigmatizantes, menospreciantes y discriminatorios. Entre estos ejemplos, además de recordar los que se mencionaron respecto de la generización de las mujeres, resultan relevantes las invocaciones a nacionalidades, clases sociales, grupos étnicos, franjas etarias, entre otras. En detalle, algunas de estas formas discriminatorias aparecen cuando:

a) Los titulares destacan la nacionalidad del autor del hecho ilícito.

Un ejemplo registrado por la Defensoría del Público es el título utilizado para comunicar el caso de un hombre que disparó y mató en la vía pública a quien presuntamente le había robado: “El motochorro es un colombiano de 31 años” y en clara oposición con quien había disparado y había sido luego detenido por la policía, el titular aclaraba: “El detenido es un médico de 36 años”. (2/12/2014). Este énfasis, que se aplica recurrentemente para referir a los victimarios (y que, en ocasiones, cuando se trata de víctimas extranjeras, suele invocarse para señalar a los presuntos victimarios como parte de la misma comunidad migratoria), lo que instala ya no es el hecho sino la sugerencia de un presunto vínculo entre el delito y la condición de extranjero. Este sentido estigmatizante termina proyectándose más allá de la persona implicada. A su vez, respecto a este punto, durante las Mesas de Trabajo se marcó que la representación de los sujetos sigue un patrón clasista, de manera que “los medios reproducen selectividad y discriminación”. En esas mesas se destacó que, cuando en los casos policiales hay involucradas personas señaladas por su origen nacional o su pertenencia étnica, se actúa con un

ensañamiento especial que promueve la mirada estigmatizante. A propósito, se citó como referencia el caso presentado por los medios como: “Paraguaya mató al marido”, en el cual la información sobre la nacionalidad resulta innecesaria.

Similares operaciones de extranjerización se presentan permanentemente al hablar de “mafia china”, “colombianización del delito”, “ocupantes de viviendas peruanos”, “trabajadores clandestinos bolivianos”, “explotadores coreanos”, entre otras expresiones difundidas por los medios de comunicación. Además de rotulados bajo esta categoría inapropiada, los migrantes suelen quedar instalados en las coberturas mediáticas policiales en un lugar cercano a la peligrosidad. Y este lugar no es desmentido, incluso cuando las investigaciones judiciales, policiales y académicas demuestran la casi inexistente relación entre condición extranjera y delito en el país. Sin embargo, la ratificación de cierto imaginario xenóforo perdura en un relato social, respecto del cual la responsabilidad social de los medios exige un particular compromiso y atención. La instalación de un vínculo entre delito y condición migratoria se convierte en el inicio de una escalada discriminatoria que ve, ante un extranjero, el potencial peligro o el delito al acecho.

b) La instalación mediática de apodos y calificativos negativos para los victimarios como condena social.

Esta práctica se observa, por ejemplo, en la presentación que hace un periodista de un presunto victimario, en el marco del análisis de un caso de violación: “Una historia que tiene que ver con una rata, una rata que tiene peste bubónica y que se llama [precisa el nombre y apellido del procesado]” (sic). (23/8/2014, Consulta N° 781/2014). A su vez, en la atribución y precisión de características del victimario, el comunicador destaca comparaciones discriminatorias para la comprensión del caso, pero funcionales para reforzar estigmatizaciones sobre un grupo de personas ajenas al hecho en cuestión: “¿Saben cómo describió la chiquita esa situación? Tenía la cara tapada como los piqueteros, está en la causa” (sic). La mención de “rata”, así como la comparación con “los piqueteros” resultan operaciones discursivas completamente inadecuadas para referir a las características del victimario. Tanto la animalización como la estigmatización clasista operan como recursos que no aportan elementos a la noticia y, por el contrario, refuerzan, por un lado, una condena biologicizante y, por el otro, una estigmatización clasista.

c) La difusión de expresiones que promueven una relación lineal entre determinadas prácticas (consumo de alcohol y drogas y actos de violencia) y grupos etarios (adolescentes).

Aquí puede mencionarse la cobertura del asesinato de una joven (28/9/2014, Actuación N° 334/2014), en la que además de advertirse la tendencia a responsabilizar a la víctima de su trágico desenlace y presentar el caso como aleccionador y representativo para el resto de las adolescentes, se identifican otras generalizaciones sobre el modo de vida atribuido a este grupo etario. Así funcionan las siguientes proyecciones de los periodistas a partir del caso particular: "Además de las drogas y el alcohol, la violencia también es moneda corriente en la noche. Por el motivo que sea, la puerta de un boliche se transforma, de un momento a otro, en una batalla campal", "el caso de Melina no es un caso aislado, muchas otras Melinas suelen salir a bailar y decidir dónde sigue la noche de acuerdo a lo que se presente en el boliche. Melina terminó en un templo umbanda y haciendo una orgía con seis hombres, según dijo su amiga y testigo clave, Melody. Los adolescentes fuera de control, ¿están dispuestos a todo tras una noche de excesos?" (sic). De este modo, la cobertura (acompañada con la emisión de imágenes de varones y mujeres adolescentes que se enfrentan a golpes a la salida de un boliche) incurre en una caracterización estereotipada y discriminatoria de ciertas prácticas atribuidas a las/los adolescentes (consumo de alcohol, salidas hasta altas horas de la madrugada). En otras palabras, se propone una interpretación casuística e inductiva según la cual algunos hábitos y conductas extendidos entre la juventud propiciarían actos de violencia y desenlaces trágicos. Todo el informe está construido sobre una lógica que es directamente acusatoria de la juventud como colectivo general y de las mujeres adolescentes en particular, sin sugerir ningún tipo de articulación problemática que inscriba a esa misma juventud en el ámbito social, cultural y material en el que es educada y/o socializada.

d) La representación de la sociedad como un campo polarizado en "dos bandos" jerarquizados: "ciudadanos y delincuentes". En la cobertura televisiva de los homicidios agravados por alevosía e intentos de homicidio agravados por alevosía, denominados mediáticamente "linchamientos" (Actuación N° 129/2014), se percibe una tendencia, visibilizada a través de los dichos, de la presentación de las personas intervinientes y zócalos condensatorios que dicotomizan a los actores sociales bajo una serie de denominaciones que conllevan una valoración y distinción entre "ciudadanos de primera" y "ciudadanos de segunda": "La verdad que estos linchamientos que se están dando (...) son una catástrofe (...) hay como un efecto contagio que se está dando. Empezó en Rosario y ahora empezó a recorrer distintos lugares del

país (...) hay como una oleada, una espiral de violencia ahora llamada linchamientos en el país. Ahora aparece un fiscal. ¡Qué rápidos que son los fiscales en este tipo de casos! Van contra la gente... a ver: linchar a alguien está horrible, está mal, es una hijaputez. Ahora, eso sí, los fiscales para esto están siempre despiertos, no tienen ningún problema para empezar una investigación, han pedido las cámaras para ver, para identificar a los vecinos. Ahora, cuando se trata de delincuentes, o duermen en sus casas, o duermen la mona, están de fiesta o vaya a saber qué (...) es obligación del Estado, ya sea la policía, la justicia, los fiscales, velar por la gente honesta, no por aquellos que delinquen porque da la sensación que siempre se respeta más al delincuente que a aquella persona que sufre la violencia de un delito por parte de un delincuente (...) eso también genera violencia en la gente. Velar por la gente es respetar también la vida del otro. El delincuente debe respetar nuestra vida también porque eso también es derechos humanos, creo, me parece" (sic). (31/03/2014).

Así, el "ciudadano común" es al mismo tiempo el "vecino", la "víctima", la "persona honesta", "la gente", conformando un "nosotros" (que está legítimamente "harto", "humillado", "desprotegido", "desesperado"). Este nosotros se representa, a su vez, amenazado por un "otro" al que se des-ciudadaniza al definirlo como "delincuente", "motochorro", "ladrón" y "victimario"; definiciones que, en tanto incuestionadas, cosifican a una serie de sujetos que ocupan el piso inferior de una jerarquía social y del acceso a derechos. Esta construcción, finalmente, es naturalizada a través del uso de figuras retóricas que remiten al plano de la naturaleza, figura recurrente en las formas discriminatorias de la Argentina. En este sentido, la referencia a una "oleada" suele acompañar, precisamente, la idea incontrolada de una invasión indeseada.

e) El uso de eufemismos y neologismos que contribuyen a la percepción distorsionada del hecho que se comunica y de las personas implicadas.

Este tipo de casos se produce, en general, de modo sistémico: una categoría, un neologismo empieza a ser utilizado de manera irreflexiva por los medios y propende a la naturalización de una perspectiva que puede estar incurriendo en una forma discriminatoria de referir a personas y/o grupos sociales o a la legitimación de actos criminales. Fue el caso de los homicidios e intentos de homicidio (Actuación N° 129/2014), presentados bajo eufemismos, tales como "linchamientos", "ajusticiamientos", "justicia por mano propia", cuando se trataba de casos de violencia colectiva. Esa conceptualización

por fuera del delito calificado promueve una representación tergiversada y sesgada de hechos condenables según el sistema jurídico formal y vigente que regula la vida ciudadana, dentro del cual el monopolio de la violencia física legítima lo ejerce el Estado a través de sus fuerzas de seguridad y en el marco del estricto respeto a los derechos humanos.

Sumado a esto, resulta igualmente distorsivo y, en algunos casos estigmatizante, el uso de neologismos para presentar prácticas delictivas y caracterizar a los sujetos implicados: "El ataque del 'loco de la topadora'" (8/10/2014), "narcotravestis" (8/10/2014), "motochorros" (8/4/2014). Muchos de estos casos devienen formas discriminatorias de referir, imaginar o conceptualizar, por ejemplo, a personas con afecciones de salud mental, travestis y motociclistas. De hecho, esta Defensoría ha recibido diferentes reclamos acerca de las consecuencias implicadas e implícitas del uso de algunos de estos neologismos y los efectos negativos que pueden provocar sobre conjuntos sociales que nada tienen que ver con prácticas delictivas o policiales.

Finalmente, como parte de estos usos del lenguaje, en muchas ocasiones los neologismos son utilizados para unificar de manera distorsiva delitos que poseen naturalezas y alcances completamente diferentes. Así, por ejemplo, bajo la figura de "narcotráfico", término que aparece recurrentemente en las coberturas, se suelen confundir elementos y prácticas vinculadas al crimen organizado con el menudeo o con lo que se denomina "uso problemático" o consumo de sustancias. Ello constituye no sólo un error periodístico, sino también jurídico, cuyas consecuencias sociales y simbólicas resultan significativas. Es importante distinguir las tramas delictivas complejas de otros hechos dado que, de lo contrario, se tiende a una criminalización de actos cuyo impacto y significación social no poseen la gravedad que se les asigna. La inconveniente indistinción aquí señalada tiende a policia- lizar situaciones de consumo que nada tienen que ver con el delito y la criminalidad. De hecho, esta importante diferenciación es no sólo una necesidad periodística. Como se ve en el anexo de esta guía, el Código Procesal Penal especifica diferenciaciones sobre este tipo de situaciones que son sumamente relevantes para la precisión jurídica. En consecuencia, también se trata de distinciones relevantes para el periodismo y, consecuentemente, para las audiencias.

f) La construcción de estereotipos que refieren, refuerzan y anclan en una territorialización de las prácticas ilícitas.

En la descripción del caso del asesinato de un policía del barrio de Caballito, que mediáticamente tuvo como presuntos implicados a un grupo de adolescentes del barrio Zavaleta (18/8/2013, Actuación N° 629/2013), los periodistas

realizan las siguientes asociaciones: "Vos pasás por la Villa Zavaleta (...) vos sabés que hay lo que alguna vez bautizaron los expertos en narcocriminalidad, hay zombis. Zombis son los consumidores de paco...", "mucho más peligrosos son estos chicos", "si vos ponés en tu Facebook tus fotos con armas, quiere decir que vos te asumís ya como delincuente, y nunca, ni siquiera aspirás a que puedas el día de mañana conseguir un trabajo, insertarte en otra zona de la sociedad que no sea la zona donde se mueven todos los delincuentes. Te está hablando de que esos chicos ya están ahí, son delincuentes, su futuro es ser, tal vez, mejores delincuentes, supongo, pero no, jamás, salir y ni siquiera, como se dice en la jerga, 'caretearle' esto a nadie" (sic). Todas estas referencias están enmarcadas bajo los epígrafes: "Villa Zavaleta", "La banda de los monoblocks".

A través de la formulación de estas generalizaciones fuertemente lesivas se produce también una criminalización de la pobreza que refuerza los tratos discriminatorios. En este sentido, los periodistas describen un panorama que elude explicar las causas estructurales de una situación compleja en la que también se debaten históricas luchas por la urbanización, déficits habitacionales y otra cantidad de derechos vulnerados que afectan a sus habitantes. Contrariamente, esta demarcación urbana "guetifica" (en el sentido de clausurar cualquier posibilidad de integración de un territorio degradado social, económica y físicamente) una zona que desde el programa televisivo se representa desconocida, atemorizante, impenetrable y habitada por "zombis" y delincuentes que la utilizan como reducto o "guardia". Una de las formas recurrentes en que se produce este tipo de criminalización de determinados territorios de las ciudades consiste, precisamente, en la exhibición de un "adentro" y un "afuera" de esos espacios urbanos y en la exhibición de dichos lugares como inhóspitos territorios a los cuales las cámaras o los periodistas ingresarán muñidos de chalecos antibalas, custodiados por la policía, asumiendo los riesgos que la audiencia podrá evitar, entre otras operaciones. En general, estas construcciones están precedidas por "mapas" o por guías urbanas que marcan, territorializan, clasifican y cosifican a quienes serán objeto de la crónica policial. Incluso, ciertas operaciones de edición refuerzan una criminalización de esos territorios, respecto de los cuales se presentan relatos con coloraciones particulares, musicalización tenebrosa, movimientos de ansiedad, que describen prácticas y dinámicas que no constituyen delito alguno. Sin embargo, cierta lógica de edición, determinada forma de narración y los recursos puestos a disposición de las audiencias construyen un sentido del miedo y del peligro que criminalizan aquello que es exhibido en la

pantalla. En tal sentido, muchas veces las crónicas terminan refiriendo ilegalidades que no son ilícitos ni delitos, y a delinquentes que son inocentes.

Es importante reconocer que el desarrollo de estas modalidades del relato (lingüísticas y no lingüísticas) supone una violencia simbólica, ya que cualquier inferencia desfavorable que se plantee bajo estas proyecciones afecta el honor de las personas referenciadas dentro de esas categorías o representaciones grupales y/o territoriales. Asimismo, “la violencia que ataca, fundamentalmente, a ese componente común, esencial de la identidad, que no se considera tal y por la que se somete a unos respecto de otros a estigmatizaciones, categorizaciones, definiciones, conceptualizaciones, estereotipos que no pueden cuestionar, promueve toda suerte de injusticia. El que no sea reputada como violencia impide, por un lado, que los que la cometen la reconozcan como tal y, por el otro, que los que la reciben reivindiquen su derecho a ser protegidos, defendidos respecto de ella” (Vasilachis de Gialdino, 2003: 5).

Conforme con esto, es necesario tener presente que el rol del comunicador implica la construcción de sentidos, de ahí que resulta deseable abogar por la superación de los estereotipos estigmatizantes, dado que las noticias pierden visibilidad, pero la impronta y las rotulaciones pueden quedar fijadas sobre los sujetos.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA PRESCINDIR DEL USO Y DE LA PROMOCIÓN DE ESTEREOTIPOS Y GENERALIZACIONES AL DAR INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES IMPLICADAS Y ALLEGADAS:

- Nombrar a los implicados a partir de la denominación presente en la causa judicial sobre su posible relación con los hechos (acusado, testigo, etc.). Es importante resguardar la identidad de las personas, al igual que no utilizar apodos, alias, diminutivos u otros términos genéricos o, al revés, utilizar el nombre de la víctima como un sustantivo generalizador.
- Prescindir de la instalación de apodos y calificativos para los implicados como un modo de promover y reforzar la condena social (“una rata que tiene peste bubónica”).
- Procurar no recurrir al uso de eufemismos errados (“linchamientos”, “justicia por mano propia”) y neologismos estigmatizantes (“narcotravestis”, “motochorros”) para comunicar situaciones o caracterizar a los sujetos implicados. Esto contribuye a la percepción distorsionada de los casos y puede promover estigmatizaciones sobre personas y grupos sociales. Los eufemismos y neologismos

se vuelven problemáticos cuando promueven sentidos negativizantes de los sujetos sobre los que se aplican.

- Evitar la proyección de aspectos propios de una persona o situación específica sobre un colectivo social ajeno al hecho a comunicar. Para ello es conveniente:
 - a) Utilizar titulares que no destaquen la nacionalidad o adscripción étnica de los involucrados en el caso (“paraguaya mató al marido”). Estos datos no son centrales para la comprensión de la noticia y establecen, especialmente cuando referencian a victimarios, un vínculo intrínseco entre el delito y la condición de extranjero.
 - b) Evitar la difusión de expresiones que establezcan una relación lineal entre prácticas ilícitas y grupos etarios, tanto por mencionarlos como por mostrar imágenes que permitan la asociación (“los adolescentes fuera de control”).
 - c) Prescindir de las representaciones de la sociedad que, en virtud de los hechos delictivos, plantean una división entre personas presentadas como “ciudadanos” y otros grupos a los que se los priva de esta condición (“los delincuentes”).
 - d) Procurar no realizar comentarios que territorialicen las prácticas ilícitas (“por Villa Zavaleta hay zombis, consumidores de paco”, “zona donde se mueven todos los delincuentes”).

6. UTILIZAR UNA PERSPECTIVA NO INCRIMINATORIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CRÓNICA POLICIAL

El carácter vertiginoso de la práctica periodística, junto con la disposición de extensos tiempos de cobertura que entran en tensión con la producción de información socialmente relevante y con la necesaria espera de partes oficiales y el chequeo de los resultados de la investigación policial y judicial, favorece la aparición de un discurso periodístico que sugiere intrigas acusatorias sobre distintas personas allegadas a la víctima de los hechos o especulaciones alrededor de la escena del delito. Muchas veces, las mismas están sustentadas en la ocurrencia mediática o en algún comentario ocasional sin fundamentos que dan lugar a especulaciones, juicios de valor, afirmaciones prejuiciosas o consideraciones sin contexto alguno. Esto, además, conlleva un problema adicional, dado que en algunas de estas ocasiones quien comunica puede incurrir en una incriminación, lo cual constituye una falta legal por parte del/a periodista. Aquí se pueden mencionar dos ejemplos significativos. En primer lugar, la cobertura del

homicidio de una adolescente (Actuación N° 185/2013), en el que se despliegan comentarios tendientes a incriminar a:

1/ Los trabajadores de la CEAMSE (lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida):

“Te pregunto algo, sé que no me lo vas a poder contestar, pero deo la pregunta planteada: a las diez de la mañana o a las nueve y media, hora en que esta chica se retira del complejo deportivo, teniendo en cuenta que la planta trabaja toda la noche (...) ¿puede ser el horario de salida?, ¿coincidir con el horario de salida? (...) No me extrañaría, si hay gente que si hace el turno noche, a las nueve, nueve y media de la mañana sea el horario de salida de muchos trabajadores del CEAMSE. No quiero decir con esto que sean culpables, por supuesto. Hay que tomar con pinzas, pero, digo, ¿puede coincidir? Dejo planteada la pregunta.” (sic.) (11/6/2013).

“Ahora va a venir el señor (...) de la CEAMSE (...) para ver si la CEAMSE tuvo que ver (...) Ayer estaban allanando la CEAMSE hasta última hora y algunos presumían que podía ser, que me perdonen, alguien de la CEAMSE...” (sic.) (12/6/2013).

2/ Los familiares de la víctima:

En un programa de noticias se desarrolló durante dos emisiones (12/6/2013 y 17/6/2013) una teoría centrada en un enfrentamiento y/o venganza entre el padre biológico de la víctima y el “padrastró” (término que suele ser utilizado despectivamente en las coberturas y que no sólo apunta a desautorizar los nuevos vínculos familiares vigentes en nuestra sociedad actual, sino que tiende a marcar una aparente distancia afectiva como un modo de legitimar el despliegue de la mirada acusatoria sobre dicho sujeto). Según esta interpretación, y al señalarse al padre biológico como “especialista en reciclaje”, la aparición del cuerpo de la joven en la CEAMSE y de su cuaderno de comunicaciones en un contenedor conllevaría un mensaje implícito: el “padrastró” le estaría diciendo al padre biológico “Sos una basura”. El conductor avala y cierra la presentación de su teoría de los hechos interrogando a la audiencia: “¿Alguien está investigando esto o nosotros somos los únicos?”. Asimismo, en otro programa televisivo (14/6/2013) se interpretaron las declaraciones que la madre de la joven brindó a los medios de comunicación y el foco de los periodistas estuvo puesto en traducir sus muestras de “tranquilidad” como un índice de su posible participación en el crimen. De este modo, y para reforzar el sentido expuesto, se realiza una entrevista a un psiquiatra forense, quien señala una “incongruencia” entre la “des-afectivización” (sic) de la madre y el dolor más terrible que deviene de

la muerte de un hijo. El presentado como “especialista” destaca que la conducta acorde con la pérdida padecida hubiese sido mostrarse exaltada pidiendo “justicia” y “venganza”. Esta declaración es acompañada por imágenes de la madre de la víctima ante la prensa y por un graph que condensa y refuerza la interpretación descripta: “Me llama la atención la tranquilidad de la madre”.

En segundo lugar, se identifica la misma tendencia discursiva en la cobertura del homicidio de otra adolescente, en la que a lo largo de prácticamente todo un día (1/1/2015), los periodistas de una señal de noticias realizaron valoraciones incriminatorias sobre la madrina de la joven y su esposo (con quienes se encontraba de vacaciones la joven asesinada):

“Habló el papá (...) hace minutos nada más, dio a entender que no confiaba en el esposo de la madrina, hoy principal sospechoso de haber matado a su hija”. “Mi impresión es que no hay nadie más para detener”; “Ojo con la madrina”; “Tengo entendido que no la detenían porque estaba a cargo de una nena de 8 años”; “También puede ser que la tengan en la mira y estén esperando la declaración de este hombre allí detenido, para ver si la madrina lo encubrió o tuvo participación en esto (...) Lo que más llama la atención es que el papá de (...) confirmó que la búsqueda, cuando (...) está desaparecida, la hace con (...) Es muy fuerte lo que uno está diciendo, pero es así. Caminando junto a quien podría ser el asesino, el sospechoso (...) Nosotros los vimos, incluso, eran eso de la 3 de la madrugada (...) Bueno, claro, uno supone que si es el asesino, esto por supuesto todavía no se sabe, está sospechado, pero si es el asesino obviamente tiene que tratar de disimular (...) Y hay que ver, como indica una de las versiones, si este hombre retrasó la denuncia de pedido de paradero tras la desaparición de Lola”. “Este hombre, al único que se le ve la cara [vulnerando el derecho a la propia imagen, se visualiza una fotografía de la persona mencionada en su lugar de trabajo] el hombre que hoy está detenido, acusado de haber participado de este crimen, es la sospecha más fuerte que tiene la jueza. Pero vamos a ser claros en esto, por las contradicciones, hasta ahora no hay pruebas efectivas que lo incriminen en este crimen. Algunos testigos habían hablado de que lo habían visto en la playa. (...) Ha impactado, y mucho, que son los más cercanos de Lola, los que tenían que cuidarla, en los que la familia había confiado a que Lola pasara sus vacaciones”. “Todo se cierra en el círculo íntimo, es evidente” (sic).

En todas las interpretaciones consignadas a lo largo de los dos ejemplos se identifica el mismo patrón discursivo: la formulación de afirmaciones o sugerencias de participación en los homicidios, sin que el Poder Judicial lo haya hecho

de manera previa o sin dar cuenta de datos empíricos que respalden las sospechas insinuadas hacia el público. En este sentido, se advierte que las valoraciones se sustentan mayormente en la alusión de fuentes inciertas y no precisadas (“algunos testigos habían hablado”, “como indica una de las versiones”) y en apreciaciones personales de los comunicadores (“uno supone”, “me llama la atención”, “mi impresión es”). De este modo, el despliegue de estos enfoques transforma la indagación periodística en el desarrollo de ficciones lesivas para las personas y avasalladoras de sus derechos. Incluso, esto va más allá de un no respeto a la presunción de inocencia (cuyas implicancias ya han sido analizadas en el punto 1 de esta Guía) porque en varios de los casos se trata de señalamientos infundados que no parten de ningún dato obtenido de las respectivas causas judiciales (como las conjeturas sobre los trabajadores de la CEAMSE y los padres de la adolescente asesinada, cuya criminalización fue referida en este punto).

Sobre este aspecto específico, durante las Mesas de Trabajo se destacó que debe tenerse presente que la comunicación es un derecho, pero también un campo donde concurren otros derechos humanos que resultan lesionados a partir del privilegio de este tipo de modalidades que asume la práctica periodística.

Es una labor pendiente en los medios de comunicación poder ofrecer una representación de los casos policiales desde una dimensión que no contribuya a la culpabilización anticipada. En este sentido, sería conveniente recordar y aplicar los principios de la Doctrina Campillay (1986), en la cual la Corte Suprema de Justicia sostiene que los medios de comunicación no incurrirán en la difamación de terceros, si en la presentación de los casos:

- a) Difunden información atribuyendo directamente su contenido a la fuente correspondiente. Esto permite al público conocer el origen de las informaciones emitidas. Si bien la veracidad de lo dicho por la fuente no es responsabilidad de los servicios de comunicación audiovisual, sí lo es la invención de fuentes y/o la falsa atribución de testimonios a las mismas como modalidades para legitimar aquello que se comunica.
- b) Privilegian una narrativa conjetural. Si bien es recomendable el uso del tiempo verbal de manera potencial, muchas veces ello no resulta suficiente recaudo para que la cobertura no devenga incriminatoria y, por ende, dañe a los aludidos. Es importante que la información que se difunda dé cuenta, en su modalidad de expresión, de que los datos que se ponen a consideración de las audiencias

no constituyen aún resultados judiciales, sino que son especulaciones, primicias e inferencias periodísticas.

- c) Mantienen la reserva de la identidad de los presuntos implicados en el hecho ilícito. Esto contribuye a evitar la promoción de estigmatizaciones y de los efectos de una condena social. La reserva o la información de la identidad de los presuntos implicados en el hecho ilícito debe ser evaluada en cada caso, bajo el criterio de información socialmente necesaria, el tipo de delito y los derechos que asisten a todos los ciudadanos.

Es importante que las informaciones parciales sobre las que avanza la investigación periodística se complementen con la permanente aclaración a las audiencias de que el carácter de los hechos y quiénes son las personas responsables de los mismos deberán determinarse en el proceso judicial. Durante el desarrollo de dicha investigación, es recomendable difundir las versiones de las distintas partes implicadas atribuyéndolas a diversas fuentes. Muchas veces, la preeminencia del relato de la víctima y de sus representantes omite las contemplaciones judiciales y humanitarias que corresponden a la defensa de los acusados. De acuerdo con esto, la comprensible empatía que los medios construyen con quienes han sido perjudicados funciona en detrimento de una representación más clara, realista y compleja de los procedimientos judiciales y de la importancia de la sentencia, más allá de la condena efectiva valorada únicamente en cantidad de años de encierro. Finalmente, una vez obtenidos los resultados judiciales, resulta imprescindible comunicar tanto las culpabilidades como las absoluciones determinadas.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA UTILIZAR UNA PERSPECTIVA NO INCRIMINATORIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO PERIODÍSTICO DE LA CRÓNICA POLICIAL:

- a) Difundir información respaldada por fuentes concretas y enunciadas. Esto permite al público conocer el origen de las informaciones emitidas. Si bien la veracidad de lo dicho por la fuente no es responsabilidad de los servicios de comunicación audiovisual, sí es su responsabilidad la insuficiente, improvisada y/o la falsa atribución de testimonios como modalidad para legitimar aquello que se comunica.
- b) Comunicar las versiones de las distintas partes implicadas en el caso, para contribuir a brindar una representación más clara, realista y compleja de los procedimientos judiciales y de la importancia de la sentencia.
- c) La reserva o la información de la identidad de los presuntos implicados en el hecho ilícito debe ser evaluada

en cada caso, bajo el criterio de información socialmente necesaria, el tipo de delito y los derechos que asisten a todos los ciudadanos.

- d) Aclarar a las audiencias que el carácter de los hechos y quiénes son las personas responsables aún deben establecerse a partir del proceso de investigación judicial.
- e) Privilegiar una narrativa condicional para que la información que se difunda dé cuenta, en su modalidad de expresión, de que los datos que se ponen a consideración de las audiencias no constituyen aún resultados judiciales, sino que son especulaciones, primicias e inferencias periodísticas.
- f) Comunicar las culpabilidades y absoluciones que determinen los resultados del proceso judicial completo. Esto contribuye a evitar que los casos queden en el olvido y a que la condena social prevalezca sobre lo que es obligación de las instituciones del Estado de derecho.
- g) Tener presente que la comprobación judicial de la culpabilidad de una persona no la excluye del tratamiento digno y respetuoso.

7. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN CONSTATADA EN FUENTES FEHACIENTES, EN LUGAR DE PRIVILEGIAR LA PRIMICIA COMO ÚNICO CRITERIO NOTICIOSO.

Ante el desarrollo de hechos policiales, es necesario que los servicios de comunicación audiovisual provean información con el fin de contribuir, por un lado, al esclarecimiento de las circunstancias y, por el otro, a la posible y deseable administración de justicia por parte del poder encargado de desempeñar dicha función. Para cumplir este objetivo, resulta imprescindible que los medios difundan sólo aquella información comprobada a través de fuentes confiables y debidamente chequeadas, en lugar de subordinar la práctica periodística a la difusión de la primicia sin reparar en la comunicación de datos no confirmados y en sus posibles efectos. De ahí que sea importante, por un lado, privilegiar la difusión de los informes judiciales y hacerlos accesibles al entendimiento de las audiencias, mediante la explicación de su vocabulario específico. Esto implica considerar, especialmente como fuentes rigurosas, el testimonio directo de los funcionarios que trabajan en el caso, la lectura de expedientes y sentencias y la cobertura de los juicios orales. Y, por el otro, promover abordajes integrales de los casos a partir de la diversificación de fuentes, visibilizando los distintos enfoques que puedan estar involucrados en cada situación.

No obstante estos requerimientos, en las coberturas prevalecen tendencias riesgosas en torno a la construcción de las fuentes informativas, como por ejemplo:

- a) La utilización de las redes sociales, de los videos captados por cámaras de seguridad o de aquellos provistos por aficionados como fuentes autosuficientes.

Entre los varios casos en los que se advierte este recurso, aquí referimos a dos ejemplos emblemáticos. Por un lado, en la cobertura del asesinato de una niña (8/1/2014, Actuación N° 26/2014), la presentación, por parte de un noticiero, de un video registrado por una denominada "cámara de seguridad" (en donde se ve difusamente a dos personas adultas y un niño caminando y llevando un carrito de bebé cubierto con una tela blanca) como un hecho comprobado, cuando dicha cinta aún está siendo analizada por el Poder Judicial. El material se exhibe 37 veces en pantalla, mientras los comunicadores expresan: "Tenemos en exclusiva el video en el que se vería a los padres trasladando el cuerpo de la niña", "éste es el video donde se observa a la mamá, ahí está, ahí la vemos junto a su pareja y otras personas, supuestamente familiares llevando un carrito de bebé en cuyo interior, tapado, habrían trasladado el cuerpo de Priscila", "estas imágenes son de una cámara de seguridad de una estación de servicio ubicada tan sólo a una cuadra de la casa familiar donde la nena habría fallecido producto de, dicen, una golpiza", "este material es parte de las pruebas que están analizando los investigadores y complicaría a la pareja", "las imágenes captadas por la cámara de seguridad son uno de los elementos clave que tiene la justicia, complica y mucho la situación de los acusados", "imágenes claras, contundentes" (sic).

El video es presentado como exclusivo y como posible prueba en la causa para luego ser referido como "evidencia irrefutable" que incrimina a los sospechosos. De esta manera, se observa cómo la televisión, de modo autónomo, legitima fuentes, cita datos y reconstruye el caso anticipando, incluso, un juicio condenatorio, una sentencia que aún no existe, pudiendo, incluso, entorpecer el desarrollo de la causa.

Por otro lado, el ya mencionado caso del asesinato de un policía, cuya cobertura mediática implicaba irresponsablemente a un grupo de jóvenes del barrio Zavaleta (18/8/2013, Actuación N° 629/2013). En este ejemplo se advierte que las referencias de los periodistas sobre estos adolescentes ("Una banda que mete miedo [...] porque son jóvenes, son ladrones y algunos de ellos han cometido asesinatos") son acompañadas con la visualización en pantalla de fotografías de adolescentes que, en primer lugar, no están vinculados con el hecho y que, además, fueron extraídas de la red social Facebook. De

esta manera, y al igual que en el ejemplo anterior, la veracidad de la fuente se construye a partir de una mera exhibición televisiva y no de la constatación previa a su difusión. Si bien la lógica de la primicia muchas veces lleva a los periodistas a saltar los pasos de verificación necesarios para la comunicación de información rigurosamente chequeada, es importante destacar que esta práctica pone en riesgo, además de la veracidad y rigurosidad informativa, la integridad de las personas implicadas o referidas en la construcción de la noticia -incluso sin relación judicial con el caso-. De ahí que es preciso destacar que Internet, más allá de las páginas web institucionales, de las páginas oficiales y de los medios de comunicación, es una fuente de información que requiere de una atenta confrontación con otras fuentes más fidedignas.

b) El privilegio de testigos ocasionales, con poco o ningún vínculo con el entorno social afectado por el hecho.

En la referida cobertura del homicidio de una niña (8/1/2014, Actuación N° 26/2014), se realizó una entrevista al dueño de la estación de servicio, lugar en el que estaba colocada la cámara de seguridad que habría permitido captar el presunto traslado de su cuerpo sin vida. El intercambio se produce del siguiente modo y haciendo referencia a las imágenes del video que muestran a un hombre y a una mujer trasladando un bulto en un cochecito:

—Periodista: Para vos, ¿hay dudas que son los padres de (...)?

—Dueño de la estación de servicio: Sí, son los padres, se nota que el carrito está pesado, tomaron por la calle Mitre camino al puente y no por la de atrás que es de tierra y se les hubiera dificultado arrastrarlo.

—Periodista: Aclaremos que vos sos vecino y conocés mucho a esta gente, ¿cómo era esta gente?

—Dueño de la estación de servicio: Se escuchaban gritos de la madre como que retaba a la nena (...) era gente muy rara, reservada (...) hace poco tiempo que vinieron a alquilar, y la chica menos, hace semanas porque antes vivía con el padre (...) y era una chica que se ve que los padres no la querían.

—Periodista: [Avanzada la entrevista reincide en el foco culpabilizador de sus preguntas] ¿Para vos quedan dudas?, ¿esta es la madre y el padrastro de la nena?

—Dueño de la estación de servicio: Sí, son los padres y van llevando el autito éste con la chica muerta adentro, ya que lo llevan cubierto (...) (sic).

El intercambio deja en evidencia cómo el entrevistado

se convierte en personaje para una escena que así lo construye: el aporte de un testimonio funcional para reforzar especulaciones sobre los implicados en el caso, respaldadas en la endeble referencia a que “conocía mucho” a esa familia que “hace poco tiempo” se habría mudado a la zona. De este modo, es importante considerar que el privilegio de voces ocasionales puede resultar perjudicial para la rigurosidad periodística, en tanto sólo contribuye a la instalación y difusión social de versiones que sustentan su autoridad en la simple mostración televisiva, pero que no están legitimadas por los datos investigativos que aún están en proceso de construcción. Creer que la cercanía geográfica constituye, per se, un dato relevante debilita la importancia que poseen las fuentes para la construcción de la información.

c) La transformación del periodista en fuente exclusiva de los casos.

Durante las Mesas de Trabajo con comunicadores, las distintas perspectivas coincidieron en que se trabaja frente a una ausencia de fuentes especialistas, ya sea por un desconocimiento respecto a cuáles son las voces específicas y autorizadas que deberían o podrían ser convocadas en cada caso o por la dificultad de acceder a las mismas. Frente a esta problemática, se subrayó el desarrollo de tendencias de trabajo sustitutivas, como la conversión del propio periodista en fuente, que se permite formular dichos encadenados a partir de fórmulas lingüísticas indeterminadas (“me dijeron”, “se dice”) o autorreferenciales (“creo que”, “para mí”) que se presentan como respaldo discursivo que autoriza la información. Lo dicho puede ejemplificarse en la modalidad de comunicación del homicidio de una adolescente, ya referida anteriormente: “Mi impresión es que no hay nadie más para detener”; “Ojo con la madrina”; “Tengo entendido que no la detenían porque estaba a cargo de una nena de 8 años” (sic). (1/1/2015).

d) La construcción de analistas y/o criminólogos mediáticos.

Durante la cobertura de otro caso ya mencionado de una adolescente asesinada, y a pocas horas de confirmarse la muerte de la joven y el hallazgo de su cuerpo, un programa de noticias interpreta el hecho como un caso de violación, cuando aún las pericias no habían confirmado ese dato (que, además, luego sería desmentido). Sin embargo, esta lectura se instala a partir de la presentación de una perito criminóloga que, acompañada de la visualización ininterrumpida de fotografías de la víctima y del titular (“Cómo actuar ante un violador”) y su volanta (“El crimen de (...)), formula una pericia mediática acerca de esa violación, y dice:

“La primera respuesta tiene que ser una confrontación verbal tratando de disuadir al atacante (...) hay que tratar de evitar llorar, ponerse nerviosa, tomar una actitud demasiado pasiva porque (...) lo consideran como que está participando esta mujer que está siendo objetivada (...) Generalmente las víctimas que han fallecido fueron por sumisión (...) Si vos participás, te objetivás más (...) Si es sádico, las lesiones serán de más magnitud (...) Esto lo tiene estudiado el FBI (...) Publicó en el año setenta y pico y lo volvió a publicar en el dos mil coso un libro que se llama: Homicidios sexuales: patrones y motivos y en eso indica los lineamientos que ellos recomiendan para tratar de evadir un homicidio sexual” (sic). (Actuación N°197/2013, 11/6/2013).

De esta manera, se realiza un juego de compensación de autoridad entre las imágenes de la víctima y la palabra dicha por quien es presentada como una especialista. Sus dichos trabajan en la línea de sospechas y prejuicios que supone el programa. Es decir, que el carácter intrínseco de demostración que tiene una fotografía por presentarse como un fragmento de la realidad (Sontag, 2006) es utilizado aquí como un respaldo virtual para autentificar la tesis de una violación que carece de pruebas fácticas y para habilitar el desarrollo de un informe preventivo. A partir de la presentación de las fotografías de la joven asesinada como marco del discurso, “los acontecimientos son sometidos a usos nuevos, reciben nuevos significados que trascienden las distinciones entre (...) lo verdadero y lo falso, lo útil y lo inútil (...) La fotografía es uno de los principales medios para producir esa cualidad que borra dichas distinciones cuando se la adjudica a las cosas y situaciones (...) Nosotros hacemos de la fotografía un medio por el cual, precisamente, todo puede decirse y cualquier propósito favorecerse. Lo que es discontinuo en la realidad se une con las imágenes” (Sontag, 2006: 244-245).

Y es así como el caso mediático (la creación resultante del vínculo entre palabra e imagen) acaba superponiéndose y distorsionando el caso real.

Las cuatro prácticas mediáticas relevadas dan cuenta de la presentación de versiones como hechos comprobados y avalados por la simple mostración televisiva y esto deviene en un perjuicio para las audiencias, para el proceso investigativo y para los mencionados o señalados en las coberturas (además de un daño particular a la seriedad y relevancia de la tarea periodística).

En este sentido, es importante notar que la difusión de lecturas no chequeadas inicia un imparable proceso de circulación y repetición social que contribuye a reforzar los dichos iniciales, de manera que éstos lleguen incluso a prevalecer frente a los datos que confirma o refuta la investigación judi-

cial. De ahí que resulta imprescindible remarcar que acceder a las fuentes correspondientes para chequear la información a difundir constituye una responsabilidad de los servicios de comunicación audiovisual y un derecho de las audiencias.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN CONSTATADA EN FUENTES FEHACIENTES, EN LUGAR DE PRIVILEGIAR LA PRIMICIA COMO ÚNICO CRITERIO NOTICIOSO:

- Promover abordajes integrales a partir de la diversificación de fuentes, visibilizando los distintos enfoques que puedan estar involucrados en cada situación. A su vez, resulta importante identificar y comunicar el carácter y los datos profesionales de las fuentes ante la audiencia, a fin de que ésta pueda recibir y valorar la información en virtud de dichas consideraciones.
- Difundir los partes y demás informes judiciales y hacerlos accesibles mediante la explicación de su vocabulario específico. Esto implica considerar, especialmente como fuentes rigurosas, el testimonio directo de los funcionarios que trabajan en el caso, la lectura de expedientes y sentencias y la cobertura de los juicios orales.
- Tomar los recaudos para garantizar el acceso público a la información provista en un juicio y/o para televisar esta instancia de los casos en horario ATP sin vulnerar los derechos de la audiencia integrada por niñas, niños y adolescentes. Esto supone respetar y aplicar lo que la LSCA establece en su artículo 68, esto es, explicitar la advertencia de que los materiales informativos que se ponen a consideración de las audiencias requieren de la contención y explicación de un adulto. Esto puede ser necesario, por ejemplo, ante la difusión del intercambio entre un juez y un acusado de violación que en su declaración puede describir y ser indagado en los detalles del hecho (televisación del juicio por la violación y asesinato de dos turistas francesas en Salta, 22/5/2014, Consulta N° 509/2014).
- Evitar centrar las coberturas en la difusión de las opiniones de testigos ocasionales, ya que sólo tienen validez ilustrativa. De ahí que es aconsejable considerar estos testimonios con precaución y no como base para ampliar especulaciones o reforzar rotulaciones sobre los implicados.
- Procurar no utilizar las redes sociales, los videos captados por cámaras de seguridad o aquellos provistos por aficionados como fuentes autosuficientes. Estos materiales requieren de la confrontación con otras fuentes más fidedignas y sólo pueden ser validados como pruebas por las autoridades competentes en la investigación.

- Prescindir de la narrativa de la víctima y/o allegados en estado de shock, en tanto sus opiniones pueden estar alteradas o atravesadas por el trauma sufrido y convertirse en el despliegue argumental y/o justificador de otros discursos que tienen que ver con políticas de seguridad o administración de la justicia.
- Evitar la exageración sin sustento en el anuncio de la declaración de algún implicado o sobre los resultados de alguna pericia generando expectativas excesivas (“las pruebas de la autoría”; o mediante adjetivaciones, tales como “definitivas”, “reveladoras”, siempre que no lo sean).
- Practicar un uso responsable de la imagen comoreferencia o complemento informativo. Para ello es importante:
 - a) Confirmar que la imagen guarde correspondencia con el caso que comunica el discurso periodístico. El uso de imágenes de archivo no chequeadas con rigurosidad puede poner en riesgo la integridad de las personas erróneamente visualizadas.
 - b) No utilizar fotografías de los implicados como respaldo virtual para autorizar versiones no comprobadas sobre el hecho.
- Tener presente que la simple mostración mediática no autoriza ni legitima la veracidad de lo referido. Chequear la información a difundir en las fuentes que corresponda es responsabilidad de los servicios de comunicación audiovisual.

8. PROCURAR QUE EL RELATO AUDIOVISUAL RESPETE Y NO INTERFIERA EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL-JUDICIAL EN CURSO.

El tiempo del trabajo periodístico y el de la labor judicial no son iguales. Del mismo modo, el material periodístico no es equiparable a la prueba judicial. Asumir esta distinción resulta imprescindible para que el relato mediático procure traducir su lógica de la velocidad y la inmediatez en una vigilancia y un resguardo de los tiempos de actuación del Poder Judicial. En este sentido, es importante destacar que la administración de justicia, en el marco del respeto de los derechos humanos, implica garantías procedimentales que forman parte del sustento del estado de derecho. Su violación expone a la sociedad toda a cometer actos injustos, demagógicos, irreparables, por lo cual debe haber un respeto y una celosa atención a los tiempos razonables de la “justicia”. El tiempo periodístico responde a otras necesidades, las cuales no deben ser utilizadas para avasallar los tiempos judiciales.

Por ello, es necesario, por un lado, que los servicios de comunicación audiovisual no intenten reemplazar la labor del campo judicial, por ejemplo, mediante la anticipación de pronósticos y sentencias, el desarrollo de juicios paralelos o la promoción de valoraciones que impliquen la pérdida de derechos. Y, por el otro, es necesario que sustenten la dimensión crítica en la información de los incumplimientos del proceso judicial, de las garantías y de la ausencia de respuestas ante las legítimas demandas sociales en materia jurídica.

No obstante estos señalamientos, en el relevamiento de las coberturas de casos policiales se pueden distinguir un conjunto de modalidades que pueden impactar negativamente sobre el desarrollo del procedimiento judicial, sobre la percepción social del mismo y sobre las demandas que, luego, las audiencias reclaman respecto de cada caso mediatizado:

- a) La transformación de la conjetura en dato informativo.

En la comunicación del caso de una joven de 12 años que estuvo un día desaparecida de su casa (Actuación N° 296/2014), se visualiza en pantalla el registro de las llamadas cámaras de seguridad aledañas a su vivienda, mientras los periodistas desarrollan un análisis en vivo de lo que dichas imágenes permitirían inferir: “Ahí está la imagen de ella. Primero caminando y después corriendo”, “Pero iba sola [...] dicen, en la investigación, trascendió que después de pasar por ahí caminando fue hasta una plaza y ahí la vio una vecina. Con lo cual ya, más o menos, se fue armando todo el itinerario que ella llevó a cabo [...] Ella sale de la casa y cierra con llave [...] sólo dos minutos después de pedir auxilio. No le dio tiempo al papá que estaba muy cerca de llegar”, “claro, acá se descarta que haya habido alguien con ella en ese momento, que la haya sacado por la fuerza y que la haya llevado por la fuerza”, “igual, da la sensación con esa corrida, no sé, si fue al encuentro de alguien, si se sintió perseguida por alguien. Recordemos lo que dijo el papá, que ella estuvo retenida [...] no se fue libremente de su casa. El hecho de que no haya salido junto a una persona no significa que no haya estado, no se haya sentido obligada a salir de su casa en esas condiciones”, “por ahí puede ser un caso [...] a través de las redes sociales te extorsionan, te obligan a hacer algo, diciendo: ‘vamos a mostrar tal cosa o tal otra’. No sé” (sic). (25/7/2014).

El privilegio y la difusión de hipótesis, que en el momento enunciativo aún carecen de respaldo fáctico o judicial, también se identifica en la citada cobertura del asesinato de una joven argentina en la costa uruguaya (Actuación N° 3/2015). Durante la cobertura de dicho caso, en un noticiero se presenta a un psiquiatra (sin que se informe su número de

matrícula profesional), quien desarrolla junto con una periodista una tesis, sustentada en su opinión personal, respecto del entorno de la víctima y la posible culpabilidad de la madrina de la joven:

—Psiquiatra: El chiquito de 14 años, no lo veo enfrentándose a una jovencita de 15, ¿no? (...) No puede (...) No lo veo a ese chico en un mano a mano. Puede ser entonces un tipo de agresión producto del varón de la casa. Estamos haciendo una suposición muy grande y nada más (...) Lo dejaría un poquito aparte a este hombre [el esposo de la madrina de la joven]. Y otra cosa que dejaría aparte es el tema del sexo en sí. Todos los informes forenses (...) lo descartan (...).

—Periodista: Estoy pensando que el tema sexual... Por ahí no se condice con un intento de abuso sexual, quizás no se llegue a eso por parte del perverso, sino es la posesión o el sometimiento en ese momento de la persona (...).

—Psiquiatra: Así, en la tesis nos queda un personaje que es la madrina (...) [Se presenta un fragmento de una entrevista telefónica realizada a esta mujer durante otro programa].

—Periodista: ¿Qué es lo que podés analizar (...) después de haber escuchado a la madrina?

—Psiquiatra: Vamos a salir de este caso para hablar de generalidades. ¿Cuándo una mujer puede tener una actitud agresiva sobre otra mujer? Cuando la ve como una competencia sexual sobre su marido...

—Periodista: Cuando la ve o cuando se imagina que lo es...

—Psiquiatra: (...) O cuando ve actitudes del marido hacia la chica, la que está en su casa... Lo ve transformado, excitado vamos a decir, para hacerlo en criollo. Entonces, en ese momento, la mujer puede tener (...) celos importantes y ahí sí puede agredir (...) Si hubiese sido un ataque del varón hacia la niña, eso hubiera motivado que la mujer no sea, digamos, cómplice, entre comillas, del varón, porque a ella le produciría dolor que el marido esté en esa situación. En consecuencia, tal vez hasta lo acusaría (...) De todos modos, no se puede descartar el círculo familiar (...) (sic). (4/1/2015).

Como se ve, el diálogo se sustenta en un conjunto de afirmaciones que no atienden a un solo elemento de la investigación policial ni judicial. Se introducen ocurrentes suposiciones y se las pone al aire como si se trataran de datos o informaciones cuando, en realidad, forman parte de una trama novelesca que acompaña una cobertura que carece de materiales nuevos. En tal sentido, resulta recomendable evitar este tipo de giros narrativos, dado que los mismos aluden a personas, situaciones, momentos y contextos que posiblemente no

tengan relación alguna con el caso y que, en su exhibición, traducen el rumor en información. Este tipo de operación retórica se convierte en una demanda mediática hacia el poder judicial, el cual pareciera tener que desmentir lo que, en principio, carece de fundamentos para la indagación del caso.

b) La invención del dato informativo.

En el marco del caso del asesinato de una joven de 12 años (Actuación N° 296/2014), aun cuando los funcionarios judiciales señalan que falta la declaración de la niña en cámara gesell, un periodista comunica a modo de primicia: "Trascendió la palabra de lo que la chica estaría contando y en realidad esto te lo doy como información y esto tiene mucho que ver con lo que cuenta la familia de (...) porque lo que cuenta la chica es que tuvieron una pelea con los padres. Esta parte no la habíamos conocido en el momento que se daba la búsqueda. Una pelea menor, común, entre padres e hijos, que tenía que ver con un viaje que quería hacer la nena y que los padres no la dejaban [...] La nena se enojó y se fue para La Cava. Esto es lo que habría declarado la menor" (sic, 25/4/2014). La misma tendencia se identifica en la sucesión de titulares que formula otro programa de noticias sobre el mismo caso: "Habló (...): 'no conocía al chico con el que dormí'"; "Salí a caminar porque me sentía triste"; "Me dio confianza por eso me quedé con él" (26/4/2014).

Como evidencian ambos ejemplos, las expresiones periodísticas instalan y legitiman ante el público una información que no está avalada por fuentes comprobables. De hecho, refieren a situaciones que aún no han ocurrido y dan por válidas informaciones de hechos que no han sucedido. Adelantar una pericia que todavía no se ha realizado configura un error que sería deseable evitar, no sólo en relación con los derechos de las audiencias, sino también por su posible impacto en la misma causa judicial.

c) El desarrollo de entrevistas que intentan trazar y comprobar las conjeturas personales de los comunicadores sobre las causas del hecho.

La inclusión acrítica de inferencias personales, muchas veces atadas a preconceptos de diferente tipo por parte de quienes comunican, induce a incorporar variables que no refieren al caso (aunque así sean presentadas), sino a los prejuicios de quienes comunican.

Esta modalidad se ve representada en la entrevista de un periodista a una familiar de la joven, de quien no se sabía el paradero y cuyo caso obtuvo una alta visibilidad mediática (Actuación N° 296/2014):

—Periodista: ¿Por qué tuvo esa reacción de irse, de llamar al padre, de pedir que viniera y después no lo esperó y se fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué te imaginás que le pasó? Vos sos la tía (...) la tenés que conocer muy bien. (...) Perdoname que me meta con este tema, y vos poneme el límite hasta dónde me permitís llegar, por supuesto. ¿Ella es adoptada? ¿La adopción a ella le pesa?

—Tía: No, ella está feliz (...) con su mamá, con su papá. Tiene un montón de primos, tíos.

—Periodista: Seguro que ustedes le dieron un hogar con todo el amor del mundo. Nos estamos refiriendo a que, por ahí, ella sigue en contacto, ¿ella sigue en contacto con los hermanitos biológicos? ¿Y con los padres?

—Tía: No.

—Periodista: Puede ser que se haya establecido algún contacto, que la mamá biológica la haya llamado, le haya generado este tipo... ¿te imaginás algo de eso? ¿O que los hermanitos le hayan contado algo de los padres?

—Tía: La realidad es que yo no creo (...).

—Periodista: ¿Me permitís saber cómo era (...) como estudiante? Tiene una o dos materias abajo, ¿eso no pudo haber sido el motivo?

—Tía: Ya las levantó (...).

—Periodista: Es decir, no hay una razón concreta para explicar, por ahora, la angustia (sic, 25/7/2014).

Este tipo de preguntas -además de invasivas- repone un conjunto de prejuicios respecto de la adopción, los vínculos afectivos de una niña adoptada, el rendimiento escolar, como si fueran cuestiones que determinarían la desaparición de la joven de su hogar. El caso, así, se desplaza a determinaciones que no dan cuenta de las posibles motivaciones que podría haber en las relaciones afectivas de la niña, sino en el supuesto de que los vínculos que se establecen en el marco de una adopción presuponen conflictividad. O, en la misma lógica, que el rendimiento escolar sería una explicación de su desaparición. Nuevamente, en esta alusión se proyectan prejuicios sobre el desempeño escolar como si se tratara de una explicación de un hecho. Es decir, voluntariamente o no, se simplifica un hecho a partir de las ocurrencias de un comunicador. Esas ocurrencias, además de lesivas, dan cuenta más bien de sus prejuicios y no de los hechos sobre los cuales se realiza la cobertura, la investigación y la búsqueda y producción de una noticia.

d) La formulación de valoraciones premeditadas sobre el funcionamiento del Poder Judicial ante el desencadenamiento de un caso policial.

A partir de la identificación de un presunto delincuente mediante las denominadas cámaras de seguridad de un municipio, un comunicador expresa al público: "Habrà que ver el juez con qué tipo de vara lo mide. Si lo mide con sus antecedentes o le ofrece el camino garantista y entonces en poco tiempo quedaría en libertad" (sic, 9/4/2014). Este tipo de afirmaciones, que reclaman sentencias que pueden colisionar con los derechos que asisten a todas las personas, se convierten en valoraciones y prescripciones que persiguen un tipo de decisión que desconoce los necesarios mecanismos judiciales que, entre otros, posee el mismo comunicador que los profiere. Además, presupone que las decisiones de un juez son, de antemano, ilegítimas, toda vez que su decisión no coincida con la del comunicador. Así, el poder judicial queda entrampado en dos opciones: o hace lo que le reclama el comunicador, o se convierte en una garantía para la vulneración de derechos. Dicha lógica, lamentablemente, se convierte en el fundamento para que no haya funcionamiento ni ordenamiento jurídico. Las valoraciones efectistas poseen la debilidad de toda simplificación: un hecho policial no es sencillo, y su complejidad exige la cautela para que las decisiones que se tomen sean las que se desprenden de la investigación judicial. Por más que ello implique asumir otros riesgos sociales, es importante que los comunicadores adviertan la delicadeza que posee cada caso. Y, entonces, no se trata de una falsa dicotomía entre garantismo o no garantismo, sino, en todo caso, el respeto por las leyes, el código penal y los procedimientos judiciales o su avasallamiento.

En conjunto, estos ejemplos dan cuenta de que en la cobertura de casos policiales prima "la aproximación subjetiva a los hechos y, por tanto, una construcción personal que se desprende del flujo concreto de los acontecimientos" (Rey, 2007: 11), en lugar de colocar los hechos por encima de las conjeturas. La incuestionada necesidad del dato inmediato, en concordancia con las presuntas necesidades del tiempo periodístico y del mentado "minuto a minuto", pareciera forzar a construir huellas detrás de cada signo y a presentar como datos fehacientes fragmentos y elementos narrativizados, connotados y sesgados con la única función de no interrumpir el flujo informativo. Y esa práctica hace que la multiplicación de signos pierdan relación con el relato, llegando incluso a (re) inventar los casos y la investigación de los mismos.

Durante las Mesas de Reflexión y Debate se relacionó esta modalidad con el trabajo bajo la lógica del minuto a minuto, destacando que esta práctica dificulta un posible seguimiento informativo riguroso de las investigaciones policiales y judiciales. Además, el hecho de que los periodistas se conviertan en voceros de la información que difunden otros

medios deviene, como se planteó en las Mesas de Trabajo, en que “los casos se cubren rápido y, en esa velocidad, mal”. Y es así que esta “velocidad de la información” favorece el desarrollo de un estilo sustentado en la difusión de diagnósticos, opiniones y análisis de los casos sin aguardar las pericias o sin chequear los datos. Las consecuencias de estas prácticas pueden resultar lesivas no sólo para los mencionados, sino también para las audiencias así como para el mismo profesionalismo periodístico.

Este fetiche, y la consecuente presión laboral inherente a la forma de utilización del “minuto a minuto” -cuyo aporte a la práctica periodística ha sido cuestionado en prácticamente cada lugar donde se lo ha utilizado y que, por ello, ha caído en desuso-, se constituye en un factor central en el avasallamiento de los derechos de los invocados en las crónicas periodísticas y de las audiencias. Ello contribuye al debilitamiento de la credibilidad de los servicios de comunicación audiovisual, a la vez que resiente el propio trabajo de los periodistas.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA PROCURAR QUE EL RELATO AUDIOVISUAL RESPETE, NO INTERFIERA, NI ADELANTE HIPÓTESIS SOBRE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL-JUDICIAL EN CURSO O SUSTITUTIVAS DE LA MISMA

- Vigilar y resguardar los tiempos de actuación de la justicia. Para ello resulta necesario:
 - a) Reconocer y comunicar las facultades y competencias de las distintas instancias de la investigación y de los profesionales intervinientes (fiscales, jueces, entre otros).
 - b) No intentar reemplazar de manera permanente la labor del campo judicial mediante la anticipación de pronósticos y sentencias y el desarrollo de juicios paralelos.
 - c) Realizar un seguimiento informativo de las investigaciones en curso, en lugar de privilegiar el espectáculo y la generación de hipótesis ad hoc por parte de los medios.
 - d) Brindar a las audiencias la información comprobada en fuentes fehacientes.
 - e) Advertir la importancia del campo judicial y la necesidad de su actuación libre de presiones como condición para la consolidación del estado de derecho.
- Procurar que la presencia de los periodistas en el lugar de los hechos no suponga una alteración de las condiciones y posibles pruebas de la causa.
- Privilegiar la comunicación de los hechos por encima de la difusión de conjeturas. Es conveniente que estas últimas sean presentadas ante el público como tales.

9. CONTEXTUALIZAR LOS CASOS PARA NO INCURRIR EN LA DIFUSIÓN DE SERIALIZACIONES FORZADAS Y REPRESENTACIONES “FATALISTAS” Y TERRITORIALES QUE PROPICIEN SENTIDOS ATEMORIZANTES EN LAS AUDIENCIAS.

Cuando los hechos violentos se vuelven noticia adquieren un alto impacto en la sociedad. De ahí que es sumamente importante aplicar ciertos criterios para procurar una comunicación rigurosa y cuidada de cada caso particular. Entre estos criterios de difusión se distingue la necesidad de precisar ante el público las especificidades de la situación, el lugar de los hechos, las condiciones de la víctima y del victimario. A su vez, esto supone, por un lado, presentar los casos respetando las tipificaciones disponibles y vigentes en el Código Penal (tanto para referir a los actos como a las personas que los llevan a cabo); definir si se está o no frente a un delito (dado que muchas veces se presentan como “delito” hechos que no configuran un acto de tales características); diferenciar entre el delito contra la propiedad y/o los bienes personales y la situación más sensible que representa un crimen contra la integridad de la persona y la vida humana; y no abordar como un caso meramente policial los hechos que pueden tener que ver con violencia de género, violencia familiar o doméstica, violencia en el barrio o enfrentamientos territoriales. Conforme con esto, resulta imprescindible comunicar si el caso se inscribe en alguna de las mencionadas problemáticas sociales, dado que posibilita reponer la complejidad que lo atraviesa y la importancia social del mismo. Y, por otro lado, la aplicación de estos criterios implica privilegiar el reconocimiento y análisis de las particularidades de cada caso, en lugar de disolverlas bajo generalizaciones inconvenientes que distorsionan el hecho y la percepción del mismo.

Sin embargo, la necesaria contextualización de los casos es reemplazada muchas veces por el privilegio de otras modalidades de comunicación de los hechos:

- a) El relato serializado que establece continuidades entre acontecimientos que no necesariamente responden a un mismo patrón.

Si bien es importante marcar regularidades, a veces ciertos énfasis en el modo en que se nombran los hechos hacen hincapié en instalar la similitud de casos oscureciendo especificidades. Esta práctica deriva en homologaciones y generalizaciones que terminan siendo inapropiadas para la correcta comprensión de cada caso.

Lo dicho se puede identificar, al menos, en dos ejemplos analizados por la Defensoría. En primer lugar, en la comunica-

ción de un intento de robo a una mujer embarazada que fue baleada y perdió al bebé, los noticieros establecen una serialización con un caso anterior: "Es probable que recordemos el caso de Carolina Píparo"; "el fantasma del caso Píparo (...) lo mismo, casi calcado"; "otra vez motochorros, otra vez pasó en La Plata y con otra mujer embarazada" (sic). (6/8/2013). Esta asociación visibiliza los puntos en común, pero disuelve otros como la brecha de clase entre uno y otro, que resulta evidente en la trascendencia mediática y la diferencia en el tiempo dedicado a cada uno de los hechos. Así como el caso Píparo, de hecho, quedó como referencia respecto de un tipo de delito, el que refiere al caso aquí presentado no posee ningún lugar en el acervo mediático.

En segundo lugar, en la cobertura de los casos de violencia denominados por los medios como acciones de "linchamiento" (Actuación N° 129/2014) se privilegia la enumeración y acumulación de los casos para abonar el sentimiento de la denominada "inseguridad social". Y esta perspectiva deja de lado la complejidad de los hechos como actos de violencia social y que son expresión de procesos multicausales. Cuando se elude o desconoce dicha complejidad tienden a emerger falsas polémicas alrededor de los hechos, el alcance de los mismos y su análisis, lo que deriva en formulaciones maniqueas acerca de la problemática en cuestión. Desde ese maniqueísmo, muchas veces se termina promoviendo -voluntaria o involuntariamente- una división social entre personas legítimas y personas ilegítimas. Resulta fundamental reconocer el ordenamiento jurídico del Estado de derecho, dado que, de lo contrario, se corroen los mecanismos sociales e institucionales existentes para que la sociedad responda, de manera pacífica, justa y democrática, a sus propias situaciones conflictivas.

Esto se observa en los modos de titular ("Ya son 12 casos en 10 días" -2/4/2014-, "Palermo: otro robo y más miedo", "Alerta por la seguidilla de ataques violentos. Golpear al ladrón: furia y polémica" -1/4/2014-); así como también en los análisis que se presentan al público: "Lamentablemente, un día uno de estos, delincuentes a quien se intentará linchar, sacará un arma de fuego o un arma blanca y terminará con la vida de algún inocente que, por bronca, por todo lo que le está pasando últimamente por el tema de la inseguridad, va y arremete contra ese ladrón. Ojalá que esto no pase, pero que sirva de ejemplo de la peligrosidad que significa esto en lo que nos estamos metiendo, una suerte de lejano oeste (...) Lo cierto es que esto no es un hecho aislado, que Palermo... no sólo porque se puso de moda, porque es un lugar donde se pasea desde hace mucho tiempo, porque tiene muchas atracciones, muchos comercios, acá viene ya desde

hace años este tipo de episodios. (...) Esperemos que esto no vuelva a ocurrir, pero lamentablemente te lo decimos simplemente como una frase hecha porque sabemos que mañana o pasado probablemente ocurra otro hecho de estas características con motochorros y con gente paseando por el lugar. No es que perdimos las esperanzas, sino que trabajamos de esto, de presentar todos los días este tipo de hechos" (sic, 2/4/2014).

Es necesario, en este marco, reconocer que el recurso a las estadísticas y los datos oficiales puede resultar beneficioso en la construcción de las noticias, en la propuesta de determinada serialización y en la caracterización de hechos que, muchas veces, parecen novedosos cuando puede ser que no sea así. En este sentido, es importante advertir que los hechos no son tales cuando se convierten en noticia: muchas noticias, de hecho, no tienen como objeto de tematización a los hechos de los cuales hablan sino a otras noticias. Ello requiere, en todo caso, que la mediatización no sea confundida con la invocada aparición de un fenómeno. Por ello, considerar la importancia de los hechos exige buscar, más allá de los medios de comunicación, otras fuentes que permitan dar cuenta de los procesos sociales que enmarcan o contextualizan las notas que se quieren presentar ante las audiencias. Si bien parece resultar impactante, la referencia a "modas" no necesariamente se ajusta con la realidad: por un lado, fuerzan serializaciones que ocultan especificidades y diferencias significativas; por el otro, advierten novedades allí donde no las hay.

b) La utilización de metáforas o referencias territoriales que apuntan a la construcción estigmatizante de mapas del delito.

La presentación de los casos a partir del énfasis y asociación entre el delito y el espacio geográfico contribuye a dar a los hechos una dimensión más cercana a la espectacularización imaginaria del mundo del delito que a comunicar la particularidad noticiosa. Así, el privilegio de referencias, tales como: "Rosario, una provincia sitiada por los narcos" (sic) (20/11/2014); "hemos hablado con los vecinos de lo que pasa en esta zona caliente del conurbano bonaerense" (5/6/2014); "Villa Zavaleta, La banda de los monoblocks" (Actuación N° 629/2013, 18/8/2013) deviene en el refuerzo de una mirada temerosa de lo social y tiende a alimentar cierto indeseable miedo al espacio público.

Estas operaciones de territorialización, como ya se dijo, tienden a construir, reconstruir y reforzar prejuicios sociales que poseen su especificidad demográfica. Muchas veces esta demografía se convierte en un vehículo de discriminación respecto de amplios sectores sociales y en un incremento

de la vulnerabilidad que atraviesa a quienes son señalados como potenciales peligros para la sociedad.

c) El desarrollo de abordajes oblicuos de los casos.

El discurso sobre los hechos suele utilizarse como insumo para hablar de otra cosa, de otros temas, como por ejemplo, para configurar un estado de inseguridad social y criticar el funcionamiento político. En esos casos, el uso de un hecho para referir a cuestiones que no tienen que ver con el mismo produce un efecto que deslegitima el trabajo periodístico. Así, una de las problemáticas más acuciantes de la actualidad del país, como es la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres queda disuelta en discursos de la inseguridad que desplazan dicha problemática al campo de las relaciones anónimas inseguras de las grandes ciudades (ante las cuales, se exige mayor policía y mayor represión), cuando su cuestión central radica en los vínculos cercanos y en la reproducción de la violencia social en el ámbito doméstico. La desconsideración de este tipo de situaciones produce formas distorsivas de presentación de la información, la cual queda subsumida o encorsetada a una estructura noticiosa que policializa la realidad. Es decir, se presentan noticias que son relatadas de acuerdo con la estructura televisiva y no de acuerdo con la problemática social que las hace inteligibles.

En ese marco, el recurso a frases impactantes, a consideraciones espectaculares y a cierto morbo no conducen a la presentación y desarrollo del caso en cuestión, sino a la ratificación de los juicios y prejuicios de quienes llevan a cabo la cobertura noticiosa.

Esto se observa, una vez más, en el siguiente análisis periodístico sobre el homicidio de una adolescente en la Ciudad de Buenos Aires (Actuación N° 197/2013): “Hoy todos somos Ángeles (...) Todos tenemos que ser el República Argentina ‘Mumi’. 16 años tenía esta chiquita. Yo pensaba en mis amigos que tienen hijas de la edad de Mumi (...) me decían la angustia que ellos tienen al ver que este tipo de situaciones todavía ocurren en la República Argentina. Una nena que va a gimnasia. Volvía a su casa. La secuestran. La violan, eso todavía no está muy claro, aparentemente sí. La torturan. La ahorcan. La terminan matando y la tiran a la basura. La verdad, yo pensaba (...) Argentina, un país con buena gente, ¿no? Así dice la publicidad del gobierno: ‘Argentina, un país con buena gente’ (...) ¿Gente que mata de esta manera a una joven argentina es buena gente? Yo veía mucho político (...) preocupado por los jóvenes de 16 años, pero, claro, su preocupación era si esos jóvenes de 16 años tenían que votar o no. (...) No los veo muy preocupados a esos mismos políticos para que esos chicos vuelvan de gimnasia a su casa”. “Dijimos basta cuando fue el caso Yaconis (...) Dijimos basta con

este tipo de situaciones con el caso Graña y ahora ocurrió el de Ángeles. Y seguramente vamos a decir basta, pero después va a ocurrir otra situación similar” (sic). (12/6/2013).

Las tres modalidades comunicativas expuestas se basan en la presentación y el agrupamiento de acontecimientos de distinta índole como unidad explicativa, cuyo resultado es el perjuicio de los derechos informativos de las audiencias. Y, nuevamente, esta ausencia de abordajes contextualizados fue relacionada, durante las Mesas de Trabajo, con el trabajo bajo la lógica del minuto a minuto y con ciertos preconceptos de muchos periodistas que, a fuerza de ampliar coberturas sin poseer mayor información, vinculan, hipotetizan y moralizan los casos para repetir sus propios prejuicios sociales (en general, de clase, de edad y de género). Conforme con esto, en las Mesas de Trabajo se destacó que la práctica de tener que correr tras los casos y construir primicias sobre los mismos impide contar con el tiempo necesario para profundizar en el análisis de los hechos, investigar el detrás del conflicto y proporcionar los instrumentos para entender los alcances de cada problemática.

La necesidad supuesta de adecuar e incluso “estirar” el tiempo de las coberturas a las necesidades de la transmisión fuerza al periodismo a sostener un discurso más allá de la información efectivamente obtenida, dando lugar a ocurrencias, especulaciones o relaciones que complementan de modo riesgoso lo difundido.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA CONTEXTUALIZAR LOS CASOS Y NO INCURRIR EN LA DIFUSIÓN DE SERIALIZACIONES FORZADAS Y REPRESENTACIONES “FATALISTAS” Y TERRITORIALES QUE PROPICIEN SENTIDOS ATEMORIZANTES EN LAS AUDIENCIAS:

- Procurar la comunicación rigurosa y cuidada de cada caso particular. Para ello es conveniente:
 - a) Precisar ante el público las especificidades de la situación, el lugar de los hechos, las condiciones de la víctima y del victimario.
 - b) Comunicar el estado de la causa, del proceso judicial.
 - c) Presentar los casos respetando las tipificaciones disponibles y vigentes en el Código Penal (tanto para referir a los actos como a las personas que los llevan a cabo – VER Parte II de esta Guía).
 - d) Diferenciar entre el delito contra la propiedad y/o los bienes personales y la situación más sensible que representa un crimen contra la integridad de la persona y la vida humana.

- e) Precisar si el hecho se inscribe en una problemática de violencia de género, violencia familiar o doméstica, violencia en el barrio o enfrentamientos territoriales, por ejemplo.
- f) Evitar el relato serializado que establece continuidades entre acontecimientos que no necesariamente responden a un mismo patrón.
- g) Privilegiar el reconocimiento y análisis de las particularidades de cada caso, en lugar de disolverlas bajo generalizaciones inconvenientes que distorsionan el hecho y la percepción del mismo. En este sentido, se sugiere evitar el trazado de generalizaciones que promuevan el alerta social e incentiven miedos que puedan derivar en acciones sociales defensivas extralimitadas o violentas.
- h) Prescindir del uso de expresiones hiperbólicas o adjetivos que den a entender una ampliación cuantificable del delito.
- i) Evitar las asociaciones entre el delito y la zona geográfica ("mapa de la inseguridad", "Rosario, una provincia sitiada por los narcos"), ya que a partir de ellas se produce una representación estigmatizante del territorio y de las personas que lo habitan.
- j) Investigar el detrás del conflicto y proporcionar los instrumentos para entender los alcances de cada problemática (estadísticas, legislaciones vigentes, políticas en desarrollo e inclusión de debates tendientes a la búsqueda de soluciones).
- k) Aprovechar la difusión de los casos para brindar información socialmente necesaria que esté vinculada a las problemáticas en juego.

10. EVITAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y OPERACIONES DE EDICIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES QUE TIENDAN A LA ESPECTACULARIZACIÓN Y FICCIONALIZACIÓN DE LOS CASOS Y DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS

La rigurosidad periodística, así como el derecho de las audiencias, resultan lesionados cuando las coberturas transforman los casos policiales en un espectáculo, relegando la función informativa al desarrollo de representaciones audiovisuales de los aspectos más escabrosos de cada hecho y de narrativas con recursos propios de la ficción. Esto se identifica en el despliegue de un conjunto de tendencias, muchas de las cuales han sido analizadas por la Defensoría del Público:

- a) La exhibición truculenta de la muerte.

Aquí puede destacarse la presentación en un noticiero, en horario apto para todo público, del video del asesinato de un empresario argentino en Paraguay (30/5/2014, Actuación N° 162/2013). Los conductores anuncian el caso del siguiente modo: "vamos a hablar de un crimen brutal, salvaje y frente a las cámaras de seguridad", "dos sicarios atacaron a un empresario argentino en Paraguay. Uno lo acribilla a balazos, el otro lo apuñala cuando ya estaba en el piso", "sufríó heridas gravísimas. Lamentablemente murió esta mañana", "te advertimos que las imágenes que vas a ver son muy duras y pueden herir tu sensibilidad". A continuación, se visualiza en forma reiterada y musicalizada el video del asesinato, destacando con círculos rojos los apuñalamientos y los disparos realizados por los atacantes. A medida que las imágenes se van sucediendo, los periodistas describen pormenorizadamente aquello que las audiencias ven: "De pronto, y sin que lo note de inmediato, se aproxima una moto con dos hombres a bordo (...) su cómplice, sin piedad, comienza a apuñalarlo por la espalda", "el primero saca en este caso la pistola, y no puede disparar, se le traba. Se traba en lucha después, pero viene después el otro, que se tiene que bajar. Cuatro tiros, ¿ven?" (sic). El video se emitió de manera completa en 5 oportunidades y, de manera fragmentaria, durante la cobertura que se extendió por 8 minutos y 40 segundos.

Este ejemplo, al igual que muchísimos otros de similares características, da cuenta de la reposición mediática de un hecho de violencia real que involucra emocionalmente a los allegados a la víctima y a partir del cual se abre una investigación judicial. Tales implicancias, junto con la consideración de su emisión en un horario en el que la audiencia está potencialmente integrada por niñas, niños y adolescentes (es decir, entre las 6 y las 22 horas), convocan la pregunta acerca del sentido que conlleva este doble acto de violencia (el asesinato en sí y la acción de exhibirlo, reiterarlo y enfatizarlo en la pantalla). En este marco, la mostración de las imágenes trasciende las pretensiones informativas referidas al hecho y se vincula, en cambio, con operaciones discursivas de la espectacularización de la violencia que conlleva el suceso. En este sentido, es posible advertir que la función de los comunicadores resulta subordinada a realzar, mediante adjetivaciones y precisiones de lo observado, los componentes más impactantes del caso, permaneciendo ausente el análisis de las causas o la reflexión sobre este tipo de actos en tanto problemática social. Si se considera, además, el horario en el que se repone, es crucial advertir que el realismo de las imágenes posee una dimensión más inconveniente para niñas, niños y adolescentes, quienes no necesariamente poseen las compe-

tencias para la decodificación del mensaje que supone la propuesta noticiosa. Este punto ha sido celosamente trabajado en varios países del mundo, los cuales se preocupan específicamente por el vínculo entre niñez, adolescencia y servicios de comunicación audiovisual. Es importante que quienes trabajan en los medios comprendan, contemplen y respeten las características particulares que poseen y definen a la niñez y la adolescencia y, junto con ellas, las implicancias que supone la exposición a representaciones escabrosas de la violencia y los asesinatos.

b) La utilización de recursos de enfatización del dramatismo del caso.

La repetición excesiva de imágenes violentas, la musicalización del material expuesto, el relato hiperbólico de los comunicadores y la aplicación del zoom in sobre imágenes trágicas son algunos de los procedimientos más recurrentes en la cobertura de casos policiales. El ejemplo recién referido conjuga todos estos recursos. Los 8 minutos y 40 segundos que dura el tratamiento del hecho, no sólo exponen la secuencia del asesinato que se repite incansablemente, sino que agregan un marco de musicalización y adjetivación que potencia las imágenes, todo ello en horario ATP. Conforme con esto, es importante señalar que el privilegio de estos procedimientos deviene en una riesgosa sobrerrepresentación de los hechos, ya que la reposición y enfatización incesante puede exacerbar aún más la conmoción que de por sí producen las crudas imágenes y relatos en quien los percibe. Y, a su vez, puede neutralizar la capacidad social de reacción crítica de aquellos hechos que resultan lesivos para la sociedad. Esta propuesta, finalmente, deriva en una insensibilización espectacularizante de las imágenes, lo cual privilegia un abordaje truculento, hiper-realista y con un sesgo voyeurístico que construye un espectáculo de la muerte. Nuevamente, todo esto se encuentra potenciado por el horario en el que se emite, agravante que desconsidera la especificidades propias de la niñez y la adolescencia, así como los derechos que, en tanto audiencia, los asiste como sujetos de derechos.

c) La formulación de titulares que no buscan condensar información, sino captar a la audiencia a través del impacto.

El recurso a titulares escabrosos e impactantes, cercanos a formas novelescas de la información deriva, antes que en la provisión de información socialmente relevante, en la espectacularización de los hechos noticiosos, en su construcción narrativa y en su exhibición ficcionalizada. Esto puede verse ilustrado en la serie de títulos que se formularon durante la cobertura del asesinato de una niña de 7 años: “Un crimen

y un plan macabro”, “La mataron a golpes y la quemaron”, “Priscila el crimen más escalofriante: los padres la mataron y la quemaron”, “La prendieron fuego en la parrilla”, “La cargaron muerta en el cochecito”, “Exclusivo. Cómo mataron a Priscila”, “Priscila: Detalles de la autopsia”, “El cuerpo de la nena apareció quemado”. (8/1/2014, Actuación N° 26/2014).

Estas formulaciones atienden más a la lógica de vender el suspenso y la truculencia del hecho, antes que a reponer el caso en cuestión, la problemática que lo atraviesa y la cobertura en base a datos, materiales y reflexiones que podrían conducirlo.

d) El desarrollo de descripciones del horror y de aquello que permanece en la imaginación de la audiencia.

En la referida cobertura del asesinato de una joven (Actuación N° 185/2013), cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la CEAMSE, se difundieron relatos detallando y correlacionando el proceso de compactación del cuerpo y las condiciones en que fue hallado el mismo: “Hay una grúa que se llama pulpo (...) toma la bolsa con el cuerpo (...) va por vibración separando partes” (11/6/2013), “hay algo que parece la piel de un animal (...) lamentablemente se encontraron que era una persona (...) tenía las ataduras en los pies (...) con un hilo plástico (...) en el cuello tenía el tan famoso hilo sisal (...) en la cara sí había sangre” (17/6/2013). Cabe destacar que estas descripciones se complementan con la visualización de fotografías y videos de la joven que son intercalados con la emisión de imágenes de contenedores y de camiones recolectando residuos.

Otra variante de este tipo de narraciones se observa en el relato que realiza un periodista en horario apto para todo público sobre un caso de violación de una adolescente de 13 años: “El violador quería sexo. ¿Qué hace? Rompe el mosquitero de la ventana de la habitación de la nena (...) madre e hija se levantan. Escuchan los ruidos, preocupadas, y de golpe y porrazo, ¿con quién se encuentran? Con un hombre (...) con la rata (...) y un cuchillo en la mano (...) a la nena la ata por el cuello tipo perrito (...) Las empuja (...) a la planta baja de la casa (...) empieza a manosear a la nena, empieza a manosear a la nena, la empieza besuquear, a babear. Si hubiese terminado ahí... No, pero no (...) No se olvide que a la nena la iba tirando con una cuerda (...) como si fuese un perrito (...) Las lleva al dormitorio principal y, ¿qué hace? La rata hace esto: abre el placard y encierra a una en el placard. Cierra el placard, viola a la otra, termina el abuso, toma a su víctima, la mete en el placard, saca a la otra y la viola. Termina de violarla, la agarra, la mete en el placard, saca la otra y la viola, y así sucesivamente, durante toda la noche. Pone una en el

placard, saca a la otra, abusa, toma a su víctima, la coloca en el placard, saca a la otra mujer y la abusa, y así sucesivamente. Mientras las golpeaba, las cortaba, porque, claro, hubo resistencia. Estaban llenas de golpes, de humillaciones. Hasta que a la rata le dio sed (...) Llevándola como un perrito, baja con la nena, va a planta baja (...). Y cuando baja con la nena atada como un perrito porque tenía sed, deja su saliva en la botella, segunda prueba. Pero ahí va a venir la prueba más importante de todas (...) Todas las pruebas son importantes, pero fíjese bien en ésta, en su perversión. Cuando baja con la nena a tomar algo porque tenía sed (...) obliga a la chiquita a realizar sexo oral" (sic). (23/8/2014, Consulta N° 781/2014).

Las descripciones puestas al aire, lejos de tener un valor informativo (sobre todo si se considera que el segundo ejemplo hace referencia a un caso ocurrido nueve años antes de su exhibición mediática), funcionan como parte de un show televisivo en el que los argumentos quedan reducidos a la exposición de los cuerpos y del sufrimiento humano, obturando la imagen de la realidad que se representa y diluyendo los límites entre lo privado, lo público, lo imaginable y lo posible (Martini, 2007).

Esta operación descriptiva, nuevamente, selecciona aquellos elementos que posibilitan un relato del horror, el cual olvida que está refiriendo a personas, a entornos afectivos y a problemáticas sociales sumamente relevantes. Es importante que se advierta que los casos policiales hablan de personas. Y que las mismas -víctimas y victimarios- forman parte de la trama social que requiere poder analizarse a sí misma para poder trascender sus propias limitaciones y problemas. La relevancia de los servicios de comunicación audiovisual radica, precisamente, en el rol que juegan los medios en esa auto-percepción que la sociedad requiere de sí misma. Y ello supone una responsabilidad mayúscula de los trabajadores de los medios.

e) El despliegue de teatralizaciones de los hechos dramáticos.

Dentro de este tipo de reconstrucciones -aquellas que tienden a la ficcionalización espectacularizante de los casos-, se inscribe, en un noticiero y en el marco de la cobertura del caso de una joven asesinada, la presentación de otra joven (de aspecto físico similar a la víctima) junto a un contenedor lleno de basura para probar si es posible que quien fuera asesinada haya sido colocada allí. Mientras el conductor despliega la teatralización, evaluando: "Acá no entra nada", otro periodista le replica: "si está en posición fetal, entra" (sic). (Junio de 2013, Actuación N°185/2013).

Sobre este aspecto, sería importante procurar que las reconstrucciones se basen en datos relevantes y probados por la investigación en curso, a fin de no difundir equívocos que se contrapongan con la causa. De ahí que es conveniente identificarlos de este modo a través de subtítulos (BBC, 2007). A su vez, las representaciones puestas al aire deberían contemplar el respeto no sólo de la víctima, sino también de su entorno e, incluso, de las audiencias. La teatralización truculenta, antes que aportar elementos para la comprensión de un caso, contribuye a la rentabilización espectacularizante del horror. Una variable de esta tendencia consiste en la exhibición de fotografías que muestran escenas artificialmente reconstruidas, las cuales ilustran situaciones de violencia cotidiana y están disponibles en los bancos de imágenes que se encuentran en los distintos buscadores de Internet. La exhibición de esas imágenes para ilustrar casos de "abuso infantil", "violencia de género" u otras problemáticas, además de pretender sensibilizar a la audiencia, pueden generar un impacto emocional, entre otras, sobre aquellas personas que hayan pasado por esa experiencia.

f) La transformación de víctimas, agresores y periodistas en personajes de ficción.

En el mismo registro y como ya se dijo, con el énfasis en la difusión de relatos impactantes, las coberturas periodísticas pierden de vista que los implicados en los casos son personas reales. De este modo, víctimas y victimarios resultan presentados como personajes ficticios y así son relacionados con tramas que no necesariamente parten de datos de la vida real o del desarrollo de los hechos comprobados por la investigación. Un ejemplo notable al respecto es el relato de un periodista que propone interpretar el homicidio de una adolescente, estableciendo como representación equivalente la violación que la película "Irreversible" muestra y que el comunicador repone en su relato. Aun cuando la investigación no confirmó que la joven hubiera sido víctima de dicho acto de violencia, la narración la convierte en protagonista de esa trama. De acuerdo con esto, se advierte que el conductor presenta el caso bajo premisas enunciadas como hechos efectivos y desarrollando una descripción que enfatiza lo truculento: "Estamos en el siglo de la súper violencia, de las violaciones (...) Se matan chicas en cualquier parte del mundo (...) la violencia es atroz (...) a esta chica le pegaron una trompada, la ataron, la violaron, la desnudaron, la cortaron, la mutilaron, se dieron el lujo de decir 'hago lo que se me canta'...". Y esta narración fue complementada con el relato del fragmento de la ya mencionada película "Irreversible" y su escena de violación, interpelando a la audiencia: "¿Uste-

des vieron una violación por televisión alguna vez, por cine? ¿Ustedes vieron la película Irreversible?”. Mientras el conductor narra cómo, en la película, el violador aborda a su víctima, muestra fotografías reales de la joven asesinada. A continuación, el periodista aclara que no puede transmitir las escenas de dicha película, sin embargo reproduce las expresiones del violador para mostrarle a la audiencia que el atacante sabe lo que siente y lo que le puede pasar a su víctima: “Te voy a violar. Te voy a matar a trompadas. Cuidado con hacerme caca encima, porque si veo que te haces caca por miedo, te mato”. Y luego interpreta: “Lo que quiero decir con esto, el violador sabe lo que viene, sabe el miedo, sabe la reacción, sabe que la va a matar a trompadas, sabe que la va a violar diez minutos en un túnel y sabe que la criatura va a hacer por esfínteres todo lo que sea. Ese animal que hizo esto con esta criatura sabía todo eso, sabía que iba a pasar eso” (sic). (12/6/2013, Actuación N° 179/2013). Es decir, el periodista mezcla dos universos: el de la ficción (film) y el de la realidad (noticia del asesinato de la joven). En dicha fusión se produce la forma más evidente de ficcionalización del caso. A esto debe sumarse que la presentación narrativa del referido fragmento se realiza en horario apto para todo público.

El relato ficcional que construye el periodista, lejos de “ayudar periodísticamente de alguna manera a la investigación” (tal como él mismo anuncia al comienzo del programa), conduce a la espectacularización morbosa y sin ningún tipo de finalidad informativa. El periodista instala y tematiza ampliamente la cuestión de la violación, pese a que no había sido oficialmente confirmada. A su vez, lo hace desconsiderando el horario en el que plantea sus ocurrentes afirmaciones.

Otra variante dentro de esta modalidad de ficcionalización es la conversión de los periodistas en protagonistas que ejercen ante la audiencia el rol de “detectives”. De este modo, los comunicadores se hacen presentes en los escenarios de los hechos, destacando como primicia su presencia para analizar la zona, sin considerar que su mera presencia puede alterar el estado del lugar y, en efecto, afectar negativamente la investigación. Un ejemplo de esto fue, en el marco del asesinato de esta adolescente, la presencia de un periodista transmitiendo desde el sótano del edificio en el que vivía la joven y considerado un posible escenario de indicios del hecho (junio de 2013).

Los distintos aspectos analizados y ejemplificados ponen en evidencia una transformación del “espacio de la información” en el espacio de la narración del horror extraordinario, presuntamente en función de incrementar el rating, aunque esto implique distanciarse del ejercicio de la rigurosidad periodística o lesionar derechos de terceros y de las audiencias.

Así, “el relato del crimen (...) pone en escena (...) el propio acto de mirar, la consumación voyeurística de (...) ‘la monstruosidad del ojo’: tanto en la trama novelesca como periodística se ofrece una visión, mediada por el narrador (...) que trata de darnos la descripción más ajustada a los hechos por la implacable acumulación de sus detalles. Nada (...) nos es escamoteado en esa especie de relevamiento exhaustivo del territorio: indicios, huellas de cuerpos y de historias, cronologías hipotéticas, oscuras motivaciones. El realismo del folletín decimonónico, los refinamientos conceptuales de la novela policial, los procedimientos del suspense cinematográfico y del viejo periodismo sensacionalista confluyen hoy en el hiperrealismo de la escena mediática: nunca más cerca, más directa, más inmediata y verosímil la imagen capturada por la cámara en el espacio de la información, que no sólo ‘llega’ apenas producido el hecho, sino que hasta es capaz de estar aun antes, para presenciarlo en su desencadenamiento” (Arfuch, 1997: 17-18).

En este marco, resulta imprescindible reflexionar sobre los potenciales efectos negativos que conlleva el privilegio de estas modalidades, especialmente, en el horario apto para todo público. La franja horaria específica (6 a 22 horas) de protección de las audiencias, compuestas potencialmente por niñas, niños y adolescentes, exige la aplicación de un conjunto de recaudos (definidos en el artículo 107 de la LSCA, Ley 26.522), tales como evitar “las escenas previamente editadas que contengan violencia verbal y/o física injustificada” (inciso b); y “los materiales previamente editados que enfatizan lo truculento, morboso o sórdido” (inciso c).

Estas especificaciones apuntan a respetar y atender las competencias y saberes simbólicos y emocionales de estos grupos etarios y a preservarlos del impacto de la exposición a este tipo de materiales. Y esto no es una prescripción meramente argentina: todas las normativas conocidas en materia de servicios de comunicación audiovisual definen horarios específicos de protección a la niñez y la adolescencia. Esta Defensoría ha recorrido las normativas de los cinco continentes en materia audiovisual y no ha encontrado un solo caso en el que no se establezcan marcos horarios (que se inician a las 6 ó a las 7 de la mañana y finalizan a las 21 ó a las 22 horas) en donde se especifiquen formas de relación entre los medios de comunicación y las audiencias infantiles y adolescentes. Todas, absolutamente todas, definen un vínculo particular entre los medios y las competencias culturales, simbólicas y audiovisuales de niñas, niños y adolescentes. La responsabilidad social de los medios no puede abstraerse de ello. Es deseable que asuman esta responsabilidad, dada la relevancia que poseen los medios en la vida y la socialización de los jóvenes.

Asimismo, es importante señalar que, como desafío, los servicios de comunicación audiovisual, además de cuidar los modos en que los casos son presentados ante las audiencias, pueden proponer lecturas más complejas que la mirada simplista que reduce las problemáticas a una cuestión espectacular. Por referir un ejemplo identificado por esta Defensoría, ante situaciones de violencia familiar, como el asesinato de una niña, en lugar de destacar y redundar en los detalles más escabrosos del hecho, podría haber resultado oportuno contribuir a concientizar sobre la problemática social y difundir información socialmente relevante, como visualizar en placas la Línea Gratuita de atención a las Víctimas de Violencia Familiar (tel. 137).

Este tipo de enfoques puede ayudar a reforzar la prevención sobre la repetición de hechos similares y devolverle a los servicios de comunicación audiovisual su función social, anclada en el respeto y promoción de los derechos humanos. Y, nuevamente, la responsabilidad social de los medios se constituye no sólo en un potencial abordaje responsable, sino en un socializador y masificador crítico y reflexivo de problemáticas que atraviesan a la sociedad. Sociedad que requiere de medios de comunicación que contribuyan, en sus coberturas, a superar las formas en que esa sociedad se daña a sí misma. La cobertura responsable de casos policiales puede ser la piedra angular de la transformación de determinadas violencias hacia relaciones menos violentas, más plurales y, por cierto, respetuosas de los derechos de todas las personas que conforman esa sociedad.

RESUMEN DE ORIENTACIONES PARA EVITAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y OPERACIONES DE EDICIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES QUE TIENDAN A LA ESPECTACULARIZACIÓN Y FICCIONALIZACIÓN DE LOS CASOS Y DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS:

- Priorizar la formulación de titulares que condensen información relevante del caso, en lugar de utilizar el recurso gráfico para captar audiencias por mero rating a través del impacto que supone la síntesis de los datos más traumáticos y de las valoraciones metafóricas.
- Evitar el uso de recursos de enfatización del dramatismo del hecho: repetición excesiva y zoom in de imágenes de violencia, musicalización del material expuesto, narraciones hiperbólicas, descripciones necrófilas y relatos que detallen el horror y sufrimiento de las víctimas. Se trata de evitar la sobrerrepresentación de los hechos que puede llegar a promover intranquilidad social, como así también, en su otro extremo, indolencia social.
- Prescindir de la mostración de imágenes y videos de asesinatos, cuerpos agredidos y del uso de planos detalle de los actos de violencia y rastros de sangre. Esto trasciende las pretensiones informativas y puede afectar negativamente a familiares y allegados de las víctimas, así como a las audiencias.
- Procurar que las reconstrucciones y teatralizaciones de los hechos no se avengan con una mera visualización de lo escabroso. Es importante que estas mostraciones se basen en datos relevantes y probados por la investigación en curso y que tanto sus características como la procedencia de la información se precisen mediante subtítulos.
- Tener presente que las víctimas y los victimarios son personas reales. De ahí que es imprescindible no transformarlos en personajes de ficción vinculados con tramas no comprobadas. Es fundamental que todo lo referido sobre ellos se base en hechos reales y aportados por la investigación judicial del caso.
- Optar por la visualización de una fotografía representativa de la víctima, en acuerdo con los familiares, y evitar el zoom in sobre la mirada y el paneo sobre el cuerpo, a fin de no promover percepciones sexualizantes. A su vez, se sugiere no emplear fotografías voyeur o editadas sin autorización explícita de los familiares.
- Procurar que la presencia de los comunicadores en el lugar de los hechos no suponga una alteración del escenario que ponga en riesgo la investigación en curso.
- Privilegiar el ejercicio de la función informativa y difundir datos relevantes que contribuyan a concientizar sobre las problemáticas sociales que rodean al caso y a reforzar la prevención de hechos similares. En este sentido, ante la cobertura de casos de violencia familiar, por ejemplo, resulta importante brindar y visualizar información sobre centros y líneas telefónicas de asistencia (Línea Gratuita de atención a las Víctimas de Violencia Familiar -tel. 137-).
- Extremar los recaudos sobre los tipos de cobertura propuestos en horario ATP (6 a 22 horas). Es importante que las ediciones respeten las competencias de niñas, niños y adolescentes y los preserven del impacto de la exposición a materiales que contengan violencia y/o que enfatizen lo truculento (LSCA, Artículo 107).

SEGUNDA PARTE

ASPECTOS JURÍDICOS PARA DESARROLLAR COBERTURAS QUE NO VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS

El presente apartado surge de las necesidades expresadas por quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual durante las Mesas de Trabajo, destacando que el desconocimiento de las especificidades del campo jurídico deviene, muchas veces, en una distorsión informativa de los casos y en una posible vulneración de los derechos de las personas implicadas. En este sentido, cabe recordar que, tal como señala la Guía de buenas prácticas para el tratamiento y difusión de la información judicial (2009), la información que emana de los órganos judiciales es pública, aunque el derecho a la información debe ser armonizado con otros derechos y garantías constitucionales, “como la imparcialidad del tribunal, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, el respeto a la honra, el derecho a la intimidad, la protección de los menores y otros derechos y garantías no enumerados (...)”.

Esto a su vez se traduce, desde la perspectiva de las audiencias, en el incumplimiento de la normativa vigente y en la promoción de valoraciones sociales negativas sobre las modalidades investigativas y resolutorias de cada situación. De ahí que la siguiente esquematización de la estructura del sistema judicial penal y su funcionamiento, junto con el desglose de las instancias del procedimiento penal y el compendio de la terminología específica para referir a los hechos y sujetos involucrados pretende contribuir al desarrollo de coberturas más rigurosas que contemplen estos aspectos al momento de comunicar.

1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL PENAL¹

Etapas del proceso penal²

- 1 / INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
- 2 / PROCEDIMIENTO INTERMEDIO
- 3 / JUICIO ORAL
- 4 / SENTENCIA
- 5 / EN SU CASO, IMPUGNACIÓN DE SENTENCIA
- 6 / SENTENCIA DEFINITIVA

A. ACTOS INICIALES DEL PROCESO.

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: a cargo de la fiscalía, permite acumular la información necesaria para determinar si hay delito y si es posible someter a una persona a juicio.

DENUNCIA

- Cualquier persona puede recurrir una comisaría, a una fiscalía o a una cámara de apelaciones y poner en conocimiento un hecho presuntamente delictivo.
- No existe obligación genérica de denunciar. Sólo los jueces y demás funcionarios públicos están obligados a denunciar los hechos presuntamente delictivos de los que tengan conocimiento en ejercicio de sus funciones.
- Quien denuncia no se convierte en parte del proceso ni tiene obligación de realizar ninguna actividad procesal.

QUERELLA

- Al igual que en el caso de la denuncia, la querella consiste en poner en conocimiento un presunto delito, pero con la intención de convertirse en parte del proceso para garantizar los derechos de la víctima. Solo algunas personas³ se encuentran autorizadas por la ley para actuar como querellantes.
- La querella o “parte querellante” puede proponer medidas de prueba, presentar recursos de revisión de las decisiones y participar en las distintas instancias del proceso penal (artículo 78 del nuevo CPPN).

INICIO POR EL JUEZ, JUEZA O FISCAL

- El proceso penal se inicia de oficio cuando los órganos de persecución penal toman noticia directa del supuesto delito. Son excepciones a este principio algunos delitos cuya investigación depende del interés de la víctima. Se trata de delitos de instancia privada, por ejemplo, la violación. El supuesto más común de inicio del proceso penal de oficio es “la prevención policial”, es decir cuando la Policía toma conocimiento de un presunto delito y comienza las investigaciones preventivas, bajo las órdenes de fiscales o jueces.

B. INVESTIGACIÓN O ETAPA PREPARATORIA.

Conjunto de actos de investigación que realiza el fiscal para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, es decir, para fundamentar la acusación fiscal. Esta etapa no es pública para cualquier persona interesada. Sólo tienen acceso al desarrollo de la investigación los distintos sujetos procesales: la defensa, la querella, las partes civiles⁴.

En esta etapa se realizan las siguientes acciones:

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS

- Búsqueda de toda la información que servirá como prueba. Técnicamente las pruebas se realizan durante la etapa del juicio, pero en esta instancia se recopilan o identifican para ser luego producidas.

Excepción "Prueba anticipada": Si debido a un obstáculo insuperable no fuera posible esperar al juicio oral para producir una prueba (ejemplo, la edad muy avanzada de un testigo o la posibilidad de que alguna prueba física pueda verse alterada por el paso del tiempo), ésta podrá anticiparse, realizándose en presencia del juez o jueza y con posibilidad de participación y control de las partes, respetando todas las garantías del proceso.

DECISIONES QUE INFLUYEN SOBRE LA MARCHA DEL PROCEDIMIENTO

- En esta etapa se pueden discutir y tomar decisiones sobre algunas cuestiones que tienden a evitar nulidades posteriores. Por ejemplo, se puede aducir que la acción ya prescribió, que quien insta la acción no tiene capacidad procesal para hacerlo, que el juzgado o el fuero que interviene no es competente. También en esta etapa se puede debatir si la persona acusada tiene que estar en libertad o detenida preventivamente. La regla es la libertad y sólo, frente a la posibilidad de que se fugue o entorpezca las investigaciones, se puede ordenar la detención⁶.

DECISIONES SOBRE ACTOS QUE PUEDEN AFECTAR GARANTÍAS PROCESALES O DERECHOS CONSTITUCIONALES

- Cuando los actos investigativos pueden afectar garantías procesales, derechos o bienes protegidos por la Constitución, la autoridad judicial debe emitir órdenes expresas y formales que permitan realizar estos actos.
- Ejemplos de este tipo de decisiones son la orden de allanamiento, frente a la necesidad de ingresar a un domicilio para localizar una prueba o cuando se debe secuestrar algún objeto o documento que pertenece a una tercera persona.

FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DECLARACIÓN DEL IMPUTADO⁵

- La "formalización de la investigación preparatoria", es el acto por el cual la fiscalía comunica en audiencia a la persona imputada, en presencia del juez o jueza, el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica, su grado de participación y los elementos de prueba con que cuenta

(art. 221 y 222 del nuevo CPPN). El imputado y su defensa podrán presentar las oposiciones que consideren pertinentes y el juez o jueza decidirá en el momento. La fiscalía formaliza la investigación preparatoria si existen elementos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus responsables.

A partir de este momento se cuenta el plazo máximo de la etapa preparatoria, que no puede durar más de 1 año, y del procedimiento en general, que no puede exceder de 3 años (artículos 113 y 232 del nuevo CPPN).

ACTOS

MODOS DE FINALIZAR LA INVESTIGACIÓN⁶

- Acusación: acto mediante el cual el Ministerio Público requiere la apertura de un juicio pleno.
- Absolución anticipada o sobreseimiento definitivo: la fiscalía no encuentra elementos para acusar, ya sea porque se comprobó que la persona imputada no ha sido autora del hecho ni participó en él o porque se comprobó que el hecho no existió o si existió no constituye delito. En estos casos la fiscalía requiere al juez o jueza que la investigación termine en un sobreseimiento definitivo, que es una absolución anticipada.

Puede ocurrir que no haya elementos para acusar, pero tampoco para pedir una absolución anticipada. En estos casos, se establece un tiempo límite dentro del cual se debe llegar a uno de los estados mencionados (sobreseimiento o acusación) y si no se arriba a ello, necesariamente se sobresee, o bien se permite que la investigación termine de un modo no definitivo, que implica una clausura provisoria de la investigación o sumario, hasta que se pueda continuar con ella o aparezcan nuevos elementos de prueba.

2. PROCEDIMIENTO INTERMEDIO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL:

Tiene la función de garantizar que la decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria. Se controla que la acusación no tenga errores formales ni sustanciales. Puede ocurrir que la acusación de la fiscalía y la parte querellante sean coincidentes y se presenten juntas, o que la parte querellante presente una acusación autónoma.

La acusación debe cumplir los siguientes requisitos legales:

- individualizar los datos de identificación de la persona imputada y de quien ejerce su defensa legal;
- describir los hechos delictivos que se atribuyen a la persona acusada y los fundamentos de la acusación, así como los medios de prueba que la motivan;
- identificar las disposiciones legales aplicables y su relación con los hechos;
- determinar el daño, si es que se reclama reparación;
- ofrecer las pruebas que se pretende que se produzcan en el juicio (lista de testigos, peritos, indicación de dónde se encuentran las pruebas documentales para poder ser solicitadas, y cualquier otro medio de prueba);
- indicar cualquier circunstancia de interés para determinar la pena; y formular cuál es la pena que se pretende, la que será determinada en juicio.

Audiencia de control de la acusación. En esta etapa el juzgado convoca a las partes a una audiencia en la que el acusado puede objetar la acusación o la demanda de reparación, señalando defectos formales; oponer defensas legales tales como la prescripción de la acción penal o la falta de legitimidad de alguna de las partes para acusar; solicitar el sobreseimiento; proponer una reparación o conciliación; o solicitar la aplicación del procedimiento de juicio abreviado. Resueltas estas cuestiones, cada parte indicará la prueba que usará durante el juicio. Las partes pueden solicitar al juez o jueza que dé por probados algunos hechos, que no se discutirán luego en el juicio. El juez o jueza debe resolver fundadamente todas las cuestiones que le fueran planteadas en esta audiencia.

Luego de esta discusión preliminar se produce una decisión judicial. Si el juez o tribunal admite la acusación se dictará el auto de apertura a juicio, si no se admite, se podrá dictar un sobreseimiento.

El auto de apertura a juicio es una resolución cuyo contenido determina el objeto del juicio y por lo tanto resulta una garantía al derecho a la defensa, debido a que la sentencia que se dicte luego sólo podrá versar sobre los hechos por los cuales se ha abierto el juicio. De esta forma evita acusaciones sorpresivas y permite una adecuada defensa. Asimismo, el auto de apertura a juicio cumple otras funciones importantes: a modo de ejemplo, identifica ya con absoluta precisión al acusado; califica el hecho provisionalmente; contiene los hechos que se dieron por acreditados probatoriamente; determina el tribunal competente, identifica a las partes del juicio.

El sobreseimiento consiste en una absolución anticipada, fundada en la certeza de que el supuesto hecho punible no existió, o si existió no era punible o en que el imputado no tuvo participación alguna en él. Todos estos casos cierran irrevocablemente el proceso.

3. JUICIO ORAL:

- Es la etapa principal del proceso penal, donde se resuelve de manera definitiva -aunque revisable el conflicto que dio origen al proceso penal. Se determina la existencia y calificación del hecho y la responsabilidad penal del acusado.
- Lo lleva a cabo un tribunal integrado por tres jueces o juezas.

Previo al inicio del juicio oral se sortean los jueces o juezas que van a integrar el tribunal, se fija día y hora para la audiencia del debate y se cita a todas las partes que intervendrán.

ORGANIZACIÓN DEL DEBATE JUDICIAL

- Presencia de las partes: El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces o juezas y de todas las partes: persona imputada, del/la representante del Ministerio Público Fiscal, defensores/as, partes querrelantes y civiles, si se hubiere ejercido la acción civil en el proceso penal.
- Publicidad del debate: El debate será oral y público, priorizando la presencia de la víctima, los familiares de las partes y los medios de comunicación. Los menores de 12 años deben estar acompañados por un mayor de edad. Ante situaciones excepcionales, el Tribunal puede restringir el acceso o limitar la publicidad. A modo de ejemplo, el Tribunal puede prohibir a las partes la divulgación de información o que formulen declaraciones a los medios de comunicación durante el desarrollo del juicio (según artículo 252, incisos a, b y c del nuevo CPPN).

La función social de los medios de comunicación durante el juicio es resguardar la publicidad característica del proceso penal. A tal efecto podrán acceder a la sala de audiencias en las mismas condiciones que el público en general. Si el acceso es restringido por la capacidad de la sala, se les facilitará las grabaciones de las audiencias.

El Tribunal deberá informar a las partes sobre la presencia de los medios de comunicación, posibilitando a las partes la solicitud al Tribunal para que su voz o imagen sea retocada en pos de resguardar su pudor o seguridad. El Tribunal podrá ordenar dicha distorsión como mecanismo menos restrictivo que la prohibición de la difusión (todo según el artículo 254 del nuevo CPPN).

- **Oralidad:** Toda intervención de quienes participen en la audiencia de debate se hará en forma oral y sin leer. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente por los jueces o juezas y se darán por notificadas desde el momento de su pronunciamiento (según artículo 255 del nuevo CPPN).

DESARROLLO DEL DEBATE JUDICIAL

CONSTA DE 4 FASES

APERTURA Y CONSTITUCIÓN DEL OBJETO DEL DEBATE (artículo 261 del nuevo CPPN)

- Se informa a la persona imputada sobre la importancia y significado de lo que va a suceder.
- El/la representante del Ministerio Público Fiscal y de la querrela explican el contenido de la acusación, los hechos, pruebas que producirán para legitimar la acusación y calificación legal que pretenden.
- El defensor o la defensora presenta su posición en el juicio. Durante el transcurso de la audiencia, la persona imputada puede hacer todas las declaraciones que considere oportunas. Las partes podrán formular preguntas o requerir aclaraciones.
- Si durante el debate, por una revelación o retractación, se tuviera conocimiento de un hecho no contemplado en la acusación, la parte querrelante o la fiscalía podrán ampliarla. No obstante, si esta ampliación modificara sustancialmente la acusación, la defensa podrá solicitar la realización de un nuevo juicio.

PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA (artículo 263 del nuevo CPPN)

- Presentación oral y exhibición de los peritajes y documentos, indicando su origen en cada caso, y declaraciones testimoniales.
- Los jueces no podrán formular preguntas durante los interrogatorios, ya que esta facultad se encuentra reservada a las partes.
- A pedido de las partes o de oficio, el Tribunal podrá resolver de manera excepcional que los testigos no se comuniquen entre sí ni con otras personas. También podrá

resolver que no puedan oír, ver o ser informados de lo que sucede en la sala de audiencias. Si por la extensión del debate, la incomunicación fuera imposible, el Tribunal podrá ordenar que los medios de comunicación difieran la difusión audiovisual de aquellos testimonios que pudieran afectar sustancialmente el contenido de declaraciones ulteriores.

DISCUSIÓN FINAL O ALEGATOS (artículo 268 del nuevo CPPN)

- Expresión de conclusiones y presentación de peticiones del/la representante del Ministerio Público Fiscal, la parte querrelante, el o la defensora (en ese orden de exposición).
- Todas las partes podrán replicar, pero la última palabra corresponderá a la defensora o defensor.
- Al finalizar el alegato cada parte expresará sus peticiones y se preguntará a la persona imputada si tiene algo más que manifestar.
- Convocatoria a las partes a la fecha de lectura de la decisión judicial.

CLAUSURA DEL DEBATE (artículos 269 y 270 del nuevo CPPN)

- Al clausurar el debate quienes integran el tribunal deben iniciar, inmediatamente y sin interrupción, una cesión de deliberación secreta para tratar todas las cuestiones relativas a la determinación de la responsabilidad penal. Si los jueces o juezas encontraran inocente a la persona imputada, deberán dictar sentencia absolutoria sin más trámite. La deliberación puede extenderse como máximo 48 horas. Si dentro de ese término, alguno/a de los/las integrantes sufriera una enfermedad grave, el plazo podrá extenderse por un máximo de 10 días, luego de los cuales deberá realizarse el juicio nuevamente.

Concluida la deliberación frente a las partes se relatarán y explicarán los fundamentos de la decisión y luego leerán la resolución acerca de la culpabilidad o inocencia. Si la resolución fuera por la culpabilidad se fijará una nueva audiencia, dentro de las 48 horas, para debatir la pena y la modalidad de cumplimiento.

4. SENTENCIA:

- Acto formal que materializa la decisión del tribunal para el caso que motivó el proceso. La sentencia penal solo puede consistir en una condena o una absolución. Por esta razón, se requiere para solucionar el conflicto inicial

una certeza o una certidumbre rayana en la certeza para condenar. En el caso de que subsista la duda inicial se debe optar por una absolución.

- La sentencia de condena significa el reconocimiento de la existencia de todos los presupuestos que habilitan la imposición de una pena y su determinación. La absolución, por el contrario, significa que no se ha comprobado el hecho, o se ha comprobado que no existió o que no era ilícito, o no se ha comprobado la participación del acusado en los hechos imputados (artículos 271, 273 y 274 del nuevo CPPN).

5. CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES:

Una vez dictada una sentencia, en los casos establecidos en la ley, las partes pueden pedir su revisión total o parcial. Esta revisión se solicita por medio de los recursos específicamente previstos en el código procesal penal.

¿Quiénes pueden presentar recursos?

La persona imputada puede impugnar la sentencia condenatoria y la pena que se le hubiera impuesto; la decisión que revoca su sobreseimiento; las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.

La parte querellante puede impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena si la pena aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida. También puede impugnar las demás resoluciones que pongan fin a la acción penal o a la pena y la denegación o revocación de medidas cautelares.

El Ministerio Público Fiscal puede apelar los sobreseimientos y demás resoluciones que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones; la sentencia absolutoria; la sentencia condenatoria si la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida y las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.

¿Cuáles son los motivos que hacen que un acto sea impugnabile?

El sobreseimiento sólo es impugnabile cuando carece de motivación suficiente, o se funda en una valoración errónea de la prueba o no considera pruebas esenciales, y cuando se aplican erróneamente los preceptos legales.

La sentencia condenatoria, por su parte, es impugnabile, entre otros casos, cuando no se hubiere observado una norma legal o garantía constitucional; si se hubiera aplicado erróneamente la ley penal; si careciera de motivación suficiente o la argumentación fuera contradictoria, irrazonable o arbitraria; si se basara en prueba ilegal o incorporada de modo irregular, o se basara en prueba inexistente o mal va-

lorada; o cuando no hubiera correlación con la acusación o se incumplieran requisitos esenciales.

Una sentencia condenatoria firme puede ser revisada en cualquier momento, siempre a favor del condenado, por los siguientes motivos: los hechos que la motivaron fueran contrarios a los de otra sentencia penal irrevocable; se hubiera probado en otro juicio o fuera evidente la falsedad de la prueba que motivó la condena; la sentencia se hubiera dictado cometiendo algún delito penal (por ejemplo, prevaricato o cohecho); después de la condena se hubieran descubierto hechos o pruebas nuevos que hicieran evidente que el hecho no existió o que la persona condenada no lo cometió o que el hecho no es punible, o que se debe aplicar una ley más benigna. También es revisable cuando se dicte una ley penal posterior más benigna o cuando en el caso se dicte una sentencia de un organismo internacional de derechos humanos que requiera la revisión de la sentencia a favor de la persona condenada.

Resolución: La revisión de la sentencia se puede disponer anularla directamente, o remitir a otro tribunal para que dicte una nueva.

DIFERENTES RECURSOS DE IMPUGNACIÓN:

Existen diferentes recursos que se aplican de acuerdo con la resolución que se pretende impugnar.

- 1/ **Recurso de reposición:** Las decisiones que los jueces toman sin intervención de las partes pueden ser objeto de recursos de revisión. Este recurso tiene la finalidad de remover errores que se producen durante el proceso o cuestiones formales y lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto cuestionado (artículo 299 del nuevo CPPN).
- 2/ **Recurso de apelación:** Es el que más se utiliza en la primera etapa del proceso, previo al debate oral, y se aplica a sobreseimientos, resoluciones declaradas apelables y resoluciones que provoquen gravámenes irreparables. Este recurso lo resuelven las Cámaras de Apelaciones integradas en distintas salas de tres jueces cada una. Permite el dictado de un nuevo fallo integral.
- 3/ **Recurso de aclaratoria:** Se utiliza para corregir errores o salvar omisiones materiales o aclarar conceptos oscuros de las resoluciones, sin alterar lo esencial de ellas. Procede tanto de oficio como a petición de parte y procede aunque la resolución sea impugnabile.
- 4/ **Recurso de queja:** Es un procedimiento para obtener la concesión de un recurso que ha sido denegado por un tribunal y que el agraviado entiende que debe concederse, por ejemplo, cuando se deniega el recurso de reposición.

Constituye un paso intermedio para cuestionar la decisión “de fondo” con la cual el recurrente se encuentre en disconformidad.

- 5/ Recurso de casación: Permite atacar los errores de la actividad procesal o los defectos en la interpretación de las leyes efectuada por un tribunal inferior.
- 6/ Recurso de inconstitucionalidad: Permite cuestionar frente a su aplicación en el caso concreto, la compatibilidad de una ley, decreto o reglamento con la Constitución Nacional.
- 7/ Recurso de revisión: Procede exclusivamente a favor del imputado respecto de la sentencia condenatoria firme.

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS ÚTILES:

El siguiente agrupamiento de términos se circunscribe principalmente a los términos más habituales del sistema de justicia penal, tanto al derecho penal como al derecho procesal penal, atendiendo al carácter complementario del documento destinado a los/las comunicadores/as y a la descripción de las etapas procesales. Asimismo, se tienen en cuenta los términos más usuales durante las coberturas periodísticas sobre casos “policiales” y “judiciales” en los servicios de comunicación audiovisual. Dado que la Guía propone trabajar desde la rigurosidad periodística, una de sus manifestaciones radica en la precisión de las palabras con las que se elaboran las noticias. A continuación se exponen esos términos según cuatro universos: “Actores judiciales y organismos”; “Actores implicados en los casos conforme a las denominaciones vigentes en el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación”; “Tipificación de delitos según el Código Penal de la Nación Argentina” y “Terminología específica para referir a las acciones, documentos e instancias del desarrollo del procedimiento judicial”.

6.1. ACTORES JUDICIALES Y ORGANISMOS

Abogado/a: Persona convocada para defender a otra, asesorarla en los asuntos judiciales o para actuar en ellos en defensa de los intereses de los litigantes. Tiene que tener título universitario de una facultad de derecho y estar inscripto en el Colegio de Abogados, el que otorga una matrícula profesional que permite actuar en juicio.

Actor civil: Es un sujeto secundario del proceso penal que se presenta al juicio para reclamar un reintegro patrimonial, en virtud del daño causado por el hecho que se investiga en el proceso penal.

Auxiliares de justicia: Son actores que interactúan y sirven de apoyo para la administración de justicia, como por ejemplo, los peritos.

Cámara de Apelaciones: es un órgano colegiado, que se compone por distintas salas integradas por tres jueces o juezas cada una. Intervienen en la revisión de las decisiones dictadas por los jueces de primera instancia.

Camarista: Cualquiera de los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones o la Cámara de Casación Penal.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Es un organismo de protección de derechos humanos que funciona en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tiene su sede en Washington, D.C. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal. Sus principales funciones son: recibir, analizar e investigar denuncias de violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Puede dictar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas en casos graves y urgentes. Si encuentra que se han violado los derechos humanos, puede propiciar soluciones amistosas, dictar recomendaciones o derivar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También interviene sobre la situación general de los derechos humanos en los Estados y publica informes especiales. En su labor de investigación puede realizar visitas a los países para analizar en profundidad la situación general y/o para investigar una situación específica.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Junto con la Comisión Interamericana integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte IDH es una institución judicial cuyo objetivo es la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está integrada por siete jueces, provenientes de los Estados miembros de la OEA, que se desempeñan a título personal. Tiene su sede en San José, Costa Rica. La Corte tiene función jurisdiccional y consultiva.

Interviene en los casos en que se alegue que uno de los Estados parte ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención. Las personas, grupos o entidades presentan los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene la facultad de llevar el asunto ante la Corte, siempre que el Estado acusado haya aceptado su competencia. Las sentencias de la Corte son obligatorias e inapelables.

Asimismo, tiene competencia consultiva, ya que los Estados miembros de la OEA y la CIDH pueden consultar a la Corte sobre la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, como así también sobre la compatibilidad entre cualquier ley interna de los Estados parte respecto de los instrumentos internacionales.

Consejo de la Magistratura: Es un órgano permanente del Poder Judicial que tiene a su cargo la selección de jueces y juezas, los procesos de disciplina y la administración del Poder Judicial. Se encuentra integrado de manera equilibrada por la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces y juezas de todas las instancias y de los abogados y abogadas de la matrícula federal, además de personas del ámbito académico y científico. Se encuentra entre sus competencias específicas llevar a cabo los concursos para jueces y juezas y elaborar las ternas que luego serán enviadas al Poder Ejecutivo para que elija un candidato o candidata, cuyo pliego será remitido a la Comisión de Acuerdos del Senado para su acuerdo. También ejerce facultades disciplinarias sobre magistrados y magistradas; decide la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en cuyo caso ordena la suspensión y formula la acusación correspondiente; dicta los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia y elabora el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial.

Corte Suprema de Justicia de la Nación: Es la cabeza del Poder Judicial Nacional. Conforme a la Constitución Nacional, la Corte Suprema es el tribunal en el que se dirimen, en última instancia local, los alcances de las garantías constitucionales y constituye el órgano superior del poder jurisdiccional en el orden interno. Actualmente la ley establece que se compone de cinco jueces o juezas. Su carácter de "Suprema" se debe a que sus decisiones no admiten recurso alguno y sus sentencias son definitivas. No obstante, como hemos visto en esta Guía, existen supuestos en los que una sentencia puede ser revisada.

Defensor o Defensora oficial: interviene como agente de la Defensoría General de la Nación, representando jurídicamente a aquellas personas que no poseen medios económicos suficientes como para contratar a un/a abogado/a particular.

Juez o jueza natural: Es el tribunal establecido por la Constitución para que intervenga en un proceso dado. La Constitución prohíbe que las personas sean juzgadas por tribunales especiales o creados con posterioridad a la ocurrencia del hecho. Éste es el sentido de la fórmula según la cual nadie puede ser "juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa" (artículo 18 de la Constitución Nacional).

Jurado de enjuiciamiento o jury de enjuiciamiento: Es el órgano constitucional encargado de enjuiciar a los jueces y juezas de tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia

de la Nación, luego de la acusación por parte del Consejo de la Magistratura. Se compone de legisladores/as, magistrados/as y abogados/as de la matrícula federal, según el artículo 115 de la Constitución Nacional. Su fallo es irrecurrible y no tiene más efecto que destituir al acusado.

Litigante: Es un nombre genérico que se usa para denominar a quienes participan de un juicio, ya sea como actores o demandantes en la esfera civil y como querellantes o acusadores en la penal.

Perito/ta: Persona experta en determinada materia (científica, artística, técnica) que informa al juez o jueza, bajo juramento, sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.

Procurador/a General de la Nación: Se denomina así al magistrado o magistrada que ejerce la jefatura del Ministerio Público Fiscal y que dictamina en los asuntos que tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Querella: La querella es un mecanismo procesal que permite garantizar el derecho de la víctima a participar en el proceso. De este modo, el querellante puede intervenir activamente en el proceso, solicitar y ofrecer prueba, alegar e interponer recursos judiciales, entre otras acciones. Pueden presentarse en carácter de querellantes: a) la víctima, es decir la persona ofendida directamente por el delito; b) su cónyuge, conviviente, herederos/as, tutores/as o guardadores/as en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieron tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos; c) las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, siempre que el objeto establecido en el estatuto de creación se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados y se encuentren registradas y; d) los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de sus miembros, genocidio o afecten de un modo directo sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente (artículo 78 del nuevo CPPN).

Fiscal: Es el/la agente público/a dependiente de la Procuración General de la Nación que tiene a su cargo impulsar la acción penal o perseguir los delitos, investigarlos y realizar la acusación ante el juez/a o Tribunal interviniente.

6.2. ACTORES IMPLICADOS EN LOS CASOS CONFORME A LAS DENOMINACIONES VIGENTES EN EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

Acusado/a de un delito: Persona contra la cual se ha dictado auto de apertura del juicio oral. Esto ocurre una vez finalizada la etapa de instrucción o investigación judicial momento en el cual, habiéndose reunido la mayor cantidad de datos posibles, las partes acusadoras formulan por escrito su acusación.

Condenado/da: Persona encontrada culpable de haber cometido un delito o una contravención por sentencia judicial firme.

Imputado/a: Persona a la que se le atribuye la responsabilidad y realización de un delito al comienzo del procedimiento judicial.

La imputación implica la acusación formal de la persona (denuncia, requerimiento fiscal de instrucción, sumario policial de prevención o querrela privada), quien desde ese momento puede ejercer su derecho a defensa: tiene derecho a ser escuchado por el juez o jueza en presencia de su abogado/a, a que se le informe sobre la denuncia en su contra y sobre los elementos de la investigación en que se sustenta la atribución de responsabilidad en esta etapa procesal. Asimismo, tiene derecho a solicitar y ofrecer pruebas y a ser informada sobre el estado de la causa penal.

Procesado/a: Persona contra la cual se haya dictado una resolución de procesamiento o formalización de la investigación en un proceso penal.

Procesamiento: Es un juicio de probabilidad que realiza el juez o la jueza sobre la existencia del delito y la responsabilidad que como partícipe le corresponde a la persona imputada. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación lo denomina "formalización de la investigación".

Testigo: Es la persona física que, en calidad de tercero, declara en juicio sobre los hechos que se dirimen. Para ser testigo, los hechos sobre los que se declara tienen que haber sido conocidos a través de los sentidos, y no por relatos de otras personas. Además, quien atestigua no tiene que estar vinculado a las consecuencias que el delito produjo. Debe responder a preguntas precisas que le formula el tribunal. Son deberes legales del testigo: comparecer ante la citación del juzgado, y declarar conforme al interrogatorio a que se le somete. La declaración se encuentra precedida del juramento o promesa de decir verdad que debe prestar el testigo. Asimismo, el juzgado le informará la responsabilidad penal que le corresponde por declaraciones falsas o reticentes.

RESUMEN DE NOMBRES APROPIADOS PARA LOS IMPLICADOS, SEGÚN LA FASE DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

IMPUTADO/A

Quien ha sido formalmente denunciado/a ante el poder judicial como partícipe de un delito.

ACUSADO/A

Persona contra la cual se ha dictado auto de apertura a juicio oral una vez concluida la investigación judicial.

PROCESADO/A⁷

Persona contra quien se ha dictado un "auto de procesamiento".

CONDENADO/A

Persona contra quien se ha dictado una sentencia judicial a partir de la acreditación de su culpabilidad.

6.3. TIPIFICACIÓN DE DELITOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA (ARTÍCULOS 79 A 313)

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

Aborto: El aborto es un delito por el que puede ser condenada la persona que lo practica (médicos/as, cirujanos/as, parteros/as o farmacéuticos/as), sea con o sin consentimiento de la mujer embarazada. La pena se agrava si se produce la muerte de la mujer. La mujer también es pasible de condena, tanto si practica el aborto ella misma como cuando consiente que otro lo haga (artículo 85 del Código Penal de la Nación).

El aborto practicado por médico/as diplomado/as con el consentimiento de la mujer embarazada, no es punible en los siguientes casos:

- Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
- Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer "idiotas" o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto (artículo 86 del Código Penal de la Nación).

Homicidio: La figura básica del homicidio consiste en matar a otra persona (artículo 79 del Código Penal de la Nación). La pena se agrava si:

- existe una relación de parentesco ascendiente o descendiente, o si se trata de cónyuges o ex cónyuges, o de una relación de pareja, con o sin convivencia;
- si se comete con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;
- si se comete por precio o promesa remuneratoria; por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión;
- si se comete por un medio idóneo para crear un peligro común;
- si se realiza premeditadamente entre dos o más personas;
- si se realiza para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito,
- si la víctima es miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición;
- si se realiza abusando de una función o cargo si se trata de integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario;
- si la víctima es superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.
- si la víctima es una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género;
- cuando se comete con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación (artículo 80 del Código Penal de la Nación).

La pena es más leve cuando el homicidio se comete en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable; cuando el propósito fuera causar un daño en el cuerpo o en la salud y produjere la muerte de alguna persona, siempre que el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte (artículo 81 del Código Penal de la Nación).

Se considera homicidio culposo al hecho de causar a otra persona la muerte por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo (artículo 84 del Código Penal de la Nación). La pena se agrava cuando convergen las siguientes circunstancias:

- que las víctimas fatales sean más de una;
- que el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor (artículo 84 del Código Penal de la Nación).

Instigación al suicidio: El delito consiste en instigar a otro al suicidio o ayudarlo a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado (artículo 83 del Código Penal de la Nación).

Lesiones: Daños causados a otro en el cuerpo o en la salud, tanto física como psíquica. Se considera lesión leve a aquella que no impide el trabajo habitual o no necesita de asistencia médica. La lesión grave, en cambio, es aquella que produce una afectación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o, si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo temporalmente o le hubiere causado una deformación en el rostro. Por su parte, la lesión gravísima es aquella que produce enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir (artículo 89 del Código Penal de la Nación).

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

Apremios ilegales: Se trata de uno de los delitos que atenta contra la libertad individual. Se produce cuando un funcionario público, haciendo abuso de sus funciones o autoridad o incumpliendo la ley aplica cualquier tipo de vejamen y/o tormentos, muchas veces con el objetivo de obtener una confesión (artículo 144 bis del Código Penal de la Nación).

Explotación infantil: Comete este delito quien se aprovecha económicamente del trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave. No son pasibles de pena por este delito el padre, madre, tutor/a o guardador/a del niño o niña que incurriere en la conducta descripta (artículo 148 bis del Código Penal de la Nación).

Sustracción de menores: El delito se configura cuando se sustrae a una persona menor de 10 años del poder de sus padres, tutor/a o persona encargada de él o ella, y cuando se lo retiene u oculta (artículo 146 del Código Penal de la Nación).

Tortura: Es un delito contra la libertad que afecta de manera gravísima la dignidad humana y la integridad física y/o psíquica, e implica la imposición de graves sufrimientos. El artículo 144 ter del Código Penal de la Nación establece que será reprimido el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura, y que la pena se agravará si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima.

Trata de personas: El delito consiste en ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia

otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima (artículo 145 bis del Código Penal de la Nación y Ley 26.364, Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas).

Se entiende por explotación la reducción a esclavitud o servidumbre, la obligación a realizar trabajos o servicios forzados; la comercialización o facilitación de la prostitución o de la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; el matrimonio forzado; la extracción forzosa de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.

La pena se agrava si media engaño, violencia, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; o la víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta años o menor de dieciocho, o persona discapacitada, enferma o que no pudiera valerse por sí misma; o si las víctimas fueren tres o más; o si en la comisión del delito participaran tres o más personas. También si hubiera relación de parentesco con la víctima o si el autor fuera autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima o fuera funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Reducción a la esclavitud: Es delito reducir a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y recibirla en tal condición y así mantenerla. También se configura este delito cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil (artículo 140 del Código Penal de la Nación).

Privación ilegal de la libertad: Este delito se configura cuando se priva a alguien de su libertad sin mediar una orden legal (artículo 141 del Código Penal de la Nación). Este delito comúnmente se conoce como secuestro. Cuando lo que se procura es obtener un rescate, es decir, un beneficio patrimonial ilegal, se lo llama secuestro extorsivo, y se lo ubica dentro de los delitos contra la propiedad.

Diversas circunstancias agravan la pena de la privación ilegal de la libertad, de acuerdo con la calidad de la víctima y quien lo comete y de las circunstancias del hecho. Así, por ejemplo, la pena se agrava cuando media violencia o se comete con fines religiosos o de venganza; cuando hubiere vínculo de parentesco con la víctima, se produjera un daño grave o la muerte; fuera cometido simulando autoridad pública u orden

de autoridad pública; o si la privación de la libertad durare más de un mes (artículo 142 del Código Penal de la Nación).

Otra variante de este delito es la sustracción u ocultamiento a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. En este caso, la pena se agrava si el autor lograre su propósito; si la víctima fuese una mujer embarazada; menor de dieciocho años o mayor de setenta, persona discapacitada, enferma o que no pudiese valerse por sí misma; si el hecho lo cometiere quien tuviera vínculo familiar con la víctima; si causare a la víctima lesiones graves, gravísimas o la muerte. Se agrava también cuando quien lo comete es funcionario o empleado público o pertenece o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado y cuando participaran en el hecho tres o más personas (artículo 142 bis del Código Penal de la Nación).

Desaparición forzada de personas: Es una forma específica de la privación ilegal de la libertad que se configura cuando lo comete una persona o grupo de personas que ocupan una función pública, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, prive de la libertad a una o más personas, y este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

La pena se agrava si se produce la muerte de la víctima, si fuera una mujer embarazada o una persona menor de 18 años o mayor de 70 o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre (artículo 142 ter del Código Penal de la Nación).

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Abuso sexual: El código penal requiere que la víctima sea una persona de cualquier sexo, menor de trece años; o que mediare violencia, amenaza, o intimidación en el marco de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder; o que el autor/a se aproveche de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción (artículo 119 del Código Penal de la Nación).

La pena se agrava cuando en virtud de la duración del delito o de las circunstancias de su realización, configurara un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. También se agrava la pena cuando hubiere acceso carnal por cualquier vía. En este caso el delito se conoce comúnmente como violación (artículo 119 del Código Penal de la Nación).

Otros agravantes de este delito se configuran cuando: se produce un grave daño en la salud física o mental de la vícti-

ma; el autor/a fuera ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano/a, tutor/a, curador/a, ministro/a de algún culto reconocido o no, encargado/a de la educación o de la guarda; el autor/a tuviere conocimiento de ser portador/a de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; el hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas; el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones; el hecho fuera cometido contra un/a menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el/la mismo.

Estupro: Es una modalidad del abuso sexual por el que una persona, mediante engaño y viciando, por lo tanto, el consentimiento de la víctima, ataca la libertad sexual de una persona mayor de doce años y menor de dieciséis (artículo 120 del Código Penal de la Nación).

Promoción y explotación de la prostitución de niñas o niños: Se condena a quien promueva o facilite la prostitución de menores de dieciocho años, aunque medie el consentimiento de la víctima. Si ésta fuera menor de trece años el delito recibe una pena mayor. La pena también se agrava si hay engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también, si el autor es ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda (artículo 125 bis del Código Penal de la Nación).

Promoción y explotación de la prostitución: Está penada la acción de promover o facilitar la prostitución de mayores de dieciocho años de edad, con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos. También es delito explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona. En ambos casos para que se configure el delito debe mediar engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción (artículo 126 y 127 del Código Penal de la Nación).

Sustracción de una persona para menoscabar su integridad sexual: El delito se configura cuando se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual.

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

Apología del delito: Elogio o glorificación pública de delito o de quien fuera condenado por un delito (artículo 213 del Código Penal de la Nación).

Asociación ilícita: Es la asociación o banda de tres o más personas que tienen el objetivo de cometer delitos (artículo 210). Otra modalidad de este delito, que recibe una pena

más grave, se configura cuando se toma parte, coopera o ayuda a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características: esté integrada por diez o más individuos; posea una organización militar o de tipo militar; tener estructura celular; disponga de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; operare en más de una de las jurisdicciones políticas del país; esté compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad; tenga notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; reciba algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos (artículo 210 bis del Código Penal de la Nación).

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Cohecho: Es el delito que comenten los jueces o funcionarios públicos recibiendo sobornos o promesas por retardar, ejecutar o dejar de hacer algo relacionado a su cargo y funciones (artículo 256 del Código Penal de la Nación).

Encubrimiento: Delito que lesiona la administración pública de la justicia como bien jurídicamente protegido. Consiste en ocultar a quien cometió un delito, en facilitar la fuga o en hacer desaparecer u ocultar los rastros o pruebas o los bienes sustraídos. Igualmente comete encubrimiento quien, teniendo obligación de denunciar por su profesión o empleo, no lo hiciera, dejara de comunicar a la autoridad las novedades que tuviera acerca de la comisión de algún delito, o negara a la autoridad, sin motivo legítimo, el permiso de acceder a su domicilio para detener a una persona con orden legítima (artículo 277 del Código Penal de la Nación).

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados: Comete este delito quien ocupa la función pública y con fines de lucro utiliza para sí o para otros, informaciones o datos de carácter reservado de los que toma conocimiento en razón de su cargo (artículo 268 (1) del Código Penal de la Nación).

También está penado por la ley no justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas (artículo 268 (2) del Código Penal de la Nación).

También se prescribe una pena para quien teniendo obligación legal de presentar una declaración jurada patrimonial, omitiera hacerlo maliciosamente, o falseara u omitiera inser-

tar los datos (artículo 268 (3) del Código Penal de la Nación).

Exacción ilegal: Es un delito contra la administración pública y el bien protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública. Se trata del delito cometido por la autoridad o persona que ejerce la función pública que abusando de su cargo, se sirve del engaño o del fraude para conseguir un beneficio patrimonial, ya sea en perjuicio para el patrimonio público o privado (artículo 266 y ss. del Código Penal de la Nación).

Malversación de caudales públicos: Lo comete quien ocupando una función pública da a los caudales o efectos que administra una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados (artículo 260 del Código Penal de la Nación).

Prevaricato: Comete este delito el juez o la jueza que dicta resoluciones contrarias a la ley, invocada por las partes o por sí mismo/a o cita, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. La pena se agrava si a raíz de ello se dicta una sentencia condenatoria en una causa criminal (artículo 269 del Código Penal de la Nación).

Sustracción de caudales públicos: Comete este delito quien sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le corresponde por razón del cargo que ocupa. También es delito emplear en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública (artículo 261 del Código Penal de la Nación).

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Algunos delitos vinculados con las drogas (artículo 204 quater del Código Penal y Ley 23.737):

Producción, venta, comercialización: El Código pena a quien sin autorización o con destino ilegítimo: siembre plantas o guarde semillas para producir estupefacientes o materias primas; produzca, comercie, almacene, transporte o distribuya estupefacientes o materias primas; entregue o aplique a otro, estupefacientes a título oneroso. Si lo hiciera a título gratuito, la pena se reduce. La pena disminuye también cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal.

Introducción de estupefacientes en el país: Es delito la introducción en el país de estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o materias primas cuando se declara correctamente ante la Aduana y posteriormente se alterara ilegítimamente su destino de uso.

Organizar o financiar: También constituye delito el hecho de organizar o financiar cualquiera de las actividades ilícitas antes mencionadas.

Otros delitos vinculados con estupefacientes son:

- Fabricar, importar, exportar, distribuir o vender, estando autorizado, tuviese estupefacientes en cantidades distintas de las autorizadas; o emplee compuestos que disimulen sustancias estupefacientes.
- Ingresar en la zona de frontera, precursores o productos químicos aptos para la elaboración o fabricación de estupefacientes. Los precursores y productos químicos serán determinados en listas que, por decreto, el Poder Ejecutivo Nacional debe elaborar a ese fin y actualizar periódicamente.
- Facilitar, aunque sea gratuitamente, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguna de las acciones antes descriptas o para que concurren personas con el objeto de usar estupefacientes.
- Preconizar o difundir públicamente el uso de estupefacientes, o inducir a consumirlos, así como usar estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
- Impartir públicamente instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes.
- Explicar en detalle, a través de los medios masivos de comunicación social, el modo de emplear como estupefaciente cualquier elemento de uso o venta libre.
- Usar estupefacientes para facilitar o ejecutar otro delito. En este caso se aumenta la pena que corresponde al delito de que se trate.

Tenencia de estupefacientes: Es delito tener estupefacientes, aunque la pena disminuye cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surge inequívocamente que la tenencia es para uso personal.

Si en un juicio se condenara a una persona por tenencia para uso personal y se acreditara que ella depende física o psíquicamente de estupefacientes, el juez puede dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medida de seguridad. Si el resultado fuera satisfactorio, será eximido de la aplicación de la pena. Si, por el contrario, transcurridos dos años de tratamiento no se hubiera obtenido un grado aceptable de recuperación por su falta de colaboración, deberá aplicársele la pena y continuar con la medida de seguridad por el tiempo necesario o solamente esta última.

Lo mismo ocurre si previo a la sentencia, durante el proceso penal, se acreditara suficientemente que la tenencia es para uso personal y existieran indicios suficientes de la responsabilidad del procesado/a y de que éste depende física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el trámite del sumario. Si el resultado es satisfactorio, se dicta-

rá sobreseimiento definitivo. En caso contrario, se reanuda el trámite de la causa y podrá aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente la medida de seguridad.

Si el procesado no dependiere física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por una medida de seguridad educativa.

La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no es delito.

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

Alteración del estado civil: Se pena a quien, por un cualquier acto, hiciera incierto, alterara o suprimiera el estado civil de otro (artículo 139 del Código Penal de la Nación).

Sustitución o supresión de identidad: Este delito refiere específicamente a la mujer que fingiera embarazo o parto para dar a su supuesto/a hijo/a derechos que no le correspondan; o al que, por un acto cualquiera, hiciera incierto, alterara o suprimiera la identidad de un/a menor de 10 años, y a quien lo retuviera u ocultara (artículo 139 del Código Penal de la Nación).

DELITOS CONTRA EL HONOR

Calumnia: Es la falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y que dé lugar a la acción pública (ver definición de "acción pública"). Este delito no incluye las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas (artículo 110 del Código Penal de la Nación).

Injuria: Es el hecho de deshonrar o desacreditar a una persona física determinada. Al igual que en la calumnia, no configuran delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configuran delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. A la persona acusada de injurias solo se le permite probar la verdad de los dichos en los siguientes casos:

- Cuando se trate de asuntos de interés;
- Cuando el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal;
- Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado queda exento de pena (artículo 111 y ss. del Código Penal de la Nación).

Publicación o reproducción de calumnias e injurias: Es delito publicar o reproducir, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente. En ningún caso configuran delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas (artículo 113 del Código Penal de la Nación). En el caso de injurias o calumnias propagadas por medio de la prensa, en la C.A.B.A y territorios nacionales, el juez impondrá la condena que corresponda pero además ordenará, si lo pidiera el ofendido, que los editores publiquen la sentencia o satisfacción (artículo 114 del Código Penal de la Nación).

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Daño: En derecho se refiere al delito de causar perjuicios, de manera deliberada, en la propiedad ajena (artículo 183 del Código Penal de la Nación).

Hurto: Hecho delictivo que consiste en apropiarse ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena. A diferencia del robo, en la realización de este hecho punible no se utiliza violencia ni intimidación en las personas ni fuerza en las cosas (artículo 162 del Código Penal de la Nación). La pena de este delito se agrava, entre otras circunstancias, cuando quien lo ejecuta es miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario (artículo 163 bis del Código Penal de la Nación).

Robo: Es el delito que se produce cuando una persona se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitararlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad (artículo 164 del Código Penal de la Nación). La pena se agrava cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias:

- Por las violencias ejercidas para realizar el robo se causan lesiones de gravedad;
- Se comete con armas, o en despoblado y en banda.
- Se comete en despoblado;
- Se comete en lugares poblados y en banda;
- Se perforan paredes, cercos, techos o pisos, puertas o ventanas de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas;
- Quien lo ejecuta fuera integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.

DELITOS INTERNACIONALES

Crimen de lesa humanidad: Según el artículo 8 del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, los

crímenes de lesa humanidad son cualesquiera de los actos siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (artículo 7, Estatuto de Roma). Los crímenes de lesa humanidad no prescriben por el paso del tiempo y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo, conforme al principio de jurisdicción universal.

Graves violaciones a los derechos humanos: Bajo el derecho internacional, ciertas violaciones de derechos humanos son calificadas de “graves”, “serias”, “flagrantes” o “manifiestas”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos caracterizó como graves violaciones de derechos humanos aquellos actos “como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, párrafo 41). Los delitos calificados como “graves violaciones a los derechos humanos” deben ser investigados y castigados penalmente, por eso no pueden ser amnistiados ni sus autores beneficiados con indultos o perdones.

Genocidio: Crimen definido por el derecho internacional y que consiste en actos realizados con la intención de destruir un grupo nacional, étnico o religioso. Según el Estatuto de Roma el “genocidio” es cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo o condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el

seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo (artículo 6 Estatuto de Roma).

6.4. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA PARA REFERIR A LAS ACCIONES, DOCUMENTOS E INSTANCIAS DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Acción penal: Es la acción que da lugar al proceso penal que permite establecer la responsabilidad criminal ocasionada por la comisión de un delito. En términos generales y a modo orientador, la acción es ejercida por la Procuración General de la Nación⁸, es decir, por los y las fiscales, cuando se trata de delitos que afectan a la sociedad y, en razón de ello, tienen carácter público. Si la víctima o sus representantes o causahabientes lo desean, también pueden instar la acción presentándose como querellantes.

Existen algunos delitos frente a los cuales la acción sólo puede ser instada por la víctima, por sus representantes o por sus causahabientes, ya que se entiende que pueden afectar el pudor, por ejemplo, el abuso sexual o la violación. Una vez iniciada la acción por la víctima o sus representantes, la persecución del delito continúa a cargo de los fiscales, aun cuando exista un cambio en la voluntad de la parte afectada.

Absolución: Decisión judicial por la cual se declara libre de culpa a la persona acusada y, por lo tanto, conlleva la orden de libertad y el cese de las restricciones impuestas.

Acusación: Es el acto mediante el cual la fiscalía requiere la apertura de un juicio, una vez concluida la investigación preliminar y en función de que se reunieron los elementos probatorios necesarios en esa etapa procesal, para considerar y evaluar que se ha cometido un delito. La acusación debe contener los datos que identifican al imputado, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al imputado; los fundamentos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que la motivan; la expresión precisa de las disposiciones legales aplicables y su debida correlación con los hechos y con la intervención atribuida a la persona imputada en ellos; el ofrecimiento de la prueba que propone para el juicio; y el requerimiento de pena estimado, a los efectos de la determinación del juez, tribunal o jurado. Si el juez o la jueza admite la acusación, luego de la audiencia de control, dictará el llamado “auto de apertura a juicio”, según los artículos 241, 246, 247 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Alegato: Exposición de los y las abogadas de las razones que sirven de fundamento al derecho de la persona a quien representan e impugna las de la parte adversaria.

Allanamiento: Se trata del registro de un domicilio y el principio general es que se realiza sólo con orden judicial. Sin

embargo, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación establece excepciones y autoriza el allanamiento sin orden judicial, por ejemplo, frente a una situación que amenace la vida de los habitantes o la propiedad (ej. un incendio); se haya visto a alguien entrando en la casa con indicios manifiestos de comisión de un delito o se tratara de una persona sospechosa a quien se persigue para su aprehensión; se pidiera socorro por estarse cometiendo un delito; se sospechara fundadamente que allí se encuentra una víctima de una privación ilegal de la libertad y corriere peligro inminente su vida o integridad física.

Apelación: Recurso que se interpone ante una instancia superior para impugnar una resolución, o sentencia y se solicita se revoque o anule.

Amigo del Tribunal: También conocido como “amicus curiae”, consiste en una presentación ante el Tribunal donde tramita un litigio judicial de terceros ajenos a esta disputa que cuentan con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para el desarrollo del proceso y su resolución. Este tipo de presentaciones se encuentra regulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su acordada 7/2013. La aceptación del amicus curiae se encuentra ampliamente consolidada en la jurisprudencia de todas las jurisdicciones del país, en razón de las ventajas que presenta, ya que permite acercar a los jueces argumentos o consideraciones sobre cuestiones complejas y controvertidas que trascienden el interés de las partes y pueden servir para una mejor resolución de los casos y, asimismo, contribuye a legitimar la actuación de la Justicia, ya que posibilita una mayor participación y discusión sobre cuestiones de relevancia social.

Amparo: Es una acción rápida, establecida en la Constitución Nacional, que se puede interponer, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra actos y omisiones de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. El juez o la jueza puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión que provocó la lesión (artículo 43 de la Constitución Nacional).

Arbitrariedad: Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho del juez o la jueza en su proceder o a través de su sentencia. Se habla de sentencia arbitraria cuando ésta es infundada, incongruente, irrazonable, absurda, no equitativa. Particularmente, cuando se habla de doctrina de arbitrariedad, se hace referencia a la doctrina desarrollada por la Corte Suprema

para analizar casos que versan sobre la interpretación del derecho común (no federal), hechos o pruebas, asuntos que la Corte no debería estudiar dado que su mandato se reduce, a grandes rasgos, a intervenir en temas de derecho federal o constitucional. La Corte ha sostenido que algunas sentencias apeladas tienen problemas tan graves (por arribar a conclusiones que no se deducen de las premisas, sopesar disparatadamente las pruebas, entre otros problemas) que se hace necesaria su intervención.

Arresto: Detención provisional de una persona sospechosa de haber cometido un delito o contravención. En los Códigos Procesales Provinciales y en el Nacional, se utiliza también para referirse a la llamada “inmovilización en el lugar del hecho”, en el primer momento posterior a la comisión de un delito de acción pública, cuando no fuese posible individualizar al autor, partícipes y testigos y se debe proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de los hechos.

Auto: Resolución judicial que decide cuestiones secundarias, previas, incidentales o de ejecución para las que no se requiere sentencia.

Careo: Poner a una o varias personas en presencia de otra u otras, con objeto de intentar arribar a la verdad de dichos o hechos.

Carta documento: Es un tipo de comunicación fehaciente que no requiere la presencia de un escribano público en el acto de imposición ni en el de entrega. Entre las características de la carta documento se destacan: a) Es un servicio que presta el Estado a través del Correo Oficial de la República Argentina S.A.; b) Se distribuye de modo prioritario; c) Se realizan dos visitas de entrega; c) Se entrega bajo firma; d) Se avisa el recibido; e) Se realiza a través de formularios normalizados.

Caución: Es la garantía que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación actual o eventual. La caución pecuniaria permite, en algunos casos, obtener la libertad provisional de una persona procesada (Ver artículo 117, inciso h, del nuevo CPPN).

Cédula judicial: Es el papel de citación o de notificación autorizada por un funcionario judicial. Se utiliza para citar a alguien a reunirse o presentarse en sede judicial o para que concurra a la realización de un acto o diligencia judicial; o para poner en conocimiento fehacientemente un auto o una resolución.

Competencia penal: La justicia penal, en cumplimiento de fines prácticos y técnicos, se manifiesta a través de diversos tribunales. Ello se produce en función de salvar las distancias en el extenso territorio, seleccionar a los/as magistrados/as en los distintos tipos de causas y de acuerdo a la

diversificación de actividades desarrolladas en las sucesivas fases del proceso. Conforme a estas distinciones, un tribunal será competente para un determinado conjunto de causas penales e incompetente para las demás; competente para un momento del proceso e incompetente para los demás. A modo de ejemplo de competencia, la justicia penal federal tiene competencia en todo el país, atiende específicamente en materia de estupefacientes, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, y otros delitos que afectan a la renta y a la seguridad de la Nación. En cambio, la justicia penal ordinaria, también denominada “justicia provincial”, entiende en el tratamiento de los delitos comunes con sus propios órganos judiciales y legislación procesal en cada una de las provincias.

Concurso de delitos: existen dos supuestos de concursos: concurso ideal, cuando la persona comete un acto que constituye una pluralidad de delitos. Por ejemplo, quien roba en una casa y para ello rompe una puerta, incurre en allanamiento de morada y robo, pero este último delito absorbe al anterior, por ser el medio necesario para perpetrarlo. En este caso se debe aplicar sólo la pena mayor y no la que corresponde a cada uno de los delitos. En el concurso real la persona comete varios actos que configuran distintos delitos, ya sea de manera simultánea o sucesiva. Por ejemplo, si durante un robo en una casa se mata a una persona. Concurren delitos a los que debe dictarse una única sentencia y una única pena, pero para establecerla se acumulan todas las penas que corresponden a los distintos delitos.

Contravención: Es una conducta antijurídica a través de la cual se pone en riesgo o afecta un determinado bien jurídico protegido. Sin embargo, es considerado de menor gravedad que un delito y su regulación se encuentra en los códigos contravencionales, dictados por las legislaturas locales.

Cosa juzgada: Se produce cuando un caso tiene sentencia firme y, por lo tanto, no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. De esta manera, impide que una misma cuestión sea juzgada dos veces sobre un mismo objeto.

Costas: Son los gastos en los que debe incurrir cada una de las partes involucradas en un juicio. Los establece el juez o jueza en la sentencia.

Criminalística: Es el estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del crimen.

Criminología: Es la ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos desde un enfoque interdisciplinario.

Cuasi delito: Es la acción dañosa para otra persona que se ha realizado sin ánimo de perjudicarla o acción de la que,

siendo ajeno, debe uno responder por algún motivo. Es el llamado acto ilícito civil cometido con culpa, sin dolo, es decir sin intención, que debe ser reparado.

Culpa: Se actúa con culpa cuando se omite la diligencia exigible a alguien, y como resultado se produce un hecho injusto o dañoso. En este caso quien actúa sin la debida diligencia verá motivada su responsabilidad civil o penal. La omisión de diligencia se puede expresar en imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos y deberes.

Dar fe: Declarar, testificar, al servicio de la justicia, la verdad de lo presenciado. Afirmar la autenticidad de un hecho. Legalizar un documento o las firmas del mismo.

De pleno derecho: Se dice que algo ocurre “de pleno derecho”, cuando es consecuencia de una disposición legal y no de la ocurrencia de un hecho. Es decir que es algo que ocurre independientemente de la voluntad de las personas y sin requerir el cumplimiento de formalidades previas.

De oficio: Una actuación de oficio es aquella que se inicia sin la necesidad de un requerimiento o denuncia de un particular o parte interesada. Por ejemplo, cuando se inicia una investigación en el ámbito del fuero penal desde el Ministerio Público Fiscal o desde el juzgado competente, porque estas autoridades tomaron conocimiento de la posible comisión de un delito de acción pública.

Debate judicial: Es equivalente a “pleito”, aunque en sentido restringido se refiere al desarrollo de una audiencia o de las audiencias del juicio oral.

Debido proceso: Es el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales en materia de procedimiento penal, en especial aquellos que implican garantías fundamentales como el derecho de defensa y la presentación de pruebas.

Declaración indagatoria / declaración de la persona imputada: Es el acto en el que el juez o jueza formula preguntas a la persona presuntamente autora de un delito. Sólo pueden asistir a este acto quien ejerza la defensa y el o la fiscal. La persona imputada puede abstenerse de declarar y en ningún caso se le requiere juramento o promesa de decir la verdad ni se la puede obligar a declarar contra su voluntad. La decisión de llamar a prestar declaración indagatoria es una de las facultades propias del juez o jueza de instrucción, que sólo requiere como sustento que hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito. En el nuevo Código Procesal Penal de la Nación ya no existe el instituto “declaración indagatoria”, sino la “formalización de la investigación”. Para más detalle consultar la definición de “procesado”.

Delito: Es la conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de la infracción penal. Sólo se consideran delitos

aquellos que se encuentran expresados en el Código Penal y las leyes complementarias. Hay delitos dolosos, que son aquellos que se cometen intencionada y voluntariamente, y hay delitos culposos, que son aquellos que se cometen por descuido o falta de prudencia. El Código Penal organiza los delitos de acuerdo al bien jurídico que se encuentra afectado en cada caso. A modo de ejemplo: delitos contra las personas, contra el honor, contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad, contra el orden público, contra la administración pública.

Demanda: Es la acción judicial por la cual se promueve un juicio en los fueros civil, comercial o laboral. En general se encuentra compuesta por: 1) datos y circunstancias del actor y demandado y domicilio; 2) relato de los hechos, que irán separados y numerados; 3) fundamentos y 4) peticiones que se realizan al juez o jueza.

Denegación de justicia: Es la negativa del juez, jueza o Tribunal a examinar un asunto que se le ha sometido y a pronunciar un fallo sobre él. Es un delito reprimido por el Código Penal de la Nación en los artículos 273 y 274, en los cuales se tutela el derecho individual y colectivo a recurrir a la justicia en amparo de los derechos.

Denuncia: En el fuero penal, es el acto por el cual se pone en conocimiento de la autoridad competente –policía, fiscal o juez penal un delito, con el objeto de que se proceda a su investigación y en el caso de corresponder a su sanción penal. No hay obligación genérica de denunciar, aunque los/as funcionarios/as públicos/as y profesionales del arte de curar, de conocer los hechos en ejercicio de sus funciones, se encuentran obligados a hacerlo.

Derecho: Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. También se refiere en su dimensión subjetiva a la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor.

Desafuero: Hecho que priva de fuero o privilegio a quien lo tenía y, en consecuencia, somete a la persona a la jurisdicción ordinaria.

Detención: Es la privación provisional de la libertad ordenada por una autoridad competente. Una detención legal es aquella que procede bajo orden judicial o en circunstancias excepcionales por la autoridad policial. La detención excepcional por autoridad policial procede cuando en casos de delito in fraganti, o por la simple sospecha de que se cometerá o que se ha cometido un delito de acción pública. En estos casos, la persona detenida debe ser llevada de inmediato ante el juez o jueza competente y se le debe permitir comunicarse

con su familia y su abogado/a o proveerle uno/a en caso de que no lo tenga.

Detención por averiguación antecedentes y/o identidad: Es una de las facultades que concede el régimen normativo federal y provincial a las fuerzas de seguridad, concretamente a la policía, para detener a una persona con el fin de averiguar su identidad y/o antecedentes penales. Esta facultad policial se ejerce a través de una serie de prácticas rutinizadas que dan lugar, en muchos casos, a situaciones de violencia institucional y a violaciones a los derechos humanos.

Discriminar: Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos religiosos, políticos, étnicos, de género u orientación sexo-genérica, o cualquier otra distinción arbitraria e ilegítima.

Doctrina jurídica: Comprende las opiniones y teorías desarrolladas por personas expertas en la ciencia jurídica. Surge principalmente en las universidades e institutos de investigación, donde se estudia e interpreta el derecho, entendido como una ciencia social. No tiene fuerza obligatoria, ya que en nuestro sistema jurídico no es fuente de derecho, aunque tiene influencia en la formación de la convicción del juez o jueza.

Dolo: Es el deseo y la intención de cometer un delito, queriendo y buscando el resultado delictual. Hay dolo directo cuando existe voluntad concreta de dañar y dolo indirecto cuando no hay voluntad concreta de dañar, pero la persona no descarta que pueda producirse daño y, a pesar de ello, continua adelante con la acción.

Emoción violenta: Perturbación del equilibrio psico-orgánico que conlleva alteraciones en la conducta que se traducen en formas violentas de expresión. La emoción violenta puede ser considerada un atenuante del delito de homicidio, pero para ello debe ser probada a través de una pericia médica.

Ensañamiento: Circunstancia agravante de responsabilidad criminal por la que una persona comete un hecho punible aumentando, a propósito, el dolor y sufrimiento de la víctima.

Espíritu de la ley: Sentido genuino de un precepto legal, en contraposición a la letra estricta de su texto.

Estado de derecho: Ente organizado jurídicamente conforme al principio de separación de poderes, en el cual se reconocen derechos públicos subjetivos y se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del sometimiento de la administración a la ley, expresión de la voluntad popular. El Estado de Derecho nace como reacción al Estado Absoluto, en el que dominaba el poder soberano del monarca. Se caracteriza por: 1) división de poderes; 2) imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; 3) reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales; y 4) sometimiento del Estado a la ley.

Estado de necesidad justificante: Es la conducta anti-jurídica justificada en razón de evitar otro mal inminente. El fundamento general del estado de necesidad justificante es la necesidad de salvar el interés mayor, sacrificando el menor, en una situación no provocada de conflicto extremo. Actúa en estado de necesidad justificante, por ejemplo, quien ingresa a un domicilio ajeno para refugiarse de un ciclón. El estado de necesidad está previsto como una causa de justificación en el artículo 34, inciso 3°, del Código Penal de la Nación: "El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño".

Estado de sitio: Es el régimen restrictivo de las libertades públicas que puede aplicarse por decreto sobre la totalidad o una parte del territorio en caso de amenaza exterior o de insurrección, y que se caracteriza por el aumento del contenido de los poderes ordinarios de policía. Es un régimen de excepción durante el cual quedan en suspenso garantías constitucionales, con mayor o menor extensión, según las legislaciones. Puede ser establecido, según el artículo 23 de la Constitución Nacional, en "caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de (...) la Constitución y de las autoridades creadas por ella" y se agrega que: "durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas" y "su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino". Hay algunas garantías constitucionales que no se suspenden ni aún durante el estado de sitio, por ejemplo, la posibilidad de presentar acciones de habeas corpus.

Excarcelación: Es la decisión de poner a una persona encarcelada en libertad, provisional o definitiva, por mandato judicial, bajo fianza o sin ella. La excarcelación puede disponerse: a) Si el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal; b) Si el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por la sentencia no firme; c) Si el imputado hubiere permanecido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida (Conforme artículo 191 del nuevo CPPN).

Eximición de prisión: La eximición de prisión la dispone el juez o jueza cuando la persona se encuentra en libertad. Puede ser solicitada por cualquier persona imputada de un delito, en cualquier estado del proceso antes del dictado de la prisión preventiva. Para decidir, el juez o jueza debe calificar las características del hecho y las condiciones personales del imputado y si considera que pudiere resultar de aplicación

una condena condicional, podrá eximir de prisión al imputado. También corresponde la eximición de prisión en los delitos de acción privada y cuando se trate de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión o como consecuencia de la crítica en cuestiones públicas (Conforme artículo 185, apartados a, b y c, del nuevo CPPN).

Excusación: Es la abstención espontánea de los jueces o juezas cuando ocurre alguna de las circunstancias legales que hacen dudosa la imparcialidad necesaria para la correcta administración de justicia. A modo de ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 59 menciona entre los motivos de excusación que el juez o jueza haya intervenido en el caso previamente, acusando, defendiendo, representando, o de otro modo; o si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de la acusación, no podrá intervenir en el juicio, si pronunció la decisión impugnada no podrá intervenir en el procedimiento que sustancia la impugnación, ni en su decisión; si en el caso intervino o interviene su cónyuge, conviviente u otras personas mencionadas en el Código; si, antes de iniciado el procedimiento, tuvo amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas, si denunció o acusó a alguna de ellas o fue acusado/a o denunciado/a por alguna de ellas, entre otros supuestos.

Exhorto: Forma de colaboración procesal entre órganos judiciales, de forma que el órgano exhortante requiere al exhortado la realización de ciertas actuaciones inherentes al proceso que conoce y que han de efectuarse fuera de su circunscripción o del ámbito de competencia de su sede.

Exhumación: Acto de desenterrar o sacar de la sepultura restos humanos.

Eximentes: La infracción criminal se compone de unos elementos esenciales sin los cuales no puede existir. Esos elementos son: la acción, la antijuricidad, la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Si concurre alguna circunstancia que elimine algunos de estos elementos, el sujeto queda exonerado de responsabilidad criminal. A tales circunstancias se las denomina genéricamente eximentes en atención al efecto que producen.

Expresión de agravios: Escrito presentado para alegar el mal, el daño o perjuicio ocasionados por la sentencia de un juez o jueza.

Extradición: Procedimiento por el que un gobierno -requiriente- solicita a las autoridades de otro país -requerido- que le envíen a personas que se encuentran en su territorio y que en el país requirente han sido imputadas o condenadas por un delito. Se tramita por vía diplomática y de acuerdo a los tratados existentes, o conforme al principio de reciprocidad.

Falta de mérito: Resolución que toma el juez o jueza -luego de la declaración de la persona imputada- cuando estima que no hay elementos de juicio suficientes para tener por acreditado el hecho o la responsabilidad. Si la persona está detenida será puesta en libertad, sin perjuicio de continuar la investigación.

Fallo: En sentido amplio, significa lo mismo que la sentencia judicial. En sentido estricto, es la parte decisoria de la sentencia, es decir, la parte final en la que el juez, jueza o tribunal decide el pleito condenando o absolviendo.

Foja: Sinónimo de hoja. Se usa habitualmente en el lenguaje jurídico para individualizar numéricamente un determinado documento, escrito o resolución judicial en un expediente.

Forum shopping: Es una expresión que refiere a la elección del fuero más conveniente. Consiste en desplegar maniobras de litigio con el fin de elegir un juzgado con el que la parte actora se sienta más cómoda, ya sea por la tendencia jurisprudencial de los jueces o juezas, por alguna conveniencia de la parte o por la relación de cercanía con el juez o jueza. De esta manera, se evade el propósito del sistema de sorteo a través de prácticas como presentar varias denuncias iguales con leves modificaciones para ratificarlas sólo en el juzgado que puede serle más favorable.

Frutos del árbol venenoso: Es una metáfora que hace referencia a las pruebas recolectadas con ayuda de información obtenida ilegalmente. Si el origen de la prueba se corrompe, ya que es obtenida por medios ilegales, su calidad probatoria resultaría inválida. Así, por ejemplo, no tiene ninguna validez la confesión obtenida por medio de la tortura o la prueba documental recolectada en un domicilio al cual se accedió sin la correspondiente orden judicial que lo habilitara. El origen ilegal de la prueba se extiende a sus efectos probatorios.

Fuentes del derecho: Designa al conjunto de normas jurídicas aplicables en un Estado en un momento dado. En los países de derecho escrito, como la Argentina, las principales fuentes son los textos escritos, como los tratados internacionales, las constituciones, las leyes y los reglamentos. Aunque otras fuentes, como las costumbres, los principios generales del derecho consagrados por la jurisprudencia -inspirada a veces por la doctrina de los autores- ejercen una influencia mayor o menor según las materias.

Fuero: La jurisdicción o potestad que se tiene de conocer cierto tipo de causas, ya sean en razón de la materia, de la clase de personas o el territorio donde se ejerce. Por ello se define como la competencia a la que legalmente están sometidas las partes y que, por derecho, les corresponde.

Generales de la ley: Son las preguntas que obligatoriamente se formulan a los y las testigos para determinar si tienen alguna relación con las partes o algún interés en el resultado del juicio.

Garantía jurídica: Designa a cualquier norma que protege derechos fundamentales. Se relaciona con la exigencia de proteger o resguardar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales frente al poder punitivo que detenta el Estado. Es decir, se trata del amparo o protección jurídica que la sociedad ofrece al individuo para asegurar la efectividad de algún derecho.

Habeas corpus: Es la acción que se puede interponer frente a una detención ilegal o desaparición forzada o frente a la posibilidad de que ocurra cualquiera de los dos supuestos. La puede interponer la persona afectada o cualquier otra en su favor. Tiene por objeto que un juez o jueza determine si se trata de una detención legal o ilegal. Es una acción que tiende a impedir abusos de autoridad. En los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional "cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio".

Habeas data: Es la acción que puede interponer toda persona para tomar conocimiento de los datos a ella referida y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos, preservando el secreto de las fuentes de información periodística (artículo 43 de la Constitución Nacional).

Identificación: Procedimiento para determinar y/o comprobar la identidad de una persona sospechada o acusada de cometer un delito.

Imprescriptibilidad: En el derecho penal existe la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo como límite temporal al ejercicio del Poder Penal del Estado. Esto implica que si un delito no fuera juzgado en un plazo razonable, establecido en la ley, ya no podrá serlo en el futuro.

Sin embargo, algunos delitos, por su extrema gravedad, no prescriben y pueden ser perseguidos y sancionados independientemente del paso del tiempo. Tal es el caso de los delitos de lesa humanidad, el genocidio y otros crímenes internacionales.

Impericia: Falta total o parcial de idoneidad o conocimientos.

Impunidad: Estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por la ley le corresponde.

Imputabilidad: Aptitud de responder por los propios actos. Es el atributo de aquellos seres humanos cuyas facultades se encuentran íntegras y actúan libres de toda constrictión. Significa ser capaz de entender qué es un delito. Es un presupuesto de la culpabilidad.

Indicio: Hecho que permite deducir o inferir la existencia de otro no percibido o conocido, que es el jurídicamente relevante.

Indulto: Es la gracia que excepcionalmente concede el jefe de Estado y por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna. No son pasibles de indulto las graves violaciones a los derechos humanos.

In dubio pro imputado/a: Es un principio que rige la construcción de la sentencia y la valoración de la prueba en general, y sostiene que en caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado/a. Se deriva del principio de inocencia y de la necesidad de juicio previo para determinar la culpabilidad a través de una sentencia, debido a que si el juez o jueza no tiene los elementos probatorios suficientes o no tiene una fuerte certeza sobre la culpabilidad, debe dictar sentencia absolutoria. Por lo tanto, como la situación básica del individuo es la no culpabilidad o la libertad, si la culpabilidad no es construida con certeza, predomina la libertad o la inocencia (artículo 11 del nuevo CPPN y 3 del actual CPPN)

Juicio abreviado: En los casos en los que la fiscalía estima que al hecho investigado le corresponderá una pena privativa de la libertad inferior a seis (6) años, se puede aplicar un procedimiento abreviado de juzgamiento. La persona imputada debe aceptar en forma expresa los hechos materia de la acusación y manifestar su conformidad con la aplicación de este procedimiento. Se puede acordar su trámite desde la formalización de la investigación preparatoria hasta la audiencia de control de la acusación. Luego se realiza una audiencia donde el juez o jueza verifica el cumplimiento de los requisitos legales del acuerdo y de ser admisible dicta sentencia de condena o absolucón. La pena que puede imponer no podrá superar la acordada por las partes ni modificar su forma de ejecución, sin perjuicio de la aplicación de una pena menor (Conforme nuevo CPPN, artículos 288, 289 y 290).

Juicio oral: Es la etapa principal del proceso penal, donde se resuelve de manera definitiva –aunque revisable– el conflicto que dio origen al procedimiento. Sus características principales son: 1. Oralidad: representa, fundamentalmente, un medio de comunicación entre las partes y no escrita. Dada su importancia, sirve de instrumento para garantizar los restantes principios del juicio oral, ya que si se utiliza la palabra hablada, las personas deben estar presentes (inmediación)

y se comunica de un modo controlable por otras personas (publicidad); 2. Publicidad: se refiere a que la percepción y recepción de la prueba, su valoración y la intervención de las partes se realizan con la posibilidad de la asistencia física, no sólo de las partes sino de la sociedad en general, en procura de la absoluta transparencia de los procedimientos; y 3. Inmediación: es la condición básica para llegar a “la verdad” que persigue el proceso, ya que la comunicación y las pruebas cuentan con la presencia de todas las personas involucradas en el juicio y, especialmente, con la presencia obligada de quien debe dictar la sentencia.

Juicio previo: El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.

Jurisdicción: Es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. Asimismo, se refiere al territorio en el que el juez ejerce sus funciones como tal.

Jurisprudencia: Es la doctrina jurídica asentada mediante resoluciones judiciales reiteradas de los tribunales. Si bien la jurisprudencia no es considerada vinculante, es innegable su importancia como fuente del derecho para que los casos análogos reciban un tratamiento igual.

Laguna del derecho: Se refiere a la ausencia de norma positiva aplicable a una relación determinada. En el derecho civil, se admite superar la laguna por analogía o similitud de otra norma, no así en el derecho penal, donde no es posible aplicar este criterio.

Legítima defensa: Se considera que hay legítima defensa cuando una persona, en defensa propia o ajena, realiza una acción antijurídica y no resulta criminalmente responsable de ella. Deben darse los siguientes requisitos: 1) que la persona sea objeto de una agresión ilegítima, es decir, que se ponga en peligro por otra persona, intencionalmente, el bien jurídico que trata de defender; 2) que haya necesidad de defensa y proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión; y 3) que la agresión no haya sido previamente provocada por quien se defiende de ella. Es una eximente de responsabilidad criminal. Cuando ocurren estas circunstancias no corresponde la sanción penal.

Libertad condicional: Es la posibilidad de que la persona condenada pueda recuperar la libertad anticipadamente, por resolución judicial. Puede otorgarse en distintos supuestos: que la persona condenada a reclusión o prisión perpetua hu-

biere cumplido 35 años de condena; el condenado a reclusión o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios; y el condenado a reclusión o prisión por tres años o menos, que hubiere cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios. La libertad condicional se otorga bajo las siguientes condiciones: 1°. Residir en el lugar que determine el auto de soltura; 2°. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes; 3°. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia; 4°. No cometer nuevos delitos; 5°. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes; 6°. Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficiencia de acuerdo al consejo de peritos. Estas condiciones, y otras que podrá agregar el juez o la jueza, deben ser respetadas por la persona condenada hasta el vencimiento de la pena y, en el caso de perpetuas, hasta 10 años desde el otorgamiento de la libertad condicional (artículo 13 del Código Penal de la Nación).

Mediación: Es un método que permite la resolución de conflictos de manera pacífica, a través del diálogo entre las partes, donde el mediador como tercero neutral las acompaña para que ellas mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más beneficiosas.

Medios de prueba: La finalidad de la prueba es demostrar aquello que se ha afirmado en el juicio. Son diversos elementos que, autorizados por ley, sirven para demostrar la veracidad o falsedad de los hechos controvertidos en juicio. Entre los distintos medios de prueba, se encuentra la pericial, la instrumental, la testimonial, la informativa, entre otras (Ver artículos 127 a 175 del nuevo CPPN).

Negligencia: Es la falta de diligencia o de un comportamiento responsable, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.

Non bis in idem: Es el principio según el cual ninguna persona puede ser condenada dos veces por un mismo delito o infracción.

Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege: Es una expresión en latín que significa “ningún delito, ninguna pena, sin ley previa”. Se trata de un principio básico del derecho penal que implica que sólo por ley se puede determinar qué es delito; que la ley que crea el delito tiene que estar vigente antes de que ocurra el hecho; y que las figuras penales deben ser claramente definidas para evitar la aplicación analógica.

Obiter dictum: Expresión en latín que significa “dicho de paso”. Hace referencia a aquellos argumentos expuestos en la

parte considerativa de una sentencia o resolución judicial que corroboran la decisión principal, pero carecen de poder vinculante, pues su naturaleza es meramente complementaria.

Oficio: Es el documento formal por el cual el juez o tribunal realiza un pedido de informes sobre algún dato relevante para la causa.

Patrocinio letrado: Es el asesoramiento técnico y representación en el procedimiento judicial de las partes litigantes que lleva a cabo una abogada o abogado matriculado en el Colegio Público de Abogados de la jurisdicción en la que se desarrolla el juicio.

Pericia: Informe elaborado por una persona especializada técnicamente, que sustenta sus conclusiones en fundamentos científicos y técnicos.

Per saltum: Del latín, significa “por salto” y es la posibilidad de un tribunal superior, en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de intervenir, de oficio o a pedido de parte, en el conocimiento de causas judiciales salteándose las etapas normales de intervención de los tribunales de primera o segunda instancia.

Plenario: Fallo que dicta una cámara de apelaciones reunida en pleno, aprobado por mayoría, para unificar jurisprudencia o conceptos contrapuestos de las distintas salas. Son obligatorios para los jueces del mismo fuero.

Premeditación: Circunstancia agravante de ciertos crímenes por la cual la intención criminal es madurada y reflexionada durante cierto lapso de tiempo.

Prescripción: En derecho penal, el termino prescripción se refiere al efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre la acción y la pena. La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la pretensión punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del delito. Es un límite temporal al ejercicio del poder penal del Estado.

Presunción de inocencia: Principio según el cual, en materia penal, toda persona se considera inocente de los hechos que se le imputan y debe por lo tanto ser tratada como tal, mientras no se la haya declarado culpable por la jurisdicción competente. Se encuentra consagrado a nivel local en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Se deriva de lo establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, al afirmar que “...ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...”. El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referida a las garantías judiciales, establece que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a

que se presume su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Principios generales del derecho: Son reglas jurídicas no escritas, comunes y aceptadas por todos los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, que forman parte del ordenamiento jurídico por constituir los soportes estructurales del sistema normativo.

Principio de contradicción: Llamado también de bilateralidad o de controversia, deriva de la cláusula constitucional que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Se refiere a la necesidad de una dualidad de partes que sostienen posturas jurídicas opuestas entre sí, la persona imputada/acusada y la fiscalía o querrela frente al juez interviniente, que sería parte independiente del proceso. Requiere una igualdad de fuerzas y exige que las partes intervinientes tengan los mismos derechos de ser escuchados y de practicar pruebas.

Principio de legalidad: Garantía con jerarquía constitucional otorgada a toda persona, en virtud de la cual no se puede interpretar que un acto determinado es delictivo y pasible de sanción penal, si no ha sido previsto expresamente como tal por una norma preexistente.

Principio de reserva: En el derecho penal, es el principio según el cual toda conducta que no esté prohibida por ley está permitida. Está establecido en el Artículo 19 de la Constitución Nacional: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Prisión perpetua: También llamada popularmente “cadena perpetua”, consiste en la pena privativa de libertad de carácter indefinido por la comisión de un delito. A pesar de su nombre, la prisión perpetua no implica que la persona condenada no pueda acceder a la libertad condicional. El plazo de cumplimiento efectivo para acceder a tal beneficio es de 35 años.

Prisión preventiva o provisional: Es la privación de la libertad de la persona imputada durante el desarrollo del proceso judicial. Se trata de una medida cautelar excepcional, que procede luego de fracasar o por no resultar suficientes otras medidas menos restrictivas. Se ordena en función de la gravedad de las circunstancias, la naturaleza del hecho y las condiciones del imputado, que sirven para decidir sobre los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso, previsto en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 185. Se basa en el peligro de que el imputado se fugue para evitar la realización del juicio oral o para evitar la ejecución de la eventual sentencia condenatoria; y/o en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de los hechos. No procede cuando: a) Por las características del hecho

y las condiciones personales del imputado pudiere resultar una aplicación de condena condicional; b) En los delitos de acción privada y; c) Cuando se trate de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión o como consecuencia de la crítica en cuestiones públicas.

Probation: Suspensión del proceso penal a cambio de medidas de control y prevención tendientes a vigilar el comportamiento de la persona imputada durante un período determinado. Si durante ese período no vuelve a delinquir, se declara la extinción de la acción penal.

Rebeldía: Se declara rebelde a la persona imputada cuando no comparece a la citación judicial y no acredita grave o legítimo impedimento; se fuga del establecimiento o lugar en que se halla detenida; o se ausenta, sin autorización del tribunal, del lugar asignado para su residencia (artículo 68 del nuevo CPPN).

Reconocimiento: Es un medio de prueba que se realiza para que en el juicio, el juzgador, la persona imputada o quien comparece como testigo reconozca un lugar, un objeto o una persona y pueda esclarecer los hechos controvertidos o informar sobre ellos. Así, el actual Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 270 establece que esta medida tiene el objeto de reconocer a una persona para identificarla o establecer que, quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto. El reconocimiento se efectúa por medios técnicos, por testigos o cualquier otro, inmediatamente de ser posible, ya que de lo contrario el órgano judicial podría ser sancionado (Ver también artículo 167 del nuevo CPPN).

Reincidencia: Circunstancia agravante de la responsabilidad penal por la que el autor de un hecho punible ha sido condenado anteriormente por otro/s delito/s de la misma naturaleza y que constan como antecedentes penales. El actual Código de Procedimiento Penal de la Nación sostiene que “habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena” (artículo 50 del actual CPPN).

Secreto de sumario: El principio general en materia de acceso a la información sobre el expediente penal indica que éste será público para las partes y sus defensores/as, que lo podrán examinar después de la indagatoria. Sin embargo, el Código Procesal establece que el juez o jueza podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad (artículo 204 del actual CPPN).

Sumario: Primera fase de todo proceso penal constituida por un conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral, así como a averiguar y hacer constar la perpetración

ción de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y en la culpabilidad de los presuntos autores de un delito, asegurando su responsabilidad.

Tentativa: Se refiere al grado de ejecución de un delito. La tentativa puede ser acabada o inacabada. La tentativa acabada se produce cuando el sujeto activo ha realizado todos los actos necesarios para producir un resultado delictivo, pero éste no llega a causarse por motivos ajenos a su voluntad. La tentativa inacabada supone que el sujeto activo no llega a realizar todos los actos necesarios para producir el delito, de ahí que el mismo no llega a consumarse por causas ajenas a su voluntad. El autor no es sometido a pena cuando desiste voluntariamente del delito. No todos los delitos previstos en el Código Penal prevén el grado de tentativa. Sólo será considerada delito la tentativa en los casos en los que el Código Penal expresamente así lo disponga.

7. ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN:

La organización judicial responde al carácter federal del Estado Argentino, y se estructura alrededor de una competencia nacional y de otra local (provincial y de la C.A.B.A.)⁹. Es así que el sistema judicial nacional, regido por un Código Procesal Penal de la Nación, coexiste con otros 23 sistemas judiciales y ordenamientos procesales provinciales¹⁰. Además, existe una justicia federal que tiene competencia en todo el país y atiende en ciertas materias específicas establecidas taxativamente en el Código Penal.

- **JUSTICIA FEDERAL**
- **JUSTICIA NACIONAL ORDINARIA**
- **JUSTICIA LOCAL ORDINARIA (PROVINCIAL O CABA)**

JUSTICIA FEDERAL

Esta rama del Poder Judicial tiene competencia en:

- delitos que afectan a la renta y a la seguridad de la Nación (por ejemplo, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero);
- delitos cometidos en lugares o establecimientos donde el gobierno federal tenga absoluta y exclusiva jurisdicción (por ejemplo los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales, sin importar si fue realizada por ciudadanos o extranjeros; los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos; los cometidos en el territorio de la CABA o en el de las provincias, en violación de las leyes nacionales).

Es importante mencionar que la naturaleza federal de un delito es de carácter extraordinario y restrictivo, debiendo estar específicamente mencionado en la ley que lo regule.

La Justicia Federal se compone del siguiente modo¹¹:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Competencia por apelación: interviene en las causas sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados internacionales; de almirantazgo y jurisdicción marítima; aquellas en que la Nación sea parte; las que se impliquen dos o más provincias, a una provincia, los vecinos de otra o a vecinos de diferentes provincias; y a una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. También ejerce el control de constitucionalidad de normas y actos estatales contrarios a la Constitución Nacional. Competencia originaria en asuntos que conciernen a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, asimismo cuando una provincia sea parte del litigio. Sus sentencias son definitivas.

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL

Tiene competencia territorial en toda la Republica. Es el tribunal de alzada para juzgar los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra la sentencia y resoluciones dictadas por: Tribunales Orales Federales, cámaras de apelaciones federales, jueces en lo criminal y correccional federal.

CÁMARAS FEDERALES DE APELACIÓN

Tribunal que interviene en la apelación de las resoluciones dictadas por los juzgados y en las cuestiones de competencia planteadas entre ellos. La competencia de cada cámara de apelaciones coincide con la del juzgado del cual es superior.

TRIBUNALES ORALES FEDERALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, PENAL ECONÓMICO, DE MENORES

Integrados por tres jueces o juezas, sustancian el debate oral.

JUZGADOS FEDERALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, PENAL ECONÓMICO, DE MENORES

Llevar adelante la investigación o instrucción de las causas penales.

JUSTICIA NACIONAL ORDINARIA

Por otra parte, la Nación y cada una de las provincias cuentan con una justicia que entiende en el tratamiento de los delitos comunes (también denominada justicia ordinaria), con sus propios órganos judiciales y legislación procesal. La competencia de la justicia ordinaria la organiza la Nación a través de una ley nacional y las provincias a través de leyes provinciales. En general se ordena en diferentes fueros¹²:

FUERO CRIMINAL

Delitos de acción pública de competencia criminal reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres años.

FUERO CORRECCIONAL

Delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad o delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de tres años.

FUERO DE MENORES

Delitos de acción pública cometidos por niños, niñas y adolescentes que no hayan cumplido dieciocho años al tiempo de la comisión del hecho y que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o pena privativa de la libertad que no exceda de tres años.

Abandono material o peligro moral de niños, niñas y adolescentes que no hayan cumplido dieciocho años al tiempo de encontrarse en esa situación.

FUERO PENAL ECONÓMICO

Delitos de naturaleza económica y tributaria.

La estructura de la justicia nacional ordinaria es la siguiente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Integrada por cinco jueces y juezas, tiene competencia según las reglas siguientes:

Competencia por apelación: interviene en las causas sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados internacionales; de almirantazgo y jurisdicción marítima; aquellas en que la Nación sea parte; las que se impliquen dos o más provincias, a una provincia, los vecinos de otra o a vecinos de diferentes provincias; y a una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. También ejerce el control de constitucionalidad de normas y actos estatales contrarios a la Constitución Nacional.

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Integrada por varias salas de tres jueces o juezas cada una, interviene en los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión, de las resoluciones y sentencias de los tribunales orales y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Integrada por varias salas de tres jueces o juezas cada una, interviene en la apelación de las resoluciones dictadas por los juzgados y en las cuestiones de competencia planteadas entre ellos. La competencia de cada cámara de apelaciones coincide con la del juzgado del cual es superior.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Integrada por varias salas de tres jueces o juezas cada una, interviene en la apelación de las resoluciones dictadas por los juzgados y en las cuestiones de competencia planteadas entre ellos. La competencia de cada cámara de apelaciones coincide con la del juzgado del cual es superior.

TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y DE MENORES

Integrados por tres jueces o juezas, sustancian el debate oral.

JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN, CORRECCIONALES, DE MENORES

A cargo de un juez o jueza, llevan adelante la investigación o instrucción de las causas penales.

JUZGADOS NACIONALES DE EJECUCIÓN PENAL

A cargo de un juez o jueza, intervienen en las cuestiones o incidentes que se suscitan durante la ejecución de la pena, controla el respeto de las garantías constitucionales y tratados en las condiciones de detención de las personas condenadas, privadas de libertad o sometidas a medidas de seguridad.

Este esquema se reproduce de manera similar en las justicias provinciales.

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL

El Ministerio Público fue creado por la Constitución Nacional en su artículo 120. Este órgano independiente tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de

la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Representa y defiende el interés público en todas las causas y asuntos que la ley requiera. También es su función velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República.

Está integrado por una Procuradora o Procurador General de la Nación y una Defensora o Defensor General de la Nación, y demás integrantes -fiscales y defensores/as- establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público¹³.

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN O MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (MPF)

Es el órgano dentro del Ministerio Público Nacional que interviene en los fueros penal, civil, comercial, administrativo, del trabajo, de la seguridad social y de menores, pero sólo en aquellos casos que versan sobre cuestiones tratadas en la Constitución Nacional y en leyes federales.

Promueve y ejerce la acción pública en las causas criminales y correccionales (salvo los delitos que requieren que sea la persona afectada quien demuestre su interés en el juicio) y en los casos civiles que la ley indique. En materia penal esta función obedece al interés que tiene el Estado y la sociedad en hacer justicia frente a la comisión de delitos. En las cuestiones no penales, la intervención se explica por la necesidad de asistir a toda la comunidad en la defensa de sus derechos. A continuación describimos la estructura del Ministerio Público Fiscal:

PROCURADOR O LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

Tiene facultad para definir cómo se persiguen los delitos que en cada momento histórico tienen mayor relevancia para los intereses generales de la sociedad. Por eso, el MPF puede adaptar su estructura para hacer frente a necesidades especiales y crear, por ejemplo, unidades especializadas que tienen como fin mejorar el desempeño en el trabajo.

Dictamina en las causas que tramitan ante la CSJN en asuntos de competencia originaria; en recursos de apelación ordinaria o donde se articulen cuestiones federales. Estas facultades pueden ser delegadas en los procuradores/as fiscales ante la CSJN.

PROCURADORES FISCALES ANTE LA CSJN

Asisten al/la Procurador/a y lo/a sustituyen, cuando así lo disponga, en causas sometidas a su dictamen. Lo/a reemplazan en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia.

FISCALES GENERALES ANTE LOS TRIBUNALES DE CASA-CIÓN, SEGUNDA INSTANCIA E INSTANCIA ÚNICA

Promueven ante los tribunales en los que se desempeñen el ejercicio de la acción pública o su continuación. Dictaminan en todas las causas sometidas a fallo plenario; pueden petitionar la reunión de la cámara en pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria.

FISCALES ANTE LA JUSTICIA DE PRIMERA INSTANCIA

Intervienen en los procesos de amparo, habeas corpus y habeas data, así como en todas las cuestiones de competencia. Los/as fiscales criminales y correccionales, además, deben promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravención que se cometieran y que llegaran a su conocimiento por cualquier medio, velando por el respeto al debido proceso legal; participan en todas las causas de acción pública; ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, cuidando de instarlos cuando se trate de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia; concurrir a las cárceles y otros lugares de detención para promover medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y para tomar conocimiento y controlar la situación de los alojados en esas instituciones.

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (MPD)

Es el órgano integrante del Ministerio Público Nacional que diseña y ejecuta políticas de acceso a la justicia para los grupos vulnerables; asiste y defiende en juicio a las personas imputadas y condenadas en causas penales, siempre que no hayan designado defensa particular. Patrocina a quienes se encuentran en situación de pobreza, a quienes están ausentes, a niñas y niños y a personas incapaces, para garantizar sus derechos ante la administración de justicia. Actúa en todos los fueros. Vela por la defensa de los derechos humanos, promoviendo acciones frente a su violación.

El MPD se compone de tres órganos principales:

- Defensoría General de la Nación, es el órgano superior que administra y gestiona la provisión del servicio de Defensa Pública, garantiza su prestación efectiva y adecuada y diseña y ejecuta sus políticas públicas. Es la sede de actuación del Defensor/a General de la Nación.
- Defensoría Pública, es responsable primaria de la representación y asistencia en casos ante diversos fueros e instancias.
- Consejo Asesor del Ministerio Público de la Defensa, es el órgano consultivo del Defensor/a General de la Nación.

A continuación, se describe la estructura de la Defensoría General de la Nación:

- DEFENSOR/A GENERAL DE LA NACIÓN
- DEFENSORES/AS GENERALES ADJUNTOS/AS
- DEFENSORES/AS PÚBLICOS/AS OFICIALES Y DEFENSORES/AS PÚBLICOS DE MENORES E INCAPACES ANTE LAS CÁMARAS DE CASACIÓN
- DEFENSORES/AS PÚBLICOS/AS DE COORDINACIÓN
- Defensores/as Públicos/as Oficiales de la Defensoría General de la Nación, de Instancia Única en lo Penal Nacional de CABA, de Instancia Única en lo Penal Federal de CABA, de Instancia Única en lo Penal Económico de CABA, de Instancia Única en lo Penal de Menores de CABA, de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de CABA y Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo
- Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia
- Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales Federales del interior del país
- Defensores/as Públicos/as Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, de Menores e Incapaces de Primera Instancia, ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, en las Relaciones de Consumo y ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias
- Defensores/as Públicos/as Tutores y Curadores Defensores/as Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.

AGRADECIMIENTOS:

Esta Guía fue posible gracias a la intervención y participación de¹⁴:

Fernando Alonso (TV Pública), Ariel Magirena (TV Pública), Emilio Ruchansky (TV Pública), Miriam Lewin (Radio Nacional y Canal 13), Marcela Ojeda (Radio Continental), Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino), Carolina Balderrama (Télam), Ignacio Ramírez (C5N), Sebastián Hacher (INFOJUS), Graciela Stuchlik (Télam TV), Maximiliano López (canal de noticias RT), Federico Marion (camarógrafo freelance), Rafael Belaustegui (camarógrafo freelance), Marcos Lifchick (Endemol), Mario Fazio (TV Pública), Ricardo Junghanns (Canal 13), Paolo Menghini (TV Pública), Brian Psenne (Canal 9), Andrés

Perrone (Canal 9), Javier Mozo (América TV), Rafael Arbues (TV Pública), Matías Aisen (TV Pública), Daniela Ribolzi (TV Pública), Lucila Carmona (TV Pública), Horacio Cecchi (Página 12, Radio La Tribu), Facundo Pastor (América TV), María Eugenia Ludueña (INFOJUS), Alberto Moya (COMUNA), Daniel Mojica (COMUNA), Silvia Irigaray (Madres del Dolor), Raquel Wittis (Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de zona norte), Adriana Magnoli (Familiares de Víctimas y Sobrevivientes de República de Cromañón), Mayra Bottero (Familiares de Víctimas y Sobrevivientes de República de Cromañón), Pablo Ferreyra (Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires), Diego De Charras (CELS), Manuel Tufro (CELS), María José Ravalli (UNICEF), Natalia Gherardi (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Paula Rey (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Rita Díaz (Madres contra el Paco y por la Vida), José Machain (CONACAI), Elisa Semino (Suteba- CETERA, CONACAI), María Florencia Egitto (SENAF), Verónica Pérez Sánchez (CONACAI), Victoria Ferro (AFSCA), Gisela Girolami (AFSCA), Carolina Petrino (AFSCA), Nora Otero (AFSCA), Anabella Bortolus (AFSCA), Verónica Gómez Pujolás (AFSCA), Claudia Salerno (AFSCA), Myriam Pelazas (AFSCA), Deborah Gornitz (AFSCA), Alicia Pierini (Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Romina Pzellinsky (Procuración General de la Nación- Programa sobre Políticas de Género), Paloma Ochoa (Procuración General de la Nación- Programa sobre Políticas de Género), María Luisa Pique (Procuración General de la Nación- Programa sobre Políticas de Género), Martina Noailles (Directora de Prensa de la Defensoría General), Javier Mariezcurrena (Defensoría General, Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos), Nicolás Laino (Encargado de Unidad de Seguimiento y Registro de hechos de Trata), Natalia Federman (Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad), Julián Axat (Defensor Público Juvenil de La Plata), Fernanda Messtrín (Defensora Oficial de Lomas de Zamora),

Enrique Masllorens (Consejo Federal de la Televisión Pública), Dolores Espeja (AFSCA), Paula Figueroa (AFSCA), Vanessa Ciccone (AFSCA), Mariela Spangenberg (AFSCA-CONACAI), Alejandro Demichelis (CONACAI-CTERA), Julio Fernández (CONACAI- SUTEBA), Aldana Duhalde (CONACAI), Héctor Masquelet (Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires), Andrea Pochak (Procuración General de la Nación), Verónica Torrás (Programa Memoria en Movimiento), Eliana Maffullo (Programa Memoria en Movimiento), Matías Máximo (INFOJUS), Adrián Martín (Pensamiento Penal), Victoria Rangugni (UBA), Luciano Nossetto (UBA- CONICET), Gabriela Seghezzo (UBA-CONICET), Mercedes Calzado (UBA-CONICET), Mariana Galvani (UBA), Federico Lonrenc (UBA-CONICET), Florencia

Gentile (Instituto de Investigaciones Gino Germani-CONICET), Mariana Fernández (UBA), Muriel Deboury (UBA), María José Castro (Universidad Nacional de Quilmes), Ricardo Rouvier (Rouvier y Asociados), Víctor Schajovitsch (AATECO), Darío Villarruel (Radio del Plata y Telefe), Noemí Zamora (FM La Siglo de Morón), Carlos Marrero (Télam), Héctor Szmidt (Radio Soberanía Nacional de Berazategui), María Iribarren (Tiempo Argentino), Daniel Navarro (Canal 9), Daniel Jacobsen (SUT-CA), Lucas Laviana (Radio América), Alejandro San Cristóbal (FM Boedo).

1. Resumen elaborado a partir de las siguientes referencias: Alberto M. Binder, *Introducción al derecho penal*, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires: 1999; Jorge A. Clariá Olmedo, *Derecho Procesal Penal*, Tomos I y II, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires: 1998; y las previsiones del actual y el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

2. Durante el desarrollo de la descripción de las etapas del proceso penal nos referiremos al “actual Código Procesal Penal de la Nación” (actual CPPN) y al “nuevo Código Procesal Penal de la Nación” (nuevo CPPN), a fin de distinguirlos, teniendo en cuenta que el nuevo CPPN, aprobado por la Ley 27.063, se implementará de modo progresivo y entrará en vigencia: a) En el ámbito de la Justicia Nacional a partir del 1º de marzo de 2016 y; b) En el ámbito de la Justicia Federal de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación.

3. Ver definición de “Querrela” en el Glosario de Términos Jurídicos que se encuentra más adelante en esta Guía, donde se precisa a quienes autoriza el nuevo CPPN a presentarse como tales.

4. Ver definición de “Actor Civil” en el Glosario de Términos Jurídicos.

5. A partir de la reforma del nuevo CPPN ya no hay “declaración indagatoria” y la persona imputada tiene libertad de declarar cuantas veces quiera. Durante la investigación preparatoria, podrá declarar oralmente o por escrito ante el fiscal o ante el juez o jueza (artículo 69 del nuevo CPPN). Ver definición de “declaración indagatoria” en el Glosario de Términos Jurídicos.

6. Ver definición de “Prisión preventiva” en el Glosario de Términos Jurídicos del presente anexo.

7. Ver concepto de “procesado” en el glosario, ya que en el nuevo régimen penal procesal no incluye la “declaración indagatoria” entre las declaraciones que se le toman al imputado y tampoco el auto de procesamiento, a pesar de que en los artículos 221 y 222 del nuevo CPPN se incluye la etapa de “formalización de la investigación”, en la cual se le informa al imputado el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica, su grado de participación y las pruebas con las que se cuenta, por su parte, el imputado y su defensa podrán presentar sus oposiciones y el juez o jueza deberá resolver en el momento.

8. También llamado Ministerio Público Fiscal.

9. Conforme art. 1º, 5º, 75 inc. 12, 116 y 129 de la Constitución Nacional.

10. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una excepción a este esquema, ya que muchos delitos que se cometen en dicha jurisdicción se juzgan en los juzgados nacionales. Paulatinamente se han ido traspasando competencias a los juzgados locales, pero aún el proceso no se completó. Actualmente la jurisdicción penal local entiende en los siguientes delitos: lesiones, duelo, y abuso de armas; violación de domicilio; tenencia y portación de armas de guerra; penalización de actos discriminatorios; delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos; atentado y resistencia contra la autoridad; usurpación de autoridad, títulos u honores; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; violación de sellos y documentos; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; falso testimonio; falsificación de documentos y tenencia de estupefacientes; tenencia y portación de armas de uso civil; lesiones en riña; abandono de personas; exhibiciones obscenas; matrimonios ilegales; amenazas; violación de domicilio; usurpación; daños; ejercicio ilegal de la medicina; omisión de auxilio; malos tratos contra animales y actos discriminatorios.

11. La competencia federal de la CSJN, es aquella que refiere a asuntos que conciernen a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, asimismo cuando una provincia sea parte del litigio (competencia originaria). Sin perjuicio de ello, en el cuadro explicamos la totalidad de la competencia de la Corte.

12. Apuntes sobre el sistema judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Republica Argentina, publicación de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación.

13. El Poder Ejecutivo propone y designa al Procurador o Procuradora General de la Nación y al Defensor o Defensora General de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de los cargos de fiscales y defensores/as, el Procurador o la Procuradora General de la Nación, o el o la Defensora General de la Nación, en su caso, presentan al Poder Ejecutivo una terna de candidatos y candidatas, elaborada previo concurso público de oposición y antecedentes, de la cual elegirá una persona, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

14. Las adscripciones institucionales y/o mediáticas consignadas corresponden a las acreditaciones realizadas por los participantes al momento de desarrollo de los encuentros de reflexión y debate.



**Guía para
el tratamiento
mediático
responsable
de la Violencia
Institucional**

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

La presente guía propone una serie de herramientas necesarias para una cobertura periodística responsable de los casos de violencia institucional, problemática que requiere ser identificada y abordada en su especificidad y complejidad. Por tratarse de una cuestión que refiere al funcionamiento ilegal de las instituciones del Estado, los medios de comunicación constituyen un recurso fundamental para garantizar el acceso a la información y la búsqueda de la verdad.

La violencia institucional es una forma anómala que adquiere el Estado cuando viola o permite violar su propia normativa; cuando usufructúa sus facultades para, desde sus instituciones, cometer, legitimar u ocultar delitos; y cuando ejerce un tipo de violencia física y/o simbólica sobre la población a la que debe proteger. Es decir, la violencia institucional es el proceso mediante el cual el poder del Estado, en cualquiera de sus niveles, es utilizado para favorecer o encubrir la violación de la Ley. Es un fenómeno que se puede presentar en distintas instituciones del Estado, como por ejemplo, las fuerzas armadas y de seguridad, los organismos de salud, de educación, entre otros.

Sin embargo, esta guía refiere exclusivamente a situaciones de violación de los derechos humanos por parte de las diferentes agencias del sistema penal: las fuerzas de seguridad -policía federal, provincial o comunal; gendarmería; prefectura, policía de seguridad aeroportuaria-, el sistema penitenciario y las instituciones del sistema judicial penal y contravencional.

Para cumplir sus funciones, los agentes de las instituciones del sistema penal pueden hacer uso de ciertas facultades que incluyen el uso de la fuerza. Entre esas facultades se encuentran las de detener personas, ingresar a lugares o registrarlos, secuestrar objetos, usar la coerción y la fuerza letal, siempre que estas acciones se ejerzan respetando los encuadres legales y sujetas a controles jurisdiccionales. Sin embargo, entendemos que existe violencia institucional cuando estos agentes hacen uso indebido de esa fuerza o cuando la ejercen de manera abusiva, cuando encubren esas actuaciones o no las investigan adecuadamente.

Probablemente, los casos más conocidos en la materia sean los mediáticamente denominados “gatillo fácil”, aunque existen otros que también configuran hechos de violencia institucional. Sin embargo, dado que la figura “gatillo fácil” es un eufemismo que permite ocultar los patrones estructurales de la problemática, este documento evitará recurrir a ese término y pondrá a disposición herramientas y recomendaciones que posibiliten un abordaje responsable de la temática.

Las dificultades que se verifican a la hora de denunciar, investigar y sancionar los hechos de violencia institucional se relacionan con las características particulares de sus autores (detentan poder, son quienes -por su función- deberían garantizar que este tipo de hechos no sucedan), con la alta vulnerabilidad de las personas afectadas y con la invisibilidad de este tipo de prácticas frente a la opinión pública y en los medios de comunicación. De hecho, es importante advertir que bajo las prácticas de violencia institucional subyace una enorme cantidad de conflictos sociales que suelen quedar encubiertos por el ejercicio de dicha violencia: la desigualdad de clase, la discriminación de sectores sociales vulnerabilizados, la desigualdad de géneros, entre otros.

Otra de las complejidades a tener en cuenta es que las personas afectadas por este tipo de violencia deben recurrir a las instituciones estatales para formular denuncias, pedir investigaciones, buscar justicia o reparación. Sin embargo, muchas veces se enfrentan a reacciones de defensa corporativa o a fallas en los controles que deben existir entre los distintos poderes o instancias del Estado, que propician la impunidad. En estos casos, una cobertura periodística responsable puede ayudar a fortalecer la posición de las víctimas, dar visibilidad a sus reclamos y exponerlos frente a los poderes públicos encargados de su control y sanción, contribuyendo a encontrar respuestas adecuadas a la gravedad de los derechos afectados.

Al respecto, sería deseable y necesario que dichos casos sean tematizados periodísticamente como violencia institucional -en tanto problemática específica-, aun cuando la violencia institucional emerja como parte o consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad en la represión de un hecho cierta o presuntamente delictivo. La denominación "violencia institucional" les otorga una relevancia pública que trasciende el relato de los crímenes y delitos, para inscribirse en una investigación periodística comprometida con el sistema de gobierno democrático y el Estado de derecho. Y si bien los casos de violencia institucional pueden estar atravesados por hechos policiales, es crucial no confundirlos puesto que la violencia institucional posee sus particularidades que afectan al funcionamiento de las instituciones estatales.

Como reconoce la ley 26.522, los servicios de comunicación audiovisual en tanto actividad de interés público cumplen un papel fundamental para que la sociedad ejerza su derecho a la comunicación. En este caso, el acceso a la información puede prevenir la violación de derechos fundamentales por parte de las instituciones estatales y reducir a la mínima expresión sus condiciones de posibilidad. Esto no desconoce que en muchas ocasiones quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual pueden ser objeto de ilegítimas presiones por parte de las instituciones involucradas en hechos de violencia institucional. Dicha presión configura un ataque a la libertad de expresión e información, así como una vulneración del derecho a la comunicación de las audiencias.

Esta guía realizada entre la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, procura aportar algunos elementos centrales desde un paradigma comunicacional con perspectiva de derechos humanos, a fin de identificar la complejidad y relevancia de este tema y brindar herramientas para el ejercicio responsable de una tarea clave para toda la sociedad.

FRENTE A UN CASO DE VIOLENCIA EN QUE PARTICIPEN AGENTES DEL SISTEMA PENAL Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD SE RECOMIENDA:

1. INDAGAR SOBRE LA VERACIDAD DE LAS PRIMERAS VERSIONES DISPONIBLES PARA SABER SI SE ESTÁ FRENTE A UN CASO DE USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA O FRENTE A UN CASO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL.

En primer lugar, es fundamental poder distinguir cuándo las fuerzas de seguridad utilizan la fuerza de manera legítima y cuándo no. Para dilucidarlo es crucial que, frente a las primeras versiones presentadas por las propias instituciones involucradas, se utilicen diferentes estrategias periodísticas que permitan constatar la veracidad de los hechos.

Algunos criterios útiles para determinar si el uso de la fuerza es legítimo se encuentran plasmados en los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", de Naciones Unidas¹. De allí se destaca que:

- Las personas encargadas de hacer cumplir la ley deben recurrir a medios no violentos antes de hacer uso de la fuerza o de armas de fuego. Estas últimas sólo pueden ser usadas cuando los medios no violentos demuestren ser ineficaces.
- El uso de la fuerza o de armas de fuego sólo es legítimo cuando el objetivo perseguido y los métodos empleados estén autorizados por la ley.
- Cuando el uso de armas de fuego sea inevitable, las fuerzas de seguridad deben:
 - actuar en proporción a la gravedad del delito;
 - reducir al mínimo los daños y lesiones;
 - respetar y proteger la vida humana;
 - prestar asistencia lo antes posible a las personas que resulten heridas o afectadas y notificar en lo posible a sus familiares o allegados;
 - si el uso de la fuerza causara la muerte, deben notificar inmediatamente a los superiores.
- No está permitido usar armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o para detener a una persona que represente tal peligro y ejerza resistencia, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas. En cual-

quier caso, sólo se puede usar armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

- El uso de armas de fuego exige la advertencia previa a su utilización, que brinde tiempo suficiente para ser tenida en cuenta, salvo que esto ponga en peligro la vida de los agentes encargados de hacer cumplir la ley o de otras personas.
- El empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de personas encargadas de hacer cumplir la ley es un delito. No se puede aducir circunstancias excepcionales, inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia para justificar la actuación ilegal.

En segundo lugar, en lo que refiere a la vigilancia de personas bajo custodia o detenidas es importante advertir que las fuerzas de seguridad:

- No deben emplear la fuerza, salvo que sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden de los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas, o en ejercicio de la legítima defensa, o en caso de peligro de fuga.
- Respecto de la vigilancia de personas bajo custodia, quienes están a cargo de hacer cumplir la ley deben respetar las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos dictadas por Naciones Unidas², que establecen que los medios de coerción, tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deben aplicarse como sanciones. Tampoco deben emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos: como medida contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; por razones médicas y a indicación del médico; por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales.
- Quienes están a cargo de la seguridad de los establecimientos no deben recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente a la Dirección del establecimiento sobre el incidente.
- Salvo en circunstancias especiales, quienes desempeñan un servicio en contacto directo con las personas presas no deben usar armas.

10

DECÁLOGO PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO RESPONSABLE DE NOTICIAS VINCULADAS A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

- 1 Indagar sobre la veracidad de las primeras versiones disponibles para saber si se está frente a un caso de uso legítimo de la fuerza o frente a un caso de violencia institucional
- 2 Prestar especial atención a situaciones conflictivas en las que es recurrente el ejercicio de la violencia institucional
- 3 Difundir las diferentes versiones del hecho
- 4 Realizar esfuerzos para contrarrestar el ocultamiento o encubrimiento inherente a la violencia institucional
- 5 Evitar la justificación de la violencia institucional
- 6 Dar a la víctima el lugar de sujeto en la crónica periodística
- 7 Ofrecer una explicación estructural de los casos de violencia institucional
- 8 Entender la información como mecanismo preventivo ante el mal desempeño de las fuerzas de seguridad y la impunidad
- 9 Resguardar los derechos del público
- 10 Reclamar la defensa y la protección de quienes trabajan en la comunicación

2. PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A SITUACIONES CONFLICTIVAS EN LAS QUE ES RECURRENTE EL EJERCICIO DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Es posible identificar situaciones en las que la intervención de las agencias del sistema penal vulnera derechos de forma tal, que constituye violencia institucional.

En los casos que a continuación se describen es recomendable que quienes trabajan en los medios de comunicación examinen si el uso de la fuerza fue necesario y si se empleó el método menos lesivo de los derechos de las personas afectadas:

- Desalojos de viviendas o tierras. La fuerza debe ser el último recurso para la ejecución de órdenes judiciales de desalojos. Existiendo formas alternativas para la desocupación de inmuebles o de tierras, se deben preservar los derechos de las personas que sufren el desalojo: el derecho a la vida, a la integridad, los derechos de los niños y niñas, de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, el derecho a la vivienda, al trabajo, y el derecho a la propiedad ancestral sobre el territorio en el caso de comunidades indígenas.
- Desalojos del espacio público. Se debe prestar especial atención al potencial uso arbitrario de la fuerza en los operativos de las fuerzas de seguridad que se realizan para desplazar trabajadores/as ambulantes, "manteros/as", artesanos/as, trabajadores y trabajadoras sexuales y personas en situación de calle.
- Operativos de saturación. Estos son operativos coordinados por las fuerzas de seguridad que consisten en intervenciones intensivas en un territorio definido, enmarcados por lo general en acciones de control poblacional y vehicular, cerca o dentro de barrios populares y villas. Suelen tener como destinatarios a grupos de jóvenes que se encuentran en la vía pública, a quienes se detiene por aplicación de figuras contravencionales u otros motivos. Su nota distintiva es la visibilidad del despliegue, utilizada como instrumento comunicacional de la gestión de seguridad y eventual elemento disuasivo.
- Contextos de encierro. Ya sea que el encierro (en comisarías, alcaldías, cárceles o instituciones para jóvenes en conflicto con la ley) obedezca al cumplimiento de una pena u orden judicial, o a la espera de ella, el personal encargado de la seguridad no puede agravarlo con usos abusivos de la fuerza, como apremios o torturas, o uso de fuerza letal para imponer orden en contextos de conflicto, como motines o huelgas de hambre.
- Requisitos. Las que se deban realizar a personas detenidas, presas o a familiares que las visitan no pueden ser vejatorias. Deben ser llevadas a cabo por personal del mismo género que quien vaya a ser requisado/a.
- Demora por averiguación de antecedentes o identidad. La facultad de las fuerzas de seguridad de demorar a una persona para averiguar su identidad o antecedentes se puede ejercer solamente cuando existiesen pruebas o datos debidamente fundados de que cometió o estaba por cometer un delito. En estos casos debe darse inmediata intervención a un juez. Los códigos procesales establecen el máximo de horas que, en cada provincia, puede estar demorada una persona para determinar su identidad.
- Allanamientos y secuestros de objetos. Tampoco en el cumplimiento de una orden de allanamiento o secuestro puede haber extralimitación en el uso de la fuerza, preservándose la integridad física de las personas presentes en el lugar y las pertenencias de los afectados. El procedimiento debe realizarse con control judicial.
- Espectáculos y eventos públicos. Los eventuales conflictos que puedan surgir cuando hay grandes concentraciones de personas deben ser gestionados con el recurso a la fuerza como última medida.

3. DIFUNDIR LAS DIFERENTES VERSIONES DEL HECHO

Como la violencia institucional supone situaciones de uso ilegítimo de la fuerza que están penadas por la ley, es habitual que una vez ocurrido un caso se desencadene una serie de maniobras tendientes a encubrirlo y garantizar su impunidad.

Por ello, es fundamental que quienes realizan la tarea periodística reflexionen críticamente antes de convalidar las primeras versiones de los hechos, puesto que, en general, se puede tratar de versiones "armadas" o sesgadas. Por ejemplo, cuando se presenta un hecho como "enfrentamiento seguido de muerte" -es decir, casos en los que, según la versión de las fuerzas de seguridad, las personas sospechadas de haber cometido algún delito habrían abierto fuego ante la voz de "alto"- es recomendable prestar la mayor atención posible, dado que existe la probabilidad de estar ante un caso de violencia institucional o de uso injustificado de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

Para informar adecuadamente es imprescindible que se ofrezcan las distintas versiones sobre un mismo suceso. Usualmente, en los casos de violencia institucional existe una versión de las víctimas o sus allegados, y una o varias de la

órbita estatal. En este último caso, pueden diferir entre sí. Estas fisuras en los discursos que intentan dar una explicación del hecho resultan cruciales para desentrañar la verdad.

Por lo tanto, es importante recabar información de quien esté a cargo del control civil de la seguridad, de las propias fuerzas de seguridad intervinientes -en caso de que estén autorizadas a ofrecer una versión oficial de los hechos- y de los órganos constitucionalmente facultados para llevar adelante las investigaciones: el juzgado a cargo de la causa y la fiscalía que interviene en la investigación. Además, es importante recurrir a quienes patrocinan legalmente a las víctimas, a sus familiares, a las organizaciones especializadas en materia de violencia institucional y a las personas acusadas.

Para ello se recomienda:

- Evitar que la versión de la fuerza de seguridad o penitenciaria implicada hegemonice o monopolice la crónica periodística.
- Recurrir a fuentes documentales administrativas, tales como sumarios que investigan responsabilidades al interior de las fuerzas de seguridad.
- En caso de acceder a expedientes judiciales, es importante tener en cuenta los documentos que plasman las opiniones de las partes: denuncias, querellas, acusación fiscal, auto de apertura a juicio, testimonios de víctimas y familiares, acusación de la querrela, apelaciones y sentencias.
- Tener en cuenta que las carátulas de las causas judiciales están determinadas por el sumario policial y que no necesariamente dan cuenta del delito que se investiga dentro del expediente.
- Considerar que las causas judiciales en las que se investigan potenciales hechos de violencia institucional se tramitan de manera simultánea con los sumarios administrativos (por ejemplo, en el área de Asuntos Internos dentro de las fuerzas) que se inician contra el personal involucrado y tienen distinto estándar de prueba y tiempos procesales.
- Recurrir a la información que puedan proveer los organismos específicos de seguimiento de violencia institucional dentro de las agencias estatales (por ejemplo, la Procuraduría de Violencia Institucional -PROCUVIN-, direcciones ministeriales de derechos humanos, entre otras).
- Recabar la opinión del entorno de la víctima y de organizaciones sociales que registran, investigan o litigan casos de violencia institucional.

4. REALIZAR ESFUERZOS PARA CONTRARRESTAR EL OCULTAMIENTO O ENCUBRIMIENTO INHERENTE A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

La violencia institucional se caracteriza por el ocultamiento de la actuación ilegal de agentes estatales y por la atribución de la responsabilidad a sus víctimas.

Esto hace que la averiguación de los hechos adquiera un valor especial. Por tal motivo quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual tienen un papel crucial en la averiguación de lo ocurrido y su información a la sociedad.

Por ello se recomienda:

- Advertir que los hechos de violencia institucional suelen ser presentados por parte de quienes están involucrados como “enfrentamientos” o “tiroteos”, como “robo a policías”, como casos de “resistencia a la autoridad”, entre otros. Es importante tener en cuenta que estas versiones suelen ser formuladas por fuentes policiales y luego convalidadas por operadores judiciales.
- Desarrollar una investigación periodística autónoma, seria y meticulosa.
- Evitar la reproducción irreflexiva de filtraciones y trascendidos que tiendan a convalidar la versión de las agencias involucradas.
- Privilegiar el rigor de la información por sobre su inmediatez.
- Corroborar y contrastar la información.
- Consultar a las distintas partes implicadas y distinguir los intereses en juego.
- Trasladarse al lugar de los hechos en búsqueda de la verificación de la información de las distintas fuentes.
- Tener en cuenta la importancia de los medios comunitarios, populares, alternativos y territoriales como fuente de información.
- Procurar reconstruir los hechos por fuera del estado de shock inicial con el objeto de obtener testimonios libres de presiones.
- Solicitar el acompañamiento o mediación de las organizaciones de base comprometidas con la prevención de la violencia institucional para facilitar el acceso al lugar donde ocurrieron los hechos.
- Realizar un seguimiento de los avances y resultados de las investigaciones judiciales y administrativas.

5. EVITAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

La gravedad de la violencia institucional radica no sólo en sus particularidades como funcionamiento ilegítimo e ilegal, sino también en su recurrente afectación hacia los sectores más postergados de la sociedad. Por ende, la justificación de la violencia institucional incrementa los riesgos de quienes suelen ser sus víctimas, en la medida que tiende a legitimar y promover la criminalización de los actores y/o grupos sociales afectados por dicha violencia.

Es importante tener en cuenta que si las víctimas de violencia institucional tienen antecedentes de participación en hechos delictivos o se encuentran privadas de su libertad, esa realidad no puede ni debe justificar el ejercicio ilegítimo de la violencia estatal. Ninguna persona, aun con cargos demostrables y asignados debidamente en un proceso judicial, pierde su condición humana y, por lo tanto, los derechos que la amparan y protegen.

Por todo ello, es recomendable:

- Explicar que la violencia institucional obedece a un funcionamiento anómalo e ilegítimo de las instituciones.
- No utilizar características de la víctima para justificar el uso indebido de la fuerza.
- Evitar la reproducción de estigmatizaciones y la legitimación discursiva de exclusiones sociales.
- Evitar la producción de discriminaciones basadas en la orientación sexo-genérica, el idioma, la religión, el origen nacional o social, la posición económica, la edad, el aspecto físico, o cualquier otro criterio de discriminación arbitraria.

6. DAR A LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EL LUGAR DE SUJETO EN LA CRÓNICA PERIODÍSTICA

Es importante aportar información respetuosa sobre las personas que sufrieron violencia institucional

Para ello es recomendable:

- Evitar la reiteración espectacularizada de la noticia, de modo de no revictimizar a quien ha sufrido un hecho de violencia institucional.
- Preservar la privacidad de las personas, evitando la publicación de datos de la esfera de su intimidad que no sean relevantes para el hecho noticioso.

- Respetar la presunción de inocencia de la que gozan todas las personas, aun cuando estén bajo sospecha de algún ilícito o contravención. Cuando las víctimas fueran niñas, niños o adolescentes se recomienda:
- Velar en todo momento por el respeto de los derechos consagrados por la normativa nacional e internacional.
- Evitar la difusión de fotografías o testimonios.
- Consultar a personas expertas o especialistas sobre el mejor modo de abordar los casos.

7. OFRECER UNA EXPLICACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL

A pesar de su ilegalidad, los hechos de violencia institucional son prácticas “rutinizadas” y “naturalizadas” dentro de las fuerzas de seguridad y demás instituciones del sistema penal. En general involucran redes de responsabilidades y complicidades más amplias. Es frecuente también que los hechos de violencia se expliquen en relación con tramas de ilegalidad más complejas.

Por esta razón, en la investigación periodística de estos casos es recomendable:

- Relatar los hechos de violencia en el contexto de las prácticas institucionales que habilitan su ocurrencia y/o permiten su encubrimiento e impunidad.
- Evitar presentar los hechos como “fatalidades” o como casos aislados; dar cuenta de la recurrencia y brindar información sobre otros casos similares, de modo de historizar la problemática y no alentar la serialización sin contexto.
- Indagar acerca de las redes que vinculan poder y delito en el territorio en que ocurrieron los hechos; investigar si los casos de violencia se vinculan con otras tramas de ilegalidad y quiénes podrían tener interés en gestionarlas y/o sacar provecho de las mismas.
- Para llevar adelante la investigación, recurrir a las instituciones, funcionarios y organizaciones sociales comprometidos con la erradicación de este tipo de prácticas.
- Apelar a fuentes especializadas en el estudio e investigación de la violencia institucional. Para eso, pueden ser de ayuda los aportes interdisciplinarios que brinden una mirada integral de la problemática.

8. ENTENDER LA INFORMACIÓN COMO MECANISMO PREVENTIVO ANTE EL MAL DESEMPEÑO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y LA IMPUNIDAD

La reiteración de casos de violencia institucional y el patrón de impunidad que integra esta problemática demanda un compromiso de los servicios de comunicación audiovisual para visibilizar la problemática, contribuyendo a su prevención. Por ello se recomienda:

- Procurar la obtención y publicación de datos claves para la dilucidación del hecho investigado, como por ejemplo, datos de la causa, juzgado, fiscalía, dependencia administrativa y comisarías intervinientes. Esto permitirá realizar un monitoreo, control y seguimiento de los hechos y sus autores y de la situación de las propias víctimas. Estas acciones pueden contribuir a evitar irregularidades en la tramitación de los procesos administrativos y judiciales.
- Dar cuenta de que la impunidad es un patrón común en las prácticas de violencia institucional.
- Proporcionar información sobre las instancias del Estado y de la sociedad civil donde es posible recurrir frente a situaciones de violencia institucional.
- Informar sobre el avance y los resultados de las causas judiciales en las que se investiga la responsabilidad de los autores de violencia institucional (resultados de las causas penales: condenas penales, sobreseimientos, falta de mérito; y resultado de los juicios civiles si los hubiera: condenas por daños y perjuicios; así como cualquier otra decisión que arroje luz sobre la responsabilidad de los y las agentes estatales).
- Dar a conocer los casos en los que los juicios no avanzan e indagar sobre las posibles razones de dicha demora o inactividad.

9. RESGUARDAR LOS DERECHOS DEL PÚBLICO

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual considera a las audiencias de la radio y la televisión como plenos sujetos de derechos y no como consumidores. Asimismo, protege especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, ante la cobertura de casos de violencia institucional se recomienda:

- En el horario apto para todo público, evitar los materiales previamente editados con reiteración de imágenes con altos niveles de violencia o excesivamente dramáticas que puedan herir la sensibilidad de las audiencias, en especial de los niños y niñas.
- Prescindir de primerísimos planos de víctimas y/o familiares expuestos en su intimidad que intensifiquen el aspecto espectacularizante de la cobertura periodística.
- Atender al uso de los distintos lenguajes y recursos que componen la construcción noticiosa, con el fin de evitar los efectos sonoros para provocar dramatismo (musicalización incidental, audios), montajes y ediciones (info-grafías, títulos) que, en el registro mediático, realcen los rasgos dramáticos del hecho y puedan afectar la sensibilidad del público y/o de las personas involucradas.
- Evitar forzar coberturas cuando no hay datos nuevos, ya que esto habilita la especulación y la banalización de la noticia.
- Brindar la información socialmente necesaria, de modo de permitir a la audiencia conocer instituciones y recursos a los cuales acudir frente a situaciones de violencia institucional.

10. RECLAMAR LA DEFENSA Y LA PROTECCIÓN DE QUIENES TRABAJAN EN LA COMUNICACIÓN

La investigación profunda de los casos de violencia institucional puede dar lugar a situaciones que expongan en su seguridad a los trabajadores y las trabajadoras de los servicios de comunicación.

Quienes trabajan en los medios de comunicación deben contar con la debida protección para el libre ejercicio de su tarea profesional, la cual es fundamental tanto para los y las profesionales, como así también para toda la sociedad.

Por ello es recomendable:

- Requerir el respaldo adecuado para proteger la integridad del/a periodista, para desarrollar su investigación y su derecho a informar sobre los casos de violencia institucional.
- Reclamar el respaldo necesario y la protección institucional para contrarrestar situaciones de temor, amenaza y posibles amedrentamientos a quienes realizan la investigación periodística como a sus fuentes y a las personas implicadas en su investigación.

- Solicitar el acompañamiento institucional para obtener las autorizaciones correspondientes para ingresar a lugares y contactarse con personas cuando su investigación periodística lo requiera.
- Reclamar capacitaciones y especializaciones en materia de periodismo de investigación, así como en lo que refiere a violencia institucional y protección de los derechos humanos.
- Demandar a las fuerzas policiales y a las autoridades políticas y judiciales que garanticen el ejercicio pacífico del derecho a trabajar, a dar y recibir información y a la integridad física de quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual en la cobertura de casos de violencia institucional.

COBERTURA DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL ANTE LA PROTESTA SOCIAL

Las protestas y manifestaciones en la vía pública representan el ejercicio legítimo de derechos constitucionales: por un lado, el derecho a la demanda y a la libertad de expresión. Por el otro, aquellos derechos enmarcados en el reclamo o protesta como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud.

Es por eso que las personas que manifiestan o protestan merecen cuidado y protección por parte de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, las que también deben contribuir a canalizar las demandas. Sin embargo, las protestas constituyen una circunstancia históricamente sensible al uso y abuso de la fuerza pública. Por ello, al momento de cubrir una manifestación o protesta social, se recomienda:

- Informar el reclamo que motiva la protesta y las pretensiones de quienes se manifiestan.
- Identificar al vocero de la manifestación, así como a quien ejerce la responsabilidad política y operativa, para acceder a la información más amplia posible.
- Es recomendable recurrir a la persona responsable del área o ministerio a cargo del cual está la solución de fondo del conflicto.
- Tener en cuenta el papel de los medios de comunicación en la difusión de denuncias acerca de incumplimientos de las normas legales por parte de los cuerpos de seguridad.
- Dar seguimiento a las investigaciones administrativas o judiciales que se originen en virtud de mal desempeño o

uso excesivo de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas.

- Demandar a las fuerzas policiales que garanticen el ejercicio pacífico del derecho a trabajar, a dar y recibir información, y la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras de los servicios de comunicación audiovisual.
- Tener en cuenta que quienes trabajan en los medios de comunicación tienen derecho a acceder a los registros sobre el personal interviniente, armamento y municiones provistos, vehículos, equipos de comunicaciones y personal que los tiene a cargo, que las fuerzas de seguridad deben elaborar ante cada operativo.

A su vez es fundamental que los y las periodistas, al momento de cubrir una manifestación o protesta, tengan en cuenta los "Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas"³, que resultan útiles para determinar si las fuerzas actúan correctamente.

De acuerdo con dicho documento:

- El objetivo de la intervención de las fuerzas de seguridad es el respeto y protección de los derechos de los y las participantes, la reducción de las afectaciones de los derechos de quienes no participan y de los bienes públicos. Por ello, se debe otorgar preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de las personas involucradas.
- Se deben agotar todos los recursos para resolver los conflictos sin hacer uso de la fuerza, comenzando siempre por el diálogo.
- La negociación tiene por objetivo identificar las demandas de quienes se manifiestan para su canalización y no podrá estar a cargo de quien conduce el procedimiento operativo.
- Cuando se trata de eventos de mucha concurrencia o previamente programados, o de conflictos prolongados o existan circunstancias que planteen riesgos para los y las participantes o para terceros, el Poder Ejecutivo puede designar una persona responsable política de la coordinación de las acciones del operativo de control y de hacer cumplir las normas sobre uso de la fuerza y comportamiento policial.
- En las mismas circunstancias se deberá designar funcionarios que actúen de enlace e intervengan para facilitar el diálogo entre los actores involucrados, recibir denuncias sobre el procedimiento de las fuerzas, promover la resolución de irregularidades y colaborar con el responsable político.

- Se debe prohibir la participación de funcionarios policiales o de seguridad que estén bajo investigación o hayan sido sancionados por irregularidades en su desempeño en manifestaciones públicas.
- Se debe prohibir la portación de armas de fuego a quienes pudieran entrar en contacto con los y las manifestantes. El personal de las fuerzas no dispondrá de municiones de poder letal. Se prohíbe el uso de pistolas lanza gases. Las postas de goma sólo pueden utilizarse con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de miembros de las fuerzas. No pueden utilizarse como mecanismo para dispersar la manifestación. Los agresivos químicos y anti tumultos sólo pueden utilizarse en última instancia y bajo orden y responsabilidad de quien esté a cargo del operativo.
- Todo el personal que participa del operativo tiene que tener su identificación visible.
- Se debe registrar todo el personal interviniente, el armamento y las municiones provistos, los vehículos, equipos de comunicaciones, consignando el personal que los tendrá a cargo.
- La responsabilidad en la organización y desarrollo del operativo deberá recaer sobre un funcionario o funcionaria policial distinto de quien esté a cargo de su control.
- Se establecerán canales a través de los cuales se comunican los y las funcionarios policiales, políticos y/o judiciales. Todo lo actuado debe ser registrado y el material resguardado.
- Se pondrán barreras físicas para preservar a la integridad de manifestantes, personal policiales y terceros.
- Se prohíbe la utilización de vehículos no identificados debidamente.
- Se velará por el respeto de los grupos que requieran especial protección.

Las fuerzas policiales deben garantizar el ejercicio pacífico de los derechos a trabajar, a dar y recibir información, y la integridad física de quienes trabajan en los medios de comunicación. En casos de violencia institucional ejercida en ocasión de la protesta social, cabe recordar que la tarea periodística ha resultado fundamental para esclarecer violaciones a los derechos humanos, como ocurrió ante los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002. Ese año, la Justicia Federal ordenó al Ministerio del Interior, entonces a cargo de las fuerzas federales, que garantizara el derecho a trabajar y el acceso a la información, necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, en el marco de una acción de amparo presentada por asociaciones profesionales de prensa y organismos de derechos humanos.

Los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” representan un reconocimiento del deber estatal de garantizar el desempeño pacífico del trabajo periodístico en estos contextos. Estos criterios establecen que “Los efectivos de las instituciones de seguridad deben respetar, proteger y garantizar la actividad periodística. Los y las periodistas, invocando su sola condición, incluyendo pero no limitándose a reporteros gráficos o camarógrafos, no podrán ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el solo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas. Asimismo, los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad deben abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios en esas circunstancias”.

1. Disponible en http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Principios_basicos_sobre_el_empleo_de_la_fuerza_y_de_armas_de_fuego_por_los_funcionarios.pdf

2. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977.

3. Aprobados por Resolución N°210 del Ministerio de Seguridad de la Nación del 7/5/2011

FACULTADES POLICIALES PARA DETENER PERSONAS SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL DE CADA JURISDICCIÓN

	¿SE PUEDE DETENER A ALGUIEN PARA AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD? / ¿CUÁNTO TIEMPO?	¿SE PUEDE DETENER A ALGUIEN POR COMETER UNA CONTRAVENCIÓN? / ¿QUIÉN PUEDE EJERCER ESA FACULTAD? / ¿CUÁL ES LA EDAD DE IMPUTABILIDAD?	¿SE PUEDE DISPONER LA INCOMUNICACIÓN DE LA PERSONA DETENIDA? / ¿CUÁNTO TIEMPO?
RÉGIMEN FEDERAL	Sí / 10 horas ¹	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 18 años	No ²
BUENOS AIRES	Sí / 12 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 16 años	Sí / 12 horas ³
CATAMARCA	Sí / 24 horas	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 16 años	Sí / Judicial / 48 horas
CHACO	Sí / 12 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 16 años	Sí / Judicial / 48 horas
CHUBUT	Sí / 10 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 16 años	Sí / 48 horas ⁴
CÓRDOBA	No	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 16 años	Sí / 48 horas
CORRIENTES	Sí / 24 horas	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 16 años	Sí / 48 horas
ENTRE RÍOS	Sí / 24 horas	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 16 años	Sí / Judicial / 48 horas, prorrogables por otras 24 horas.
FORMOSA	Sí / 24 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: hasta 18 años sólo medidas tutelares	Sí / Judicial / 48 horas
JUJUY	Sí / 24 horas	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 14 años	Sí / Policial / 24 horas
LA PAMPA	Sí / 24 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 18 años	Sí / 12 horas el fiscal y 48 el juez de control ⁵
LA RIOJA	No	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 16 años	Sí / 24 horas ⁶
MENDOZA	Sí / 12 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 16 años	Sí / 72 horas ⁷
MISIONES	Sí / 24 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 16 años	Sí / 24 horas
NEUQUÉN	Sí / 18 horas	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 18 años	Sí / 12 horas ⁸
RÍO NEGRO	Sí / 24 horas	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 18 años	Sí / 12 horas ⁹
SALTA	No	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 16 años	Sí / 6 horas ¹⁰
SAN LUIS	Sí / 24 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 16 años	Sí / Judicial / 24 horas, prorrogable por otras 24 horas ¹¹
SANTA FE	Sí / 6 horas	Sí / Facultad judicial ¹² / Imputabilidad: 18 años	Sí / 48 horas ¹³
SAN JUAN	Sí / 12 horas	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 18 años	No
SANTIAGO DEL ESTERO	Sí / 24 horas ¹⁴	Sí / Facultad policial ¹⁵ / Imputabilidad: 18 años	Sí / 12 horas
SANTA CRUZ	Sí / 24 horas	Sí / Facultad judicial ¹⁶ / Imputabilidad: 18 años	Sí / 6 horas sin posibilidad de prórroga ¹⁷
TIERRA DEL FUEGO	Sí / no específica ¹⁸	Sí / Facultad judicial / Imputabilidad: 18 años ¹⁹	Sí / Judicial: 48 horas, prorrogable por otras 24 horas. Policial: en caso de flagrancia, el plazo máximo es de 6 horas ²⁰
TUCUMÁN	Sí / 24 horas	Sí / Facultad policial / Imputabilidad: 18 años	Sí / Judicial / 72 horas

1. La Ley orgánica de la Policía Federal, Decreto-Ley 333/1958 en su artículo 5° establece que: "si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de 10 horas". Esta dis-

posición habilita la detención para acreditar la identidad frente a la mera presunción de la comisión de un supuesto delito o contravención y, por lo tanto, funciona como una detención por "averiguación de identidad".

2. Según el artículo 13, inciso 6, de la Constitución de la CABA, "ningún detenido puede ser privado de comunicarse inmediatamente con quien considere".

3. Sin embargo, a pesar de que el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires en su inciso 8 faculta a la policía a disponer la incomunicación del imputado por un término

máximo de 12 horas, que no puede prorrogarse sin orden judicial, el artículo 16 de la Ley 13482 de unificación de las normas de policías de la provincia de Buenos Aires, dispone que la persona detenida “tiene derecho a comunicarse inmediatamente con alguien de su confianza”.

4. La Constitución de la Provincia de Chubut en su artículo 47 establece dicho plazo. Lo ratifica el Código Procesal provincial en el artículo 22, determinando taxativamente que puede ser decretado únicamente por el juez una sola vez en el proceso.

5. La incomunicación sólo podrá disponerla el juez de control a pedido del fiscal sólo cuando “existan motivos graves para temer que el imputado obstaculizará el proceso” y el fiscal sólo podrá disponer la incomunicación por el plazo para gestionar la orden judicial, la cual no excederá de 12 horas, según el artículo 262 del Código Procesal Penal de la Provincia de la Pampa.

6. Excepcionalmente 72 horas, según el Código Procesal Penal de la provincia de La Rioja en su artículo 217, ya que la Constitución provincial establece la regla en su artículo 30º, en el cual además de prohibir la incomunicación sin orden judicial, afirma que la misma no podrá exceder de 24 horas.

7. Ello según el artículo 19 de la Constitución provincial, ya que el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Mendoza en su artículo 285 dispone que sólo el tribunal podrá decretar la incomunicación y por un plazo de 48 horas.

8. El Código Procesal Penal y Correccional establece dicho plazo en su art. 167, dentro de las atribuciones de los funcionarios de la policía, el cual no puede prolongarse sin orden judicial. En el art. 187, refiere a la incomunicación judicial, determinando que su plazo puede ser decretado por un período no mayor de 48 horas, prorrogable por otras 24 horas mediante auto fundado.

9. El Código Procesal Penal de Río Negro establece en su artículo 165 inc. 8º que el Agente Fiscal con asiento en la Comisaría y los funcionarios policiales pueden disponer la incomunicación del presunto culpable por un término máximo de 12 horas, improrrogable sin orden judicial. Por otro lado, en su artículo 190, determina que la incomunicación judicial no puede prolongarse por un término mayor de 48 horas. La Constitución Provincial establece en su artículo 22 que ningún detenido puede estar incomunicado por un plazo mayor de 48 horas.

10. Conforme el artículo 374 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Salta, el fiscal y la policía podrán disponer la incomunicación sólo por el plazo necesario para gestionar la orden judicial, que nunca excederá de 6 horas. El juez podrá dictar la incomunicación por un plazo máximo de 48 horas.

11. La Ley Orgánica de la Policía N° 337/2004 establece en su art. 14. inc. j que la Policía Judicial puede disponer la incomunicación del presunto culpable por un término máximo de 2 horas, el cual no puede prolongarse sin orden judicial.

12. Si bien es facultad del juez la detención en el sistema contravencional de la Provincia de Santa Fe, el artículo 39 del Código de Contravenciones,

al asociar las “sospechas” de que “el imputado tratará de eludir la acción de la justicia” a sus “antecedentes personales”, habilita un plazo de detención policial de 12 horas, que funciona como una modalidad contravencional más de la “detención por averiguación de antecedentes”, la cual termina por duplicar el plazo de 6 horas dispuesto en el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Ley N° 7.395.

13. A pesar de que según el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Ley N° 7.395, la “persona demorada (...) no será incomunicada y tendrá derecho” a hacer una llamada telefónica tendiente a plantear su situación y a los fines de colaborar en su individualización e identidad personal.

14. El plazo máximo de detención sin intervención que establece el artículo 56 de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero es de 24 horas. En función de que se derogó la ley orgánica de la policía y no hay atribuciones o facultades de detención en el CPPSE ni en el Código de Faltas, esta detención policial es equiparable a las detenciones por averiguación de antecedentes o de identidad.

15. La Ley N° 6.906 que crea el Código de Faltas de la Provincia de Santiago del Estero, no establece penas de privación de la libertad o arresto, sino multas de aplicación judicial. Sin embargo, hasta tanto se designen jueces la autoridad competente es el jefe de policía provincial, según su artículo 202].

16. La ley provincial N° 3125, que crea el Código de Faltas local, determina en su art.67 la posibilidad de detención inmediata en los casos que exista motivo fundado respecto que el imputado intentará eludir la acción de la justicia, o se lo encontrare bajo los efectos de consumo de estupefacientes o en estado de ebriedad.

17. La Constitución Provincial, en su art. 23º, determina que el plazo de incomunicación no podrá exceder las 72 hs., en concordancia con el plazo que el Código Procesal Penal provincial establece para la incomunicación judicial, que es de 48 hs. prorrogable por otras 24 hs. En caso de la incomunicación policial, dicho código establece en el art. 176, un plazo máximo de 6 hs. sin posibilidad de prórroga, que será contabilizada, en su caso, dentro del plazo de incomunicación judicial.

18. La Ley Orgánica de la Policía Provincial N° 263, establece que la misma requiere autorización judicial, y que únicamente procederá la verificación de la identidad en incun- tancias fundadas, sin detención (art. 5º incs. c y d).

19. El Código Contravencional Provincial, sancionado en diciembre de 2014, establece en su art. 64 que toda aprehensión en caso de flagrancia deberá ser comunicada inmediatamente al Juez Contravencional y no podrá superar las 6 hs.

20. El plazo de incomunicación policial por flagrancia de 6 hs., en su caso, se complementa con el plazo judicial de 72 hs. Asimismo, la Constitución Provincial, en su art. 37, determina que ningún detenido podrá sufrir un plazo de incomunicación mayor a 5 días corridos, siendo este plazo improrrogable.

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA TEMÁTICA

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
www.contralaviolencia.com.ar
contralaviolenciainstitucional@gmail.com

**DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL WWW.DEFENSADELPUBLICO.GOB.AR**
(011) 3754-1600 / 0800-999-3333
contacto@defensadelpublico.gob.ar
Adolfo Alsina 1470, CABA (1088).

PROGRAMA MEMORIA EN MOVIMIENTO
www.memoriaenmovimiento.gov.ar
(011) 4331-1951/9 int. 5773/5450

NACIÓN

ESTATALES

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

www.jus.gob.ar
(011) 5300-4000
Sarmiento 329, CABA.

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
www.derhuman.jus.gov.ar
(011) 4312-6691
25 de Mayo 544, CABA.
prensadh@derhuman.jus.gov.ar

CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS
www.jus.gob.ar/derechoshumanos/consejo-federal-ddhh.aspx
(011) 5167-6500 int. 6611/6615
confeddh@derhuman.jus.gov.ar
25 de mayo 544 5° piso, CABA (C1002ABL).

PROG. NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
www.jus.gob.ar/derechoshumanos/atencion-al-ciudadano/
programa-nacional-de-lucha-contr-la-impunidad.aspx
0800-122-5878 - pronalci@jus.gov.ar
25 de mayo 544 6° piso, CABA.

PROGRAMA "LAS VÍCTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS" - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DD.HH.

www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victi-
mas/programa-victimas-contr-las-violencias.aspx
vicontravio@jus.gov.ar
San Martín 323 4° piso, CABA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PENITENCIARIA - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DD.HH.

www.jus.gob.ar/el-ministerio/mision/secretaria-de-justicia/
subsecretaria-de-gestion-penitenciaria.aspx
(011) 5300-4000
Sarmiento 329 4° piso, CABA (C.P. 1041).

DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL

www.jus.gov.ar/areas-tematicas/readaptacion-social.aspx
(011) 5300-4000 int. 76780
dnrs@jus.gov.ar
25 de Mayo 277 10° piso, CABA (C1004AAB).

CASA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL

(011) 5300-4000 - int. 76774 / 4304-5545
Salta 2007, CABA (C1137ACP).
Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

(011) 4964-8360
Lavalle 2705, CABA (C1190AAA).
División Asistencia Social del Servicio Penitenciario Federal
(011) 4964-8332 - int. 247/332
Paso 550, CABA (1031).

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

www.migraciones.gov.ar
Av. Antártida Argentina 1355 (C1104ACA).
info@migraciones.gov.ar

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Línea de denuncias anónimas 0-800-555-5065
Dirección de Seguimiento de Causas de Violencia Institucio-
nal 4809-4500 int. 1503
violenciainstitucional@minseg.gov.ar

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

www.pjn.gov.ar

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

www.csjn.gov.ar

(011) 4370-4600

Talcahuano 550, CABA.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CSJN

www.csjn.gov.ar/investigaciones

(011) 4370-4636

investigaciones@csjn.gov.ar

CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Viamonte 1147 de 7.30 a 13.30 h., CABA.

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

www.mpf.gov.ar

(011) 4338-4300

Av. de Mayo 760, CABA.

PROCURADURÍA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL – MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

www.mpf.gov.ar/procuvin

(011) 6089-9054/9295 (fax) - 6089-9058/9059 (atención de personas detenidas y casos relativos a personas privadas de la libertad).

Juan Domingo Perón 667 2º piso, CABA.

PROCURADURÍA DE NARCOCRIMINALIDAD (PROCUNAR)

(011) 6089-9177/9106/9107/9112 / 6089-9177 (fax)

Juan Domingo Perón 667 3º piso, CABA

PROGRAMA DE ACCESO COMUNITARIO A LA JUSTICIA (ATAJO)

www.mpf.gov.ar/atajo/

(011) 6089-9089/9081/9101

Juan Domingo Perón 667 1º piso, CABA.

DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS (DOVIC)

www.mpf.gov.ar/dovic/

(011) 6089-9114/9135 / 4959-5983

dovic@mpf.gov.ar

Juan Domingo Perón 671 PB, CABA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

www.mpd.gov.ar

(011) 4814-8417/8419/8422/8423

Callao 970, CABA (1023).

DEFENSORÍAS PÚBLICAS OFICIALES ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE EJECUCIÓN PENAL

* Defensoría 1 (ante el JEP 1)

(011) 4381-5826/9986

Av. Belgrano 1471 PB, CABA (1093).

* Defensoría 2 (ante el JEP 2)

(011) 4342-9945/9992

Bartolomé Mitre 648, 3º piso contra frente, CABA (1036).

* Defensoría General. Unidad de Letrados Móviles que actúan ante los Jueces Nacionales de Ejecución Penal N° 1

(011) 4342-6451/6452

Bartolomé Mitre 648, 2º piso, CABA (1036).

* Defensoría General. Unidad de Letrados Móviles que actúan ante los Jueces Nacionales de Ejecución Penal N° 2

(011) 5237-4723/4724

Av. Belgrano 1177 1º piso, CABA (1092).

* Defensoría General. Unidad de Letrados Móviles que actúan ante los Jueces Nacionales de Ejecución Penal N° 3

(011) 5237-4708/4709

Av. Belgrano 1177 1º piso, CABA (1092).

* Defensoría General. Unidad de Letrados Móviles que actúan ante los Jueces Nacionales de Ejecución Penal N° 4

(011) 5237-4716/4717

Av. Belgrano 1177 1º piso, CABA (1092).

DEFENSORÍAS PÚBLICAS ANTE CASACIÓN PENAL

* Defensoría Pública Oficial ante la Cámara Nacional de Casación Penal N° 1

(011) 4311-8680 interno RPV 4004

Comodoro Py 2002 8º piso, CABA

* Defensoría Pública Oficial Adjunta ante la Cámara Nacional de Casación Penal N° 2

(011) 4313-4315 interno RPV 4029

Comodoro Py 2002 9º piso, CABA

* Defensoría Pública Oficial Adjunta ante la Cámara Nacional de Casación Penal N° 3

(011) 4311-6836 interno RPV 4003

Comodoro Py 2002 8º piso, CABA

* Defensoría Pública Oficial Adjunta ante la Cámara Nacional de Casación Penal N° 4

(011) 4312-5140 interno RPV 4021

Comodoro Py 2002 8º piso, CABA

**PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL -
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA**

www.mpd.gov.ar/area/index/titulo/programa-contra-la-violencia-institucional-383
(011) 5217-0677/0676
Lavalle 1832 2° piso, CABA (C1051ABB).

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

www.dpn.gov.ar
0810-333-376
Suipacha 365, CABA.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN

www.ppn.gov.ar
(011) 4124-7300/02 / 4124-7302 (fax)
Línea de Atención Exclusiva de Reclamos o Denuncias Privados de la Libertad
Centro de denuncias: 0800-333-9736* / (011) 4124-7100
*Para acceder al número gratuito desde algunos teléfonos ubicados en las unidades penitenciarias es necesario llamar al servicio de cobro revertido marcando 19, *19 o #19.
Cuando la señal sonora lo indique, se ingresa el número 0800-333-9736
centrodenuncias@ppn.gov.ar, info@ppn.gov.ar, prensa@ppn.gov.ar
Av. Callao 25 4° piso "G" y "H", CABA (C1022AAA).

**DIRECCIÓN DE DELEGACIONES DEL INTERIOR DE LA
PROCURACIÓN**

(011) 4124-7360

*** Delegación NEA:**

(0379) 443-2033
delegacionzonanea@ppn.gov.ar
Bolívar 1175, Corrientes (3400).
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

*** Delegación NOA:**

(0388) 422-9438
delegacionjujuy@ppn.gov.ar
Senador Perez 221/227 Piso 12 Oficina "C", San Salvador de Jujuy, Jujuy (4600)
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

*** Delegación Misiones:**

(0376) 442-1473
delegacionmisiones@ppn.gov.ar
Av. Justo José de Urquiza 2550, Posadas, Misiones (3300).

Lunes a viernes de 9 a 17 h.

*** Delegación Centro:**

(02954) 42-5804
delegacionzonacentro@ppn.gov.ar
Cervantes 122, Santa Rosa, La Pampa (6300).
Lunes a viernes de 8 a 17 h.

*** Delegación Sur:**

(0280) 448-5220
delegacionzonasur@ppn.gov.ar
Roberto Jones 598, Rawson, Chubut (9103).
Lunes a viernes de 8 a 16 h.

*** Delegación del Litoral:**

(0342) 458-4646
delegacionlitoral@ppn.gov.ar
Monseñor Zaspe 2524 Planta Alta, Santa Fe Capital (3000).
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

*** Delegación del Comahue:**

(0298) 443-1846
delegacioncomahue@ppn.gov.ar
Buenos Aires 1666, Gral. Roca, Río Negro (8332).
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

*** Subdelegación Viedma:**

(02920) 426-153
Laprida 371 PB, Viedma, Río Negro (8500).
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

*** Delegación Córdoba:**

(0351) 423-6920
Boulevard Mitre 505, Córdoba (5000).
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

NO GUBERNAMENTALES

**ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS
(APDH)**

www.apdh-argentina.org.ar
(05411) 4372-8594 / 4373-0397
apdh@apdh-argentina.org.ar
Av. Callao 569, 3° cuerpo 1° piso (1022), CABA.
Horario de atención
Secretaría: lunes a viernes de 15 a 19 h.
Admisión de casos: días martes de 16 a 20 h.
Consultas jurídicas: días martes de 18 a 20 h.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS)

www.cels.org.ar
(011) 4334-4200
consultas@cels.org.ar
Piedras 547 1° piso, CABA.

COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA (CIAJ)

www.ciaj.com.ar
 (0221) 612-2945
 ciajlaplata@yahoo.com.ar

CENTRO DE ESTUDIOS EN POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHOS HUMANOS

www.cepoc-cepoc.blogspot.com.ar
 cepoc.dh@gmail.com

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA

www.comisionporlamemoria.org
 (+54 0221) 4831737 / 4262901
 comunicacion@comisionporlamemoria.org
 Calle 7 Nro. 499 (esq. 42), La Plata (Bs. As.).

COMITÉ CONTRA LA TORTURA – COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA

www.comisionporlamemoria.org/comite/index.php
 (0221) 483-1737 / 427-4966
 comiteconlatortura@yahoo.com.ar
 Calle 54 N° 487, La Plata (Bs. As.).

COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL (CORREPI)

www.correpi.lahaine.org
 correpi@fibertel.com.ar

CONSULADOS**CONSULADO DE BOLIVIA**

Av. Belgrano 1670 1° piso, CABA (1093).
 (011) 4381-4171/0539/4162 (fax)

CONSULADO DE BRASIL

Carlos Pellegrini 1363 5° piso, CABA (1011).
 (011) 4394-5264/5278 / 4325-6977 (fax)

CONSULADO DE CHILE

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547 2° piso, CABA.
 (011) 4331-6228/6230/6235 (fax).

CONSULADO DE PERÚ

Av. Rivadavia 1501 PB, CABA.
 (011) 4382-3916 / 4381-7245 / 4382-1555 (fax)

CONSULADO DE PARAGUAY

Viamonte 1851, CABA.

(011) 4812-0075 / 4816-3271 / 4814-4803 (fax)

CONSULADO DE URUGUAY

Av. Las Heras 1907 4° piso, CABA
 (011) 4807-3040/3045 (fax)

PROVINCIAS**BUENOS AIRES****GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

(0221) 489-3960/63 / 427-0022
 sdh@sdh.gba.gov.ar
 Calle 53 N° 653 esq. 8, La Plata (B1900BBA).

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(0221) 489-3960 int. 103
 subsecretaria@sdh.gba.gov.ar

MINISTERIO DE SEGURIDAD

(0221) 429-3000

CAJ – ALMIRANTE BROWN

0800-222-3425
 Roca 983, Burzaco, partido de Almirante Brown, Buenos Aires.
 Lunes a viernes de 8 a 16 h.

CAJ – BUENOS AIRES - LA PLATA

0800-222-3425
 Calle 609 N° 475 entre 4 y 5, Club Arce, La Plata, Buenos Aires (1900).
 Lunes a viernes de 8 a 14 h.

CAJ – BUENOS AIRES - LA PLATA, BARRIO USINA

(0221) 470-5493
 Calle 147 N° 343 e/ 528 y 529, La Plata, Buenos Aires, (1900).
 Lunes a viernes de 8 a 14 h.

CAJ – BUENOS AIRES - MERCEDES

(02324) 422-763
 Calle 16 y 101 bis (Sociedad de Fomento Barrio Obrero), Mercedes, Buenos Aires (6600).
 Lunes a viernes de 8 a 14 h.

CAJ – HURLINGHAM

0800-222-3425

Dolores Huici N° 3276, localidad de W. C. Morris.

Lunes a viernes de 8 a 16 h.

CAJ – LA PLATA B° RINGUELET

0800-222-3425

Calle 520 N° 741 entre 2 y 2 bis, La Plata (1900)

Lunes a viernes de 8 a 14 h.

CAJ – QUILMES

(011) 4251-0745

Calle Montevideo N° 947 entre V. Bueno y Av. Dardo Rocha,
Bernal Oeste, Quilmes.

Lunes a viernes de 8 a 16 h.

CAJ – SAN MARTÍN

(011) 4150-0085

Av. de los Constituyentes 3100, San Martín (1650).

Lunes a viernes de 10 a 16 h.

CAJ – VILLA JARDÍN

(011) 6651-3865

J. M. Moreno 4033 entre Carlos Pellegrini y Madero, Lanús.

Lunes a viernes de 10 a 16 h.

CAJ – VILLA CARAZA

(011) 2047-3392

Pellegrini y José L. Suárez, Ribera sur del Riachuelo, Lanús.

Lunes a viernes de 10 a 16 h.

CAJ – BAHÍA BLANCA

(0291) 481-5536

Chacabuco 2250, B° Villa Mitre, Bahía Blanca.

Lunes a viernes de 8 a 16 h.

CAJ – CHASCOMÚS

(02241) 42-2853

Reconquista e/ México y Castelar (Sociedad de Fomento
Barrio Ipora).

Lun, jue y vie de 9 a 17 h. Mar y mié de 12 a 20 h.

CAJ – DOLORES

(02245) 44-0949

Buenos Aires 299, Dolores.

Lunes a viernes de 8 a 16 h.

CAJ – FLORENCIO VARELA

0800-222-3425

Las Heras 2895 esq. Ayacucho, Florencio Varela.

Lunes a viernes de 8 a 16 h.

CAJ – INTERMINISTERIAL AVELLANEDAPolonia y Pedro Goyena (Capilla San Francisco de Asís), Wil-
de, Avellaneda.

Deheza 1547 (Club Deportivo Deheza), Gerli.

Wilde: lun. de 9 a 15 hs.; Gerli: vie. de 9 a 15 h.

CAJ – JUNÍN

(0236) 444-7602

Borges entre Pellegrini y 25 de Mayo, Región Sanitaria 3, Junín.

Lunes a viernes de 8 a 15 hs.

CAJ – MALVINAS ARGENTINAS

0800-222-3425

Batalla de Maipú 2944 (Grand Bourg), Malvinas Argentinas.

Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

CAJ – MONTE CHINGOLO – LANÚS

(011) 4230-1987

Méndez 1365, Esquina Gral. Paz, Lanús.

Lunes a viernes de 10 a 16 hs.

CAJ - OLAVARRÍA

(02284) 431-777

Moreno 2517, Olavarría.

Lunes a viernes de 9 a 15 hs.

CAJ – SAN NICOLÁS

0800-222-3425

Garibaldi 185, San Nicolás.

Lunes a viernes de 8 a 16 hs.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA

(011) 4202-0962

www.calz.org.ar

Alberto Larroque 1828, Banfield.

COLEGIO DE ABOGADOS DE MORÓNwww.camoron.org.ar

(011) 4629-0404

info@camoron.org.ar

Bartolomé Mitre 964, Morón.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/es
 (0221) 423-6826
 instituto@derechoshumanos.unlp.edu.ar
 Calle 48 N° 582 3° piso, La Plata (1900).

CATAMARCA**MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA - SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES**

Dirección de Derechos Humanos
 (0383) 443-7964

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD

(0383) 343-7524
 ssegcatamarca@arnet.com.ar
 Calle Sarmiento 613, San Fernando del Valle de Catamarca.

CHACO**MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA - SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS HUMANOS**

(0362) 445-3227
 abogavila@hotmail.com.ar

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN

(0362) 465-5279

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN

Colon N° 66 PB, Resistencia (3500).

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

(0362) 445-8011
 mgobsubjusticiar@ecomchaco.com.ar
 Marcelo T. de Alvear 145, 4° Piso, Edificio B, Resistencia (3500).

ABOGADOS DE LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Silvio del Balzo: (0362) 420-8284
 Paulo Pereyra: (0362) 456-2098
 Cecilia Romero Murad: (0362) 456-3708

CAJ – CHACO - RESISTENCIA

(0362) 448-7840
 Obligado 320, Resistencia, Chaco (3500).
 Lunes a viernes de 9.30 a 12 y de 16.30 a 19 h.

CAJ – CHACO - SÁENZ PEÑA

Quinta 99, Barrio San Cayetano. CIC (Centro de Integración Comunitaria), Sáenz Peña, Chaco (3700).
 Lunes a viernes de 8 a 12 h y de 16.30 a 19 h.

CHUBUT**SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

(0280) 448-3710/738
 derechoshumanoschubut@gmail.com
 Pueyrredón 171, Rawson, Chubut (9103).

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**VICEJEFATURA DE GOBIERNO - SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL**

(011) 4346-8912/1
 claudioavruj@buenosaires.gob.ar
 Rivadavia 611 10° piso, CABA (1002).

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA

(011) 4346-8900
 acolli@buenosaires.gob.ar

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD - SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

(011) 4323-8900 int. 5046
 Av. Regimiento de Patricios 1142, 4° piso.

CAJ – ALL BOYS

(011) 4648-4524
 Mercedes 1951, CABA (C1407AIK).
 Lunes, miércoles y viernes de 10 a 16 h.

CAJ – CABALLITO

(011) 4982-4760
 Campichuelo 553, CABA (C1405BOG).
 Lunes a viernes de 10 a 18 h.

CAJ – LA BOCA

(011) 4303-2483
 Pedro de Mendoza 1713, CABA (C1169AAB).
 Lunes a Viernes de 10 a 17 h.

CAJ – LINIERS

(011) 4644-2697
 Cuzco 220 (Iglesia de San Cayetano), CABA (C1408BLD).
 Lunes a viernes de 9.30 a 15.30 h.

CAJ – LUGANO 1 Y 2

(011) 4605-4280

Av. Soldado de la Frontera 5089, CABA (C1439FPC).

Lunes a viernes de 10 a 15 h.

CAJ – VILLA 1.11.14

(011) 4919-6010

Av. Perito Moreno y Av. Gral. Fernández de la Cruz, Manzana 3, Casa 1 (Parroquia Santa María Madre del Pueblo), CABA.

Lunes a viernes de 10.30 a 16 h.

CAJ – VILLA 15

0800-222-3425

Manzana 18, casa 16, CABA.

Lunes a viernes de 9 a 16 h.

CAJ – VILLA 19

Calle Los Robles, Manzana 3, Bº INTA (Ctro. Misionero Cristo Resucitado), CABA.

Lunes, miércoles y viernes de 9 a 15 hs. Martes y jueves de 12 a 17 h.

CAJ – VILLA 20

(011) 4601-4484

Unanue 5179, Manzana 6, Casa 79, CABA (C1439CGA).

Lunes a viernes de 10 a 16 h.

CAJ – VILLA 21/24

(011) 4302-9791

Río Cuarto 3335, CABA (C1292ABW).

Lunes y viernes de 10 a 17 hs. Martes, miércoles y jueves de 13 a 17 h.

CAJ – VILLA 26

(011) 4302-9664

San Antonio 555 (Iglesia Natividad de María), CABA (C1276ADE).

Lunes a viernes de 10 a 17 h.

CAJ – VILLA 31 - SECTOR GÜEMES

(011) 4515-0382

Calle 5, Manzana 16, Casa 1 (Capilla Nuestra Señora del Rosario), CABA.

Lunes a Viernes de 10 a 16 h.

CAJ – VILLA 31 BIS - SECTOR COMUNICACIONES

(011) - 4150-0086

Bajada Aut. Pte. Illia (al puerto) y Av. Pte. Castillo, Barrio

Carlos Mugica (Capilla Cristo Obrero).

Lunes a viernes de 10 a 15 h.

CAJ – MONSERRAT

(011) 4382-3249

Av. Belgrano 1177, CABA (C1092AAX)

Lunes a viernes de 10 a 18 h.

CAJ – PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER

Salta 2007, CABA (C1137ACP).

Lunes a viernes de 10 a 17 h.

CAJ – VILLA SOLDATI

(011) 4613-4582

Av. Marino Acosta 2333, CABA.

Lunes a viernes de 9 a 16 h.

OFICINA MULTIPUERTAS INMIGRANTES

(011) 4130-6599

Av. Inmigrantes 1950 PB of. 33, CABA (C1104ADN).

Lunes a viernes de 8 a 13.30 h.

OFICINA MULTIPUERTAS LAVALLE

(011) 4379-1200 int. 1091

Lavalle 1220 PB, CABA (1048).

Lunes a viernes de 8 a 13.30 h.

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - AGENCIA TERRITORIAL DE ACCESO A LA JUSTICIA (ATAJO)

(011) 6089-9089 / 9081 / 9101

Juan Domingo Perón 667, 1º piso, CABA.

-Villa 21-24 – NHT Zavaleta (Barracas)

Av. Iriarte 3501 (frente a la Casa de la Cultura).

Atención de lunes a viernes.

-Villa 31 (Retiro)

CIC (Centro Integrador Comunitario), Calle Playón, Galpón N° 1 de Estación de carga del Ferrocarril San Martín.

Atención de lunes a viernes.

-Villa 1- 11-14 (Flores)

CAJ (Centro de Acceso a la Justicia), Av. Perito Moreno y Av. Gral. Fernández de la Cruz, Manzana 3, Casa 1 (Parroquia Santa María Madre del Pueblo).

Atención de lunes a viernes.

-Barrio Mitre (Saavedra), Av. Tronador 4421 (esq. Correa).

Atención de lunes a viernes.

-Villa 20 (Lugano), José Batlle y Ordóñez 5285 .

Atención de lunes a viernes.

DEFENSOR OFICIAL EN LO CONTRAVENCIONAL

0800-333-4725

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

(011) 4338-4900 / 0810-333-3676

consultas@defensoria.org.ar

Venezuela 842, CABA.

CÓRDOBA**GUBERNAMENTAL****MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

(0351) 434-1050/52

raul.sanchez@cba.gov.ar

Alvear 150 1º piso, Córdoba Capital (5000)

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Marta Moukarzel

(0351) 434-2701/03

marta.moukarzel@cba.gov.ar

Av. Gral. Paz 120 9º piso, Córdoba (5000).

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

(0351) 524-3098

Rosario de Santa Fe 650, Córdoba (5000).

MESA DE ATENCIÓN PERMANENTE DE TRIBUNALES II

(0351) 426-6900 / 422-9060/65 int. 2100

Fructuoso Rivera 720, Córdoba (5000).

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA (TRIBUNALES)

(0351) 433-1465 int. 2409

Caseros 551 (de 8 a 14 h), Córdoba (5000).

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

(0351) 428-5600 int. 9249

Independencia 30 (Cabildo), Córdoba (5000).

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL

(0351) 428-7398

Central de Policía: Av. Colón 1250, 3º piso.

CAJ – CÓRDOBA

(0351) 423-3728

Rivera Indarte 170, 1º Piso (Galería Pje. Muñoz), Córdoba (5000).

Lunes a viernes de 9 a 16 h.

CAJ – CÓRDOBA - Bº CABILDO - CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA (CIC)

Colorado 6500 esq. San Rafael, Bº Cabildo, Córdoba (5000).

Lunes a viernes de 9 a 16 h.

CAJ – CÓRDOBA - Bº MÜLLER

(0351) 441-9217

Obispo Castellanos 51, Bº Müller, Córdoba (5000).

Lunes a viernes de 9 a 16 h.

NO GUBERNAMENTAL**OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA**

(0351) 15-539-4147

observatorioddhhunc@gmail.com

PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA, CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS (UNC)

(0351) 15-633-1150

susanamoralesar@gmail.com

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

(0358) 15-507-7142

observatorioddhh@rec.unrc.edu.ar

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROV. DE CÓRDOBA

(0351) 422-0448/7693.

Duarte Quirós 571, Córdoba (5000).

CORRIENTES**MINISTERIO DE JUSTICIA - SUBSECRETARÍA DE DD.HH.**

(0379) 442-1077 / 447-6522 int. 211

manolocuevas97@hotmail.com

Salta 511, Corrientes (3400).

CAJ – CORRIENTES

(0379) 4430255

San Martín 1239, Corrientes (W3400APX).

Lunes a viernes de 7 a 15 h.

ENTRE RÍOS

SECRETARÍA DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS - SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(0343) 422-7781 / 420-8366
 ddhhentrierios@gmail.com
 Andrés Paso 182, Paraná (3100).

CAJ - PARANÁ

0800-222-3425
 Salta 289, Paraná.
 Lunes a viernes de 8 a 13 h.

FORMOSA

MINISTERIO DE LA JEFATURA DE GABINETE - SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(0370) 443-6189/6199/5220 (fax)
 subderechoshumanos@formosa.gov.ar
 José María Uriburu 208, Formosa (3600).

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y TRABAJO

(0371) 742-6003
 ministrogobierno@formosa.gov.ar
 Calle Belgrano 878, 4° Piso.

CAJ - FORMOSA

0800-222-3425
 José María Uriburu 175, Formosa (3600).
 Lunes a viernes de 8 a 13 h y de 18 a 20 h.

JUJUY

PODER EJECUTIVO - SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(0388) 423-5877/87
 secretariaddhh@jujuy.gov.ar
 H. Yrigoyen 636, San Salvador de Jujuy (4600).

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA

Servicio Gratuito: 0800-7773-9872

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

(0388) 423-9436
 Calle San Martín 450, 1° Piso, Monterrico.

CAJ - JUJUY

(0388) 401-2030
 Asentamiento al margen derecho Río Chijra, San Salvador de

Jujuy (4600).
 Lunes a Viernes de 7.30 a 15 h.

CAJ - JUJUY - PALPALÁ

(0388) 401-2030
 Chacho Peñaloza esquina Cabo Quispe, Barrio Canal de Beagle, Palpalá (4612).
 Lunes a Viernes de 7.30 a 15 h.

LA PAMPA

PODER EJECUTIVO - SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS HUMANOS

(02954) 437-132 / 418-388
 secretariaderechoshumanos@lapampa.gov.ar
 Moreno 512, Santa Rosa, La Pampa (6300).

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD

(02954) 452-725
 privadamgjys@lapampa.gov.ar
 Calle Ctro. Cívico, Santa Rosa, La Pampa (6300).

CAJ - LA PAMPA

(011) 5300-4000 int. 76129
 Pellegrini 132, Santa Rosa, La Pampa (6300).
 Lunes a viernes de 8 a 16 h.

LA RIOJA

MINISTERIO DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS - SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(0380) 445-3655 / 442-4097
 archivodelamemorialr@hotmail.com
 prensaddhhlarioja@gmail.com
 San Martín 117 Edif. Federación 7° p. Dto. G y H, La Rioja (5300).

CAJ - LA RIOJA

(3084) 46-8558
 Stgo. del Estero N° 175, Barrio Centro, La Rioja.
 Lunes a viernes de 8 a 13.30 h. y de 17.30 a 22 h.

MENDOZA

MINISTERIO DE DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS - SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(0261) 449-2076 / 424-7067 / 449-2252 (fax)
 ddhh@mendoza.gov.ar

Av. Peltier 351 PB (cuerpo central), Mendoza (5500).

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA - DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

(0261) 449-8648/9
Av. España 480, Mendoza.

CAJ - MENDOZA

(0261) 444-8487
Alem 30, Mendoza (5500).
Lunes a viernes de 8 a 16 h.

MISIONES

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL - MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS

(0376) 444-7969/7964/6514 (fax)
Celular: (0376) 15-469-1764
correoministerio@hotmail.com
Estado de Israel 2781, Posadas (3300).

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(0376) 447-969
ameliabaez@hotmail.com

SUBSECRETARÍA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

(0376) 447-959

CAJ - MISIONES

(0376) 4436004
Santiago del Estero 99, Posadas.
Lunes a viernes de 7 a 12 h y de 16 a 19 h.

NEUQUÉN

MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

(0299) 449-3909/3910
subjddhh@neuquen.gov.ar, secprivjddhh@neuquen.gov.ar,
subsejdh@gmail.com
Don Bosco 255, Neuquén Capital (8300).

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(0299) 443-9812
subseguridad@gmail.com
Calle Carlos H. Rodríguez 602, Cutral Có, Neuquén.

DEFENSORÍA PENAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

(0299) 448-5529 / 443-8017
Calle Félix San Martín N° 384 PB, Neuquén.

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

(0299) 447-4083/4079
Alberdi N° 52 2° piso, Neuquén.

CAJ - NEUQUÉN

0800-222-3425
Novela y Racedo, Manzana N° 10 Lote N° 11; Biblioteca Popular, Gran Neuquén Sur.
Lunes a viernes de 10 a 17 h.

NO GUBERNAMENTALES

ASOCIACIÓN ZAINUCO (DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES)

(0299) 442-6080
zainuco@gmail.com
www.zainuco.wordpress.com

RÍO NEGRO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DDHH - SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(02920) 428-398
dhrionegro@yahoo.com.ar
Misiones Salesianas 20, Viedma, Río Negro (8500).

MINISTERIO DE GOBIERNO - SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

(02920) 427-979
secgobierno@gobierno.rionegro.gov.ar
Calle 25 de Mayo 1133, Viedma, Río Negro.

CAJ - CIPOLETTI

(0299) 477-2887
Nahuel Huapi y Félix Salomano, Bº CGT, Cipolletti (R8324J-QB).
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

SALTA

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS

(0387) 495-4236/3045
derechoshumanossalta@gmail.com
25 de Mayo 872, Salta (4400).

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(0387) 432-9228 / 495-3045
 martingarciacainzo@hotmail.com
 Santiago del Estero 2291 2º piso of. 11, Salta (A4400BMK).

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

(0387) 429-6076 / 436-1048
 secseguridad@gobiernosalta.gov.ar
 Calle Av. Los Incas S/N, Centro Cívico Grand Bourg, 3º Block PB, Salta (4400).

SAN JUAN**MINISTERIO DE GOBIERNO - SECRETARÍA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS**

(0264) 430-7260
 lorenzo.fernandez@sanjuan.gov.ar
 Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 750 3º P, San Juan (5400).

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

(0264) 430-7248/9 / 430-7257
 hugofzalazar@yahoo.com.ar
 Av. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, San Juan (5400).

SAN LUIS**MINISTERIO DE INCLUSIÓN - PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS**

(0266) 445-1038 / 445-1411 (fax)
 ddhsl@sanluis.gov.ar
 Ayacucho 934 PB, Edificio Administrativo, San Luis (5700).

MINISTERIO DE SEGURIDAD

(02652) 451-199
 ministerioseguridad@sanluis.gov.ar
 Calle 9 de Julio 934 PB, Villa Mercedes.

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

(0266) 443-0898
 Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales.

SANTA CRUZ**MINISTERIO DE GOBIERNO - SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS HUMANOS**

(02966) 435-517
 secderechoshumanos@santacruz.gov.ar
 Monseñor José Fagnano 482, Río Gallegos, Santa Cruz (9400).

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

(02966) 420-500
 mingobierno@santacruz.gov.ar
 Calle Alcorta 231, Río Gallegos, Santa Cruz (9400).

CAJ – RÍO GALLEGOS

(02966) 425-521
 Pasaje Perovsek 593 esq. Corrientes, Río Gallegos (9400).
 Lunes a Viernes de 8 a 15 hs.

SANTA FE**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

(0342) 457-2565/67/76
 secretariaddhh@santafe.gov.ar
 Saavedra 2059, Santa Fe (3000).

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS - DELEGACIÓN SUR (ROSARIO)

(0341) 472-1466/67/68
 subsecddhhzonasur@santafe.gov.ar
 Moreno 248, Rosario (2000).

DEFENSORÍA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sede Rosario
 (0341) 472-1587/1588/1589
 info@defensorianna.gob.ar
 Italia 321, Rosario (2000).

Sede Santa Fe

(0342) 457-2693
 info@defensorianna.gob.ar
 Eva Perón 2726, Santa Fe (3000).

NODOS REGIONALES

Rafaela
 (03492) 45-3101
 defensorrafaela@gmail.com
 Brown 73, Rafaela.

Reconquista

(03482) 43-8849

reconquista@defensorsantafe.gov.ar

Patricio Diez 985, Reconquista.

Venado Tuerto

(03462) 40-8868

venadotuerto@defensorsantafe.gov.ar

9 de Julio 1040, Venado Tuerto.

CAJ – ROSARIO

(0341) 466-4047

Ayacucho 6131, Rosario (2000).

Lunes a viernes de 8 a 15 h.

CAJ – ROSARIO - Bº MORENO

(0341) 464-0554

Dorrego 3980, Bº Moreno, Rosario (2000).

Lunes a viernes de 9 a 17 h.

CAJ – SANTA FE

(0342) 489-9853

Milenio de Polonia 3642, Bº República de los Hornos, Santa Fe (3000).

Lunes a viernes de 8 a 16 h.

SANTIAGO DEL ESTERO**MINISTERIO DE JUSTICIA, TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS -
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

(0385) 450-4446/48/49

secretaria_ddhh@yahoo.com.ar

Salta 326, Santiago del Estero (4200).

CAJ – SANTIAGO DEL ESTERO

(0385) 461-0089

Santa Cruz 237, Barrio Alberdi, Santiago del Estero (4200).

Lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 h.

CAJ – CAMPO GALLO, SANTIAGO DEL ESTERO

0800-222-3425

Lasalle s/n (Parroquia Nuestra Señora del Carmen), Campo Gallo, Santiago del Estero (4200).

Lunes a viernes de 9 a 13 h y de 16 a 19 h.

**TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR****SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

(02901) 434-825 / 432-400

infodsddhh@tierradelfuego.gov.ar

Pref. Naval 250, Río Grande, Tierra del Fuego, (9420).

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

(02964) 426-809

infosddhh@tierradelfuego.gov.ar

Tira 6, Casa 39, Barrio 60 Viviendas, Ushuaia,

Tierra del Fuego (9410).

MINISTERIO DE GOBIERNO, COORDINACIÓN GRAL. Y JUSTICIA

Secretaría de Seguridad

(02920) 421-207

Calle San Martín 450, Ushuaia.

TUCUMÁN**MINISTERIO DE COORDINACIÓN - SECRETARÍA DE ESTADO DE
DERECHOS HUMANOS**

(0381) 484-4000 int. 337

derechoshumanos@tucuman.gov.ar

25 de Mayo 90 PB, San Miguel de Tucumán, (4000).

**MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA - SECRETARÍA DE
ESTADO DE SEGURIDAD CIUDADANA**

(0381) 484-4000

mgob@tucuman.gov.ar

Calle 25 de Mayo 90, San Miguel de Tucumán, (4000).

CAJ – TUCUMÁN

Teléfono: (0381) 431-2082

25 de Mayo 1095, San Miguel de Tucumán, (4000).

Lunes a viernes de 9 a 20 hs.

Participaron de la elaboración del presente documento

Por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual: Cynthia Ottaviano, María José Guembe, Gerardo Halpern, Ana F. Adelardi, Luciano Beccaria, Leonel Bazán, Walter Fernández y Mercedes Moglia.

Por la Campaña Nacional contra la Violencia: Vanina Pasik.

Por el Programa Memoria en Movimiento: Verónica Torras y Eliana Maffulo.

AGRADECIMIENTOS

A todos los que participaron en la discusión de esta Guía, en el marco de los encuentros y seminarios que organizamos para debatir su contenido.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, SEMINARIO “VIOLENCIAS LEGITIMADAS, VÍCTIMAS INVISIBLES”

Cristian Alarcón, Martín Alé y Sebastián Hacher, Infojus Noticias, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Florencia Saintout y Jorge Jaunarena, Carrera de Comunicación Social, Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional de La Plata. Diego de Charras y Mercedes Calzado, Carrera de Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Raquel Witis, madre de Mariano Witis, víctima de la violencia policial. Stella Martini, Doctora en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Myriam Pelazas, Coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y TV. Alicia Ramos, Directora de Investigación y Producción del AFSCA. Maximiliano Montenegro, Periodista, Diario Popular. María Sucarrat, Periodista, Tiempo Argentino. Diego Llumá, Director Nacional de Cooperación Regional e Internacional de la Seguridad. Ministerio de Seguridad de la Nación. Diputados Nacionales Leonardo Grosso y Horacio Pietragalla. Eduardo Rinesi, Integrante del directorio de la AFSCA. Integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), MNCI.

Agradecemos también, a Gustavo Palmieri, Director del Centro de Derechos Humanos, Universidad Nacional de Lanús y a Natalia Federman, Directora de Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad de la Nación.

CIDAC - CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA LA ACCIÓN COMUNITARIA, ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UBA.

Graciela Corbato y Juan Pablo Cervera Novo, equipo de coordinación general. Silvia Viñas, Cátedra Libre de Derechos Humanos y Equipo Barrilete Cultural. María Pita, Guadalupe Basualdo y Analía Garelli, investigadoras integrantes del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Universidad Nacional Lanús. Maximiliano Rua. Joaquín Gómez, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Martina Noailles, Directora del periódico Sur Capitalino, y Prensa y Difusión del Ministerio Público de la Defensa. Graciela Quintero y Ramiro Coelho, Diplomatura de Comunicación Popular, Carrera de Comunicación Social, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Virginia Saavedra

y Mariela Rossi, docentes de la Escuela Media N° 6, DE 5º, CABA. Yanina Guthman, Constanza López y Lucía Fasciglione de ATAJO (Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, Minsiterio Público Fiscal) de Villa 21-24. Victoria García, Movimiento Evita, Villa 21. Ariadna Abritta, carrera de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Norma, Mirta y Juliana, Casa Cambalache. Lucas Bogado, Centro Comunitario La Loma, Movimiento Evita, Villa 21-24.

UNDAV (UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA)

Alberto Linares, Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación. Liliana Elsegod, Secretaria de Extensión Universitaria. Facundo Harguinteguy, Coordinador del Programa de Organización Popular, Memoria Colectiva y DDHH de la Secretaría de Extensión Universitaria. Malena Haboba, integrante de la Secretaría de Extensión y estudiante de periodismo. Daniel Escribano, Coordinador de la carrera de Periodismo. Los docentes Nelson Ruoco (de la materia Narrativas I) y Santiago Albarracín (de la materia TICs) y los estudiantes de estas materias que leyeron y comentaron la Guía y participaron del debate. Ariel Weismman, referente de Radio Gráfica y docente de Trabajo Social Comunitario 3. Roxana Mauricio, de FM Riachuelo 100.9 de La Boca.

MENDOZA

Eva Guevara, Área de Promoción de Derechos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza. Sebastián Moro, periodista de Radio Nacional Mendoza. Penélope Moro, periodista de Radio Nacional Mendoza. Acequia TV. Lautaro Cruciani, abogado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Angélica Escayola. Lucas Lecour, abogado del Xumek. Guadalupe Pregal, periodista de Edición UnCuyo. María Rosa Goldar, de la Universidad Nacional de Cuyo. Juan Burba, Montserrat Joan y Luis Morquestaut, Radio Tierra Campesina UST-MNCI. Pablo Guaycochea, Instituto de Derechos Humanos, UNCuyo. Roberto Fayad, delegado del AFSCA. Rodolfo Hugo Tasti, Movimiento Evita. Gustavo Ortiz, Área de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Políticas, UNCuyo.

CÓRDOBA

Dante Leguizamón, periodista. Susana Morales, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Álvaro Cañete, del Colectivo de Jóvenes. Daniel Rivera, director de la radio La Ranchada. Micaela Cano, corresponsal de la radio La Ranchada. Andrés Guzmán, Coordinador provincial de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

“LO QUE HACEN
EN ARGENTINA ES
VERDADERAMENTE
ASOMBROSO, ADMIRABLE Y,
POR SUPUESTO, REPLICABLE.
DEBERÍA SEGUIRSE EN EL
RESTO DE AMÉRICA LATINA”.

GERARDO ALBARRÁN DE ALBA
ONNO/ EX OMBUDSMAN DE NOTICIAS MVS, MÉXICO.



Segundo Monitoreo de Programas Noticiosos de la República Argentina

Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo

Febrero-Diciembre 2014

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL



MONITOREOS II: ¿QUÉ ES NOTICIA EN LOS NOTICIEROS?

MONITOREOS DE PROGRAMAS NOTICIOSOS DE CANALES DE AIRE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUMEN EJECUTIVO 6 MONITOREOS

(FEBRERO / ABRIL / JUNIO / AGOSTO / OCTUBRE / DICIEMBRE 2014)

ELABORADO POR:

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

INTRODUCCIÓN

Los Monitoreos de Programas Noticiosos de Canales de Aire de la Ciudad de Buenos Aires recogen información cuantitativa y cualitativa sobre una muestra de programas noticiosos emitidos por los canales de aire de gestión pública y privada de CABA. Se llevan a cabo de forma bimensual en los meses pares, habiendo comenzado en Febrero de 2013. En cada mes monitoreado (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre 2014), se relevan los cinco primeros días hábiles continuos (incluyendo, si hubiera, los feriados que ocurren de lunes a viernes) de la primera semana completa del mes, por lo que el material visionado puede iniciarse hasta el día siete de cada uno de ellos. El relevamiento se realiza de manera exhaustiva incluyendo *todos* los programas noticiosos emitidos en las cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche) por los cinco canales de aire de gestión pública y privada que operan en la CABA (América, Televisión Pública, Canal 9, Telefé y Canal 13) durante esa semana. El Anexo de este documento detalla los programas informativos relevados y faltantes. El desglose de cada uno de los monitoreos que aquí se integran se puede consultar en la página Web de la Defensoría del Público (www.defensadelpublico.gob.ar). Los materiales utilizados para la presente investigación fueron provistos por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

DATOS GENERALES

La Tabla 1 describe el total de noticias analizadas en cada semana de los seis meses monitoreados, así como el total de tiempo visionado de cada uno de estos monitoreos. Como se ve allí, abril y octubre fueron las semanas en las que se monitorearon mayor cantidad de noticias. Sin embargo, el mes en el que las noticias de la semana relevada tuvieron mayor duración fue febrero:

Tabla 1. Detalle de fechas de monitoreo, cantidad de noticias y duración de cada monitoreo 2014.

MONITOREO	CANTIDAD DE NOTICIAS	TIEMPO DE DURACIÓN
1° (Febrero 2013)	2.242	97h 08m 27s
2° (Abril 2013)	2.633	93h 17m 08s
3° (Junio 2013)	2.280	88h 07m 35s
4° (Agosto 2013)	2.291	94h 31m 09s
5° (Octubre 2013)	2.633	93h 04m 22s
6° (Diciembre 2013)	2.449	88h 12m 59s
TOTAL	14.528	554h 21m 41s

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En la Tabla 2 se proveen detalles sobre la desagregación por canal del total de noticias relevadas hasta Diciembre 2014: el total de noticias presentadas por cada canal a lo largo de cada una de las seis semanas relevadas; el porcentaje de participación de cada canal en el total de noticias de los seis monitoreos de acuerdo a las cantidades recién mencionadas; el total de duración de las noticias presentadas durante la semana monitoreada por cada canal en el conjunto de los seis monitoreos, y el porcentaje de participación de cada canal según la duración acumulada de sus noticias. Allí se ve que, consecuente con los resultados parciales de cada monitoreo, el canal que mostró más noticias en las semanas monitoreadas fue Canal 9, y el que menos, América, una participación que, sin embargo, no se replica en la duración de las noticias, donde América tiene una duración global mayor que la Televisión Pública¹. Cabe destacar también que no existen diferencias significativas en la participación de cada canal por cantidad y duración de las noticias:

1. Es importante advertir que el canal América no emite ningún noticiero a la medianoche, lo cual impacta sobre la cantidad de noticias que dicho canal pone al aire y sobre su peso relativo en relación con el total de las registradas en los 6 monitoreos informados. A su vez, en el caso de la Televisión Pública ocurre algo similar, dado que varias ediciones de sus noticieros no fueron puestas al aire debido a la transmisión del programa Fútbol Para Todos. La totalidad de las emisiones faltantes se encuentra descripta en el Anexo de este documento.

Tabla 2. Cantidad de noticias y duración total por canal. % de participación de cada canal en el total de noticias y en el tiempo total del monitoreo 2014.

CANAL	CANTIDAD DE NOTICIAS	% DE PARTICIPACIÓN SEGÚN CANTIDAD EN EL TOTAL DE LOS 6 MONITOREOS	DURACIÓN DE SUS EMISIONES*	% DE PARTICIPACIÓN SEGÚN DURACIÓN EN EL TOTAL DE LOS 6 MONITOREOS
Canal 9	3.700	25,5	131h 01m 32s	23,6
Canal 13	3.210	22,1	118h 41m 17s	21,4
TV Pública	2.630	18,1	92h 09m 03s	16,6
Telefé	2.782	19,1	114h 05m 09s	20,6
América	2.206	15,2	98h 24m 40s	17,8
TOTAL	14.528	100	554h 21m 41s	100

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ANÁLISIS DE TÓPICOS

El diseño de los Monitoreos llevados a cabo por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual parte de una distinción entre *tema de la noticia* y *tematización* (tópico). En efecto, en el marco de los monitoreos, el *tópico* no debe entenderse como el "tema de la noticia" (por ejemplo, el incendio de un depósito en un barrio porteño), sino como el resultado de un proceso de **tematización** a cargo del noticiero y mediante el cual el tema de la noticia es incluido dentro de un **campo temático** predefinido. Tales tópicos son el producto de una preclasificación de los sucesos del mundo social dentro de grandes ramas del acontecer cotidiano como pueden ser "Salud y Discapacidad", "Política" o "Información General", entre otros. Por ejemplo, una noticia cuyo tema es la ocurrencia de un incendio puede ser tematizada como una cuestión de Salud (si el énfasis está puesto en los heridos y sus consecuencias médicas), de Política (si la noticia se centra en los acontecimientos y personalidades del ámbito de la política que se dan cita a raíz del evento), o de "Información general" (cuando la noticia se construye como un reporte de testigos y afectados del barrio). Por lo tanto, en la medida en que la tematización que es registrada en la atribución de tópico es el resultado de un complejo sistema de recursos lingüísticos, visuales y musicales, el mismo suceso puede ser presentado de diferentes formas (esto es, incluido en diferentes campos de experiencias sociales).

El interés de analizar lo que en el marco de los monitoreos se denomina *tópico prevalente* o *tópico preponderante* obedece a la necesidad doble de dar cuenta de la polisemia de los mensajes televisivos, a la vez que de operacionalizar lo que en

esos discursos aparece temáticamente más enfatizado. Por esta razón, hablar de *tópico prevalente* y, por continuidad, de *tópico secundario* y *tópico terciario* como líneas de tematización secundarias y subsidiarias en la noticia, implica asumir la multiplicidad semántica y temática que se despliega en cada unidad del discurso noticioso (noticia), sin perder de vista que esas múltiples líneas de tematización poseen énfasis distintos o, dicho de otra manera, no son equivalentes respecto de sus posibilidades e indicaciones de decodificación preferente. Por lo tanto, el tópico de una noticia no es una categoría excluyente con opciones de respuesta dicotómicas del tipo "Sí / No". Una noticia puede tener atribuidos más de un tópico, aunque con diferencias de grado: prevalente, secundario o terciario. En este sentido, mientras en los monitoreos realizados se recaba información teniendo en cuenta hasta tres tópicos por noticia (lo que implica que una noticia puede tener más de un tópico), cada noticia puede tener *sólo un* tópico preponderante, *sólo un* tópico secundario, y *sólo un* tópico terciario.

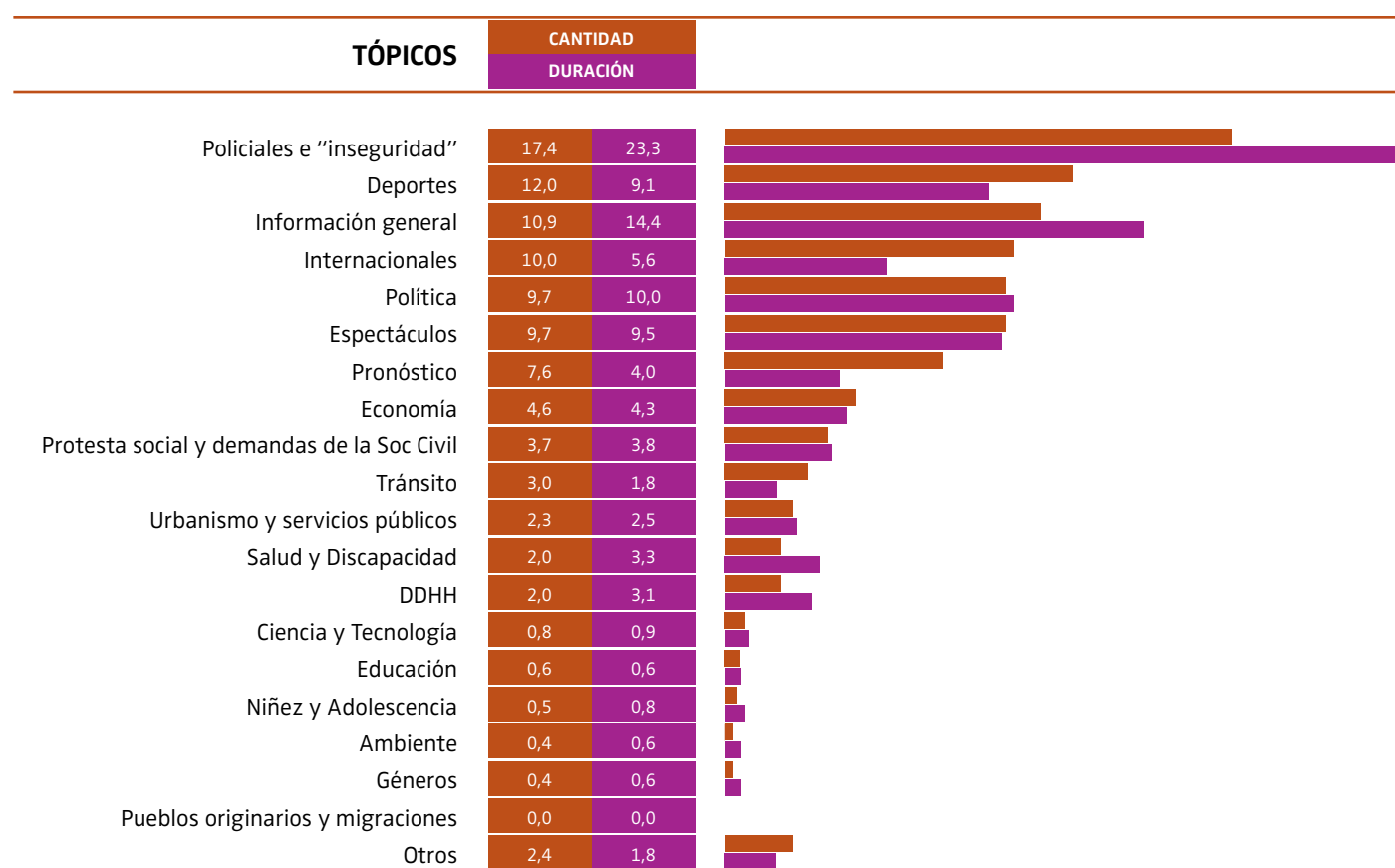
De acuerdo a lo dicho, la atribución del tópico preponderante, secundario y terciario apunta a captar la tematización preponderante, secundaria y subsidiaria de la noticia. **Esto es, la noticia no pertenece a un tópico porque trate determinado tema, sino que es el proceso de tematización (la inclusión de la noticia dentro de un campo de experiencias sociales), la que se consigna en la atribución de uno, dos y hasta tres tópicos.** Esta consignación se realiza teniendo en cuenta una serie de indicadores (titular, criterio de noticiabilidad, fuentes presentadas, música utilizada, entre otros, que se consignan en el Documento Metodológico producido por esta Defensoría, disponible en <http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/monitoreos-que-noticia-noticieros>). Todo ello deriva en que en cada semana monitoreada (en adelante: en cada monitoreo) existen más atribuciones de tópicos que cantidad de noticias y que sólo existe igual cantidad de noticias en **tópico prevalente**. De ahí que la lectura de este informe exija una especial atención a los análisis de los tópicos según dos criterios: uno atañe a la lectura del **tópico prevalente**; otro, al análisis de **tópico agrupado, el cual integra el total de atribuciones realizadas en cualquiera de los tres niveles de asignación de tópicos**. En el primer caso, se resalta el eje principal de la tematización de las noticias. En el segundo caso, es posible observar la tematización agrupada de los tópicos, lo cual permite identificar determinadas regularidades acerca del vínculo que presentan los noticieros con diferentes campos de la vida social.

A continuación se presentan resultados del análisis correspondiente a los seis monitoreos llevados a cabo por la DPSCA en 2014 (esto es, correspondiente al análisis de la primera semana de cada uno de los seis meses monitoreados). El Gráfico 1 muestra la distribución del **tópico prevalente** en el total de los seis monitoreos, tanto según cantidad (qué porcentaje de noticias sobre el total fue atribuida con un determinado tópico como **preponderante**), como según tiempo (qué porcentaje del tiempo total del monitoreo ocupan las noticias que fueron adjudicadas con un determinado tópico como **preponderante** de la noticia). Ese Gráfico muestra que el más atribuido como tópico principal de la noticia es "Policiales e 'inseguridad'" (17,4% del total de noticias), seguido de "Deportes" (12%) "Información general" (10,9%) e "Internacionales" (10%). **La participación de "Policiales e 'inseguridad'" se incrementa a casi un cuarto del total cuando ésta se mide según tiempo, lo que indica que casi un cuarto del tiempo monitoreado está dedicado a la tematización del tópico "Policiales e 'inseguridad'" como eje principal de la**

noticia. Por su parte, la contribución de “Información general” alcanza casi un 15% del tiempo total, más que según cantidad de noticias. Los tópicos que experimentan una disminución significativa de su participación en tanto tópico principal de la noticia cuando ésta se mide por duración son “Internacionales”, “Deportes” y “Pronóstico”, lo cual indica que se trata en general de noticias breves. El Gráfico 1 permite apreciar también la irrelevancia estadística de la aparición como **tópico prevalente** de tópicos que abordan cuestiones socialmente relevantes, como son “Urbanismo y servicios públicos”, “Salud y discapacidad”, “Derechos Humanos”, “Ciencia y tecnología”, “Educación”, “Niñez y adolescencia”, “Ambiente”, “Géneros” y “Pueblos originarios y migraciones”:

Gráfico 1. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias

(Totales = 14.528 noticias y 554h 21m 41s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

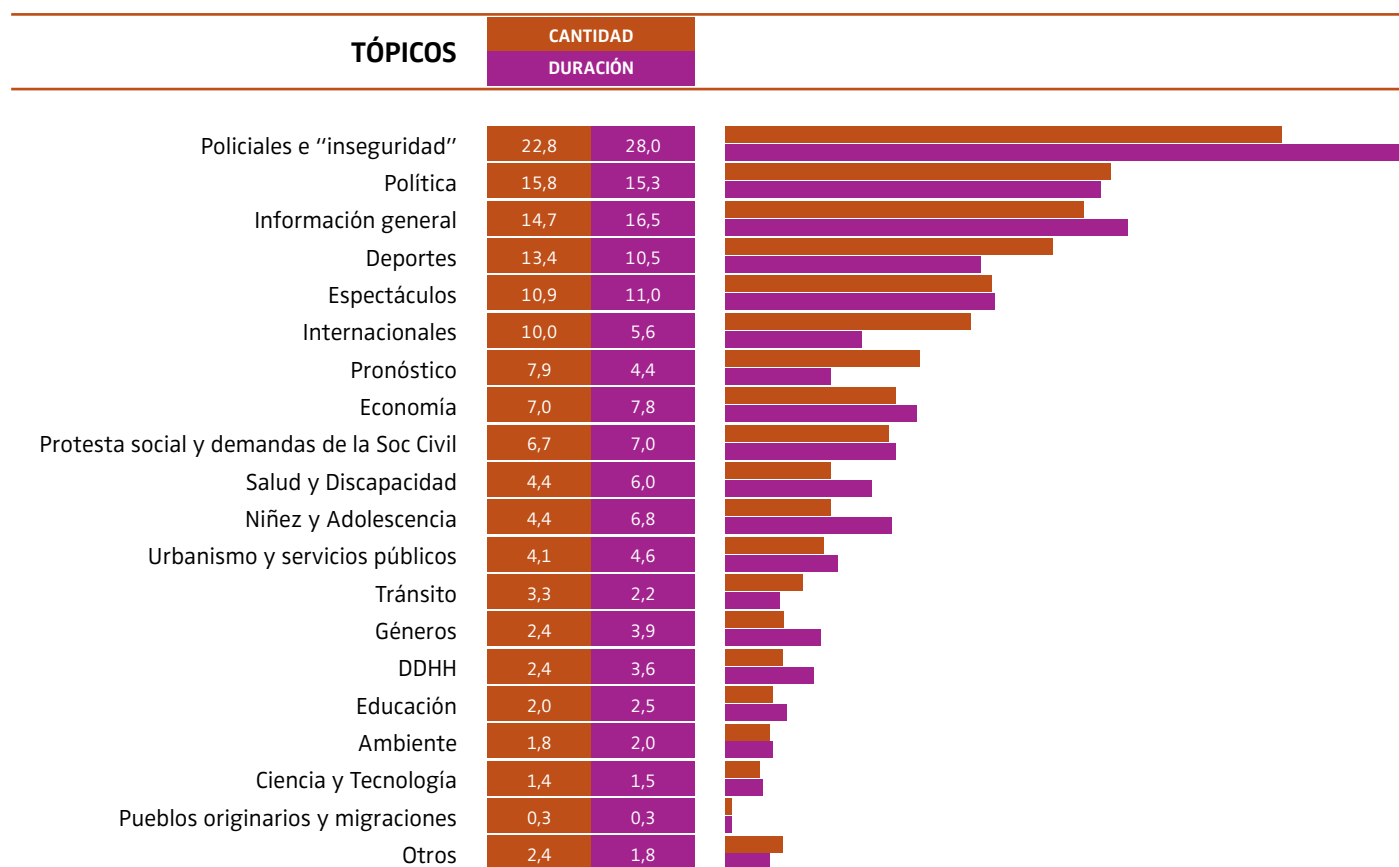
El Gráfico 2 muestra la distribución de los **tópicos agrupados** en el total de los seis monitoreos aquí reportados, lo que como ya se indicó corresponde a la primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre 2014. El total **agrupado** de cada tópico (ej. “Policiales e ‘inseguridad’”) resulta de sumar la cantidad de atribuciones que el tópico consiguió en tanto **prevalente, secundario y terciario**.

2. La participación porcentual de los tópicos agrupados presentada en el Gráfico 2 se calcula en base al total de atribuciones de cada tópico y su relación con el total de noticias (14.528) y el total de tiempo (554 horas, 21 minutos y 41 segundos), por lo que la suma del porcentaje total de las atribuciones en cada tópico agrupado no equivale a 100%. Sólo podría ocurrir esa coincidencia si las noticias refirieran sí y solo sí a un solo tópico, lo cual no se corresponde con la lógica del audiovisual. A modo de ejemplo, una noticia presentada como “Jóvenes delincuentes” puede resultar atribuida de manera prevalente con el tópico “Policiales e ‘inseguridad’”, a la vez que estar atribuida a “Niñez y adolescencia” en segundo orden.

Su participación porcentual está, en este caso, calculada sobre el total de noticias de los seis monitoreos. Como ya se indicó, dado que cada noticia puede tener más de uno y hasta tres tópicos asignados, la suma de la participación porcentual de todos los tópicos **agrupados** medida por cantidad de noticias y por tiempo de duración no es igual al 100%. Como se ve en el Gráfico 2, los **tópicos agrupados** más atribuidos en el total de los seis monitoreos son “Policiales e ‘inseguridad’” (22,8% del total de noticias), “Política” (15,8%) e “Información general” (14,7%). Sin embargo, si se observa el tiempo asignado a “Policiales e ‘inseguridad’” agrupado respecto del total de tiempo del monitoreo, se ve que su participación aumenta a casi un tercio del tiempo total (28%). En el resto de los tópicos no se observan diferencias demasiado significativas entre la medición de la participación por tiempo y por cantidad (salvo en el caso de “Pronóstico”, lo cual habla de que se trata en general de noticias cortas). El gráfico también muestra nuevamente la baja incidencia estadística, tanto en cantidad como en tiempo dedicado, de tópicos que refieren a “Ambiente”, “Géneros”, “Educación”, “Derechos humanos” o “Pueblos originarios y migraciones”:

Gráfico 2. Distribución de los tópicos agrupados según cantidad y duración de las noticias

(Totales = 20.066 atribuciones; 14.528 noticias y 554h 21m 41s)²



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

TÓPICOS AGRUPADOS Y COMPARACIÓN POR CANALES

En la siguiente sección se realizan comparaciones específicas de los datos correspondientes a un conjunto de tópicos –bajo la modalidad de **agrupados**– seleccionados, en algunos casos, por su relevancia cuantitativa (“Policiales e ‘inseguridad’”; “Política”; “Información General” y “Espectáculos”) y, en otros, por la importancia que esta Defensoría le asigna a determinadas temáticas por su carácter de información socialmente necesaria (“Salud y discapacidad”; “Niñez y adolescencia”; “Géneros”; “Derechos Humanos” y “Pueblos originarios y migraciones”).

El Gráfico 3 permite comparar cómo se distribuyeron por canal las atribuciones de cada uno de los tópicos agrupados seleccionados. Es decir, comparar la distribución de las noticias de un determinado tópico agrupado (asignaciones conseguidas en el nivel prevalente, secundario o terciario) por cada canal. El Gráfico 4 muestra el tiempo de duración de las noticias correspondientes a esa misma selección de tópicos agrupados en la comparación de los cinco canales relevados.

Allí se observa que, de los seleccionados en este apartado, en el caso de América, los tópicos agrupados con menor presencia comparativa son “Pueblos originarios y migraciones” y “Géneros”, tanto según cantidad de atribuciones como según tiempo de duración de las noticias. Los tópicos agrupados con mayor presencia en dicho canal –en comparación con el resto de los canales– son, en primer lugar, “Policiales e ‘inseguridad’” y, luego, “Niñez y adolescencia” y “Salud y discapacidad”, aunque la relevancia de estos dos últimos obedece más al tiempo dedicado que a la cantidad de atribuciones. Una mención especial merece la presencia en América del tópico agrupado “Derechos humanos”: si bien no presenta una cantidad significativa de atribuciones, las noticias son de una considerable duración, ya que representan casi un cuarto del tiempo total que los canales le dedicaron a las noticias adjudicadas con este tópico en alguno de los tres niveles de asignación. Es decir, si se tiene en cuenta el tópico “Derechos humanos”, América concentró el 24,1% del total del tiempo que se dedicó a este tópico en la suma de los monitoreos (contra apenas el 13,4% según cantidad de atribuciones). Sin embargo, en las semanas de 2014 monitoreadas debe mencionarse que de la totalidad de las noticias atribuidas con el tópico “Derechos Humanos”, América registró un porcentaje significativo sólo en un único monitoreo (Agosto 2014), cuando el nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, recuperó su identidad. La repercusión del hecho alcanzó a todos los canales, siendo América uno de los que dedicó una mayor cantidad del tiempo de sus noticieros monitoreados, con un enfoque en el que prevaleció la “historia de vida”.

Por su parte, Canal 9 es el canal que más asignaciones presenta en varios de los tópicos agrupados aquí seleccionados, lo que es consecuente con ser el canal que más noticias aporta al total de noticias monitoreadas en 2014 (1° semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre 2014). Los tópicos con menor presencia comparativa en este canal son “Espectáculos” y “Política”, aunque esto se debe más bien a la relevancia que otros canales asignan a estos dos tópicos. En el caso de “Política”, en Canal 9 se destaca, además, que la contribución por tiempo es casi nueve puntos porcentuales menor que el aporte por cantidad de atribuciones, lo que indica que se trata de noticias breves. Los tópicos con mayor presencia comparativa en las semanas monitoreadas de Canal 9 según cantidad de atribuciones son “Pueblos originarios y migraciones”, “Información general” y “Ni-

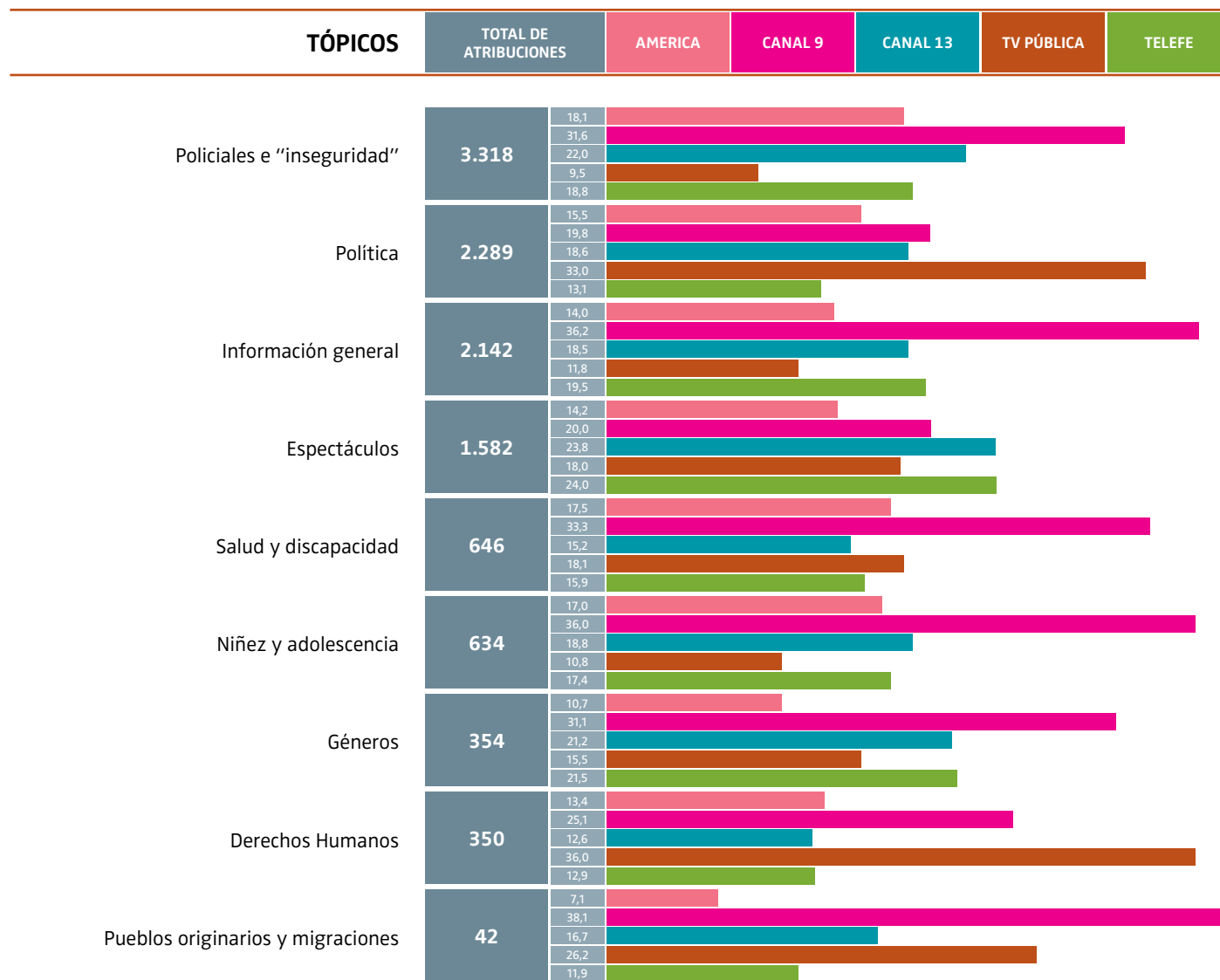
ñez y adolescencia". Cuando su contribución se mide por tiempo, resalta el aporte de este canal al tópico "Géneros", en general atribuido en casos de violencia de género; a la vez que se reduce la presencia de "Pueblos originarios y migraciones", indicando que se trata de noticias breves.

En el caso de las semanas monitoreadas de Canal 13, si se atiende a esta selección de tópicos agrupados, destaca la escasa presencia de "Derechos humanos" y "Salud y discapacidad", y estas contribuciones son aún menores en términos porcentuales cuando se miden por duración de las noticias, lo que indica que se trata de noticias breves. De los seleccionados, comparativamente, los tópicos agrupados más relevantes en cantidad de atribuciones en las semanas monitoreadas de Canal 13 son "Policiales e 'inseguridad'", "Géneros" y "Espectáculos", aunque cabe destacar que las atribuciones a "Géneros" aumentan alrededor de cinco puntos porcentuales cuando éste se mide por duración de las noticias, lo que indica que se trata de noticias de mayor duración. Una mención especial merece el aporte de Canal 13 a "Pueblos originarios y migraciones": en comparación con el resto de los canales, y si bien la participación en este tópico es relativamente baja en cantidad de atribuciones, se incrementa 17 puntos porcentuales al medirla por tiempo, lo que indica que se trata de noticias considerablemente largas.

En cuanto a las semanas monitoreadas de la Televisión Pública, la menor cantidad de atribuciones se registra, comparativamente, en los tópicos agrupados "Policiales e 'inseguridad'", "Niñez y adolescencia" e "Información general", y este aporte disminuye todavía más en términos porcentuales cuando se mide según tiempo, especialmente en "Niñez y adolescencia", donde pasa de ser el 10,8% según cantidad al 5,7% del tiempo que los noticieros le dedican al tópico agrupado. La mayor relevancia según cantidad de atribuciones se registra en los tópicos "Derechos humanos" y "Política". Sin embargo, su contribución por tiempo a estos tópicos es disímil: mientras desciende más de doce puntos porcentuales en el caso de "Derechos humanos", aumenta ocho puntos porcentuales en el caso de "Política".

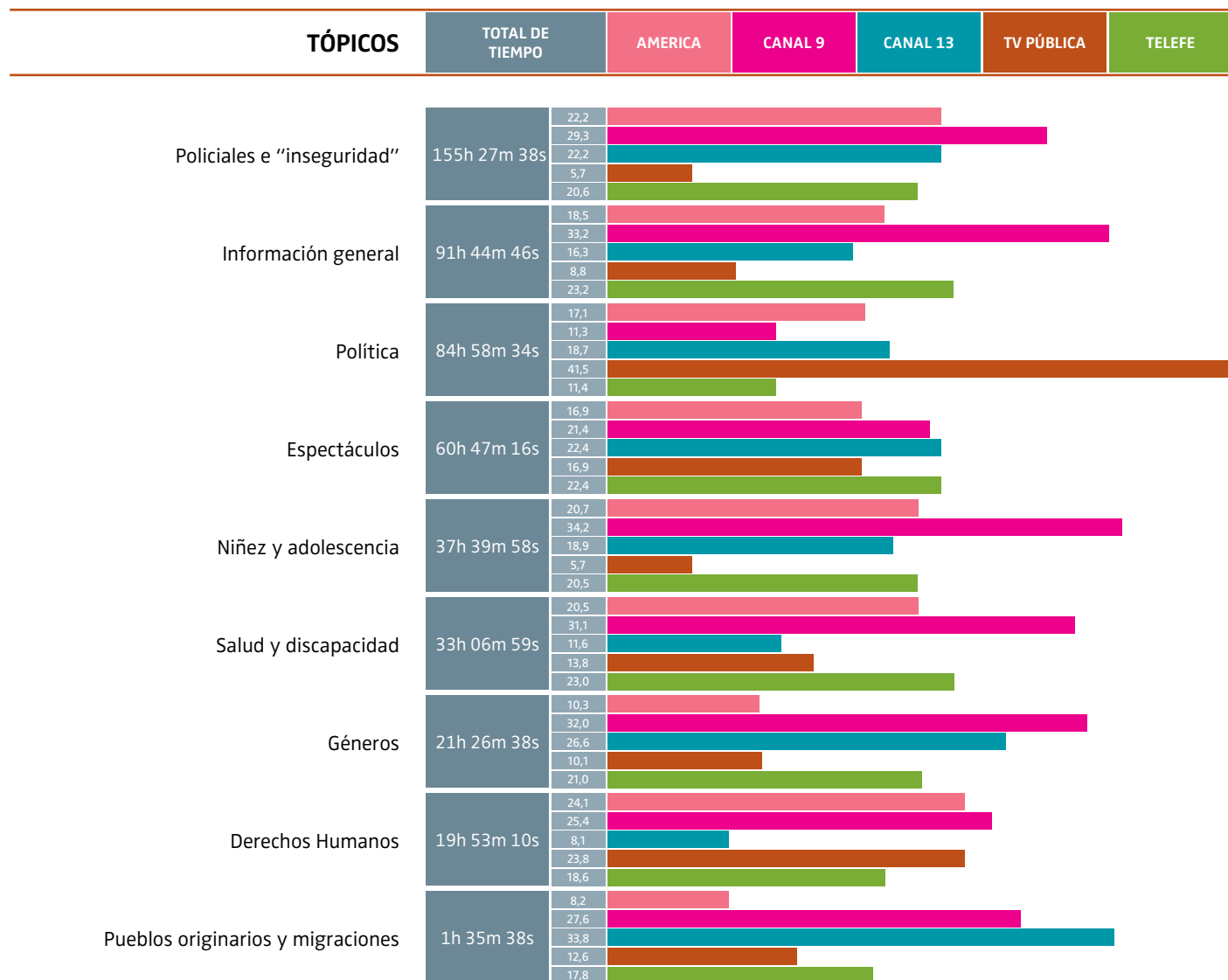
Por último, si se tiene en cuenta la cantidad de atribuciones, Telefé registra en las semanas monitoreadas los menores valores comparativos en los tópicos agrupados "Pueblos originarios y migraciones" y "Derechos humanos", aunque su presencia es de seis puntos porcentuales más alta cuando se miden por tiempo, lo que indica que se trata de noticias mayormente extensas. De acuerdo con el tiempo dedicado, "Política" resalta también como un tópico al que Telefé asigna un bajo porcentaje en relación con los demás canales. En la medición por cantidad de atribuciones, el tópico que más asignaciones registra Telefé es "Espectáculos", mientras que, en la medición por tiempo, los tópicos que se destacan comparativamente son "Información general", "Salud y discapacidad", "Espectáculos", "Géneros" y "Policiales e 'inseguridad'":

Gráfico 3. Contribución de cada canal a una selección de nueve tópicos agrupados, en cantidad de atribuciones



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gráfico 4. Contribución de cada canal a una selección de nueve tópicos agrupados, en cantidad de tiempo



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

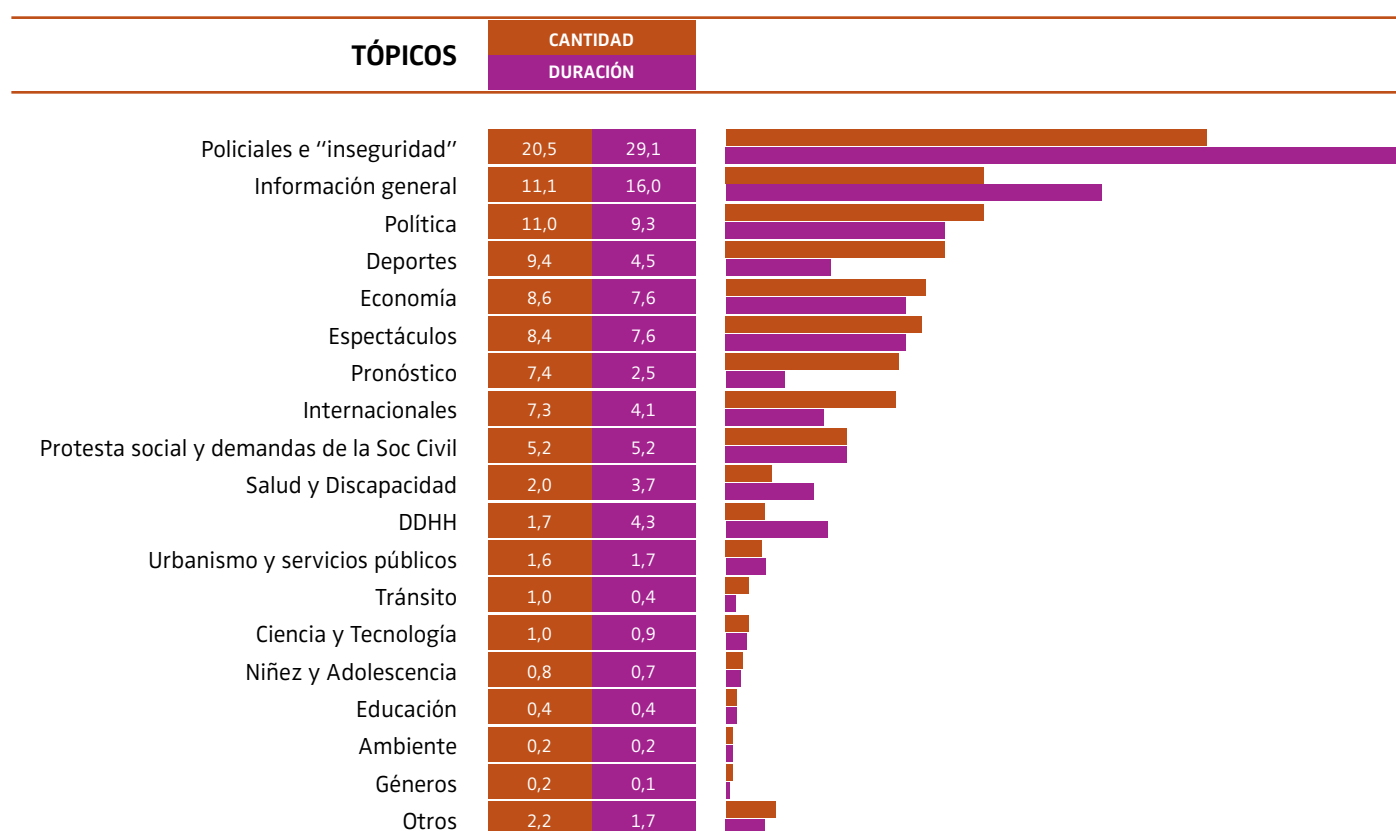
TÓPICO PREVALENTE

Los Gráficos 5 a 9 ofrecen la distribución por cantidad y tiempo del **tópico prevalente** en cada una de las semanas monitoreadas de los cinco canales monitoreados. De allí se desprende que, consecuente con la distribución general, en todos los canales, salvo en la Televisión Pública, el tópico más atribuido en la muestra de 2014 es "Policiales e 'inseguridad'". Éste alcanza un tercio del tiempo emitido monitoreado en América y Canal 9, y un cuarto en Telefé y Canal 13. Por su parte,

“Deportes” es el segundo tópico más atribuido como **prevalente** en la Televisión Pública, Telefé y Canal 13. Se destaca, a su vez, la presencia de “Internacionales” como segundo tópico prevalente más atribuido en Canal 9, así como la presencia de “Espectáculos” como tercero más atribuido en Canal 13. En todos los canales resalta, además, la irrelevancia estadística como tópico principal de la noticia de tópicos que hacen a la provisión de información socialmente necesaria, como son “Géneros”, “Pueblos originarios y migraciones”, “Urbanismo y servicios públicos”, “Derechos humanos”, “Salud y discapacidad” y “Niñez y adolescencia”:

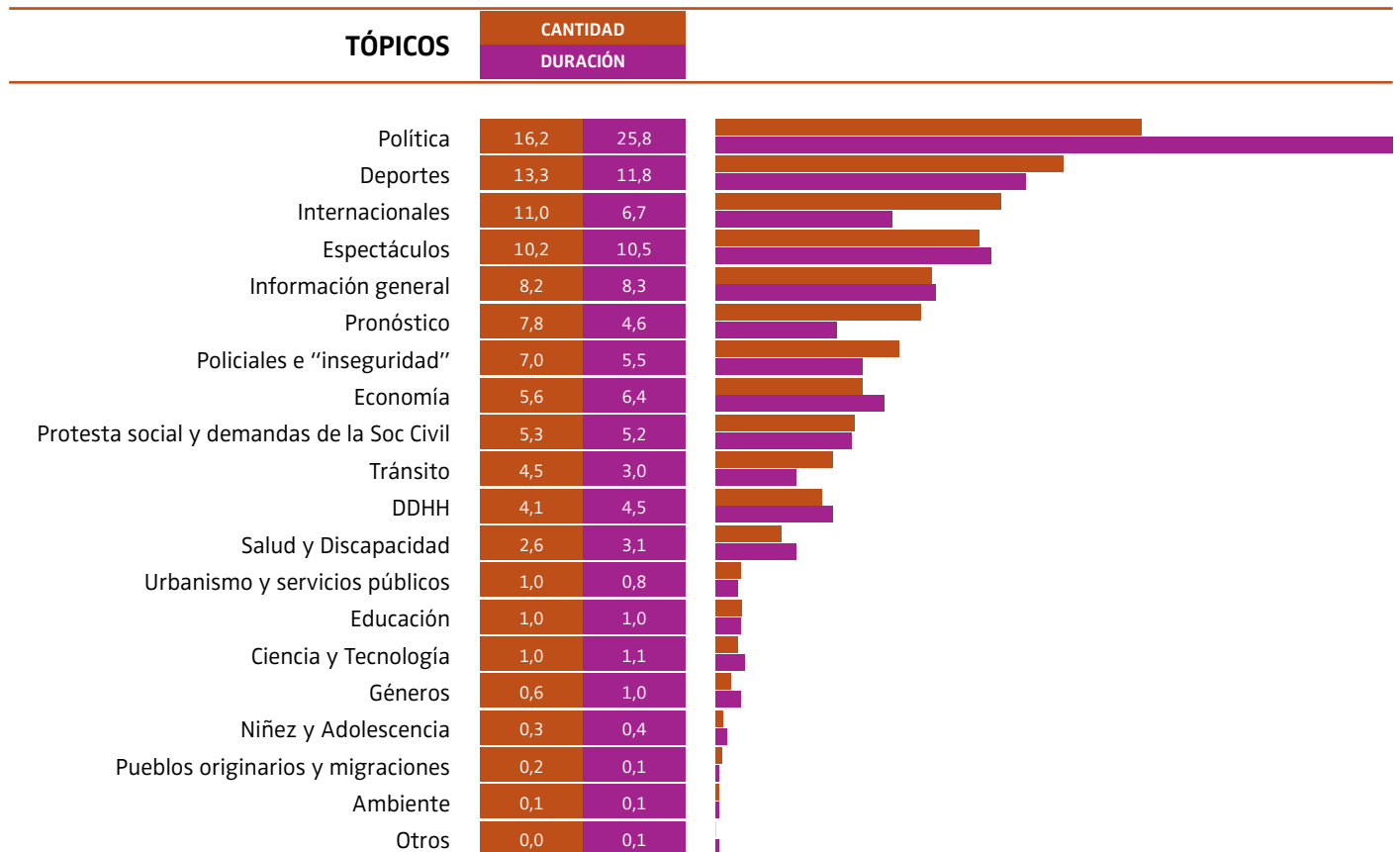
Gráfico 5. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en América

(Totales = 2.206 noticias y 98h 24m 40s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

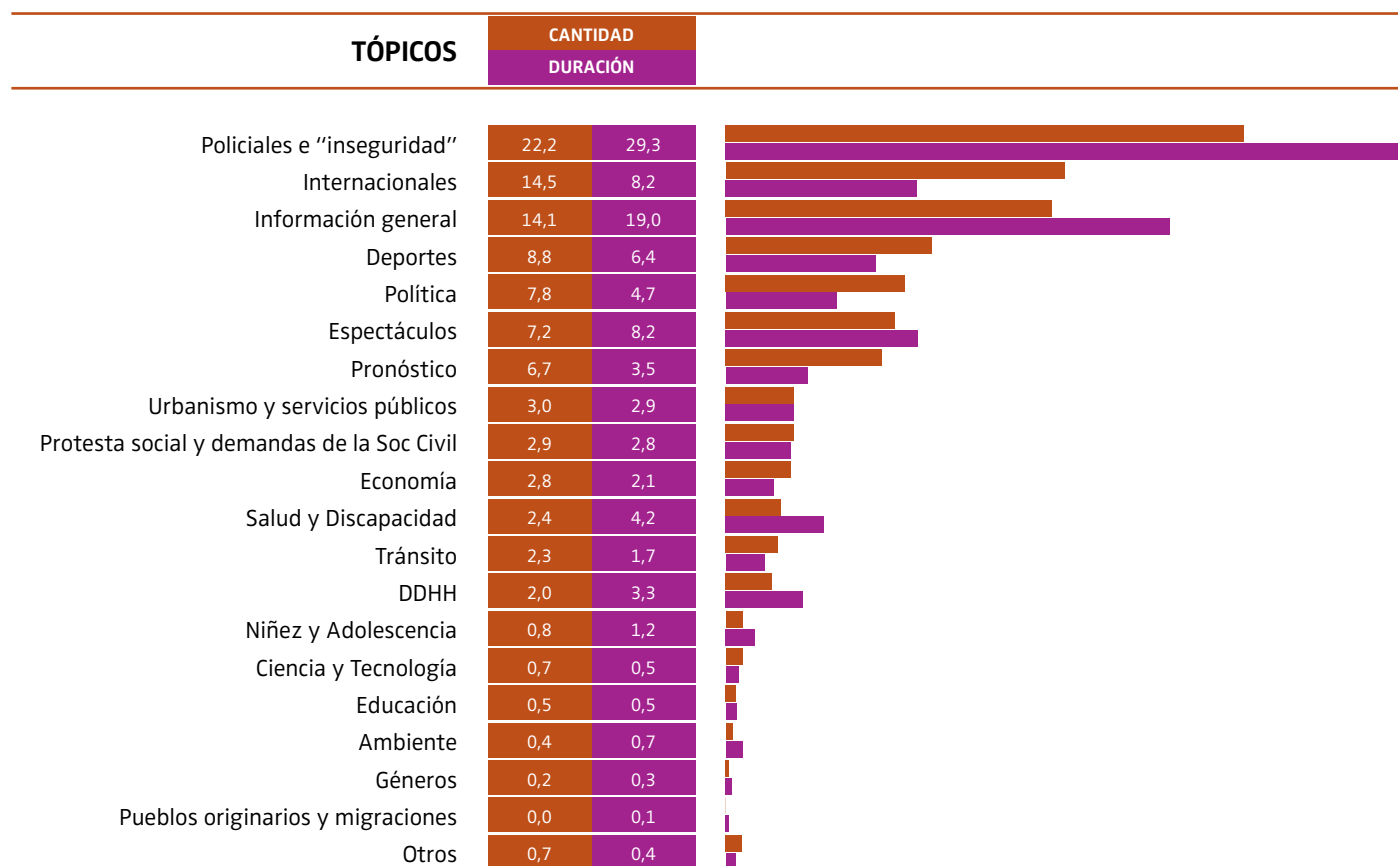
Gráfico 6. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Televisión Pública
(Totales = 2.630 noticias y 92h 09m 03s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

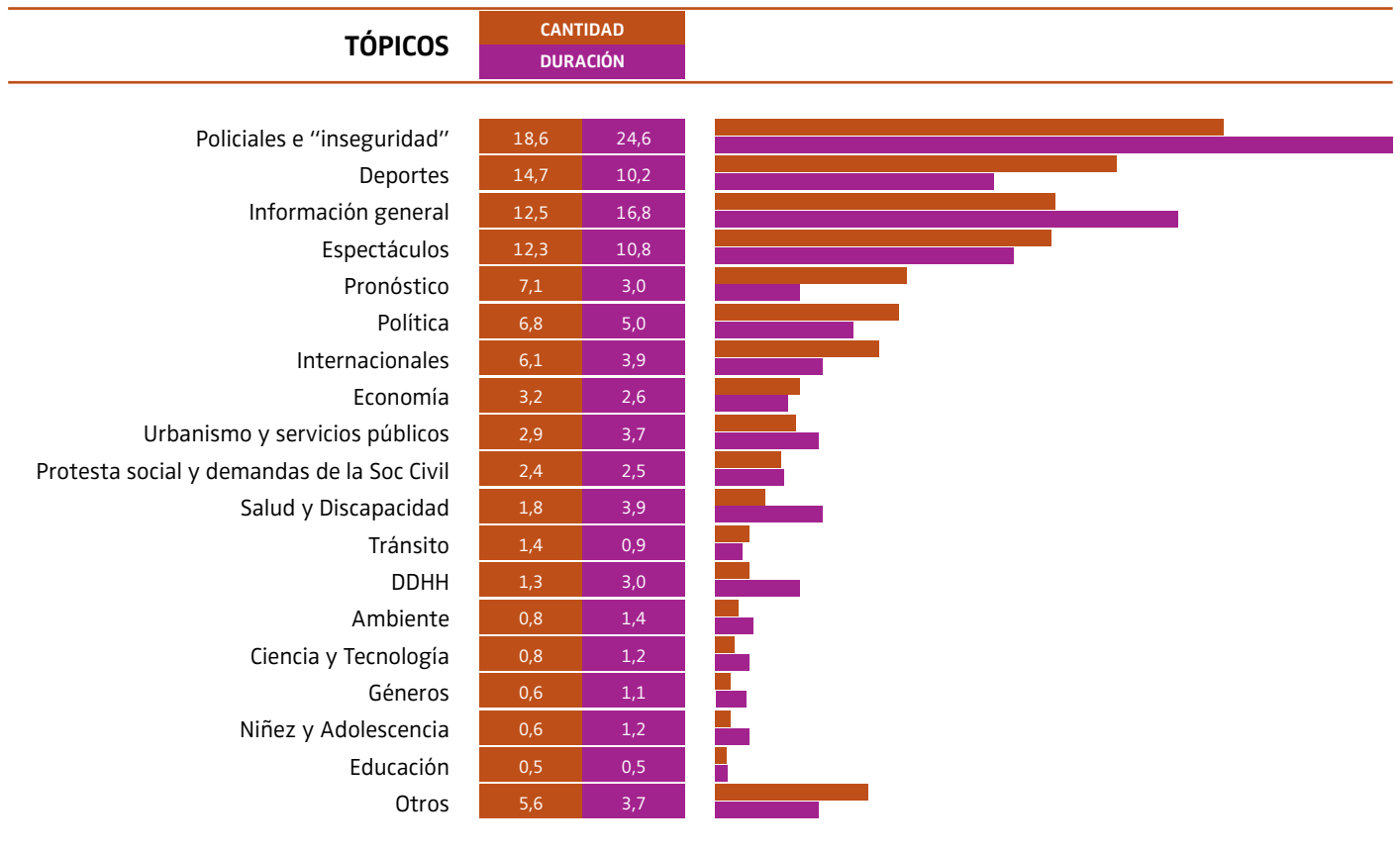
Gráfico 7. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Canal 9

(Totales = 3.700 noticias y 130h 01m 32s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

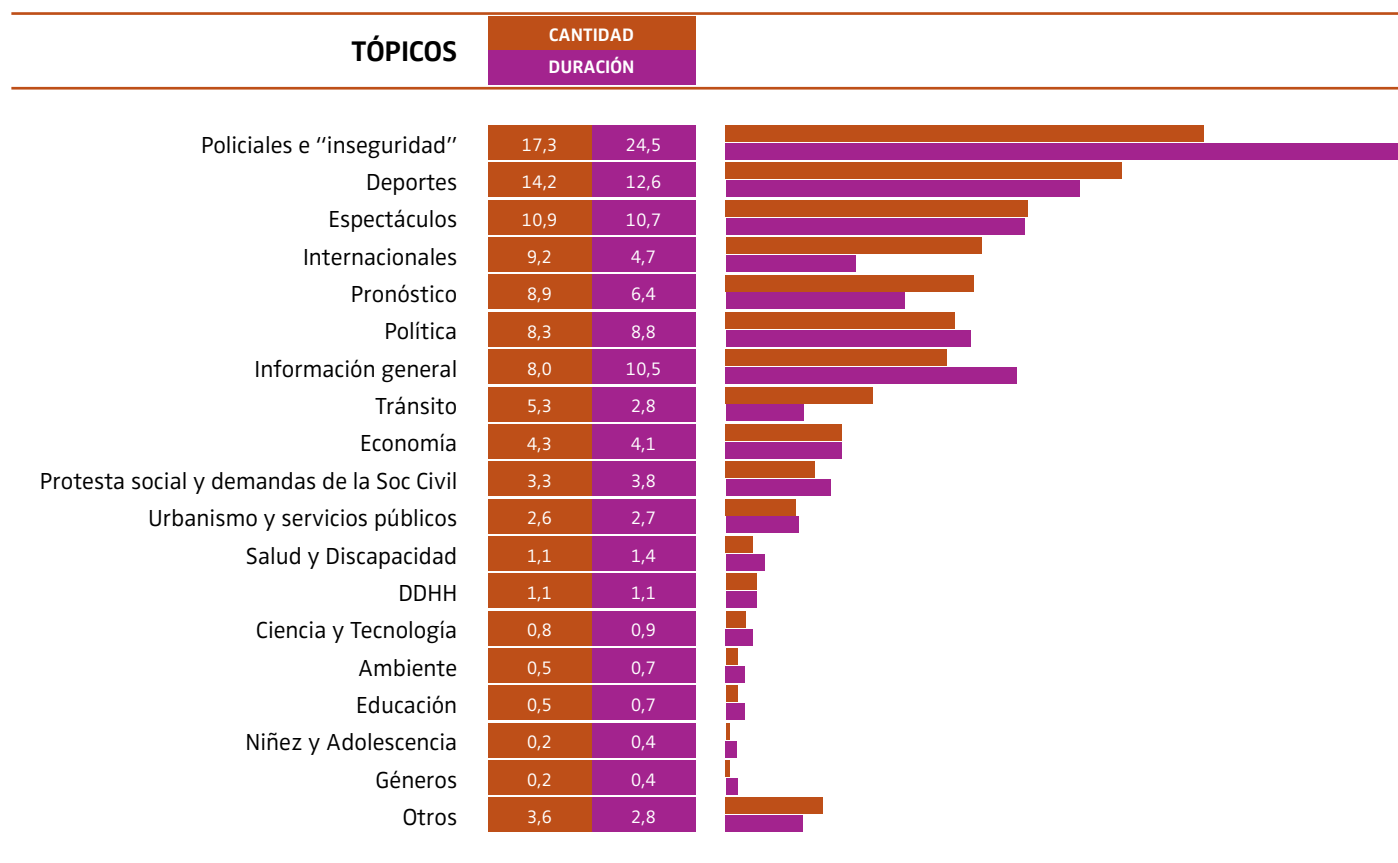
Gráfico 8. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Telefé
(Totales = 2.782 noticias y 114h 05m 09s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gráfico 9. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Canal 13

(Totales = 3.210 noticias y 118h 41m 16s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Como es posible observar, a excepción de la Televisión Pública, en todos los canales entre un cuarto y un tercio del tiempo informativo está dedicado a la tematización de "Policiales e 'inseguridad'". Y, junto con ello, nuevamente salvo en el caso de la Televisión Pública, en todos los canales el tópico "Política" no alcanza el 10% del tiempo informativo.

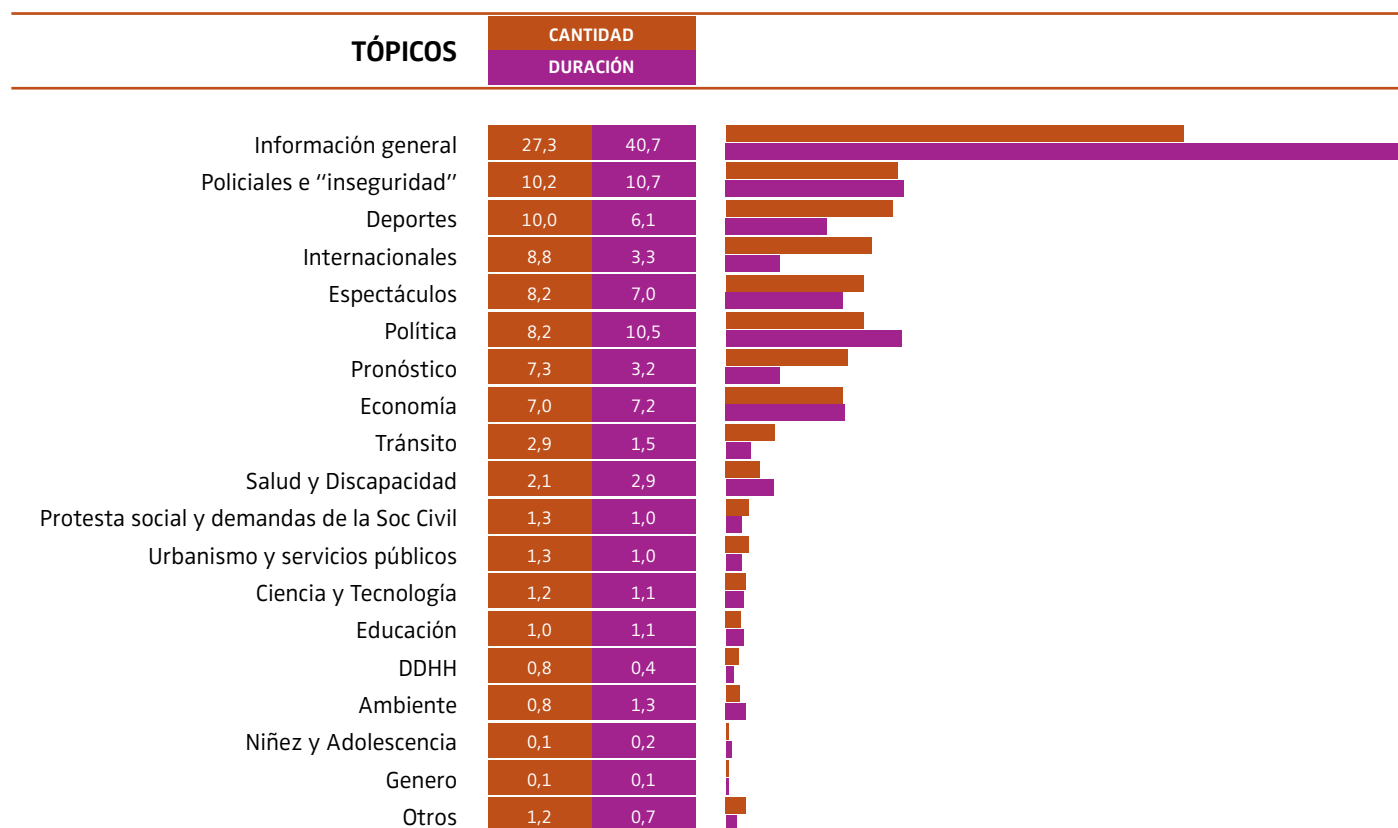
Los Gráficos 10 al 15 muestran la distribución del tópico prevalente por semana monitoreada. Como allí se observa, en todas las semanas salvo en la analizada en febrero Policiales e "inseguridad" fue el tópico más atribuido como tópico principal de la noticia, con porcentajes que rondan entre el 15% y el 20% del total de noticias, y entre el 20% y el 30% del total de tiempo. Febrero, mes en cuya primera semana explotó un depósito de la empresa de archivos Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, tuvo como tópico principal más asignado Información general, confirmando la tendencia ya detectada de que Policiales e "inseguridad" sólo ha sido desplazado como tópico prevalente más atribuido por la ocurrencia de tragedias y/o catástrofes (lo que fue registrado también en abril de 2013 con las inundaciones de la Plata). A su vez, en todos los meses salvo en febrero y octubre Deportes fue el segundo tópico más atribuido como prevalente, siendo el

tercero en los meses ante exceptuados, lo que refuerza la tendencia a una presencia cada vez más marcada de este tópico en los informativos de la CABA. Política está presente entre los cuatro tópicos más asignados como prevalentes en tres de los seis monitoreos aquí reportados (junio, octubre y diciembre), aunque nunca como el más asignado. Lo mismo ocurre con Internacionales, que se presenta entre los cuatro primeros tópicos en febrero, junio y octubre; y con Espectáculos, que se encuentra entre los cuatro más asignados en abril, agosto y diciembre. Como muestran estos datos, los cuatro tópicos más asignados como prevalentes pivotan siempre entre cinco tópicos: Policiales e “inseguridad”, Deportes, Política, Internacionales y Espectáculos. Información general es en general un tópico respecto del cual se destaca su inconstancia: mientras es el más asignado en febrero (en consonancia con la ocurrencia de la mencionada catástrofe) y el cuarto más asignado en abril, se encuentra en el sexto lugar en junio y octubre, en el séptimo en diciembre, y en el octavo en agosto.

Por su parte Derechos humanos, un tópico que suele ocupar los últimos escalafones tanto a nivel prevalente como agrupado, se encontró entre los cuatro tópicos más asignados como prevalente en agosto, como consecuencia de la recuperación del nieto de la Presidenta de la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, tal como se destacó oportunamente en el correspondiente informe mensual. En conjunto, estos datos muestran que independientemente del mes analizado, son siempre los mismos tópicos –paradójicamente, aquellos que hacen a la provisión de información socialmente relevante- los que consiguen menos atribuciones como tópico principal de la noticia: Salud y discapacidad, Niñez y adolescencia, Géneros, Ambiente, Protesta social y demandas de la sociedad civil, Ciencia y Tecnología, Educación, Derechos humanos.

Gráfico 10. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Febrero

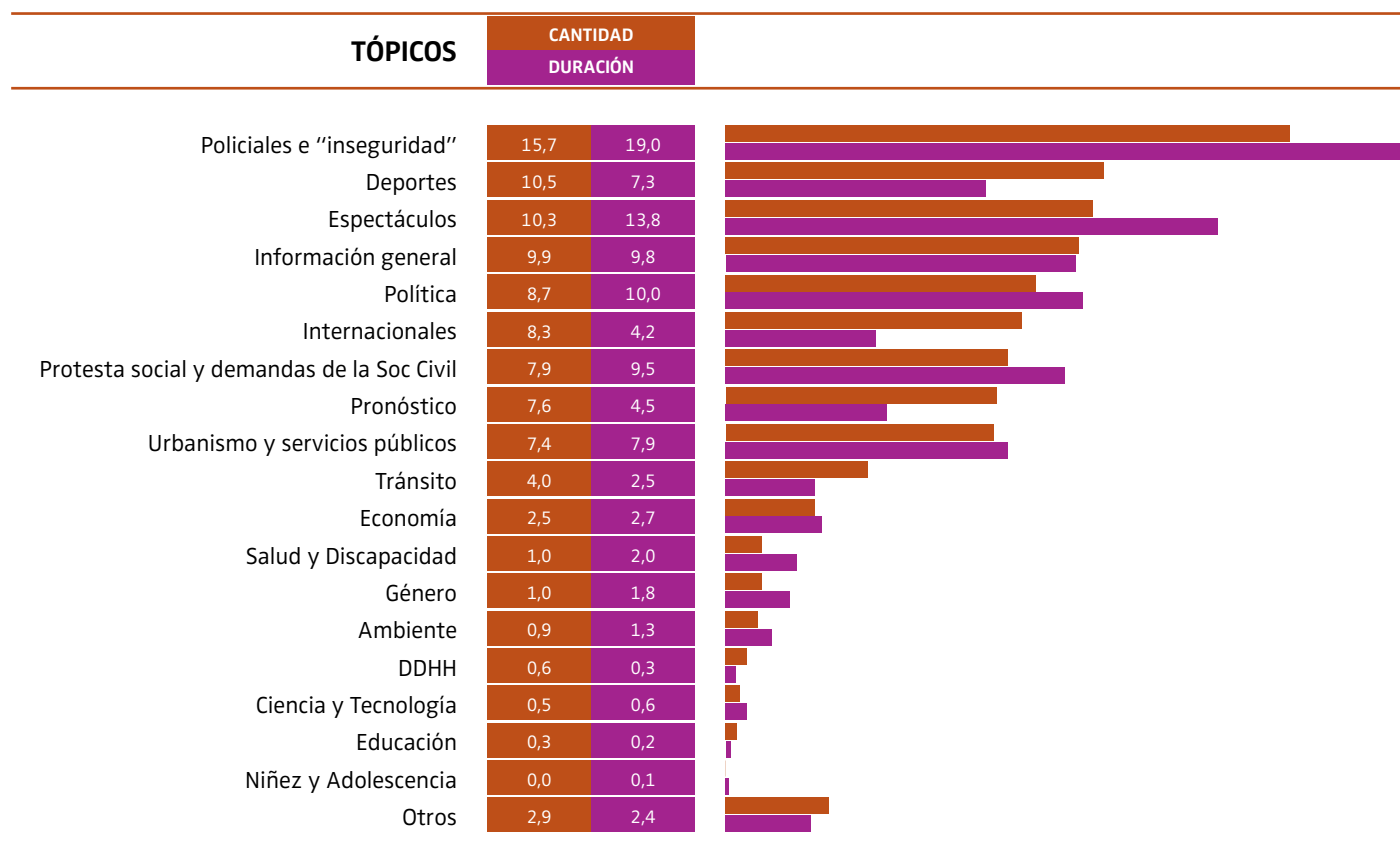
(Totales = 2.242 noticias y 97h 8m 27s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gráfico 11. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Abril

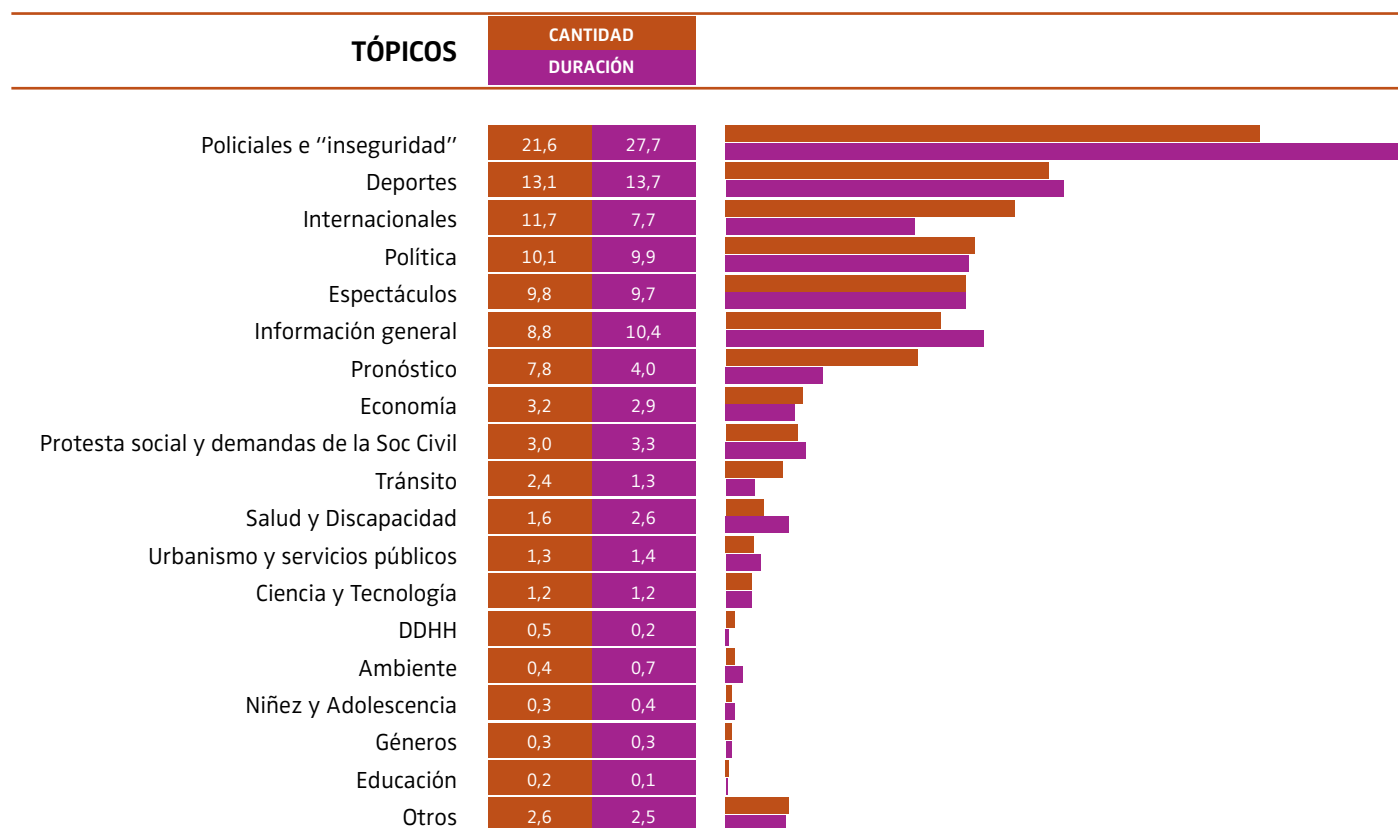
(Totales = 2.633 noticias y 93h 17m 8s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

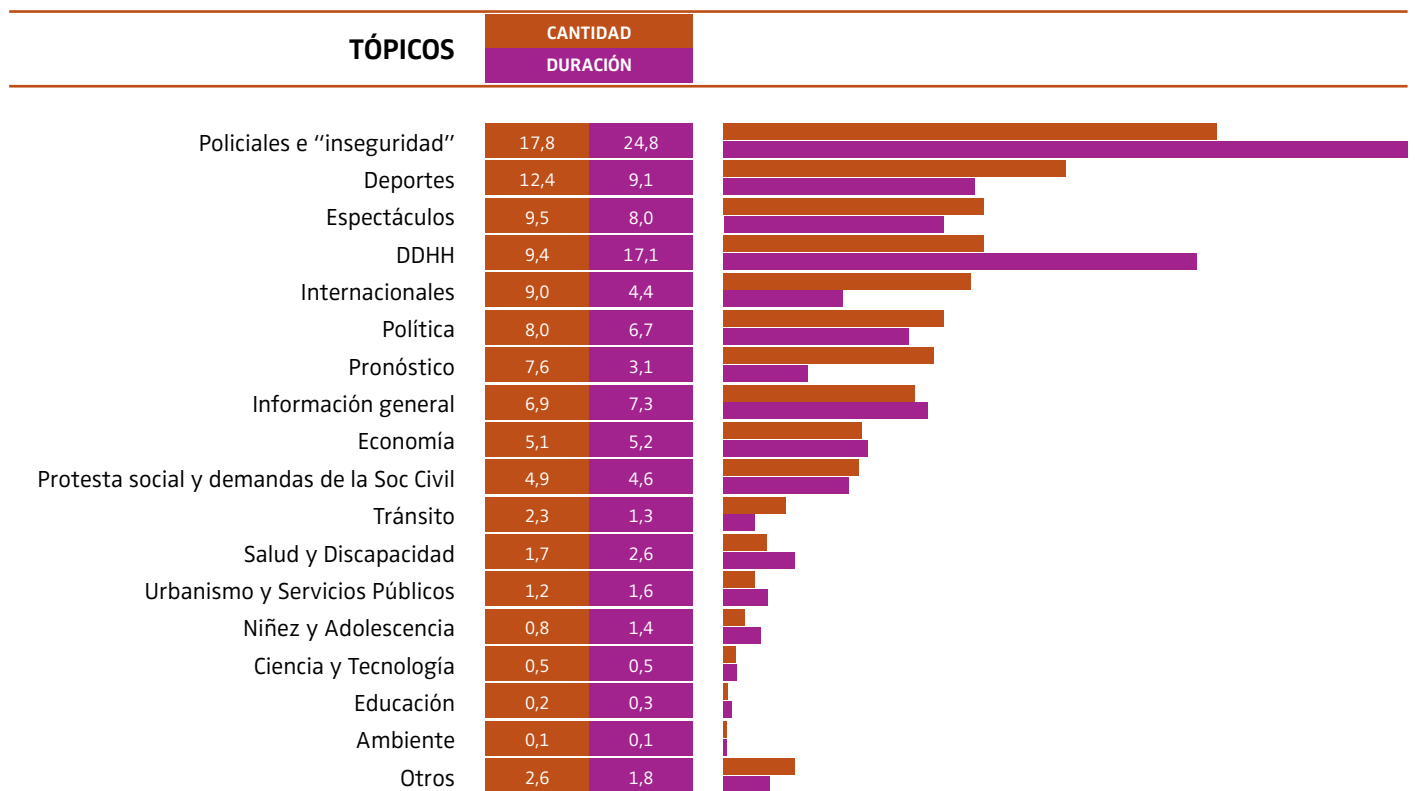
Gráfico 12. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Junio

(Totales = 2.280 noticias y 88h 7m 35s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

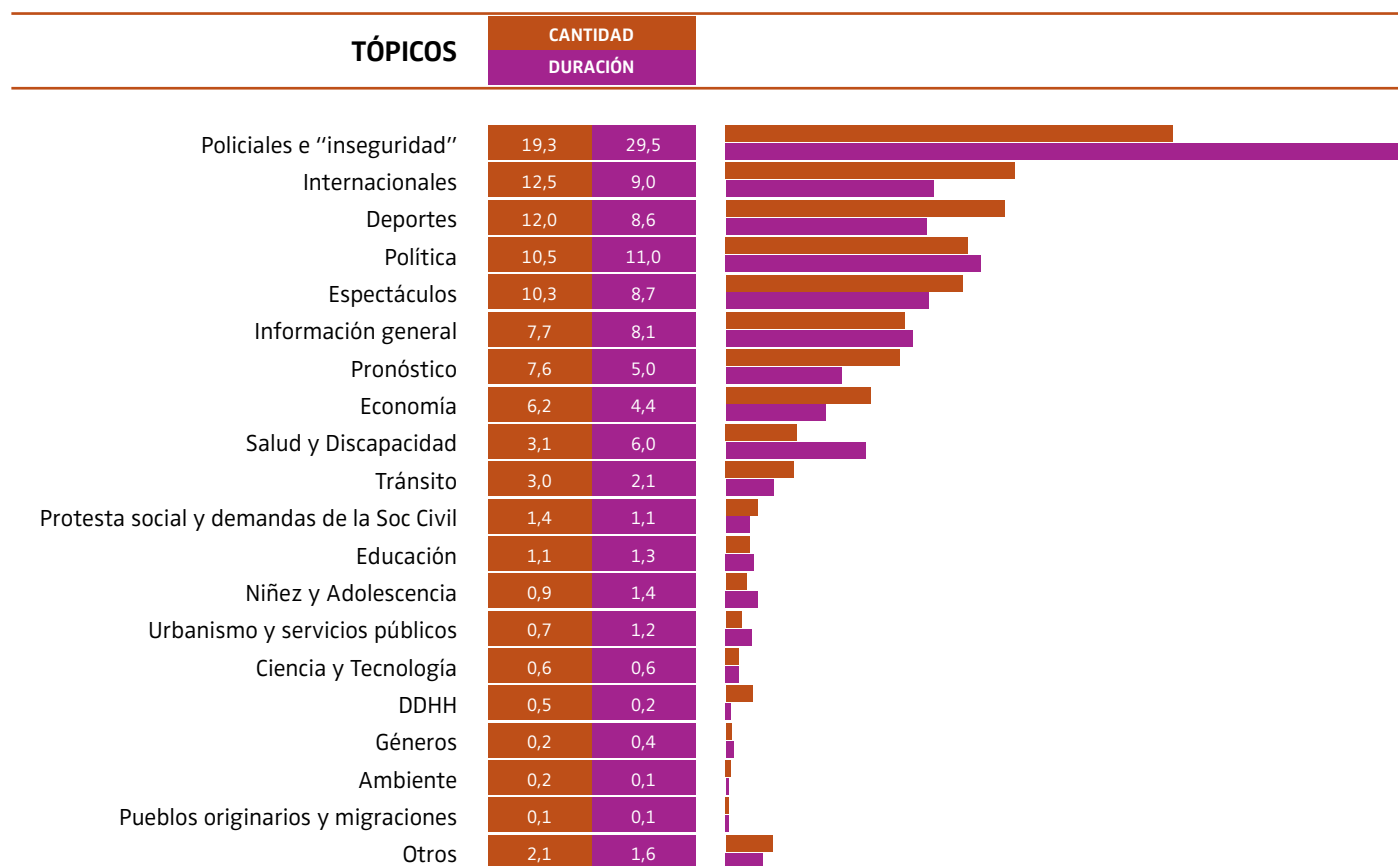
Gráfico 13. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Agosto
(Totales = 2.291 noticias y 94h 31m 9s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

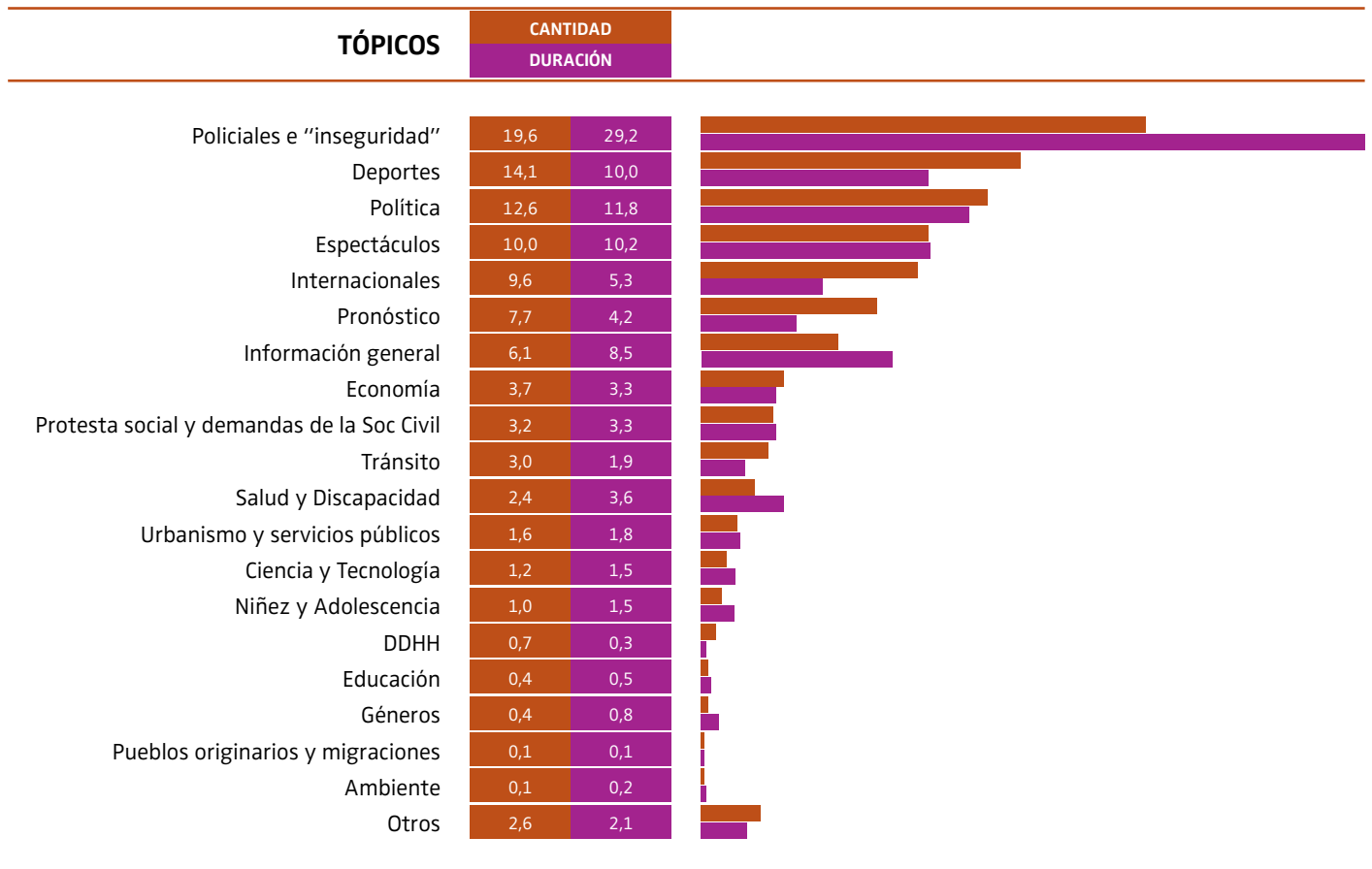
Gráfico 14. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Octubre

(Totales = 2.633 noticias y 93h 4m 22s de duración)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gráfico 15. Distribución del tópico prevalente según cantidad y duración de las noticias en Diciembre
(Totales = 2.449 noticias y 88 horas 12 minutos 59 segundos)

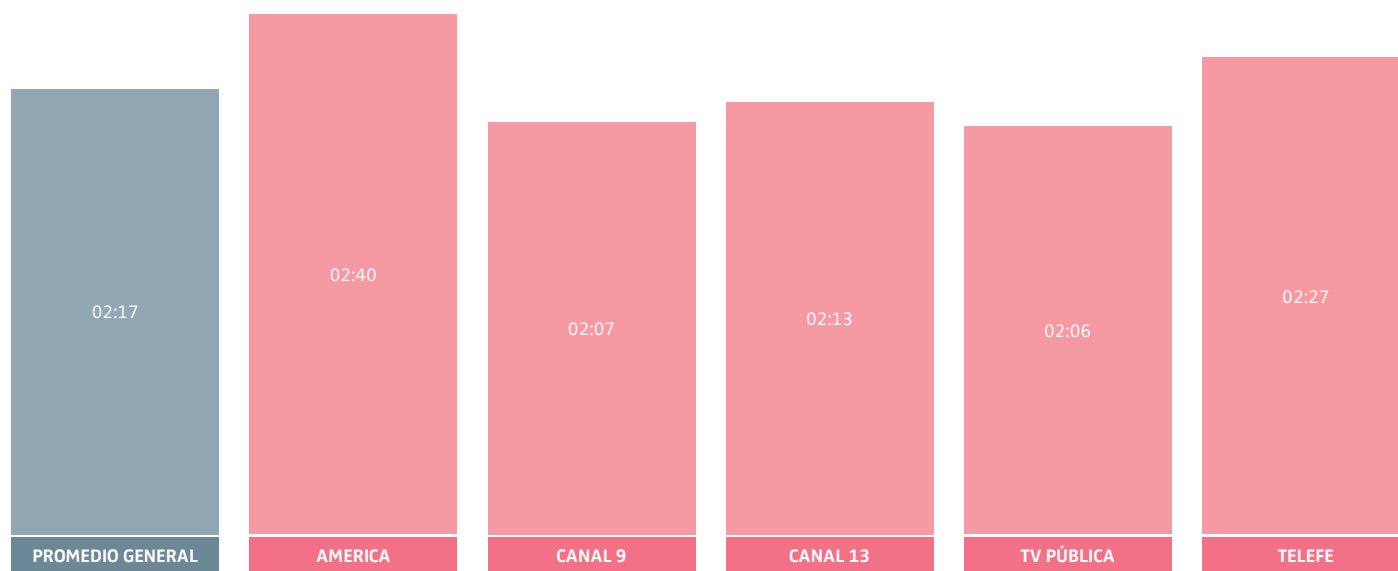


Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

PROMEDIOS DE DURACIÓN

El promedio general de duración de las noticias analizadas como resultado del monitoreo de la primera semana de informativos emitidos durante febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre 2014 es 2:17 minutos. El Gráfico 16 describe el promedio general de las noticias monitoreadas por cada canal. Como se observa, el promedio general es bastante semejante entre los canales, aunque se destaca que América posee el promedio más alto y Canal 9, el más bajo. Ello contrasta con la medición de la cantidad de noticias que, como ya se dijo, muestra a América como el que menos noticias emite y Canal 9, como el que más:

Gráfico 16. Promedio general de duración de las noticias por cada canal



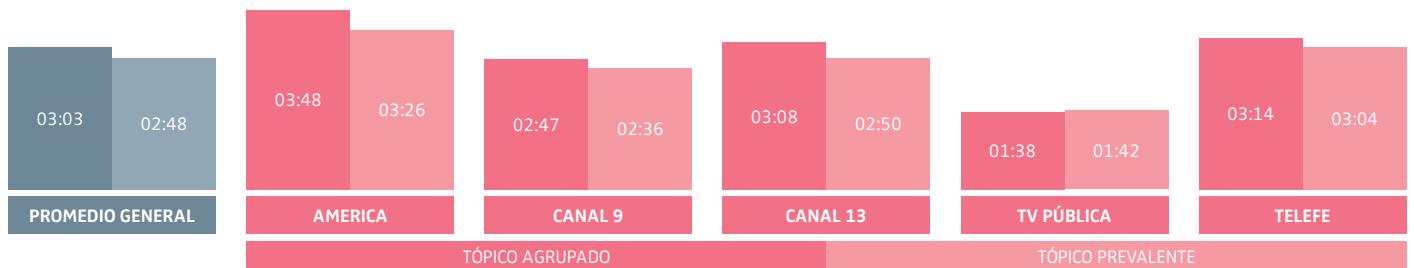
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los Gráficos 17 al 20 muestran, para una selección de cuatro tópicos considerados relevantes por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (“Policiales e ‘inseguridad’”, “Política”, “Información general” y “Espectáculos”), el promedio de duración del **tópico prevalente** y del **tópico agrupado** en cada canal³ durante las semanas de 2014 monitoreadas. De los gráficos se desprende que el tópico “Policiales e ‘inseguridad’” es uno de los que muestra promedios más disímiles entre los canales en las semanas monitoreadas, siendo América el que tiene las noticias de “Policiales” más largas (3:26 minutos), y la Televisión Pública las más cortas (1:42 minutos). En cuanto a “Política”, las noticias de América y Canal 13 tienen una duración semejante, mientras que las de Canal 9 son las más cortas (2:21 minutos) y las de la Televisión Pública las más largas (2:48 minutos), aunque debe tenerse en cuenta que, durante las semanas monitoreadas, los noticieros de este último canal emitieron varios discursos de funcionarios públicos en vivo, los cuales tuvieron una extensa duración.

En el tópico “Información general”, los canales que muestran las noticias con promedio de duración más largas en la muestra de 2014 son América y Telefé, mientras que el resto de los canales emite noticias de una duración promedio similar. Por último, en el tópico “Espectáculos”, se observa que todos los canales, excepto América, tienen una duración promedio similar. La lectura de los tiempos de duración en un conjunto de tópicos seleccionados permite establecer algunas claves para identificar las prioridades de la agenda informativa de cada canal en las semanas monitoreadas:

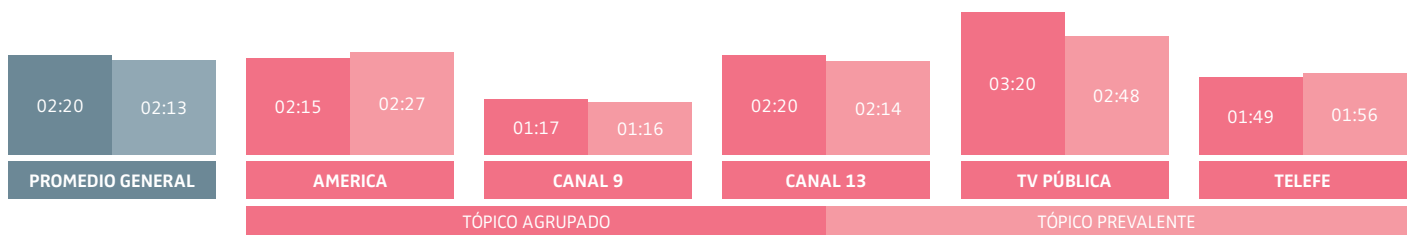
3. En adelante, se leen sólo los porcentajes de los tópicos agrupados, ya que la tendencia en el tópico prevalente es semejante.

Gráfico 17. Promedio general de duración de las noticias adjudicadas con el tópico "Policiales e 'inseguridad'" (prevalente y agrupado)



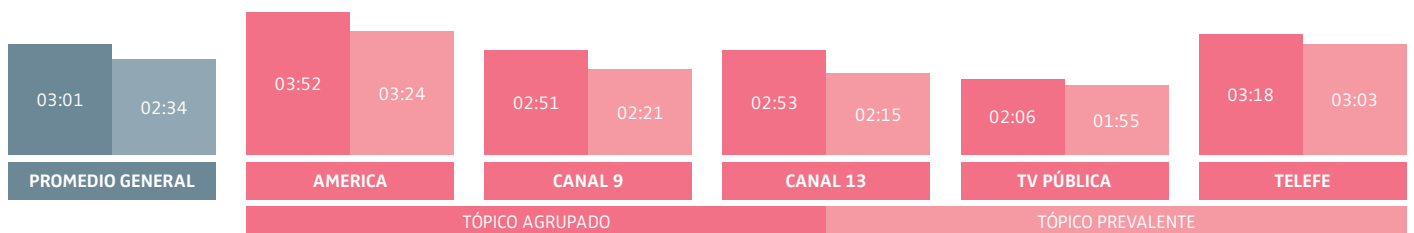
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gráfico 18. Promedio general de duración de las noticias adjudicadas con el tópico "Política" (agrupado y prevalente)



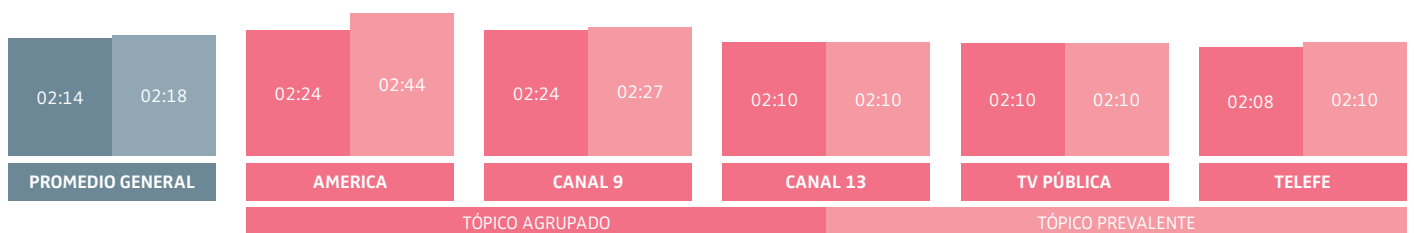
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gráfico 19. Promedio general de duración de las noticias adjudicadas con el tópico "Información general" (agrupado y prevalente)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gráfico 20. Promedio general de duración de las noticias adjudicadas con el tópico "Espectáculos" (agrupado y prevalente)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

LUGAR GEOGRÁFICO

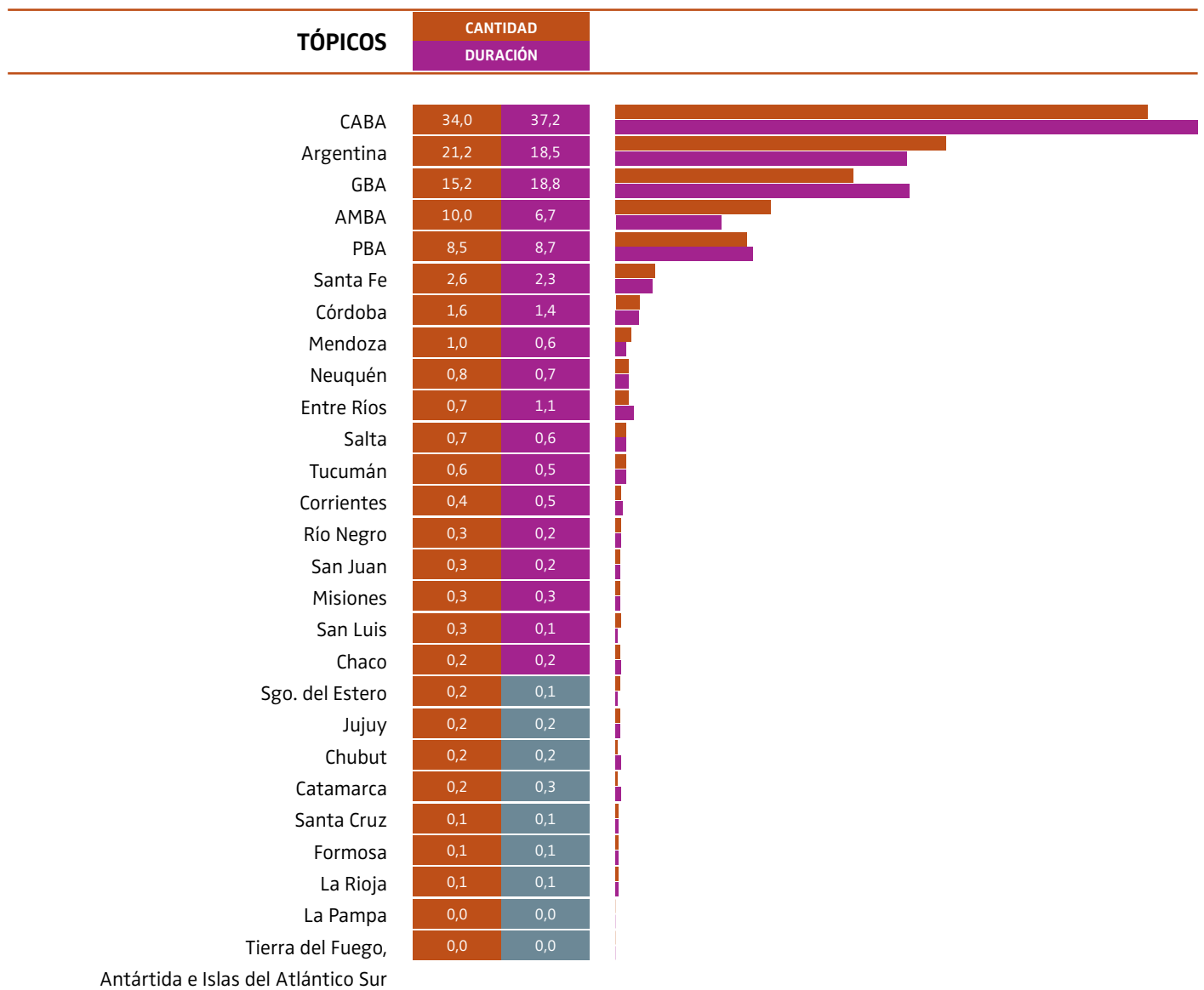
Por su parte, en los monitoreos se consignó bajo la categoría “lugar geográfico”, el escenario del hecho informado o su alcance geográfico. En el caso de las noticias nacionales se efectuó una categorización en base a las provincias de la República Argentina y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –“CABA”– y el Gran Buenos Aires –“GBA”– (la mención de las últimas dos en una noticia se consideró como Área Metropolitana de Buenos Aires –“AMBA”–). Si la noticia tuvo alcance nacional, el lugar geográfico se consignó como “Argentina”. Por otro lado, para este indicador se exceptuaron aquellas noticias cuya variable “Lugar geográfico” fue consignada con “No aplica” y aquellas noticias con tópico “Internacionales”.

Tal como se desprende del Gráfico 21, las noticias nacionales que emitieron los noticieros en las semanas monitoreadas encumbraron a la CABA como el lugar más representado, con el 34% de ese universo de noticias y el 37,2% del tiempo. Pero si se contempla el Área Metropolitana de Buenos Aires en su conjunto –es decir, si se suman las categorías CABA, GBA y AMBA–, los valores aumentan considerablemente: 59,2% del total de noticias nacionales y 62,7% del tiempo. Este centralismo de los noticieros se explica, principalmente, por el hecho de que los canales de TV abierta monitoreados están radicados en el AMBA. Sin embargo, actualmente, muchos de estos programas son repetidos por medio de canales locales en otras provincias del país. Con lo cual, ese centralismo informativo se propaga, en mayor o menor medida, por el territorio argentino.

Asimismo, en la muestra de 2014 es interesante observar que la mayor brecha entre porcentajes de cantidad y de tiempo dedicado, se registra en el GBA, con un 3,6% a favor del tiempo. Este dato permite advertir que las noticias con escenario en el Conurbano bonaerense tienen una mayor duración. Y si se considera que la mayor cantidad de noticias policiales informadas tuvieron lugar en esa zona, la variable duración adquiere una importancia doblemente significativa. Es decir que el GBA aparece en los noticieros como un lugar “policializado” o un espacio “inseguro” y se le dedica una gran cantidad de tiempo noticioso, además de recursos periodísticos (columnistas y móviles, entre otros).

En cuanto al resto de las provincias que tuvieron una mayor representación en los noticieros durante las semanas monitoreadas, luego de la de Buenos Aires (“PBA”), le siguieron las que cobijan las ciudades más pobladas del país: Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Por su parte, entre las que aparecen más invisibilizadas están las de menor índice demográfico, como La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Muchas de estas provincias, a su vez, alcanzaron a ser representadas en los noticieros sólo (La Pampa) o mayormente por casos policiales (Corrientes, Río Negro, Chaco, Salta, Entre Ríos) y de catástrofes y tragedias (Neuquén, Catamarca) y en contadas ocasiones por información relativa, por ejemplo, a la política local (La Rioja, Santa Cruz, Jujuy). Como se ve en el gráfico, la incidencia estadística en la muestra de 2014 de esta última es nula o insignificante:

Gráfico 21. Distribución de las noticias de acuerdo al lugar geográfico según cantidad y duración
(Totales = 9.453 noticias y 390h 52m 51s)



Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ANÁLISIS DE FUENTES

En el marco de los monitoreos, se entiende por “fuente” al conjunto de voces *externas al noticiero* con las que se busca respaldar, evidenciar y, por ende, legitimar la información presentada en la noticia. En la Ficha de Relevamiento se consignan todas las fuentes presentadas por las noticias.

La Tabla 3 describe, para cada monitoreo en el cual se relevó la primera semana del mes, los porcentajes de noticias que tuvieron al menos una fuente referenciada o explicitada o ninguna fuente. Esta tabla permite ver que, en casi todos los monitoreos, los porcentajes de noticias **con fuente** se ubican entre el 50% y el 60% del total, y los porcentajes de noticias **sin fuente** están entre el 40% y el 50%:

Tabla 3. Porcentajes de noticias con y sin fuente, por monitoreo

	SIN FUENTE CITADA/REFERIDA	CON AL MENOS UNA FUENTE
1° Monitoreo (N = 2.242 noticias)	43,1%	56,9%
2° Monitoreo (N = 2.633 noticias)	49,0%	51,0%
3° Monitoreo (N = 2.280 noticias)	47,1%	52,9%
4° Monitoreo (N = 2.291 noticias)	41,3%	58,7%
5° Monitoreo (N = 2.633 noticias)	46,6%	53,4%
6° Monitoreo (N = 2.449 noticias)	47,2%	52,8%

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

En la Tabla 4 se indica la cantidad de fuentes totales presentadas por cada canal, en cada semana monitoreada. La tabla permite observar que *Telefé* y *Canal 9* son los canales que más fuentes presentan, mientras que *América* es el que menos. Estos datos están, sin duda, influidos por el hecho de que *Canal 9* es el que más noticias emite, y *América* el que menos. El ratio Fuente/Noticia, que resulta de dividir la cantidad de fuentes por la cantidad de noticias, indica –en términos analíticos– si los canales refieren a más o menos de una fuente por noticia (siendo “1” el punto en el cual habría, analíticamente, la misma cantidad de fuentes que de noticias). Como lo muestra la Tabla, *Telefé* es el canal que tiene mejor ratio Fuente/Noticia (en términos analíticos, más de una fuente por noticia), mientras que *Canal 9*, aunque es uno de los que más fuentes presenta en términos absolutos, presenta menos de una fuente por noticia, aunque con tendencia al 1 (una fuente por noticia):

Tabla 4. Cantidad de fuentes presentadas por cada canal, por monitoreo

CANAL	1° MONITOREO (FEBRERO)	2° MONITOREO (ABRIL)	3° MONITOREO (JUNIO)	4° MONITOREO (AGOSTO)	5° MONITOREO (OCTUBRE)	6° MONITOREO (DICIEMBRE)	TOTAL	RATIO FUENTE/ NOTICIA
TV Pública	395	437	378	434	408	494	2.546	0,96
Canal 13	625	612	369	518	478	406	3.008	0,93
Telefé	667	687	439	590	639	632	3.654	1,31
Canal 9	648	663	527	614	576	606	3.634	0,98
América	308	336	302	400	351	331	2.028	0,91
TOTAL	2.643	2.735	2.015	2.556	2.452	2.469	14.870	

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Las noticias con fuente pueden presentar más de una fuente. La Tabla 5 describe la cantidad de noticias que en cada uno de los seis monitoreos tuvieron ninguna fuente, 1 fuente, 2 fuentes, 3 fuentes, 4 fuentes, 5 fuentes y 6 ó más fuentes. La tabla permite observar que la cantidad de noticias decrece a medida que se suman fuentes. Asimismo, se muestra que el 79,2% de las noticias presenta 1 o ninguna fuente, mientras sólo el 20,8% presenta 2 o más fuentes:

Tabla 5. Cantidad de noticias según cantidad de fuentes, por cada monitoreo 2014

CANTIDAD DE FUENTES / CANTIDAD DE NOTICIAS	MONITOREO 1 (2.242)	MONITOREO 2 (2.633)	MONITOREO 3 (2.280)	MONITOREO 4 (2.291)	MONITOREO 5 (2.633)	MONITOREO 6 (2.449)	TOTAL 6 MONITOREOS (14.528)
Ninguna	966	1289	1.073	947	1226	1.155	6.656
1	739	799	788	782	907	826	4.841
2	244	245	224	283	264	192	1.452
3	123	137	96	129	108	115	708
4	47	50	47	63	52	56	315
5	37	35	29	30	31	42	204
6 o mas	86	78	23	57	45	63	352



**FUENTES
CITADAS
O DIRECTAS**

79,2 %

11.497

Una o ninguna fuente citada

20,8 %

3.031

Entre 2 y 6 fuentes citadas

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A partir de estos datos, el presente informe avanzará sobre algunas consideraciones específicas referidas a tópicos que han sido objeto de consulta o de denuncias por parte de las audiencias y que permiten un acercamiento más detallado a las características de qué es y cómo es noticia para los noticieros de CABA.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNEROS DE COLUMNISTAS

Finalmente, con el objetivo de aportar a una discusión sobre la participación genérica en los noticieros de la televisión de aire de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de febrero 2014 se comenzó a registrar la distribución entre varones y mujeres de los y las columnistas que presentan las noticias. Esta consignación, en principio, permitió establecer que de las 14.528 noticias consignadas en las seis semanas monitoreadas, 4.795 fueron presentadas por columnistas (33% del total). De ellas, el 74,7% contó con un columnista varón, mientras que el 22,7% fue presentado por una columnista mujer, siendo el porcentaje restante (2,6%) presentaciones realizadas por diferentes combinaciones de varones y mujeres. La Tabla 6 muestra los porcentajes de presentación a cargo de varones, mujeres, y varones y mujeres de las noticias reportadas a través de un/a columnista especializado en el mismo conjunto de **tópicos agrupados** seleccionados para esta presentación de síntesis de las noticias estudiadas en 2014. En ella se puede observar la prevalencia general de las noticias presentadas por un único columnista varón, como sucede en nueve de los diez tópicos agrupados seleccionados, llegando en algunos casos a triplicar el porcentaje de noticias introducidas por una columnista mujer, como el caso de los tópicos "Política" y "Deportes". El único tópico agrupado en que predominan las mujeres como columnistas es "Espectáculos". Los tópicos con mayor diferencia en relación a la presentación por parte de columnistas varones y mujeres a favor de los primeros son "Deportes", "Política", "Información general", "Policiales e 'inseguridad'", "Derechos humanos" y "Pueblos originarios y migraciones". Por otra parte, en el resto de los tópicos seleccionados – "Salud y discapacidad", "Géneros" y "Niñez y adolescencia"-, los columnistas varones también son mayoría, aunque con una diferencia menor que en los tópicos previamente mencionados. En conjunto, los datos indican una fuerte disparidad de género en lo relativo al/a columnista de la noticia en los tópicos seleccionados, durante las seis semanas monitoreadas:

Tabla 6. Distribución del género de columnistas en noticias con columnistas en diez tópicos seleccionados⁴

	VARÓN %	MUJER %	VARÓN/ VARÓN %	VARÓN/ MUJER %	MUJER/ MUJER/ VARÓN %	VARÓN/ VARÓN/ MUJER %	VARÓN/ VARÓN/ VARÓN %	TOTAL
"POLÍTICA" (Total = 508 noticias)	84,6	7,9	5,3	1,8	-	-	0,4	100
"SALUD Y DISCAPACIDAD" (Total = 155 noticias)	57,4	41,3	1,3	-	-	-	-	
"POLICIALES E 'INSEGURIDAD'" (Total=790 noticias)	74,9	21	2,5	1,3	-	-	-	
"ESPECTÁCULOS" (Total = 893 noticias)	38,6	59,2	0,7	0,7	0,8	-	-	
"INFORMACIÓN GENERAL" (Total = 426 noticias)	81,9	14,6	1,6	1,6	-	0,3	-	
"GÉNEROS" (Total = 107 noticias)	51,4	46,7	0,9	0,9	-	-	-	
"NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" (Total = 152 noticias)	60,5	34,9	2,6	2,0	-	-	-	
"DEPORTES" (Total = 1.266 noticias)	92,1	6,5	1,2	0,2	-	0,1	-	
"DERECHOS HUMANOS" (Total = 68)	72,1	26,5	-	-	-	-	1,5	
"PUEBLOS ORIGINARIOS Y MIGRACIONES" (Total = 10)	70	10	20	-	-	-	-	

4. Los porcentajes se calculan en el sentido de fila, sólo para las noticias de cada tópico agrupado que tuvieron atribuido algún columnista.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ANEXO

A) PROGRAMAS NOTICIOSOS RELEVADOS POR LOS MONITOREOS:

AMÉRICA	TV PÚBLICA	CANAL 9	TELEFÉ	CANAL 13
Buenos días América	Visión 7 Mañana	Telenueve al Mediodía	Baires Directo	Arriba Argentinos
América Noticias 1era Edición	Visión 7 Mediodía	Telenueve 1era Edición	Telefé Noticias 1era Edición	Noticiero Trece
América Noticias 2da Edición	Visión 7 Central	Telenueve Central	Telefé Noticias 2da Edición	Telenoche
	Visión 7 Resumen	Telenueve al Cierre	Diario de Medianoche	Síntesis

B) EMISIONES FALTANTES:

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
PRIMER MONITOREO (Febrero)			América Noticias 1era Edición (Faltante)		Visión 7 Central (No se emitió)
SEGUNDO MONITOREO (Abril)		Visión 7 Central (No se emitió)			Visión 7 Central (No se emitió)
		América Noticias Segunda Edición (Corte de transmisión)			
TERCER MONITOREO (Junio)		Visión 7 Mediodía (No se emitió)	Visión 7 Resumen (Faltante)		Visión 7 Central (No se emitió)
CUARTO MONITOREO (Agosto)					Visión 7 Central (No se emitió)
					Visión 7 Resumen (No se emitió)
QUINTO MONITOREO (Octubre)	Visión 7 Central (No se emitió)		Visión 7 Central (No se emitió)		Visión 7 Central (No se emitió)
SEXTO MONITOREO (Diciembre)	América Noticias Segunda Edición (Faltan 9 minutos)			América Noticias 2da Edición (Faltante)	Síntesis (Faltante)
	Visión 7 Central (No se emitió)				Visión 7 Central (No se emitió)
	Telenueve al cierre (Faltante)				



ANEXO III

DECLARACIÓN DE TERRITORIO EN MOVIMIENTO. VOCES MÚLTIPLES

Nosotros y nosotras de comunidades campesinas Indígenas de más de 16 provincias, pertenecientes al Movimiento Nacional Campesino Indígena (**MNCI**) y Organizaciones de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (**ONPIA**) y otras organizaciones territoriales, junto a la Defensoría del Público nos congregamos en el **Primer Encuentro Territorio en Movimiento, Voces múltiples**, los días **1, 2 y 3 de diciembre** en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Acompañados por representantes de experiencias comunicacionales de Paraguay, México, Honduras, Perú y Chile.

Venimos del corazón de nuestros territorios ancestrales donde vivimos armónicamente con la madre naturaleza, desarrollando nuestras culturas, produciendo alimentos sanos para los pueblos, respetando los bienes naturales, el ambiente, practicando la solidaridad, la complementariedad colectiva para el buen vivir, como un legado de nuestros mayores.

Somos guardianes, defensores de nuestros territorios amenazados ante la voracidad del sistema capitalista, buitres especuladores que expulsan y explotan a nuestras comunidades, para acumular, para mercantilizar con sus negocios inmobiliarios, sus monocultivos transgénicos que envenenan y matan nuestras semillas nativas y criollas, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, nuestras riquezas genéticas, culturales y sociales.

Somos del corazón de la tierra, quienes nos animamos a desparramar nuestras voces, a construir nuestras propias herramientas de comunicación audiovisual campesina indígena.

- Nuestro reconocimiento a la implementación del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) establecido por la Ley en el Art. 97 Inciso F, el cual ha permitido la creación, sostenimiento y fortalecimiento de medios audiovisual campesinos indígenas.
- La necesidad de la reglamentación e implementación del Art. 152 de la LSCA, con nuestra participación y consulta.
- Saludamos y reconocemos el trabajo participativo desarrollado por la Defensoría del Público, que ha permitido la creación y el fortalecimiento de nuestras experiencias audiovisuales en los territorios, y nos comprometemos a continuar un trabajo conjunto entre la Defensoría del Público y nuestras organizaciones.

Nos convocamos a la creación de **“Territorio en movimiento”**, espacio articulador de proyectos comunicacionales campesino indígenas para derribar el aislamiento territorial y comunicacional al que nos someten los grandes medios concentrados del capitalismo.

Nos convocamos a generar campañas audiovisuales comunes que visibilicen la defensa de la soberanía alimentaria, de los derechos territoriales, derechos de las niñas, niños y adolescentes, equidad de Géneros, y otros.

Nos convocamos a impulsar un segundo encuentro para el próximo año, con apoyo y acompañamiento de la Defensoría del Público.

Regresamos a nuestros territorios renovando el compromiso de seguir construyendo la soberanía comunicacional, transformadora, creadora de conciencia libertaria, siempre en alerta y movilizados en la defensa de nuestro derecho humano a la comunicación, de nuestros territorios de vida y de todo el Abya Yala, nuestra Patria Grande.

HOY, CONGREGADOS MAS DE 50 PROYECTOS COLECTIVOS REAFIRMAMOS:

- Nuestra defensa a la Ley 26522/ 2009 de Servicio de Comunicación Audiovisual (LSCA) como herramienta plural y federal, que incluye nuestras identidades. Rechazaremos cualquier tipo de cambio que implique retroceso en los derechos conquistados.

CARTA ABIERTA POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Palabras de Cynthia Ottaviano en el marco del acto que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo por el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia" a 39 años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 junto a organismos de derechos humanos y distintas organizaciones.

CON O SIN CÁMARAS DE TELEVISIÓN, PERO SIEMPRE CON LOS PAÑUELOS

Desde hace cuatro décadas, cada 24 de marzo, miles y miles de personas venimos a esta Plaza de Mayo con diferentes consignas, pero con la misma convicción: la necesidad de encontrar la Verdad, con Memoria, para alcanzar finalmente Justicia.

Aquí venimos, podemos vernos las caras, las remeras, las banderas y sobre todo los corazones que a 39 años del golpe cívico militar, siguen reclamando condena a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, a quienes persiguieron, torturaron e hicieron desaparecer a toda una generación de argentinos, bajo el amparo invisibilizador de los dueños de las noticias.

Si por algún motivo alguien no pudiera venir hasta aquí, difícilmente sabrá qué ocurrió hoy. Porque desde hace décadas también, el poder hegemónico de los medios de comunicación oculta esta marcha democrática. Desde ese poder concentrado, que conspira contra la voluntad popular, se le da la espalda a los derechos humanos.

Y no es una idea personal, sino una realidad que se construye todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches al fuego rápido y vertiginoso de las noticias. Durante 2013, la Defensoría del Público relevó 13.029 noticias, de los noticieros de la televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires. Sólo 53 estuvieron vinculadas a los derechos humanos. Así como se escucha, apenas se dieron 53 noticias en todo el año. Si se les suman las del año pasado, sobre 27.557 noticias, 344 fueron sobre derecho humanos. El 1,2%.

¿Es que los derechos humanos no nos importan a quienes vivimos en la Argentina? ¿Es que a la misma sociedad que construyó un modelo de juzgamiento de las violaciones

a los derechos humanos, sin venganza, sin revancha, que es ejemplo en el mundo entero, no le interesan esos mismos derechos humanos? ¿Es que la sociedad que condenó a 563 genocidas y absolvió a 50 demostrando que hay garantías y de debido proceso y encarceló a cientos de imputados no quiere recibir esa información?

Claro que a quienes vivimos en la Argentina nos importan los derechos humanos. Esta plaza es prueba de ello. A quienes no les importan es a los dueños de las noticias. Al puñado de poderosos que construyen la agenda desde sus medios de comunicación concentrados. Tal vez sea porque esas noticias los acusan. A ellos o a sus socios. A ellos o a sus amigos.

Los medios de comunicación dicen más por lo que callan que por lo que enuncian. Salvo la Televisión Pública, que es la mayor difusora de noticias sobre derechos humanos, lo que nos dicen hoy desde la televisión abierta privada es que no les interesa cubrir la información relevante sobre nuestros derechos humanos.

El robo de una cartera o de un reloj, de una verdulería o de un almacén, es muchísimo más importante que el robo de la identidad de un nieto o una nieta, que la condena a cadena perpetua a un genocida o que la obstrucción de Justicia que, paradójicamente, hacen muchos jueces y juezas todavía hoy, sin que la sociedad en su conjunto lo sepa. Porque esos mismos medios ocultan y protegen a esos jueces y juezas que son garantes de impunidad, en lugar de ser garantes de Justicia.

Esta es la crisis de representación que tenemos que cambiar. Crisis que está profundamente ligada a la necesidad de democratizar los medios, pero también el Poder Judicial.

Es que muchos de los que detentan hoy el poder concentrado de los medios de comunicación, que impusieron lógicas mercantilistas, de clase y de género en esos medios, son los mismos que están sospechados de ser partícipes necesarios de la comisión de delitos de lesa humanidad, durante la última dictadura cívico, militar, clerical y, claro está, mediática. Son los mismos que algunos jueces protegen por temor. Porque son el único poder de aquella dictadura que todavía está casi intacto.

El poder mediático concentrado y sectores retrógrados del Poder Judicial. Dos socios perfectos. Unos se protegen a los otros y los dos consiguen lo que buscan: impunidad. Después dicen que gobernar es poder.

Poder es seguir de pie, inmaculados, después de haber silenciado un genocidio. Eso es verdadero poder. Que no hayan alcanzado cuatro décadas para juzgarlos. Y no nos equivocamos, no fueron cómplices nada más, fueron protagonis-

tas de la construcción simbólica y mediática de ese “otro” a ser perseguido; de ese “otro” a ser torturado y desaparecido.

Porque para poder implantar la matriz económica liberal de la dictadura genocida, fue necesario implantar una matriz simbólica. Y esa matriz simbólica fue construida por un puñado de poderosos, desde sus medios de comunicación. Los mismos que hoy nos quieren dar cátedra de libertad de expresión. Los mismos que hoy impiden la plena aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los mismos que hoy invisibilizan esta Plaza.

Por eso, hasta que no se haga verdadera Justicia con quienes silenciaron el genocidio desde los medios de comunicación no habrá verdadera y profunda democracia. Por eso, venimos y seguiremos viniendo a esta plaza. Con o sin cámaras de televisión. Pero siempre con los pañuelos y las banderas altas y dignas de Memoria, Verdad y Justicia.

Porque la Historia se construye acá, en esta Plaza de Mayo, y no en sus noticieros.

CARTA AL GOBIERNO NACIONAL

POR MEDIO DE UN ESCRITO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MAURICIO MACRI, EL ORGANISMO LE SOLICITÓ DEJAR SIN EFECTO LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS DECRETOS QUE DECLARARON LA INTERVENCIÓN DE AFSCA Y LA REMOCIÓN DE SU DIRECTORIO COMO ASÍ TAMBIÉN RESPETAR EL ARTICULADO COMPLETO DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. A CONTINUACIÓN, LA CARTA ENVIADA POR LA DEFENSORA DEL PÚBLICO, LA LIC. CYNTHIA OTTAVIANO.

Me dirijo a Usted en mi carácter de Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la República Argentina en relación con el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 y el Decreto 236/2015. Preocupa a esta Defensoría la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la remoción de todo su Directorio, la asunción de las facultades de dicho órgano plural por un solo funcionario que no ha atravesado ningún proceso de evaluación de antecedentes o experiencia. Ambas medidas son contrarias a la Ley 26.522 y vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales y de transparencia en la gestión de gobierno.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo creado por el Artículo 19 y 20 de la Ley N° 26.522, encontrándose dentro de sus misiones y funciones la de atender las consultas, denuncias y reclamos del público de los servicios de comunicación audiovisual.

Esta comunicación se funda en las numerosas presentaciones realizadas por las audiencias ante la Defensoría, preocupadas por la vigencia de la ley audiovisual y el respeto de la institucionalidad por ella creada, algunas de las cuales se reseñan a continuación.

“Como integrante de una organización licenciataria de una radio comunitaria (FM Raco, de Tucumán), me siento preocupada por la situación que se manifiesta con la interven-

ción de AFSCA (...) Quisiera saber qué podemos hacer como medio comunitario y como audiencia para defender la Ley que está siendo avasallada por un decreto. Espero que si hay que modificar la ley sea en el Congreso, como corresponde”.

“Escribo en representación de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), integrada por 25 universidades de todo el país, para denunciar la vulneración de nuestros derechos implicada en el decreto 236/2015 que interviene la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC). La medida, que no estuvo publicada en el Boletín Oficial a la hora que correspondía para un decreto firmado ayer (afectando nuestra posibilidad de iniciar medidas judiciales) se fundamenta en una serie de generalidades carentes de información fidedigna, con groseros errores y en algún caso apelando a fuentes periodísticas. La decisión del Ejecutivo deja sin efecto las autoridades institucionales dispuestas por las leyes 26.522 y 27.078. En el primer caso se trata de una ley que durante su tratamiento en 36 instancias en todo el país tuvo como partícipe a todos los sectores sociales vinculados a la comunicación, entre ellos las universidades como actor fundamental. (...) Una ley reconocida por distintos organismos internacionales y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo al artículo 14 de la ley 26.522 uno de los dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual debe ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales. En consecuencia, la intervención nos afecta directamente por la pérdida de representación”.

“Ante la anunciada intervención del AFSCA por parte del ministro Aguad, solicito la intervención de la Defensoría del Público, en defensa de la Ley No. 26522 y su espíritu de libertad de expresión”.

“Exijo que no se intervenga el AFSCA y se ejecute la ley de medios audiovisuales”.

“Solicito la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, por consiguiente la continuidad del AFSCA y AFTIC. Es una ley democrática y sancionada por el Congreso, que garantiza la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad de voces. No puede ser vulnerada por un decreto. La vulneración de la ley constituye un atentado a los derechos de todas y todos los ciudadanos argentinas/os”.

“Desde Radio Sur, FM 88.3 mhz emisora comunitaria que transmite en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos muy preocupados por la intervención que el día de hoy se ha explicitado contra la AFSCA. Creemos que el no respeto de la

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avasallamiento contra derechos conquistados y significa un verdadero peligro para la democracia (...) Le pedimos a las autoridades de la Defensoría del Público que asuman el rol de defender a las audiencias y actores comunicacionales de lo que entendemos que es una vulneración de nuestros derechos”.

“Hola desde fm las chacras, debido a la intervención declarada hoy por el gobierno nacional, contra Afsca y Aftic, solicitamos a la defensoría tomar cartas en el asunto, a fines de apoyar una demanda popular en defensa de dichas instituciones y de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.

“Desde la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) manifestamos nuestra preocupación ante el decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en el día de hoy. Consideramos que no se corresponde con los principios democráticos que establece la Ley 26522/ 2009 de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya sanción fue fruto del debate participativo desarrollado por los distintos sectores que integramos la sociedad. Es por ello que solicitamos a la Defensoría del Público que nos represente en lo que consideramos un avasallamiento contra una ley fruto de la democracia”.

“Escribo en representación de la Unión de Trabajador@s Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI) con mucha preocupación por lo ocurrido en la mañana de hoy en la sede central de la AFSCA. En un claro ataque a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), por parte del nuevo gobierno nacional en la figura del Ministro Oscar Aguad. Con un desproporcionado despliegue policial y con un DNU que incurre en la ilegalidad, al no respetar la LSCA vigente, se interviene la AFSCA y la AFTIC, en un hecho de gravedad institucional sin precedentes. La presente tiene por objetivo instar a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a presentar los recursos legales y jurídicos de los que disponga ...”.

“Veo como ciudadano cómo el actual gobierno, pretende con un decreto, avasallar el normal funcionamiento del AFS-CA, y con ello estar por sobre la ley, ya que de esta manera se ataca de manera frontal la ley de servicios de comunicación audiovisual, impidiendo su aplicación, solicito formalmente a la Defensoría, alerte sobre esta situación a la justicia”.

“El avance del Gobierno nacional sobre la LSCA representan una flagrante violación de los derechos que han sido consagrados en la Ley sancionada bajo un mecanismo democrático de participación”.

“En representación de Radio De la Azotea FM 88.7 Comunitaria, de Mar del Plata queremos denunciar y repudiar el Decreto de Intervención del Gobierno nacional contra la AFSCA y

la AFTIC. Intervenir dos organismos autárquicos y creados por la nueva ley de SCA es una violación a los derechos de nosotros/as como habitantes y nuestro derecho a la comunicación”.

“Los integrantes del Colectivo de comunicación FM Riachuelo 100.9 integrados en la Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones solicitamos a esa defensoría que, en conocimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 236 (...) junto a otros decretos anteriores que modifican la estructura de Ministerios y sus competencias, establezca los mecanismos necesarios para analizar, prevenir, advertir y de ser necesario intervenir en resguardo del pleno cumplimiento de la Ley 26.522 y de nuestra Constitución Nacional con el fin de proteger celosamente los derechos del público de Servicios de Comunicación Audiovisual evitando cualquier vulneración posible de derechos de todos los ciudadanos referidos a los derechos de acceso a la comunicación e información claramente establecidos en la mencionada ley...”.

“Desde FM Aim Mokoilek y en nombre de la comunidad en general y los distintos medios de comunicación surgidos a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos preocupa el decreto sacado hoy 23 de diciembre de 2015 en horas de la mañana por el ejecutivo nacional en el cual avasalla dicha Ley de la cual podemos ejercer como pueblo originario nuestros derechos humanos a comunicar. Es por ello que solicitamos a la Defensoría del Público, tome cartas en el asunto para defender esta Ley de la comunicación democrática la cual es fruto de debate colectivo y movilización social de los distintos factores que formamos la sociedad”.

“Como Director del Nivel Secundario de Comunidad Educativa Creciendo Juntos DIPREGEP 7848 en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela, solicito ante ustedes la posibilidad de poder intervenir ante el atropello que se produjo en el día de hoy ante el AFSCA. Para estudiantes, familias y docentes la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días. Es por eso que el atropello sufrido al organismo que nos otorgo la identidad que hoy tenemos REC 89,5, presenta una gran preocupación a toda nuestra Comunidad Educativa. Desde nuestra escuela defendemos la Ley reconocida por los tres Poderes del estado y que para nosotros represento la posibilidad que nuevas voces y que puedan expresar las realidades que muchas veces los medios hegemónicos no nos muestran”.

“Soy docente en una escuela, tenemos una radio a partir de la Ley de servicios de comunicación audiovisual por medio de la cual los niños/as, jóvenes y la comunidad ejercen su derecho a la comunicación. Las medidas tomadas por decreto

por el nuevo gobierno avasallan la Ley que nos dio la posibilidad de existir como medio de comunicación comunitario y estudiantil. (...) solicito que la Defensoría accione sobre lo sucedido”.

“Pido la intervención de la Defensoría ante los decretos presidenciales que establecen la intervención sobre la AfscA y Aftic, organismos establecidos por leyes constitucionales y de carácter autárquico. Con estas intervenciones se está avasallando la libertad de expresión de todos los argentinos”.

“Como jubilada docente, ciudadana preocupada a la que le interesa vivir en un país con derechos, sin censura y con inclusión, es que solicito a esa Defensoría interponga las acciones y / recursos de su área por el atropello a una institución autárquica como es la AFSCA, y a su titular, con vistas a dejar sin efecto la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que conllevaría un avasallamiento a las garantías constitucionales y al derecho libertad de información”.

“No hay pluralismo sin diversidad. La Ley de Medios aprobada en 2009 saldando una deuda que se mantenía con la democracia. Desde 1983 hasta ese momento hubo numerosos intentos por contar con una legislación que permitiera la pluralidad de voces y reemplazara a la de la dictadura. Fue debatida en toda la República mediante foros democráticos y aprobada por múltiples organizaciones populares y las principales fuerzas políticas. Obtuvo un gran consenso en ambas cámaras del Congreso Nacional y su vigencia fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia que confirmó su constitucionalidad en todos sus artículos. La sanción de la Ley de Medios (Ley 26.522) fue producto de una construcción colectiva horizontal y con mecanismos de amplia participación que permitió reemplazar el Decreto-Ley 22285/80, impuesto por la última dictadura militar y conocido como Ley de Radiodifusión Nacional. La Ley de Medios vincula el concepto de libertad de expresión con la defensa de los derechos humanos, alienta la diversidad de voces estableciendo límites a la concentración y al dominio de mercado y el discurso único... Coalición por una Comunicación Democrática en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”

Estas son algunas de las presentaciones recibidas, que exponen con claridad las consecuencias de las medidas dictadas.

Es esta preocupación y los fundamentos legales que a continuación se exponen los que me llevan a exhortarle que las medidas adoptadas sean dejadas sin efecto, de modo de respetar los principios consagrados por los Organismos Internacionales en materia de libertad de expresión.

CARTA A LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIDH

EL ORGANISMO SOLICITÓ LA INTERVENCIÓN DE LA CIDH ANTE LOS DECRETOS QUE AFECTARON LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y SU ORGANISMO DE APLICACIÓN EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL AL QUE TAMBIÉN LE ENVIÓ UN ESCRITO EN EL QUE SE LE SOLICITÓ DEJAR SIN EFECTO ESAS MEDIDAS. A CONTINUACIÓN, LA PUBLICACIÓN DE LA CARTA QUE LE ENVIÓ LA DEFENSORA DEL PÚBLICO, LA LIC. CYNTHIA OTTAVIANO A EDISON LANZA, RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIDH.

Me dirijo a Usted en virtud de las atribuciones conferidas a esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la República Argentina. Como es de su conocimiento, la Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 sancionada en el año 2009 por el Congreso de la República, luego de extensos y profundos debates ciudadanos sobre la necesidad de democratizar la comunicación audiovisual en el país.

El 22 de diciembre pasado, el Presidente de la Nación Argentina, Ing. Mauricio Macri, dictó el Decreto N° 236/2015 en el que dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio, vulnerando así los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales.

En su artículo 1° el mencionado Decreto estableció:

“Dispónese la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por el plazo,

prorrogable, de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha de publicación del presente”.

En el artículo 3° se dispuso:

“Desígnase Interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) al señor Agustín Ignacio GARZON (DNI N° 25.431.768), cesando en sus funciones los miembros del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)”.

Idénticas decisiones se adoptaron en los artículo 2° y 4° respecto de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

El artículo 5° estableció que:

“En el ejercicio de sus cargos los Interventores tendrán las facultades de gobierno y administración de la AFSCA establecidas en la Ley N° 26.522, y las facultades de gobierno y administración de la AFTIC establecidas en la Ley N° 27.078, respectivamente.”

Esta norma reconoce un antecedente reciente que es el dictado de otro Decreto presidencial, el No. 13/2015, del 10 de diciembre pasado, por medio del cual se reformó la Ley de Ministerios y en el que se creó el Ministerio de Comunicación, incorporando en su órbita a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC). En este escrito nos referiremos sólo a la primera Autoridad, en virtud de la especificidad del mandato que la Ley 26.522 confiere al organismo que represento.

Además del traslado del AFSCA, organismo autónomo y autárquico, al seno de un ministerio, el Decreto 13/2015 en su artículo 23 decies punto 7 dispuso que el Ministerio de Comunicaciones entenderá “en la elaboración de normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios del área de su competencia, o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el Estado Nacional o las provincias acogidas por convenios, a los regímenes federales en la materia.”

Leídas en conjunto, estas normas desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia.

Es esta preocupación la que me lleva a concurrir a esa Relatoría para poner en su conocimiento una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido y para solicitar su intervención en el marco de sus facultades.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Una de las características salientes de la Ley 26.522 es la conformación de una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) autónoma e independiente del gobierno federal. La Autoridad se compone de un Directorio integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo (incluidas la primera, segunda y tercera minoría) y del Consejo Federal de la Comunicación, conformado por distintos actores, entre ellos, los sindicatos, las universidades públicas, los pueblos originarios y las organizaciones que nuclean a los distintos sectores de medios audiovisuales.¹

Este Directorio consagra la representación plural y democrática en la implementación y fiscalización de la aplicación de la ley, que a su vez garantiza ampliamente el derecho humano a la comunicación y la participación efectiva en la comunicación audiovisual de diversos actores tales como los medios sin fines de lucro, los pueblos originarios, las universidades y escuelas, las entidades con ánimo lucrativo y los Estados en sus diversos niveles.

Para el efectivo cumplimiento de las misiones y funciones que el Directorio plural está llamado a cumplir, y para garantizar realmente su autonomía e independencia, la Ley 26.522 dispuso mecanismos específicos de designación y remoción de sus miembros.

Respecto de la designación, el artículo 14 de la Ley 26.522 establece que:

“Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el directorio. El presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional.”

Es claro que la norma previó un mecanismo que garantiza la autonomía e independencia política de la Autoridad respecto de quien esté a cargo del Poder Ejecutivo, al establecer que el vencimiento de los mandatos no coincida con el recambio presidencial.

Al mismo tiempo, se dispone que en la designación participen órganos colegiados como la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las

Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual.

Por otra parte se dispone que la sociedad pueda conocer las cualidades técnicas de las personas propuestas, que deben ser publicadas antes de la designación, y emitir opiniones.

La otra previsión para lograr la autonomía es el mecanismo de remoción, previsto en el mismo artículo 14:

“El presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la Ley 25.188. La remoción deberá ser aprobada por los dos tercios (2/3) del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en las causales antes previstas”.

El Decreto dictado por el Presidente de la Nación desconoce de manera absoluta los mecanismos descriptos al disponer la intervención administrativa de la AFSCA y remover de sus cargos a la totalidad de los integrantes del Directorio, sin respetar el debido proceso garantizado por la Ley 26.522, la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos.

Pero además, deja sin efecto la institucionalidad creada por la Ley, y con ello las garantías de pluralismo, independencia, autonomía y el carácter federal, al designar por la sola voluntad presidencial a una sola persona a cargo de la Autoridad de Aplicación.

Es decir que a partir de este Decreto será solo un funcionario público dependiente de un ministerio del Poder Ejecutivo quien adoptará de manera individual todas las decisiones que afectan a los medios audiovisuales de los diferentes sectores: comercial, sin fines de lucro y públicos.

En la designación dispuesta por el Decreto N° 236/2015 no se cumplieron los procedimientos de transparencia y participación previstos en la Ley 26.522 recién mencionados, ni se dio intervención a ninguno de los órganos colegiados por ella creados. Tampoco se han cumplido los pasos para la información y participación social pues no se han publicado los antecedentes y experiencia del funcionario propuesto.

Es preciso señalar que Agustín Ignacio GARZON, nombrado interventor por Decreto Presidencial es un ex legislador del partido PRO, actualmente en el Gobierno. Ese es el único dato que se conoce. Al no publicarse sus antecedentes es imposible evaluar su idoneidad.

De este modo el Decreto ha vuelto inoperante la estructura institucional que garantizaba criterios democráticos y participativos de selección. Se oprimió por ejercicio absoluto

de la voluntad presidencial la posibilidad de que los organismos colegiados especialmente creados por la ley nombraran al Directorio de la Autoridad de Aplicación y ejercieran el control de la designación.

Es bien sabido por la Relatoría Especial que la Ley 26.522 fue el resultado de un arduo proceso de debate y participación social de más de 30 años. Es el resultado de una construcción colectiva, debatida en foros y audiencias públicas en todo el país, receptada por las autoridades del Estado: el proyecto de Ley fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, que lo aprobó por amplia mayoría, y fue convalidado en cuanto a su congruencia con la Constitución Nacional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Ley reformó un sistema previamente instituido que sólo permitía la comunicación a quienes lo hacían con ánimo de obtener ganancias y negaba a la sociedad civil organizada, a las organizaciones sociales, y a tantos actores fundamentales para la vida democrática, el derecho a expresarse. En el Decreto-ley de la dictadura militar la autoridad que regulaba la comunicación audiovisual se conformaba por representantes de las Fuerzas Armadas. Ese era el paradigma imperante hasta la sanción de la Ley 26.522 y su decreto reglamentario 1225/2010.

El paradigma consagrado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vino a reparar esta situación de desigualdad histórica. Reconoció a todos y todas, el derecho a expresarse a través de medios audiovisuales, con la sola condición de hacerlo en el marco de los derechos fundamentales, con respeto del Estado democrático de derecho, el federalismo, y cumpliendo los claros objetivos que la ley les establece en función del interés público de la actividad que desarrollan.

Esta Ley fue apoyada por Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos.

En el ámbito interamericano la Relatoría Especial afirmó en el Informe Anual 2009:

“La Ley No. 26.522 establece que el principio rector de su contenido es el respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, derecho conforme al cual deben ser interpretadas todas sus disposiciones. El artículo 2 de la Ley No. 26.522 indica que la ‘actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual [...] exterioriza el derecho humano inalienable de expresar recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones’, y que el ‘objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados [...] es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación, para acceder a los beneficios de su prestación’. En el mismo sentido, el artículo 3 de

la Ley No. 26.522 señala que los objetivos de los servicios de comunicación audiovisual deben procurar, entre otros: ‘(a) La promoción y la garantía del libre ejercicio de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [...]; [y] (l) La administración del espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas” (#11).

La independencia y autonomía de la Autoridad de Aplicación también fue reconocida positivamente. En el ámbito interno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decidir el caso “Grupo Clarín y otros vs. Estado Nacional s/ acción meramente declarativa” estableció:

“Es de vital importancia recordar que tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión. La autoridad de aplicación debe ajustarse estrictamente a los principios establecidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales a ella incorporados y en la propia ley. Debe respetar la igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural” (considerando 74).

Por su parte, en el ámbito internacional, esa Relatoría Especial reconoció positivamente la institucionalidad creada por la Ley 26.522 y, en particular, su Autoridad de Aplicación. En tal sentido expresó:

“... que esta reforma legislativa representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En efecto, bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas. Asimismo, la Ley No. 26.522 reforma el diseño institucional hasta entonces vigente en la materia, incluyendo la creación de nuevos organismos, tales como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Autoridad Federal

de Servicios de Comunicación Audiovisual está conformada de manera plural y diferenciada de la autoridad de aplicación actualmente vigente.” (# 11 y 13).

Junto a este reconocimiento del avance que significó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en relación con la protección de los derechos humanos, en especial de la libertad de expresión, la Relatoría advirtió sobre la necesidad de adoptar especiales cuidados para no incurrir en vulneración de los estándares vigentes en la aplicación de algunas normas específicas. Y en esa oportunidad también afirmó:

“Los temas antes mencionados requieren que el proceso de implementación de la ley, a cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y los otros órganos competentes, proceda a minimizar los riesgos advertidos y que, por el contrario, optimice las oportunidades que la norma incorpora para reforzar las garantías en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Para ello, es esencial que la autoridad de aplicación se conforme de manera tal que otorgue garantías de independencia e imparcialidad a todos los sectores y que en la implementación de la ley se tenga en cuenta, fundamentalmente, que la finalidad más importante de toda norma de esta naturaleza es garantizar un mayor despliegue de la libertad de expresión, de conformidad con los más elevados estándares en la materia. En este punto, la Relatoría Especial llama a las autoridades competentes a atender los estándares interamericanos a la hora de implementar la Ley 26.522” (#23).

Lo expresado por la Relatoría se suma a la opinión conjunta previamente emitida por las diferentes Relatorías a nivel mundial. En el año 2007 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, dijeron que:

“La regulación de los medios de comunicación con el propósito de promover la diversidad, incluyendo la viabilidad de los medios públicos, es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.”

En su informe anual 2014² esa Relatoría volvió a expresarse sobre las características de los organismos estatales de regulación de medios y dijo:

“El diseño institucional en relación con la implementación de la televisión digital deberá cumplir con los estándares y recomendaciones válidos para todos los servicios de radio-

difusión, ya reconocidos por la CIDH y la Relatoría Especial en reiteradas oportunidades. Esto incluye que estén definidos claramente las características y roles de los distintos actores estatales que participan del proceso, ya sea en la elaboración, aprobación, implementación y fiscalización de la regulación, así como en las políticas públicas del proceso de transición y en los propios servicios de televisión digital.”

“Los Estados tienen la legítima potestad de definir las políticas para el sector, en función del interés general, de manera transparente y participativa, y siguiendo objetivos y principios legítimos y en el marco del pleno respeto y promoción de la libertad de expresión, para que su accionar sea compatible con la Convención Americana. No obstante, la CIDH y la Relatoría han enfatizado que los organismos reguladores que aplican y fiscalizan la legislación de radiodifusión deberán ser independientes del Estado y de intereses económicos.” (#193 y 194.)

En este sentido, la Relatoría ha señalado también que la autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad de radiodifusión:

“debería ser un órgano colegiado que asegure pluralidad en su composición, estar sometido a procedimientos claros, integralmente públicos, transparentes y sometidos estrictamente a los imperativos del debido proceso y a un estricto control judicial. Sus decisiones deben ser públicas, estar ajustadas a las normas legales existentes y encontrarse adecuadamente motivadas. Finalmente, debe tratarse de un cuerpo responsable que rinda cuentas públicamente de su gestión” (# 194).

El informe que comentamos remite a la Declaración conjunta de los Relatores de Libertad de Expresión del 3 de mayo de 2013³ en el que expresaron:

“si bien las principales decisiones sobre políticas relativas a transición digital terrestre deben ser adoptadas por el gobierno, la implementación de tales decisiones solamente tendrá carácter legítimo cuando esté a cargo de un organismo exento de injerencias injustificadas de índole política, comercial o de otro tipo, conforme lo exigen las normas internacionales de derechos humanos (es decir, una autoridad de regulación independiente)” (# 195).

Ahora bien, es preciso recordar también los estándares del sistema interamericano que aplican a la decisión presidencial de destituir a la totalidad de los integrantes del Directorio del AFSCA incumpliendo los procedimientos establecidos en la Ley 26.522.

Tal como ya hemos señalado, la remoción de cualquiera de los miembros es facultad del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual y solo puede adoptarse a través de una mayoría especial. Citamos una vez más el artículo 14 de la Ley 26.522:

“el presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La remoción deberá ser aprobada por los dos tercios (2/3) del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en las causales antes previstas”.

Ningún aspecto de este procedimiento se cumplió. La totalidad del Directorio fue removido sin haber sido nunca denunciados ni individual ni colectivamente ante Consejo Federal de la Comunicación o ante la Comisión Bicameral.

Adicionalmente, el Decreto 236/2015 se justifica en una serie de imprecisiones y conjeturas, evidenciadas en la conjugación verbal en el modo potencial de los supuestos hechos relatados que sólo encuentran argumentación periodística.

Al pasar por alto los mecanismos establecidos en la Ley 26.522 se impidió el ejercicio del derecho de defensa de las personas removidas.

Es decir que través de esta decisión se vulneraron estándares constitucionales y convencionales de debido proceso. Recordamos que la Corte IDH en reiteradas oportunidades ha señalado que las garantías para obtener decisiones justas deben respetarse en todo tipo de procedimientos, tanto judiciales como administrativos.

Mencionamos a modo de ejemplo el caso Caso Yatama Vs. Nicaragua, donde afirmó:

“El artículo 8 de la Convención Americana se aplica al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, cualesquiera que ellas sean, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar “las debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso” (#147 y 148).⁴

La situación hasta aquí descripta se agrava al considerar que de ahora en más el funcionario designado al frente de la Autoridad de Aplicación absorberá en su sola persona las competencias de un cuerpo colegiado. Y podrá, por ejemplo, otorgar licencias bajo su criterio individual.

Este panorama ya se esbozaba cuando se sancionó el Decreto 13/2015, mencionado al comienzo, que reunió a la AFSCA y AFTIC, ambas autónomas y autárquicas, bajo la órbi-

ta del Ministerio de Comunicación. Dicho Decreto presidencial en su artículo 23 decies dispone que:

“Corresponde al Ministerio de Comunicaciones asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales”.

Y en el inciso 7 establece que entenderá:

“En la elaboración de normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios del área de su competencia, o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el Estado Nacional o las provincias acogidas por convenios, a los regímenes federales en la materia”.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, se llevó a cabo una modificación de la Ley 26.522, en desmedro, nuevamente de los principios y estándares en materia de libertad de expresión. Es así que los procesos de aprobación de los pliegos y de adjudicación de licencias en los que según la Ley participan el Directorio integrado por siete personas y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual integrado por 38, ahora pasarían a ser facultad de una sola persona, el Ministro de Comunicaciones, que no cumple los requisitos de independencia y autonomía funcional.

Como puede advertirse, las facultades del Ministro de Comunicaciones y del titular de la AFSCA se superponen, lo que impide a los ciudadanos y ciudadanas tener claridad sobre quién es la autoridad responsable en un tema tan sensible como la regulación de la comunicación audiovisual.

Recapitulando podemos afirmar que ninguno de los valiosos estándares elaborados por esa y otras Relatorías son respetados por los Decretos que analizamos.

El resultado es una grave afectación de los derechos de quienes habitan la República Argentina, que en la Ley 26.522 son reconocidos y reconocidas como sujetos de derecho. Y es a esas audiencias a quienes la Defensoría del Público representa y quienes han solicitado que intervenga para resguardar sus derechos.

LOS RECLAMOS RECIBIDOS

Esta presentación se funda en los reclamos de las audiencias que se han reiterado ante la Defensoría. A todo lo dicho debe sumarse que las voces de las audiencias y la sociedad en general frente a esta grave situación se han visto silenciadas en los servicios de comunicación social, aún con fuerte concentración. A continuación damos cuenta de algunas de las presentaciones recibidas.

“Como integrante de una organización licenciataria de una radio comunitaria (FM Raco, de Tucumán), me siento preocupada por la situación que se manifiesta con la intervención de AFSCA, el organismo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual creó como autoridad de aplicación. Quisiera saber qué podemos hacer como medio comunitario y como audiencia para defender la Ley que está siendo avasallada por un decreto. Espero que si hay que modificar la ley sea en el Congreso, como corresponde”.

“Escribo en representación de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), integrada por 25 universidades de todo el país, para denunciar la vulneración de nuestros derechos implicada en el decreto 236/2015 que interviene la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC). La medida, que no estuvo publicada en el Boletín Oficial a la hora que correspondía para un decreto firmado ayer (afectando nuestra posibilidad de iniciar medidas judiciales) se fundamenta en una serie de generalidades carentes de información fidedigna, con groseros errores y en algún caso apelando a fuentes periodísticas. La decisión del Ejecutivo deja sin efecto las autoridades institucionales dispuestas por las leyes 26.522 y 27.078. En el primer caso se trata de una ley que durante su tratamiento en 36 instancias en todo el país tuvo como partícipe a todos los sectores sociales vinculados a la comunicación, entre ellos las universidades como actor fundamental. No fue el proyecto de un gobierno, sino que fue el producto de la labor mancomunada de diferentes organizaciones sociales (comunitarias, públicas, universitarias, cooperativas, sindicales, municipales, provinciales, de comunidades originarias, de derechos humanos y de medios privados de arraigo local) nucleadas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática que lograron el apoyo e impulso fundamental del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 pero también de distintos sectores políticos de oposición que manifestaron su apoyo en el parlamento. Una ley reconocida por distintos organismos internacionales y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo al artículo 14 de la ley 26.522 uno de los dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual debe ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales. En consecuencia, la intervención nos afecta directamente por la pérdida de “Ante la anunciada intervención del AFSCA por parte del ministro Aguad, solicito la intervención de la Defensoría del Público, en defensa de la Ley No. 26522 y su espíritu de libertad de expresión”

“Exijo que no se intervenga el AFSCA y se ejecute la ley de medios audiovisuales”

“Solicito la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, por consiguiente la continuidad del AFSCA y AFTIC. Es una ley democrática y sancionada por el Congreso, que garantiza la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad de voces. No puede ser vulnerada por un decreto. La vulneración de la ley constituye un atentado a los derechos de todas y todos los ciudadanos argentinas/os”.

“Desde Radio Sur, FM 88.3 mhz emisora comunitaria que transmite en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos muy preocupados por la intervención que el día de hoy se ha explicitado contra la AFSCA. Creemos que el no respeto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avasallamiento contra derechos conquistados y significa un verdadero peligro para la democracia. Como emisora hemos participado de distintas instancias en la construcción de esta legislación como lo fue el Foro de discusión del ante proyecto de ley que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Creemos que como país merecemos la democratización de los medios de comunicación y el reconocimiento del sector sin fin de lucro como un actor central es ese proceso, y la plena vigencia y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el camino para lograrlo. Le pedimos a las autoridades de la Defensoría del Público que asuman el rol de defender a las audiencias y actores comunicacionales de lo que entendemos que es una vulneración de nuestros derechos”.

“Hola desde fm las chacras, debido a la intervención declarada hoy por el gobierno nacional, contra AfscA y Aftic, solicitamos a la defensoría tomar cartas en el asunto, a fines de apoyar una demanda popular en defensa de dichas instituciones y de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.

“Desde la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) manifestamos nuestra preocupación ante el decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en el día de hoy. Consideramos que no se corresponde con los principios democráticos que establece la Ley 26522/ 2009 de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya sanción fue fruto del debate participativo desarrollado por los distintos sectores que integramos la sociedad. Es por ello que solicitamos a la Defensoría del Público que nos represente en lo que consideramos un avasallamiento contra una ley fruto de la democracia”.

“Me dirijo a usted, a los fines de solicitarle que ese organismo se pronuncie en relación al decreto 236/2015 que declara la intervención de la AFSCA y AFTIC a los fines de dirimir si esta acción ministerial tiene lugar y si no atenta contra la

Constitución Nacional en general, y la Ley 26.522 en particular. A los fines de que este programa que interrelaciona e interactúa con numerosas entidades universitarias y organizaciones de la sociedad civil pueda reflexionar y dar respuestas en torno a estas circunstancias, solicitamos a ese organismo un pronunciamiento formal”.

“Escribo en representación de la Unión de Trabajador@s Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI) con mucha preocupación por lo ocurrido en la mañana de hoy en la sede central de la AFSCA. En un claro ataque a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), por parte del nuevo gobierno nacional en la figura del Ministro Oscar Aguad. Con un desproporcionado despliegue policial y con un DNU que incurre en la ilegalidad, al no respetar la LSCA vigente, se interviene la AFSCA y la AFTIC, en un hecho de gravedad institucional sin precedentes. La presente tiene por objetivo instar a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a presentar los recursos legales y jurídicos de los que disponga para intentar, junto a otros y otras que defendemos esta ley, garantizar el cumplimiento de una de las leyes más debatidas y consensuadas popularmente en la historia argentina. Desde ya agradeciendo la predisposición siempre demostrada desde la DPSCA, y con la certeza de poder acompañar este proceso”.

“Veo como ciudadano como el actual gobierno, pretende con un decreto, avasallar el normal funcionamiento del AFSCA, y con ello estar por sobre la ley, ya que de esta manera se ataca de manera frontal la ley de servicios de comunicación audiovisual, impidiendo su aplicación, solicito formalmente a la Defensoría, alerte sobre esta situación a la justicia”.

“El avance del Gobierno nacional sobre la LSCA representan una flagrante violación de los derechos que han sido consagrados en la Ley sancionada bajo un mecanismo democrático de participación”.

“En representación de Radio De la Azotea FM 88.7 Comunitaria, de Mar del Plata queremos denunciar y repudiar el Decreto de Intervención del Gobierno nacional contra la AFSCA y la AFTIC. Intervenir dos organismos autárquicos y creados por la nueva ley de SCA es una violación a los derechos de nosotros/as como habitantes y nuestro derecho a la comunicación”.

“No a la intervención de la Afsca”.

“Los integrantes del Colectivo de comunicación FM Riachuelo 100.9 integrados en la Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones solicitamos a esa defensoría que, en conocimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 236 (...) junto a otros decretos anteriores que modifican la estructura de Ministerios y sus competencias, establezca los mecanis-

mos necesarios para analizar, prevenir, advertir y de ser necesario intervenir en resguardo del pleno cumplimiento de la Ley 26.522 y de nuestra Constitución Nacional con el fin de proteger celosamente los derechos del público de Servicios de Comunicación Audiovisual evitando cualquier vulnerable posible de derechos de todos los ciudadanos referidos a los derechos de acceso a la comunicación e información claramente establecidos en la mencionada ley. Fundamentamos este pedido en la valoración que hacemos desde este Colectivo Popular de Comunicación del desempeño, tanto de esa Defensoría como de su titular a cargo, la Licenciada Cynthia Ottaviano, en las acciones llevadas a cabo desde su creación en noviembre de 2012 ampliando los derechos de muchos actores y permitiendo el acceso a la información a compatriotas en los más olvidados rincones de nuestro país. Defender el acceso a la comunicación como un derecho humano básico y no como una mercancía es algo que, hace seis años, el pueblo argentino acordó y lo plasmó en la letra de la ley 26.522, luego de más de 25 años de lucha y debate en todos los rincones de nuestra patria y no estamos dispuestos a volverlo a discutir. Luchar por el pleno cumplimiento de la ley de SCA en nuestro deber y la Defensoría nuestra herramienta”.

“Que el Gobierno Nacional no viole la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual”.

“El pedido es que este organismo accione ante la intervención arbitraria por decreto del AFSCA. Espero que este decreto no se lleve a cabo, ya que atenta contra los derechos conquistados. La diversidad de voces que emergen a partir de la LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, amplía las voces, las miradas, posibilita el poder decir, da luz a sectores antes no reconocidos, la Ley es democrática”.

“Que el AFSCA siga actuando como hasta ahora y que intervenga en los monopolios de la comunicación de mi país. Esta Ley nos dio voz al barrio por medio de nuestra radio REC 89.5”.

“Desde FM Aim Mokoilek y en nombre de la comunidad en general y los distintos medios de comunicación surgidos a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos preocupa el decreto sacado hoy 23 de diciembre de 2015 en horas de la mañana por el ejecutivo nacional en el cual avasalla dicha Ley de la cual podemos ejercer como pueblo originario nuestros derecho humano a comunicar. Es por ello que solicitamos a la Defensoría del Público, tome cartas en el asunto para defender esta Ley de la comunicación democrática la cual es fruto de debate colectivo y movilización social de los distintos factores que formamos la sociedad”.

“Mi reclamo es el de los muchos que habrán recibido el día de hoy. Tiene que ver con la intervención vía decreto

del Estado Nacional en el AFSCA. Creo que se están llevando puestos nuestros derechos a comunicarnos, y defendiendo así los intereses de los medios concentrados que invisibilizan nuestras voces. Trabajo en radios comunitarias y barriales (Fribuay- En Transito - FM Oeste) y además desempeño una tarea docente en una escuela de gestión social del barrio de Paso del Rey- Pdo de Moreno, en el Oeste del Conurbano Bonaerense, donde hay una radio (Radio Estudiantil Comunitaria - REC). En todos esos lugares, los vecinos, profesionales, estudiantes, artistas, militantes y personas con ganas de decir y escuchar, se expresan a diario. Y todos queremos que esto siga pasando. Aunque visto lo que pasó hoy, creo necesario elevar el reclamo por este medio, para que podamos llevar adelante alguna medida que repare lo sucedido. Para que frenemos esta serie de medidas que nos quieren imponer para subordinarnos. No podemos volver a atrás!”.

“Como Director del Nivel Secundario de Comunidad Educativa Creciendo Juntos DIPREGEP 7848 en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela, solicito ante ustedes la posibilidad de poder intervenir ante el atropello que se produjo en el día de hoy ante el AFSCA. Para estudiantes, familias y docentes la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días. Es por eso que el atropello sufrido al organismo que nos otorgo la identidad que hoy tenemos REC 89,5, presenta una gran preocupación a toda nuestra Comunidad Educativa. Desde nuestra escuela defendemos la Ley reconocida por los tres Poderes del estado y que para nosotros represento la posibilidad que nuevas voces y que puedan expresar las realidades que muchas veces los medios hegemónicas no nos muestran”.

“Soy docente en una escuela, tenemos una radio a partir de la Ley de servicios de comunicación audiovisual por medio de la cual los niños/as, jóvenes y la comunidad ejercen su derecho a la comunicación. Las medidas tomadas por decreto por el nuevo gobierno avasallan la Ley que nos dio la posibilidad de existir como medio de comunicación comunitario y estudiantil. Estas medidas van en contra de la democratización de las voces y a favor de los grandes grupos mediáticos. Expreso mi respaldo a la LSCA y solicito que la Defensoría accione sobre lo sucedido”.

“En estos cruciales momentos que vivimos en el país, un atropello mas se suma a los anteriores, en que un gobierno surgido por el pueblo, se transforma en golpista al intervenir organismo del estado como AFCA y AFTIC, eludiendo la Ley que rige a todos los argentinos; me sumo a la protesta y que a la mayor brevedad se vuelva atrás con la medida”.

“Escribo en representación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) con mucha preocupación por lo ocurrido en la mañana de hoy en la sede central de la AFS-CA. En un claro ataque a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), por parte del nuevo gobierno nacional en la figura del Ministro Oscar Aguad. Con un desproporcionado despliegue policial y con un DNU que incurre en la ilegalidad, al no respetar la LSCA vigente, se interviene la AFSCA y la AFTIC, en un hecho de gravedad institucional sin precedentes. La presente tiene por objetivo instar a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a presentar los recursos legales y jurídicos de los que disponga para intentar, junto a otros y otras que defendemos esta ley, garantizar el cumplimiento de una de las leyes más debatidas y consensuadas popularmente en la historia argentina. Desde ya agradeciendo la predisposición siempre demostrada desde la DPSCA, y con la certeza de poder acompañar este proceso”.

“Pido la intervención de la Defensoría ante los decretos presidenciales que establecen la intervención sobre la Afsca y Aftic, organismos establecidos por leyes constitucionales y de carácter autárquico. Con estas intervenciones se está avasallando la libertad de expresión de todos los argentinos”.

“Como jubilada docente, ciudadana preocupada a la que le interesa vivir en un país con derechos, sin censura y con inclusión, es que solicito a esa Defensoría interponga las acciones y / recursos de su área por el atropello a una institución autárquica como es la AFSCA, y a su titular, con vistas a dejar sin efecto la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que conllevaría un avasallamiento a las garantías constitucionales y al derecho libertad de información”.

“No hay pluralismo sin diversidad. La Ley de Medios aprobada en 2009 saldando una deuda que se mantenía con la democracia. Desde 1983 hasta ese momento hubo numerosos intentos por contar con una legislación que permitiera la pluralidad de voces y reemplazara a la de la dictadura. Fue debatida en toda la República mediante foros democráticos y aprobada por múltiples organizaciones populares y las principales fuerzas políticas. Obtuvo un gran consenso en ambas cámaras del Congreso Nacional y su vigencia fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia que confirmo su constitucionalidad en todos sus artículos. La sanción de la Ley de Medios (Ley 26.522) fue producto de una construcción colectiva horizontal y con mecanismos de amplia participación que permitió reemplazar el Decreto-Ley 22285/80, impuesto por la última dictadura militar y conocido como Ley de Radiodifusión Nacional. La Ley de Medios vincula el concepto de libertad de expresión con la defensa de los derechos humanos, alienta la diversidad de voces estableciendo límites a la

concentración y al dominio de mercado y el discurso único. El nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri, a través de su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ha fijado posición respecto a la Ley de Medios al expresar que será reemplazada por un decreto macrista por el cual “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir”. Las organizaciones que impulsamos la desmonopolización de los medios de comunicación y la democratización del acceso a las licencias no aceptamos la derogación de la Ley de Medios por un pretendido decreto de necesidad y urgencia. Volvemos a organizarnos para salir a la calle y defenderla. Nos estamos organizando para una larga resistencia contra las disposiciones de un gobierno que quebranta el marco democrático y quiere retrotraer la política de medios de comunicación a tiempos de dictadura. Coalición por una Comunicación Democrática en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”

SOLICITUD

Los reclamos demuestran la magnitud del perjuicio que las medidas adoptadas por el Presidente de la Nación Argentina causan a los diferentes sectores a los que históricamente se les vulneró el derecho a la comunicación.

En Argentina aún es preciso profundizar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para reparar adecuadamente esos derechos largamente cercenados. Es necesario consolidar el nuevo paradigma fundado en la perspectiva de los derechos humanos, en su comprensión cabal de que ya no existen consumidores ni usuarios, sino audiencias, plenos sujetos de derecho, que pueden dar y recibir información, buscarla y difundirla en igualdad de condiciones, no ya de manera pasiva, sino activa.

Los Decretos que aquí cuestionamos no son la forma democrática adecuada para lograr un cumplimiento absoluto de la legislación vigente y los estándares internacionales en los que se sustenta.

Por ello solicito la urgente intervención, en el marco de sus competencias, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión para evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.

Asimismo solicito a Ud. arbitre los medios necesarios para convocar a una audiencia con carácter de urgente con el objeto de analizar la situación aquí planteada.

Saludo a usted atentamente.

1. El artículo 16 de la LSCA establece que el Consejo Federal está integrado por un representante de cada una de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; tres representantes de las entidades que agrupen a los prestadores privados de carácter comercial; tres representantes por las entidades que agrupen a los prestadores sin fines de lucro; un representante de las emisoras de las universidades nacionales; un representante de las universidades nacionales que tengan facultades o carreras de comunicación; un representante de los medios públicos de todos los ámbitos y jurisdicciones; tres representantes de las entidades sindicales de los trabajadores de los medios de comunicación; un representante de las sociedades gestoras de derechos; y un representante por los Pueblos Originarios reconocidos ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

2. Estándares de libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva Informe temático contenido en el Informe Anual 2014 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Edison Lanza Relator Especial para la Libertad de Expresión.

3. Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).

4. Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 149.



Defensoría d
Defensoría del Público de Servicios de Comun



el Público

Comunicación Audiovisual





Defensoría
del Público



Defensoría del Público

📞 0800.999.3333

🏠 Alsina 1470, CABA
🌐 www.defensadelpublico.gob.ar
✉ contacto@defensadelpublico.gob.ar
📘 [defensoriadelpublico](https://www.facebook.com/defensoriadelpublico)
🐦 [@defdelpublico](https://twitter.com/defdelpublico)

